FRANCISCO ERICE (DIR.)

Un siglo de comunismo en España I

Historia de una lucha



FRANCISCO ERICE (DIR.)

Un siglo de comunismo en España I

Historia de una lucha



Akal / Universitaria / 388 / Serie Historia contemporánea

Francisco Erice (director)

David Ginard (editor)

Un siglo de comunismo en España I

Historia de una lucha


akal
ARGENTINA
ESPAÑA
MÉXICO

▪

El 14 de noviembre de 1921 nacía el Partido Comunista de España, fruto de la fusión del Partido Comunista Español (conocido como «el de los cien niños») y del Partido Comunista Obrero Español. A lo largo del siglo de existencia que ahora cumple, el comunismo español ha vivido etapas y situaciones muy diversas, casi nunca fáciles. De hecho, la mitad de ese período se corresponde con años de represión y clandestinidad. El nuevo partido sobrevivió a duras penas a una primera década de persecuciones, aislamiento y estéril voluntarismo. Maduró bajo la República, prácticamente se «refundó» como gran partido nacional aferrado a las banderas del Frente Popular y llegó a ser la columna vertebral de la resistencia antifascista durante la Guerra Civil. Derrochó un heroísmo sin horizontes políticos claros durante el episodio guerrillero y se convirtió en el «partido del antifranquismo» en la tenaz y dilatada lucha por el restablecimiento de la democracia. Vivió la transición postfranquista entre la esperanza, el desencanto y el desgarro interno. Hubo de adaptarse a la crisis y desaparición del «socialismo real» en la Europa del Este y a los efectos corrosivos de la larga noche neoliberal, manteniendo sus siglas y su identidad, pero implicándose a la vez en proyectos políticos más amplios y renovando partes sustanciales de su vieja cultura política.

«Cometimos errores, pero los cometimos luchando», decía Marcos Ana de los comunistas; un siglo de historia y de lucha que merece ser narrado y estudiado.

▪

Diseño de portada

RAG

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-5132-9

INTRODUCCIÓN

– Francisco Erice –

El 14 de noviembre de 1921 nacía el Partido Comunista de España (PCE), fruto de la fusión del Partido Comunista Español (conocido como «el de los cien niños») y del Partido Comunista Obrero Español. En realidad, todo había comenzado cuatro años antes, en noviembre de 1917 (octubre, según el calendario ruso), con los diez días que estremecieron al mundo, en conocida expresión del periodista norteamericano John Reed. La oleada de entusiasmo que provocaron los acontecimientos de Petrogrado entre los trabajadores de todo el mundo estimuló, también en España, a algunos sectores obreros particularmente combativos a secundar la iniciativa bolchevique, primero intentando arrastrar a sus organizaciones históricas en la misma dirección y luego rompiendo con ellas e iniciando la andadura del nuevo movimiento en nuestro país.

A lo largo del siglo de existencia que ahora cumple, el comunismo español ha vivido etapas y situaciones muy diversas, casi nunca fáciles. Prácticamente la mitad de ese periodo se corresponde con años de represión y clandestinidad. El nuevo partido sobrevivió a duras penas a una primera década de persecuciones, aislamiento y estéril voluntarismo. Maduró bajo la República, prácticamente se «refundó» como gran partido nacional aferrado a las banderas del Frente Popular y llegó a ser la columna vertebral de la resistencia antifascista durante la guerra. Derrochó un heroísmo sin horizontes políticos claros durante el episodio guerrillero y se convirtió en el «partido del antifranquismo» en la tenaz y dilatada lucha por el restablecimiento de la democracia. Vivió entre la esperanza, el desencanto y el desgarro interno la transición postfranquista. Hubo de adaptarse a la crisis y desaparición del «socialismo real» en la Europa del Este y a los efectos corrosivos de la larga noche neoliberal, manteniendo sus siglas e identidad, pero implicándose a la vez en proyectos políticos más amplios –como Izquierda Unida– y renovando partes sustanciales de su vieja cultura política…

Más allá de los juicios que puedan hacerse sobre esa trayectoria y sus distintos

cambios e inflexiones, no cabe duda de que, al menos en una parte importante de esos momentos históricos, la influencia del comunismo en la vida política, social o cultural de nuestro país puede considerarse verdaderamente relevante. Globalmente, sin duda lo ha sido su misma presencia, más o menos intensa según las etapas, pero continua e ininterrumpida. El orgullo por esa persistencia es lo que gráficamente, desde una óptica militante, reflejaba Marcos Ana en sus memorias: «Cometimos errores, pero los cometimos luchando, quizás bastantes, porque luchamos mucho y ni un solo día nos sentamos a la puerta de nuestra tienda para ver pasar el cadáver de nuestros enemigos»[1].

Es esa presencia permanente, de la que ahora se cumple un siglo, con su capacidad de supervivencia y de adaptación a contextos cambiantes, lo que otorga su interés histórico al comunismo español y en particular a su organización mayoritaria y más relevante, el PCE. Es lo que lo convierte, por utilizar la expresión de Mario Tronti, en una «fuerza histórica» y no en una simple «ocurrencia política». Esta última –añade Tronti– «no sabe más que comenzar puerilmente desde cero para terminar descubriendo que no es nada», mientras que una fuerza histórica «sabe liberarse del pasado para superarse a sí misma, sabe romper la continuidad para revalorizar una tradición»[2].

La historia del comunismo español, como no podía ser de otra manera tratándose de una trayectoria tan dilatada, está hecha de continuidades, pero también jalonada de cambios, y en ambos niveles tiene que ser analizada. Igual que ha de verse en sus múltiples dimensiones: nacional e internacional, política y social, doctrinal y práctica. Del mismo modo que debe entenderse en la tensión permanente y la dialéctica constante entre el viejo sueño prometeico de asaltar los cielos y bajar el fuego sagrado de los dioses para entregarlo a los hombres, por un lado, y, por otro, el permanente imperativo de actuar en términos prácticos e inmediatos sobre la realidad de los trabajadores y los sectores populares; es decir, de alimentar el horizonte de una sociedad futura igualitaria propio de esta tradición y, a la vez, luchar en lo cotidiano, como decía un viejo militante a quien tuve el privilegio de conocer y admirar, por «aquellos a los que les ha tocado perder»[3].

Cuando, hace más de un año, ante el próximo centenario del PCE, que auguraba una inexcusable conmemoración, en la Sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) nos planteamos cuál podría ser nuestra aportación a dichas celebraciones, había dos cuestiones que nos parecían especialmente claras. Una era que el aniversario constituía una buena

oportunidad para hacer un balance matizado y poner al día los considerables progresos experimentados, en las últimas décadas, por las investigaciones sobre la historia del comunismo español. Otra que, fieles a nuestra forma habitual de trabajo y a lo que demandan los tiempos, nuestra tarea debía alejarse de toda tentación burdamente hagiográfica, de cualquier «historia oficial» acrítica, estéril y, por fortuna, poco acorde con las necesidades actuales[4]. Cuestión bien distinta, ciertamente, son las celebraciones, los homenajes o, más en general, la construcción de memoria, legítima y necesaria para cualquier colectivo humano, pero diferente, en sus exigencias y sus parámetros, de una reconstrucción histórica rigurosa y académica. No debemos olvidar que, más allá de nuestros compromisos particulares como ciudadanos o ciudadanas, los historiadores, como decía nuestro colega Antoine Prost, lo que debemos y solemos hacer es «transformar en historia la demanda de memoria»[5].

Para conseguir estos propósitos –abarcar una materia tan amplia y a la vez hacerlo de manera seria y sin autocomplacencias–, el proyecto que elaboramos se propuso contar con un elevado número de historiadores e historiadoras que pudieran arrojar miradas a la vez diversas y complementarias –sin excluir las posibles discrepancias interpretativas– sobre su objeto de estudio. Cada uno de los más de cuarenta autores y autoras a los que conseguimos implicar, más allá de su contribución a esta visión global y poliédrica, es obviamente responsable de los contenidos del texto que firma (incluido yo mismo de esta introducción). No sé si el resultado que hoy presentamos pudiera ampararse bajo el famoso lema de Tácito sine ira et studio (es decir, con absoluta imparcialidad y sin pasión), dado que resulta particularmente difícil mantener un total desapasionamiento academicista cuando se abordan temas como los que aquí se tratan. «Puedo prometer –afirmaba Goethe– ser sincero, pero no ser imparcial». Creo que al menos todos quienes hemos participado en el proyecto aceptaríamos con agrado suscribir el lema que el admirado historiador francés Marc Bloch solicitaba, en su testamento, que se grabara como epitafio en su futura tumba: dilexit veritatem, «amó la verdad»[6]. Esta petición la suscribía –conviene no olvidarlo– alguien que distaba de ser «imparcial» en relación con los grandes conflictos de su tiempo, y que pagó su participación en la Resistencia padeciendo las torturas y cayendo bajo las balas de la Gestapo; o que, ajeno a cualquier creencia religiosa o de «solidaridad racial» y demandando exequias exclusivamente civiles, recordaba para la ocasión su origen judío, a fin de que no se le pudiera atribuir una renuncia cobarde e interesada en tiempos poco propicios. El objetivo de una historia veraz pueden –podemos– compartirlo quienes desean limitar su compromiso con la diciplina al desarrollo de un trabajo

investigador honesto y riguroso, con aquellos que entienden que, además, deben completarlo y compatibilizarlo con una implicación político-social más explícita y activa con los valores de la libertad y la igualdad, y que reivindican legítimamente las atinadas palabras de Bertolt Brecht en ese sentido: «Nadie tiene el derecho de extraer del hecho de que luchemos la conclusión de que no somos objetivos»[7]. Al fin y al cabo, unos y otros estamos sujetos a los mismos códigos deontológicos y utilizamos parecidos instrumentos metodológicos.

Con esos elementales mimbres –plan de conjunto, pluralidad de planteamientos y pretensiones de rigor y objetividad–, el proyecto finalmente entretejido se ha terminado plasmando en dos volúmenes, que pretenden, con mejor o peor fortuna, reflejar la complejidad, la diversidad y el interés de los temas abordados. El primero incluye un recorrido general y cronológico por las distintas etapas de la historia del comunismo español, singularmente las de su fuerza central y ampliamente mayoritaria, el PCE[8]. El segundo incorpora los resultados de múltiples investigaciones monográficas que nos permiten reconstruir con mayor detalle aspectos diversos de esta evolución, su relación con la sociedad y su proyección sobre la misma, sus culturas militantes, etcétera.

Creemos –y con este plural espero interpretar correctamente el sentimiento mayoritario, si no común, de quienes han colaborado en la obra– que el trabajo colectivo que ahora se presenta puede resultar útil al menos en tres sentidos. En primer lugar, para ofrecer a historiadores y estudiosos de la historia una buena puesta al día de los avances en el análisis de esta parcela de nuestra historia contemporánea, y a la vez estimular nuevos progresos en las investigaciones. En segundo lugar, para suministrar a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país unos conocimientos suficientes, que les ayuden a juzgar sin tópicos y con ecuanimidad cuál ha sido la contribución de esta corriente político-ideológica a nuestra trayectoria como colectividad o como pueblo, sin ignorar sus contradicciones, sus luces y sus sombras. Y, en tercer lugar, para ayudar a los militantes y compañeros de ese «largo viaje» secular a conocer mejor su historia. Personalmente, albergo la esperanza de que estos últimos lean el libro con espíritu crítico y autocrítico, se reconozcan en él y pueda servirles como confirmación de aquel afortunado lema electoral del PSUC en 1977, inspirado en una frase de Togliatti: venim de lluny, «venimos de muy lejos». Y luego –pero eso ya no es competencia de los historiadores como tales–, si lo consideran conveniente y asumen la segunda parte del lema (anem més lluny encara, «vamos más lejos aún»), que puedan servirse de este y otros trabajos similares para aprender del pasado y hacerlo suyo, en el sentido que nuevamente Marcos

Ana enunciaba en la dedicatoria de sus memorias: «A las nuevas generaciones, en cuyos surcos hemos sembrado nuestra historia».

* * *

Un proyecto como el que da lugar a este libro es siempre fruto de múltiples colaboraciones, tanto en lo que atañe al diseño de los contenidos o la configuración del grupo de historiadores e historiadoras responsable de los textos, como en la corrección y homogeneización formal de los trabajos recibidos. También, por supuesto, en el allanamiento de los obstáculos para conseguir que tan voluminoso conjunto de aportaciones pudiera editarse. Intentar citar a todos supondría, sin duda alguna, incurrir en injustas e involuntarias omisiones. La Fundación de Investigaciones Marxistas ha brindado su imprescindible patrocinio, y su Sección de Historia el marco idóneo en el que este trabajo ha sido planificado y desarrollado, gracias al esfuerzo generoso de quienes la integran. En las tareas de asesoramiento y coordinación más directas, además de David Ginard, también es de justicia agradecer la receptividad y el apoyo de Juan Andrade, José Luis Martín Ramos, Fernando Hernández y Giaime Pala, así como de los compañeros de la Sección de Historia Manuel Bueno, José Gómez Alén y Julián Sanz, sin cuyo trabajo desinteresado ni este ni otros proyectos similares serían posibles.

[1] Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida, Barcelona, Umbriel, 2007, p. 238.

[2] Véase su prefacio al libro de memorias de Rossana Rossanda, La muchacha del siglo pasado, Madrid, Foca, 2008, pp. 15-20.

[3] Víctor Manuel Bayón, Crónica de una lucha: mi actividad en el Partido Comunista de España, León, PCE de León, 2011, p. 198. Pueden verse las consideraciones sobre el comunismo como tradición «prometeica» en David Priestland, Bandera roja. Historia política y cultural del comunismo, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 15-20.

[4] Sobre las interpretaciones de «los comunismos», incluyendo las justificadas críticas a las «historias oficiales», son útiles las reflexiones contenidas en Michel Dreyfus y otros (dirs.), Le siècle des communismes, París, Les Éditions de l'Atelier, 2000, pp. 19-91.

[5] Antoine Prost, Doce lecciones sobre la historia, Madrid, Cátedra, 2001, p. 302.

[6] Marc Bloch, La extraña derrota, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 169-170.

[7] Bertolt Brecht, Escritos políticos, Caracas, Tiempo Nuevo, 1970, p. 22.

[8] El volumen incorpora seis trabajos de planteamientos y metodología netamente históricos, referentes a otras tantas etapas sucesivas, y una aproximación más sociológica-politológica sobre el periodo más reciente.

I

EL PCE, DESDE SU ORIGEN HASTA LA GUERRA CIVIL

(1920-1936)

– José Luis Martín Ramos –

LA FORMACIÓN DEL PARTIDO

Quiebra de la socialdemocracia y nacimiento de la Internacional Comunista

La estabilidad que la política imperialista dio al capitalismo en la última década del siglo XIX y el relativo éxito electoral de la socialdemocracia –de manera particular en Alemania, Francia y el norte de Italia– llevó a considerar a una parte de esta que las formas de la acción socialista y la vía de avance hacia el socialismo, centradas hasta entonces en el conflicto de clase y en la perspectiva de una ruptura revolucionaria del sistema, habían de ser revisadas. La propuesta de revisión surgió y sobre todo se teorizó en el seno del SPD, el partido faro de la Segunda Internacional, en el que desde comienzos de esa segunda década se empezó a propugnar el abandono de la oposición sistemática al Estado imperial, la asunción de la política internacional del Imperio y la alianza con los partidos burgueses «de izquierda» en el sur de Alemania. En Las premisas del socialismo (1899), Bernstein proporcionó el marco teórico y la doctrina legitimadora de esa propuesta que iba ganando adeptos más allá de Alemania. En Francia, Millerand, líder del grupo de los «socialistas independientes»[1], dio un salto cualitativo en 1899 al pasar de la alianza parlamentaria a la integración en el gobierno del radical Waldeck-Rousseau, en el fragor de la revisión del proceso contra Dreyfuss; y el Partido Socialista Italiano, tras acordar en 1898 una alianza «defensiva» con la «izquierda burguesa», pasaría entre 1901 y 1903, a propuesta

de Turati, a apoyar al gobierno Zanardelli-Giolitti. Bernstein propuso superar lo que consideró el determinismo económico de Marx, anunciando el fin de las crisis cíclicas del sistema y un proceso de distribución creciente de la riqueza y de extinción progresiva del conflicto de clase, lo que avalaba el giro del discurso de la revolución hacia la evolución.

El giro del revisionismo fue dominando al conjunto de la Segunda Internacional, aupado por los éxitos electorales; estos fueron más ostensibles en Alemania y Francia, donde la Dieta Imperial y la Asamblea Nacional se elegían por sufragio masculino universal, aunque también estaban presentes de manera más modesta, o como expectativa, allí donde el sufragio era restringido. El SPD era, desde 1890, la formación más votada en la Dieta, y desde 1903 el segundo grupo de la cámara, con 397 escaños. En Francia, el voto afín a la Segunda Internacional pasó del 5 por 100 al 25 por 100 en 1902, a pesar de la crisis interna que produjo la decisión de Millerand. Sin embargo, el revisionismo no solo creció a caballo de ese éxito, también se vio favorecido por la displicencia con la que lo trató la dirección política e intelectual socialdemócrata. En Alemania, mientras Bebel y Kautsky confiaron en que la propuesta de Bernstein se desvanecería y no pasaría de ser un incidente intelectual, tuvo que ser Rosa Luxemburg quien percibiera, ya en 1899, la trascendencia de la escisión entre la lucha por las reformas que proponía Bernstein y el objetivo de la revolución; su posicionamiento quedó, empero, en minoría. Las resoluciones formales contra el revisionismo de los congresos del SPD de 1901 y 1903 y del congreso de la Segunda Internacional, en 1904, no impidieron que las prácticas se deslizaran plenamente hacia esa doctrina. La ambigüedad con que se abordó el revisionismo en la práctica contrastó con la crítica absoluta al sindicalismo de orientación revolucionaria y a su consigna de la huelga general. El congreso de 1904 consideró «inejecutable» el cese de todo el trabajo y solo aceptó la posibilidad de una huelga amplia «que alcanzara un gran número de oficios, o los más importantes para el funcionamiento de la “vida económica”, como medida de presión en favor de cambios sociales de importancia, o de defensa ante “los atentados reaccionarios sobre los derechos de los obreros”»[2]. La vía principal de la alternativa socialista fue adjudicada a la conquista del sufragio universal y al aumento de la presencia socialdemócrata en los parlamentos; lo que hacía imprescindible el crecimiento orgánico de partidos y sindicatos, priorizando su supervivencia legal, hasta que su peso social inclinara la balanza hacia el triunfo de las propuestas socialistas.

Esa tendencia dominante se vio temporalmente impugnada por la revolución

rusa de 1905-1906, que proporcionó una experiencia y un discurso de acción revolucionaria en los que la lucha de masas pasó a ocupar la centralidad de la acción política. Lenin lo hizo en el mismo 1905, reconociendo la huelga general de San Petersburgo como el inicio de una revolución popular, a la que había de incorporarse el campesinado. Y Rosa Luxemburg en 1906, en Huelga de masas, partido y sindicato, donde insistió en vincular todas las acciones a un mismo objetivo revolucionario cuya clave de éxito era la lucha de masas. Al mismo tiempo, la sobrevaloración de la estabilidad capitalista, acompañada de una empatía creciente en el movimiento obrero hacia la expansión colonial –vista como productora de beneficios materiales para las clases trabajadoras de las metrópolis–, se tambaleó en 1905 con el incidente de Tánger, en el que el Imperio alemán se enfrentó a la República francesa, apoyada por el Reino Unido, por el control de Marruecos. Ese primer aviso de un nuevo conflicto europeo dominó los debates del congreso de la Segunda Internacional de 1907, en Stuttgart. En él se perfiló una corriente de izquierdas con la presentación de una moción contra la amenaza de guerra, suscrita por Lenin, Martov y Rosa Luxemburg, que propugnaba una acción general para evitarla «por todos los medios que les parezcan apropiados y que varían y se desarrollan, naturalmente según la intensidad de la lucha de clases y la situación política general»; y si no se conseguía impedirla, «intervenir para hacerla cesar rápidamente» y «utilizar con todas sus fuerzas la crisis económica y política creada por la guerra para agitar a las capas populares más amplias y precipitar la caída de la dominación capitalista»[3]. Incorporada por Bebel a la resolución definitiva, fue la primera vez que se vincularon las perspectivas de la guerra y la revolución, y la contemplación de esta como un proceso general, de «revolución mundial»[4]. La idea pareció prosperar, al punto que Kautsky, en El camino del poder (1909), señaló: «Cuando Marx y Engels escribieron El Manifiesto del Partido Comunista tenían ante sí como campo de batalla la revolución proletaria solamente en Europa occidental. Hoy se ha vuelto el mundo entero». Y Bebel amenazó con ella en la Dieta imperial, en 1912, si bien lo hizo retóricamente.

El ascenso incipiente de las posiciones revolucionarias e internacionalistas en la Segunda Internacional no pasó de ahí. En Alemania, los «marxistas ortodoxos» –Bebel, Kautski– quedaron desbordados por una nueva generación dirigente –Ebert, secretario general del partido desde 1905, Scheidemann, Noske– que al revisionismo añadió a partir de 1907 el giro nacionalista, capitalizando el éxito en las elecciones de 1912, en las que el SPD se convirtió en primer partido de la cámara, con casi el 35 por 100 de los votos. Los fabianos, principal referente intelectual del laborismo, que empezaba a constituirse como formación

independiente, defendían en el Reino Unido las bondades de un imperialismo «civilizador». Entre los principales partidos socialistas sólo el italiano evolucionó al contrario de la tendencia mayoritaria, cuando el sector maximalista, liderado por Lazzari y Mussolini, dejó en 1912 en minoría la alianza reformista de Turati y Ferri para rechazar la invasión de Libia y el apoyo a los liberales de Giolitti. La emergente izquierda socialista de 1905-1907 permaneció en minoría; aunque no paralizada, cuando menos en el ámbito de la reflexión. Lenin, exiliado en Suiza, prestó atención particular entre 1908 y 1913 a la relación entre la acentuación del conflicto de clases en Europa, el imperialismo y los movimientos anticoloniales[5]; afirmándose en el horizonte de una revolución que, como en 1848, se extendería por toda Europa como única guerra social a la más que probable guerra imperialista. Esa concepción total del momento histórico le permitió dar una respuesta rupturista al estallido de la guerra y a la quiebra política del movimiento obrero que entonces se produjo al apoyar sus principales organizaciones y líderes –de la socialdemocracia, del anarquismo y del sindicalismo revolucionario– la política de guerra emprendida por los gobiernos de su nación. Después de esperar que la Segunda Internacional fuera capaz de cumplir la segunda parte de la moción de 1907, en el otoño de 1914 Lenin la dio por definitivamente perdida; para transformar la guerra imperialista en guerra revolucionaria había que constituir una nueva internacional, una Tercera Internacional[6].

Durante la Gran Guerra, Lenin no pudo hacer otra cosa que popularizar su propuesta en los medios de la izquierda socialista y en el movimiento de Zimmerwald[7], en el que quedó siempre en minoría. La mayoría no compartió la respuesta de transformación de la guerra en revolución, no creyó en ella, y solo pensó en términos de recuperación unitaria y marxista de la Segunda Internacional; se atuvo a reclamar el inmediato cese de la guerra y una paz sin vencedores ni vencidos y a esperar que con ella sería posible reconstruir la Internacional, haciendo crítica de la quiebra de 1914 y de las concesiones al nacionalismo y al revisionismo. El proyecto de Lenin empezó a ser realidad con la revolución rusa iniciada en febrero de 1917; lo consideró el inicio de un proceso revolucionario que había que desarrollar y organizar, mediante la toma del poder en Rusia por parte del proletariado organizado, con el apoyo del segmento popular del campesinado, y fundando «inmediatamente» una Tercera Internacional que extendiera a escala mundial la iniciativa revolucionaria[8]. Esa inmediatez derivaba de la expectativa de que la revolución rusa tuviera eco inmediato en Europa y para empezar en Alemania, donde se producían movimientos de protesta contra la guerra entre las clases trabajadoras y existía

una izquierda socialdemócrata en ruptura con el SPD. Sin embargo, el eco no se tradujo en hechos y el Estado revolucionario soviético quedó aislado y a la defensiva. Lenin tuvo que aparcar la constitución de la Tercera Internacional, hasta que la revolución alemana de noviembre de 1918, que puso fin a la Gran Guerra, reactivó la expectativa de generalización de la revolución. El 24 de enero de 1919, el diario Pravda publicó la convocatoria urgente del «primer congreso de la nueva Internacional revolucionaria» impulsada por el Partido Comunista ruso-bolchevique. Dirigida a una cuarentena de organizaciones o corrientes de la izquierda socialdemócrata y del sindicalismo revolucionario, en ella se citó sin mayor concreción a los «elementos» revolucionarios del socialismo español, sobre los que había un desconocimiento casi absoluto.

España, dos fuentes del proyecto revolucionario comunista

Los receptores de esa convocatoria no solo fueron, en nuestro país, esos «elementos revolucionarios» del socialismo, del PSOE, de la UGT y de las Juventudes Socialistas; también la atendió y la debatió la CNT, lo que proporcionó al comunismo español dos fuentes iniciales. Tuvieron en común el interés por la revolución de 1917; aunque se diferenciaron en el sustrato ideológico con el que se abordó tanto la revolución como la convocatoria del primer congreso de la Tercera Internacional y en la desigualdad de la dimensión del «tercerismo» en ambos campos –el socialista y el anarcosindicalista–, que se reflejó en el volumen de la adhesión final al nuevo proyecto revolucionario.

Antes de 1917 la influencia de las posiciones de la izquierda de la socialdemocracia fue casi nula en el movimiento obrero español. En el PSOE solo una minoría dispersa se identificó con el movimiento de Zimmerwald: el catedrático de Psicología José Verdes Montenegro, que en el X.o congreso del PSOE, en 1915, reclamó el abandono de la aliadofilia y la condena de la guerra; la líder feminista Virginia González, miembro de los comités nacionales del PSOE y de la UGT; el periodista y concejal socialista en Madrid Mariano García Cortés; y algunos jóvenes de Madrid, entre ellos Manuel Núñez de Arenas y Ramón Lamoneda, con algún peso creciente en el partido. Con tan poca influencia, que ni siquiera consiguieron que las Juventudes Socialistas aprobaran la propuesta de su sección madrileña de adherirse en 1915 al movimiento. Esa

situación empezó a cambiar lentamente en 1917, en el contexto del impacto de la revolución rusa y de la dinámica política y social interna que radicalizó al obrerismo español ante la crisis política de la Restauración.

El impacto exterior fue en los primeros meses débil y más en el socialismo que en el anarcosindicalismo. La dirección del PSOE expresó, a través de El Socialista[9], una peculiar valoración positiva del derrocamiento del Imperio zarista en febrero (marzo en el calendario juliano), limitándola a una revolución política protagonizada por la Duma y el Gobierno provisional que esta había elegido; la cual eliminaba la incómoda contradicción que suponía, para la aliadofilia ampliamente compartida en el PSOE, el carácter autocrático del zarismo. Lo que le importó sobre todo fue que a partir de entonces todo el bloque de la Entente sería «democrático», frente al bloque «autoritario y militarista» de los Imperios Centrales. No se veía la revolución rusa desde su realidad, que se desconocía, sino desde la trampa en la que había caído la gran mayoría de la socialdemocracia europea, la aceptación de la guerra en nombre de los respectivos relatos legitimadores que había desarrollado cada bando. En la CNT incidía también ese relato y la inclinación hacia los aliados; no obstante, su prensa negó que la revolución fuera resultado de la acción de la Duma y, por el contrario, puso todo el protagonismo en el pueblo, señalando la novedad del Sóviet: «Un Comité formado por representantes de los obreros y los soldados para vigilar los actos del gobierno provisional tiene un significado muy elocuentísimo»[10]. En cualquier caso, para unos y otros la rusa era todavía una cuestión lejana, a la que prestaron escasa atención.

Esta se centró en la respuesta a la crisis política e institucional de aquella primavera en España, precipitada por el conflicto de las juntas militares, el cierre de las Cortes impuesto por Dato para frenar las críticas a Alfonso XIII –más que tolerante ante los militares– y la convocatoria impulsada por los catalanistas de una Asamblea de Parlamentarios discrepante, en julio. A ese escenario se sumó el movimiento obrero, la UGT y la CNT, que habían acordado un pacto de unidad de acción en 1916 y lo renovaron el 25 de marzo de 1917, acordando una huelga general indefinida para presionar «cambios fundamentales» del sistema, de momento sin fecha de inicio. La huelga se inició finalmente el 13 de agosto, antes de que se hubiera cumplido su preparación y de manera forzada por una huelga nacional ferroviaria que después se supo que había sido provocada por Dato para precipitar la acción obrera. En esa circunstancia solo salió adelante en Madrid, Barcelona y sus comarcas industriales, Asturias, Vizcaya, Valencia, Zaragoza, y en lugares dispersos de Galicia y Andalucía y las dos Castillas, sin

conseguir la adhesión del mundo campesino; y entre el 16 y el 18, ante la dura represión de Dato, fue acabando por todas partes excepto en Asturias, donde se prolongó hasta el 17 de septiembre[11]. El movimiento resultó derrotado y a la vuelta del verano la expectativa de cambio de régimen se desvaneció con la defección de la Lliga Regionalista, que cambió su posición para entrar el 3 de noviembre en un gobierno de concentración presidido por García Prieto. A pesar de todo, la acción no cayó en saco roto.

El episodio impulsó en el movimiento obrero, en el socialismo de manera particular, el viraje desde el reformismo parlamentarista hacia la lucha de masas. En su transcurso, el desenlace de la revolución rusa en octubre / noviembre de 1917 y la convulsa postguerra europea de 1919 y 1920 activaron en España expectativas de ruptura, que ya no pudieron limitarse al ámbito político. Ciertamente, las respuestas iniciales de las cúpulas se movieron en la inercia de las que habían dado muestras a comienzos de año. La dirección del PSOE valoró negativamente aquel desenlace; considerando la retirada unilateral de la guerra proclamada por la revolución de octubre como «una deserción de las filas de los pueblos aliados ante el enemigo de toda libertad y de toda afirmación del derecho popular»[12]. Y aunque en la CNT también hubo quien compartió ese recelo –Salvador Seguí o alguno de sus seguidores[13]–, en su prensa se destacó más el elogio que la crítica: «Los rusos nos indican el camino a seguir»[14]; Manuel Buenacasa, que sería elegido poco después secretario del Comité Nacional de la CNT, calificó a Lenin como «el hombre más interesante, más noble y más ultrajado de la Europa actual». A finales de 1917, se daba una mayor predisposición en las filas de la CNT a mirar con mejores ojos lo que, aunque no se sabía qué era exactamente, se pensaba que en cualquier caso constituía una revolución social. Aun así, en el seno del PSOE se fue configurando una corriente que partiendo de la simpatía evolucionó hacia la adhesión a la revolución de octubre y el estado revolucionario que de ella había surgido. Se aglutinó en torno a la revista Nuestra Palabra, fundada en agosto de 1918 por Mariano García Cortés y Ramón Lamoneda, secretario general de la Federación Gráfica Española de la UGT. Y se hizo notar como minoría, todavía no organizada, en el XI Congreso del partido, en noviembre de 1918, recién acabada la guerra. Rafael Millá –tipógrafo de Alicante– y Eduardo Ugarte –del Grupo de Estudiantes Socialistas de Madrid–, secundados entre otros por Ramón Lamoneda, censuraron el exceso «aliadófilo» y el menosprecio a los «maximalistas» rusos expresados en El Socialista, convalidado, de hecho, por el Comité Nacional. La dirección del partido, encabezada por Besteiro, decidió en el congreso asumir una retórica defensa de la revolución rusa, saludada «con

entusiasmo» en el dictamen final; bloqueando al mismo tiempo resoluciones más concretas. Ugarte no consiguió que se aprobase su propuesta de enviar sendos telegramas, de simpatía al gobierno de la República rusa de los Sóviets y de protesta por la intervención extranjera a Wilson; y Besteiro impuso limitar todo acuerdo al mencionado saludo y vehicular la relación con la Rusia revolucionaria a través del Buró Socialista Internacional. La incipiente corriente crítica no solo era todavía débil, sino que se manifestó heterogénea; Núñez de Arenas y Verdes Montenegro se negaron a apoyar las críticas y propuestas de Ugarte, Millá y Lamoneda.

Fundación de la Internacional Comunista y del Partido Comunista Español

La convocatoria del congreso de Moscú tuvo escasa respuesta en España. El Socialista no la mencionó hasta el 13 de febrero de 1919 y Nuestra Palabra, que tampoco lo hizo antes, la acogió con cautela ante su carácter rompedor. Por el momento el PSOE estuvo más atento a la Conferencia de partidos socialdemócratas en Berna, entre el 5 y el 9 de febrero, para elaborar una propuesta común ante las inmediatas conferencias «de paz», iniciadas en París el 18 de enero, a la que asistió Besteiro; la cual resultó una reunión fallida, ante la ausencia de belgas y alemanes, que no quisieron compartir encuentro, y de italianos, serbios y rumanos, que rechazaron una convocatoria hecha por lo que siguieron considerando el bloque «socialpatriótico». Luego, después de que la Conferencia aprobase la moción del sueco Branting, y no aceptara la del francés Longuet y el austriaco Fritz Adler, que se negaba a tal condena por falta de base para tal juicio y pedía en cambio la de la intervención extranjera en Rusia, la SFIO[15] y el Partido Socialista Austriaco (SPÖ) se descolgaron de la reactivación de la Segunda Internacional. Después de ese fracaso, tuvo lugar el congreso de Moscú, iniciado el 2 de marzo de 1919, que a pesar de su reducida asistencia[16], que suscitó dudas iniciales, decidió el día 4 constituir formalmente la Tercera Internacional, bajo la denominación de Internacional Comunista (IC); la fuerza que tenía entonces la revolución en Budapest y la noticia, precipitada, de una inmediata revolución en Austria acabaron de decidir a los asistentes. Lo hizo bajo mínimos con la aprobación de un nuevo «Manifiesto comunista», su carta de presentación ideológica y política, y la elección de un primer Comité Ejecutivo presidido por Zinoviev. Y dejó para un

próximo congreso la formalización de su estructura organizativa y su línea política básica.

Nada de ello repercutió de inmediato en el socialismo español. Sí los sucesos de Alemania, la mal llamada «insurrección espartaquista» de enero de 1919[17], con el asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, de la que El Socialista informó con amplitud. La empatía con los revolucionarios y la condena de los asesinatos actuó como catalizador del ascenso de la incipiente corriente revolucionaria del PSOE; en febrero obtuvo su primer éxito en el interior del partido, al ganar las elecciones al Comité Ejecutivo de la Agrupación Socialista Madrileña (ASM): García Cortés y César R. González fueron elegidos presidente y secretario general y García Quejido, Núñez de Arenas y Lamoneda para representar al partido en el Instituto Nacional de Previsión. Todo ello podría haber quedado en un movimiento interno, hasta que la constitución de la IC cambió la perspectiva. En un mitin el 20 de julio en la Casa del Pueblo de Madrid, en apoyo a las revoluciones en Rusia y Hungría, Torralva Beci y Ovejero llamaron a dar por «sepultada en las trincheras» la Segunda Internacional y pasar a la Tercera. Una semana después Torralva Beci consiguió que la ASM expusiera a debate su propuesta[18], presentada en mayo, en la que se reclamaba a la Comisión Ejecutiva del PSOE la convocatoria de un plebiscito entre todas las agrupaciones del partido sobre el ingreso en la Tercera Internacional. El progreso de la propuesta fue lento. La ASM no la aprobó hasta el 2 de septiembre; sin embargo, lo hizo con tal contundencia –398 votos a favor y solo 2 abstenciones[19]– que Pablo Iglesias, Besteiro y Largo Caballero prefirieron promover la convocatoria de un congreso extraordinario para mediados de noviembre, con el fin de resolver la cuestión de la Internacional, así como la alianza con los partidos republicanos que la emergente izquierda revolucionaria del partido venía poniendo en cuestión.

El congreso extraordinario del PSOE, iniciado el 8 de diciembre de 1919 en la Casa del Pueblo de Madrid, fue el primero de los tres que precisó el partido para tomar una decisión definitiva, en abril de 1921. El de diciembre de 1919 coincidió, a partir del 10, con el segundo congreso de la CNT, desarrollado en el Teatro de la Comedia de la capital; su acuerdo fue también provisional y equívoco, de manera que la decisión última no se produjo hasta junio de 1922, en su caso forzado por la circunstancia de la ilegalización del sindicato en 1920. Ambas reuniones tuvieron lugar en un clima marcado por las movilizaciones obreras en Cataluña, Asturias y Vizcaya, y campesinas en Andalucía, así como por alguna exasperación ante la respuesta represiva que ya se estaba padeciendo.

En el congreso socialista estuvieron representados cerca de 34.400 afiliados, algo más del 80 por 100 de los 42.000 que tenía[20]. Desde el primer momento se dividió. Besteiro, Fabra Ribas, director de El Socialista, y Pérez Solís encabezaron a los partidarios de la permanencia en la Segunda Internacional y la asistencia a su congreso previsto para la próxima primavera en Ginebra. Por el contrario, Anguiano propuso el ingreso incondicional en la IC, apoyado por García Cortés, Verdes Montenegro y Núñez de Arenas. Entre ambas posiciones, inequívocas, la Federación Socialista Asturiana –representada por Acevedo, Teodomiro Menéndez y Bonifacio Martín–, que dijo identificarse con el espíritu de la Tercera, propuso una solución intermedia: mantenerse en la Segunda, ir al congreso de Ginebra, defender en él la fusión de ambas internacionales, depurando los elementos que habían traicionado al espíritu de la socialdemocracia y, si eso se tornara imposible, «por discrepancias fundamentales con la Tercera Internacional, que los partidarios de la Segunda quieran mantener», ingresar entonces en esta última. Como quiera que el ambiente de los debates resultó muy favorable a la nueva internacional, Besteiro, Fabra Ribas y Pérez Solís sumaron a su posición la propuesta asturiana, consiguiendo con ello capitalizar buena parte de los sentimientos unitarios internos y ganando la votación final por 14.010 votos de afiliados representados frente a 12.497[21]. Fue un acuerdo ambiguo, que sumaba minorías heterogéneas en su posicionamiento ante la nueva internacional y no tenía ninguna garantía de resultar operativo.

No fue el caso de las Juventudes Socialistas, que reunieron su congreso acto seguido[22], y se adelantaron a las decisiones del partido. A propuesta de asturianos y madrileños aprobaron el ingreso en la Internacional Comunista, casi por unanimidad, con la sola excepción de la delegación malagueña. El argumento definitivo para que lo hicieran fue que la Conferencia de noviembre, en Berlín, de la Unión Internacional de Organizaciones Juveniles Socialistas, presidida por Willy Münzerberg, había dado ya ese paso y se había autoconstituido en Internacional Juvenil Comunista. El congreso, además, cambió a fondo su dirección, presidida hasta entonces por Saborit –seguidor de Besteiro–, al que sustituyó José López y López con José Illescas como vicepresidente, Merino Gracia como secretario-tesorero, Luis Portela como vicesecretario-tesorero, Vicente Pozuelo como secretario de actas y Tiburcio Pico como responsable de Renovación.

El ingreso en la Tercera no fue el tema central del congreso de la CNT, sino cuál había de ser la orientación del sindicato ante la represión patronal y

gubernamental que se estaba padeciendo; si rectificar la radicalización iniciada para salvaguardar el sindicalismo de masas, defendido por Seguí, o todo lo contrario, hasta sostener la ocupación de las fábricas como respuesta al lock out que la patronal había desencadenado en Cataluña, como postulaba Buenacasa. No obstante, en ese debate se coló la cuestión de la nueva internacional, como un factor más de referencia de la orientación revolucionaria o reformista que se había de tomar. Hilario Arlandis, delegado de Valencia, defendió la integración inmediata en ella, pero se quedó solo. El acuerdo, por aclamación y sin votación, fue adherirse solo provisionalmente, por su carácter revolucionario, a la espera de que pudiera celebrarse –en España– la asamblea internacional que estableciera de manera definitiva «los principios que rijan la nueva Internacional de obreros». Y enviar una delegación al próximo congreso de la IC integrada por Pestaña, Eusebi Carles Carbó y Salvador Quemades; ninguno de ellos probolchevique.

Sin que los acuerdos del PSOE y la CNT fueran concluyentes, la gestación del comunismo español se precipitó cuando, a los pocos días de celebrarse sus congresos, llegaron a Madrid, procedentes de México y camino de Moscú, Borodin –alias de Mijail Gruzenberg, un veterano bolchevique, miembro del primer aparato de la IC y del Comisariado de Asuntos Exteriores soviético– y Jesús Ramírez, alias del estadounidense Richard Francis Phillips, exiliado en México[23]. Sin tener apenas información del movimiento obrero español, lograron conocer a Fernando de los Ríos, que los presentó a Mariano García Cortés, y este los puso en contacto con los principales promotores del «tercerismo»: Anguiano, José López y López y Ramón Merino Gracia[24]. Bajo su orientación se constituyó un «bloque de izquierdas» que, al hacerse público un nuevo aplazamiento del congreso de la Segunda Internacional, dio por sentado que este no se celebraría y reclamó, en un manifiesto el 10 de enero de 1920, que se ejecutara la cláusula final del acuerdo del congreso extraordinario del PSOE, ingresando ya en la IC; así como asistir ya a su próximo congreso. Lo firmaban Anguiano, Lamoneda y Núñez de Arenas, de la Comisión Ejecutiva del PSOE; Mariano García Cortés y César R. González, de la ASM; José López y López y Ramón Merino Gracia, del ejecutivo de las Juventudes Socialistas; José González de Ubieta, del Grupo de Estudiantes Socialistas; y Virginia González, líder del feminismo socialista y antigua vocal del Comité Nacional, y llevaba fecha del 10 de enero, aunque El Socialista no lo dio a conocer hasta doce días después. Tras esa publicación, el Comité Provincial de la Federación Socialista Asturiana pidió también el 25 de enero que se procediera a dicho ingreso, tras consultar a las agrupaciones del partido. La Comisión Ejecutiva lo rechazó y

remitió al Comité Nacional del 21 de febrero la decisión sobre la propuesta asturiana. Cuando esta se celebró, había llegado la convocatoria de una reunión preparatoria del congreso pendiente de la Segunda Internacional, en Rotterdam, el 13 de marzo; por lo que el Comité Nacional descartó la propuesta asturiana y acordó por unanimidad enviar a Rotterdam a Besteiro y Anguiano a título informativo, para tomar a su regreso la decisión pendiente.

Ese acuerdo, votado también por Anguiano, Lamoneda y Núñez de Arenas, rompió el «bloque de izquierdas», en el que sólo Merino Gracia se manifestó en contra del Comité Nacional. Ante ello Ramírez[25] y Merino Gracia, apoyados por Juan Andrade y Ugarte, del Grupo de Estudiantes Socialistas, decidieron prescindir del sector «tercerista» del partido, al que consideraban demasiado condescendiente, y transformar las Juventudes en partido comunista; con la única oposición en la dirección juvenil de López y López, que dimitió, dejando a Merino Gracia el liderazgo de la formación[26]. Se convocó a todas las secciones para que se reunieran el 15 de abril y debatieran una propuesta del Comité Nacional, que se dio a conocer públicamente aquel mismo día: convertir las juventudes en Partido Comunista Español (PC Español) y solicitar de inmediato el ingreso en la IC. Contra lo que se escribe muy frecuentemente, la decisión final no fue un golpe de mano desde arriba, sino el resultado de la suma de las decisiones locales que se tomaron. Aunque sí resultó una victoria pírrica para sus impulsores: el grueso de las secciones de Asturias y Vizcaya, que sumaban más de la mitad de los jóvenes socialistas, no se sumaron al nuevo partido, que como máximo alcanzó unos 2.000 militantes, de los que 400 correspondían a Madrid, incluidos los estudiantes. Sin poder contar con las Juventudes de Asturias y Vizcaya, la presencia en el movimiento obrero del PC Español resultó irrelevante. Por su parte, las Juventudes Socialistas fueron reorganizadas bajo la dirección de José López y López y César R. González y, aunque rechazaron el paso de la constitución del PC Español, mantuvieron la adhesión a la Internacional Juvenil Comunista y la defensa del ingreso conjunto con el PSOE en la IC.

La iniciativa de Borodin, Ramírez y Merino Gracia resultó un bumerán; dividió fuerzas entre los «terceristas» españoles, entorpeció los movimientos de los que actuaban en este y favoreció la reacción de sus contrarios. Además, el PCE quedó marcado desde sus inicios por su identificación con las posiciones de los comunistas neerlandeses liderados por Rütgers, que controlaban el Buró de Amsterdam de la IC, constituido en septiembre de 1919 para promover la nueva internacional en Europa Occidental y Norteamérica. Rütgers condenaba por

completo la participación en los sindicatos, oponiendo a estos los consejos obreros y el movimiento de los delegados de taller, y rechazaba asimismo toda participación electoral; por otra parte, no contemplaban otra relación que la confrontación total con los partidos socialistas, incluidos los que mostraban una posición crítica, e incluso se estaban aproximando a las posiciones de la IC[27]. Ese planteamiento iba en la dirección contraria que Lenin, Trotsky y Zinoviev decidieron dar a la Internacional en los primeros meses de 1920.

La batalla de las internacionales[28]

La posición de los comunistas neerlandeses no iba solo en la dirección opuesta a la de los promotores de la IC, sino también a la de la realidad del movimiento obrero, mucho más compleja de lo que aquellos consideraban. A pesar de que la movilización revolucionaria había descendido en la segunda mitad de 1919, la prolongación de la crisis económica de postguerra, la inestabilidad de la situación política en algunos de los Estados vencedores (Italia, Reino Unido) y sobre todo la incapacidad de la Segunda Internacional para rehacerse favoreció que amplios sectores socialistas se decantaran en favor de la Tercera y de sus propuestas revolucionarias o de terceras soluciones organizativas que, empero, compartían la orientación revolucionaria. En diciembre de 1919 el Partido Socialista Independiente de Alemania (USPD) propuso la «reconstrucción» de una internacional revolucionaria incluyendo todas las formaciones contrarias a la reactivación de la Segunda Internacional. Fue concebida como un puente tendido hacia la Tercera, para negociar las condiciones definitivas de constitución de la internacional revolucionaria, entre las que destacaba la reivindicación de la «autonomía táctica» de los partidos nacionales (es decir, la soberanía en los asuntos nacionales propios); en lo que resultó fue en una salida para mantener la unidad en partidos muy divididos, con rechazo mayoritario al reformismo, pero renuentes a integrarse en la IC: el Partido Socialista Suizo, el Partido Laborista Independiente y la SFIO, que dejaron de participar en la Segunda Internacional. A la nueva iniciativa se sumó la decepción que comportó la reunión de Rotterdam del 13 de marzo de 1920, con una asistencia reducida de los laboristas ingleses, los socialistas suecos, belgas, neerlandeses y españoles y los mencheviques georgianos, y una representación de los socialistas revolucionarios rusos; apenas si sirvió para mantener la convocatoria del

Congreso de Ginebra, que habría de celebrarse a partir del 31 de julio.

Con ese dato en sus manos, el Comité Ejecutivo de la IC acordó el 22 de abril convocar para el 19 de julio el segundo congreso de la Internacional Comunista. En el documento con el que Zinoviev lo hizo público, en Pravda el 14 de mayo, se hacía constar que su objetivo era «determinar de manera clara y precisa la política de la IC, consolidar en ella una verdadera organización de comunistas, provista de un programa y de una táctica»[29]. Tras esa formulación general estaba el viraje de Lenin y Zinoviev –una vez que el momento insurreccional en Europa parecía pasado– hacia la formación de partidos comunistas de masas, una mayor ductilidad táctica en relación con los sindicatos y la participación electoral en una Europa en la que tras la guerra avanzaba la universalización del sufragio. Su intención era incluir en el proyecto comunista no solo a los partidos que ya habían decidido su participación, sino también a aquellos que ya estaban en posición de ruptura con la Segunda Internacional; neutralizando, al propio tiempo, el riesgo de que ese proyecto pudiera desestabilizarse desde dentro, en nombre de las ilusiones «reconstructoras». Por ello el Comité Ejecutivo de la IC recibió de la manera más abierta a todas las delegaciones que acudieron al Segundo Congreso de la IC, desarrollado entre el 19 de julio y el 7 de agosto; y cerraron en él las condiciones de admisión y unos estatutos que establecieron formalmente su condición de partido mundial y no de plataforma mundial de partidos. Por otra parte, para que no se confundiera la naturaleza de ese partido mundial, ni la centralidad de la política revolucionaria, los sindicatos que se adhirieran a la Tercera se integrarían en una Internacional Sindical Roja, políticamente subordinada al proyecto comunista general.

Las condiciones de admisión se materializaron en un documento de 21 puntos, de carácter político y organizativo: rechazo del reformismo y el orden de Versalles; defensa de las repúblicas soviéticas; apoyo a los movimientos de emancipación colonial; combinación de políticas de masas y mecanismos de preparación de procesos insurreccionales, en el ámbito táctico y organizativo; los partidos serían secciones de la IC, una sola en cada Estado, todos con la denominación «Comunista» y el gentilicio correspondiente; obligado cumplimiento de los acuerdos del Congreso Internacional y del Comité Ejecutivo en él elegido, aunque, dada la variedad de las condiciones de lucha en cada país, solo se aprobarían resoluciones generales obligatorias «en los problemas donde ello sea posible». En ellos se incluyeron garantías contra el reformismo y toda tentación «centrista» de compromiso: excluir del partido a los principales representantes de esas posiciones –se daban como ejemplo los

nombres de Turati, Kautski, Hilferding, Longuet, Mc Donald–; separar de los grupos parlamentarios y las instituciones centrales del partido a los elementos dudosos; y combatir para separar igualmente de posiciones dirigentes en el movimiento obrero a reformistas y centristas. En cuatro meses desde el Segundo Congreso los partidos habían de realizar el suyo propio para pronunciarse sobre las 21 condiciones, que habían de ser aceptadas íntegramente para ser admitidos. Los estatutos dieron forma a la Internacional como partido, regido por el centralismo democrático, en el que el órgano máximo era el congreso mundial por celebrar cada año y, entre congreso y congreso, el Comité Ejecutivo de la IC. Este estaría integrado por cinco miembros del partido del país en el que el congreso hubiese fijado su sede, más un representante por cada uno de los doce partidos que cada congreso considerase más importante. En 1920 no se desesperaba todavía de que en Europa se reactivara la movilización revolucionaria, con la vista puesta sobre todo en Alemania, por lo que esa sede y el partido anfitrión podría variar en el futuro. No fue así y ello tuvo consecuencias en el funcionamiento de la IC, el peso de la sección rusa y las interferencias del Estado soviético; pero en 1920 eso no podía adivinarse.

Los socialistas españoles tuvieron información tanto del intento de reactivar la Segunda Internacional como del movimiento de los «reconstructores», cuando a finales de abril Besteiro y Anguiano rindieron cuenta al Comité Nacional de su viaje a Holanda[30]. En la práctica sólo Besteiro pudo estar en Rotterdam, por cuanto Anguiano no pudo pasar la frontera neerlandesa, al serle encontrado por la policía de fronteras documentación que Merino Gracia le había entregado para que la hiciera llegar al Buró de Ámsterdam. Ello resultó una imprudencia. Por más que Anguiano no consideró que fuera improcedente hacer de recadero a quien tenía por compañero del movimiento obrero y del «tercerismo»; y tampoco llegó a pensar que ese gesto le creara problemas policiales, hasta el punto de impedirle asistir a la reunión de Rotterdam. El resultado del incidente fue que la versión que tuvo el Comité Nacional de la reunión de Rotterdam resultó solo la de Besteiro, quien sostuvo que la presencia laborista aseguraba la vida de la Segunda Internacional, por lo que había que ir al Congreso de Ginebra y rechazar el ingreso en la IC, sosteniendo que tal cosa significaría el aislamiento del PSOE del socialismo occidental. Anguiano no pudo refutarlo ni dejar en evidencia el fracaso de asistencia de la reunión de Rotterdam. De lo que sí pudieron informar ambos fue del proyecto de los «reconstructores», que valoraron negativamente, aunque por razones diferentes. Anguiano porque lo consideró ocioso e insistió en que la única alternativa era la Tercera; y Besteiro porque dudó de que «los rusos» dieran su apoyo a las demandas de «autonomía

táctica». Aunque al año siguiente ese proyecto resultó clave en la decisión definitiva del PSOE, en aquel momento el movimiento de los «reconstructores» apenas incidió en el debate socialista. Poco antes de que Pravda publicara el anuncio sobre el Segundo Congreso de la IC, el Comité Nacional del PSOE decidió por segunda vez llevar la cuestión de las internacionales a un próximo congreso extraordinario del partido, que habría de celebrarse el 19 de junio[31].

Las cuatro semanas que transcurrieron desde la convocatoria hasta la celebración pusieron en evidencia que en el PSOE se estaba produciendo ya una ruptura. Para empezar, la mayoría de la Ejecutiva, encabezada por Besteiro y Largo Caballero, impuso un orden del día prolijo y capcioso, en el que se contemplaba la asistencia al Congreso de Ginebra pero no al de Moscú; y mantenerse en la Segunda, «hasta que la situación internacional socialista se defina mejor», asistiendo entretanto a todas las reuniones que postularan una sola internacional, lo que rompía el acuerdo del primer congreso extraordinario. A renglón seguido se planteaban las otras dos opciones –adherirse a los «reconstructores» o ingresar en la IC–, con la particularidad de que esta última posibilidad se presentaba dividida por la disyuntiva de hacerlo «incondicionalmente» o «con condiciones». El resto del orden del día eran puntos doctrinales sobre las cuestiones que el sector reformista consideraba de principio: libertad táctica y falta de obligatoriedad de los congresos de la IC, si se entraba en ella; y confirmación del gradualismo y la participación electoral e institucional, habida cuenta que prejuzgaban que la única política comunista era la del Buró de Ámsterdam y que los «terceristas» del PSOE la compartirían como lo hacía el PC Español[32]. Lamoneda y Núñez de Arenas protestaron en la reunión, sin éxito, y no tuvieron más salida que publicar en El Socialista las discrepancias respecto al orden del día, que consideraban parcialmente tendencioso. A lo largo de las siguientes semanas el diario del PSOE publicó artículos de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, así como de Fabra Ribas, Acevedo, Pérez Solís, Comaposada y, finalmente -el mismo día del congreso–, Pablo Iglesias. Fabra Ribas fue el único en defender la adhesión al movimiento de los «reconstructores» e Iglesias invocó, sin entrar en el fondo de la cuestión, una solución de unidad: ir a Ginebra y a la conferencia de los «reconstructores» para abogar en ambas reuniones en favor de una sola Internacional, y dirigirse al «Comité socialista de Moscú» para que hiciera por su parte todo lo posible porque hubiese una sola Internacional Socialista.

El congreso se reunió y Largo Caballero pretendió el primer día que este se suspendiera, al considerar que era poco representativo, por asistir a él solo

delegados de 12.491 afiliados, ni una cuarta parte de los 52.877 que registraba entonces la secretaría administrativa[33]. Como alternativa proponía pasar a referéndum interno de todo el partido el orden del día de la Comisión Ejecutiva. Ni su maniobra ni ese orden del día prosperaron. Núñez de Arenas dejó en evidencia a Largo Caballero al recordarle que, según los estatutos, los afiliados que tenían derecho a estar representados en el congreso eran los que estaban al corriente de su cotización; condición que solo cumplían 19.526 afiliados[34], por lo que los delegados presentes representaban el 64 por 100 de los afiliados con plenos derechos. Tras la intervención de Núñez de Arenas el congreso decidió no tomar en consideración la propuesta de Largo Caballero y acto seguido rechazó también el orden del día del Comité Ejecutivo, eligiendo una ponencia para que propusiera los temas de debate, integrada de forma mayoritaria por partidarios del ingreso en la IC (Anguiano, García Cortés, Mancebo y Vicente). La ponencia aprobó por mayoría «ingresar incondicionalmente en la Tercera Internacional». Nadie en ella defendió a la Segunda Internacional, por lo que no se llegaría ni siquiera a proponer la permanencia. El ambiente, claramente inclinado hacia la IC, llevó a que el voto de minoría de la ponencia –Acevedo, De los Ríos y Suárez– no rechazara el ingreso en la nueva internacional, sino que lo condicionara a tres bases: autonomía en la táctica de lucha, derecho a revisar en el congreso del partido la doctrina y los acuerdos de la Internacional, y representar en esta el propósito de unificación de las fuerzas socialistas defendido por la SFIO y el USPD, a cuyas reuniones al efecto habría de acudir el PSOE; además lamentó el excesivo peso del «partido ruso» en la IC.

La discusión fue a cara de perro, y las intervenciones más agrias provinieron de Besteiro; insistió en basar sus críticas en los textos del Buró de Ámsterdam, aun reconociendo que este ya había desaparecido, acusó a los comunistas de padecer «furores de mujeres histéricas» y pretendió desacreditar el principio de la «acción de masas» y defender el «régimen sindical» de la UGT con una frase que inspiraba vergüenza ajena: «Por aspirar a radicalismos opuestos a este funcionamiento han muerto Carl Liebknecht y Rosa Luxemburgo». Parecía que los «terceristas» se impondrían, hasta que Fabra Ribas marcó una salida: él estaba por los «reconstructores», pero dadas las circunstancias del debate se conformaba con la moción del ingreso condicionado en la IC; añadiendo, para ganar adeptos «terceristas» a su posición, que sería conveniente retirar la disposición final de la moción de minoría sobre la asistencia a otros congresos internacionales que tuvieran propósitos unificadores. La minoría de la ponencia aceptó la propuesta de Fabra Ribas y, en contrapartida, la mayoría sustituyó el término «ingreso incondicional» por «ingresar inmediatamente». Si Fabra Ribas

estuvo hábil, los partidarios del ingreso en la IC no. Su rectificación tuvo una deriva imprevista cuando la delegación asturiana anunció que, dado que el mandato de su Federación era el «ingreso incondicional» y este se había sustituido por el «inmediato», votaría teniendo en cuenta el debate realizado en el congreso; esto es, sumándose al ingreso condicionado.

Entre la maniobra de Fabra Ribas y la decisión de la delegación asturiana, lo que parecía una batalla ganada resultó perdida. Ganó el ingreso «condicionado», con 8.269 votos, frente a 5.016 del «inmediato» y 1.615 abstenciones que venían a representar a los partidarios de la Segunda Internacional. La moción vencedora era equívoca, se apoyaba en una suma de posiciones heterogéneas, y no tenía posibilidades de prosperar; como señaló López y López, eso sería imposible, porque era el organismo que admitía el que ponía condiciones y no al revés. El congreso acabó con la elección de una nueva ejecutiva, en la que Pablo Iglesias siguió por aclamación como presidente; Besteiro y Anguiano resultaron elegidos para la vicepresidencia y la secretaría general y el resto de miembros era una combinación de representantes de las tres posiciones manifestadas en el congreso: Lamoneda, López Baeza, Núñez Arenas, Ovejero, Largo Caballero, Fabra Ribas y Araquistain. El sentimiento de unidad prevaleció en esa elección que no daba mayoría absoluta a nadie en la dirección del partido; pero no lo compartieron ni Besteiro ni Largo Caballero, que se negaron a aceptar el encargo y fueron sustituidos por Fernando de los Ríos y García Quejido, con lo que, ahora sí, la mayoría quedó en manos de los partidarios de los «terceristas». De los Ríos y Anguiano fueron elegidos como delegados para asistir al próximo congreso de la IC, en su condición de portavoces de las dos mociones finalmente votadas. A pesar de las apariencias, ese resultado fue una derrota política de los partidarios de la IC. No habían conseguido una decisión clara, en el momento de mayor popularidad de la nueva internacional y de la revolución rusa entre su militancia; habían perdido la iniciativa y quedado a remolque de la más que improbable aceptación, por parte de la IC, de unas condiciones contrarias a su vocación de partido mundial. La posibilidad de rechazar las decisiones del congreso internacional había sido una de las principales críticas al funcionamiento de la Segunda Internacional, cuya falta de soberanía ejecutiva, precisamente, había dejado en papel mojado las resoluciones contra el revisionismo, el colonialismo y, finalmente, la guerra. Inmediatamente después sufrieron una segunda derrota, aún mayor.

El rechazo de Besteiro y Largo Caballero a seguir teniendo responsabilidades de dirección en el PSOE no significó que dieran un paso atrás, sino todo lo

contrario. Su beligerancia se trasladó al XIV congreso de la UGT, que empezó tan pronto como acabó el del partido; con una asistencia que representaba a unos 133.000 federados, el 61,6 por 100 de la afiliación del sindicato. A diferencia de lo ocurrido en el congreso del PSOE, Largo Caballero no aceptó en el sindicato ninguna transacción con los «terceristas». Defendió la permanencia en la Federación Sindical Internacional, la aceptación del nuevo orden internacional establecido en los tratados de Versalles, y el mantenimiento de la política que combinaba la lucha por mejoras materiales, con preferencia por la negociación, y la participación en las instituciones del Estado, incluidas las corporativas, como el Instituto de Reformas Sociales. Las intervenciones de Anguiano, Acevedo, Egocheaga y Núñez de Arenas no obtuvieron apenas eco. Su propuesta fue aprobada por 111.000 votos frente a 18.000 en contra y 3.900 abstenciones. Tras ello Largo Caballero se negó a ningún pacto de unidad para la nueva ejecutiva. Encabezada por Pablo Iglesias como presidente, Besteiro como vicepresidente y Largo Caballero como secretario general, no incluyó a ningún «tercerista»; García Quejido, que se presentó para la vicepresidencia, sólo obtuvo 7.000 votos frente a los 115.000 de Besteiro. La fuerza del «tercerismo» en la UGT quedó reducida a la mínima expresión y Largo Caballero y Besteiro convirtieron al sindicato en un ariete contra la IC.

El contexto evolucionó en contra de los partidarios de la IC. En primer lugar por el agotamiento de la movilización social por toda la geografía española: de manera particular en Cataluña, con la CNT sometida a los golpes sucesivos del lock out patronal y la represión sanguinaria de los gobernadores Maestre Laborde y Martínez Anido hasta octubre de 1922; y en Andalucía con la remisión de las movilizaciones campesinas y la derrota de la huelga minera en Riotinto de 1920, la única que la UGT, dirigida localmente por Egocheaga, mantuvo como acción de fuerza. A ello se sumó el retroceso de las expectativas revolucionarias en Europa, después de que el Ejército Rojo quedó frenado por los polacos ante Varsovia[35]; y que el atractivo de la revolución y la República de los Sóviets se fue difuminando desde que la intervención militar de Francia y el Reino Unido cesó, en el verano de 1920. La guerra en el espacio del antiguo imperio zarista pasó a ser una guerra civil desnuda, con componentes difíciles de asimilar en Occidente; entre ellos el aplastamiento de la rebelión campesina dirigida por el anarquista Makhnó en Ucrania, desde noviembre de 1920, la invasión de Georgia –gobernada por los mencheviques– por el Ejército Rojo en febrero de 1921 y la represión de la sublevación de Kronstadt, un mes más tarde.

En el otoño de 1920 la perspectiva de las elecciones generales del 19 de

diciembre desencadenó una dura confrontación por las candidaturas en el PSOE, que mostró el cambio de tendencia que se estaba produciendo en la militancia. La pugna se agudizaba por las expectativas que las elecciones municipales de febrero habían generado –al pasar el PSOE de 82 a 578 concejales en toda España–, la activa beligerancia del sector anti«tercerista» y, en última pero no insignificante instancia, el control de El Socialista por parte de Fabra Ribas, que mantenía su dirección y la utilizó en momentos clave para erosionar la posición comunista. La beligerancia tuvo su exponente en la exigencia que la dirección de la UGT hizo al apoyo electoral al PSOE, condicionándola a que este no presentara ningún candidato hostil a la Federación Sindical Internacional[36]. Y tuvo efecto. En la ASM, la votación de las candidaturas atribuyó los seis primeros puestos[37] al sector reformista: Iglesias, De los Ríos, Besteiro, Largo Caballero, Prieto y Llaneza; no entró ningún candidato «tercerista» y ni siquiera un «reconstructor» como Fabra Ribas. Una parte de la ejecutiva dimitió como protesta, aunque García Cortés y dos más siguieron en ella. En el resto de España solo media docena de «terceristas» del momento fueron elegidos como candidatos: Ovejero, Mariano García Cortés, Luis Mancebo, Ramón Lamoneda y Manuel Serra Moret, tercerista más que dudoso, por Mataró. Ninguno de estos últimos resultó elegido y tampoco se cumplieron las expectativas de crecimiento: por el contrario, el número de diputados electos se redujo de seis a cuatro. La tensión acumulada y la decepción se tradujo en una bronca en Madrid tras el primer recuento de voto, alentada por El Socialista el 20 de diciembre, que se hizo eco del rumor de que los «terceristas» habían boicoteado las elecciones, llegando incluso a acciones de «sabotaje» contra la candidatura socialista. La ASM se vio obligada a formar una comisión de encuesta y, ante esa situación, el 5 de enero dimitió el resto que quedaba del Comité de la agrupación, con García Cortés al frente[38]. El error de los «terceristas» madrileños fue mayúsculo y definitivo. La elección del nuevo Comité, el 16 de enero, constituyó una derrota absoluta de los terceristas, por 117 votos frente a los 204 que obtuvo el bloque alternativo presidido por Largo Caballero. En vísperas del último congreso extraordinario, el sector contrario al ingreso en la IC pasó a controlar la estratégica agrupación madrileña, desde la que desencadenaron su ofensiva final.

Decisión final. La fundación del Partido Comunista de España

El acuerdo del segundo congreso extraordinario del PSOE no pudo cumplirse a tiempo de que De los Ríos y Anguiano participasen en el segundo congreso de la IC. Los delegados socialistas evitaron hacer el viaje en clandestinidad, optaron por hacerlo legalmente y hasta septiembre no obtuvieron el visado soviético, por lo que llegaron a la capital soviética el 19 de octubre; fueron acogidos sin problemas, alojados en el Hotel Lux, y recibidos días después por el Comité Ejecutivo de la IC y por Lenin[39]. Merino Gracia, que sí lo hizo en clandestinidad, partió, empero, demasiado tarde, habida cuenta de las dificultades y lentitud del viaje, y cuando llegó a Moscú el 27 de agosto el congreso ya había finalizado; logró, no obstante, que el Comité Ejecutivo de la IC reconociera al PC Español como su sección en España. Solo Pestaña, enviado por la CNT, llegó a tiempo de participar y se integró en la ponencia sindical, en la que criticó el papel dirigente atribuido al partido. Luego asistió a la conferencia preparatoria del congreso constituyente de la Internacional Sindical Roja (ISR), por celebrar en 1921, y firmó su documento de convocatoria haciendo constar que lo hacía como afiliado a la CNT, pero no en su representación, ya que la decisión sobre la participación correspondía a la organización. De su estancia y su participación en ambas reuniones Pestaña sacó una conclusión negativa, que no pudo comunicar a la CNT porque a su regreso a Barcelona fue detenido por orden de Martínez Anido a pie de barco. Entre una cosa y otra, la dimensión definitiva de la constitución inicial del comunismo español seguía pendiente de la gestión de De los Ríos y Anguiano en Moscú.

El encuentro entre De los Ríos y Anguiano y el CE de la IC, con diversas reuniones a partir del 2 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, en las que participaron Zinoviev y Bujarin, fue franco. Los delegados socialistas manifestaron ser representantes de dos corrientes y pidieron aclaraciones sobre los 21 puntos, que ya conocían; en particular sobre la constitución de organismos clandestinos, en vistas al momento insurreccional, el centralismo democrático y la obligatoriedad de las decisiones de los congresos de la Internacional. De los Ríos expresó a Bujarin sus discrepancias sobre el concepto de la revolución mundial, mientras que Anguiano se sintió identificado con él. A la espera de conocer la respuesta del CE de la IC sobre las condiciones presentadas por el PSOE, se produjo también una entrevista con Lenin el 10 de diciembre, en la que no debatieron sobre la Internacional, sino sobre el Estado soviético; Lenin les habló de los problemas que había acumulado durante la guerra civil y la continuidad del régimen de dictadura, que aceptó que era excepcional, pero había de mantenerse por las grandes exigencias de la reconstrucción económica. Tres días después recibieron el rechazo de la IC a las condiciones y la invitación

a que aceptara los 21 puntos, como había hecho la mayoría del USPD en su congreso de octubre y haría la SFIO a finales de diciembre.

De los Ríos y Anguiano regresaron a Madrid el 28 de diciembre y presentaron sus dictámenes discrepantes a la Comisión Ejecutiva; como en otras ocasiones, se pasó la decisión al Comité Nacional y este, reunido el 15 de enero, convocó un tercer y definitivo congreso extraordinario, que ya no podría ser sino de ruptura. Al día siguiente la dirección de la ASM pasó a manos del sector contrario al ingreso en la IC y un mes más tarde se recibió la noticia de la conferencia de los «reconstructores», que había fundado el 27 de febrero una «Unión de partidos socialistas para la acción internacional» –más conocida como Internacional Dos y media–, con la participación del Partido Socialista Austriaco, el Suizo y las minorías de la SFIO y el USPD, que no habían aceptado la integración en la IC. La nueva ejecutiva de la ASM ató los cabos y consiguió que la agrupación aprobara el 2 de abril el ingreso en la plataforma de los «reconstructores», por 243 votos contra los 147 favorables al ingreso en la IC. El único consuelo para los «terceristas» fue que la Federación Socialista Asturiana aceptó los 21 puntos, esta vez sin equívocos; un apoyo que ahora habría de resultar insuficiente. En el tercer congreso extraordinario del PSOE, iniciado el 9 de abril, la votación dio el triunfo a los «reconstructores» por 8.808 votos contra 6.025 de los partidarios de la IC. Tras conocer el resultado los delegados partidarios de la IC –a excepción de los de Almansa y Carabanchel y de Manuel Cordero– abandonaron el congreso del PSOE y fundaron el Partido Comunista Obrero Español (PCOE). Por otra parte, a diferencia de lo que sucedió en el partido, el inmediato congreso de las Juventudes Socialistas se pronunció a favor de la IC por 3.197 votos a favor contra 350 votos por los «reconstructores»; constituyéndose en el acto como Juventudes Comunistas, por acuerdo de la inmensa mayoría de delegados, que representaban a 3.026 de los 3.500 afiliados. No obstante, esas cifras de votación en los dos congresos no han de tomarse como afiliación efectiva; esta se decidió en las reuniones de las secciones locales de las dos organizaciones desarrolladas a lo largo de la primavera. En noviembre de aquel año la IC estimó que el PCOE y sus juventudes sumaban unos 4.500 efectivos[40].

La constitución del PCOE abría la posibilidad de una mayor incidencia del comunismo en el movimiento obrero español, a través sobre todo de sus organizaciones en Asturias y Vizcaya. Perspectiva que se vio acompañada poco después por la decisión del Pleno de Regionales de la CNT, celebrado en clandestinidad en Barcelona el 28 de abril, de aprobar el ingreso del sindicato en

la ISR, aunque insistiendo en la plena autonomía de la Confederación. En él participaron Andrés Nin por el Comité Nacional, Joaquín Maurín por la regional de Cataluña[41], Hilario Arlandís por la de Levante, Jesús Ibáñez por la de Asturias –todos ellos ya se habían manifestado en favor de la Tercera– Parera, de Aragón, y Belloso, del norte; la delegación andaluza, que llegó a Barcelona una vez celebrado el Pleno, acató sus decisiones. La reunión no pudo contar con la presencia de cuadros principales encarcelados o deportados que, como Seguí, Buenacasa o Pestaña, se habrían opuesto a buen seguro a tal decisión. Sin embargo, en el seno de la CNT se mantenía todavía un ambiente favorable a la revolución rusa y los detalles de constitución de la IC y la ISR no fueron conocidos en el sindicato hasta que Pestaña fue puesto en libertad en abril de 1922. El Pleno de abril de 1921 tomó el acuerdo que consideró representativo del estado de opinión interno –imposible de consultar en esos momentos– y envió a Nin, Maurín, Arlandis, Ibáñez y el francés Gaston Leval, este por la Federación de Grupos Anarquistas, al congreso fundacional de la ISR, que había de tener lugar en julio de 1921. Una buena noticia, que se torcería dos años más tarde.

Lo inmediato, tras la constitución del PCOE, fue el proceso de unificación con el PC Español, al que los estatutos de la IC obligaban. No resultó fácil. En la primera reunión de las direcciones de ambos partidos, el 11 de mayo[42], la delegación del PC Español defendió que ellos representaban la política comunista revolucionaria, por lo que el partido unificado había de mantener su denominación, y el Comité Central y los Comités regionales habrían de estar integrados por dos tercios de miembros de su formación; además se había de excluir de entrada a los que consideraban «centristas» o «reformistas»: Anguiano, García Cortés, Pérez Solís, López y López y los asturianos Lázaro García y Acevedo. Era una lectura literal extrema de los 21 puntos y más que una unificación significaba un planteamiento de absorción. El PCOE respondió defendiendo que la proporcionalidad de los órganos de dirección se estableciera de acuerdo con la militancia respectiva y remitió la decisión sobre las exclusiones al congreso fundacional del partido unificado; entretanto, propuso avanzar con la fusión inmediata de los dos Comités Centrales hasta la celebración de ese congreso. El único acuerdo que se consiguió fue posponer la unificación para después del Tercer Congreso de la IC, convocado para el 12 de junio, con la previsión de resolverla en septiembre. Al congreso de Moscú ambas delegaciones acudieron por separado[43], manteniendo sus diferencias. Merino Gracia no logró del CE de la IC la absorción que pretendían y el Secretariado Latino de la IC, presidido por Humbert-Droz, estableció una unificación

acordada por las dos partes, para lo que enviaría un delegado a España; entretanto designó a César R. González, del PCOE, como representante de los comunistas españoles ante el CE de la IC.

Andrade salió decepcionado por esas decisiones y todavía más por el nuevo rumbo político impulsado en el Tercer Congreso. Tenía motivos. En el congreso Lenin puso a la internacional ante la dura realidad: el proceso revolucionario había de situarse en el tiempo largo –«será cuestión de años»–, por lo que había que superar el insurreccionalismo, que ampliaba la distancia entre el partido comunista y las clases trabajadoras; y también dejar atrás lo que calificó de empacho en la lucha con el «centrismo» y la confrontación con la socialdemocracia y conseguir el apoyo de la mayoría de los trabajadores[44]. Ese insurreccionalismo había tenido su última manifestación en el levantamiento frustrado del KPD en marzo de 1921, justificado con el argumento de que la misión histórica del comunismo era la de desarrollar constantemente una «ofensiva revolucionaria»; el argumento que en adelante sustentó la denominada «teoría de la ofensiva»: marchar siempre adelante y conseguir la unidad de las clases trabajadoras solo en torno al partido comunista. Contra ello Lenin y Trotsky subrayaron la necesidad de la conquista de la mayoría del proletariado. La rectificación se completó en el Primer Pleno Ampliado del CE de la IC, de febrero-marzo de 1922, con la aprobación de la consigna del «frente único»; no sin resistencias importantes: el PC Italiano, el PC Francés, y el PCE, por entonces ya unificado, votaron contra la propuesta de «frente único obrero». La disyuntiva entre «teoría de la ofensiva» y «frente único» y conquista de la mayoría, resuelta en la cúspide de la IC por el momento, se mantuvo, latente o activa, en la base de las secciones nacionales.

Humbert-Droz encargó la intermediación entre los dos partidos españoles al comunista italiano Antonio Graziadei, que no pudo llegar a Madrid, por las condiciones clandestinas del viaje desde Roma, hasta la noche del 4 de noviembre. Alineado con el ala moderada del PC Italiano, en posiciones diametralmente opuestas a las del PC Español, buscó el compromiso[45]. Logró que el PC Español renunciara a las exclusiones a cambio de asegurarle la mayoría en el Comité Central y en los comités territoriales provisionales hasta la realización del congreso de unificación que se celebraría en cuatro meses; y evitó el bloqueo del PCOE argumentándoles que, dada su mayor afiliación, podrían corregir la correlación en el congreso. Hasta entonces, el secretario general del Comité Central sería Millá; que también fue designado redactor en jefe del periódico del partido, La Antorcha, flanqueado por Núñez de Arenas y

Andrade. Finalmente, la denominación de la sección unificada pasaría a ser la de Partido Comunista de España (PCE), cortando toda sugestión de absorción de un partido por otro.

Graziadei no entró en ninguna cuestión de fondo y no resolvió todo el conflicto. El antiguo grupo dirigente del PC Español, liderado por Andrade y Portela, se dispuso a actuar como colectivo organizado dentro del nuevo Comité Central, para garantizar la hegemonía de sus posiciones; sin que les secundara Merino Gracia, quien, por el contrario, publicó en La Antorcha, el 2 de diciembre, un duro artículo autocrítico contra la política desarrollada por su partido hasta entonces, asumiendo la nueva línea de la IC. El enfrentamiento se agravó cuando el 4 de diciembre el Comité Central unificado acordó la participación en las elecciones municipales de febrero de 1922. Andrade, Ugarte, Pumarega y Chicharro votaron en contra, argumentado que el partido no estaba todavía en condiciones de presentarse y que había un rechazo mayoritario entre los obreros españoles a la participación electoral, lo cual era una exageración, sobre todo respecto a las elecciones locales. Y dieron un paso adelante en la ruptura interna, con la publicación el 1 de enero de 1922 de un manifiesto, «A los comunistas españoles», firmado por el grupo minoritario del Comité Central y la mayoría del Comité Central de las Juventudes Comunistas, encabezada por su secretario general, Juan Fernández Castillo; en él rechazaron la gestión y los acuerdos del Comité Central y anunciaron que se constituían en Grupo Comunista Español, para rectificar el rumbo tomado por el proceso de unificación[46]. Como era de esperar, esa publicación supuso la exclusión de los cuatro miembros del Comité Central y de los miembros de la dirección de las Juventudes firmantes, hasta que el congreso de unificación examinara su caso.

El congreso, celebrado entre el 14 y el 19 marzo de 1922 en Madrid, consumó la fusión; y también la derrota del grupo minoritario, sancionado con un año de incapacitación para tener cargos en el partido. La nueva dirección quedó encabezada por García Quejido, secretario general, y Lamoneda, «secretario del interior» –es decir, de organización–, más Virginia González, Manuel Núñez de Arenas, Exoristo Salmerón, Evaristo Gil, Ignacio Ojalvo y Antonio Malillos; César R. González fue elegido director de La Antorcha y Andrés Nin, que permanecía en Moscú desde que llegara en 1920[47], fue elegido para representar al PCE ante el CE de la IC. El sector procedente del PCOE había, efectivamente, invertido la correlación de fuerzas, ayudado por la torpeza de Andrade, Ugarte, Chicharro y Pumarega. Quizás de manera excesiva, por lo que el CEIC volvió a intervenir para gestionar la solución definitiva de la crisis

abierta en enero y envió a España al propio Humbert-Droz. Este llegó a Madrid en mayo, se reunió con las dos partes, evitó condenar al grupo disidente, que había cambiado su plataforma –prohibida por el CEIC– por otra con la denominación de Unión de Cultura Proletaria; les reconoció que sin tener razón política general sus argumentos sobre la no participación electoral no dejaban de tener alguna base en España, pero les instó a acatar la sanción y disolver su segunda plataforma, con el compromiso de que el PCE no prescindiría de ellos, como así fue. Andrade, Ugarte, Chicharro y Portela, lo hicieron y solo lo rechazaron Pumarega y Juan Fernández Castillo, que abandonaron la militancia. El ejecutivo de las Juventudes fue repuesto, aunque Tiburcio Pico pasó a ocupar la secretaría general vacante[48].

El PCE no tuvo tiempo para alegrarse. Aquella misma primavera se torcieron sus expectativas sindicales. Seguí, Pestaña y Buenacasa fueron puestos en libertad en la primavera de 1922 y sumaron sus fuerzas para que la Conferencia de Zaragoza de la CNT, el 11 de junio, revocara la integración en la ISR; acordó, en cambio, participar en el congreso fundacional de una internacional anarcosindicalista, que recuperó la histórica denominación de Asociación Internacional de Trabajadores. A los partidarios de la IC sólo les quedó la opción de mantenerse en la CNT como corriente minoritaria interna. El 24 de diciembre, los grupos sindicales comunistas de Cataluña, el País Valenciano, Asturias, Vizcaya y Burgos celebraron una conferencia en Bilbao, en la que se acordó constituir Comités Sindicalistas Revolucionarios dentro de la CNT, adherirlos a la ISR delegando en Nin su representación, y adoptar como portavoz el periódico La Batalla, fundado por Maurín días antes[49].

Meses más tarde, en noviembre, el XV congreso de la UGT descartó definitivamente toda relación con la IC y la ISR. Después de un sangriento altercado, del que resultó muerto por tiro de revólver el socialista González Portillo, el congreso expulsó a los comunistas que asistían como delegados –poco más de una quincena de un total de 120, entre ellos Perezagua, Pérez Solís, Núñez de Arenas y Virginia González; los dos últimos fueron detenidos en la misma sala por la policía–, así como a los sindicatos que representaban y que sumaban tan solo 15.000 federados de los 208.000 de toda la UGT. La UGT quedó desvinculada por completo del PCE hasta 1935; y durante diez años, este intentó, infructuosamente, encontrar la compensación en la CNT, cuyo control persiguió sin éxito. La selectiva represión que empezó a padecer el PCE por el gobierno de la monarquía, ya aquel año, remató la erosión de cuadros, militantes e incidencia social. La configuración del PCE como partido de masas se bloqueó

durante diez años.

FRUSTRACIÓN DEL PARTIDO DE MASAS

Primera actuación

A pesar de esos reveses, las fuerzas iniciales del PCE constituían un punto de partida para crecer y hacerlo en la perspectiva del comunismo de masas. Heredaban del PSOE unas ochenta agrupaciones repartidas por toda España, a excepción de Castilla la Vieja (hoy Castilla-León) y Extremadura; con una importante implantación en el País Vasco y Asturias; un núcleo en Madrid relevante en la dirección, aunque con el hándicap de su muy débil incidencia sindical; y organizaciones dispersas en Andalucía, Galicia, Cantabria, Valencia y Castilla la Nueva (Castilla La Mancha); su incidencia en la CNT catalana era también un campo de crecimiento, aunque más lento, al exigir la transformación de la militancia sindical en la política. El punto fuerte del partido eran las regiones del norte, donde estaba la mitad de sus afiliados de toda España y era su principal lugar de acción obrera. La Federación Comunista Asturiana, con un millar y medio de afiliados, había conseguido controlar la Casa del Pueblo de Oviedo; además se puso al frente del proceso de radicalización en el Sindicato Obrero Minero Asturiano de la UGT, manifestado en la serie de huelgas generales de la cuenca minera: de diciembre de 1920, mayo y diciembre de 1921 y enero de 1922; entre mayo y octubre de 1921 la dirección del SOMA recayó directamente en los comunistas. En el País Vasco, con un millar de efectivos, predominaron en Bilbao, así como en la cuenca minera de Somorrostro y en los sindicatos del metal, la construcción y artes gráficas de la capital vizcaína; en junio de 1921 el comunista José Bullejos, enviado por la UGT en 1920 a reforzar el aparato del Sindicato Minero, sustituyó al prietista Constantino Turiel; el SMV se adhirió además a la ISR. Turiel y Prieto reaccionaron meses después constituyendo el Sindicato Minero de La Arboleda; la correlación entre ellos era favorable al SMV, que, con 1.330 afiliados, casi triplicaban el medio millar de su rival. El PCE, además, controlaba la Casa del Pueblo tanto en Bilbao como en San Sebastián. La presencia comunista en el norte se completaba con el núcleo

de Santander, favorable a la IC en el congreso de 1921, uno de cuyos miembros, José Muñoz, fue elegido concejal en la capital cántabra en 1922[50]; así como con las agrupaciones de Vigo, Pontevedra y Santiago, en Galicia. La otra mitad del partido se distribuía entre Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía y el País Valenciano. En la capital con una agrupación que influyó mucho en el partido y muy poco en el movimiento obrero; su mayor activo era Severino Chacón, fundador de la Federación Nacional Tabacalera en 1918, afiliado al PCOE desde el primer momento, aunque la Federación fue hasta los años treinta un sindicato independiente. Contaba con media docena de agrupaciones dispersas en Andalucía: Puente Genil –que regresó al PSOE en 1922–, Villanueva de Córdoba, Cuevas del Becerro, Torredonjimeno, Almería, Sevilla; así como en el País Valenciano: Alicante, Crevillente, Novelda, Castalia y Elche, además de Valencia, cuyo núcleo principal procedía de las juventudes lideradas por Julián Gómez, Gorkín, y tenía su principal expectativa en la influencia de Hilario Arlandis en la CNT local.

No era un mal punto de partida, a condición de que se diera la orientación adecuada y un contexto, si no favorable, al menos no adverso. La primera se cumplió de manera deficiente. Para empezar, la función dirigente del ejecutivo quedó mermada por el hecho de que los primeros dirigentes del PCE lo fueron a tiempo parcial, sólo cuando habían acabado sus jornadas laborales[51]. Lo peor, empero, fue la confusión que generaron en la militancia las rectificaciones de la política de la IC; y sobre todo la prevalencia entre los comunistas españoles, en particular en el norte de España, de la «teoría de la ofensiva», de acuerdo con la cual solo importaban las luchas generales y la persistencia en la más absoluta confrontación con la socialdemocracia. Eso favoreció la propaganda anticomunista del PSOE y bloqueó la ejecución de la política de frente único. La condición del contexto, por su parte, fue hostil sin paliativos: involución política con represión gubernamental patronal, y crisis económica, particularmente en las áreas industriales, con desmovilización obrera.

En Asturias la influencia inicial en el SOMA se malogró en la primera mitad de 1922, cuando los comunistas asturianos se enquistaron en el uso recurrente de la huelga general de la cuenca para hacer frente a la rebaja de jornales. Ese comportamiento respondía al malestar general de los mineros y su nada infundada radicalización; pero el hecho es que el sindicato venía perdiendo fuerzas de manera incesante desde 1919 – bajó de 29.000 afiliados entonces a 20.000 a finales de 1920–, por la doble presión de la acumulación de luchas y la reducción de trabajo a consecuencia de la crisis. A los comunistas les faltó

flexibilidad sindical. Después de oscilaciones de la movilización, con huelgas generales puntuales entre diciembre de 1921 y enero de 1922, la patronal decidió lanzar un desafío a los sindicatos imponiendo unilateralmente una rebaja del 20 por 100 de los salarios. La respuesta del SOMA, impulsada por los comunistas, fue una nueva huelga general el 19 de mayo. Llaneza se opuso, pero mantuvo la dirección del comité minero, desde la que puso en cuestión la prosecución de la huelga; ante lo que comunistas y anarquistas constituyeron el 17 de junio un «frente único», presidido por Eduardo Castro, del PCE, que era un desafío a la dirección del SOMA. El endurecimiento del conflicto, en el que intervino el ejército, acompañó a la división obrera. El 25 de junio el SOMA expulsó a las 21 secciones integradas en el «frente único», y Llaneza quedó como interlocutor único de la patronal. La huelga acabó con una rebaja de salarios intermedia, arbitrada por el Ministerio de Trabajo, y con la derrota de los comunistas y anarquistas, que votaron, sin éxito, en favor de mantenerla. El agotamiento de los mineros se reflejó en la caída de la afiliación. En noviembre los sindicatos del «frente único» se constituyeron en Sindicato Único Minero, integrado en la CNT y bajo dirección comunista; su afiliación, 1.750 miembros, estaba muy lejos de la incidencia comunista un año atrás. El SOMA, aunque también perdió efectivos, siguió siendo de lejos el sindicato mayoritario, con 7.500 afiliados.

Con un escenario similar de recesión, paro, rebaja de salarios, y diferencias tácticas –que incluyó el apoyo socialista a las peticiones proteccionistas de la patronal–, la confrontación entre los sectores obreros fue aún más dura en Vizcaya. En diciembre de 1921, Bullejos no vio otra cosa que el momento de «dar el decisivo asalto al poder»[52]. El Sindicato Minero de Vizcaya invitó en enero de 1922 al Sindicato de La Arboleda a constituir un «frente único», que este rechazó. Las relaciones entre ambos sectores, deterioradas desde un enfrentamiento a tiros en Gallarta, en noviembre de 1921, llegaron a la ruptura absoluta cuando la patronal anunció la reducción de salarios. El Sindicato de La Arboleda inició negociaciones, en tanto que el de Vizcaya llamó a la huelga general, convocando un mitin en Gallarta el 9 de abril para empezarla. El mitin acabó mal; a la salida se produjo un nuevo enfrentamiento a tiros en la carretera de Gallarta, en el que resultaron muertos dos socialistas, herido muy grave José Bullejos y heridos con pronóstico diverso otros cinco trabajadores. No quedó claro quién empezó, aunque el lugar donde se produjo, la carretera que unía Bilbao con Gallarta, plaza fuerte de los comunistas, puede apuntar a una provocación contra estos. Sea como fuere, el episodio perjudicó a los comunistas, a los que la prensa hizo responsables. La huelga general fracasó, sólo llegó a declararse en Gallarta y se impuso, con apoyo socialista, la solución

del arbitraje gubernamental que reducía la cuantía de la rebaja salarial.

En el informe que Jules Humbert-Droz envió al CE de la IC, el 18 de julio de 1923, no dudó en considerar que una de las causas del retroceso del partido, que habían contribuido a su aislamiento y a limitar sus posibilidades de acción, había sido «el empleo por él de medios terroristas, en particular en la lucha con los reformistas», señalando los episodios de Vizcaya y del XV congreso de la UGT; que se hubiesen producido provocaciones no disminuía el grave error de caer en ellas y «hacer así el juego a nuestros adversarios»[53]. Las consecuencias del ejercicio de la violencia para dirimir las diferencias obreras –algo no exclusivo de los comunistas: los tiroteos se producen cuando las dos partes llevan armas y las usan– eran la punta del iceberg de las causas del retroceso; el cuerpo sumergido era una política errónea, la adhesión a una concepción mesiánica de la función de vanguardia y una táctica de choque frontal permanente, asociada a un déficit de dirección en el partido y a la proliferación de las divisiones internas.

El ejecutivo, encabezado por el veterano García Quejido, con una mayoría de miembros procedentes del PCOE, no fue capaz de imponer su autoridad. Las discrepancias internas se fueron acumulando. Las regionales del norte, sobre todo la vizcaína, criticaron a la dirección su apego a la antigua UGT y la subvaloración de la CNT. Sobre la participación electoral –planteada de nuevo por la celebración de elecciones generales el 29 de abril de 1923– el partido se dividió entre la posición del ejecutivo de participar con candidaturas propias, el abstencionismo propugnado por la Federación de Levante y la posición de los comunistas catalanes –bajo la influencia de Maurín, todavía fuera del partido– de formar parte de una coalición con el republicanismo de izquierdas. En esas condiciones, de retroceso y división, se reunió en Madrid el Segundo Congreso del PCE, entre el 8 y el 12 de julio de 1923; con la asistencia de Humbert-Droz, acompañado del francés Jacques Doriot, que habría de ser también uno de los enlaces del CE de la IC con su sección española. Humbert-Droz consiguió que se ratificara la línea de participación electoral sin alianzas, así como una mayor atención a la afiliación a la CNT; el frente único fue aceptado formalmente, aunque la realidad de la confrontación con los socialistas y con los anarquistas anuló las posibilidades de la consigna. Además Humbert-Droz impuso un nuevo Comité Central de concentración, con diez miembros del saliente y cinco de la tendencia de oposición. Lo abandonaron García Quejido, Núñez de Arenas y Virginia González, gravemente enferma, mientras que se mantuvieron José Baena, secretario internacional, y Lamoneda, secretario sindical; de la oposición de «izquierda» fue incorporado Luis Portela, como secretario «del interior», y

Andrade y Vicente Arroyo, secretario de la regional del Centro, como vocales. Finalmente, hubo unanimidad –según Portela– en ofrecer a Óscar Pérez Solís la secretaría general del partido; su crédito había crecido con su gestión al frente de la Federación Vasco-Navarra, haciendo olvidar su pasado en Valladolid. Pero Pérez Solís rehusó la oferta y en su lugar se eligió a César R. González, que en el congreso había cooperado con la inclinación conciliadora de Humbert-Droz. Después de tantos incidentes en los dos primeros años parecía haberse llegado a un arreglo; coincidiendo con una mejora también en los frentes de lucha.

El 9 de julio el Sindicato Minero de Vizcaya declaró una nueva huelga ante la negativa patronal a restablecer los salarios y la jornada de trabajo de 1922, toda vez que estaba mejorando la coyuntura. La huelga fue un éxito, incluso el Sindicato de La Arboleda acabó apoyándola, aunque no se integró en el Comité de huelga. A pesar de todo, la patronal aguantó sin ceder y la prolongación de la huelga, sin previsión de solución inmediata, llevó a los comunistas bilbaínos a llamar a una huelga general de veinticuatro horas en la ciudad, en apoyo a los mineros, el 23 de agosto. La UGT no la secundó, a pesar de lo cual en Bilbao pararon los tranvías y una parte de las fábricas y talleres. Pero el suceso más destacado del día fue el asalto de la guardia civil y la policía a la Casa del Pueblo, donde se habían reunido el Comité de huelga y los dirigentes sindicales para debatir si se había de prolongar el paro o dejarlo en la acción prevista de un día; tras una débil resistencia, la fuerza pública entró a tiros en el edificio, detuvo a una setentena y fusiló contra la pared a un grupo, causando dos muertes; Pérez Solís, que estaba entre los fusilados, resultó gravemente herido, aunque salvó la vida.

A pesar de la detención del Comité de huelga, incluido Bullejos, el paro minero prosiguió bajo el liderazgo comunista, con Perezagua y Leandro Carro reforzados por Andrade, enviado por la dirección del PCE; por más que los socialistas empezaron a proponer a comienzos de septiembre la vuelta al trabajo. Su desenlace era imprevisible hasta que el 13 de septiembre el golpe del general Primo de Rivera cambió las coordenadas del conflicto. El 15 de septiembre se declaró el estado de guerra en Vizcaya y el ejército pasó a patrullar las calles de Bilbao, al tiempo que la policía inició una amplia redada contra los comunistas, deteniendo entre otros a Perezagua, el 24, y Leandro Carro, el 29. La situación de fuerza no dejó otro remedio que la vuelta al trabajo, que fue finalmente acordada por el propio Sindicato Minero de Vizcaya el 28 de septiembre.

La proclamación de la dictadura dio también la puntilla a otro conflicto minero

liderado por los comunistas, el de las minas de hierro de Serón y Bacares, en la Sierra de los Filabres de Almería. A comienzos de 1923, el Sindicato Minero, bajo la dirección de Justiniano Bravo –cuadro comunista de origen albaceteño enviado a Almería para organizar el partido–, emprendió una campaña contra la falta de asistencia médica[54], el incumplimiento patronal de la ley de accidentes de trabajo y la persistencia de jornales ínfimos. El despido de tres mineros y el incumplimiento patronal del pacto suscrito a instancias del gobierno civil para su readmisión y la atención de las reivindicaciones de los mineros, desembocaron a mediados de mayo en la huelga de todas las minas. El paro se prolongó durante meses, con huelga general de solidaridad en la ciudad de Almería el 24 de junio incluida; y llegó a su nivel máximo de tensión el 30 de agosto, cuando la Guardia Civil disparó contra los huelguistas que bloqueaban la formación de un tren de carga para reclutar a esquiroles, matando a uno de aquellos e hiriendo a varios. El golpe de Primo de Rivera acabó también con la huelga, que consolidó una organización comunista de un par de centenares de afiliados en Almería y la Sierra de Filabres.

Primera clandestinidad

El régimen primorriverista truncó las expectativas del PCE, centradas en el liderazgo de un sindicalismo combativo, que había encontrado su mejor audiencia en la minería. Primo de Rivera cortocircuitó la radicalización de los conflictos. El 2 de octubre el dictador pactó con Manuel Llaneza un acuerdo de protección gubernamental a la minería y a las mejoras conseguidas por el SOMA, a cambio de que este mantuviera su comportamiento moderado; ratificado por las ejecutivas del PSOE y la UGT circunscribiéndolo a la minería, fue en la práctica la pauta generalizada en las relaciones entre los socialistas y el régimen primorriverista, hasta que la entente entró en crisis a partir de 1927. No descartó de entrada el nuevo régimen llevar a los comunistas a algún acuerdo semejante; el gobernador de Vizcaya propuso a Pérez Solís y a Bullejos la reapertura de la Casa del Pueblo y la autorización de sus sindicatos a cambio de que renunciaran a la política de movilización[55], pero aquellos no aceptaron, lo que frustró la neutralización por pasiva del PCE.

El régimen primorriverista pasó a combinar, contra el PCE, una relativa

tolerancia respecto a La Antorcha –que siguió publicándose hasta finales de 1927– con una represión discrecional y recurrente que acabó desencuadernando la joven organización. La represión no era nueva. Se había sufrido ya parcialmente en 1922, a cuenta de la crítica comunista a la guerra de Marruecos, al Ejército y a la Corona, con procedimientos de jurisdicción militar que seguían en curso contra Lamoneda o el comité ejecutivo de las Juventudes Comunistas, detenido en agosto de 1922 por un manifiesto antimilitarista. Sin embargo, ahora se transformó en una persecución preventiva y generalizada. El 1 de diciembre, so pretexto de un inventado complot insurreccional de comunistas españoles y portugueses, se desencadenó una redada contra el partido en diferentes lugares de España y se suspendieron las actividades de los sindicatos controlados por los comunistas. Las detenciones se contaron por decenas y la nota oficial señaló a Madrid, San Sebastián, diversas localidades de Asturias y Vizcaya –incluidas Oviedo, Mieres, Bilbao, Gallarta, o Eibar, entre otras–, Sevilla, Montilla y Aguilar de la Frontera en Córdoba, Villanueva de la Reina en Jaén y «otras poblaciones». Fue un golpe general con un impacto psicológico y organizativo más que importante. Entre los detenidos estaban César R. González, Lamoneda, Andrade, José Barón, del ejecutivo del PCE, José Rodríguez Vega, del de las Juventudes, los asturianos Eduardo Castro, Lázaro García y José Rodríguez, el sevillano Manuel Hurtado, o Roberto Fresno de Vizcaya; una suma de caídas de cuadros nacionales y regionales que quebró la columna vertebral de la organización. A ello se añadió poco después el ingreso en prisión de Tiburcio Pico y José Bullejos, para cumplir sentencias por delitos de prensa. Oscar Pérez Solís se salvó, al estar convaleciente de las heridas padecidas en el asalto a la Casa del Pueblo de Bilbao. Portela huyó a Francia antes de ser detenido, donde se encontraban ya también José López y López, Manuel Núñez de Arenas y Julián Gómez, Gorkín, huidos anteriormente para evitar el cumplimiento de condenas. En los primeros meses de 1924 siguieron produciéndose detenciones de cuadros comunistas conocidos, cuando estos se manifestaban políticamente en público; en abril le tocó a Merino Gracia[56], instalado después del congreso de fusión en Barcelona. Los locales del partido fueron clausurados; los comunistas fueron desalojados de la Casa del Pueblo de Bilbao, que fue judicialmente entregada a las organizaciones socialistas. Para sortear el requisito del registro de sociedades y de autorización previa de actos, las agrupaciones comunistas formaron sociedades deportivas, habitualmente de fútbol, para seguir celebrando las reuniones de sus militantes. De ese primer golpe al PCE le salvó meses después el decreto de amnistía del 4 de julio, promulgado para encubrir la puesta en libertad del general Berenguer, condenado por los hechos de Annual. La inmensa mayoría de los presos comunistas recuperaron su libertad. La única

buena noticia aquel año fue la integración en el PCE de Maurín y sus principales colaboradores en Cataluña –entre los que destacaban Pere Bonet, Víctor Colomer y Daniel Rebull, alias David Rey–, con lo que se formó de manera definitiva la Federación Comunista Catalano-Balear.

Las detenciones de diciembre-enero llevaron a la dirección del PCE a extremar un comportamiento que había sido el habitual en la socialdemocracia en momentos de adversidad: priorizar la preservación de la organización frente al impulso de acciones que podrían erosionar todavía más las propias fuerzas. No era una decisión errónea, sin embargó chocó con el nuevo giro que se impuso en la dirección internacional tras la muerte de Lenin, en el contexto de la confrontación en el seno del PCR-b. Para cortocircuitar el apoyo del ala más radical del movimiento comunista a Trotsky, Zinoviev –aliado entonces con Bujarin y Stalin– maniobró asumiendo las posiciones de aquella. En la reunión del CE de la IC, de enero de 1924, destinada a examinar el fiasco de un nuevo intento revolucionario en Alemania en octubre, Zinoviev afirmó que el fracaso se debía al comportamiento de la socialdemocracia, que no había secundado la insurrección; e introdujo la noción de que esta se había convertido en una fracción del fascismo, por lo que el «frente único» no podía hacerse con su dirección, sino solo «por la base» y en torno al partido comunista. Añadió que el periodo de estabilización capitalista se empezaba a agotar; para él la formación del gobierno laborista encabezado por Ramsay Mac Donald en el Reino Unido, aquel mismo mes, era la prueba del nuevo ascenso de la movilización de masas y a Mac Donald le tocaría ser el Kerensky británico. Había que lanzarse de nuevo al asalto de la fortaleza burguesa y la «teoría de la ofensiva» volvió por la puerta grande a la política comunista. Ese nuevo giro se consagró en el V.o Congreso de la Internacional, entre el 17 de junio y el 8 de julio de 1924; además, para culminar el control de la IC ante las derivas del debate interno en el PCR-b, añadió un programa general de «bolchevización» interna de las secciones nacionales, reforzando los mecanismos de centralización en perjuicio de los de debate, instando a pasar de la organización territorial a la de células en los lugares de trabajo y a la proletarización de las direcciones. La «bolchevización», concebida en términos administrativos, abrió el camino para la exclusión de los disidentes.

Tras el V.o Congreso, el CE de la IC presionó a la dirección del PCE, la criticó por no tenerle informado y la acusó de adoptar una política de pasividad, en particular ante la guerra de Marruecos, del Rif, reactivada con la intervención francesa a mediados de 1924. El ejecutivo español protestó el 20 de octubre, a

través de Baena, considerando injustas las acusaciones y añadiendo que «por atenernos a la letra de las resoluciones de la Internacional, el Partido y la Federación de las Juventudes han sido prácticamente deshechos varias veces»[57]. El conflicto en ciernes acabó en una reunión del Pleno ampliado del Comité Central del PCE, en noviembre de 1924, en el que, ante el aluvión de críticas, la dirección elegida en el Segundo Congreso dimitió y fue sustituida por una «comisión provisional» integrada por Pérez Solís; Maurín, por la Federación Catalana; Martín Zalacaín (González Canet) por la de Levante; Martín Sastre, por Vizcaya; y Roberto Fresno por las Juventudes. La voz cantante de la crítica la llevó Maurín, quien posteriormente se atribuyó la condición de secretario general; no está claro que fuera exactamente ese su título, aunque sí que asumió de hecho la responsabilidad principal en el nuevo organismo de dirección, aceptado por el CE de la IC el 19 de enero de 1925. La voluntad de activar la política comunista no pudo cumplirse. A la semana siguiente del Pleno, la detención fortuita de González Canet y Martín Sastre, en Madrid, dio lugar a una nueva caída general que involucró también a los miembros del Comité Central dimitido. Maurín fue detenido en Barcelona, el 12 de enero de 1925. Pérez Solís, que escapó a París tras las primeras detenciones, regresó a España a comienzos de febrero, para encabezar en Barcelona una nueva dirección provisional; su empresa duró semanas: el 13 de febrero fue detenido también, junto con Roberto Fresno[58]. La situación era de desastre total: el partido descabezado, perdiendo militantes, y divididos y desorientados los que quedaban.

Iniciativas infructuosas

Ante la acefalia en que había quedado la sección española, una comisión especial del CE de la IC aprobó el 13 de abril la propuesta de Pérez Solís, Maurín y Arlandis –hecha desde su prisión en Barcelona– de nombrar como nuevo secretario general a José Bullejos, que se encontraba en Moscú como delegado del PCE desde octubre de 1924. Bullejos contaba con el apoyo de todos los sectores del interior y del grupo de exiliados en París, entre ellos Gabriel León Trilla, Luis Portela y Julián Gorkín; y se le dieron plenos poderes para organizar un nuevo aparato dirigente e impulsar la adecuación del partido al nuevo periodo «prerrevolucionario» y a la «bolchevización». Tras recuperar un primer contacto con el interior, se celebró en mayo de 1925 –en Ivry, municipio

cercano a París– una reducida conferencia con delegados de Vizcaya, Asturias, Levante, Galicia, Cataluña y el nuevo responsable de las Juventudes, Agapito García Atadell; en ella se aprobó el nuevo Comité Ejecutivo con Bullejos como secretario general, Portela en la organización, Trilla de agitprop, Andrade, director de La Antorcha y dos vocales más de las federaciones de Asturias y Vizcaya. La aplicación de la nueva línea de la IC se materializó en dos iniciativas sucesivas que no llevaron a ninguna parte: la participación en el proyecto insurreccional de Francesc Macià y el primer intento de control general de la CNT. Entre ambas habría de llevarse a cabo la primera depuración general contra los residuos «reformistas» y la permanente disidencia «izquierdista», a la que se achacó el agravante de su conexión, más supuesta que real, con Trotsky.

Macià había concebido en Francia una delirante propuesta insurreccional con la participación de su grupo, Estat Català, la corriente Aberri del nacionalismo vasco y la CNT (en realidad el Comité Nacional del sindicato de la época, instalado en Gijón, y representado en Francia por Rafael Vidiella). Su objetivo era derribar la monarquía y conseguir en ese proceso la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco. A finales del verano de 1925, el PCE se sumó a la conspiración y se formó un Comité Revolucionario en París, que estuvo representado por Bullejos y González Canet; el grupo de París conectó con un reducido núcleo de militares españoles, federalistas (los capitanes Fermín Galán y Juan Perea y el teniente Jesús Rubio Villanueva), constituido a su vez en Comité Militar; para enlazar con los militares y reorganizar al partido se envió a Portela al interior. La gran baza del PCE era la financiación que la IC pudiera dar al proyecto, por lo que Bullejos, Macià y Josep Carner-Ribalta marcharon a Moscú, donde, junto con Nin, se reunieron a mediados de noviembre en diversas ocasiones con Zinoviev y Bujarin[59]; estos últimos frenaron la impaciencia insurreccional de Macià y condicionaron el apoyo económico al trabajo previo de agitprop que los españoles habrían de realizar. El único resultado fue un acuerdo genérico para luchar por la «abolición» de la dictadura y la monarquía, instaurar una república federativa popular, reconocer el derecho a la independencia de Cataluña y el País Vasco y la república del Rif, la retirada de las tropas españolas de Marruecos y la amnistía general para los presos políticos y sociales.

El grupo de militares ratificó el acuerdo en enero de 1926[60], aunque con un tono más bajo, limitando su compromiso a «la resolución inmediata del problema referente a las distintas nacionalidades que integran España (Catalunya, Basconia, Galicia, etc…)», lo que sonaba más a federalismo que a

separatismo y a «preparar el abandono de Marruecos», introduciendo un factor de temporalización en la presencia en el norte de África. Toda la conspiración se quedó en el papel. El Comité Nacional de la CNT no ratificó el acuerdo, se limitó a apoyar la insurrección cuando se produjera, pero rechazó iniciarla. La IC nunca proporcionó las 400.000 pesetas que pedían los militares para su organización del golpe. Y, finalmente, el PCE, que dudaba de aquel golpe insurreccional, rompió con el Comité Revolucionario de París en mayo de 1926. El episodio tuvo, empero, una deriva en el discurso político del comunismo español, que incorporó la versión esquematizada de la defensa leninista del derecho a la autodeterminación hasta la separación[61]; por más que nunca emprendiera acción alguna en tal sentido y se limitara a esgrimir tal derecho como un argumento táctico para la formación de un frente único revolucionario con los independentistas[62].

La segunda iniciativa tampoco produjo resultados efectivos. La nueva dirección del PCE recuperó la idea de la unidad sindical defendida por los comunistas entre 1920 y 1922; pero, bajo los criterios de la política del «frente único por la base», quiso materializarla con la convocatoria unilateral de una Conferencia de Unidad Sindical que no tuvo ningún eco y que finalmente fue suspendida de manera indefinida en agosto de 1926. La alternativa pasó a ser controlar directamente uno de los dos polos del sindicalismo español de clase. En febrero de 1927 Bullejos escribió a la ISR: «Disuelta la Confederación, creen nuestros camaradas que el descrédito de los anarquistas hace posible a nuestro partido reorganizar la CNT»[63]. Reconstruir desde el PCE la CNT y crecer en el movimiento obrero a partir de esa CNT hegemonizada por los comunistas era un objetivo ambicioso, con precedentes parciales: los sindicatos únicos de la minería en el norte del país; la adhesión al comunismo de miembros de la CNT en Cataluña y Valencia; y más recientemente las relaciones entre la organización sevillana del PCE y la de la CNT, que a finales de 1924 habían constituido un Comité de enlace entre ambas[64] . Los sindicalistas revolucionarios de la CNT –entre los que destacaban entonces Manuel Roldán, Helios Gómez, Manuel Adame, los hermanos Mije, Manuel Delicado, José Díaz y Saturnino Barneto– se identificaban con la ISR y cotizaban para el Socorro Rojo Internacional. Buena parte de ellos fueron ingresando en el PCE; y entre los que lo hicieron primero estuvo Manuel Adame, quien, cuando a comienzos de 1927 fue detenido el Comité Regional de Andalucía, propuso encomendar a José Díaz la nueva dirección y la reorganización del partido en Andalucía. Díaz, que todavía no había ingresado en el PCE, lo hizo todo al mismo tiempo y aceptó la responsabilidad que se le daba. Si en Andalucía la militancia cenetista

reconstruía el partido, ¿por qué no se había de seguir el camino inverso en toda España? Esa línea sindical, que se mantuvo en los siguientes cinco años, aisló al PCE en nombre de la inmediatez de una revolución en la que todo el protagonismo correspondía al partido, como exclusivo representante político del proletariado; en junio de 1930 se coronó con la constitución en Sevilla de un autoproclamado «Comité Nacional de Reconstrucción de la CNT», por imposición de Jacques Duclos, delegado en España entonces del CE de la IC, constituido exclusivamente por comunistas, con Adame al frente. Resultó un completo fiasco. La CNT estaba reorganizándose desde que el gobierno Berenguer la había autorizado de nuevo en abril y ni siquiera buena parte de los sindicatos comunistas, para empezar los de Asturias y Vizcaya, compartieron la idea del comité propio, que temían que fuera visto como una maniobra escisionista en el campo sindical. Cuando se reunió en Sevilla, del 3 al 5 de abril de 1931, la Conferencia del Comité de Reconstrucción Nacional de la CNT, quedó claro que su incidencia se reducía a Andalucía[65] e incluso en esa región era minoritaria. En el verano siguiente, el Comité de Reconstrucción de la CNT se trasladó a Barcelona para intentar ampliar la influencia, pero ni así consiguió prosperar.

La reactivación emprendida en 1925 se completó con la elaboración de una concepción específica de la «revolución española», en la que el protagonismo principal corrió a cargo de los organismos de dirección de la IC, el Comité Ejecutivo y sus plenos, así como los organismos de supervisión y dirección intermedios, el Secretariado Latino y el Romano[66]. Las resoluciones del Secretariado de la IC de enero de 1927 y mayo de 1928[67], y los escritos del delegado de la Internacional M. Garlandi –nombre de guerra del comunista italiano Ruggero Grieco[68]– calificaron a España como un Estado capitalista, en el que predominaba el capital financiero, con supervivencias feudales en el campo, consecuencia de la posición en el seno de las clases dominantes de los propietarios terratenientes y garantizadas por la influencia de la Iglesia católica. Esas supervivencias, determinantes, por cuanto la economía española era todavía mayoritariamente agraria, impedían el desarrollo pleno de la economía y, en última instancia, el despliegue del capitalismo; las burguesías industriales, en particular las de Cataluña y el País Vasco, formaban parte de las clases dominantes, pero, pesar de su crecimiento cuantitativo no conseguían hegemonizarlas ni culminar el triunfo pleno del capitalismo como habían hecho las «revoluciones burguesas» en Europa. De todo ello se deducía que el momento histórico de la revolución española era el de la conclusión de la «revolución democrática-burguesa» –las tareas históricas de reforma política y

reforma social– por parte del proletariado con el apoyo del campesinado, como etapa histórica previa, insoslayable para el avance hacia la revolución socialista. Esa simbiosis entre la Segunda Internacional y la simplificación de la doctrina elaborada por Lenin entre 1905 y 1917 se mantuvo hasta finales de los años sesenta, con modificaciones en el protagonismo de los agentes sociales y políticos; tenía una virtud, a pesar de su deficiencia teórica: daba respuesta a la disfunción que significaba proclamar que se estaba en un momento prerrevolucionario y constatar que no había en Europa, y menos en España, ningún atisbo de revolución socialista.

Ruptura interna

La aplicación de la línea del V.o Congreso de la IC tenía otra dimensión, que iba a desarrollarse so pretexto de la «bolchevización», la depuración organizativa del disidente. Trilla la empezó en noviembre de 1925 con la expulsión de Eduardo Castro en Asturias, con el que se solidarizaron otros dos fundadores del partido, Matías Suárez y Loredo Aparicio. En diciembre Portela fue destituido, acusado de no haber cumplido las instrucciones que se le habían dado en sus relaciones con los militares. En marzo de 1926 se expulsó a César R. González, Torralva Beci, José Baena y los miembros «reformistas» de la antigua dirección, y durante el año se multiplicaron las exclusiones de cuadros dirigentes en Asturias y Andalucía, bastantes de los cuales se reintegraron al PSOE y a la UGT. Después de la expulsión de dirigentes venía la de los militantes afines, o su abandono. Los 5.000 militantes que el PCE tenía a finales de 1923 se fueron reduciendo a un escaso millar a mediados de 1927, de los que casi la mitad se encontraban en Vizcaya. La sangría obligó en enero de 1927 a intervenir al CE de la IC; bajo su orientación la comisión española, presidida por Togliatti, acordó detener la depuración, y readmitir a todos los que aceptaran explícitamente la línea de la IC y la disciplina interna. Llegó tarde, pues muchos de los expulsados pusieron fin a su militancia comunista; y tampoco Trilla se esforzó en recuperar a quienes había expulsado.

El exhorto de Togliatti se debió a un interludio en la deriva de la política de la IC impulsada por Zinoviev. Después de que este rompiera con Stalin y se sumara a la oposición, fue destituido del Comité Central del PC(b) de la URSS en julio de

1926[69] y perdió con ello su presencia en el CE de la IC y la Presidencia de la Internacional. La máxima función dirigente en esta fue asumida por Bujarin, como principal representante del partido ruso en el CEIC, con el concurso de Manuilski; en el VI.o Congreso de la IC, en julio de 1928, fue elegido presidente de la IC, de manera formal. Ese cambio significó un freno temporal a las depuraciones internas y la reconsideración del desarrollo de las aplicaciones más sectarias de los acuerdos de 1924. En ese contexto, la resolución sobre la cuestión española del CE de la IC de enero de 1927 no sólo frenó la «bolchevización» depurativa, sino que Togliatti propuso como fórmula política concreta para la línea inmediata del PCE la reivindicación de una república popular y federal, sobre la base de la representación de trabajadores y campesinos; aunque el texto definitivo sufrió un recorte, dejando la base social de ese régimen de transición en «la representación de la clase trabajadora». La fórmula se correspondía con el concepto de «revolución popular» que estaban empezando a desarrollar los comunistas italianos y la reintroducción del federalismo superaba la desnudez política de la mera invocación propagandística del derecho de autodeterminación.

El interludio fue breve. Bujarin fue derrotado por Stalin a comienzos de 1929 y acabaría asimismo desplazado de la Presidencia de la IC, que pasó a ser ejercida en funciones por Manuilski, el representante de Stalin en el CE de la IC desde 1926. El X Pleno Ampliado del CE de la IC, en julio de 1929, desautorizó como «oportunismo de derecha» la posición de los italianos sobre la revolución popular y la amplia alianza social que había de sustentarla; además, consagró la tesis del «socialfascismo», al calor de la sangrienta represión de la manifestación comunista del 1.o de mayo en Berlín por parte del gobierno socialdemócrata del Land de Prusia. El nuevo giro repercutió en el PCE, que entre su Tercer Congreso, reunido en París en agosto de 1929, y la denominada «Conferencia de Pamplona», celebrada en Bilbao en marzo de 1930, ratificó la predicción de una inmediata ruptura revolucionaria –«democrático-burguesa», dirigida por el proletariado– como salida a la crisis de la dictadura de Primo de Rivera. Abandonó el objetivo de la república popular y federal, lo sustituyó por la consigna de la «dictadura democrática del proletariado y el campesinado» en términos abstractos y vacíos de contenido; y rechazó la propuesta de la Federación Comunista Catalano-Balear de propugnar una república federal democrática como alternativa a la dictadura, así como cualquier alianza con el movimiento republicano. En definitiva, ante la confusión provocada por las diferentes lecturas y relecturas de las consignas elaboradas por la IC, la invocación cada vez más recurrida fue la de los «sóviets». Se impuso el

aislacionismo más absoluto frente a todas las organizaciones obreras y políticas de izquierda; se denunció al movimiento republicano como un intento de manipular para fines políticos burgueses las luchas obreras, intensas en el otoño de 1930; y se condenó por esa razón la sublevación de Galán y García Hernández en Jaca del 12 de diciembre de 1930.

En 1930 el PCE tocaba fondo. En el momento del Tercer Congreso se había reducido a 800 militantes, con organización real solo en Vizcaya –216–, Andalucía –165–, Cataluña –145– Asturias –140– y Castilla –80, incluida la agrupación de Madrid–; toda la dirección estaba en la cárcel, menos Arroyo, que no mostró gran capacidad en la gestión de la asamblea comunista. La dirección encabezada por Bullejos estaba enfrentada con Maurín desde que en 1927 fuese puesto en libertad[70], en un conflicto en el que se mezclaron diferencias políticas y rivalidades personales por el liderazgo del comunismo español. Tras su libertad, Maurín marchó a París y se organizó en el grupo comunista español, pero siguió dirigiendo a los comunistas catalanes. Por otra parte, sus relaciones con comunistas franceses disidentes (Souvarine, Rosmer, entre otros) y con Nin –cuya correspondencia le mantenía al tanto de los conflictos internos en la URSS– propiciaron que fuese elaborando una posición política propia, en sintonía con lo apuntado durante el interregno de Bujarin al frente de la IC. La dirección del PCE gestionó con torpeza el inicio de la discrepancia, negándole a Maurín la participación en el Tercer Congreso del partido; y cuando este regresó a Barcelona, en junio de 1930, le conminó a hacer una declaración pública de retractación, a lo que se negó en redondo, por lo que fue expulsado del PCE. La Federación Comunista Catalano-Balear se solidarizó con su líder y fue asimismo expulsada; en agosto se expulsó a la Agrupación Comunista de Madrid, en la que Portela había vuelto a sumir el liderazgo. Ambas organizaciones llamaron en septiembre de 1930 a desconocer a la «falsa dirección» del partido y a celebrar un «congreso de unificación de todas las fuerzas comunistas de España», e intentaron obtener el apoyo del CE de la IC. Durante un tiempo Maurín mantuvo relación con los delegados de la IC, pero no consiguió que revisaran el acuerdo de la dirección del PCE. No tenía ya la confianza de la dirección de la Internacional, y su denuncia sobre la usurpación de la dirección no era cierta. Bullejos y Trilla fueron muy poco hábiles, pero no eran dirigentes ilegítimos, ni desde la perspectiva de la dirección de la IC ni desde la de la mayoría de la militancia.

La ruptura con la Federación Comunista Catalano-Balear supuso la primera escisión en el movimiento comunista español. Ante las elecciones del 12 de abril

de 1931, el PCE se presentó en solitario, contra todos, y con sus fuerzas tan minimizadas que ni siquiera en Sevilla pudo obtener un resultado satisfactorio: entre 800 y 1.000 votos en la ciudad en que habían controlado hasta entonces la movilización obrera; en Madrid un par de centenares, en Barcelona apenas cien; algún concejal disperso en el norte y en Andalucía. La Federación Comunista Catalano-Balear se coaligó con el Partit Comunista Català[71], constituido de manera independiente de la Internacional Comunista, para formar la plataforma del Bloc Obrer i Camperol (BOC)[72]. La presentación de esa misma candidatura en las elecciones a Cortes Constituyentes, en junio de 1931, rompió definitivamente las relaciones entre Maurín y Humbert-Droz y significó la ratificación de su expulsión y sus seguidores por el CEIC, publicada en Moscú el 3 de julio. El PCE se quedó con una organización minúscula en Cataluña hasta 1933, cuando empezaría a crecer, aunque muy lentamente y sin ningún dirigente de relieve ni en el espectro político catalán ni en el movimiento obrero.

LA ECLOSIÓN

Contra la «república burguesa»

En vísperas de la proclamación de la Segunda República, en el trámite final de la quiebra de la monarquía, el Comité Ejecutivo del PCE tomó dos medidas organizativas: el traslado definitivo de la sede de la dirección del partido a Madrid; y el cambio del portavoz que había sustituido en Barcelona a La Antorcha, Heraldo Obrero, por Mundo Obrero que había empezado hacía poco a publicarse, en agosto de 1930, en Madrid, el cual y a partir de primeros de marzo de 1931 fue convertido en «órgano oficial del Partido Comunista de España»[73]. Lo hizo en contra de la delegación de la IC (Humbert-Droz y Rabaté), que consideraba un error abandonar la ciudad obrera más importante, sin por otra parte modificar en absoluto la política estéril que se venía desarrollando.
Los comunistas no entraron con buen pie en el régimen republicano proclamado el 14 de abril. Aquel día sus muy minoritarias manifestaciones en la calle en contra de la «república burguesa» les ganaron los abucheos o la indiferencia de la gran mayoría del pueblo, que celebraba su proclamación. No obstante, la etapa

constituyente que se abrió y el nuevo régimen de libertades favoreció una lenta recuperación del PCE, aun a pesar del fracaso de sus predicciones y decisiones políticas. Por más que se pretendiera en la propaganda comunista que nada sustantivo había cambiado, la realidad era que sí y que eso beneficiaba objetivamente al PCE, como al resto de formaciones populares; en cualquier caso, el límite de ese beneficio lo ponía el ajuste de la propia política comunista a la nueva realidad.

Gabriel Trilla teorizó en su proyecto de tesis de octubre de 1931[74] el rechazo a la Segunda República en continuidad con la caracterización hecha sobre la «revolución española». Se mantenía la interpretación de fondo, añadiendo tan solo que con el nuevo régimen se había producido un cambio en la correlación de fuerzas de las clases dominantes, al haber conseguido la gran burguesía arrastrar a la pequeña burguesía y a «capas importantísimas» de la clase obrera a sus posiciones; lo había conseguido mediante la intermediación reformista, sobre todo del PSOE y de la UGT, que era en sí misma contrarrevolucionaria. Dado que la crisis económica mundial, iniciada en 1929, parecía anunciar la inminencia del periodo «prerrevolucionario», la República fracasaría como lo había hecho la monarquía. El discurso de rechazo fue integral y monocorde: el gobierno era contrarrevolucionario, las Cortes Constituyentes eran el instrumento legislativo de la contrarrevolución en marcha, las leyes sociales –sin excepción– maniobras capciosas para en cualquier caso favorecer a las organizaciones socialistas y sus afiliados, etc., etc. La labor del PCE era la de extremar las contradicciones de clase, las confrontaciones sociales, para sacar a las masas de la trampa reformista y acelerar el tránsito a la fase revolucionaria. Y la única divisa contra la «república burguesa» era la república de los sóviets.

En el objetivo de llevar los conflictos al punto más extremo destacaron dos líneas: la de la cuestión nacional y la de la cuestión campesina. Los comunistas, tanto el grupo disidente liderado por Maurín como la dirección del PCE, se significaron por su radicalidad verbal «autodeterminista», no acompañada por los hechos. En el ciclo de conferencias que el Ateneo de Madrid organizó sobre el Estatuto catalán, en junio de 1931, Maurín espetó al auditorio:

Somos separatistas. Pero no separatistas de España, sino del Estado español. En España hay una pugna entre el Estado y las nacionalidades oprimidas. Hay que desarticular el Estado, romperlo, quebrantarlo. Solo cuando el Estado semifeudal

esté destrozado, podrá formarse la verdadera unidad ibérica, con Gibraltar y Portugal incluso.

Su intervención fue el escándalo del ciclo. Andreu Nin acusó a Maurín de haber pronunciado una «herejía marxista», sosteniendo que los comunistas no podían estar a favor de la independencia, ni fomentar el separatismo[75]. Siguieron discrepando hasta 1935. Maurín mantuvo su invocación separatista, aunque aclarando que solo era un recurso dialéctico y táctico:

Si aceptamos como comunistas el separatismo es solo para desarticular el Estado español. Pero, una vez conseguido y el proletariado amo del Poder político, garantizada, efectivamente, la libertad absoluta de todos los pueblos ibéricos, no habrá ningún interés que los impulse a una separación suicida. En este aspecto está el ejemplo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No nos interesa la balcanización de la península ibérica. Por el contrario, hacemos nuestra la fórmula de Lenin: «separación en interés de la unión»[76].

Nin defendió apoyar al movimiento catalanista –«el problema catalán»– porque consideraba que era un factor revolucionario, pero rechazó por completo hacer lo mismo con el nacionalismo vasco, por su carácter «atrasado y retrógrado», y tampoco apoyaba las reivindicaciones galleguistas o andalucistas, por ser, en su criterio, prácticamente inexistentes[77]. No obstante, la posición rompedora de Maurín no pasó de la agitación; cuando se tuvo que tomar una decisión política el BOC llamó a votar a favor del Estatuto de autonomía en el referéndum catalán del 2 de agosto de 1931, por considerar que hacerlo en contra significaría «ayudar al triunfo del centralismo de la burguesía panespañola». No consideró ni siquiera la abstención, aunque era obvio que sus votos no eran imprescindibles para que el proyecto de Estatuto se aprobara.

A pesar de las invitaciones de Manuilski a que el PCE tomara en cuenta también que la «cuestión nacional» en España entrañaba un factor revolucionario, ni la dirección ni la militancia estuvieron inicialmente inclinadas a seguir esa orientación. En Cataluña la organización había quedado prácticamente desaparecida en 1931, por la ruptura del grupo de Maurín. En el País Vasco

predominaba la posición de la provincial de Vizcaya –que seguía siendo una de las más nutridas en afiliados de todo el partido–, de absoluta hostilidad hacia el nacionalismo vasco; tanto más cuanto que en los primeros años de la República el PNV había acentuado su reaccionarismo y su clericalismo. Sólo entre la militancia guipuzcoana, encabezada por Jesús Larrañaga y Juan Astigarrabía, había conexión cultural con el vasquismo, pero no era ella la que marcaba la pauta política del comunismo vasco. La insistencia del CEIC para que se rectificara esa nueva pasividad se empezó a concretar en marzo de 1932 en el IV.o Congreso del PCE, celebrado en Sevilla. En él se acordó reforzar a la organización catalana dándole una estructura regional específica; también se adoptó un nuevo lema complementario del autodeterminismo de Manuilski, el del «Estatuto de la revolución», que no tenía más contenido real que la negación de los estatutos reformistas del «imperialismo español». El lema apareció enseguida en la prensa del partido; pero las disposiciones organizativas tardaron un tiempo, interferidas por la crisis de dirección que estalló en el verano.

Por lo que se refería a la cuestión campesina, el PCE se situó estrictamente en el marco del futuro gobierno obrero y campesino. Este sería el que daría la solución, con la expropiación de todas las tierras sin indemnización. La reforma agraria era una medida burguesa que sólo pretendía la supervivencia del feudalismo en el campo español. Tampoco cabía esperar nada de ninguna medida republicana. Lo que había que hacer, como forma de movilización y anticipación pedagógica del futuro al propio tiempo, era promover la ocupación revolucionaria de las tierras, fueran baldías o estuviesen en explotación por parte de sus propietarios. El PCE consideraba como únicos interlocutores campesinos de la alianza revolucionaria a los jornaleros, los arrendatarios y los pequeños campesinos. Todo ello resultaba un proyecto reduccionista y sectario que, a pesar de todo, empezó a ganarle algún apoyo –no tanto como esperaba– entre la España agraria, al calor de la lentitud de la política reformista y las reacciones caciquiles contra ella. Y también enemigos irreconciliables entre el pequeño y mediano propietario, al que empujaba en manos de la reacción antirrepublicana.

Los límites de esa política a la contra se pusieron de relieve en el fracaso reiterado de su política sindical. La «reconstrucción nacional de la CNT» quedó en el absurdo cuando esta fue reconstituida por los anarquistas. En el otoño de 1931 el PCE rebobinó su línea sindical, no volviendo al punto de 1922, de defensa de la unidad sindical desde el respeto a las dos centrales existentes, sino al de 1926, erigiéndose en referente exclusivo de esa unidad que se concebía «por la base» y desde la cúspide del partido. Convocó otra vez una Conferencia

de Unidad Sindical que, ante el escaso eco obtenido, no se celebró hasta el 30 de junio de 1932. Para entonces el CE de la IC ya había apremiado a la sección española a constituir, sin más, su propio sindicato[78]. De manera que, aprovechando aquella conferencia, una parte de los sindicatos asistentes fundaron la Confederación General Unitaria del Trabajo (CGUT). El sindicato del PCE –su primer secretario general fue Antonio Mije– nació con apenas 37.000 miembros, casi 30.000 de ellos de las sociedades obreras andaluzas; su afiliación máxima se produjo en 1934, con 48.000. De todas maneras, sería un error reducir a la CGUT el área sindical bajo influencia comunista. En la Conferencia de Unidad Sindical participaron sindicatos que sumaban 160.500 afiliados, de los que 75.200 lo estaban en los denominados sindicatos autónomos, 21.150 en sindicatos integrados en la UGT, 6.500 en la CNT y 7.400 en la Oposición Sindical Roja[79]. La cifra seguía siendo muy inferior a las de la UGT y la CNT, que contaban entonces con un millón y con medio de afiliados respectivamente; aun así, empezaba a tener un peso de movilización, en particular en Andalucía, donde sumaba 80.000 afiliados representados en la Conferencia, una cifra que era aproximadamente la mitad de la de la CNT en aquella región.

Los datos de la conferencia sindical ponían de relieve el desplazamiento definitivo del eje principal del PCE desde sus presencias iniciales en el norte de España hasta su desarrollo en Andalucía. Desde los inicios de la república, la Federación Andaluza había pasado a ser, de lejos, la más nutrida del partido, con 3.400 militantes en 1931 y un máximo de 5.700 en 1932; en tanto que las de Vizcaya y Asturias solo sumaban 1.450 y algo más de 2.000 en las respectivas fechas. La presencia en Andalucía se manifestó en las elecciones de junio de 1931, en las que, de los muy escasos 58.000 votos obtenidos, casi 20.000 lo habían sido en aquella región; y eso contando con la decepción sufrida en Sevilla, donde por su presencia sindical habían esperado mucho más de los 5.200 votos obtenidos. En el año que transcurrió entre las elecciones a Cortes Constituyentes y la Conferencia de Unidad Sindical el PCE siguió avanzando más por el sur que por el norte. En las elecciones generales de noviembre de 1933 triplicó ampliamente sus resultados, obteniendo 167.670 votos, de los que casi 65.900 lo fueron en Andalucía; además, el PCE superó al PSOE en las ciudades de Sevilla y Málaga. En esta última, donde ningún candidato obtuvo el quorum para ser proclamado en primera vuelta, el PCE accedió a participar en la segunda vuelta en una Candidatura de Frente único Antifascista, integrada también por una escisión de izquierdas del partido radical y el PSOE; lo que le permitió que su candidato Cayetano Bolívar fuera elegido diputado, con un

número de votos – 29.898– apenas 140 por debajo del candidato del Frente que quedó en primer lugar. No fue el primer diputado que representó al PCE en el parlamento español. Antes de él lo hizo, en cierta manera de prestado, José Antonio Balbontín; elegido en 1931 por el pequeño Partido Social Revolucionario, en febrero se incorporó al PCE, al que le pudo proporcionar su escaño, pero no sus votos. Bolívar fue su primer diputado en propiedad; manteniendo aquella mínima representación, habida cuenta de que Balbontín no pudo revalidar su escaño por Sevilla.

Ese desplazamiento del eje principal del comunismo español intervino en la crisis de dirección que sufrió el partido en el verano de 1932 y en su resolución. El nuevo conflicto interno fue, como sucedió frecuentemente en aquella época en la IC, un pequeño drama de enredos que ahorraré al lector. Bullejos había perdido la confianza de los órganos dirigentes de la Internacional por su gestión del enfrentamiento con Maurín y más tarde por tomar decisiones organizativas en clara discrepancia con los delegados del CE de la IC. En particular chocó con Humbert-Droz, que hasta el penúltimo momento quiso salvar la continuidad de Maurín en el PCE; y con Codovila, principal delegado del CE de la IC en España a partir de abril de 1931, cuyo comportamiento de permanente interferencia en el trabajo de la dirección del PCE era una intromisión constante sobre Bullejos. Manuilski acumuló contra él reproches sobre lo que consideraba errores del PCE en la percepción del apoyo popular de la República –no en su denuncia como maniobra burguesa, que compartían–, la importancia de la cuestión nacional y la tardanza en la constitución del sindicato comunista. Las tensiones estallaron tras el frustrado golpe de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932, ante el que la dirección del PCE llamó a la huelga general para «defender la República». No es que Bullejos hubiese pasado a tener una apreciación positiva del régimen republicano, sino que, sacando la lección del error del 14 de abril, optó por aquella consigna, añadiendo que había que dar un contenido democrático revolucionario al rechazo de golpe militar.

El debate político que se suscitó entre Codovila y Bullejos y en el seno de la dirección del PCE tuvo mucho de quisquilloso, sobre si Bullejos había transgredido o no la política de la IC. Sea como fuere, el desarrollo de los acontecimientos evidencia que la ruptura se había venido produciendo antes y que entre agosto y septiembre no hizo otra cosa que consumarse. Mientras Bullejos, con Adame, Vega y Trilla estaba en Moscú, discutiendo con el CE de la IC la resolución del conflicto y sus futuros personales, el Comité Central del PCE, convocado y dirigido por Codovila, acordó el 5 de octubre la expulsión de

los cuatro y su sustitución por un equipo que reflejaba el peso andaluz: José Díaz pasó a ser el secretario general, el jerezano Manuel Hurtado Benítez secretario de organización y Mije secretario sindical, junto con los también andaluces Manuel Delicado y Adriano Romero; lo acompañaban Dolores Ibárruri, Vicente Uribe y Jesús Hernández, de las regionales del norte, y el valenciano Pedro Checa.

En vísperas del giro de ciento ochenta grados de la política comunista tras el acceso de Hitler al poder en Alemania, la acción más destacable del nuevo grupo dirigente fue poner en marcha los acuerdos del V congreso de Sevilla sobre la cuestión nacional. En Cataluña se constituyó un Comité Regional con Ramón Casanellas[80] como secretario político; y se atribuyó a la organización del territorio la denominación de Partit Comunista de Catalunya, que tendría como portavoz el periódico Catalunya Roja, que se empezó a publicar en noviembre. Todo ello a tiempo todavía para presentarse en Cataluña como el único defensor del derecho de autodeterminación, por su rotundo rechazo tanto al Estatuto, como a la República, y postulando la alternativa de una Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Iberia. La pauta catalana fue aplicada al País Vasco, donde se promovió el ascenso del grupo guipuzcoano a la dirección de la Federación Vasco-Navarra y se inició la publicación de su nuevo portavoz Euskadi Roja, asumiendo por primera vez la denominación nacionalista de las provincias vascas. Esos cambios no tuvieron más incidencia que en la organización del partido. En el caso de Cataluña, en la atracción de algunos militantes del BOC (Pere Ardiaca y Tomás Pamies, entre ellos) y algunos anarquistas como Andrés Mora Escuté de Terrassa; así como en el entendimiento con el minúsculo grupo independentista del Partit Català Proletari[81] en contra del BOC, al que negaban que fuera sincero en su reivindicación del derecho de autodeterminación. Se siguió actuando a contrapelo de la dinámica política real; que en Cataluña se materializaba en la gestión de las transferencias y la aprobación de las primeras leyes del Parlamento catalán y en el País vasco en la superación de la dualidad entre los Estatutos de Estella, promovidos por el PNV y los carlistas, y el Estatuto de las gestoras de las Diputaciones, el «Estatuto de la libertad», que lo era por el PSOE. El PC de Euzkadi propugnó a su vez el voto contrario en el plebiscito del 5 de noviembre, del nuevo proyecto de Estatuto, pactado entre el PNV y el PSOE; un voto que también propuso el carlismo y que en Vizcaya y Guipúzcoa no pasó del 2 por 100 y en Álava, por la mayor incidencia de la derecha antirrepublicana, se elevó al 12 por 100[82].

Del antifascismo al Frente Popular

El nombramiento de Hitler como canciller de la república alemana el 30 de enero de 1933 impactó de inmediato en la IC; en febrero admitió ante la Internacional Obrera y Socialista que pudieran concertarse acuerdos a escala nacional para impedir nuevos avances del fascismo, aunque rechazara un pacto general entre ambas internacionales. No obstante, el temor a que un cambio de política reforzara las críticas que se venían haciendo a la línea seguida desde finales de los veinte[83] y la confianza en que Hitler no se consolidara y en que se generara una situación de crisis de la república alemana que abriría las puertas a la revolución frenaron en seco ese incipiente cambio. La mediocre dirección de la IC se atuvo a la doctrina del cuanto peor mejor. Por otra parte, Stalin, aunque ya en la primavera de 1933 hubiese puesto en hibernación el tratado entre Alemania y la URSS firmado en 1922, no reconoció hasta enero de 1934 ante el PC de la URSS que el enemigo principal había pasado a ser la nueva Alemania nazi; interpretando el tratado germano-polaco de aquel mes como un acuerdo de agresión a la URSS, en cuyo rechazo era en lo único que podían coincidir los dos Estados.

A partir de ese momento el viraje comunista se aceleró, impulsado por los sucesos de Austria y Francia a comienzos de febrero de 1934. El autogolpe autoritario de Dollfuss para instaurar el sistema de partido único en beneficio del fascista Frente Patriótico obtuvo como respuesta la rebelión armada de la socialdemocracia secundada por los comunistas; tardía y de carácter defensivo, se mantuvo entre el 12 y el 16 de febrero, pero fue finalmente aplastada por la policía, las fuerzas paramilitares del Frente Patriótico y el ejército. El «austrofascismo» se consolidó y reforzó la amenaza de involución general en Europa. Por aquellas mismas fechas se produjo también la amenaza de un golpe autoritario en Francia, encabezado por la extrema derecha nacionalista con complicidades en la derecha republicana; después de que aquella intentara asaltar la Asamblea Nacional el 6 de febrero, sin lograrlo, se multiplicaron en París y otras ciudades de Francia manifestaciones en contra que culminaron en una huelga general y una nueva manifestación en París el 12 de febrero, finalmente convocadas conjuntamente por la SFIO, el PCF y sus sindicatos. La reacción obrera frenó por el momento el asalto autoritario, pero la amenaza se mantendría a lo largo de 1934 y 1935, de manera que la aproximación antifascista entre el PCF y la SFIO resultó irreversible. No se quedó en un hecho

local: a partir de entonces se empezaron a producir cambios significativos en la IC. Primero fue la promoción de Dimitrov como nuevo líder de hecho del CE de la IC, en la que impuso el apoyo general a la unidad de acción entre comunistas y socialistas, dando carpetazo de hecho al «frente único por la base» y al «socialfascismo». El frente único sin reticencias, como fue aprobado en 1921-1922, quedó restablecido. Sin embargo, el viraje no se restringió a esa recuperación del rumbo unitario, ahora sí secundado por una parte de la socialdemocracia, con la SFIO y el PSOE a la cabeza. El 10 de octubre Maurice Thorez, secretario general del PCF, propuso que la unidad obrera se acompañara con la más amplia unidad antifascista: un «reagrupamiento popular» extendido a las clases medias y sus organizaciones políticas democráticas para defender las libertades y los sistemas democráticos.

No sin algunas resistencias internas (entre otras la del húngaro Bela Kun), el CE de la IC, instado por Dimitrov y Togliatti, aprobó primero la iniciativa de Thorez y la fue luego haciendo extensible en 1935 a otras situaciones de amenaza fascista; aunque de momento en los términos de «frente popular por la base», rehuyendo llegar al compromiso de la coalición electoral. Esa limitación, impuesta por las divisiones internas en el seno de la dirección de la IC y por la reticencia de Stalin a un cambio tan radical, resultó superada por las nuevas iniciativas de Hitler, que en marzo de 1935 impulsó el rearme, sustituyendo el débil ejército que le había permitido el Tratado de Versalles por la Wehrmacht, con una orientación abiertamente ofensiva. Hitler arguyó que se había visto obligado por la ampliación del servicio militar en Francia; pero la suya era, a todas luces, una respuesta desproporcionada que amenazaba directamente a Francia y, a través de Polonia, a la URSS. En mayo de 1935 la perspectiva del «frente popular por abajo» fue abandonada en beneficio de una coalición política, también de carácter electoral para competir por el gobierno, que pudiera suscitar el apoyo de la más amplia alianza social de obreros, campesinos y clases medias contra el fascismo. Esa fue finalmente la línea general que aprobó la IC, bajo la denominación de Frente Popular, en su VII.o Congreso en agosto de aquel año[84]; con una cláusula singular, los partidos comunistas formarían parte de la coalición también después de las elecciones, pero en caso de triunfo y formación de un gobierno frentepopulista no se integrarían en él, lo apoyarían desde el Parlamento para cumplir el programa acordado. Y es importante aclarar que el Frente Popular no excluía el Frente Único. Todo lo contrario, el VII.o Congreso aprobó mantenerlo y potenciarlo con la formación de un sindicato unificado de toda la clase obrera y la unificación de socialistas y comunistas en un «partido único del proletariado»; si bien precisaba, marcando las cartas, que

este se regiría por el centralismo democrático y los principios del marxismo y el leninismo.

La amenaza de involución autoritaria en España cristalizó cuando la derecha republicana, el Partido Radical, ganó en minoría las elecciones generales de noviembre de 1933 y formó gobierno con el apoyo parlamentario de la derecha antirrepublicana, la CEDA; esta última se inspiraba en Dollfuss y en el Estado Novo de Salazar, en Portugal, para reclamar una revisión constitucional ante la que el Partido Radical se comportó de manera débil y ambigua[85]. Precisamente en aquellas elecciones, la nueva dirección del PCE, con el acuerdo de pactos locales limitados aceptados por las dos internacionales, instó a la participación en segunda vuelta en Málaga en la coalición antifascista por la que fue elegido Cayetano Bolívar. Ese hecho quedó entonces como circunstancial, por lo que el discurso general se mantuvo en la línea del «frente único por la base»; rechazando la participación del partido y la CGUT en la naciente Alianza Obrera, promovida por los socialistas a iniciativa de Largo Caballero[86] y la formación comunista disidente de Maurín. La lentitud del cambio llevó a Balbontín a abandonar el PCE, en marzo de 1934, con una «carta abierta al Comité Central» en la que reclamó un pacto unitario general entre el PCE y el PSOE, como el que ya se estaba produciendo en Francia.

Esa unidad parecía lejana; no obstante, la derechización del gobierno Lerroux, que motivó en mayo el abandono del Partido Radical por parte de Martínez Barrio y poco más de una quincena de diputados de la formación, abonó el campo para la aproximación de las izquierdas republicana y obrera. Las Alianzas Obreras se extendieron por toda España; aunque solo en Asturias, donde se incorporó la CNT, y en Cataluña, en la que además del BOC participaban los Sindicatos de Oposición de la CNT, iba más allá de una plataforma conjunta de las organizaciones socialistas y el minúsculo grupo trotskista de la Izquierda Comunista de España constituido por Andreu Nin. Y el PCE se vio cada vez más presionado para adoptar una línea unitaria sin restricciones. A finales de julio la dirección del PCE propuso a la del PSOE un pacto de unidad de acción semejante al firmado por sus homólogos franceses; a lo que el PSOE respondió que esa unidad había de llevarse a cabo en el seno de las Alianzas Obreras. El impasse se resolvió en una reunión urgente de Codovila, Díaz y Mije con el Secretariado Romano de la IC, el 31 de julio en Moscú, en la que se acordó aceptar la condición socialista. La decisión fue formalmente ratificada por el Comité Central del PCE el 11 de septiembre –no podía hacer otra cosa– y el partido se incorporó a las Alianzas Obreras a punto para estar presente en el

movimiento insurreccional de octubre, desencadenado como reacción ante la consumación de la entrada de la CEDA en el gobierno. El PCE no llegó a tiempo de diseñar y decidir la «revolución defensiva» de Largo Caballero, pero sí de estar en ella y sobre todo de capitalizar el recuerdo del movimiento y la continuidad de la política unitaria.

La insurrección resultó un error y un fracaso; pero tanto uno como otro tuvieron sobre todo color socialista. Largo Caballero siempre esperó que nunca tuviera que producirse y que su anuncio, que era público, intimidara a Lerroux y no abriese la puerta a la CEDA. Nunca la preparó seriamente, ni en el plano político ni mucho menos en el plano militar. José Díaz dijo en el VII Congreso de la IC que su propósito había sido aplazarla algunos meses, pero sin formar parte del Comité revolucionario, integrado exclusivamente por socialistas, esa posibilidad no fue atendida; puede que fuera solo un argumento a posteriori, pero no dejó de reflejar la lamentable realidad de la insurrección. El PCE, que no participó en la dirección del levantamiento, no se retractó, ni abjuró de él o lo escondió, como hizo una parte del socialismo, ya fuera por convicción política (Besteiro y en parte Prieto) o como maniobra para evitar las responsabilidades penales, las cuales podían ser duras (Largo Caballero). Por el contrario, lo tomó como punto de partida para desarrollar dos líneas que iban a cimentar la eclosión política y militante del partido: la solidaridad y la política unitaria.

La solidaridad dio respuesta a la amplia represión –política, policial y patronal– desarrollada al amparo del estado de guerra decretado el 6 de octubre. Ante ella se multiplicaron los comportamientos y redes solidarios, organizados e informales, de clase, de organización, local, familiar; no solo en el desarrollo de ayudas, sino con una consigna común, la amnistía, que cimentaba las propuestas unitarias, sin distinción de origen. El movimiento comunista destacó en el desarrollo de la solidaridad. Ya en noviembre de 1934 se constituyó en París un Comité Populaire d’Aide a toutes les victimes du fascisme en Espagne, a instancias del PCF; las organizaciones sociales de la URSS crearon fondos de ayuda económica a los presos y represaliados y acogieron a refugiados, muchos de ellos socialistas; fondos que se distribuyeron mediante la red del Socorro Rojo Internacional (SRI), creado en España en 1923, que hasta entonces había sido una organización marginal. Algo que contrastó con la débil reacción solidaria de la socialdemocracia europea, de lo que se quejó el mismo Prieto. Tampoco el PSOE estuvo diligente en la respuesta unitaria; el 13 de febrero de 1935 su ejecutiva rechazó la propuesta del PCE y el SRI de constituir organismos conjuntos, porque no los podría controlar. Aceptó a regañadientes

formar parte del Comité Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Represión, constituido en marzo, junto con el PCE, Izquierda Republicana y el grupo de Martínez Barrio; pero se negó luego a integrarse en el Comité Nacional Pro-Amnistía, integrado en junio por Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Federal, el PCE, la sección española del SRI y personalidades de prestigio como Clara Campoamor.

Al contrario que el PSOE, los comunistas dieron en España una imagen de eficiencia y apertura al resto de fuerzas políticas. La acción solidaria, y la acogida de refugiados, aumentó también el prestigio de la URSS; de manera particular en la izquierda del socialismo español, representado por la revista Leviatán, dirigida por Luis Araquistain, que difundió la imagen de un proceso de democratización plasmado en la elaboración de la Constitución soviética de 1935. Incluso Prieto afirmó en abril de 1935, de manera positiva, que la URSS era un gran laboratorio social. Más contundentes fueron Santiago Carrillo, líder de las Juventudes Socialistas, o la diputada socialista Margarita Nelken, que formularon disyuntivas combativas: «o Alemania o Rusia», «o Roma o Moscú»[87]; ambos acabaron ingresando en el PCE en 1936. Entre 1935 y 1936, una parte de la militancia socialista, que hasta entonces había tenido a Largo Caballero como referente, basculó hacia el Partido Comunista; lo hicieron la mayoría de las juventudes y una parte de la UGT, radicalizada, de la que Amaro del Rosal fue uno de sus principales representantes. El resultado de su política unitaria comunista fue que el PCE tuvo por primera vez influencia en la política española y el partido aumentó sus efectivos: de los más o menos 14.000 militantes que había tenido entre 1932 y 1934 pasó a prácticamente 22.500 en febrero de 1936[88].

El 26 de noviembre de 1935 el Buró Político del PCE dio un paso adelante en la recuperación del frente único y propuso a la Ejecutiva del PSOE crear un comité de enlace y asumir un programa común: el impulso de lo que pasó a llamar Alianzas Obreras y Campesinas, creando comités en los centros de trabajo y territoriales y un comité nacional; impulsando la unificación sindical y de los comités de ayuda propresos; y constituyendo una Concentración Popular Antifascista[89]. El PSOE rechazó adoptar cualquier programa común y solo aceptó considerar una comisión de enlace, sin funciones ejecutivas generales, que se atuviera a acciones concretas. El PCE cedió para salvar al menos una comisión de enlace, con extensiones provinciales, para la lucha contra la represión, la defensa de las mejoras sociales obtenidas que el gobierno radical-cedista estaba anulando, y la lucha contra las organizaciones fascistas. No

obstante, a lo largo de 1935 se fue aceptando la perspectiva de la unificación sindical en términos de ingreso de los sindicatos controlados por los comunistas en la UGT; así como la formación de una alianza política amplia, no limitada a socialistas y comunistas. Lo que sí se quedó como hecho del pasado fue el movimiento de las alianzas obreras, tanto en la formulación de 1934 como en los términos en que quiso reformularla el PCE, sin éxito.

Como ocurrió en el conjunto de la IC, el PCE fue evolucionando en la formulación de su nueva política de alianzas. Durante el invierno de 1935 la Concentración Popular Antifascista fue concebida como un frente popular «por abajo», resistiéndose todavía a la coalición política amplia; el pacto político, por arriba, se restringiría al PSOE y se pretendía que las Alianzas Obreras se ampliaran no solo al campesinado, sino también a los profesionales, intelectuales y la pequeña burguesía, lo que era poco menos que surrealista. La construcción por «abajo» fue abandonada por el propio CE de la IC y el término «Concentración Popular Antifascista» fue sustituido en España en el verano por el de Bloque Popular, que se utilizaría durante algún tiempo de manera simultánea con el de Frente Popular. En cualquier caso, su contenido pasó a tener un doble significado: el de la alianza de sectores sociales diversos mediante un compromiso programático, no encorsetada en un organismo obrero, como se había pretendido; y el de la coalición política para fines electorales y, en su caso, de gobierno, abierta incluso a elementos del republicanismo centrista, como Martínez Barrio, una de las bestias negras que habían tenido los comunistas.

Formación y victoria del Frente Popular en España

La traducción del antifascismo unitario en la propuesta política específica del Frente Popular se benefició de la rápida descomposición de la coalición de intereses entre el Partido Radical y la CEDA, que dejó más que a medias la contrarreforma acordada: la revisión de la reforma agraria y de la constitución de 1931 en un sentido autoritario. El gobierno de las derechas resultó altamente inestable, con cinco ejecutivos distintos en catorce meses, como consecuencia de su pugna interna por la hegemonía. A finales de 1935 Gil Robles exigió una ampliación de la presencia gubernamental de la CEDA, que Lerroux no aceptó, consumándose la ruptura entre ambos. La CEDA arremetió contra el Partido

Radical, acorraló a Lerroux con el escándalo del «estraperlo», una concesión irregular a un casino en septiembre de 1934, que involucraba a su hijo y a su antiguo ministro de Gobernación Salazar Alonso. Pero la dimisión de Lerroux no le dio el gobierno a Gil Robles, como este esperaba, por la oposición del presidente de la República. La crisis entre las derechas se prolongó y Alcalá Zamora optó a comienzos de diciembre por forzar una nueva convocatoria anticipada de elecciones, con la esperanza de promocionar desde el gobierno una improvisada alternativa «centrista».

Ante la inmediatez de las elecciones, todos los cálculos y propuestas sobre coaliciones que se habían venido haciendo desde comienzos de 1935, cuando se pensaba en la celebración de las municipales, que ya tocaban, tuvieron que entrar en la fase de resolución. En la prehistoria del Frente Popular en España estuvieron las propuestas comunistas de Concentración de Fuerzas Populares y Bloque Popular y la iniciativa de Azaña, que desde enero de 1935 instó a Prieto a recuperar la alianza entre socialistas y republicanos de izquierda, pensando en las municipales. Prieto las sumó, proponiendo a su partido una coalición «a derecha e izquierda» que incluyera a socialistas y comunistas; ello para sorpresa de Azaña, que nada quería entonces con el PCE, y desagrado de Largo Caballero, que sólo aceptaba la posibilidad del frente obrero en el que incluía a sus antiguos aliados en las Alianzas, en particular el BOC. La fuerza que adquirió la movilización republicana, con campañas de mítines de Azaña en la primavera de 1935[90], reforzó las posiciones de Prieto; de modo que una consulta interna en el PSOE dio un abrumador apoyo a la coalición amplia, con republicanos y comunistas. El precio que el PSOE pagó en la discusión y la consulta interna fue el inicio de una grave crisis por el enfrentamiento entre «prietistas» y «caballeristas», que se prolongó hasta los últimos tiempos de la Guerra Civil.

Todo quedó entonces en suspenso, porque las municipales fueron postergadas y nunca llegarían a celebrarse. No sin consecuencias. La crisis de la dirección del PSOE transfirió el protagonismo político en la izquierda al PCE y la llave de la decisión definitiva a Azaña. En su mitin del 2 de junio José Díaz dio forma a la coalición política, todavía llamada de Concentración Popular Antifascista, al invitar, además de al PSOE, a los republicanos de izquierda; y propuso un programa de cuatro puntos: confiscación de la tierra de los grandes terratenientes, de la Iglesia y de los conventos, sin indemnización, para entregarla inmediata y gratuitamente a los campesinos pobres y a los obreros agrícolas; derecho de regir libremente sus destinos a Cataluña, Euzkadi, Galicia

y «cuantas nacionalidades estén regidas por el imperialismo de España»; mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera; y libertad para los presos por el movimiento de octubre y amnistía para presos y perseguidos «de carácter político-social»[91]. Su exhorto no fue atendido, pero no cayó en el vacío. Tras la dimisión de Lerroux el PCE tuvo la feliz ocurrencia de invitar masivamente al mitin que Azaña iba a dar el 20 de octubre, en el barrio madrileño de Comillas, sin que mediara ningún entendimiento todavía con el líder republicano. El acto, que exageradamente se llamó «de los 400.000», resultó una extraordinaria manifestación de masas, en beneficio de Azaña y del PCE. Días más tarde José Díaz, en un acto en el cine Pardiñas, alabó la crítica al gobierno de la derecha –«magistral, demoledora»– que había hecho Azaña, aunque le reprochara no haber hablado de fascismo.

Largo Caballero no pudo mantener su oposición a la alianza con los republicanos y el Frente Popular. Lo aceptó ante Codovila, el 7 de noviembre, a condición de que solo fuese para las elecciones generales que ahora ya se veían venir; luego añadió la presentación de una base programática conjunta del PSOE y el PCE, defendida por una delegación mixta ante los republicanos. Azaña se fue resignando a que los comunistas formaran parte de la coalición, aunque impuso que no lo hicieran de manera directa, sino a través de la relación bilateral entre republicanos y socialistas y del pacto que estos pudieran hacer con los comunistas. El PCE aceptó las condiciones de las dos partes y eso permitió finalmente abrir un complejo proceso de negociación a tres bandas y dos mesas que desembocó el 15 de enero en la firma de la coalición y del Manifiesto electoral de lo que finalmente Azaña se resignó a llamar, ya en campaña, «el Frente Popular, como lo llama la gente». Incluso el Partido Obrero de Unificación Marxista[92] que siguió defendiendo hasta el penúltimo momento el «frente obrero», pidió su ingreso en la nueva coalición, que lo aceptó in extremis el 8 de enero por el apoyo que le dio Largo Caballero. El PCE fue la clave del proceso de construcción del Frente Popular; como lo había sido en Francia el PCF. No sólo porque la doctrina general fue elaborada por el movimiento comunista, sino por las decisiones concretas de los comunistas españoles. La propuesta del PCE dejó sin recorrido a la opción del frente obrero, a menos que Azaña se hubiese empeñado en una posición de rechazo a los comunistas, cosa que no hizo. La actitud del PCE hacia Azaña cuando menos ablandó su oposición y le llevó a aceptar el consejo de Prieto; por otra parte, desarmó la hostilidad caballerista hacia los republicanos. En el curso de las negociaciones programáticas, el PCE se situó en repetidas ocasiones como puente entre las posiciones propias y del PSOE y las republicanas a lo largo de negociaciones

complejas, cuyo detalle aquí sería excesivo[93].

Su programa común, el del Manifiesto, era moderado; de recuperación de la política de reformas del Bienio de 1931-1933, con algunas adiciones en la misma orientación. Reclamaba la amnistía de todos los delitos políticos y sociales anteriores a noviembre de 1935, la reivindicación que había sustentado la dinámica unitaria, y medidas que ponían fin a la represión y revisaban sus efectos, en el ámbito político y en el laboral; propuestas políticas como la reforma del tribunal constitucional, la ley de orden público, la limitación del fuero castrense a los delitos militares, y el castigo a los excesos policiales entre 1934 y 1935. Asimismo, la defensa del campesino y en particular del cultivador mediano y pequeño; el fomento crediticio y técnico de la agricultura; el mantenimiento de los asentamientos; el fomento del cooperativismo y las explotaciones colectivas voluntarias; una nueva ley de arrendamientos; la aprobación de normas para el rescate de bienes comunales; del mismo modo que dejaba implícita la subsistencia de la reforma agraria; apoyo a la pequeña industria y comercio, y la consideración de un sistema de leyes de protección, arancelarias y de regulación del mercado interno. La moderación del programa se reflejó en el capítulo dedicado a la educación, en el que se afirmaba que «la República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado», para limitar a renglón seguido el ejercicio de ese atributo sobre la enseñanza privada al establecimiento de una vigilancia análoga a la que se ejercía sobre la pública. El acuerdo se produjo en casi todo el documento y allí donde hubo discrepancia se incluyó su reconocimiento; de esa manera se consignó que los republicanos no compartían el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, la de la banca, la ley de control obrero y de subsidio, propuesto por la parte obrera. Por último, es importante señalar que el PCE destacó en la defensa del pequeño propietario junto a la del jornalero y en la inclusión del rescate de comunales, que ninguna otra formación había previsto, como tampoco lo había hecho años antes la ley de reforma agraria.

Después de una campaña, aceptable en los parámetros de conflictividad electoral de la época en Europa[94], en la que cada formación defendió el Manifiesto y las candidaturas acordadas al tiempo que añadía el discurso de sus propias posiciones, las elecciones del 16 de febrero dieron la victoria al Frente Popular con un porcentaje de voto que oscilaba entre el 45 y el 48 por 100[95]. El PCE vio reflejado solo en parte el aumento de su influencia y el papel desempeñado en la gestación del pacto: de las 344 candidaturas presentadas por el Frente

Popular, correspondieron a los partidos obreros 152 y al PCE 21. Fueron elegidos 286 diputados de los partidos obreros y 17 del PCE; entre estos, José Díaz por Madrid, Dolores Ibárruri por Oviedo, Cayetano Bolívar por Málaga, Leandro Carro por Vizcaya, Jesús Hernández por Córdoba, Vicente Uribe por Jaén, Antonio Mije por Sevilla; Díaz fue elegido portavoz del grupo comunista en las Cortes y su representante en la Diputación Permanente y Uribe secretario. Una vez más, se hizo notar el peso de Andalucía, a la que pertenecían 7 de los diputados elegidos.

El apoyo comunista, leal, desde la calle y las Cortes

El nuevo gobierno encabezado por Azaña tuvo que constituirse el 19 de febrero de manera precipitada, a causa de la dimisión irresponsable de Portela Valladares, que no soportó la presión del incipiente golpismo manifestado en los movimientos de Gil Robles y Franco. Integrado exclusivamente por republicanos, por la imposición de Largo Caballero de que el PSOE no participara y la decisión conocida de antemano de la IC, tuvo desde el primer momento el apoyo leal del PCE. También se lo prestó al gobierno de Casares Quiroga, cuando este sustituyó en mayo a Azaña, elegido presidente de la República. Los comunistas aceptaron que su composición fuera estrictamente republicana, probablemente por dos razones: mantenían su aproximación a Largo Caballero y la izquierda socialista y, quizás también, porque confiando en un rápido proceso de unificación entre el PSOE y el PCE, como el que se estaba consumando entre las Juventudes, estarían transfiriendo al nuevo Partido Único del Proletariado la misma conveniencia de ausencia en el gobierno establecida en el VII Congreso.

Su mayor crítica a los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga fue la lentitud en la ejecución de los acuerdos, al primero, y la falta de contundencia ante la conspiración militar y política, al segundo. En ningún momento se planteó desbordarlos ni ponerlos en una situación de aprieto, ya fuera parlamentaria o de orden público. El PCE se sentía orgulloso al considerarse, no sin razón, artífice principal del Frente Popular en España y decidió desarrollar una política que priorizara su consolidación. La disyuntiva seguía siendo fascismo –lo que anunciaban las maniobras golpistas– o democracia, que era lo que había de

desarrollar el Frente Popular. Se ha utilizado habitualmente el adjetivo «moderado» para calificar el nuevo comportamiento del PCE; así podía considerársele coloquialmente, pero lo que quiso ser fue unitario. Su política de masas se rigió por el principio de que la movilización había de acompañar a la acción de las Cortes; evitar que estas, por inercia institucional o por otra razón, pudieran con su lentitud distanciarse del pueblo que las había elegido. Casar acción institucional y movilización en una democracia de masas. Eso significaba también concebir la movilización de manera diferente a como se había hecho en el pasado, dejar atrás por completo los ensueños de la «teoría de la ofensiva» y el papel acaparador del partido, confundiendo liderazgo con prepotencia. Se abandonó de manera explícita la consigna de «la toma revolucionaria de la tierra» y se sustituyó por la intensificación de la reforma agraria y la práctica de las ocupaciones de tierras sólo cuando hubiera unidad sobre ellas entre los sindicatos y los partidos del Frente Popular. La iniciativa de la movilización social se dejó a los sindicatos, al tiempo que se señaló el marco en que habían de desarrollarse las huelgas, que habían de ser «las necesarias y bien organizadas», siempre bajo el signo de la unidad y el «control férreo» de las organizaciones obreras y campesinas.

No se trataba de frenar nada, sino de darle el sentido político que el momento requería y consolidar la victoria del 16 de febrero con avances materiales efectivos para las clases populares y muy singularmente para los campesinos. Cuando las medidas reclamadas se empezaron a cumplir se reconoció y celebró, no sin anotar lo que faltaba todavía. Solo en la retórica se pudo rebasar alguna vez el marco del 15 de enero. Así fue en el discurso de José Díaz en la Plaza de Toros de Zaragoza, el 1 de junio, cuando, tras reconocer que el gobierno cumplía con el plan de asentamientos campesinos, pasó a reclamar la expropiación sin indemnización a los grandes terratenientes para entregar tierra a los campesinos y minar las bases de la reacción[96]. No formaba parte del acuerdo del 15 de enero, aun así plantear la cuestión de la expropiación era pertinente en vísperas de la reposición de la Ley de Reforma Agraria que finalmente hicieron las Cortes el 18 de junio; en esa tesitura era legítimo defender algunas modificaciones en la ley. Sea como fuere, la petición no pasó del discurso; el PCE no reivindicó esa expropiación sin indemnización de manera general y combinó la invocación de tal medida, limitada siempre a los terratenientes «feudales», con la propuesta operativa de indemnizar mediante bonos de deuda pública.

El cambio en el comportamiento del PCE, en su propaganda y en su práctica

política, se manifestó también en la cuestión nacional. En junio de 1935 la federación interprovincial vasca pasó a denominarse Partido Comunista de Euzkadi, en las mismas condiciones que el homónimo de Cataluña. En el mismo mes José Díaz mantenía todavía el discurso autodeterminista de las naciones oprimidas por el «imperialismo español», sin añadir más concreción. Esa posición se dejó atrás durante la negociación del programa del Frente Popular, que no hacía alusión a la autodeterminación –lo cual nunca habrían aceptado ni socialistas ni republicanos–, sino a la expansión de estatutos de autonomía en toda España, lo que implicaba la apertura a una transformación federal del sistema en la práctica. En el mitin de Juan Astigarrabía en San Sebastián del 14 de diciembre este manifestó que el PC de Euzkadi apoyaría el estatuto que el pueblo había plebiscitado y el primer Comité Central del nuevo partido ratificó que se habían de abandonar los maximalismos para conseguir lo antes posible el estatuto[97]. En Galicia se apoyó también el estatuto votado en junio de 1936. Y el Partit Comunista de Catalunya se sumó al descubrimiento del sistema autonómico aprobando en mayo de 1936 una moción de ampliación del estatuto; la declaración del comité de enlace que habría de dar lugar meses más tarde al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) concretó esa ampliación en la sustitución del que las Cortes habían aprobado en 1932 por el proyecto aprobado en el plebiscito catalán de 1931. Desde luego, se mantuvo en la propaganda la invocación genérica del autodeterminismo; sin embargo, los sustancial es que se había adoptado la propuesta política concreta de los estatutos, en un posible horizonte de federalización, con el recordatorio –como hizo Dolores Ibárruri en Euzkadi– de que el PCE no estaba por la secesión de ningún territorio.

El PCE no renunció a nada y así lo hizo de manera pública, recordando cuál era su propio programa y sus objetivos: detener el fascismo y consolidar la democracia, para poder plantear a partir de entonces la conquista de la mayoría social, el gobierno obrero y campesino y desde él la transformación hacia un Estado socialista, de Unión de Repúblicas Soviéticas de la Península Ibérica. La primera de las condiciones era que la dinámica unitaria alcanzara su nivel máximo con la constitución de un solo partido del proletariado, mediante la unificación del PSOE y el PCE. El 4 de marzo el Comité Central del PCE dirigió una carta a la Comisión Ejecutiva del PSOE instándola a formalizar un acuerdo general, basado en el programa que ambas organizaciones habían pactado entre sí en el inicio de las negociaciones para la formación del Frente Popular[98], insistiendo en el desarrollo de las Alianzas Obreras y Campesinas, y planteando la formación de comités de enlace en todos los niveles territoriales, culminando con el nacional para llevar a cabo la unificación. Todo ello sin dejar de advertir,

una vez más, la obligación de cumplir y hacer cumplir, «en el área de la lucha de masas y en el área parlamentaria», el programa acordado del 15 de enero, cuya garantía de ejecución era precisamente el frente único[99].

La Comisión Ejecutiva del PSOE, dominada por Prieto, se desentendió, remitiendo la respuesta al próximo congreso del partido y el PCE confió en que Largo Caballero y su facción de izquierda ganara la partida en el conflicto socialista. Mientras tanto tuvo que conformarse con el éxito de la unificación de las juventudes de ambas formaciones en las Juventudes Socialistas Unificadas, fundadas el 5 de abril de 1936, con una estimación de militancia sumada de 32.000 miembros. Y con el crecimiento del propio PCE, que se había disparado desde febrero, hasta estar en mayo próximo a los 50.000 militantes. Sin respuesta del PSOE, cuyo congreso ya no se celebraría, el PCE decidió convocar el suyo propio, fijando su fecha para el 15 de agosto. Tampoco pudo hacerse. La conspiración militar y política llegó a su tramo final y aprovechó el asesinato de Calvo Sotelo no para la sublevación –sobre la que estaba ya tomada la decisión–, sino para abonarla. Así se lo echó en cara Díaz a Gil Robles, en las Cortes, el 15 de julio; su objetivo «no es presentar el hecho en sí para que todos lo puedan condenar, como nosotros somos los primeros en hacerlo, sino para que en la calle, al leerse este discurso, presentando los hechos como los presenta, las fuerzas que dicho señor acaudilla encuentren ambiente apropiado para seguir trabajando es esa actuación de complot»[100]. Tres días después estallaba la sublevación.

[1] El socialismo francés estaba entonces fragmentado en formaciones diversas entre las que destacaban el Partido Obrero Francés, de Jules Guesde, afín al marxismo, y los «socialistas independientes», que compartían una posición socializante, basada en el reformismo social, no en el colectivismo, de la que era líder parlamentario Millerand, e integraba a figuras como Jean Jaurès.

[2] Amaro del Rosal, Los Congresos obreros internacionales, vol. 2, Barcelona, Grijalbo, 1973, p. 21.

[3] Ibid., pp. 31-32.

[4] El holandés Pannekoek fue quien acuñó el término «revolución mundial», para indicar el carácter general que tendría en la era del imperialismo.

[5] Ernesto Ragionieri, «Lenin y la Internacional Comunista», en Los Cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista. Primera parte, Córdoba (Argentina), Cuadernos de Pasado y Presente 43 (1973).

[6] Vladimir I. Lenin, «La situación y las tareas de la Internacional Socialista», Sotsial-Demokrat, 1 de noviembre de 1914.

[7] Constituido por los partidos socialistas de Suiza, Italia, Holanda, Suecia, Noruega, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Rusia (bolcheviques, mencheviques y la izquierda de los «socialistas revolucionarios»), sectores del sindicalismo revolucionario francés y de la izquierda del SPD, en la localidad suiza de Zimmerwald, en septiembre de 1915, como un movimiento contrario a la guerra que en la práctica solo existió en las reuniones internacionales de 1915, de 1916 en Kienthal y de 1917 en Estocolmo.

[8] Tesis número 17 de las Tesis de abril, publicadas en Pravda el 7 de abril del calendario juliano.

[9] Véanse los números del 17 y 24 de marzo de 1917.

[10] Solidaridad Obrera, 30 de abril de 1917.

[11] José Luis Martín Ramos, Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931, Madrid, Siglo XXI de España, 2008.

[12] El Socialista, 10 de noviembre de 1917.

[13] «Notas a la revolución rusa», Solidaridad Obrera, 12 de noviembre de 1917.

[14] Solidaridad Obrera, 11 de noviembre de 1917.

[15] Sección Francesa de la Internacional Obrera, denominación adoptada por el socialismo francés a partir de la unificación de sus diversas corrientes, una de ellas marxista, en 1905; hasta su disolución en 1969.

[16] Aparte de la del PCR-b y de los partidos comunistas de los países bálticos, Bielorrusia, Armenia o Rusia oriental –todos ellos antiguos grupos bolcheviques–, las únicas delegaciones representativas fueron las del Partido Comunista Alemán (KPD), el austriaco, el Partido Obrero Noruego, el Partido Socialdemócrata Sueco de Izquierda y la corriente de izquierda del Partido

Socialista Suizo.

[17] En realidad fue un levantamiento del Partido Socialista Independiente (USPD), con participación del KPD. José Luis Martín Ramos, «El KPD en la política de la Internacional Comunista», Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM 8 (2019).

[18] El Socialista, 2 de agosto de 1919.

[19] Aunque la participación en sus asambleas no rebasaba los 400 asistentes, la ASM sumaba unos 1.300 afiliados del total de 34.347 del partido; y esa la fuerza global que sus delegados hacían valer.

[20] El partido había experimentado un salto numérico desde el X Congreso, un año atrás, cuando sus delegados representaron a 13.800 afiliados del total de 14.600. Los debates del congreso fueron publicados por El Socialista entre el 10 y el 16 de diciembre de 1919.

[21] Cada delegado votaba por el total de miembros de la agrupación que representaba.

[22] El Socialista, del 16 al 18 de diciembre de 1919.

[23] Phillips, uno de los jóvenes norteamericanos que se refugiaron en México, en protesta por la entrada de su país en la guerra mundial, secundó a Borodin en la fundación de un minúsculo Partido Comunista Mexicano «por arriba» en una reunión de sanedrín de la dirección del ya reducido Partido Socialista del país y al margen del movimiento obrero existente. Paco Ignacio Taibo II, Los bolsheviquis. Historia narrativa de los orígenes del comunismo en México 1919-1925, México, Joaquín Mortiz, 1986.

[24] Luis Arranz, «La ruptura del PSOE en la Restauración: el peso del Octubre ruso», Estudios de Historia Social 32-33 (1985).

[25] Borodin reemprendió viaje, ahora vía Ámsterdam, hacia Moscú a finales de enero.

[26] Renovación, 17 de marzo de 1920.

[27] Pierre Broué, Histoire de l’Internationale Communiste, 1919-1943, París,

Fayard, 1997, pp. 95 y 140-142.

[28] Le tomo el título a G. D. H. Cole, con el que encabeza uno de sus capítulos de la Historia del Pensamiento Socialista.

[29] Aldo Agosti, La Terza Internazionale. Storia documentaria, vol. 1, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 193.

[30] El Socialista, 28 y 29 de abril de 1920; supieron del movimiento por Marcel Cachin y Ludovic-Oscar Frossard, con quienes se entrevistaron en París.

[31] El Socialista, 14 de mayo de 1920.

[32] Ibid.

[33] El Socialista publicó entre el 20 y el 30 de junio las actas de debate y resoluciones del congreso del PSOE y del de la UGT que se celebró a continuación de este. Los datos y las citas del texto están basados en esa fuente.

[34] Sin entrar en el análisis de detalle, la cifra de casi 53.000 estaba inflada, pendiente de consolidar, entre otras cosas, por el aluvión de ingresos individuales y sobre todo colectivos –de organizaciones obreras– que se produjo en el primer semestre de 1920 y que no quedó confirmado posteriormente.

[35] La guerra soviético-polaca hizo albergar en el Estado soviético y la IC la esperanza de que un triunfo pondría a los polacos del lado de la revolución y estimularía la reactivación revolucionaria en Alemania. El Ejército Rojo llegó en agosto de 1920 a las inmediaciones de Varsovia, pero finalmente la gran mayoría de los polacos se pusieron del lado del nacionalista Pilsudsky, que, con el apoyo de Francia y el Reino Unido, contratacó, puso en retirada al Ejército Rojo y obligó a la firma de un armisticio, convertido en tratado de paz, en marzo de 1921, con el reconocimiento mutuo de los dos Estados.

[36] Luis Arranz, «La ruptura del PSOE en la Restauración: debate ideológico y político», en Santos Juliá Díaz (coord.), El socialismo en España: desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 161-189.

[37] Era el máximo que podía obtenerse, por mayorías; votaron 412 afiliados.

[38] El Socialista, 6 de enero de1921.

[39] Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Granada, Diputación de Granada, 1999, pp. 159 y ss.

[40] J. Humbert-Droz, Archives de Jules Humbert-Droz. I. Origines et débuts des partis communistes, Dordrecht, Reidel Publishing Company, 1970, p. 128.

[41] Nin, tras militar en el PSOE entre 1914 y 1918, ingresó en la CNT en 1919 y participó en el Congreso del Teatro de la Comedia, sin tener ninguna intervención; Maurín, que aún no se había afiliado al sindicato, asistió también al congreso, aunque solamente como espectador. Entre 1919 y 1921 se aproximaron al comunismo a través de sus relaciones con el sector del sindicalismo revolucionario francés partidario de la IC (Rosmer y Monatte).

[42] Andrade, Portela y Chicharro representaron al PC Español, y Núñez de Arenas, Torralva Beci y César R. González al PCOE.

[43] Merino Gracia, Millá, Pumarega, Gonzalo Sanz y Joaquín Ramos, por el PC Español; Torralva Beci, César R. González, Virginia González, José Rojas y Evaristo Gil, por el PCOE. Véase Gerald H. Meaker, La izquierda revolucionaria en España, 1914-1923, Barcelona, Ariel, 1978.

[44] Milos Hajek, Historia de la Internacional Comunista. La política de frente único, Barcelona, Crítica, 1984.

[45] J. Humbert-Droz, Archives I, p. 113. Formó un comité de negociación con Núñez de Arenas y Gonzalo Sanz; y mantuvo contactos bilaterales con diversos cuadros, entre ellos García Quejido, Virginia González, Ugarte y Andrade.

[46] Ibid., pp. 141 y ss.

[47] En aquel tiempo era perseguido por la policía española como cómplice del asesinato de Dato.

[48] J. Humbert-Droz, Archives I, p. 168.

[49] Francesc Bonamusa, El Bloc Obrer i Camperol, Barcelona, Curial, 1974.

[50] Aunque no se reconstituyó como Agrupación comunista hasta febrero de

1923.

[51] J. Humbert-Droz, Archives I. Informes de Jules Humbert-Droz.

[52] Juan Pablo Fusi, Política obrera en el País Vasco, Madrid, Turner, 1975.

[53] Jules Humbert-Droz, Les partis communistes des pays latins et l’Internationale communiste dans les années 1917-1923, Dordrecht, Springer, 1983.

[54] Contaban con un solo médico, que residía a 10 km de las minas, a las que había de llegar por caminos de sierra.

[55] José Bullejos, La Comintern en España. Recuerdos de mi vida, México, Impresiones Modernas, 1972.

[56] El 21 de diciembre de 1924 firmó en la cárcel, para obtener su libertad, junto con Ángel Pumarega su abandono del PCE; poco después se integró en los Sindicatos Libres.

[57] Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1931-1939, Barcelona, Planeta, 1999.

[58] Pérez Solís siguió colaborando desde la cárcel con el partido, publicando artículos en La Antorcha; hasta que, en marzo de 1928, tras una relación reanudada en la cárcel con el dominico José Gafo, impulsor del sindicalismo católico, hizo público su abandono del comunismo y su retorno al catolicismo militante.

[59] Enric Ucelay da Cal y Joan Esculies, Macià al país dels soviets, Barcelona, Edicions del 84, 2015.

[60] Marc Santasusagna i Gorzan, Quan la CNT cridà independència, Barcelona, Base, 2016.

[61] La doctrina formulada por Lenin, sobre todo entre 1913 y 1917, fue complementada a partir de la revolución de octubre con la propuesta del federalismo. El Segundo congreso de la IC ratificó la condena de la opresión de las naciones y las minorías nacionales, relegando la cuestión de la autodeterminación al mundo colonial y admitiendo políticas de transición, de

tipo federal, en el mundo capitalista desarrollado. En 1924 Zinoviev y Manuilski reactivaron la autodeterminación, como consigna despojada de reflexión que Lenin había acompañado al reconocimiento de ese derecho y enfrentándola al federalismo en Europa central y occidental, con el argumento de que este no hacía sino desviar la atención de la lucha por el derecho de autodeterminación y caer en las posiciones de la socialdemocracia.

[62] Diego Díaz Alonso, Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921-1982), Gijón, Trea, 2019.

[63] A. Elorza y M. Bizcarrondo, op. cit.

[64] Carlos Arenas Posadas, «Auge y caída de un grupo revolucionario: los dirigentes sevillanos del PCE, 1919-1936», texto inédito escrito en 1991 y proporcionado al autor.

[65] Jules Humbert-Droz, Archives de Jules Humbert-Droz, II. Les partis communistes et la Internationale, dans les années 1928-1932, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1988, pp. 235-236.

[66] Para evitar confusiones con el organismo de supervisión de los partidos comunistas latinoamericanos, el Secretariado Latino pasó a denominarse Romano a finales de los años veinte.

[67] A. Elorza y M. Bizcarrondo, op. cit., capítulo IV.

[68] Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, Madrid, Alianza, 1987, p. 113.

[69] Denominación adoptada en 1925, tras constituirse formalmente la URSS en 1923.

[70] Bullejos lo acusó, sin pruebas, de haberse convertido en confidente para ser puesto en libertad en 1927; pero el CE de la IC exoneró por completo al dirigente catalán.

[71] Véase la colaboración de Ignasi Bea en el segundo volumen de esta obra.

[72] Véase la colaboración de Manuel López Esteve en el segundo volumen de esta obra.

[73] J. Humbert-Droz, Archives de Jules Humbert-Droz, II, pp. 232 y 728.

[74] Ibid., II, cit., pp. 271-285.

[75] La Batalla, 4 de julio de 1931. El Sol, 9 de junio de 1931, reprodujo un texto ligeramente distinto, aunque coincidente en el fondo: «Creemos que Cataluña debe separarse (murmullos), pero no de España, sino del Estado. Cuando Cataluña, Vasconia y Galicia se hayan lanzado sobre el Estado, entonces se reedificará la auténtica unidad nacional y serán unos Portugal y Gibraltar con España entera (ovación)».

[76] Texto de la moción aprobada en el Segundo congreso de la Federación Comunista Catalano-Balear el 2 y 3 de abril de 1932. Roger Arnau [seudónimo de Josep Benet], Marxisme català i qüestió nacional catalana. 1930-1936, París, Edicions Catalanes de París, vol. 2, pp. 182-183.

[77] Comunismo, 11 de abril de 1932.

[78] R. Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, pp. 142-148.

[79] Ibid., pp. 295-298.

[80] Casanellas, antiguo anarquista de acción, participó en el atentado mortal contra Dato y huyó a la URSS, de donde regresó tras la proclamación de la República; tuvo que volver a exiliarse a Francia, por la causa pendiente que había sobre él, hasta la primavera de 1932; participó en el congreso de Sevilla y pudo por fin legalizar su situación y regresar definitivamente; su principal cualidad era la popularidad que tenía entre la militancia anarquista.

[81] Promovido por un veterano de Estat Català, Jaume Compte, que rompió con Macià cuando se fundó Esquerra Republicana de Catalunya, tenía el pequeño capital, a pesar de su escasa militancia, de estar concentrado en el sector de la dependencia mercantil, por cuyo control sindical competía con el BOC.

[82] José Luis de la Granja, El oasis vasco. El nacimiento de Euzkadi en la República y la guerra civil, Madrid, 2007, p. 113. En ambas provincias se registró oficialmente el 90 por 100 de participación y un 98 por 100 de síes. De la Granja recoge algunas dudas sobre incidencias, no mayores que las que pudiera haber suscitado el 99 por 100 de síes del plebiscito del Estatuto catalán, efectuado por sufragio universal masculino, con una participación menor, el 75

por 100, por el peso del abstencionismo anarcosindicalista.

[83] Esas críticas se producían también dentro del movimiento comunista. En el XI Pleno del CE de la IC, de marzo-abril de 1931, Manuilski se quejó de que el reconocimiento de la fascistización de la socialdemocracia no hubiera «entrado en la sangre de los partidos comunistas».

[84] José Luis Martín Ramos, El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado & Presente, 2015. En las páginas 33-46 he explicado más ampliamente todo ese episodio y la rectificación de la política de la IC.

[85] Ibid.

[86] Julio Aróstegui, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013.

[87] Marta Bizcarrondo, Araquistain y la crisis socialista en la República. Leviatán (1934-1936), Madrid, Siglo XXI de España, 1975; de la misma autora, «La Segunda República. Ideologías socialistas», en Santos Juliá Díaz (coord.), El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 255-274.

[88] Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010.

[89] R. Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, pp. 225-226.

[90] Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940, Madrid, Taurus, 2008.

[91] José Díaz, Tres años de lucha, Bucarest, Colección Ebro, 1974, pp. 7 ss.

[92] Constituido el 29 de septiembre de 1935 por la fusión del BOC y la Izquierda Comunista de España.

[93] J. L. Martín Ramos, El Frente Popular, pp. 132-140.

[94] Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, Taurus, 1971. Sigue siendo la mejor obra de referencia, por encima de recientes publicaciones

con mucho ruido y pocas nueces.

[95] El sistema electoral de la República, con complicadas atribuciones de escaños por mayoría y por minoría y posibilidad de que el votante escogiera nombres impide establecer un cómputo exacto.

[96] J. Díaz, op. cit., pp. 186-194.

[97] D. Díaz Alonso, op. cit.

[98] Puede consultarse en Santos Juliá, Orígenes del Frente Popular en España. 1934-1936, Madrid, Siglo XXI de España, 1979.

[99] Carta del CC del PCE a la CE del PSOE, 4 de marzo de 1936, AHPCE.

[100] J. Díaz, op. cit., pp. 219-223.

II

LA MALDICIÓN DE SÍSIFO: AUGE, CAÍDA Y RECONSTRUCCIÓN DEL PCE

(1936-1953)

– Fernando Hernández Sánchez –

EL PCE VISTO POR OTROS (Y POR SÍ MISMO)

El periodo comprendido entre 1936 y comienzos de la década de 1950 estuvo marcado por el auge, la caída, la travesía del desierto y las primeras tentativas de reconstrucción del PCE. Nunca fue más verdad que el tiempo no transcurre de forma lineal y que sus pliegues adquieren espesores muy distintos dependiendo de las circunstancias. La representación icónica renacentista de la volubilidad de la Fortuna, con el giro de su rueda, no hubiera condensado mejor en una imagen sintética la accidentada evolución del partido en aquellos años. En menos de tres, los comunistas pasaron de constituir la columna basal de la República en guerra a sumergirse en la más sombría clandestinidad, de la cima a una fosa abisal de la que tardarían lustros en emerger. Tras esmaltar un imaginario heroico entre 1936 y 1939, la década de 1940 fue testigo de las dramáticas vicisitudes experimentadas por una organización del interior ilegal, penosamente reconstruida y reiteradamente aplastada, mientras sus cuadros se dispersaban a los cuatro vientos y sus activistas en la emigración se unían a las redes de resistencia, convencidos de que el combate iniciado en España continuaba, sin solución de continuidad, en la Francia ocupada, el norte de África o los bosques de Ucrania. Al final de este periodo, la gran caída de 1947 y las conveniencias de la geopolítica laminaron toda esperanza de un pronto derrumbe de la dictadura y propiciaron el cambio de orientación que, a partir de 1956, habría de sacar al comunismo español del valle de las sombras.

La inusitada pujanza experimentada durante la guerra de España por el que hasta poco antes del triunfo del Frente Popular había sido poco más que un grupúsculo marginal y sectario alimentó una serie de mitos, adversos y propios, que han subsistido hasta nuestros días. Entre los primeros, las memorias de sus competidores socialistas y anarquistas[1] ejecutaron un implacable ajuste de cuentas. Hablaron y no pararon del control comunista de la mayoría de los resortes de poder, ya directamente o por la interposición de compañeros de viaje, pero siempre a beneficio de los intereses de una potencia extranjera. Todos concordaron en relatar la supuesta traición del PCE a la revolución social, espontánea y genuinamente española que había estallado en julio de 1936 y habría sido enterrada por los estalinistas en la primavera y el verano de 1937 en las calles de Barcelona y los campos del Bajo Aragón.

La idea de la hegemonía comunista resultante de su eficaz infiltración en los resortes medulares del aparato del Estado fue también difundida por la literatura de combate franquista[2], pero sus dicterios no habrían sido homologados por la historiografía occidental a no ser por los avatares de la Guerra Fría. Fue Burnett Bolloten quien estableció un modelo interpretativo que caló en diversas corrientes políticas e historiográficas unidas por el denominador común del anticomunismo: en España, los comunistas desplegaron una estrategia de «gran camuflaje» mediante la que lograron enmascarar sus verdaderas intenciones –implantar una versión avant la lettre de las democracias populares impuestas por los tanques soviéticos en la Europa del Este a partir de 1948– bajo la capa de la sedicente defensa coyuntural de la legalidad republicana[3]. Divinas palabras para los oídos y las conciencias laceradas de un mundo occidental que sostuvo diplomática y comercialmente a Franco, calificado como mal menor, mientras se enjugaba hipócritamente una lágrima por el romanticismo revolucionario traicionado. Para dos generaciones de historiadores, la continuamente revisitada teoría bolloteniana funcionó como una trampa de acero que solo saltaría al conjuro de la apertura de los archivos y la revelación de las fuentes directas.

Como no podía ser menos, el PCE también mitificó su pasado. La interpretación oficial, contenida en Guerra y Revolución en España[4] –la obra colectiva que sentó un canon que debía buena parte de su cuerpo argumental a un Palmiro Togliatti revestido con la retórica ardiente de Dolores Ibárruri–, sostuvo que el pueblo español había librado una guerra revolucionaria contra los residuos feudales de la aristocracia terrateniente, el capitalismo monopolista y el ejército de casta. Una guerra nacional por la independencia cuya causa movilizó la solidaridad internacional antifascista, materializada en la ayuda militar de la

Unión Soviética y en la entrega de las Brigadas Internacionales. En el horizonte se hallaba la consecución de una república de nuevo tipo, antioligárquica y antimonopolista, a la que el PCE contribuyó con la forja de las herramientas más eficaces para su defensa: el Quinto Regimiento, el Ejército Popular, el comisariado y una imbatible capacidad de movilización. En definitiva, el PCE habría sido la más perfecta emanación del pueblo republicano, el más consecuente mantenedor de su resistencia y el legatario de la epopeya del combate antifascista.

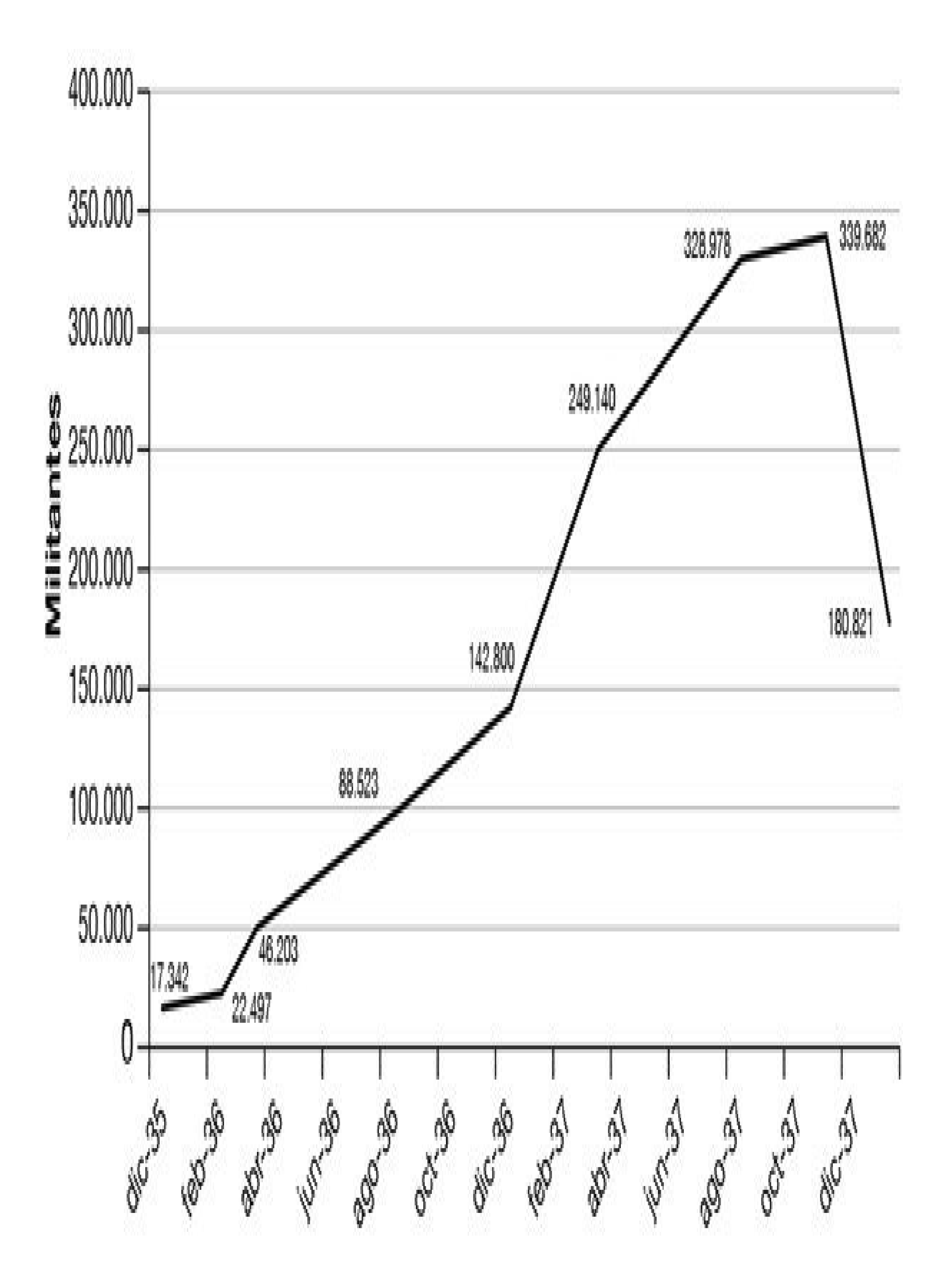
UN PARTIDO DE NUEVO TIPO PARA UNA SOCIEDAD EN GUERRA (1936-1939)

El PCE, que durante la mayor parte del periodo republicano había sido un grupo minoritario y de escasa relevancia, llegó a 1936 recogiendo los primeros frutos tangibles del cambio de estrategia imprimido por el VII Congreso de la Komintern y su apuesta por la formación de amplias alianzas antifascistas con la socialdemocracia y la burguesía liberal. Los 8.800 carnés repartidos al acabar 1931 se elevaron a 13.000 recién obtenido su primer diputado, el doctor Cayetano Bolívar, en diciembre de 1933 y alcanzaron los 19.000 en el convulso verano de 1934. La represión posterior a octubre restó cinco millares de miembros, pero su defensa de los presos y represaliados, la apuesta por la política de aproximación a otras fuerzas obreras y democráticas, el triunfo del Frente Popular, las expectativas generadas durante aquel semestre de 1936 y la respuesta masiva a la rebelión militar del mes de julio dispararon en flecha el número de adhesiones, hasta la cota de los 88.523 afiliados[5]. Conviene, en todo caso, precaverse de conceder un crédito absoluto a las cifras. En la organización comunista, el título de militante se alcanzaba a partir de determinado grado de compromiso. Estaban los simpatizantes sin carné, que asistían esporádicamente a mítines y votaban por el partido; los adherentes que, aunque formalmente afiliados, se limitaban a poco más que cotizar y leer la prensa orgánica; los militantes propiamente dichos, que se implicaban con su asistencia a reuniones periódicas, colocación de propaganda, organización de actos públicos, es decir, hacían vida de partido; y los activistas, revolucionarios profesionales a tiempo completo que, dependiendo de la disponibilidad, pasaban a ser cuadros liberados. En cualquier caso, debe reconocerse que fueron años de

un inédito, intenso y posiblemente nunca más repetido crecimiento orgánico en los terrenos político y sindical: los 350.000 miembros de la JSU, la idéntica cantidad de adheridos al Socorro Rojo Internacional (SRI), los 2.000.000 de asociados a UGT, los 1.200.000 de la CNT o los entre 60.000 y 75.000 afiliados del PSOE fueron el resultado de la irrupción en escena de una generación numerosa y activa, deseosa de llevar a cabo la transformación radical de unas estructuras económicas y sociales secularmente injustas.

La pleamar del nivel de afiliación se alcanzó a finales de 1937. La epopeya de la defensa de Madrid, testigo de episodios con una fuerte carga emotiva –la llegada de las Brigadas Internacionales y del armamento soviético–, la reconducción del proceso revolucionario, la reconstrucción del Estado republicano, por un lado, frente a las divisiones internas no resueltas del partido socialista, la pasividad de la socialdemocracia internacional y el debilitamiento de la influencia anarquista, por otro, contribuyeron a que las filas del PCE alcanzaran los 340.000 afiliados al terminar el año. El flujo creciente de afiliados estuvo relacionado, sin duda, con el incremento de su influencia como actor destacado del momento, pero también con la eficacia con que supo aunar las sensibilidades y aspiraciones de un conjunto heterogéneo de sectores sociales. El PCE se mostró capaz de reformular objetivos propios de un ideario popular de izquierdas, unitario, democrático y patriótico una vez abandonada la postulación retórica de metas maximalistas. El alejamiento de las concepciones vanguardistas y de las exigencias periódicas de depuración interna abolió las barreras que dificultaban la toma de posición como miembro del partido, normalizando el proceso de adhesión. Ser comunista llegó a entenderse como una cuestión natural, como una opción normalizada, incluso como una vía de promoción meritocrática y perfectamente coherente con la lógica del contexto de la República en guerra[6]. El resultado de ello fue una militancia heterogénea que reprodujo a escala la estructura social del pueblo republicano, con algunas peculiaridades significativas.

Cuadro 1. Evolución del número de militantes comunistas (1931-1938)


Militantes
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
17.342
22.497
46.203
88.523
142.800
249.140
328.978
339.682
180.821
dic-35
feb-36
abr-36
jun-36
ago-36
oct-36
dic-36
feb-37
abr-37
jun-37
ago-37
oct-37
dic-37

Fuente: Elaboración propia. Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010.

Las cifras aportadas por el secretario general, José Díaz, en el pleno que tuvo lugar en Valencia en marzo de 1937 –al que casi podría considerarse un auténtico congreso– indicaban que el PCE era un partido donde los campesinos, en sus diversas variantes –jornaleros, cooperativistas, colectivistas y pequeños propietarios–, constituían el 55,7 por 100 de la militancia. Les seguían los trabajadores de la industria (el 35,1 por 100) y los de los servicios (9,2 por 100). Comparada con la estructura de la sociedad española, los trabajadores de la tierra tenían una mayor representación que el resto y los empleados lo estaban en menor medida. Hay que señalar la presencia de un 4,4 por 100 de intelectuales, resultado de la fuerte atracción ejercida por el comunismo en el ámbito del mundo de la cultura[7]. Tres cuartas partes de los miembros del partido habían tomado el carné a partir de julio de 1936. De los restantes, solo un 18 por 100 había militado en la época relativamente normal de febrero a julio de dicho año. Se estimaba que la mitad de los 22.947 afiliados que había en febrero de 1936 había sucumbido en los primeros meses de la guerra. La bisoñez de la militancia se acentuó con el transcurso de la guerra. En diciembre de 1937, el 89,3 por 100 de los efectivos se habían adherido al partido tras el comienzo de la misma, y el 45,9 ostentaba una «veteranía» que oscilaba entre los 6 y los 12 meses. Una característica que, si bien indicaba la pujanza de una fuerza impetuosa en tiempos de movilización extrema, iba a resultar letal en condiciones de repliegue a la más estricta de las clandestinidades.

Dos rasgos que llamaban poderosamente la atención al repasar los rostros de los nuevos militantes incorporados a la vida política en aquel momento eran la juventud y la feminización. La movilización de una juventud cuyas cohortes demográficas eran muy numerosas fue uno de los elementos distintivos de los años treinta[8]. El PCE consiguió posicionar en su órbita a la Juventud Socialista Unificada (JSU), resultado de la fusión de la Federación Nacional de la Juventud Socialista (FNJS) y de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE). La JSU se convirtió en un fértil vivero de cuadros durante la guerra y sería un imprescindible reservorio de activistas bajo la clandestinidad. La feminización

de la militancia concordaba con el entusiasmo de las nuevas promociones de muchachas que accedían por primera vez a la vida pública a través de la política con el deseo de abandonar las parcelas que la sociedad tradicional les tenía destinadas: hogar, crianza de la prole e Iglesia. Milicianas, responsables de comités, colectividades y fábricas, las mujeres comunistas expresaron sus inquietudes y plantearon sus objetivos a través de una plataforma propia: la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), que llegó a contar con 50.000 integrantes y fue el resultado de la fusión de la Unión de Muchachas, la Uniò de Dones de Catalunya y la Aliança Nacional de Dones Joves.

En definitiva, el PCE, con su crecimiento exponencial, la integración en su seno de capas sociales heterogéneas y de los sectores más dinámicos de la población, fue el primer partido de la izquierda capaz de contribuir a alcanzar el objetivo fundamental de la política española desde 1931: la movilización popular interclasista. Dicho de otra forma, se convirtió durante la guerra en el mejor partido republicano que España había conocido nunca[9]. Sin embargo, el cariz que fue tomando la conflagración tras la pérdida de bastiones importantes –Málaga, Vicaya, Asturias– y el corte del territorio republicano después de la definitiva pérdida de Teruel, provocaron una caída espectacular de las cifras de adhesiones. Cuando se inició la batalla del Ebro, en julio de 1938, solo quedaban unos 11.000 militantes de la vieja guardia. Aplicando a las cifras consignadas en enero de 1938 un índice medio de volatilidad del 30 al 40 por 100, que era el resultado de la diferencia entre matrices de carnés repartidas a los comités provinciales y los carnés efectivamente entregados, la militancia real del PCE se podría situar entre los 128.214 y los 115.393, y aun así es probable que solo una cuarta parte –en torno a 30.000– ejerciese un activismo político significativo. De la evolución posterior no hay datos, pero cabe sospechar que el pesimismo y el aumento de la inquietud por el futuro aceleraron la tendencia al desplome.

La guerra nacional-revolucionaria y la solidaridad internacional

La sublevación contra la República, la necesidad perentoria de mantener la política de alianzas y la voluntad de no fragilizar la apuesta soviética por el esquema de seguridad colectiva en Europa condujo desde los primeros compases a una caracterización del conflicto que conjugó la realidad de la nueva dinámica

social desencadenada y la denuncia de la intervención extranjera. Ya el mismo 17 de julio, mientras el levantamiento daba sus primeros pasos en el protectorado de Marruecos, Dimitrov y Manuilski, los máximos responsables de la Komintern, dirigieron instrucciones al Buró Político del PCE para «preservar intactas, y a toda costa, las filas del Frente Popular». Apostaban por la formación de milicias de obreros y campesinos, por depurar el ejército y las fuerzas del orden, por «despojar a la aristocracia de todos los derechos de ciudadanía, confiscar sus bienes, expulsarla del país y prohibir su prensa»[10]. La directriz a los comunistas españoles fue tajante: «Debéis actuar exclusivamente bajo la bandera de la República»[11]. Quedaba excluida la posibilidad de que los comunistas participasen en un hipotético gobierno si no fuera «urgente y absolutamente necesario para aplastar la insurrección». Se mantenía de esta forma la posición de apoyar desde fuera a los gabinetes de Frente Popular, tranquilizando a las potencias occidentales y evitando el desbordamiento motivado por un espasmódico entusiasmo revolucionario[12].

La lectura comunista de la guerra de España fue protocolizada por Palmiro Togliatti, miembro del Secretariado de la Komintern que acabaría ejerciendo como tutor del PCE sobre el terreno desde junio de 1937. Según Ercoli –su alias en España–, lo que se ventilaba no era una reedición de la Revolución de Octubre de 1917, ni la implantación del comunismo libertario. Era, por contra, la culminación de la revolución democrático-burguesa que las propias clases directoras del país habían sido incapaces de completar a lo largo del convulso siglo XIX y hasta entonces. El levantamiento reaccionario había brindado la ocasión para la consolidación de una democracia de nuevo tipo despojada de los vestigios feudales, de la vieja oligarquía terrateniente y de la influencia clerical, pero aún no había sonado la hora de la revolución socialista. La del Frente Popular no era «una dictadura democrática de obreros y campesinos», sino una revolución popular, nacional y antifascista. En la visión togliattiana, la polaridad guerra / revolución era un falso dilema: la guerra la había precipitado una situación revolucionaria inédita que, si bien no era socialista en sus últimos extremos, no era en absoluto una preservación del anterior orden de cosas, totalmente superado a partir del 18 de julio. El nuevo precisaba ensanchar la base de la República para agavillar voluntades que iban más allá de la clase obrera y el campesinado, porque a un Estado totalitario en embrión, con una coalición de fuerzas reaccionarias en vías de unificación por decreto y subordinadas a una sola voluntad caudillista, a un ejército dotado de unidades de élite y pertrechado por la Alemania nazi y la Italia de Mussolini era preciso oponerles un poder centralizado, un bloque antifascista cohesionado, un ejército

popular con mando único y una potente industria militar. En la guerra, había que conducirse como en la guerra[13].

En aplicación de esta línea, el PCE publicó el 26 de agosto una declaración programática en la que fijó como objetivo primordial, al que quedaban supeditados todos los demás, el aplastamiento de la reacción. Una vez conseguido, y sin abandonar nunca el marco del Frente Popular, debería procederse a la nacionalización del sector financiero –tanto del Banco de España como de la banca privada– y de los sectores estratégicos –los ferrocarriles, las minas y las industrias fundamentales–, así como a la confiscación de todas las empresas abandonadas por sus dueños. Los comunistas postulaban la municipalización de todos los servicios públicos urbanos –tranvías, autobuses, gas, electricidad, casas de vecindad– y la encomienda de su gestión a los comités de Frente Popular. El gobierno debía impulsar un ambicioso programa de obras públicas, planes de regadío, construcción de carreteras y puertos. Había en la declaración una defensa contundente de la reforma agraria, comenzando por la incautación de las tierras de los simpatizantes de la sublevación. Por último, se hacía un guiño a la clase media republicana al postular una «política hacendaria que desgrave de las cargas que una economía semifeudal hacía pesar sobre la pequeña burguesía rural y urbana» y prometía una legislación social, que asegurase el bienestar material y cultural de las clases trabajadoras[14].

El carácter nacional-popular de la guerra quedó fijado el 4 de septiembre, cuando, la víspera de ser designado ministro de Instrucción Pública, Jesús Hernández, miembro del Buró Político, habló por radio para afirmar que la guerra era contra los «enemigos seculares [de España], los magnates de la tierra [y] los usureros miserables». Frente a ellos se situaban obreros y campesinos que combatían «por una existencia digna, por la posesión de la tierra, por la libertad», intelectuales en lucha «por la causa de la cultura amenazada y el progreso detenido», mujeres que no querían «el látigo y el hambre para [sus] hijos» y, en definitiva, el «pueblo trabajador, digno e invencible»[15]. Como señalaron observadores extranjeros, «el PCE no cree, en las actuales circunstancias, en la viabilidad y las posibilidades de una República soviética española; considera que, a la vista del estado de Europa y los riesgos de una cruzada antiobrera, el paso por la fase de una República democrática fuertemente escorada a la izquierda es inevitable, por un tiempo más o menos largo»[16].

La ayuda soviética

Al tiempo que la sublevación semifracasada se convertía en guerra civil, España comenzó a situarse en el centro de atención de la política internacional, concitando la preocupación de las cancillerías y la solidaridad de las distintas corrientes del movimiento obrero. El entusiasmo antifascista no tuvo un correlato en el ámbito diplomático, en el que la guerra provocó de inmediato el temor a una fragilización del ya por entonces inestable equilibrio europeo. La URSS, partidaria del mantenimiento de una política colectiva de seguridad para defenderse del revanchismo alemán mediante una entente con las potencias occidentales, instó inicialmente a sus representantes a no manifestar públicamente su simpatía con el gobierno de Madrid[17] y aceptó un asiento en el Comité de No Intervención de Londres[18]. Los pronunciamientos favorables a la República española quedaron, de momento, limitados a la organización de manifestaciones populares en torno al 1 de agosto –fecha de movilización general contra una nueva guerra imperialista–. En Moscú y Leningrado se congregaron más de 100.000 personas, aunque destacó la ausencia de altos dirigentes de la Internacional o del PC(b). La postura oficial soviética se ajustaba a una realpolitik consistente en exigir que no hubiera injerencias externas en el conflicto español y en reclamar los legítimos derechos de libre adquisición de armas por parte del gobierno de Madrid. Como expresó gráficamente durante un mitin el 25 de agosto en París Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés (PCF): «Por la no intervención, pero contra el bloqueo»[19].

Cuando entre el 29 de julio y el 16 de agosto llegaron a Moscú mensajes con la información de que los insurgentes recibían ayuda alemana por la frontera portuguesa, Cádiz y otros puertos secundarios, así como del avistamiento de aviones italianos en las filas rebeldes[20], el Kremlin se inquietó por las implicaciones y adoptó medidas. Los últimos mensajes captados por la inteligencia británica antes de que la Komintern constatara que el MI-5 había roto su clave de cifra hacían ya alusión al envío de los primeros asesores militares que el Comité Central del PCE debía poner al servicio del Estado Mayor del Ejército[21].

A medida que subía como la espuma la corriente de simpatía por la causa española y se sucedían las manifestaciones populares en todo el mundo, los dirigentes soviéticos se vieron forzados a admitir que, si la URSS quería

mantener una posición de liderazgo entre el proletariado internacional, no podía sustraerse a la necesidad de hacer algo efectivo para defender a la República. Máxime en un contexto de combate abierto contra la oposición interna, cuyas manifestaciones más virulentas se estaban escenificando desde el 19 al 24 de agosto en el proceso contra los antiguos líderes de la Komintern y del ala izquierda del PCUS, Zinoviev y Kamenev[22].

El 18 de septiembre se reunió el Secretariado de la Komintern para discutir la política del partido español, el despliegue de una campaña de solidaridad, el suministro de ayuda material y la convocatoria de una conferencia de organizaciones internacionales del proletariado en apoyo a la República española a celebrar en Annemasse (Francia). De todos los puntos, el que ocupó la mayor parte del tiempo fue el de la discusión específica sobre la ayuda técnica. Se asignó al PCF la tarea de crear una red de reclutamiento de voluntarios para combatir en España –germen de las futuras Brigadas Internacionales– y del acopio y transporte de armas adquiridas en el mercado negro. Fue el 29 de ese mes cuando el Buró Político del partido soviético diseñó definitivamente el operativo para la provisión de ayuda militar («Operación X”) por un montante de 1.910.000 rublos y 190.000 dólares americanos[23].

El 15 de octubre, Stalin telegrafió a José Díaz:

Los trabajadores de la Unión Soviética, al ayudar en lo posible a las masas revolucionarias de España, no hacen más que cumplir con su deber. Se dan cuenta de que liberar a España de la opresión de los reaccionarios fascistas no es un asunto privado de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad avanzada y progresista.

La URSS efectuó una declaración pública en la que reclamó su libertad de acción respecto a la No Intervención, aunque sin dejar de tomar parte en el Comité de Londres. Los primeros tanques T-26 llegaron a tiempo de combatir en la batalla de Seseña (29 de octubre) y los aviones Polikarpov I-15 e I-16 (Chatos y Moscas) se batieron en duelo con los Heinkel sobre los cielos de Madrid. Para entonces, los suministros que italianos y alemanes proporcionaron a Franco desde la primera hora habían desequilibrado la balanza de fuerzas de forma

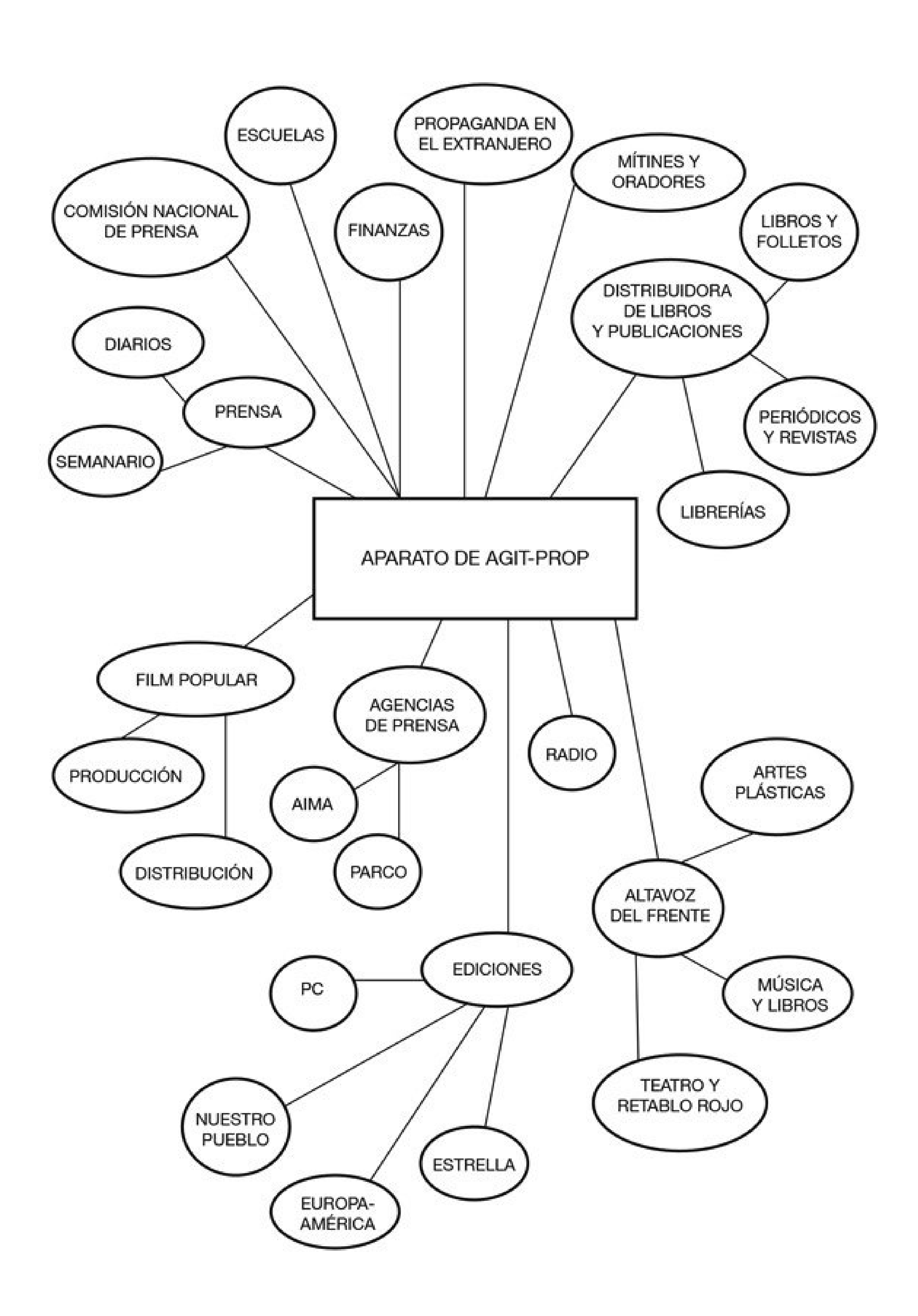
prácticamente decisiva.

La segunda guerra de independencia

El discurso comunista se centró progresivamente en la defensa de un patriotismo de raíz popular. Tal posición cristalizó definitivamente en mayo de 1937 con la constitución del gobierno del doctor Juan Negrín, en cuyo seno el PCE esgrimió «la defensa de la libertad y la independencia de la Patria» como clave de la victoria. Frente a la versión castiza y mistificada enarbolada por un enemigo enfeudado con potencias extranjeras, el PCE residenció la auténtica base del patriotismo en el pueblo. Para instilar ese orgullo nacional renovado, el partido recurrió a un repertorio de referentes históricos presentes en la pedagogía republicana de preguerra. Contra los mitos de la cristiandad medieval, la unificación territorial bajo los Reyes Católicos y el belicismo imperial de Carlos V y Felipe II –genealogía de la hispanidad esgrimida por la reacción–, los dirigentes comunistas enunciaron un friso alternativo trufado de personajes caracterizados por una enérgica rectitud frente al abuso de los poderosos –El Cid, Padilla, Agustina de Aragón, Goya– y de hitos que encarnaban el espíritu de independencia: Sagunto, Numancia, los comuneros, las germanías, la Guerra de Independencia –cuyo 2 de mayo prefiguraba la resistencia de Madrid–, el octubre asturiano de 1934 y el levantamiento popular contra los golpistas de julio.

Las consignas sobre la guerra nacional-patriótica y la resistencia a ultranza alcanzaron a una parte importante de la población de la zona republicana mediante el gigantesco aparato de propaganda edificado por el PCE, una auténtica factoría de producción de contenidos ideológicos (véase cuadro 2).

Cuadro 2. El aparato de agitación y propaganda del PCE (1937-1938)


APARATO DE AGIT-PROP
COMISIÓN NACIONAL DE PRENSA
ESCUELAS
FINANZAS
PROPAGANDA EN EL EXTRANJERO
MÍTINES Y ORADORES
LIBROS Y FOLLETOS
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PUBLICACIONES
PERIÓDICOS Y REVISTAS
LIBRERÍAS
DIARIOS
PRENSA
SEMANARIO
FILM POPULAR
PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN
AGENCIAS DE PRENSA
AIMA
PARCO
RADIO
ARTES PLÁSTICAS
ALTAVOZ DEL FRENTE
MÚSICA Y LIBROS
TEATRO Y RETABLO ROJO
EDICIONES
PC
NUESTRO PUEBLO
EUROPA-AMÉRICA
ESTRELLA

Fuente: Elaboración propia. Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución, Barcelona, Crítica, 2010.

La lista de publicaciones periódicas comunistas era extensa, sus tiradas abundantes y su audiencia numerosa.

Tirada de los periódicos y revistas del PCE (1937-1938)

Cabecera	N.o de ejemplares
Mundo Obrero	41.500
Mundo Obrero para los frentes	30.000
El Sol	28.000
La Voz	20.844
Estampa	70.000
No Veas	31.000
Frente Rojo	30.000
Verdad	9.800
Nuestra Bandera	20.000
Tierra, Mar y Aire	8.000
La Voz del Campo	15.000

Otras provincias	77.000
Total	381.144
Difusión estimada (media de 6 lectores por ejemplar)	2.286.864

■

Algunas de ellas estaban concebidas como periódicos murales y otras –por el predominio de la imagen sobre el texto (Estampa)– debían tener un promedio de lectores por número mucho más elevado que las cabeceras de carácter teórico (Nuestra Bandera), profesional (Tierra, Mar y Aire) o meramente informativo. Así, es muy probable que bastante más de dos millones y medio de habitantes de la zona republicana tuviesen diariamente acceso a publicaciones impulsadas por el PCE. A ello había que añadir a quienes escuchaban emisoras, asistían a la proyección de películas, representaciones musicales o teatrales, contemplaban carteles producidos en sus talleres o se encontraban con los mítines-relámpago, lo que contribuía a la percepción de la omnipresencia comunista en todos los ámbitos del frente y la retaguardia.

Es interesante destacar la concepción totalmente moderna de estas publicaciones. A pesar de ser órganos oficiales de una organización política, recurrían a elementos propios de la prensa popular del siglo XX (grandes titulares, encuestas, profusión de información gráfica…) frente a la concepción más decimonónica de órganos partidarios como, por ejemplo, El Socialista, en el que predominaba el texto destinado al comentario político. Aprovechando los avances del huecograbado, de técnicas como el collage fotográfico e instantáneas impactantes captadas por los reporteros gráficos, los comunistas explotaron las posibilidades de la prensa popular. Los recursos gráficos, fotografías y dibujos se utilizaban para transmitir imágenes idealizadas y arquetípicas tomadas del repertorio iconográfico propio y transmitían un mensaje subliminal. Los grandes titulares facilitaban la lectura incluso a distancia e implicaban una labor de selección y condicionamiento previo del lector. Eran vehículos sencillos para la transmisión de consignas políticas y permitían la llegada de las mismas a aquellos sectores populares con menor formación que podían mostrarse reticentes o refractarios a una lectura trabajosa.

La línea del giro patriótico, exitosamente difundida en el tramo central de la guerra, supuso la definitiva subordinación de los objetivos socialistas a los de la defensa nacional dentro del paradigma nacional-revolucionario. Se realzaron los valores fundacionales de la República del 14 de abril actualizados, en la medida en que la oligarquía que había frustrado históricamente la revolución democrática había quedado liquidada y dentro de un regeneracionismo inserto en el ideario popular de izquierdas forjado durante el medio siglo anterior. Los enunciados de un marxismo-leninismo invocado solo en términos rituales

quedaron relegados al papel de referentes autoidentificativos, pero no primordiales, integrados en el magma de una línea de unión nacional que perviviría, con oscilaciones, a la guerra y a la derrota. Una unión nacional que, erigida en formulación estratégica del PCE, tendría un largo recorrido: con sucesivas coberturas y distintos socios desde los tiempos de la guerrilla hasta los de la Junta Democrática, pasando por la Unión Democrática Española y el Pacto para la Libertad, estaría perdurablemente inscrita en la concepción del partido como opción articuladora de las alianzas para la recuperación de la democracia y las libertades abrogadas por la dictadura franquista[24].

Los comunistas en el gobierno

Cuando Largo Caballero se hizo cargo del gobierno el 4 de septiembre de 1936, la situación de la República era dramática. Objetivo a destruir por la sublevación de buena parte de su ejército como punta de lanza de una coalición reaccionaria alimentada desde tiempo atrás por los monárquicos; fragilizada por la pérdida de sus aparatos coercitivos y por el subsiguiente estallido de la revolución social en amplias zonas de su retaguardia; atomizada en un red dispersa de poderes concurrentes de ámbito local; y víctima de una no declarada agresión extranjera ante la pasividad, primero, y la inoperancia culposa, después, de un sedicente Comité de No Intervención que le negaba los privilegios de adquisición de medios de defensa propios de un Estado soberano miembro de la Sociedad de Naciones. Era una situación de emergencia que requería medidas de emergencia.

Los comunistas españoles llegaron al gobierno infringiendo una de las directrices básicas que la Komintern había impuesto a sus secciones nacionales cuando formuló la estrategia de frentes populares en su VII Congreso de 1935: a los gobiernos de coalición antifascista, donde surgieran, se les apoyaría desde fuera, pero no se entraría en ellos. Dicho en términos simples, para los republicanos de izquierda y los socialistas serían los despachos; para los comunistas, la calle y las trincheras. Necesidad geoestratégica obligaba: Stalin estaba interesado en la consolidación de un sistema europeo de alianzas para contener a la Alemania nazi y no convenía asustar a las posibles parejas de baile, las potencias capitalistas occidentales, con el espectro de un gobierno con participación comunista que pudieran interpretar como precursor de una

revolución bolchevique. Pero la situación en España era mucho más dinámica de lo que podía prever la política diseñada por un centro tan distante como Moscú en aquel periodo y aquel continente tan convulsos.

La posibilidad de desbordamiento de la situación por mor de la revolución social espontánea, los perniciosos efectos que la violencia tenía para la imagen exterior de la República y la escalada intervencionista de italianos y alemanes en el conflicto español, sin que el Comité de Londres reaccionara, llevaron a los comunistas a aceptar la invitación de Largo Caballero para incorporarse al nuevo gabinete[25]. En él estaban representados desde los nacionalistas vascos a las dos centrales sindicales, UGT y CNT, pasando por republicanos y socialistas. Mundo Obrero lo saludó como el gobierno que no solamente salvaría a España «del desorden, del caos y del fascismo», sino que debería llevar a la práctica los objetivos de la República democrática: amplia reforma agraria, seguros sociales, jornada máxima y salario mínimo, socorro de paro, enfermedad y vejez, protección del trabajo, de la mujer y la juventud, disposición de las ciencias y las artes al servicio del pueblo, erradicación del analfabetismo, reconocimiento de los derechos de Cataluña, Euskadi y Galicia y autodeterminación para Marruecos. En definitiva, un «gobierno de la Victoria» que asegurara «el pan, el trabajo, la tierra, la libertad y una amplia democracia para todos los españoles»[26].

El de Largo Caballero fue el primer gobierno de la historia de España –y de Europa occidental– que contó con presencia comunista. Tres fueron los objetivos fundamentales con los que el PCE aterrizó en él: llevar a cabo las transformaciones económicas y sociales que reclamaba una sociedad mayoritariamente campesina en pie de guerra; crear un nuevo ejército popular, con disciplina y unidad de mando; y combatir eficazmente al enemigo en la retaguardia. Junto a ello, sus metas como partido serían disputar la hegemonía en el campo de la izquierda, combatir al trotskismo y lograr la reunificación marxista en una organización única adscrita a la Internacional Comunista.

Uno de los principales puntos de fricción entre las distintas opciones representadas en el gobierno republicano fue el de la gestión de la explotación de la tierra. Las divergencias entre partidarios y adversarios de la colectivización surgieron casi al mismo tiempo en que el aplastamiento del levantamiento militar fragmentó el territorio, pulverizó las viejas relaciones sociales y abolió los tradicionales regímenes de propiedad. La solución colectivista no era la única posible. Por supuesto, fue la preferida por el estrato más pobre del campesinado,

el que carecía de tierras. La colectivización le permitió, por primera vez, acceder a la capacidad de gestionar en plano de igualdad un bien común y, en última instancia, otorgó a los antiguos jornaleros la dignidad que les habían negado décadas de explotación extrema, sojuzgamiento social y marginación política[27]. Pero otros sectores del campesinado, igualmente pobres –pequeños propietarios de parcelas de explotación familiar, arrendatarios en diversos regímenes de obligación y duración contractual–, tenían sus propias opciones, desde la secular reivindicación del reparto a las fórmulas arbitradas por las nuevas autoridades de la República en guerra.

Vicente Uribe Galdeano (1902-1961), ministro de Agricultura, hubo de enfrentarse de inmediato a la crítica situación del abastecimiento de víveres a la población de las grandes ciudades, causada por la pérdida de la mayor parte de las regiones cerealistas, ganaderas y lecheras, caídas bajo control de los rebeldes, y a una hiperinflación ocasionada por el desbarajuste monetario que pronto derivaría en la eclosión del mercado negro. La respuesta de su ministerio consistió en los decretos de expropiación de la tierra de propietarios adeptos a la sublevación y su entrega a los campesinos (7 de octubre de 1936), de registro y legalización de las colectividades (8 de junio de 1937) y de creación de cooperativas agrícolas (27 de agosto de 1937). En julio de este último año impulsó la creación de la Dirección General de Abastecimientos, un organismo encargado de la distribución de víveres a la población civil que introdujo el racionamiento y los precios tasados para los artículos básicos.

Durante todo el periodo de la guerra –Uribe conservó el ministerio hasta la caída del gobierno Negrín el 5 de marzo de 1939– el total de tierras expropiadas sobrepasó los 7.000.000 de hectáreas. Para reducirlo a una escala apreciable, el equivalente a 8,7 veces la extensión de la Comunidad de Madrid o el 80,5 por 100 de la superficie de Andalucía. La de Uribe fue la tercera de las grandes reformas agrarias del siglo XX en promedio de superficie útil afectada, tras las de Rusia y China[28]. El Ministerio de Agricultura asumió el fenómeno de las colectividades nacidas de la revolución social del verano de 1936, pero obligando a sus comités rectores a pasar por ventanilla para legalizarlas. Frente a una idea muy extendida, el PCE no era hostil por definición a la colectivización, si bien el hecho de conocer los costes del proceso en Rusia, primero bajo el comunismo de guerra y luego bajo el mandato de Stalin, debió condicionar su apoyo a los pequeños campesinos y aparceros para que cultivaran la tierra ya fuera de manera colectiva o individualmente, pero sin imposición. En última instancia, y a ello contribuyó también la apuesta por las cooperativas de

productores, el objetivo era mantener el flujo del abastecimiento de víveres a los mercados urbanos y fomentar la adhesión del pequeño campesinado a la República mediante el acceso a la propiedad de la tierra, al estilo jacobino.

Jesús Hernández Tomás (1907-1971) ocupó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, responsabilidad que vio ampliada en el primer gabinete Negrín (17 de mayo de 1937) con las competencias de Sanidad, hasta su cese en abril de 1938. Hernández, que abandonó la escuela a los siete años y que a los doce fue elegido por sus compañeros del gremio de constructores de carruajes para representarlos sindicalmente, había sido un activista en su convulsa juventud y de ella heredó su infatigable vocación propagandística[29]. Con la pasión del autodidacta, estaba imbuido de la idea de que la difusión de la cultura respondía a una razón estructural –la abolición del analfabetismo, cuyo promedio alcanzaba el 40 por 100 de la población– y a una emergencia del momento: la necesidad de galvanizar la resistencia antifascista proporcionando al frente y a la retaguardia unos elementos de movilización tomados del repertorio del imaginario nacional-radical-popular aquilatado en el republicanismo y el movimiento obrero de entresiglos.

La base del pueblo antifascista, en la aplicación por Hernández de la política del PCE, estaba constituida por la clase trabajadora, compuesta de obreros y campesinos, intelectuales y pequeña burguesía no enfeudada con la oligarquía; y su expresión era el Ejército Popular, defensor de la independencia nacional frente a la agresión del fascismo internacional y de sus lacayos nativos. La educación popular debía ser el elemento que dotase de consciencia a ese pueblo republicano, defensor de una herencia cultural puesta desde ahora a su servicio frente a la barbarie de los sublevados, sedicentes defensores de una patria cuyo patrimonio histórico no dudaban en destruir si era preciso. La imagen dual quedó gráficamente representada en la salvación de los tesoros del Palacio de Liria llevada a cabo por las Milicias de la Cultura mientras su propietario, el duque de Alba, conspiraba en Londres para favorecer los intereses de los insurrectos que lo bombardearon.

Hernández contó con un destacado plantel de intelectuales, artistas y escritores incorporados al Partido Comunista o a su órbita en los años treinta. El catedrático Wenceslao Roces, traductor de las obras de Marx y Engels al castellano, fue su subsecretario; el cartelista Josep Renau, a la cabeza de la Dirección General de Bellas Artes, instó a la Junta de Protección e incautación del Tesoro Artístico Nacional a evacuar los cuadros emblemáticos del Museo del

Prado. A él se debe también la organización del pabellón español en la Exposición Internacional de París en 1937 y el encargo a Picasso del Guernica, gestionado por el escritor y presidente del Consejo del Teatro, Max Aub, escritor socialista afín al doctor Negrín. La exposición universal, junto a la celebración del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado entre el 4 y el 17 de julio de 1937, cuyas sedes españolas fueron Valencia, Madrid y Barcelona, contribuyeron a dar a conocer al mundo la situación de un país miembro de la Sociedad de Naciones que estaba siendo víctima de una guerra no declarada, ante la pasividad culpable de las potencias democráticas.

En el terreno educativo, el Ministerio de Instrucción Pública fundó los Institutos Obreros –en Valencia, Sabadell, Madrid y Barcelona, más otro en Alcoy que no pasó de la fase de proyecto– con la finalidad de promover la formación profesional de los jóvenes de ambos sexos entre los quince y los dieciocho años, de acuerdo a una pedagogía heredera del pensamiento de la Escuela Nueva, de la Escuela Moderna y de la Institución Libre de Enseñanza. En lo tocante a la tarea básica de erradicación del analfabetismo, fueron 200.000 los soldados del Ejército Popular que asistieron a las clases impartidas por las Milicias de la Cultura en las más de 2.000 escuelas creadas en los frentes, 105.000 los que aprendieron a leer y a escribir con la Cartilla Militar Antifascista editada por el Ministerio y decenas de miles los que asistieron a las representaciones de las Milicias del Teatro en las mismas trincheras, a las conferencias del Altavoz del Frente o a las proyecciones de películas soviéticas como El acorazado Potemkin o Los marinos de Kronstadt en los cines de la España republicana[30].

En definitiva, los dos ministros comunistas, cada uno en su ámbito, acometieron tareas que contribuyeron en una medida importante al sostenimiento de un esfuerzo de guerra que ningún otro país fue capaz de mantener contra el fascismo durante tanto tiempo. Y lo hicieron manteniendo abiertos y fluidos los canales de comunicación entre el despacho, la sensibilidad de la calle y las necesidades de los frentes, al menos mientras hubo territorio que administrar y la mínima esperanza de revertir la situación militar. Sus experiencias quedaron sepultadas por la derrota y solo pudieron rastrearse más tarde en proyectos de reforma agraria de distintos países latinoamericanos, en colegios españoles e instituciones educativas del exilio mexicano, en escuelas técnicas de los países socialistas o en las iniciativas sociales introducidas por los comunistas franceses e italianos durante su participación en los gobiernos de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Porque, históricamente, uno de los sectores

exportadores españoles de mayor valor añadido ha sido el exilio.

Ejército popular y mando único

Como respuesta a la sublevación militar, las organizaciones obreras reclamaron la entrega de armas al pueblo y emprendieron el reclutamiento de voluntarios para suplir al ejército, cuyas unidades fueron licenciadas por el gobierno republicano. El 20 de julio el PCE organizó en Madrid el Quinto Regimiento de Milicias Populares sobre la base de la sección de Cuatro Caminos de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, su organización de autodefensa y servicio de orden[31]. Las unidades nacidas de él, las Brigadas de Acero, con autonomía completa, sus propios servicios de transmisiones, sección de ambulancias y demás dotaciones, sirvieron de modelo para la constitución de las Brigadas Mixtas, unidad básica del futuro Ejército Popular (EP)[32]. El entramado organizativo (administración, estado mayor, escuela de formación de oficiales, unidades de guerrillas, abastecimientos, transportes y transmisiones, escuelas de enfermeras) y las actividades desplegadas para estrechar la relación entre los combatientes y la retaguardia –organizaciones de ayuda a los soldados y sus familias, campañas de recogida de ropa de abrigo, agitación y propaganda, conferencias, exposiciones– fueron otros tantos elementos que el EP tomó del Quinto Regimiento.

En el aluvión de nuevos reclutas destacó de manera significativa el contingente de simpatizantes comunistas. Fue el resultado de la movilización de milicias políticamente conscientes, entre las que el PCE, por sus dotes organizativas, logró gran número de adherentes. En el pleno del Comité Central de marzo de 1937 se evaluó en 131.600 (el 52,8 por 100) el número de afiliados incorporados al EP sobre un total de 249.140[33], cifras que en Madrid, primera línea de combate, se elevaban a 46.978 (el 74 por 100) de los 63.426 miembros con que decía contar el partido a comienzos de 1938[34].

En octubre se promulgó el decreto de creación del Comisariado General de Guerra, institución presente en los ejércitos revolucionarios desde la Convención francesa hasta la guerra civil rusa, cuya inspiración se disputaron a partes iguales

comunistas y anarquistas[35]. La iniciativa se materializó en sendos decretos de Largo Caballero con fecha del 16 y 17 de octubre de 1936. Mediante ellos se oficializaba la figura –surgida espontáneamente durante los primeros compases de la guerra– del delegado de los comités de milicias. El comisario habría de encargarse de estimular a los combatientes, mantener la moral y recordarles el sentido de la lucha. Para los comunistas, el comisario, «el primero en avanzar y el último en retroceder», en expresión de la propaganda, era la figura que dotaba de sentido a un ejército político concebido como milicia superadora del viejo ejército de casta, recluta obligatoria y trato interno clasista y discriminatorio.

Debido a la influencia atribuida a la figura del comisario, fue este uno de los campos donde se produjeron las controversias más enconadas entre el PCE, acusado de aprovechar la institución para hacer proselitismo, y otras fuerzas políticas[36]. Dado que el PCE fue la primera fuerza que entendió su utilidad, se ha considerado que fue la que más miembros aportó a su formación. Indalecio Prieto consideraba que no menos del 49 por 100 de los comisarios obedecían antes que a nada a la disciplina comunista, ya fuera bajo las siglas del partido o de la JSU. Tanto él como su antecesor, Largo Caballero, se fijaron como objetivo la reducción del peso específico de los comunistas en la institución. En realidad, ni en los niveles de unidad ni en los de ejército el PCE ostentó nunca más de la mitad de los puestos del comisariado, excepción hecha de los Ejércitos del Este, Extremadura y del Ejército del Ebro[37].

Si el PCE había volcado todos sus esfuerzos en la construcción del EP, empleándose a fondo en desarrollar una intensa y constante campaña de agitación en su seno que se tradujera en réditos políticos, la contrapartida fue un coste muy elevado, que se tradujo en la pérdida de millares de cuadros y militantes experimentados. A finales de 1937, los comunistas lamentaban que la mitad de los 22.500 veteranos ingresados en el partido antes de febrero de 1936 había muerto en lo que iba de guerra. Se había perdido todo contacto con unos 50.000 tras la caída de Málaga, Santander y Asturias. La sangría alcanzó particularmente a la organización de Madrid, de la que más de la cuarta parte de los 72.909 afiliados contabilizados en mayo de 1938 desapareció entre la Batalla del Ebro y la retirada a Francia. Se cumplía, de alguna manera, la previsión del general Vicente Rojo cuando vaticinó a Uribe que, de las 50.000 o 60.000 bajas que costaría el mantenimiento de la resistencia a ultranza, casi todas ellas corresponderían a miembros del PCE, dado que las demás organizaciones no sostendrían la lucha con idéntico ímpetu[38]. La velocidad a la que se desmoronó el EP tras el golpe de Casado en marzo de 1939 fue una prueba

evidente de que su componente comunista se había erosionado desde hacía largo tiempo.

Enemigo a las puertas

El semifracasado golpe militar del 18 de julio dejó desarbolado o en cuadro el aparato coercitivo estatal republicano, rebasado por la dinámica revolucionaria que advino como una profecía autocumplida precisamente a causa –y no como pretexto– del movimiento faccioso. La justicia dejó de ser un instrumento del Estado para pasar a ser la aplicación expeditiva de resoluciones que afectaban a todo tipo de litigios, desde los políticos y sociales, heredados de una secular estructura caracterizada por la brutalidad en las relaciones sociales y laborales, hasta rencillas personales, pasando por una casación a las bravas de las sentencias con las que la vieja justicia «de clase» –despidos, listas negras, multas– había sustanciado los conflictos en los últimos treinta años[39].

La violencia desatada en la zona republicana se puede clasificar en tres categorías: la ejercida de forma sumaria contra los representantes del viejo orden social –terratenientes, empresarios, religiosos– sospechosos de simpatizar con los rebeldes; la derivada de una respuesta emocional a los daños infligidos por el enemigo, fundamentalmente con la llegada de refugiados que traían consigo horripilantes relatos de la represión en Andalucía y Extremadura, o tras bombardeos sobre objetivos civiles, y que se manifestó en el asalto a cárceles y linchamiento de presos; y la efectuada contra un enemigo interior emboscado, la denominada «quinta columna». Las tres se dieron en tempos determinados: la violencia espasmódica contra los representantes emblemáticos de la vieja sociedad y las respuestas vengativas frente a las incursiones del enemigo sobre objetivos civiles se concentraron en los seis primeros meses de guerra, para remitir a medida que el gobierno fue recuperando el control sobre el orden público. La acción depuradora contra los quintacolumnistas se disparó en los momentos críticos en los que la proximidad de las avanzadillas enemigas presagiaba un choque inminente y hacía cundir el temor a una puñalada por la espalda.

En el magma de micropoderes en que se convirtió la zona republicana durante

los primeros meses, todas las organizaciones, sin distinción, crearon comités que asumieron las funciones policiales y judiciales vacantes. En medio del caos desencadenado por el hundimiento del antiguo orden de cosas, todos justificaron la justicia expeditiva de los comités[40]. El PCE contó en Madrid con varios centros operativos de sus milicias de vigilancia que tomaron como modelo de actuación a la Comisión Panrrusa Extraordinaria de Lucha contra la Contrarrevolución, la Especulación y el Espionaje (la Cheka), creada en 1917 para luchar contra los agentes blancos en la guerra civil rusa. Algunos funcionaron en establecimientos eclesiásticos incautados; otros se radicaron en las sedes de las organizaciones territoriales, células o radios, donde fueron habilitados espacios para la detención e interrogatorio de sospechosos[41].

El empleo de la violencia descontrolada mostró pronto su carácter contraproducente. El riesgo de que los excesos a que conducía ocasionara un desbordamiento de la República, junto al descrédito que tales actos acarreaban a los ojos de la opinión internacional, llevó a los comunistas a proponer al gobierno la creación de tribunales especiales para juzgar a los simpatizantes de los rebeldes[42]. Con la constitución del gobierno de Largo Caballero se adoptaron las primeras disposiciones legales para la puesta en funcionamiento de los tribunales populares, la reglamentación de los registros domiciliarios y las detenciones, y se regularon las funciones de los agentes del orden y de las Milicias de Vigilancia de la retaguardia[43].

El momento álgido de la violencia contra el enemigo interior llegó con el asedio a Madrid, que comenzó en fecha tan emblemática como el 7 de noviembre, decimonoveno aniversario de la Revolución de Octubre. La evacuación del gobierno a Valencia dejó en manos de una Junta Delegada la descomunal tarea de organizar la defensa, gestionar las necesidades de una población de un millón de habitantes incrementada por la llegada de miles de refugiados, mantener el orden y la disciplina y erradicar las actividades de la quinta columna. En esa tarea, el PC de Madrid –aunque no solo: la CNT supo, también, desplegar una eficaz movilización– fue la fuerza que con más ahínco se implicó en la actuación de la Junta. Algunos de sus más destacados dirigentes, veteranos o recién incorporados al partido en aquellos días decisivos, ocuparon puestos cruciales que estaban estrechamente relacionados con el control sobre aspectos básicos del esfuerzo militar (Antonio Mije), orden público (Santiago Carrillo) y abastos (Pablo Yagüe).

La consigna era resistir y no retroceder. Las portadas de Mundo Obrero elevaron

el tono de las consignas movilizadoras, hasta alcanzar el paroxismo coincidiendo con las primeras acometidas de los rebeldes en los arrabales de la ciudad[44]. Los combates se sucedieron durante un mes. El frente se estabilizó en las riberas del río Manzanares y las tentativas de ruptura de la defensa republicana por distintos puntos –la carretera de La Coruña, el Jarama, Guadalajara– fracasaron. La capital, sometida a continuo castigo artillero y a bombardeos aéreos diarios, vio intensificarse el sufrimiento de la población civil y, a la par, el espíritu de venganza, que se tradujo en la búsqueda de emboscados y en el afán de liquidación de quintacolumnistas.

La tensión se resolvió trágicamente mediante la operación de evacuación selectiva de presos derechistas ubicados en diversas prisiones y su ejecución en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. En la situación agónica del Madrid de noviembre, en la que parecía llegado el momento de la lucha final, la violencia ejercida contra el enemigo de la retaguardia fue justificada como el envés del combate cuerpo a cuerpo en las trincheras y la vindicta de las víctimas aniquiladas por los ataques alevosos de la aviación y la artillería. La vida o la muerte de los prisioneros se resolvió mediante una operación de cálculo en términos tácticos: no se podía permitir que fuesen rescatados por el enemigo y que este pudiera formar con ellos un nuevo cuerpo de ejército. El número total de derechistas ejecutados entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre se ha fijado en torno a 2.400[45]. La operación fue asumida por los responsables comunistas y anarquistas de las organizaciones actuantes en Madrid, con la asesoría de agentes de los servicios soviéticos recién llegados a la capital[46]. Tiempo después, el episodio, del que no cabía enorgullecerse a la hora de esmaltar el friso heroico de la guerra, fue difuminado y atribuido a unos inespecíficos grupos de incontrolados que habrían operado por su cuenta en medio del caos propio de aquellas fechas.

Con el gobierno Negrín, la República fue recobrando sus atribuciones. Los tribunales populares desplazaron a los comités; los carabineros, la policía y el Servicio de Información Militar (SIM), a las patrullas de control y a las milicias de vigilancia. Atrás quedaba el periodo más sangriento de la violencia punitiva en la retaguardia republicana, el segundo semestre de 1936, durante el que se contabilizaron el 95 por 100 de las víctimas[47]. El reforzado aparato del Estado llegó incluso a abrir procedimientos legales contra quienes habían cometido crímenes excusándose en el celo antifascista. El PCE, representado en el

gobierno, y en aplicación del principio de responsabilidad colectiva, prestó su asenso a la apertura de los procesos, incluso contra aquellos que implicaron a afiliados suyos. A lo más que se llegó fue a solicitar en el Comité Nacional de Enlace UGT-CNT la personación de las centrales sindicales en los procesos abiertos por cementerios clandestinos[48]. No existe un equivalente en la otra zona. Nadie penó por las noches de gatillo fácil del verano de 1936 –ni por las de los siguientes– en la España franquista.

Lucha de codos

Hubo una cuarta variedad de violencia durante este periodo, la ejercida entre sí por las propias organizaciones de la España republicana a consecuencia de las disputas por el control local, la hegemonía nacional y por la intromisión de un vector internacional. Los comunistas, como fuerza emergente, pugnaron por abrirse un espacio propio –«a codazos», lo describió Togliatti– en el hasta entonces repartido entre socialistas y anarquistas. Si con los primeros la disputa no pasó durante mucho tiempo del plano estrictamente dialéctico, con los segundos hubo roces que derivaron en incidentes violentos durante todo el primer año de guerra. La pugna entre dos modelos de gestión de la seguridad y la organización económica de la retaguardia, el comunista –de ámbito estatalista y centralizado– y el anarquista –local y autogestionario–, se generalizó pronto, conteniendo preocupantes presagios de una confrontación general a corto plazo. Una de sus manifestaciones más conocidas fue el choque entre campesinos colectivistas e individualistas, en muchos de cuyos casos tuvo que ver el hecho de que la geografía política de la lealtad a la República no coincidiera con la geografía económico-social del desigual acceso a la propiedad o con la explotación autónoma de la tierra. En ciudades como Barcelona, el campo de Agramante fue la gestión de los abastos, el control de las industrias y su modelos de administración: la socialización para unos, la colectivización para otros.

La chispa que hizo explosionar los gases acumulados fue encendida por la inserción de un vector exterior: la obsesión estalinista por el trotskismo. La preocupación por las actividades del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), cuyos principales dirigentes –Joaquín Maurín, Andreu Nin o Juan Andrade– se habían contado entre los fundadores del comunismo español, no

hizo su aparición con cierta intensidad hasta febrero de 1936, durante la elaboración de las candidaturas del Frente Popular y el proceso que desembocaría en la formación de la JSU. El PCE intentó por todos los medios aislar a los inapropiadamente denominados «trotskistas», con resultado desigual: no pudieron impedir que Maurín concurriese por la circunscripción de Barcelona en las elecciones de febrero de 1936, resultando electo. La paranoia antitrotskista se enervó en proporción directa a la evolución de los acontecimientos en la URSS –el asesinato el 1 de diciembre de 1934 de Kirov, líder bolchevique de Leningrado, que Stalin atribuyó a los simpatizantes de Trotski y que le sirvió de pretexto para desatar la campaña de liquidación generalizada de opositores–, siendo desde entonces cuando los comunistas locales propalaron una imagen del POUM que fue desde la caracterización como fuerza esencialmente divisoria a la condena como agente objetivo del enemigo.

Los conocidos como «hechos de Mayo», acaecidos en Barcelona entre los días 3 y 6 de mayo de 1937, motivaron en su momento, y también después, las más encendidas controversias acerca del binomio guerra / revolución, amplificadas por el eco de testimonios literarios como el de George Orwell. Para unos, supusieron el fin de la fase revolucionaria y romántica de la guerra, con la confirmación del ascenso definitivo a posiciones hegemónicas del comunismo estalinista. Sus consecuencias habrían sido el derribo de Largo Caballero, su sustitución por un títere de los comunistas, Negrín, y la liquidación del proyecto igualitario desplegado por los poderes locales autónomos, las milicias y las colectividades, en beneficio de una centralización burocratizadora que solo beneficiaba a la estrategia de Stalin. Al sofocar la espontaneidad de la revolución, habría cundido la desmoralización que coadyuvaría a la derrota. Para otros, mayo del 37 supuso la recuperación del control estatal sobre las fronteras y el orden público, la imposición de la disciplina militar, la liquidación de las tendencias divisorias en la retaguardia y la reconducción de la desorganización económica. Según los vencedores en esta pugna, la República pudo dedicarse en adelante, con todas sus energías, a la tarea vital de luchar por la victoria, sin la que cualquier meta revolucionaria era una entelequia.

El POUM, a quien el propio Trotski había criticado –«el gobierno de Negrín / Stalin es un freno en el camino del socialismo, pero sobre todo un freno en el camino del fascismo español. Mañana, pasado mañana, el proletariado español podrá sacudirse este freno para apoderarse del poder; pero si tratase, aunque solo fuera de forma pasiva, de romperlo hoy, esto serviría solamente al fascismo»[49]–, fue ilegalizado el 15 de junio. Su prensa fue clausurada y se

detuvo y procesó a sus dirigentes. Fueron juzgados por el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición. A pesar de lo publicitado por toda una corriente de propaganda anticomunista y antinegrinista, el juicio contra el POUM no reprodujo los procesos de Moscú. No fueron forzados a autoinculparse en falso ni tuvieron enfrente a un fiscal Vyshinski que reclamase su ejecución sumarísima como «perros rabiosos». El acta de acusación no hablaba de connivencia con el enemigo, sino que, reconociendo en todos ellos «una marcada significación antifascista» y su primera contribución al aplastamiento de la sublevación militar, consideraba que habían desencadenado los hechos de mayo con el propósito de «superar la República democrática e instaurar sus propias concepciones sociales»[50]. Su caso fue publicitado y defendido por una amplia campaña internacional llevada a cabo por organizaciones socialistas independientes. La sentencia, promulgada el 2 de noviembre, aceptó la acusación de rebelión, pero no la de espionaje y traición. Los condenados lo fueron a penas de prisión que oscilaban entre los once y quince años, que cumplieron en prisiones de la República de las que fueron liberados poco antes de la llegada de las tropas franquistas para que pudieran abandonar el país.

La excepción fue Andreu Nin, cuyo secuestro y asesinato por agentes de la NKVD encabezados por Alexander Orlov fue la puesta en escena de una tragedia dotada de la tramoya propia del terror estalinista. El operativo, del que se ha llegado a sugerir, de manera bastante inverosímil, que tendría como objetivo sacar a Nin del país, llevarlo a la URSS y someterlo a un proceso público ejemplarizante como los que habían servido para exterminar a la antigua dirección bolchevique, incluyó todos los elementos disponibles en el repertorio de la infamia: la fabricación de pruebas falsas para vincularlo a una red de espionaje franquista, la tortura durante tres días, el asesinato y la desaparición del cuerpo bajo la burda cobertura de su supuesto rescate por agentes de la Gestapo disfrazados de brigadistas alemanes. Los ministros del PCE aguantaron estoicamente el tipo en las reuniones del gabinete en las que se acusó a su partido de la desaparición de Nin y solo elevaron sus protestas cuando las acusaciones apuntaron, por elevación, a la URSS. Es muy probable, conocida la mecánica de las operaciones especiales soviéticas en el exterior, que la NKVD no informase de sus actuaciones a la dirección española, pero esta sí fue convocada a participar en la campaña de intoxicación concebida para enmascararlas. El caso más conocido es el del libelo titulado Espionaje en España, firmado por un supuesto experto internacional, un tal Max Rieger, con prefacio de José Bergamín. Fue publicado en Barcelona por las Ediciones Unidad, del PCE, en 1938[51]. Su autoría sigue siendo objeto de polémica: unos

atribuyen el texto a Wenceslao Roces –subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública con Jesús Hernández– y otros al periodista francés y miembro de los servicios soviéticos George Soria. Este último sí firmó con su nombre otro opúsculo en la misma línea, El trotskismo al servicio de Franco. Un testimonio documentado de la traición del POUM en España. La evidencia de que era un artefacto elaborado ad hoc para el proceso y, por lo tanto, de dudoso valor, no se les escapó ni a los propios comunistas españoles. Lo indefendible de sus tesis provocó lo que algunos informantes soviéticos denunciaron como falta de movilización del PCE. Togliatti no dejó de hacer una irónica referencia a ello en sus notas privadas, con fecha del 13 de abril: «Libro del proceso. ¡Tenemos muchos de estos!»[52].

Habría de pasar algo más de medio siglo para que Treball, el órgano oficial del PSUC –uno de los impulsores de la contracampaña que, a la pregunta «Gobierno Negrín, ¿dónde está Nin?», respondía: «En Salamanca o en Berlín»–, reconociera el crimen y rehabilitara el honor y la memoria del veterano dirigente comunista[53].

La imposible reunificación y la quiebra de la coalición antifascista

Los intentos de suturar en España la vieja escisión del movimiento obrero de raíz marxista nunca se habían planteado de otra forma que mediante la absorción de una parte por la otra. Es a lo que habían aspirado, en última instancia, la línea comunista de frente único por la base o la caballerista de las alianzas obreras. El VII Congreso de la Komintern y el deslizamiento hacia posiciones izquierdistas de un importante sector del partido socialista a partir de 1934 facilitaron la formulación de un discurso en el que, desde el reconocimiento común, las dos organizaciones pudieron plantearse una fusión, aunque no abandonasen nunca su respectiva intención de marcar con su particular impronta al nuevo y reconstituido Partido Único del Proletariado (PUP) español.

A comienzos de 1937, el PCE se había fortalecido numéricamente de manera importante, constituyéndose en una poderosa organización con presencia en los sindicatos unificados y dominio prácticamente absoluto del movimiento juvenil, la mayoría de cuyos dirigentes se habían pasado a sus filas durante las jornadas

del asedio a la capital de la República. La llegada del material soviético y de las Brigadas Internacionales, unido a la pasividad manifestada por la Internacional Obrera Socialista en lo referente a la movilización solidaria con la causa republicana, fortalecieron el prestigio comunista y debilitaron al PSOE. Para los comunistas, lo ocurrido en el primer semestre de 1937 había sido un cambio en la correlación de fuerzas dentro del espacio de las fuerzas marxistas. El PSOE se había plegado sobre sí mismo para proteger su organización y su cultura política, mostrándose incapaz de adaptarse a la velocidad con que se sucedían los acontecimientos y a las demandas de la movilización política de masas[54]. De producirse una fusión, estaba claro que el partido resultante tenía todos los visos de acabar pareciéndose al PSUC, nacido el 20 de julio de la fusión de cuatro grupos: el Partido Comunista catalán, la Uniò Socialista de Catalunya, la federación catalana del PSOE y el Partit Català Proletari. De inmediato, el nuevo partido se alineó con la Komintern.

Las relaciones mutuas comenzaron a deteriorarse todavía con Largo Caballero a la cabeza del gobierno. Dos cuestiones obstaculizaron el avance hacia la unificación marxista en el PUP: las disputas internas entre los sectores del PSOE y las acusaciones de proselitismo que los caballeristas dirigieron al PCE. Los conflictos menudearon en temas como el trabajo político en el seno del ejército, que Caballero prohibió; el comisariado, a cuyos miembros pretendió filtrar para eliminar el exceso de comunistas; y la conducción de la guerra, en cuyos fracasos, como el que costó la caída de Málaga, encontraron los comunistas munición para forzar la remoción del viejo líder[55]. Aunque el PCE consiguió su objetivo de deshacerse de Caballero, las relaciones con el resto de corrientes socialistas estaban ya deterioradas y, desde entonces, las grietas no hicieron sino agrandarse. Los socialistas desplazados a Cataluña se negaron a integrarse en el PSUC, en lugares como Murcia o Ciudad Real se produjeron serios choques entre las agrupaciones socialistas locales y los radios comunistas y dentro de la JSU nació y se desarrolló una corriente proclive a la escisión para refundar la FNJS. La formación del PUP, a pesar de la existencia durante un tiempo de comités de enlace, no pasó de ser un desiderátum que no llegó a consumarse.

La formación del segundo gobierno Negrín a comienzos de abril de 1938 reforzó su carácter de Unión Nacional con el retorno de los sindicatos –CNT incluida– al Consejo de ministros y la formulación de los «trece puntos de la victoria», un catálogo de condiciones para la negociación de un armisticio[56]. El contexto internacional estaba cada vez más enrarecido. Mientras la suerte de la última democracia centroeuropea, Checoslovaquia, se decidía en Munich, Negrín

decidió poner toda la carne en el asador y emplear su Ejército de Maniobra en el Ebro para conseguir de las potencias occidentales una respuesta favorable al alto el fuego, con el resultado de todos conocido.

A pesar de los denodados esfuerzos por mantener la resistencia, la capitulación de las democracias ante Hitler y Mussolini, el empuje arrollador del ejército franquista implementado por la ingente cantidad de material proporcionado por el Eje y el agravamiento de las condiciones materiales de vida en la zona republicana hizo cundir la desmoralización. Los meses comprendidos entre noviembre de 1938 y febrero de 1939 fueron testigos, además, de la pérdida territorial de Cataluña y, por tanto, del último bastión industrial de la República, de la ruptura definitiva de la coalición antifascista y de la urdimbre de la trama que iba a conspirar para liquidar la guerra pese a los intentos del gobierno Negrín y el PCE de mantener una resistencia en pos de una evacuación ordenada y del enganche con la guerra europea que ya se adivinaba en el horizonte.

Frente a Negrín y el PCE, y a pesar de haber reducido las exigencias de paz a solo tres puntos[57], un sector en alza, desde el presidente de la República[58] hasta buena parte de las cúpulas política, sindical y militar, depositó sus últimas esperanzas en algún tipo de mediación exterior de carácter diplomático y humanitario. Algunos mandos militares confiaban en una negociación directa entre elementos castrenses de ambos bandos, cotizando en ella el derribo de Negrín y de los comunistas que lo apoyaban.

El 5 de marzo de 1939 se consumó un golpe político-militar que cristalizó en la constitución del Consejo Nacional de Defensa[59], encabezado en su rama civil por el socialista Julián Besteiro y en lo militar por el anarquista Cipriano Mera y el coronel Segismundo Casado. Los motivos esgrimidos por los golpistas para derrocar a Negrín fueron su supuesta ocultación deliberada de lo desesperado de la situación tras la pérdida de Cataluña, su empecinamiento en el mantenimiento de una resistencia inútil que solo prolongaba el sufrimiento del pueblo español y su subordinación a los dictados de la fuerza política, el PCE, que ejecutaba los planes de un estado mayor foráneo. Besteiro fantaseó con un futuro en que los socialistas moderados, trasmutados en laboristas, fueran aceptados en el nuevo régimen y contribuyeran a la consolidación de un nuevo orden internacional en el que convivieran en armonía el Eje y las democracias, unidos en el anticomunismo, y se redujera a la URSS a la condición de un Estado-lazareto. Los anarquistas creyeron llegado el momento de ajustar cuentas con el PCE en las postrimerías de su atormentada disputa hegemónica. Casado, por su parte,

aceptó el espejismo de una reedición del abrazo de Vergara, equívocamente alimentado por agentes de la quinta columna que le rodeaban, una posibilidad que encandiló a una parte de la oficialidad de origen profesional.

Durante una semana, Madrid fue el escenario de una guerra civil dentro de la Guerra Civil. La tragedia que había comenzado con una traición en julio de 1936 se cerró con otra traición en marzo de 1939. Las consecuencias serían de larga duración: la siembra de un rencor abismal entre las filas de los republicanos, derrotados en su conjunto, les incapacitó para armar plataformas unitarias estables de oposición a la dictadura. Con su actuación, Besteiro, Mera y Casado le rindieron a Franco un servicio duradero e impagable.

El PCE acabó siendo un gigante varado y a punto de desintegrarse por la acción combinada de fuerzas externas y de una acelerada descomposición interior. Cuando el 1.o de abril de 1939 las fanfarrias de Radio Nacional de España anunciaron el parte de guerra del Cuartel General de Burgos que certificaba la victoria franquista, hacía semanas que la diáspora republicana anegaba con su marea de humanidad derrotada los campos del sur de Francia. Como parte de ella, el contingente comunista se nutrió de quienes, en los amenes del conflicto, habían recurrido a los medios más diversos para abandonar el país. Una gran parte de los militares salieron en enero de 1939, con la caída de Cataluña. El resto, junto con los que habían ostentado cargos políticos en la zona central, lo hicieron partiendo a última hora de los aeródromos de Levante o en barcos como el buque carbonero Stanbroock, que, tras penosa travesía, acabaron rindiendo viaje en Argelia. Miles quedaron atrapados en la ratonera del puerto de Alicante o en las improvisadas prisiones que los vencedores comenzaban a llenar para materializar la proverbial paz del Caudillo.

EN LA CLANDESTINIDAD (1939-1950)

La historia de la reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo fue la de la difícil transición desde la condición de partido de masas a la de grupúsculo clandestino bajo el peso de una implacable persecución. El crecimiento exponencial experimentado durante la República en guerra, con ser veloz, fue menos rápido que su desplome en el accidentado contexto de la derrota. El

gigante al que todos los demás partidos habían temido se desmoronó como un castillo de arena batido por la marejada de la represión franquista. Los acontecimientos se coaligaron para dar lugar al peor escenario posible: nadie había previsto el paso a la ilegalidad y los avatares de la evacuación hicieron que la dirección se dispersara por medio mundo.

Entre el 15 de mayo y el 9 de junio de 1939, el secretario de organización, Pedro Fernández Checa, recién llegado a la URSS, envió dos informes al Buró Político[60]. El trabajo en España pasaba por organizar la resistencia en dos frentes: el político y el de la lucha armada, aunque fuese en las extremadamente desfavorables condiciones derivadas de una implacable derrota militar. Una porción significativa y muy selecta de los cuadros políticos del partido debía ser sometida a un entrenamiento rápido y enviada de vuelta a organizar las direcciones regionales en el interior. Era urgente activar el capital humano más preciado del partido: sus cuadros. Ni uno solo debía «perderse en el pantano de la migración», sentenció Checa. Entre junio y agosto hubo varias reuniones del Secretariado de la Komintern para abordar la nueva situación. La Internacional desaconsejó el recurso a la lucha armada y, por el contrario, propuso la penetración en las organizaciones de masas franquistas. La guerrilla no era deseable como apuesta táctica, sino solo como recurso de protección puntual para los perseguidos que se acogiesen al monte. La propuesta debió chocar a los dirigentes españoles[61]. Dimitrov dejó bien claro que «fuera de España no debe haber organización del PCE. El PCE reside en España». Buena parte de las disputas venideras sobre la supremacía de los órganos de dirección tendrían como elemento vertebral este debate.

El partido en España estaba pagando el precio de la imprevisión para preparar el paso a la ilegalidad durante los últimos tiempos de la guerra. Lo que se había producido no era una retirada, sino una huida totalmente carente de previsión[62]: de los 445 evacuados a Argelia, 206 (el 46,3 por 100) eran cuadros políticos que, en buena parte, podrían haber sido utilizados en la reconstrucción de la organización en condiciones de clandestinidad. No hubo nada de eso y la labor quedó limitada a la asistencia a fugitivos y presos en condiciones extremadamente precarias y peligrosas, efectuada por simpatizantes muy jóvenes, mujeres en su mayoría, sin ninguna experiencia en el trabajo ilegal.

Mientras los comunistas españoles intentaban recomponer los fragmentos de un aparato pulverizado, sobrevino el pacto germano-soviético del 23 de agosto de

1939. El estado de shock fue generalizado. Sus efectos fueron demoledores para la moral del movimiento comunista, que había hecho del antifascismo su bandera desde 1935[63]. Había que preparar rápidamente una interpretación para hacerlo digerible y vino en forma de declaración del Comité Central fechada el 25 de noviembre de 1939, firmada mano a mano por José Díaz y Dolores Ibárruri. Con el título de La guerra imperialista, en ella se afirmaba que «la guerra europea actual es una guerra dirigida contra los intereses de la clase obrera, de los trabajadores y los pueblos. Es una guerra entre los bandos imperialistas por la dominación del mundo. No es una guerra antifascista». A continuación, se responsabilizaba de su estallido a «los Chamberlain, Daladier, Blum y Attle», a los «jefes vendidos de la II.a Internacional» y al imperialismo italiano, sin citar ni en una sola ocasión el expansionismo nazi y su violación sistemática y consciente de las fronteras de sus vecinos[64]. Todo un prodigio de alquimia. El argumento de autoridad surtió los efectos esperados. La mayoría de los dirigentes y cuadros comunistas se replegó ordenada y disciplinadamente hacia posiciones justificativas de la diplomacia estalinista, aunque no faltaran ruidosas protestas, como la de Heriberto Quiñones, ni callados abandonos. Restaban dos años para que Leopold Trepper, responsable de la Orquesta Roja, la más eficiente red comunista de espionaje contra la ocupación alemana en Europa, respirara tranquilo al conocer la noticia del inicio de la invasión de la URSS y saberse de nuevo en el lado bueno de la historia.

La dirección peregrina

La derrota desperdigó a los miembros del PCE en todas las direcciones de la rosa de los vientos y en el marco de un mundo en guerra. Desde octubre de 1940, el Buró Político quedó constituido por Vicente Uribe –máximo responsable del partido–, Jesús Hernández –propaganda–, Santiago Carrillo –juventud–, Antonio Mije –relaciones con otras fuerzas políticas– y Francisco Antón –organización–[65]. De ellos, dos se encontraban en la URSS y el resto en México y Cuba. El Comité Central quedó reducido a veinticinco miembros efectivos y cuarenta y cinco candidatos. La intención inicial era que el secretariado se instalara en México. El país americano ofrecía las ventajas de proteger la presencia de las instituciones republicanas en el exilio, además de ser una lanzadera para actividades en el interior de España mediante el envío clandestino de activistas

por la ruta Veracruz-Nueva York-Lisboa.

El PCE se vio acometido del mal endémico de los partidos clandestinos: una sola realidad sobre la que aspirar a incidir y varios centros de dirección dispersos. En concreto, tres y medio: el de la URSS, el de México y el de Francia, además de la mil veces golpeada, disuelta y reconstruida delegación en el interior. Esta situación multifocal contribuyó a una competencia por la autoría de la línea política que, en muchas ocasiones, culminó en colisión, con su correlato de enfrentamientos internos, purgas e ineficacia.

«En la Patria del socialismo»

A su llegada a la Unión Soviética, los españoles fueron conducidos a distintos destinos, dependiendo de su puesto en el organigrama del partido y de su nivel de especialización. Los dirigentes se instalaron en Moscú y, tras un proceso de selección llevado a cabo por la Comisión de Cuadros, les fueron asignados distintos cometidos en el aparato de la Internacional. La mayoría se albergaron en el famoso Hotel Lux, residencia habitual de los representantes en la Komintern pertenecientes a las distintas secciones nacionales. Los cuadros intermedios fueron llevados a Planiernaya, una antigua casa de vacaciones de los sindicatos que servía como sede a la Escuela Leninista. Los mandos militares fueron divididos en dos grupos: los de carrera –como Francisco Galán y Antonio Cordón– se integraron en la Academia Superior Vorochilov; los procedentes de milicias –Líster, Modesto, Valentín González (El Campesino), Manuel Tagüeña, Artemio Precioso y otros– lo hicieron en la Academia Frunze. Los demás se incorporaron al trabajo en fábricas. Los niños fueron acogidos en escuelas y tutelados por maestros españoles. La invasión alemana, en junio de 1941, provocó una segunda diáspora: los políticos, junto con los órganos del poder soviético y de la Komintern, se refugiaron en Kuibishev y Ufa, en Bashkiria; las academias militares se instalaron en Tashkent, en el Cáucaso; y fábricas y escuelas se desperdigaron desde Samarcanda hasta los antiguos territorios de la república de los alemanes del Volga. En muchos casos, la evacuación se realizó en condiciones dantescas.

El choque entre la imagen idealizada de la URSS que traían los españoles y la

precaria realidad de la sociedad soviética provocó fracturas en el proverbial temple de acero de algunos militantes. La vigilancia policiaca, calientes aún las brasas de los procesos de 1937, sembró la desconfianza y las incomodidades materiales, por contraste con la imagen paradisiaca que había pregonado la propaganda de publicaciones como La URSS en construcción, se hicieron molestas y luego difícilmente soportables[66]. Los españoles destinados a las fábricas acabaron deplorando los extenuantes ritmos de producción impuestos por los estajanovistas. Al principio, imbuidos de entusiasmo y de un espíritu de gratitud hacia el país que les acogía, sobrepujaron las tasas de productividad marcadas. Pero cuando estas se iban convirtiendo en obligatorias, en virtud de la denominada «emulación socialista», la inercia y las quejas sustituyeron al fervor inicial. Muchos emigrados con experiencia militar no dudaron en dirigirse a la dirección del partido para que solicitara de las autoridades soviéticas su alistamiento contra el invasor nazi. Jesús Hernández consiguió la autorización para que se formase en Járkov (Ucrania) una brigada de operaciones especiales bajo las órdenes de Domingo Ungría, antiguo responsable del XIV Cuerpo de Guerrilleros en España y hombre de confianza del coronel Starinov[67].

Las fricciones personales derivadas de una convivencia forzada en condiciones de penuria y la ausencia de horizontes a medio plazo comenzaron a surtir efectos erosivos. Entre los comunistas españoles no se había alcanzado aún el grado de homogeneización suficiente como para acallar el descontento. En torno al núcleo de dirección se formaron dos polos, según criterios de simpatía o aversión: los dos Enriques (Castro Delgado y Líster), Modesto, Eusebio Cimorra y Caridad Mercader se agruparon en torno a Jesús Hernández, que se movía hábilmente en los medios soviéticos para remediar estrecheces y resolver problemas cotidianos; alrededor de Dolores Ibárruri se reunieron Francisco Antón, Irene Falcón e Ignacio Gallego, devotos del carisma de la veterana dirigente, acrecentado con la pérdida de su hijo Rubén en la Batalla de Stalingrado. Pronto, las diferencias personales cristalizaron en discrepancias políticas acerca de la necesidad de salir o no de la URSS para acercarse a España y todo el mundo fue consciente, cuando José Díaz se suicidó en Tiflis el 19 de marzo de 1942, de que se abriría un periodo de lucha por sucederle en la secretaría general del partido[68].

Los hernandistas –en boca de Segis Álvarez, colaborador de la Internacional Juvenil Comunista– invocaron la primacía del principio de «democracia» sobre el de «confianza» a la hora de nombrar a la dirección[69]. Preferían que fuese el colectivo español, y no la Komintern, quien eligiese al sucesor de Díaz. Es probable que Hernández, consciente de la mitificación de que había sido objeto

Pasionaria, invulnerable en el imaginario de la militancia, no tuviese intención de derribarla, sino que contemplara para ella un desplazamiento discreto y revestido de promoción a un cargo de naturaleza exclusivamente simbólica. Algo parecido a lo que haría Santiago Carrillo en 1959. Quien fuera durante mucho tiempo cercano colaborador del exministro, Eusebio Cimorra, declaró pocos años después a Fernando Claudín: «Yo nunca le oí decir que él aspirase a la secretaría general, pero la víspera de marcharse a México dijo en su cuarto que el partido seguramente quedaría organizado a la manera norteamericana, es decir, con un presidente que sería la camarada Dolores, y un secretario general que probablemente sería el camarada Vicente Uribe. Él se reservaba la labor de agitación y propaganda»[70]. A tal fin, Hernández se desplazó a México para reordenar la delegación del Comité Central en aquel país y dotarse de una plataforma de apoyo. Pensaba relevar a Mije, por incapaz, deshacerse de Antón, por inmoral, y enviar a Uribe a Londres para que convenciera a Negrín de que se instalara junto con el gobierno de la República en el exilio en el país americano, donde se encontraba el grueso de la emigración española. Su objetivo era reformular la política de alianzas, superando las fantasmales e ineficaces iniciativas impulsadas hasta entonces casi en solitario por el PCE[71]. Las cosas, sin embargo, saldrían de otra manera.

México

Cuando los exiliados españoles llegaron al México gobernado por el presidente Lázaro Cárdenas, el país se hallaba inmerso en un proceso de institucionalización revolucionaria. Fue aquí donde, en la primera mitad de los años cuarenta, los comunistas españoles se reorganizaron para intentar incidir en el interior de España y diseñaron plataformas que aglutinaran en torno de ellos a la oposición al franquismo, sin grandes resultados. Los comunistas que marcharon a México habían sido seleccionados entre activistas, cuadros y mandos militares, es decir, entre gente capacitada, en principio, para desarrollar una intensa vida política. La dirección pudo dotarse con cierta presteza de sus propios órganos impresos de propaganda (España Popular, que apareció en febrero de 1940) y de formación política (Nuestra Bandera, que vería la luz en junio del mismo año). De manera menos confesable, prestaron también su colaboración en la estrategia estalinista de lucha global contra el trotskismo.

La política de Unión Nacional (UN) apareció expuesta por primera vez en un manifiesto del Comité Central publicado en agosto de 1941. Con el objetivo de evitar que Franco entrara en la guerra al lado de Hitler, se dirigió un llamamiento a todos aquellos, incluidos conservadores, católicos y monárquicos, que estuviesen dispuestos a defender la causa de la independencia nacional[72] y se mostrasen proclives a aceptar la constitución de un gobierno bajo la jefatura de Negrín, el restablecimiento de las libertades básicas y la alianza internacional contra Hitler. Paradójicamente, la mano tendida a los enemigos de ayer excluía a los líderes socialistas Prieto y Araquistáin y al anarcosindicalista Abad de Santillán, a los que se ubicaba, de hecho, en la misma trinchera que los «falangistas germanizados»[73].

Cuando en la primavera-verano de 1942 se produjo la ofensiva alemana que llevaría a la Wehrmacht a las puertas de Stalingrado, Molotov viajó a Londres y Washington para disipar los temores de Occidente sobre las futuras intenciones de la URSS. Como muestra de buena voluntad, Stalin procedió a la disolución de la Komintern. La revolución desaparecía del horizonte político del movimiento comunista a corto y medio plazo. El 5 de septiembre de 1942 un nuevo llamamiento del Comité Central del PCE sentó las bases de la política de UN para los siguientes años. El escenario trazaba una línea de confrontación a uno de cuyos lados se encontraban Franco y su búnker, y al otro el resto del país. En esta segunda versión se incluyó la convocatoria de una asamblea constituyente para que el pueblo, libre y democráticamente, decidiese el futuro régimen del país. Desaparecían, pues, las referencias al gobierno Negrín y a la legalidad republicana en pos de la aproximación a los sectores monárquicos.

Destacados dirigentes, como Margarita Nelken, abandonaron el partido, en desacuerdo con esta postura. Otros, como José del Barrio, del PSUC, fueron expulsados por hacer públicas sus críticas. La polémica se agriaría aún más desde comienzos de 1943: la derrota alemana a manos de los soviéticos en Stalingrado, el dominio británico del norte de África y el desembarco anglonorteamericano en Sicilia, que marcaron un punto de inflexión en la guerra, haciendo bascular el fiel de la victoria hacia los aliados, provocaron el surgimiento dentro del PCE de voces –pronto silenciadas– que reclamaban una reformulación de la política de UN, abandonando el proyecto de aproximación a los monárquicos y a los tránsfugas del franquismo, por innecesaria, y volviendo a la búsqueda del acuerdo con los viejos socios republicanos y socialistas. Fue en este contexto en el que se produjo la expulsión de Jesús Hernández en México.

La Delegación del Comité Central encabezada por Uribe le recibió de uñas. Rápidamente, desarmaron su estrategia, le envolvieron en una sucesión de interminables sesiones de autocrítica y acabaron colocándole en el disparadero. El 4 de abril de 1944, una asamblea conjunta de militantes del PCE y el PSUC acordó de forma «unánime» su separación del Comité Central y el condicionamiento de su permanencia en el partido «al examen que del asunto está haciendo la propia dirección»[74]. En Moscú, mientras tanto, Dolores Ibárruri fue elevada a la secretaría general vacante. A mediados de 1945, Hernández quedó definitivamente desligado de todo lazo orgánico con lo que había sido su mundo desde 1920. Inició entonces una andadura propia, fundó una plataforma disidente, el Movimiento Comunista de Oposición, reunió a antiguos camaradas tanto del PCE como del PSUC y publicó una revista, Horizontes, de la que aparecieron unos pocos números. A partir de 1948, con el cisma titista, Hernández trabajó para la embajada yugoslava en el Distrito Federal, labor que ejerció hasta su muerte en 1971. En este, como en otros casos, los diversos ismos heréticos («quiñonismo», «hernandismo», «titismo», «comorerismo») no lograron arrastrar consigo a un número significativo de adeptos. El mundo bipolar de los años cuarenta y cincuenta no dejaba margen a terceras vías. El repertorio de opciones para quienes rompían con su pasado militante se limitaba a recluirse en lo privado, alistarse en el destacamento de los «guerreros de la guerra fría» o engrosar las raquíticas filas del denostado «trotskismo». Para la mayoría, las grietas abiertas por el contraste entre teoría y realidad se enfoscaron con la aplicación de una gruesa capa de culto a la personalidad. El resultado, en definitiva, fue que durante la segunda mitad de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el PCE se replegó sobre sí mismo, en un camino de retorno al solipsismo señalado por la glaciación ideológica de la Guerra Fría.

El cisma entre Hernández y la dirección en México tuvo efectos colaterales indeseables en otra misión que Moscú había encomendado al aparato del PCE: la cobertura a la operación que había de liberar del penal de Lecumberri y sacar del país al asesino de Trotski, Ramón Mercader. Ya en 1940 la policía mexicana sospechó de la implicación de españoles en los preparativos del asalto de la casa del líder bolchevique en Coyoacán, que ejecutó el pintor David Alfaro Siqueiros[75]. Para quienes, imbuidos de idealismo internacionalista, seguían creyendo en que la causa del triunfo de la revolución socialista mundial dependía de la pervivencia del primer Estado proletario, la URSS, no producía contrariedad alguna ocupar un puesto de combate en su aparato de espionaje. Había, además, una coalición de intereses: a la dirección del partido español le

preocupaban las posibles relaciones que pudieran entablarse entre Trotski, Prieto y algunos dirigentes anarquistas[76], mientras que para los soviéticos la liquidación de Lev Bronstein antes de que la URSS se viera envuelta en una guerra mundial era una prioridad absoluta. El general Nahum Eitingon (Kotov) organizó un operativo mucho más sutil que el de Siqueiros para liquidar a Trotski recurriendo a la infiltración en su entorno de un supuesto diletante belga llamado Jacques Monard. Solo los comunistas españoles reconocieron en las fotos publicadas por los periódicos tras el asesinato al camarada Ramón Mercader del Río.

Tras la eliminación de Trotski, los servicios especiales soviéticos en el extranjero –rebautizados con las siglas NKGB– pergeñaron la denominada operación «Gnomo»[77]. Aunque el peso fundamental del planeamiento recaería en sus propios agentes, la implicación de los comunistas españoles, con su mayor facilidad para moverse en el terreno, era muy significativa. La operación Gnomo abortó por un cúmulo de adversidades entre las que se contaron la interferencia causada por los conflictos internos en el núcleo dirigente español –que desbarataron la trama política del operativo– y la estridente llegada a México de Caridad del Río, que reveló la verdadera identidad del reo. Levantada la liebre, las autoridades aplicaron a Ramón un estricto régimen penitenciario, frustrando cualquier posibilidad de rescate. Mercader se preparó para pasar quince años en prisión impartiendo cursos de reparación de receptores de radio, a la espera de poder lucir en la solapa la Orden de Lenin como Héroe de la Unión Soviética, con que sería condecorado por su crimen tras su puesta en libertad y el retorno a la URSS en 1960.

Al fondo, los Pirineos

Cuando comenzó la guerra en Europa, el grueso del partido radicaba aún en los campos de Francia y Argelia. Hasta entonces habían funcionado redes de solidaridad bajo la cobertura del Partido Comunista Francés que, además, amparaba algunas de las actividades públicas de sus camaradas españoles. En París se llegó a publicar un periódico, La Voz de Madrid, pronto suspendido por el gobierno francés. En su lugar apareció una nueva publicación en francés y español. También fue editado por la dirección del partido un boletín para los

campos, al tiempo que se distribuían el órgano de la Komintern, La Correspondencia Internacional y la Historia del Partido Bolchevique. La naturaleza internacionalista de la militancia comunista generó algunos problemas de adscripción entre los emigrados. La norma de la Komintern era que los militantes comunistas de otras nacionalidades debían integrarse en el PC del país de acogida. En el caso de Francia, se optó por mantener un núcleo operativo, el compuesto por los camaradas organizados en los campos, con autonomía respecto al PCF, aunque auxiliado por él. Los que estuvieran fuera de los campos entrarían en el PCF como «grupos de idioma castellano» de la organización de Mano de Obra Inmigrada (MOI), pero manteniendo su ligazón con el Comité Central español. La idea era que la permanencia de los comunistas españoles en territorio francés era transitoria y que su lucha era específica, destinada a derribar la dictadura al otro lado de la frontera. Esta independencia orgánica y estratégica respecto al PCF ocasionó algunos desencuentros.

Como es de rigor, su situación, ya precaria durante los últimos meses de la Tercera República y la vigencia del pacto Molotov-Ribbentrop, empeoró sustancialmente tras la derrota y la subsiguiente ocupación alemana. El trabajo en los campos era muy difícil, debido a la persecución policial y las frecuentes provocaciones de los colaboracionistas franceses. En las Compañías de Trabajo forzoso, donde se encontraba la inmensa mayoría de los refugiados, el trato era durísimo. Había grupos poco numerosos en fábricas e industrias, incorporados forzosos a la legión y apenas algunos en el ejército. Los de África se encontraban en idéntica situación, con los agravantes del clima y el aislamiento. La reorganización avanzaba con bastante lentitud, a pesar de que se había situado a camaradas de la dirección en la proximidad de los campos para orientar y dirigir el trabajo en su interior.

La delegación del Comité Central que permaneció en territorio francés quedó constituida por Jesús Monzón, acompañado por Carmen de Pedro, antigua secretaria de Togliatti, Manuel Jimeno, Manuel Azcárate, Gabriel León Trilla y Ramiro López (Mariano). Llegó a controlar entre 8.000 y 10.000 mil militantes, encuadrados en un primer momento en las compañías de trabajo, en los campos de internamiento y en las obras distribuidos a un lado y a otro de la línea de demarcación que separaba la Francia ocupada de la administrada por el gobierno títere de Vichy. En la zona ocupada, los comunistas españoles se concentraban en la región de París, en Bretaña y en Burdeos, donde trabajaban en la fortificación del Muro del Atlántico. En la zona de Vichy, las principales agrupaciones se encontraban en los departamentos limítrofes con los Pirineos, en

explotaciones forestales, centrales eléctricas, canteras y en capitales como Toulouse y Perpiñán.

Los españoles se adelantaron al giro dado por los comunistas franceses y no esperaron a la agresión alemana contra la URSS para llevar a cabo las primeras acciones de sabotaje[78]. Después llegaron la quema de bosques, el descarrilamiento de trenes de mercancías y la ejecución de golpes de mano contra instalaciones y unidades alemanas. A partir de junio de 1941, sus unidades se ligaron, a través de antiguos brigadistas internacionales como Henri Rol Tanguy, con la sección del PCF para extranjeros, la Mano de Obra Inmigrada (MOI). La estructura de los maquis españoles en el Midi francés antes de 1944 era sumamente flexible y articulada en tres niveles: los maquis «de primer nivel», «maquis blancos» o «maquis del llano», que, dispersos por los chantiers –obras públicas de construcción de pequeñas presas para la generación de energía hidroeléctrica, carreteras de montaña y, primordialmente, explotaciones forestales para la producción de madera y carbón vegetal que, en la práctica, encubrían grupos de la guerrilla–, aún no habían participado abiertamente en acciones de la Resistencia. Entre ellos se encontraban los capataces de las explotaciones, que aparecían como la cara legal del entramado, encargados de la contratación de las obras y de la administración de los recursos. Seguían a continuación los maquis «de segundo nivel» o «de nivel intermedio», que eran los amenazados o puestos bajo sospecha que debían cambiar frecuentemente de localización. Y, por último, los maquis «de tercer nivel» o «maquis verdaderos», guerrilleros móviles que se mantenían habitualmente alejados de los chantiers para llevar a cabo sus acciones. El paso de un nivel a otro era dinámico, pero procurando no romper nunca el cordón umbilical que unía a los guerrilleros con el centro de trabajo de procedencia.

En abril de 1942, en el Col de Py, cerca de Foix (Ariège), se constituyó el XIV Cuerpo de Guerrilleros, brazo armado de la Unión Nacional Española (UNE). Su órgano de propaganda fue el boletín Reconquista de España. Entre noviembre de 1942 y mayo de 1943, el PCE impulsó las guerrillas de Pirineos Orientales, Altos y Bajos Pirineos. Con la creación del Comité Militar de la Mano de Obra Inmigrada (MOI) a finales de 1943 y, sobre todo, a partir de la formación de la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) en mayo de 1944, la mayor parte de los maquis pasó a integrarse en el tercer nivel, el del «maquis verdadero», desempeñando un papel fundamental en la liberación del sur de Francia, desde Oloron, en los Pirineos Atlánticos, a Dordogne, el Ariège y Aude; así como en el hostigamiento a las tropas alemanas en retirada, con rendiciones espectaculares

en el Ariège y el Gard. Su número había crecido exponencialmente, de los 3.400 hombres a comienzos de junio de 1944 a los 10.000 en las semanas posteriores al Día-D[79].

El núcleo dirigido por Monzón se propuso desde un comienzo aplicar el programa de Unión Nacional aprobado por el PCE en septiembre de 1941: ruptura de la alianza de España con el Eje, depuración del ejército y la administración, liberación de presos, retorno de exiliados, restablecimiento de las libertades y convocatoria de una asamblea constituyente[80]. El rasgo peculiar que definió su filosofía de trabajo fue la renuencia al envío de emisarios desde fuera, porque «desde América o desde el norte de África era muy difícil dirigir el trabajo en España»[81]. El propio Monzón se instaló en España en 1943. Las actividades de las delegaciones en Francia y en el interior acabaron muy pronto por entremezclarse con resultados prometedores, en principio, que acabaron frustrándose por los bruscos cambios de orientación imprimidos con el fin de la guerra mundial.

El interior

Los informes organizativos elaborados por el PCE en los primeros años de clandestinidad no concretan cifras de militantes, pero insistían en que el partido estaba organizado y desarrollaba alguna actividad, aunque de baja intensidad, como la ayuda a perseguidos y la rudimentaria difusión de propaganda. Había células y comités del partido y de la JSU que se agrupaban espontáneamente, «nacidos del impulso de hacer algo»[82]. La información que llegaba del país era escasa, pero coincidente en que la organización estaba dispersa y desarticulada. Los militantes que habían sobrevivido a los primeros zarpazos de la represión carecían de la experiencia previa de la clandestinidad, lo que facilitaba los contundentes golpes policiales. Escaseaba el material impreso y había una carencia endémica de cuadros aptos para el trabajo ilegal. La tarea esencial debía encaminarse, por tanto, a la creación de un núcleo de dirección dentro del país, prioritariamente en Madrid, aunque sin descartar apoyarse en zonas tradicionalmente combativas, como Asturias.

Fuera de las ciudades, y a despecho de las directrices emanadas de la Komintern,

la guerrilla se extendió como refugio para fugitivos, dotándoles de cohesión y recursos de autodefensa. Más tarde, la adopción de los métodos de lucha empleados en otros lugares de Europa ocupados por el Eje convirtió al maquis en la punta de lanza del proyecto político de Unión Nacional. El PCE fue hegemónico en las agrupaciones guerrilleras de Galicia y Alto Aragón, en la guerrilla urbana («cazadores de ciudad») de Madrid, en el Ejército Guerrillero del Centro y en la Agrupación de Granada-Málaga. La organización más importante bajo su control fue la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), activa hasta 1949.

Las tentativas de reconstrucción del partido fueron tan incesantes como las actuaciones policiales destinadas a impedirlo. Ya fuera por la llegada de enviados en misión, ya por la iniciativa de núcleos autóctonos en búsqueda de contacto, de 1940 en adelante hubo agrupamientos con vocación de estabilizarse orgánicamente. Aplicando la máxima leninista de que «donde hay un comunista, está el partido», hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, a veces con la rudimentaria instrucción adquirida en las antiguas escuelas de formación de cuadros durante la guerra, asumían la responsabilidad de reconstruir células y radios. Su primera intención, una vez formada la troika de dirección, con su estructura básica –secretaría política, de organización y de agitprop–, solía ser la adquisición y puesta en funcionamiento de un aparato de propaganda, siendo el bien más preciado una multicopista del tipo Boston, relativamente sencilla de transportar y ocultar. A partir de ese momento, la capacidad de crecimiento dependía de la habilidad para explotar las posibilidades del entorno de manera discreta y sin levantar sospechas. Dos posibles vías de captación de nuevos miembros se basaban en la detección de los focos en que cundía el malestar generado por las extremadamente precarias condiciones de vida y en el reencuentro con antiguos militantes que habían cumplido su condena. En el primer caso, barriadas empobrecidas y talleres donde trabajaban jóvenes con bajos salarios eran un vivero que aportaba remesas de simpatizantes sin experiencia previa. En el segundo, pronto se comprobó que los veteranos rehusaban la reincorporación porque estaban quemados. Además, constituían un riesgo cierto para la seguridad: al ser conocidos de larga data por la policía, tener una ficha, un expediente y una condena, eran el hilo del que los agentes tiraban para llevar a cabo nuevas detenciones.

Las reticencias de los militantes del interior respecto a los cuadros llegados de Francia no carecían de fundamento. Se adoleció de serias dificultades para aprehender la realidad del país, al que se enviaron reiteradamente grupos en

misiones que caían una y otra vez, destrozados por la División de Investigación Social. La mayoría de estos activistas no estaban suficientemente capacitados, eran demasiado conocidos del periodo anterior o se revelaron ineptos en el manejo de las claves necesarias para desenvolverse en las durísimas condiciones de clandestinidad del primer franquismo. A veces, todo dependía de la observancia de unas normas básicas de disciplina: llevar una vida discreta, evitar escándalos de cama y alcohol, mimetizarse con los actores anónimos en ese dramático decorado con fondo gris que eran los años cuarenta; otras, cuestiones tan simples como no llamar la atención en lo tocante a la vestimenta, para no revelar una estancia foránea, o ser capaz de dominar los rudimentos básicos de los temas de conversación más comunes: desconocer, por ejemplo, los avatares del fútbol o la lidia en un coloquio de bar era una forma casi infalible de llamar la atención de la policía o sus confidentes. En cualquier caso, no hay que olvidar el papel que, una vez efectuada la detención, desempeñaba la brutalidad con que era tratado el detenido, como atestiguan la muerte en comisaría de Casto García Roza, que Heriberto Quiñones fuese fusilado atado a una silla con la columna vertebral rota, o que Eduardo Sánchez Biedma prefiriese arrojarse bajo un convoy del metro antes que ser forzado a delatar a nadie[83].

Como en un trágico carrusel en el que alternaban tentativas de reorganización y caídas, en cinco años se sucedieron las delegaciones encabezadas por Heriberto Quiñones[84] y Luis Sendín (1941); Jesús Bayón, Calixto Pérez Doñoro y Ramón Guerreiro (1942); Jesús Carreras y Luis Espinosa (1943); Jesús Monzón, Asensio Arriolabengoa y Gabriel León Trilla (1943-1944); Casto García Roza (1944); y Agustín Zoroa y Lucas Nuño (1945-1946)[85]. Como dijo Carrillo en sus memorias: «Yo recordaba siempre unas palabras pronunciadas por Manuilski en los meses en que permanecí en la Komintern en Moscú. Hablando de la labor de los comunistas en los países fascistas, Manuilski decía que había una regla: el militante ilegal enviado al país conseguía mantenerse en activo, como media, tres meses, tras los cuales le descubrían y venía la tortura y muy probablemente la muerte»[86]. La única excepción a este regla fue Monzón.

Yalta marca el rumbo

Santiago Carrillo llegó a Argel, procedente de América vía Portugal, cuando

Francia estaba siendo liberada. Venía como avanzadilla para retomar el control de la dirección que Monzón estaba ejerciendo de manera demasiado autónoma[87]. Carrillo, como Thorez o Togliatti, debía imponer a su respectivo partido el espíritu que estaba a punto de cristalizar en Yalta. Los FTP-FFI del coronel «Fabien» en Francia, el aparato militar de Pietro Secchia y Luigi Longo en Italia y la AGE-UNE de Monzón canalizaban una corriente de entusiasmo revolucionario que, a la luz de la nueva situación, debía ser reconducida[88]. El giro de octubre de 1944, en la estela del reparto de áreas de influencia entre los vencedores de la guerra mundial, obedecía a la sustitución de los equipos de dirección fraguados en la Resistencia, dotados de unas estructuras dinámicas y forjados en la confraternidad del combate por las elites del estalinismo maduro refugiadas en el exilio. Unas direcciones adaptadas al futuro orden bipolar de postguerra: pragmáticas, burocratizadas y rígidamente jerarquizadas[89].

El 19 de octubre de 1944, los hombres de la AGE, al mando de Luis Fernández y Vicente López Tovar, rompieron la frontera por el Valle de Arán a la toma de Viella. Los objetivos de la operación «Reconquista de España» eran canalizar el flujo de guerrilleros que, de forma espontánea, se proponían pasar al país una vez liberado el sur de Francia, ocupar una porción de territorio español para ofrecérselo al gobierno republicano en el exilio y que este apelara a la intervención aliada para derribar a Franco. Los combates duraron algo menos de una semana[90]. Su desarrollo, desenlace y consecuencias siguen siendo controvertidos. Días después de comenzada la operación, Carmen de Pedro informó a Carrillo de que la resistencia del enemigo era más fuerte de lo previsto y que la población se mostraba apática. Simultáneamente, se estaban realizando infiltraciones por otros sectores, como Euskadi y Navarra. La invasión de Arán no encajaba en el diseño de postguerra, comprometía inoportunamente el progreso de la guerra contra Alemania y entraba en contradicción con la táctica de mantener a Franco fuera del conflicto. Frente a la decisión de Monzón de integrar a los comunistas españoles en las FFI, bajo la bandera de Unión Nacional, para marchar hacia la insurrección nacional, Carrillo aplicó diligentemente la línea estaliniana partidaria del abandono del asalto frontal, sustituyéndola por la creación de una infraestructura encubierta destinada a facilitar la infiltración capilar en el interior.

Carrillo y Azcárate se desplazaron a Montrejau, sede del Estado Mayor de la AGE, y se reunieron con sus responsables. Les instaron a emprender una retirada inmediata, que se realizó en una noche, llevándose consigo a unas decenas de soldados y guardias civiles prisioneros que fueron internados en el campo de

Noé, cerca de Toulouse, y que serían canjeados posteriormente por agentes de inteligencia franceses detenidos en Madrid[91].

Carrillo se arrogó desde entonces el mérito de haber salvado al partido de una aventura suicida que el resto de la dirección nunca hubiera aprobado. Fue el primero de sus enrolados en una batalla por el control del partido[92] que comenzó de inmediato con la purga de Monzón y de sus hombres en Madrid. Carrillo envió al país a un hombre de su confianza, Antonio Núñez Balsera, con órdenes escuetas y taxativas: «reforzar partido, conspiración y vigilancia. Limpiarle restos grupo»[93]. Detenido Monzón por la policía franquista e iniciada la campaña de insidias contra el núcleo de dirección que lideraba, había que neutralizar a su número dos, Gabriel León Trilla. La historia del asesinato de Trilla en Madrid es conocida: Núñez Balsera transmitió la orden de ejecución al grupo de Cristino García. El héroe de la Resistencia francesa se resistió, pero dos de sus hombres no tuvieron tantos escrúpulos. El 6 de septiembre, Trilla fue apuñalado por José Olmedo (Madriles) y Francisco Esteban Carranque. A manos del mismo grupo de killers cayó Alberto Pérez de Ayala (Fidel, César y Cantos), responsable de relaciones políticas de la Junta Suprema de Unión Nacional. El resultado fue contraproducente y tuvo efectos catastróficos: la investigación de la muerte de Ayala puso a la policía en la pista del grupo de Cristino García, culminando con la detención y el fusilamiento de sus integrantes. Un siniestro paradigma –liquidación / represión– que iba a repetirse en numerosos casos posteriores. Francia, de la que Cristino García era héroe nacional, respondió cerrando temporalmente la frontera.

Las purgas antimonzonistas fueron prácticamente coetáneas de la expulsión de Jesús Hernández y de sus escasos seguidores. Las exclusiones del periodo 1944-1947 sirvieron para cohesionar a una militancia cuya fe había sido sometida a duras pruebas y que necesitaba, más que nunca, sentir la seguridad reconfortante que proporcionaba la comunión con el partido a medida que se alejaba del horizonte inmediato el retorno a la patria liberada y se aventuraba larga la estancia en el frío y desolado territorio del exilio. El culto a la personalidad y el patriotismo de partido balsamizaron las heridas provocadas por la frustración y realimentaron la fe de estar del lado correcto de la historia. La guerra fría terminó de trazar la divisoria de un mundo bipolar en el que el mínimo cuestionamiento de un bloque se asociaba, ineluctablemente, a la traición y a la entrega al bando contrario.

Mientras procedía a una implacable depuración del aparato, Carrillo presentó un

nuevo plan de organización en el pleno de Toulouse de diciembre de 1945. Su posición en el organigrama del partido era cada vez más eminente. Si la disposición del friso de retratos de los integrantes del máximo órgano de dirección era un buen barómetro para medir su ubicación en la escala jerárquica, el número de Mundo Obrero del 16 de febrero de 1946 resultaba enormemente revelador: la efigie de Pasionaria ocupaba la portada; Carrillo, la segunda página; Mije, la cuarta; Antón, la quinta; Uribe, la octava y última[94]. Se retornó al más clásico concepto leninista de partido: los comunistas debían asentarse en fábricas y tajos. En las ciudades, apoyándose en la clase obrera; en el campo, en las guerrillas. Nuevos cuadros fueron enviados al país, camaradas jóvenes y totalmente desconocidos para la policía, cuya capacitación en técnicas de clandestinidad había corrido a cargo de las escuelas especiales. Había que extremar la vigilancia revolucionaria y desconfiar de todos aquellos veteranos quemados que podían haber claudicado ante la presión policial. Sin embargo, todas las precauciones se vieron frustradas por la actuación certera y demoledora de los traidores y los infiltrados que habían logrado colocarse en posiciones estratégicas.

Infiltrados

La sucesión de caídas por la acción deletérea de traidores o agentes policiales tuvo un largo recorrido en la trayectoria del PCE en el periodo de la postguerra. De la caída de Agustín Zoroa y Lucas Nuño, fusilados el 29 de diciembre de 1947, se responsabilizó a uno de esos hombres sin apenas biografía anterior a 1936, Antonio Rey Maroño, el Chato, cuyas características eran haber llegado al partido en el aluvión de la guerra de España, adolecer de una sólida formación política, pero, eso sí, mostrar una aparente obediencia incondicional a la dirección… hasta que caían en manos de la policía. Ni fue el primero, ni sería el último. La organización quedó desarticulada y en muy precarias condiciones. En Toledo y Ciudad Real, el partido quedó casi totalmente liquidado y en la región Centro dejó de existir. De las guerrillas, solo quedaron migajas de la Agrupación de Cáceres y de Ciudad Real, a las que se pretendió reunir, no sin dificultades, en los montes de Toledo. En las serranías de Levante quedaban los cada vez más reducidos núcleos de la AGLA.

Lo único que mantuvo un funcionamiento aceptable fue el trabajo de la JSU, con casi cuatrocientos adherentes, donde había lucido extraordinariamente la labor realizada por dos jovencísimos militantes conocidos por los alias del Peque y del Rubio. José Tomás Planas (el Peque), secretario del Comité Nacional de la JSU, se incorporó a la militancia de forma muy precoz: ingresó en los pioneros en 1932, con once años, y a los diecisiete ascendió al partido. Pasó a Francia en la marea de la retirada y anduvo implicado en acciones de la resistencia. Algo parecida era la trayectoria de Luis González Sánchez (el Rubio), nacido en 1923, cuya biografía era la prototípica del cuadro medio del estalinismo maduro: todos sus carnés tenían fecha posterior al 18 de julio de 1936 y su entrega a la causa, merecedora de alabanza por sus instructores, era total. Integrados ambos en la troika que dirigía la delegación del interior, mantuvieron frecuente contacto epistolar con Carrillo en su calidad de responsable de organización y le prometieron lanzar una gran campaña conmemorativa del 14 de abril y del 1.o de Mayo que no se olvidaría fácilmente. Se editaron con gran calidad técnica dos números extra de Mundo Obrero y se fantaseó con la convocatoria de una huelga general. Pero lo que se desencadenó fue la catástrofe.

El Rubio, primero, y el Peque, después entregaron a Roberto Conesa –que se había hecho pasar por impresor para ganarse la confianza de los dirigentes del interior– la dirección de la Comisión Ejecutiva de la UGT comunista, liderada por José Satué[95]. Todo lo que había estado en sus manos: partido, juventud, mujeres antifascistas e intelectuales cayó en manos de la policía. Las consecuencias de la infiltración al más alto nivel fueron demoledoras. Entre octubre de 1946 y enero de 1947 hubo más de dos mil detenidos[96]. Una relación nominal detalló los nombres y las peticiones de pena para 443 de ellos. Se ejecutaron cuarenta y seis penas de muerte y se impusieron penas de cárcel por un montante de 1.744 años[97]. El partido fue deshecho y solo quedaron grupúsculos aislados y dirigidos por camaradas inexpertos. A finales de la década de los cuarenta, la organización del PCE se encontraba, en la práctica, reducida a las prisiones, dispersa en el exilio, aislada en los montes o sepultada en los cementerios.

Cambio de fase

La debacle de 1947 acabó con el espejismo de que los días de la dictadura estuvieran contados. Se imponía reformular la estrategia. A ello contribuyó la entrevista mantenida por un selecto grupo del Buró Político del PCE –Ibárruri, Antón, Carrillo– con Stalin, Molotov, Voroshilov y Suslov en agosto de 1948. Los españoles acudieron a la cita con un informe sobre la situación del partido que ocupaba treinta y ocho folios[98].

En un arranque que era todo un ejemplo de vanidad organizativa, los dirigentes españoles presumían de que el PCE era el único partido que actuaba en el interior, de la copiosa difusión de su prensa clandestina –de Mundo Obrero, 4.600 ejemplares en Madrid, 4.000 en Galicia, de 4.000 a 5.000 en Levante; de Euskadi Roja, 2.000; de Treball, 5.000– y de contar con unos 20.000 militantes. No dudaron en marcarse un farol: «Podemos afirmar que el partido, a pesar del terror franquista, ha adquirido un considerable desarrollo de masas y en conjunto es hoy más numeroso que antes de febrero de 1936». Nunca es recomendable hacerse a sí mismo trampas al solitario: el dato de militantes en febrero de 1936 era de 22.497, siendo aquel un contexto de legalidad y teniendo en cuenta que los recientes golpes policiales habrían mermado sensiblemente estos contingentes. En el exterior, el número de militantes era de 15.944 (14.262 en Francia y África del Norte, y 1.682 en los restantes países de América y en la URSS, sin incluir los 5.000 del PSUC). La mayoría de ellos, entre el 60 y el 70 por 100, lo eran ya durante la guerra de España. El resto se había afiliado desde 1940, y la mayoría lo había hecho con la liberación. Si, tradicionalmente, el mayor vivero del PCE lo había constituido la vieja colonia de emigrados económicos radicada en Francia, ahora se nutría principalmente de la emigración política. Durante el último año, habían solicitado el carné 1.517 nuevos afiliados, de ellos 491 emigrantes económicos (32,4 por 100) y 1.026 exiliados (67,6 por 100). La cuarta parte del total (382) provenía de grupos socialistas y anarquistas. El inventario relativo al trabajo en las cárceles daba cumplida cuenta de la brutalidad de los golpes sufridos: de los datos proporcionados se deducía que uno de cada cinco militantes se encontraba en prisión, que idéntica proporción de cuadros enviados al interior se arriesgaba a perder la libertad y, en casi una cuarta parte de los casos, la vida.

La pertinaz lectura del franquismo como episodio destinado a ser coyuntural había abocado a la dirección a no aplicar, hasta un periodo muy tardío y en circunstancias muy distintas, las directrices de la Komintern acerca del trabajo en las organizaciones de masas del régimen. Los españoles se excusaron aduciendo el rechazo que el sindicato vertical provocaba entre los obreros y

campesinos y el temor a que, de dedicarse preferentemente al entrismo, socialistas y anarquistas tomaran el control de los sindicatos de clase. El balance en este campo, sin embargo, era extremadamente pobre: los adherentes a la UGT (comunista) en todo el país solo eran 11.814, sin que se llegase a justificar la exactitud de este número. El principal frente de combate contra la dictadura lo integraba la guerrilla, donde el PCE echó toda la carne en el asador. La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón fue presentada como la joya de la organización, con sus cuatrocientos hombres en los campamentos del monte y un indeterminado número de enlaces en el llano. Lo cierto es que, mientras la troika del PCE intentaba venderle esta triunfal versión a Stalin, las fuerzas de la AGLA menguaban día a día por los golpes de una Guardia Civil que no reparaba en métodos –tortura, ley de fugas, tierra quemada–, encaminándose a la debacle final[99]. Lejos de reconocer esta debilidad, los dirigentes españoles solicitaron el envío de armas porque consideraban que aún había posibilidades de «ampliar la lucha popular contra el franquismo y de incorporar nuevas fuerzas al movimiento de resistencia».

Stalin no compró la mercancía. España no ocupaba un lugar central en sus preocupaciones, salvo como epifenómeno en el contexto del conflicto que estaba a punto de estallar en el seno del movimiento comunista con la Yugoslavia de Tito. Los testimonios de Pasionaria y Carrillo coincidieron en la observación sobre la actitud de Stalin durante el encuentro: «Tenía delante un bloc y nos escuchaba haciendo dibujos», recordó Ibárruri. «No intervino mucho, decía de vez en cuando: ¡Niet! (¡No!) y nos hablaba de la experiencia de los bolcheviques», apostilló Carrillo. Ambos concordaron en la última recomendación del Generalísimo antes de despedirse: «Tepernie» («Paciencia»)[100]. Con eso y con sus observaciones acerca de la necesidad de trabajar dentro de los sindicatos verticales y de las organizaciones de masas franquistas Stalin les estaba señalando que el camino del asalto frontal contra la dictadura estaba clausurado y que convenía prepararse para una prolongada guerra de posiciones.

En el número 31 de Nuestra Bandera (noviembre-diciembre de 1948), Carrillo publicó un artículo titulado Sobre las experiencias de dos años de lucha, encargado de trasponer las nuevas directrices a la línea del partido. Dando por finiquitada la política de búsqueda de alianzas con otros sectores bajo fórmulas frentepopulistas o de Unión Nacional, anunció el fin de la vía insurreccional y el paso a una nueva fase caracterizada por la acumulación de fuerzas en luchas cotidianas de fábricas o barriadas. «Lenin y Stalin –concluía Carrillo– nos han enseñado que, con solo la vanguardia, es imposible vencer[101].»

Entre lo viejo y lo nuevo

La década de los cincuenta no podía empezar peor para el PCE: desarbolado prácticamente en el interior por las caídas de 1947, con problemas para la evacuación de los últimos reductos guerrilleros y golpeado por el gobierno francés en lo que hasta entonces había sido su retaguardia. El 7 de septiembre de 1950, a las cinco de la mañana, ciento cincuenta inspectores de la Direction de Surveillance du Territoire (DST)[102] y varios centenares de agentes de policía a sus órdenes desencadenaron la operación Bolero-Paprika, una redada masiva cuyo objetivo era la detención del mayor número de activistas comunistas españoles para ser confinados forzosamente en Córcega y Argelia. Poco antes, el gobierno francés había prohibido las publicaciones comunistas españolas: Nuestra Bandera, Lluita, Mujeres Antifascistas, El Obrero Español, Juventud, Solidaridad Española, Partidarios de la Paz, Euskadi Roja y Mundo Obrero. Mientras la gendarmería llevaba a cabo la redada, se declararon ilegales y se disolvieron en Francia el PCE, el PSUC, el PC de Euskadi, los Amigos de Mundo Obrero, las Mujeres Antifascistas, la JSU, Solidaridad Española y la Asociación de Antiguos FFI.

Era el punto final de un proceso de investigación abierto por los servicios de información franceses a partir de 1947. La salida de los ministros comunistas galos del gobierno, en mayo de aquel año, dejó desprotegida a la organización del PCE en Francia y marcó el punto de arranque de la Guerra Fría en Europa occidental, que en la oriental tuvo su correspondencia en el bloqueo de Berlín (1947) y el golpe de Praga (1948). Los comunistas habían intensificado las campañas antiimperialistas a raíz de la formulación de la «doctrina Truman» que postulaba la intervención estadounidense en cualquier escenario mundial donde el comunismo supusiese una amenaza a la hegemonía occidental. Mientras, al otro lado del tablero, en el marco de la conferencia celebrada en Szklarska-Poreba (Polonia) en el mes de septiembre, en que nació el Buró de Información de los partidos comunistas –el Kominform–[103], Andrei Zhánovd formuló la teoría de «los dos campos». Las orientaciones para el nuevo periodo se resumían en una triada: lucha contra el imperialismo, defensa del campo socialista y refuerzo de la cohesión interna. Después de las etapas brillantes y creativas del Frente Popular y de la participación en los gobiernos de reconstrucción

postbélica, la glaciación ideológica caía de nuevo sobre el movimiento comunista internacional.

La DST elaboró numerosos informes sobre el PCE, buscando de manera obsesiva desmontar una supuesta red de espionaje a favor de la URSS. Se consideraba a los comunistas españoles audaces, entregados a su causa con fervor casi místico y plenamente dispuestos a actuar como una quinta columna de apoyo a una potencial invasión soviética de Francia. En bastantes casos se hacía hincapié en la especialización en radio de muchos de ellos. Se escrutó intensivamente la región pirenaica en busca de depósitos de armas y bases de entrenamiento.

Durante el convulso ciclo de huelgas que agitó Francia entre 1947 y 1948, los servicios franceses destacaron la implicación de los comunistas españoles, que, al contrario que sus compatriotas socialistas o republicanos, militaban en un movimiento internacional. Sus trincheras no estaban limitadas por el cul-de-sac de una frontera o por las capitulaciones de un pasaporte Nansen[104] y, por tanto, no dudaron en involucrarse en las luchas de sus camaradas franceses, a cuyas organizaciones sindicales estaban adheridos. El PCE convocó a los trabajadores españoles a la huelga al lado de los obreros franceses, intensificó los ataques contra el imperialismo americano y difundió en sus medios que los Estados Unidos eran los responsables de la pasividad de la ONU respecto a la resolución del problema franquista. Con motivo de las huelgas en las cuencas del norte, la delegación comunista española entregó a la CGT una suma de 50.000 francos para la caja de resistencia, suma que dedujo de la recaudación de sus propias cuotas. Las autoridades francesas llegaron a barajar la posibilidad de deportar a los españoles detenidos por su implicación en conflictos franceses y, aunque no dieron este último paso, sí pusieron bajo la lupa de sus servicios de información, los Renseignements Généraux, a sus militantes, dirigentes, organizaciones satélite y publicaciones.

El 9 de septiembre de 1950, fuentes policiales informaron del balance de Bolero-Paprika: doscientas ochenta y ocho detenciones, de las que ciento setenta y siete correspondían a españoles[105]. Sesenta y uno fueron deportados a Córcega, ochenta y cuatro a Argelia y treinta y dos –entre ellos, la mayor parte de la dirección– a países del Este. La gran mayoría del Buró Político del PCE escapó a la detención, gracias a que la víspera, durante la fiesta de L´Humanité, Jacques Duclos, número dos del PCF, comunicó a Enrique Líster que el golpe sería al día siguiente. El grupo parlamentario comunista elevó interpelaciones y la prensa

promovió campañas de solidaridad, pero otros asuntos, como las guerras de Corea y de Indochina, eclipsaron el interés de la opinión pública francesa por la causa antifranquista. El Buró Político del PCE fue nuevamente dispersado. Los únicos miembros activos que permanecieron clandestinamente en Francia fueron Antón y Carrillo, que, bajo la falsa identidad de monsieur Giscard, asumió las principales tareas de dirección. Su posición dominante resultó reforzada por el forzoso retraimiento de Pasionaria, convaleciente en Moscú.

Sometido desde entonces a una doble clandestinidad, las tentativas de reconstrucción del partido pasaron por los viajes de exploración de activistas, al encuentro de aquellas células aisladas que, a pesar de todo, no dejaban de constituirse espontáneamente. Su génesis obedecía al impulso de reunirse, orientarse por la escucha de la Pirenaica, reconocerse como parte de la organización y, de alguna manera, buscar el contacto. Lo contó Juan Antonio Bardem en sus memorias: «Una tarde de la primavera de 1943 [otros dos amigos] y yo fuimos caminando y hablando por el Parque del Retiro y llegados a un punto entre medias de la estatua ecuestre del general Martínez Campos y el paseo de Coches, nos detuvimos. No había nadie a nuestro alrededor. Entonces [los tres] declaramos que en ese mismo momento nos constituíamos como célula del Partido Comunista de España. El trabajo inmediato consistía en entrar en contacto con la organización clandestina del partido en Madrid y darle cuenta de nuestra existencia»[106].

Muchos comunistas veteranos, aun manteniendo su apego al partido, estaban quebrantados moralmente por la derrota y los años de persecución, abrumados por los problemas familiares y atenazados por el miedo a volver a sufrir la tortura y la cárcel si se comprometían de nuevo de manera activa. Por otra parte, se carecía de una red de direcciones locales y provinciales capaz de recoger, organizar y dirigir políticamente a los nuevos simpatizantes. La comisión para el interior decidió formar un núcleo de instructores para trabajar en el país en periodos cortos, conocer de primera mano la situación política y evaluar a los potenciales nuevos cuadros. En el momento oportuno, estos podrían constituir la base para formar una dirección nacional dentro del país. Se puso fin de esta forma al viejo sistema de enviar cuadros desde Francia para hacerse cargo del trabajo político. Había que tomar nota de las nuevas circunstancias: «Han pasado catorce años desde el fin de la guerra y son camaradas que no están enraizados en el país como si vivieran dentro»[107].

No sería hasta finales de la década de 1950 cuando el PCE diera los primeros pasos para la construcción del partido que se convertiría en referente para las nuevas generaciones que se sumaban a la lucha contra la dictadura. La primera tarea urgente era superar las precarias condiciones en que se encontraba sumido: perseguido, desmantelado reiteradamente, encarcelados o ejecutados sus cuadros más destacados, dispersa su dirección y aislado del resto de fuerzas políticas. Con el agravante de que la debacle de 1947 había venido a acumular un nuevo estrato de derrota y desmoralización sobre los que ya pesaban desde 1939.

La situación de Santiago Carrillo, aunque ya eminente en el organigrama del partido, todavía no estaba definitivamente consolidada. No fue hasta 1953 cuando monsieur Giscard empezó a comandar sin tutelas el aparato más importante y decisivo del PCE en la clandestinidad. Pasionaria, Uribe y la vieja guardia estaban lejos, en Moscú o en Praga. El grupo de los jóvenes –Fernando Claudín, Ignacio Gallego y un ascendente Jorge Semprún– conformaba un dinámico equipo de dirección en torno al chalet de Ivry-sur Seine, residencia clandestina de Carrillo. Los vientos soplaban a su favor. Stalin murió el 5 de marzo de 1953. El franquismo se abría al exterior, establecía relaciones con los Estados Unidos y su pervivencia se presumía prolongada. La guerrilla había sido arrumbada como un anacronismo y la acumulación de fuerzas en las movilizaciones de masas, como la huelga del metal de Euskadi o el boicot a los transportes públicos en Barcelona, solo acababa de empezar. Habían tenido lugar las huelgas y manifestaciones de la primavera de 1951, las primeras protestas importantes desde el fin de la guerra. Con un optimismo a todas luces excesivo, el PCE concluyó que «la cuestión del cambio de régimen está hoy a la orden del día, no solo entre las masas populares, sino entre la propia burguesía».

El equipo nucleado en torno a Carrillo demostraría su habilidad para, en expresión tomada de Isaac Deutscher, «alzarse con la ropa de los bañistas». Tras haber repudiado la táctica monzonista de pacto con los católicos y criticado las tentativas de aproximación basadas en un espíritu de reconciliación nacional, la dirección comunista se puso a la cabeza de la exigencia de superar la división abierta por la Guerra Civil como guía para formular alternativas al régimen franquista. No se dudó, una vez más, en cohonestar el presente reinterpretando el pasado y para ello se recurrió al manifiesto de Unión Nacional de septiembre de

1942, en el que se proclamaba que «la reconquista de España para la libertad y la democracia no puede ser obra de un partido o una clase, sino el resultado de la conjugación de esfuerzos de todos los grupos políticos nacionales, desde los católicos hasta los comunistas»[108]. Paradójicamente, lo que en aquel momento había servido como prueba de cargo contra Monzón, la política de reconciliación nacional, se convertiría en el eje central de la propuesta comunista hasta la transición democrática, otorgando al PCE un lugar central en el debate sobre el proyecto para España después de Franco.

El PCE se atribuyó haber encontrado, después de tantos años, «una línea política justa, una orientación correspondiente en materia de táctica y organización que en otros periodos nos faltaba». Dicha línea se caracterizaba por la combinación del trabajo legal y el ilegal. Habría que vencer incomprensiones entre los propios militantes, al tiempo que evitar caer «en lo que el camarada Stalin llamaba ser utilizados nosotros por las posibilidades legales». Pero el paso dado para la penetración en los sindicatos abría todo un arco de posibilidades: «Hoy podemos no solamente trabajar en las organizaciones creadas, sino incluso, en ciertos casos, impulsar la creación de organizaciones de masas legales de carácter "marginal". Esto plantea una cuestión que la Comisión del Interior ha comenzado a abordar: estudiar más concretamente cuáles son los derechos de los obreros en los Sindicatos Verticales, cuáles son los derechos que reconoce, aunque sea en teoría, la legislación social presente; estudiar también los derechos a organizarse de diversas formas que pueda haber en las leyes franquistas».

Se trataba, en suma, de presionar desde dentro para conseguir que algunos derechos, por relativos y limitados que fueran, dejaran de ser papel mojado y la lucha destinada a conseguirlos sirviera como medio de enlace con las masas. Era la primitiva formulación de lo que se conocería después como la ampliación de los espacios de libertad: «La cuestión de las libertades democráticas es sentida hoy por las más amplias capas del país; no debemos perder oportunidad de plantear la defensa de dichas libertades, de apoyar y sostener cuantas iniciativas contribuyan a arrancar libertades para el pueblo, sin perjuicio de explicar y defender en cada caso ampliamente nuestra posición propia». En este proceso acumulativo, de guerra de posiciones, había que abandonar la hasta entonces tradicional subestimación de las luchas reivindicativas y la incomprensión sobre su papel en la preparación de las grandes luchas políticas que conducirían al derrumbamiento del régimen. «La cuestión de las reivindicaciones afecta e

interesa a millones, es la palanca con que podemos moverlos, si sabemos recogerlas, intervenir en todos los conflictos y darles la orientación adecuada; es la palanca para elevar a las masas, acompañándolo con una labor de esclarecimiento político, a un nivel de conciencia más alto»[109].

A partir de 1951, el paso por la frontera francoespañola había dejado de ser un obstáculo que sortear con viajes arriesgados monte a través. El gobierno francés permitió el tránsito hacia España a los ciudadanos con pasaporte y visado. Esto supuso un cambio sustancial en el trabajo del aparato técnico, que a partir de entonces se encargó de proveer de documentación falsa –pasaportes franceses, unas veces prestados por camaradas del PCF, otras falsificados a partir de ellos– a los instructores destinados al país[110]. Se facilitó así en cierta medida la penosa y arriesgada tarea de tejer y destejer al compás de los reiterados golpes policiacos, hasta que, en la segunda mitad de la década, el resurgir de la oposición cultural[111], la reactivación de las movilizaciones laborales y estudiantiles y el revulsivo del XX Congreso del PCUS abrieran la puerta a un nuevo periodo en la trayectoria del PCE.

[1] Algunos ejemplos: Indalecio Prieto, Entresijos de la guerra de España, Barcelona, Planeta, 1989; y Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional, Barcelona, Planeta, 1989; Justo Martínez Amutio, Chantaje a un pueblo, Madrid, G. del Toro, 1974; Juan García Oliver, El eco de los pasos, Barcelona, Planeta, 2008; Cipriano Mera, Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, Madrid, CGT, 2006; Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra: una contribución a la historia de la tragedia española, Madrid, G. del Toro, 1975.

[2] Entre sus libelistas más destacados, eruditos de tiempo libre y policías de empleo principal, véase Eduardo Comín Colomer, Historia del Partido Comunista de España, Madrid, Editora Nacional, 1967, 3 vols.; o Ángel Ruiz Ayúcar, El Partido Comunista, 37 años de clandestinidad, Madrid, San Martín, 1976.

[3] Burnett Bolloten, La Guerra Civil española: Revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza, 1997, pp. 167-169.

[4] Dolores Ibárruri, Manuel Azcárate, Luis Balaguer, Antonio Cordón, Irene

Falcón y Manuel Sandoval, Guerra y revolución en España, 1936-39, Moscú, Progreso, 1966.

[5] Partido Comunista de España, «Desarrollo numérico del P. desde diciembre de 1935 a diciembre de 1937», Documentos: Film 195, AHPCE.

[6] Annie Kriegel, Los comunistas franceses, Madrid, Villalar, 1978, p. 135.

[7] Partido Comunista de España, «Fuerza numérica del Partido y composición social en 1.o de marzo de 1937», Documentos: Film XVI, apartado 197, e «Informe de organización», Documentos: Film XVI, apartado 205, AHPCE.

[8] Sandra Souto Kustrín, Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, Valencia, Universitat de València, 2013.

[9] Es la tesis de Helen Graham, La República española en guerra (1936-1939), Barcelona, Debate, 2006.

[10] Cables, HW 17/27, 6485/Sp., 17/7/1936, The National Archives, TNA.

[11] Cables, HW 17/27, 6518/Sp., 23/7/1936, The National Archives, TNA.

[12] Cables HW 17/27, 6524/Sp., 21/7/1936, , The National Archives, TNA.

[13] Palmiro Togliatti, «Las características de la revolución popular española», en Los comunistas y la revolución española, Barcelona, Bruguera, 1976, pp. 11-36. Publicado originalmente en Stato Operaio, noviembre de 1936.

[14] Mundo Obrero, 26 de agosto de 1936.

[15] Mundo Obrero, 4 de septiembre de 1936.

[16] Jean-Richard Bloch, Espagne, Espagne, París, 1936. Citado en Carlos Serrano, L’Enjeu espagnol. PCF et guerre d’Espagne, París, Messidor-Éd. sociales, 1987, p. 24.

[17] Ibid., p. 51.

[18] El 9 de agosto, el comisario adjunto de Asuntos Exteriores, Nikolai

Krestinsky, escribió a Stalin aconsejándole que, debido a las implicaciones políticas internacionales, era preferible desestimar las peticiones de ayuda republicanas. Yuri Rybalkin, Stalin y España: la ayuda militar soviética a la República, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 50.

[19] C. Serrano, L´enjeu espagnol, p. 33.

[20] Cables, HW 17/27, 6573/Sp., 29/7/1936, y TNA, HW 17/27, 6629/Sp., 7/8/36, 6732/Sp., y 16/8/36, The National Archives, TNA.

[21] «Medina [Codovilla, tutor de la Komintern hasta junio de 1937], Díaz. Os recomendamos particularmente que los expertos militares enviados deben utilizarse como asesores militares del Comité Central [CC] para ayudar al Estado Mayor del gobierno. No está permitido organizar un Estado Mayor, en especial para el CC [las cursivas son mías], ya que esto podría causar confusión a la misma unidad necesaria para las operaciones militares». Cables, HW 17/27, 6759/Sp., 21/8/1936, The National Archives, TNA.

[22] Annie Kriegel, Los grandes procesos en los sistemas comunistas: la pedagogía infernal, Madrid, Alianza, 1984, p. 33.

[23] Y. Rybalkin, op. cit., p. 51.

[24] Para los movimientos unitarios en el exilio y la resistencia antifranquista, véase Hartmut Heine, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952, Barcelona, Crítica, 1983.

[25] Partido Comunista de España, «Vicente Uribe», Tesis, manuscritos y memorias: 60/6, AHPCE.

[26] Mundo Obrero, 5 de septiembre de 1936.

[27] Alejandro R. Díez Torre, Trabajan para la eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra Civil en Aragón, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009.

[28] Ricardo Robledo Hernández, Los ministros de Agricultura de la Segunda República (1931-1939) (Política y Sociedad en la España del siglo XX), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

[29] Fernando Hernández Sánchez, Comunistas sin partido. Jesús Hernández, ministro en la guerra civil, disidente en el exilio, Madrid, Raíces, 2007.

[30] Sobre los logros del Ministerio de Instrucción Pública, véase Manuel Aznar Soler, República literaria y revolución, Sevilla, Renacimiento, 2010, 2 vols.

[31] Michel Alpert, El Ejército Popular de la República (1936-1939), Barcelona, Crítica, 2007, p. 52 ss. Aunque sus fundadores ofrecieron la cifra de 70.000 hombres como fuerza inicialmente integrante de esta unidad, es más probable que las dimensiones reales se situaran en torno a los 25.000. Comín indica que, durante la defensa de Madrid, el Quinto Regimiento puso en línea de combate a 18.300 hombres, de los que murieron 2.500 y resultaron heridos 5.700. Eduardo Comín Colomer, El 5.o Regimiento de Milicias Populares, Madrid, San Martín, 1973, p. 277.

[32] Michel Alpert, op. cit., pp. 54-55.

[33] D. Ibárruri y otros, Guerra y revolución, tomo II, p. 267.

[34] Partido Comunista de España, Documentos: Film XVII, apartado 294, AHPCE, No es menos cierto, sin embargo, que más de la mitad (el 56,9 por 100 de los reclutas del EPR se inscribieron bajo la categoría «sin partido».

[35] Santiago Álvarez, Memorias, A Coruña, Edicions do Castro, 1989, t. III, p. 799, y «Actas del Pleno Nacional de Regionales, CNT-FAI-FIJL, Octubre de 1938», PS-Barcelona: 1429, Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).

[36] M. Alpert, op. cit., pp. 183 ss.; y Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez, El desplome de la República, Barcelona, Crítica, 2009.

[37] PS-Barcelona: 1429 (CDMH).

[38] Carta de Rojo a Negrín, 18 de febrero de 1939: «No necesito decirle que de todos los partidos políticos ha sido y es el único que tiene mis simpatías. Creo que cometen un gran error, incluso asumiendo ellos la responsabilidad general de los mandos y de la dirección de esta fase de la lucha, porque van a hacer que se concentren aún más los esfuerzos del adversario y de todos los países y van a lograr que quede definitivamente aplastado su partido, el único relativamente sano en nuestra organización política». José Andrés Rojo, Vicente Rojo. Retrato

de un general republicano, Barcelona, Crítica, 2006, p. 282.

[39] José Luis Ledesma, Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, p. 135.

[40] Ibid., pp. 241 y 243.

[41] Javier Cervera Gil, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, Madrid, Alianza, 1998, pp. 62 ss.

[42] «Cables», HW 17/276776/Sp., 25/8/1936, The National Archives, TNA.

[43] Glicerio Sánchez Recio, Justicia y guerra en España. Los tribunales populares (1936-1939), Alicante, Diputación Provincial de Alicante / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1991, pp. 90 ss.

[44] «Ha llegado la hora decisiva. El enemigo está en las mismas puertas de Madrid […] ¡Madrileños, por vuestros hijos, por vuestras mujeres, por el porvenir de una España feliz, ocupad las trincheras; defended Madrid del fascismo extranjero; defendedlo de los moros y legionarios! ¡Que no pase el fascismo!» (6 de noviembre de 1936). «El pueblo madrileño en armas empuja con ímpetu arrollador a los ejércitos mercenarios. Los traidores no entrarán en Madrid. Las mujeres, los chicos y las piedras quieren aplastarlos. ¡Adelante! ¡A por ellos!» (8 de noviembre de 1936). «Los rebeldes mueren por centenares a las puertas de Madrid […] ¡Firmes en la resistencia! ¡Hasta cavar la fosa al fascismo!» (9 de noviembre de 1936). «¡Aplastamos a Fanjul y a Goded; aplastaremos a Franco y a Mola! […] ¡Como ayer y hoy, seguid pegando! […] Madrid combate por su libertad y por su vida […] ¡Adelante, camaradas, hasta exterminar a los canallas!» (10 de noviembre de 1936).

[45] Los hechos han sido prolija y documentadamente descritos por Ian Gibson, Paracuellos: cómo fue. La verdad objetiva sobre la matanza de presos en Madrid, Barcelona, Temas de Hoy, 2005.

[46] Ángel Viñas, El escudo de la República, Barcelona, Crítica, 2007, p. 67.

[47] Alberto Reig Tapia, Violencia y Terror. Estudios sobre la Guerra Civil española, Madrid, Akal, 1990, p. 97. El declive de la mortalidad por efecto de la represión de retaguardia también fue visible a partir de 1937 en Cataluña: de los

8.360 asesinados en esta región, 6.400 (el 76,5 por 100) lo fueron antes de finalizar 1936: Julián Casanova, De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997, p. 60.

[48] La Vanguardia, 14 de abril de 1938.

[49] Citado en Palmiro Togliatti, Opere, 1935-1944, Roma, Editore Reuniti / Instituto Gramsci, 1979, p. CIX.

[50] Pelai Pagès, «El POUM durante la guerra civil, la obsesión del estalinismo», en Max Rieger, Espionaje en España, Sevilla, Renacimiento, 2007, p. 13.

[51] Max Rieger, Espionaje en España.

[52] Partido Comunista de España, «Togliatti», Internacional Comunista: 137/14, fecha 26/3/1938, AHPCE.

[53] Treball, diciembre de 1989. Una reflexión sobre el caso Nin desde la óptica comunista de los años noventa; Manuel Vázquez Montalbán, recuperado de https://fundanin.net/2019/10/31/la-sombra-de-nin-es-alargada/#more2646.

[54] H. Graham, op. cit., p. 207.

[55] Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, Tusquets, 2001, pp. 250 ss.

[56] Eran: independencia de España / Evacuación de ejércitos extranjeros / República democrática / Plebiscito para determinar su estructuración jurídica y social / Libertades regionales sin menoscabo de la unidad de España / Libertad de conciencia protegida por el Estado / Garantía del derecho a la propiedad legítima / Liquidación de la propiedad semifeudal / Legislación social que garantice los derechos de los trabajadores / Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza / Ejército al servicio de la Nación, libre de tendencias y partidos / Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional / Amplia amnistía.

[57] Fueron expuestos por Negrín en la última sesión de Cortes celebrada en Figueras el 1 de enero de 1939: «Garantía de la independencia de nuestro país y de la libertad contra toda clase de influencias extranjeras; garantía de que sea el pueblo español mismo el que señale cuál ha de ser su régimen y cuál ha de ser su

destino; garantía de que, liquidada la guerra, habrá de cesar toda persecución y toda represalia, y esto en nombre de una labor patriótica de reconciliación, base necesaria para la reconstrucción de nuestro país devastado». La retirada del Ejército leal a la República a Francia: último discurso de Negrín a las Cortes, recuperado de http://www.fundacionjuannegrin.com/weblog/2019/02/23/la-retirada-del-ejercito-leal-la-republica-francia-ultimo-discurso-de-negrin-las-cortes/

[58] Partido Comunista de España, «Togliatti», Internacional Comunista: 137/14, AHPCE.

[59] Los hechos aparecen exhaustivamente descritos y analizados en A. Viñas y F. Hernández Sánchez, El desplome de la República.

[60] Partido Comunista de España, «Informe a Jesús Hernández, 9 y 15/6/1939», Dirigentes: Pedro Checa, 7/3.1.6. AHPCE.

[61] Partido Comunista de España, «Correspondencia, Reunión 19/6/1939», Dirigentes: Pedro Checa, 7/2. AHPCE.

[62] Partido Comunista de España, «Relación de españoles en Francia y Norte de África con destino a la URSS», Emigración política: URSS, 98/1. AHPCE.

[63] Partido Comunista de España, «Informe sobre España 11/5/1940 (de Pedro Checa)», Activistas: 93/49.0, AHPCE.

[64] Partido Comunista de España, «A todos los miembros del PCE, 25/11/1939», Documentos del PCE: Film XX, apartado 243, AHPCE.

[65] Partido Comunista de España, «Cómo debe trabajar la dirección en América, 1940, sin fecha», Documentos: carpeta 21. AHPCE,

[66] Carmen Parga, Antes de que sea tarde, Madrid, Compañía Literaria, 1997, pp. 103-104.

[67] Ilia G. Starinov, Over the Abyss: My Life in Soviet Special Operations, Nueva York, Ivy Books, 1996.

[68] Partido Comunista de España «Declaraciones de Gregorio Velasco, Moscú, 31 de mayo de 1944», Divergencias: Jesús Hernández, 107/1.3. AHPCE.

[69] Partido Comunista de España, «Declaraciones», Divergencias: Jesús Hernández, 107/1.3., AHPCE

[70] Partido Comunista de España, «Informe de Claudín sobre Cimorra», Divergencias: Jesús Hernández, Declaraciones, Caja 107/1.3., AHPCE

[71] Partido Comunista de España, «Carta a Dolores Ibárruri, 03/12/1942», Confidencial, carpeta 37. AHPCE

[72] D. Ibárruri y otros, op. cit., t. II, pp. 221-222.

[73] Joan Estruch, El PCE en la clandestinidad (1939-1956), Madrid, Siglo XXI de España, 1982, pp. 72-77, y Fernando Claudín, Santiago Carrillo: crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983, p. 70.

[74] «Venona», 3/NBF/T2245, 12/6/1944, National Security Agence (NSA).

[75] Partido Comunista de España, «Informe sobre el trabajo y la situación de la dirección del PCE en México, 3 de diciembre de 1941», Documentos: Caja 102, 6.2., AHPCE.

[76] Partido Comunista de España,«Actividades del Partido en el exterior después de la derrota», Documentos: Carpeta 20, AHPCE.

[77] «Venona», 3/NBF/T2242, 23/12/1943, National Security Agence (NSA),

[78] La decisión se tomó en una reunión en octubre de 1940 en el campo de Argelès, a la que acudieron, entre otros, Jaime Nieto y Sixto Agudo. Mario Martín Gijón, La resistencia franco-española (1936-1950), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2014, p. 275.

[79] Geneviève Dreyfus-Armand, El exilio de los republicanos españoles en Francia, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 161-162.

[80] Sixto Agudo, En la resistencia francesa, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1985, p. 48.

[81] Partido Comunista de España, «Informe sobre Monzón», Anexo, Caja B, Caso Monzón, jacq. 29-30, AHPCE.

[82] Armando López Salinas, entrevista con el autor (20/5/2013).

[83] Fernando Hernández Sánchez, Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953), Barcelona, Pasado & Presente, 2015.

[84] Sobre Quiñones, la obra de referencia es la de David Ginard i Feron, Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942), Palma-Madrid, Documenta Balear-Compañía Literaria, 2000.

[85] El más completo y exhaustivo estudio de las biografías de militantes y cuadros de este periodo es el de Carlos Fernández Rodríguez, Los otros camaradas: El PCE en los orígenes del franquismo (1939-1945), Zaragoza, Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 2020.

[86] Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 2006, p. 495.

[87] Partido Comunista de España, «Informe a Pasionaria», Dirigentes: Santiago Carrillo, caja 30/, AHPCE.

[88] Giorgio Bocca, Palmiro Togliatti, Barcelona-Buenos Aires, Grijalbo, 1977, pp. 330-331.

[89] Para el concepto de «estalinismo maduro o tardío», véase David Priestland, Bandera roja. Historia política y cultural del comunismo, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 275 ss.

[90] Sobre este episodio, véase Josep Sánchez Cervelló (ed.), Maquis: el puño que golpeó al franquismo : la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, Barcelona, Flor del Viento, 2003, y Fernando Hernández Sánchez, La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco (1944-1950), Barcelona, Pasado & Presente, 2018.

[91] F. Hernández, La frontera salvaje, cit., pp. 85-87.

[92] Mariano Asenjo y Victoria Ramos, Malagón, autobiografía de un falsificador, Barcelona, El Viejo Topo, 2008, p. 139.

[93] Partido Comunista de España, «Núñez Balsera, Antonio», Informes de camaradas: jacq. 930, AHPCE.

[94] Mundo Obrero, 16 de febrero de 1946.

[95] Partido Comunista de España, «Informe al Comité Central sobre las causas de las caídas del Partido en Madrid de los camaradas Sánchez Biedma y Silverio Ruiz. Situación de la JSU, militantes. Relación de militantes venidos del exilio y que están en el penal de Ocaña, comportamiento de estos ante la policía y relación de confidentes de la policía. Sin fecha», Documentos no incluidos en catálogo: anexo caja A, jacqs. 162-163, AHPCE.

[96] Partido Comunista de España, «Informe sobre la situación del PCE hasta julio de 1948», Documentos: Caja 34, carpeta 32, AHPCE.

[97] Partido Comunista de España, «Relación de detenidos», Represión franquista: jacqs. 294-295, AHPCE.

[98] Partido Comunista de España, «Informe de la Delegación del Buró Político del CC al CC del PC(b) sobre la situación política y el Partido, 5 de agosto de 1948», Documentos: 1948, carpeta 29, AHPCE.

[99] Salvador F. Cava, «Una fecha decisiva para la Agrupación Guerrillera de Levante. Cerro Moreno, 7 de noviembre de 1949: asalto al campamento», Entremontes. Revista Digital de Estudios del Maquis, n.o 5.2, mayo 2013, recuperado de http://www.elmanco.es/entremontes/5.2.html.

[100] Dolores Ibárruri, Memorias de Pasionaria (1939-1977), Barcelona, Planeta, 1994, p. 127.

[101] Partido Comunista de España, «Sobre las experiencias de dos años de lucha», Nuestra Bandera 31 (noviembre-diciembre de 1948), p. 833.

[102] La Direction de la Surveillance du Territoire (Dirección de Vigilancia del Territorio) era un servicio de información del Ministerio del Interior, encargado del contraespionaje en Francia. Se encargaba de identificar a los residentes extranjeros para verificar si mantenían actividades sospechosas contra la seguridad del Estado.

[103] Agrupó alrededor del PCUS a todos los partidos gobernantes en las democracias populares, más los dos más importantes de occidente, el francés y el italiano.

[104] El pasaporte Nansen era una cédula personal expedida a los refugiados. Fue ideado en 1922 por Fridtjof Nansen, explorador, científico y diplomático noruego, con el fin de atender a la problemática planteada por los grandes contingentes de desplazados ocasionados por los grandes conflictos armados de la primera mitad del siglo XX.

[105] Junto a ellos, fueron detenidos cincuenta y nueve polacos, catorce rusos, trece italianos, seis húngaros, cinco checos, cuatro griegos, cuatro rumanos, dos búlgaros y cuatro apátridas.

[106] Juan Antonio Bardem, Y todavía sigue. Memorias de un hombre de cine, Barcelona, Ediciones B, 2002, p. 34.

[107] Partido Comunista de España, «Informe al BP de Santiago Carrillo sobre la situación en España y el estado del partido, 20/09/1953», Dirigentes: Dolores Ibárruri, 31/13.1.2., pp. 70-71, AHPCE.

[108] «Declaración del Partido Comunista de España. Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español. Junio de 1956», Boletín de Información (Año VI, número extraordinario, Praga, 1.o de julio de 1956), recuperado de http://www.filosofia.org/his/h1956rn.htm.

[109] Partido Comunista de España, «Informe al BP de Santiago Carrillo sobre la situación en España y el estado del partido, 20/09/1953», Dirigentes: Dolores Ibárruri, 31/13.1.2., pp. 113-114, AHPCE.

[110] M. Asenjo y Victoria Ramos, Malagón, p. 184.

[111] Para el nuevo periodo, véase Felipe Nieto, La aventura comunista de Jorge Semprún: Exilio, clandestinidad y ruptura, Barcelona, Tusquets, 2014.

III

EL CAMBIO DE RUMBO. EL PARTIDO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

(1954-1965)

– Francisco Erice –

EL CONGRESO APLAZADO

Los años que se extienden entre el V y el VII Congreso representan, para el PCE, una etapa de importantes cambios políticos y organizativos. Sin embargo, aunque Mundo Obrero iniciaba 1954 pronosticando «la intensificación de las luchas reivindicativas y políticas contra la execrada tiranía franquista por el pan, la democracia y la independencia nacional», el punto de partida no invitaba precisamente al optimismo. Las secuelas negativas de la lucha guerrillera, que aún se mantenían; la lentitud de la infiltración en las estructuras de masas del franquismo; la dispersión e ineficiencias de la dirección; la violencia represiva de la dictadura; y hasta los avances del régimen en su carrera por el reconocimiento internacional… constituían realidades que, cuando menos, justificaban una mayor prudencia en las expectativas. Pequeños grupos, a menudo aislados o sólo conectados a través de las consignas de Radio España Independiente (La Pirenaica), así como débiles contactos con algunos veteranos, excarcelados o no, eran, de momento, las endebles bases de la futura reconstrucción. La situación tampoco era buena en las agrupaciones del exterior. Algunos centenares de militantes vivían su exilio en la Unión Soviética y otros tantos en las democracias populares del Este de Europa. Francia albergaba el mayor número de afiliados, unos 8.000. En América Latina, la organización más fuerte era la de México, con medio millar de adherentes[1].

El sectarismo y los rígidos métodos de la dirección constituían, sin duda, un

factor limitativo, al igual que la represión, que se mantenía en cotas muy elevadas. El número oficial de presos políticos en 1955 ascendía a 2.172, pero las cifras reales eran, probablemente, superiores. A ello se añadía la situación de ilegalidad del PCE en Francia desde septiembre de 1950. Entre los integrantes del núcleo dirigente máximo, dejando a un lado a Dolores, asentada en Moscú, la mayoría se habían visto obligados a refugiarse en Praga, como Vicente Uribe, Enrique Líster, Antonio Mije y otros, permaneciendo clandestinamente en París Santiago Carrillo, junto a sus colaboradores inmediatos. La dirección quedaba, pues, fragmentada[2].

En este contexto, la adaptación del PCE a la nueva etapa no parecía fácil, pese a signos tímidamente alentadores, como las críticas que iban aflorando a los métodos autoritarios. En 1954, diversos factores positivos terminarán confluyendo en el V Congreso, aderezados con un diagnóstico catastrofista acerca del régimen, la convicción acerca del pujante desarrollo de la contestación social y los llamamientos a la unidad antifranquista. La inquietud obrera, según la optimista percepción del PCE, se manifestaba en la proliferación creciente de comisiones representativas al margen del Sindicato Vertical, que los comunistas apoyaban, al igual que lo hacían con el aprovechamiento de las elecciones sindicales para promover enlaces y jurados favorables a los trabajadores. El otro frente que parecía abrirse era el de intelectuales y estudiantes. A los primeros se dedicaba el «Mensaje del Partido Comunista de España a los intelectuales patriotas», de abril de 1954, en el que se les convocaba a sumarse a la lucha por la democracia y la soberanía nacional. En la organización de los segundos empeñaba su esfuerzo el clandestino Jorge Semprún (Federico Sánchez), que, tras contactar con algunos universitarios inquietos, conseguía constituir, también en abril, el primer grupo organizado del PCE en la universidad madrileña[3].

Meses más tarde, entre el 12 y el 21 de septiembre, tenía lugar junto al lago Machovo (Checoslovaquia) el V Congreso, cuya sola celebración contribuyó a elevar la moral militante, tras años de postración e impotencia. El evento era una operación técnicamente arriesgada y suponía, en expresión de Carrillo, «un serio desafío para el aparato del partido». En total, asistieron 106 personas: 64 delegados, 32 invitados y los 10 miembros del Buró Político. La mayoría pertenecían a la generación de los jóvenes de la guerra, y había un grupo procedente del interior; sólo cinco eran mujeres. Obviamente, los delegados habían sido designados y no electos[4].

Los principales documentos sometidos al congreso fueron el Informe del Comité Central, presentado por Dolores; el de Organización, expuesto por Carrillo; y el de Programa, defendido por Uribe. Dolores, aun rechazando el «liberalismo podrido», abogaba por la dirección colectiva y la necesidad de acabar con «los métodos de disciplina cuartelaria y las expulsiones caprichosas». La intervención de Carrillo hacía hincapié, asimismo, en el funcionamiento regular del partido, en el marco de un centralismo democrático escorado, por razones de clandestinidad, hacia el reforzamiento de los órganos dirigentes. También consideraba tareas prioritarias la infiltración en las organizaciones de masas del régimen, el acercamiento a la militancia joven y la extensión de comités por barriadas, fábricas y localidades[5].

En cuanto al programa, partía de la identificación del franquismo con una camarilla al servicio de terratenientes, banqueros y monopolistas vinculados al capital norteamericano, apoyada en las capas superiores del Ejército, las fuerzas represivas, la Falange y la Iglesia. El régimen habría llevado al país a una situación económica ruinosa, tras frenar la «revolución democrática» en ciernes de los años treinta, permitiendo la perpetuación de «supervivencias feudales». Pero su misma lógica conducía a la confrontación con la mayoría de la sociedad: obreros, campesinos, pequeña burguesía y burguesía no monopolista. El PCE proponía constituir un amplio Frente Nacional Antifranquista con el objetivo de derrocar a la dictadura y formar un gobierno provisional revolucionario, con representantes de todos los grupos integrantes y un programa mínimo de democratización, derogación de los tratados con Estados Unidos y medidas sociales urgentes. Ese gobierno convocaría elecciones a Cortes constituyentes, en las que el PCE abogaría por una república democrática, con derecho de autodeterminación para Cataluña, Euzkadi y Galicia. El partido defendía, además, una amplia reforma agraria que confiscara latifundios y eliminara los restos feudales. Propugnaba también la industrialización del país, limitaciones a los capitales extranjeros, una reforma fiscal progresiva, controles sobre la banca o nacionalización de unos pocos sectores estratégicos. Asimismo, incluía la separación de Iglesia y Estado, pero con subvención al culto, «teniendo en cuenta los sentimientos religiosos de una gran parte de la población»[6].

El congreso procedió también a renovar la dirección, a la que se incorporaron nombres vinculados al grupo de trabajo de Carrillo, antiguos jóvenes de la guerra o militantes ligados a la labor clandestina en el interior de España. De ese modo, Simón Sánchez Montero, Gregorio López Raimundo, Jorge Semprún, Francisco Romero Marín o Julián Grimau se sumaban al Comité Central,

mientras que Carrillo, Ignacio Gallego o Fernando Claudín ocupaban plaza en el Buró Político.

Tras el congreso, y a lo largo de 1955, se fue acentuando en el PCE la percepción de que descomposición del régimen y ofensiva popular avanzaban a la par. Según el manifiesto publicado con motivo del Primero de Mayo, crecía la movilización, mientras los cimientos del franquismo se cuarteaban, y la vieja oposición republicana seguía, incomprensiblemente, presa de un anticomunismo que impedía el progreso de la unidad. El PCE fue otorgando una atención progresiva a los grupos que surgían dentro del país, fundamentalmente «fuerzas burguesas». En el aniversario del 18 de julio, Dolores volvía la vista al interior, preludiando la retórica de la Reconciliación: «Debemos atraer al campo de la democracia a aquellos que están deseando abandonar las banderas franquistas, sin preguntarles cómo pensaban ayer, sino cómo piensan hoy y qué quieren para España»[7].

Según el PCE, la crisis del régimen acentuaba la necesidad de la movilización y la unión de las fuerzas democráticas para abortar los intentos de «cambios desde arriba» amparados por la monarquía: «En la práctica existe un compromiso que alcanza desde el cardenal primado hasta Gordon Ordax, el presidente Aguirre, Trifón Gómez y Federica Montseny, con el fin de facilitar abierta e hipócritamente una salida a espaldas del pueblo y contra los intereses de este». La alternativa era la acción decidida de los trabajadores y el pueblo: «El movimiento revolucionario de las masas se abre así paso entre los meandros de la descomposición del aparato fascista y marcha hacia el mar libre, donde la lenta corriente se transformará en grandes y demoledoras oleadas»[8].

Esta apreciación optimista aseguraba sustentarse, pues, en los avances registrados, ante todo, en el movimiento obrero. Las elecciones sindicales de 1954 fueron la primera experiencia de aplicación organizada del entrismo en el Vertical. En los congresos regionales sindicales de 1955 se aprobaron las reivindicaciones de salario mínimo, seguro de paro y el principio de «a igual trabajo igual salario», lo cual los comunistas consideraban un triunfo propio. El PCE llamaba a apoyar esta plataforma y constituir comisiones que actuaran frente a la empresa o el sindicato, de acuerdo con los enlaces cuando fuera posible[9].

Si los tímidos signos de un nuevo ciclo de movilización obrera podían resultar esperanzadores, otro indicio prometedor, aunque en menor escala, era la

inquietud de intelectuales y estudiantes. En lo que atañe a los primeros, el PCE fue capaz de atraer a un grupo relevante de escritores (Eugenio Nora, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángela Figueras) y otro de personas relacionadas con el mundo del cine (Ricardo Muñoz Suay, Juan Antonio Bardem, Julio Diamante, Eduardo Ducay, Paco Rabal…). La influencia entre los estudiantes ofrecía, asimismo, buenas perspectivas, dada la efervescencia de este sector, evidenciada ya a comienzos de 1954, cuando una manifestación del SEU sobre Gibraltar degeneró en batalla campal con la policía. El trabajo de Semprún entre los universitarios avanzaba combinando su formación política («todo era nuevo para ellos») con una proyección externa que incluía la puesta en marcha de un Congreso Universitario de Escritores Jóvenes. Este último proyecto y las elecciones de delegados dentro de la estructura del SEU se convirtieron en tareas prioritarias del curso 1954-1955, en el que el grupo se fue ampliando. Finalmente, el congreso sería aplazado sine die, ante un clima estudiantil que, además, en octubre de 1955, se vio seriamente alterado por la muerte de Ortega y Gasset, al que los estudiantes díscolos dedicaron una provocativa esquela laica y una manifestación, con corona fúnebre incluida, por el centro de Madrid, exhibiendo la condición «liberal» del pensador[10].

La buena noticia de que sectores significativos de la sociedad española comenzaban a salir de su letargo se completaba con discretos avances en la estructura clandestina del partido. Comenzaba a funcionar algo mejor la Comisión de Interior, dirigida por Carrillo, a la que se incorporaba, en enero de 1955, Fernando Claudín. Las conexiones con España se potenciaron gracias a la disponibilidad de pasaportes diestramente falsificados y la generalización de viajes al interior desde 1954. En el V Congreso, se planteó, además, la posibilidad de que, completando el trabajo de los enviados ilegales, los comunistas españoles residentes en Francia aprovecharan sus visitas legales para establecer contactos. Un informe de julio de 1955 recogía datos sobre 107 viajes en trámite, en la mayor parte de los cuales los afectados habían aceptado dicho encargo[11].

Precisamente en torno a la Comisión de Interior fue fraguando el grupo que protagonizaría el cambio de dirección de 1956. Los debates en el Buró contraponían la euforia de Carrillo y Claudín con el escepticismo de Uribe. En el celebrado en abril-mayo de 1955, Carrillo constataba la rapidez con que, a su juicio, iban cumpliéndose las previsiones del V Congreso; había que desarrollar el Frente Nacional dentro del país, atrayendo a obreros, campesinos e intelectuales, pero también a gentes que aún tenían el carné de Falange. Claudín

se mostraba todavía más incisivo, proponiendo que, en un momento en que «se agudiza la crisis del régimen», el partido se dirigiera públicamente a las demás fuerzas «en un documento sin carácter polémico», ofreciendo «una salida sin convulsiones»[12].

Los desencuentros con Uribe prosiguieron a lo largo de 1955. Pero la crisis en la dirección no estallaría hasta meses más tarde, con ocasión del ingreso de España en la ONU, aprobado el 8 de diciembre. El Buró, desde Praga, elaboró un comunicado que difundió la Pirenaica, mientras que Carrillo publicaba un artículo fijando posición al margen del mismo. El cotejo de ambos textos no presenta planteamientos radicalmente contrapuestos: ambos aceptan la política de la URSS y critican a los Estados Unidos; los dos lamentan que la entrada se produzca bajo la dictadura y admiten que la situación debe ser aprovechada por las fuerzas democráticas. El tono del Buró es, sin embargo, lastimero, frente a la actitud inequívocamente positiva que Carrillo muestra ante los hechos; y mientras el Buró lanza un llamamiento unitario a «las direcciones, militantes y afiliados de los partidos republicanos, del Partido Socialista, de los partidos nacionalistas y de la CNT», Carrillo se dirige a las organizaciones y grupos del interior, incluyendo «toda una serie de fuerzas burguesas y de clase media». Pero el casus belli no se derivaba tanto de las discrepancias en el análisis como de la ruptura de la organicidad por parte de quien dirigía el «grupo de París»[13].

LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

El PCE iniciaba 1956, una vez más, pletórico de optimismo. Se avanzaba hacia un gran pacto democrático impulsado por la clase obrera, pues «la realidad es que una huelga, comience donde sea, se extendería rápidamente a todos los centros industriales y podría crear una situación revolucionaria en el país». Sin embargo, esta vez la chispa saltó en medios universitarios, que se anticiparon a una primavera también laboralmente más agitada de lo habitual. El PCE intentó ligar el sentido de las acciones de obreros y estudiantes, relacionando ambas con la «crisis terminal» del régimen y situando esta confluencia «bajo el signo de la reconciliación nacional»[14].

La sobrevaloración de las protestas y de su carga antifranquista convivía,

paradójicamente, con un acendrado realismo a la hora de asumir la singularidad de cada movimiento. Así sucedió con los hechos protagonizados por los estudiantes madrileños en enero-febrero de 1956, con notable presencia de los comunistas en su gestación. El malestar de los universitarios con la dictadura o su rechazo de la penuria intelectual de la institución no pasaban desapercibidos para sectores del propio régimen. Aprovechando este caldo de cultivo, los militantes del PCE prepararon un «Manifiesto a los estudiantes madrileños», en cuya elaboración final participaron también exponentes de otros sectores ideológicos. El texto criticaba la mediocridad de la universidad existente y abogaba por convocar un congreso nacional de estudiantes para articular una representación democrática que reemplazara a la del SEU. Una vez aprobado el 31 de enero, se pasó copia a los corresponsales extranjeros y se distribuyó para recoger firmas de apoyo en la universidad, obteniéndose en pocos días unas 3.000[15].

A partir de este momento, se desencadenó la reacción violenta de los partidarios del SEU, culminando el 9 de febrero en un choque entre estudiantes contestatarios y escuadrones falangistas, con el resultado de un herido de bala entre estos últimos por «fuego amigo», pero que se intentó atribuir a los estudiantes[16]. La agitación y las amenazas de Falange condujeron al cierre de la universidad madrileña, al primer «estado de excepción» del régimen, e incluso a un cambio de gobierno, con la destitución de Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación, y el cese de algunos de sus colaboradores «liberales», como el rector madrileño Pedro Laín Entralgo. En días sucesivos, fueron detenidos algunos intelectuales y los estudiantes más activos, incluyendo varios comunistas, y el cineasta, también miembro del PCE, Juan Antonio Bardem.

La actuación gubernamental dejó prácticamente desmantelada la estructura clandestina universitaria del PCE, que contaba con medio centenar de militantes y simpatizantes. Pero pronto pudo renacer, incrementada con nuevas incorporaciones. Los sucesos también fueron el germen de organizaciones como la Asociación Socialista Universitaria, constituida el 26 de febrero, en la que incluso se «infiltraron» estudiantes comunistas. La ASU y el PCE asumirían conjuntamente la elaboración de un nuevo manifiesto que no alcanzó la resonancia del anterior, pero que se hizo público en la emblemática fecha del 1 de abril, aniversario del final de la guerra, asumiendo la retórica de la «reconciliación»[17].

Tras el éxito estudiantil, las huelgas obreras de la primavera tomaban el relevo.

El PCE reconocía el carácter económico de las reivindicaciones, pero defendió a la vez su significado político. También insistió en el trabajo de preparación llevado a cabo por los comunistas y otras fuerzas, y en el papel fundamental desempeñado por las comisiones. Las huelgas entroncaban con la efervescencia del año anterior, que había logrado romper el bloqueo de dos décadas y acabar con el mecanismo de fijación salarial consagrado desde la Guerra civil[18].

A las movilizaciones obreras y estudiantiles vino a añadirse un acontecimiento externo que avalaba los cambios tácticos iniciados por el PCE: los acuerdos del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), celebrado en Moscú entre el 14 y el 26 de febrero. Algunos de ellos incidían en la coexistencia pacífica y en la pluralidad de vías al socialismo. Estaba presente, asimismo, la necesidad de eliminar la pesada herencia de Stalin, que el informe secreto de Kruschev convirtió en dura requisitoria de los abusos y crímenes del georgiano, aunque luego fueran púdicamente englobados bajo el rótulo eufemístico de culto a la personalidad. El Buró Político español se congratulaba de las tesis sobre la diversidad de vías y consideraba las críticas del «culto» y la defensa de la dirección colectiva congruentes con los esfuerzos renovadores del PCE[19].

Mayores escollos presentaba la asimilación de la denuncia específica sobre Stalin, que arrojaba sombras inquietantes no sólo acerca del dirigente endiosado, sino también sobre la construcción del socialismo en la URSS[20]. El Informe Secreto conmovió a muchos militantes, pero especialmente a los veteranos, más socializados en el culto a Stalin. Así lo recordaba, por ejemplo, el estudiante español, entonces en París, Manolo López. Carrillo le comentaba a Dolores algo parecido, y Semprún aseguraba que, entre los universitarios, el informe no había creado problemas serios, enfrascados como estaban en la lucha en España. En términos generales, las revelaciones causaron escasas disensiones en el partido. Una excepción parcial nos la ofrece la organización de México y, como caso singular, Wenceslao Roces, que consideraba poco marxista atribuir las «tremendas deformaciones y tropelías denunciadas» a «la acción de un espíritu satánico», descartando responsabilidades colectivas. La dirección comunista española distó mucho de secundar visiones tan críticas, o incluso de acercarse a las audacias de Togliatti, limitándose a hablar de «abusos» de Stalin, y evitando cualquier puesta en duda del sistema soviético[21].

Paralelamente, el PCE afrontaba el debate abierto sobre la dirección. Tras el contencioso de la ONU, la refriega se reanudó en las reuniones de febrero-marzo

en Moscú, entre sesión y sesión del XX congreso. En ellas, la mayoría de los asistentes arremetieron contra el grupo de París, tildado de fraccionalismo y voluntarismo extremo en sus análisis. Sólo Claudín (Carrillo no estaba presente) defendió la posición de los acusados, y finalmente se aprobó convocar al Buró en pleno para plantear el problema. Dicho plenario se inició el 5 de abril en Bucarest, en un contexto muy diferente, pues a los efectos y revelaciones del XX Congreso se sumaban ahora los éxitos en las movilizaciones dentro de España. El Buró discutirá largamente sobre la situación política y la táctica del partido, por un lado, y los problemas de la dirección, por otro[22].

El debate del primer punto mostraba ya una clara sintonía entre las posiciones de Dolores, que rectificaba posturas anteriores, y el grupo de Carrillo. Pasionaria lamentaba que el partido hubiera seguido demasiado «la rodada de aquellos republicanos puros» metidos en su torre de marfil. Había que salir del «atasco del Frente Nacional Antifranquista», flexibilizando exigencias, por ejemplo, sobre la participación del PCE en el gobierno provisional postfranquista. Con tal obertura, Carrillo desgranaba una propuesta más detallada, percibiendo posibilidades de cambios graduales incluso bajo el régimen. En España existían ya fuertes tendencias a la «reconciliación nacional». Que el partido la plantease, «desarrollando su línea de frente nacional», añadía, «acentuará nuestro prestigio y nuestra autoridad en el país». Proponía luego acercarse a católicos, liberales o nacionalistas catalanes, pues «las fuerzas que deciden son las de dentro»[23]. Una vez aprobada la Política de Reconciliación Nacional (PRN), el debate se centró en la dirección, derivando hacia el culto a la personalidad, que terminó focalizándose en la figura de Uribe. La reunión restableció la secretaría de organización (la cual recayó en Carrillo) y constituyó un nuevo secretariado de cinco miembros.

A partir de este momento, la PRN es ya política del PCE. Mundo Obrero contrapone un franquismo guerracivilista a un Partido Comunista que «alza la bandera de la reconciliación nacional». En junio, se hace pública la declaración «Por la Reconciliación Nacional; por una solución democrática y pacífica del problema español». El texto ofrecía pocas novedades, más allá de sintetizar ideas anteriores y colocarlas bajo el rótulo que las haría populares. Formulaba solemnemente la propuesta de superar la línea divisoria de la guerra, dirigiéndose en especial a la nueva generación que no había vivido el conflicto, y la contextualizaba en la realidad internacional (coexistencia pacífica, ascenso del socialismo, cambios de la Iglesia católica…) y nacional (crisis del régimen y emergencia de nuevas fuerzas políticas). El entendimiento de las fuerzas

antifranquistas permitiría abrir paso a un cambio pacífico. El PCE ofrecía renunciar a «cualquier política de venganza», comprometiéndose a respetar la voluntad popular manifestada en elecciones libres. Proponía además algunos objetivos básicos (amnistía, democratización e independencia de los sindicatos, etc.) y concluía con una amplia oferta de cooperación, incluyendo el apoyo a «cualquier gobierno que dé pasos efectivos hacia la realización de una política de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, de paz, independencia nacional y restablecimiento de las libertades democráticas»[24].

Llaman la atención la moderación, generalidad y flexibilidad de la propuesta, que le permitirían adaptarse a las inflexiones de la política de alianzas desarrollada por el PCE en los años siguientes. Se trataba de una oferta de colaboración envuelta en una retórica moralista de superación del pasado que le otorgaba indudable atractivo. En ese sentido, la reconciliación se mantiene como lenguaje del partido hasta la Transición, superando los recelos de un sector de la militancia que pudiera interpretarla como «conciliación de clases». El éxito de esta política no puede medirse por el acierto o el error en cada uno de sus puntos, sino por su globalidad; y aunque los análisis en que se sustentaba eran irreales, la estrategia que inauguraba fue esencial para el desarrollo del PCE y el antifranquismo[25].

La puesta de largo de la PRN tendría lugar en el Pleno del Comité Central celebrado en los alrededores de Berlín Este entre el 25 de julio y el 4 de agosto[26]. Con él se inauguraba una etapa de dinamización del partido y sus estructuras orgánicas centrales, cuyas reuniones se harán mucho más frecuentes, aunque la iniciativa y las grandes decisiones sigan estando concentradas en pocas manos.

El primer punto del orden del día fue introducido por el informe de Dolores «Los cambios en la táctica del Partido para lograr la reconciliación de los españoles y acelerar la caída de la dictadura del general Franco por la vía pacífica». Según Pasionaria, la política del régimen creaba «bases de coincidencia entre la clase obrera, los campesinos, la pequeña burguesía y la burguesía no monopolista»; sobre ellas se apoyaba «la política de frente nacional del Partido y su llamamiento actual a la reconciliación nacional». La parte final se centraba en la conmoción del XX Congreso, reconociendo que las revelaciones sobre Stalin habían sido un golpe duro, pero necesario. Con todo, las fuerzas del socialismo habían continuado actuando, y el propio Stalin, pese a lo anterior, «era un gran marxista». La resolución aprobada recogía los puntos fundamentales de la PRN

y aprovechaba para llamar a la unidad de acción al Partido Socialista[27].

El segundo punto se abrió con el informe de Carrillo[28], que empezaba por donde Dolores acabara: hablando del XX Congreso. Por fortuna –aseguraba–, gran parte de las cuestiones que ahora se sometían a debate «ya estaban en discusión entre nosotros precedentemente», aunque el cónclave soviético permitiera verlas con mayor claridad y profundidad». La recepción del XX Congreso se hacía dentro del marco de la «ortodoxia kruscheviana», sin preguntas incómodas. El informe y el debate posterior se centraron en los progresos del partido y la superación del culto o las deformaciones «antileninistas», que, al aplicarse a España, se cebaron hasta el ensañamiento en la figura de Vicente Uribe.

Más allá del juicio a Uribe, que reproducía viejos rituales de la tradición comunista, la resolución incluía otros aspectos relevantes[29]. Comenzaba criticando el culto a la personalidad en la URSS, producto de condiciones históricas concretas sumadas a «las características personales de Stalin», pero ajeno al sistema socialista. Se hablaba de estos fenómenos en España (idealización de figuras como José Díaz o Dolores; anormal funcionamiento de los órganos colectivos y política de «ordeno y mando») y los esfuerzos para su corrección.

El tercer y último punto culminaba los cambios en la dirección iniciados en el V Congreso, con la elección para el Buró de tres titulares (Santiago Álvarez, Simón Sánchez Montero y Jorge Semprún) y tres suplentes, todos ellos próximos a Carrillo. Completaban el órgano, de once miembros, además de los ya citados, Dolores Ibárruri, Carrillo, Claudín, Líster, Gallego, Delicado, Mije y Uribe.

Simultáneamente, los comunistas catalanes celebraban en París su I Congreso. El 54 por 100 de los asistentes procedían de Cataluña, aunque el Comité Central elegido se nutriera de las organizaciones del exterior. El PSUC asumía sin ambages la PRN y la idea de un amplio frente político que bautizaba como Solidaritat Catalana. Incorporaba también la crítica del culto a la personalidad y de las formas sectarias, abogando por la recuperación de los militantes expulsados injustamente en el pasado. Su programa incluía, además, el restablecimiento de las instituciones autonómicas. Se definía como partido de la clase obrera, pero también nacional (catalán), y dedicaba especial atención a subrayar su profunda compenetración con el PCE, que en los estatutos se definía sobre la base de la unidad inquebrantable «amb la clase obrera dels altres pobles

d’Espanya»[30].

LA CONFIRMACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA

La etapa que se extiende entre la formulación de la PRN y el VI Congreso ha sido caracterizada como la de triunfo del subjetivismo en la política del PCE, pero es también un periodo de avances, pese a que la evolución de los hechos no confirmara del todo las previsiones de los análisis. Cierto que la movilización social iba extendiéndose, pero en absoluto con las dimensiones previstas. Y, desde luego, estaba lejos de producirse la pregonada crisis del franquismo.

No obstante, la PRN superaba su «prueba de fuego». Según Dolores, se había convertido en «una ola de fondo» que venía a romper «el quietismo en que querían mantener la vida política y social no sólo los interesados en la continuación de la dictadura, sino ciertos dirigentes políticos de la oposición que desearían realizar algunos cambios sin la participación de las masas». Carrillo lo remachaba ante el VI Congreso: la PRN había modificado la atmósfera del país, con «el hallazgo de un lenguaje común sobre cuestiones inmediatas, urgentes, entre hombres y fuerzas que hace veinte años estuvieron en trincheras opuestas y con las nuevas generaciones que no han vivido la guerra»[31].

Catastrofismo en los análisis, flexibilidad práctica y búsqueda infructuosa de aliados potenciales marcaron el despliegue de la PRN. El primero de estos rasgos se acentuó especialmente en los errores de cálculo que condujeron a la convocatoria de las Jornadas de 1958 y 1959, pero se manifestaba de manera cotidiana. A modo de ejemplo, en 1957, el PCE aseguraba que una gran demostración nacional en ese momento podría tener «la significación que tuvieron las elecciones del 12 de abril de 1931»[32].

Por el contrario, la moderación de las propuestas unitarias reflejaba una comprensión más realista de la situación. En febrero de 1957, el PCE reiteraba su aceptación de un gobierno liberal sin su participación, dadas las dificultades de una transición «sin alguna o algunas fórmulas intermedias». A la vez, recordaba que la reconciliación «no es una coalición política ni una formación gubernamental», aunque «pudiera presentar tales formas»; bastaba, de momento, con el entendimiento sobre bases mínimas o una declaración de intenciones de

cada fuerza. Meses más tarde, el Comité Central admitía que, si se producía una conjunción de fuerzas sin el PCE, el partido lo denunciaría, pero intentando contrarrestarla con acuerdos desde abajo. En 1958, se sugerían una tregua política entre antifranquistas, un centro coordinador o una conferencia en forma de «mesa redonda». Y, en la senda de las concesiones, se aceptaba la posibilidad de apoyar un gobierno transicional encabezado por un «lugarteniente del reino»[33].

Sin embargo, por mucho que se moderaran las expectativas, las dificultades para cualquier avance unitario eran prácticamente insalvables. Los partidos republicanos no pasaban de ser grupúsculos aislados de la realidad española, y la dirección exterior del Partido Socialista mantenía un acendrado anticomunismo que hacía imposible todo acuerdo. Entre las organizaciones del interior, las de izquierdas destacaban por su debilidad, como la ASU o el Frente de Liberación Popular (FLP), que hasta 1960 no empezó realmente a estructurarse. Prácticamente irrelevantes eran los partidos democristianos o Acción Democrática de Dionisio Ridruejo, mientras que los monárquicos no pasaban de ser agrupaciones de notables cuyo anticomunismo se daba por descontado, igual que su ambigüedad con respecto a la dictadura. Sólo ocasionalmente, en la Huelga Nacional Pacífica de 1959, manifestaron su apoyo algunos grupos del interior, así como un Comité de Coordinación Universitario pluripartidista[34].

Por si fuera poco, casi todas estas fuerzas mostraron una inequívoca voluntad de marginar a los comunistas. Los seguidores de Don Juan preferían una monarquía heredera del 18 de julio, y de ahí la desconfianza del PCE ante el anuncio, tras un sonado banquete en el hotel Menfis de Madrid (29 de enero de 1959), de la denominada Unión Española. La idea de un acuerdo entre grupos opositores bajo el amparo de la monarquía era tipificada por Carrillo como una operación del capital monopolista, con la complicidad de parte de la socialdemocracia, para excluir a los comunistas. Porque, más allá de cualquier concesión, el PCE consideraba axiomático el papel hegemónico de la clase obrera en la lucha por la democracia: esta no podía entregar su destino al albur de los partidos burgueses, como había hecho la socialdemocracia en 1931[35].

Frustrada de momento la posibilidad de pactos cupulares, quedaba abierta la vía de la movilización social unitaria. Las expectativas, en ese terreno, se dispararon con el éxito del boicot del transporte público en Barcelona, en enero de 1957, al que el PSUC, como otras fuerzas, había llamado de manera reiterada. La organización comunista catalana lo presentó como un ejercicio de unidad

interclasista en línea con la propuesta de su primer congreso. El ejemplo de Barcelona alentó una convocatoria similar en Madrid, para los días 7 y 8 de febrero, también con buenos resultados. Entre las enseñanzas que el PCE extraía del boicot estaba que, para el futuro, había que tener en cuenta «la conciencia de las masas», evitando lanzar consignas mecánicamente. Oportuna observación que a la primera ocasión quedó en el olvido, intentándose en vano repetir el éxito con un llamamiento al boicot de la prensa y los espectáculos públicos[36].

Casi simultáneamente, los mineros asturianos se incorporaban al nuevo ciclo de protestas, con conflictos en la mina de La Camocha, próxima a Gijón, y en varias explotaciones de la cuenca del Nalón. Mundo Obrero se hacía eco de la primera, resaltando la participación de la comisión obrera elegida en las negociaciones, y de la segunda, subrayando su larga duración. El PCE dará mucha importancia, a lo largo del año, a la celebración de elecciones sindicales, convocando a cuadros obreros significados en París para recibir instrucciones al respecto. Los resultados arrojarán luego un sustancial avance con respecto a los de 1954[37].

La dirección del partido, espoleada por las movilizaciones y deseosa de no perder la iniciativa, lanzaba, en el verano de 1957, su primera gran convocatoria a fecha fija, la Jornada por la Reconciliación Nacional. La demostración, finalmente fijada para el 5 de mayo del año siguiente, se pretendía pacífica y unitaria, con un esquema mínimo de reivindicaciones: contra la carestía de la vida, por la amnistía y por las libertades. Las dudas sobre su oportunidad fueron disipándose con los resultados en las elecciones sindicales y el rebrote huelguístico de comienzos de 1958[38]. Fue entonces cuando las protestas laborales de Asturias se extendieron al País Vasco y a Barcelona, provocando una fuerte reacción gubernamental, incluida la declaración del estado de excepción. Esta conflictividad, en todo caso, no resultaba ajena a la promulgación en abril de la Ley de Convenios Colectivos. Finalmente, el PCE hubo de asumir en solitario la convocatoria. El resultado fue exiguo, pese a lo cual la dirección no sólo hizo una valoración triunfalista, sino que pasó a considerar la Jornada un primer ensayo, que se repetiría al año siguiente[39].

En los meses posteriores, la atención del PCE estuvo centrada en el lanzamiento de la denominada Oposición Sindical, cuyo portavoz, Lucha Obrera, salía a la luz en enero de 1959. Pero, para la convocatoria de una nueva Jornada, fue esencial la consideración de que se estaban produciendo nuevos intentos de aislar al partido. De hecho, la historia oficial del PCE establece una clara

conexión entre la aparición de Unión Española y el peligro de que se constituyera «un bloque para negociar con Franco una salida antipopular, antidemocrática, que diera paso a una dictadura monárquica de los banqueros y los latifundistas, del alto clero y de los generales»[40].

La nueva Jornada fue convocada a despecho de la actitud escéptica de Dolores. Se tensó al máximo la organización y se enviaron cuadros relevantes al interior para intensificar el trabajo. Claudín se desplazó a Madrid, reforzando el núcleo de dirección. Manolo López, recién llegado de París y encargado de impulsar una Coordinadora Universitaria, relata en sus memorias algunos episodios de esta preparación, tales como la distribución de tareas para conducir a las hipotéticas oleadas de obreros hacia la Puerta del Sol[41].

El 18 de junio, sin embargo, la decepción fue mayúscula. Además del elevado coste humano, con centenares de detenciones, hubo de reconocerse que el resultado guardaba escasa proporción con el esfuerzo desplegado. Los primeros balances traslucían decepción, aunque se valoraban el trabajo desarrollado o los avances unitarios. Un informe de Asturias ponía el dedo en la llaga de uno de los factores fundamentales: no se había calibrado la diferencia entre «producir una movilización por reivindicaciones económicas concretas y una huelga con objetivos eminentemente políticos»[42].

Vistas en perspectiva, las Jornadas hay que entenderlas en el contexto de la competencia del PCE con otras fuerzas opositoras. Dejando a un lado el fracaso de sus objetivos inmediatos y sus elevados costes, constituyeron un contraejemplo para el futuro, pero, lejos de desacreditar al PCE, contribuyeron tal vez a prestigiarlo entre sectores políticamente sensibilizados, por atreverse a un desafío de estas magnitudes. Al menos de momento, el crecimiento del partido continuó. Se ha especulado también con la influencia que el episodio pudo tener en la renuncia de Dolores a la secretaría del partido. Lo cierto es que, en julio, cuando una delegación del Buró la visitaba para hablarle de los resultados de la HNP, la veterana dirigente presentaba su dimisión, formalizada luego en el congreso celebrado meses más tarde[43].

Al final de esta etapa, el giro de 1954-1956 se había completado. Ya hemos visto qué elementos lo determinaron, pero no debe obviarse otro factor que definía su «marco de posibilidad»: la evolución del movimiento comunista internacional. Afortunadamente, los vientos del Este soplaban ahora a favor del «nuevo rumbo». El PCE se adaptaba a los virajes soviéticos, haciendo honor a los

sentimientos de una militancia forjada en una admiración sin reservas hacia la URSS. Salvo quizás algunos jóvenes, el resto de los militantes vibraba al unísono con los logros de la Unión Soviética, incluyendo, por estos años, sus avances en la carrera espacial[44].

La primera prueba de la desestalinización tuvo lugar en Polonia y Hungría, con desenlaces diferentes. En ambos casos, el PCE se alineó con las posiciones soviéticas, sin que ello supusiera quiebras significativas de la militancia. Respecto a Polonia, se consideró que los cambios venían a corregir errores previos. Por el contrario, Dolores relacionaba con una agresión imperialista «las horas sombrías de desenfreno de la contrarrevolución y del terror fascista» vividas en Hungría. Similar era el planteamiento del Buró. Al analizar los hechos húngaros, Carrillo extraía, además, algunas consecuencias que parecían contrastar con sus proclamas del verano anterior. Cada país debía seguir su propia vía al socialismo, pero todas poseían rasgos comunes: dirección de un partido marxista-leninista; conquista del poder mediante la lucha revolucionaria; dictadura del proletariado. Aunque cada organización fuera «nacional», la idea de un «comunismo nacional» era puro antisovietismo, pues el PCUS y los partidos de los países socialistas, por su experiencia, poseían un papel «orientador, dirigente»[45].

Las concesiones al predominio soviético convivían, sin aparente contradicción, con una lectura hecha por Carrillo del proceso chino, tras su visita al país en el otoño de 1956, donde percibía rasgos potencialmente aplicables al futuro de España, incluida la alianza con la burguesía nacional, el pluripartidismo bajo hegemonía comunista o la posibilidad de una transición pacífica al socialismo. En junio de 1957, la desarticulación en la URSS del grupo antipartido servía al PCE para manifestar una vez más su «entero acuerdo» con el PCUS y el XX Congreso, pero matizando que «la lucha contra el dogmatismo ha facilitado la manifestación de cierta erupción revisionista», que «so capa de novedad, trata de pasar de contrabando las viejas nociones burguesas y socialdemócratas». El cierre de filas con la URSS se reproducía en noviembre de 1957, cuando la Conferencia de partidos obreros y comunistas de Moscú volvía a enfatizar la condena del revisionismo[46].

Según Dolores, no se trataba de trasladar mecánicamente lo realizado en la URSS a países con condiciones distintas, pero «la Unión Soviética es y será la estrella que guía y alumbra los derroteros de los pueblos hacia el comunismo». Por eso, siguiendo a tal estrella-guía, en 1958 el PCE se alineaba de nuevo con el

PCUS a propósito de Yugoslavia. A los dirigentes del PCE, tal actitud no les parecía contradictoria con el carácter «nacional del partido. El 1 de abril de 1959, el Comité Central del PCE esbozaba un relato histórico en clave de memoria del partido que subrayaba precisamente su dimensión «nacional», negando recibir «órdenes de Moscú», porque Moscú –se añadía– no da órdenes como las dan los imperialistas de Nueva York o Londres a sus servidores[47].

AVANCES ORGANIZATIVOS Y FRENTES DE LUCHA

En 1959, según Carrillo, el partido estaba en condiciones de formar grupos en muchos lugares, pero también adolecía de ligerezas en el trabajo organizativo, con responsables que se limitaban a hacer «visitas de médico» o a enviar enlaces con instrucciones, cuando de lo que se trataba era de crear direcciones provinciales o comarcales eficaces. En el VI Congreso, un Semprún exultante afirmaba que, desde la Jornada del 18 de junio, se había producido un «crecimiento impetuoso» y el partido había multiplicado sus militantes «por cuatro y hasta por cinco»; pero esta observación obviaba evoluciones locales muy dispares. Por entonces, se cifraban entre 12.000 y 15.000 los militantes del interior y 10.000 los del exterior[48].

Lo que parece indudable es que el PCE reforzaba el funcionamiento regular de sus direcciones, incrementaba la difusión de su prensa y sobre todo la audiencia de su emisora de radio, o estrechaba las conexiones entre su dirección exterior y los núcleos estructurados en el país. Los progresos de la segunda mitad de los cincuenta permitían ya comenzar a visualizar la imagen de un partido consolidado, una «comunidad imaginada» que comparte una cierta concepción del mundo, una cultura política y un relato acerca del pasado. El «partido del antifranquismo» se gesta en estos años, con una propuesta organizativa mezcla de rigor y realismo; que aboga por superar los métodos «caciquiles» con la aplicación del centralismo democrático; o que da prioridad a la creación de núcleos de dirección frente a las estructuras de base, con la idea de que es sobre todo la existencia de las direcciones lo que garantiza la supervivencia partidaria. El V Congreso hablaba de constituir una red de comités, entendidos como «la espina dorsal del Partido». La estructura de base se articulaba en torno al sistema de células, pero se reconocía a la vez la existencia de grupos desconectados a los

que había que orientar políticamente, mediante los materiales del partido o incluso con las consignas de la Pirenaica. El trabajo en el Vertical, entre los intelectuales, los jóvenes, etc., mostraba, además, que «la vida nos enfrenta siempre con problemas nuevos a los que hay que dar soluciones flexibles»[49].

En vísperas del VI Congreso, cuando empieza a hablarse de un «viraje en la organización», los problemas en ese terreno seguían abordándose desde similares parámetros. Según le comentaba Carrillo a Dolores, se abría la posibilidad de atraer a viejos socialistas y cenetistas que se asustaban del rigor organizativo, por lo cual proponía admitirlos en el partido, «aunque prácticamente no militen en ninguna célula ni contraigan grandes compromisos de actividad». También se planteaba mejorar las relaciones entre dirección central y estructuras provinciales o locales, sustituyendo los contactos personales por un trabajo político sosegado. Había que lograr que «los comunistas estén presentes en la vida del pueblo», no sólo a través de octavillas, consiguiendo que «la policía no pueda encontrar los centros vitales del Partido», pero «a las masas, a los aliados, les sea fácil encontrar a los comunistas y conocer sus opiniones»[50].

Luego, más allá de las intenciones, los logros eran desiguales. Madrid y Cataluña representaban ejemplos de crecimiento importante y sectorialmente diversificado, pero con predominio excesivo de formas de organización laxas, como las que el mencionado «viraje» cuestionaba. En Asturias, el partido pivotaba en torno a las cuencas mineras y tendía a articularse en células o grupos en los pozos o algunas fábricas, con derivaciones en las principales ciudades, y en comités comarcales. Andalucía nos ofrece un ejemplo de tradición y descontento social que funcionan como base de reclutamiento; el esfuerzo organizativo de la segunda mitad de la década permitió constituir diversos comités provinciales, pero las caídas eran habituales y no se producía una conflictividad frecuente que alimentara la militancia. En Valencia, a un cierto auge le siguió un duro desmantelamiento en 1959, y algo parecido sucedió, por estos años, en el País Vasco, Zaragoza o Valladolid, donde las caídas de veteranos solían dejar la organización en manos de militantes bisoños[51].

La estructura del partido se prolongaba en las cárceles, especialmente en el penal de Burgos. Allí, centenares de presos comunistas se agrupaban en «brigadas», bajo la dirección de un Comité Central y un Secretariado propios; las labores de apoyo mutuo y socialización de la escasez se estructuraban por «comunas», cada una de los cuales tenía un responsable o «madre». La cárcel se concebía como

un nuevo frente, con tareas de cierta importancia: difundir la situación de los presos y recabar solidaridad; revisar expedientes de las caídas, para depurar responsabilidades y extraer enseñanzas; participar en los debates del partido y apoyar su política; o formar a los penados para que reanudaran su actividad militante al salir de la prisión[52].

Finalmente, una parte relevante de la afiliación nutría las organizaciones del exilio, que cumplían el papel de retaguardia para el mantenimiento económico del partido, las tareas de propaganda y solidaridad, o la protección de cuadros y dirigentes. Muchos de estos emigrados residían en América Latina, de cuyas agrupaciones el informe de Santiago Álvarez en octubre de 1960 no ofrecía precisamente una imagen halagüeña. En la Europa del Este, los grupos del partido, como señalamos, no sobrepasaban unos pocos centenares de individuos. A la URSS arribaron, durante la guerra y tras su conclusión, unos 4.300 españoles, de los que casi 3.000 eran niños evacuados. En la segunda mitad de los años cincuenta, muchos retornaron a España, entre ellos 340 comunistas (289 del PCE y 51 del PSUC). En 1965, según un informe interno, el número de comunistas españoles que quedaba en la URSS se elevaba a 868, sin contar los komsomoles. De los retornados, una parte significativa, tal vez no mayoritaria, se implicó en la lucha clandestina. En febrero de 1960, el número de repatriados detenidos por actividades comunistas alcanzaba la treintena[53]. En todo caso, lo más importante para el PCE de estos países no era el trabajo de sus militantes, sino el apoyo en recursos materiales e infraestructura de los gobiernos y «partidos hermanos».

En Europa occidental, el principal asiento del exilio comunista español y la verdadera retaguardia de la lucha en el interior era, obviamente, Francia, donde el PCE mantenía su dirección operativa y desarrollaba su actividad bajo el amparo del PCF. De allí llegaban a España la mayoría de los materiales, consignas, contactos e instructores[54].

En definitiva, con estos mimbres se iba configurando un entramado partidario capaz de incidir modestamente en la realidad del país. Su frente más relevante era el movimiento obrero, para el cual el partido fue esbozando su propuesta en torno a la infiltración en el Sindicato Vertical y el impulso de las comisiones. Sobre estos dos ejes se articulaba la Oposición Sindical Obrera, que acabó de perfilarse en una reunión de cuadros sindicales con la dirección celebrada en París en enero de 1959. La OSO no pretendía ser una nueva sigla clandestina, sino un movimiento plural «contra los sindicatos verticales y la dictadura».

Carrillo la definía como «una verdadera osamenta de comités unitarios sindicales capaces de dotar a los trabajadores de la dirección, coordinación y el mínimo necesario de organización para que su lucha sea más eficaz»[55].

En lo que se refiere al movimiento estudiantil, los años que siguen a 1956 no volvieron a registrar movilizaciones con el impacto político y psicológico que tuvieron los sucesos de febrero en Madrid. No obstante, en algunas universidades fueron consolidándose colectivos de estudiantes comunistas. En Barcelona, el primero data de 1956; en 1959, se creó el Comité universitario del PSUC, que dirigía distintas células, publicaba el órgano clandestino Universitat, y, junto con otros grupos, integró el Comité de Coordinación Universitaria, motor del movimiento en los primeros años sesenta. En Madrid, en diciembre de 1957 y enero de 1958, una amplia redada policial desmanteló la estructura militante comunista. Al iniciarse el curso 1958-1959, la presencia universitaria madrileña del PCE se encontraba bajo mínimos, y la organización tuvo que ser una vez más reconstruida. A comienzos de 1959, se constituía el Comité de Coordinación Universitario, en cuyo seno los comunistas convivían con la ASU, el FLP y otros. Los primeros frutos podían apreciarse en los meses siguientes, con actividades como la multitudinaria celebración de un homenaje a Antonio Machado[56].

Las dificultades no eran menores en el colectivo de los «intelectuales», término, por cierto, usado con notoria imprecisión, mezclando, por ejemplo, a creadores artísticos con profesionales liberales. Desde mediados de 1957, el partido publicaba la revista Nuestras Ideas, dedicada a este sector. Aunque militantes o simpatizantes de esa condición estaban presentes en otros lugares, fue también en Madrid y Barcelona donde funcionaron organizaciones específicas. En Madrid, desde finales de 1958, se revitalizó un Comité de intelectuales que adolecía, en todo caso, de falta de concreción en sus tareas. Múgica asegura que su trabajo estaba impregnado de «tanta ampulosidad verbal como inanidad práctica». Por su parte, el Comité de Intelectuales del PSUC se constituyó en octubre de 1956. Las detenciones de enero de 1957 llevaron al colectivo a replegarse y reducir los contactos, influyendo en su escasa actividad en 1957 y 1958. En 1959 publicaba los Quaderns de Cultura Catalana[57].

Precisamente la intervención de los intelectuales destacaba en uno de los frentes abiertos, la lucha antirrepresiva. Obviamente, la represión franquista fue cambiando de formas e intensidad para adaptarse al repunte de la movilización y a la voluntad opositora de ir ganando espacios de libertad. Como recuerda Víctor

Bayón, los comunistas, aunque actuaban en la clandestinidad, eran conocidos de sus compañeros de trabajo o vecindad, en una actividad «abierta» que, según las tesis del PCE, favorecía un cierto amparo social de los activistas, pero que generaba, al mismo tiempo, vulnerabilidad. El franquismo mantuvo gran parte de la legislación de postguerra y siguió tipificando como «rebelión militar» las actividades opositoras, aunque también actualizó otras normas. En enero de 1958, se creó el Juzgado Especial Militar, con amplias prerrogativas, bajo la dirección del coronel Enrique Eymar[58].

La violencia represiva era permanente, si bien se intensificaba con motivo de cualquier acción reivindicativa, que podía provocar caídas más o menos importantes. Pero las detenciones eran sólo un eslabón de la cadena coercitiva, el más leve, aunque casi siempre llevaba aparejados malos tratos y torturas, de los que muy pocos se libraban, especialmente si se trataba de comunistas. Los más comprometidos pasaban, después, a la fase del procesamiento, en forma de consejo de guerra, habitualmente por el procedimiento sumarísimo. En 1954 se condenó por ese método a 1.266 civiles, y en el cuatrienio 1956-1959, la cifra conjunta se elevó a 2.871. La mayoría estaban relacionados con el PCE, en un momento en que las organizaciones históricas del movimiento obrero habían sido dispersadas, y apenas habían comenzado a germinar los grupos de la «nueva izquierda» propios de los años sesenta. Esto se notaba también en los penados por razones políticas, que, según datos oficiales, se elevaban a 2.172 en 1955, 1.661 en 1956 o 1.308 en 1959. En este último año Carrillo, respondiendo a insidiosas acusaciones de trato de favor policial, aseguraba que el 90 por 100 de los presos políticos españoles eran comunistas, estimación confirmada por otras fuentes[59].

El peso de la represión convirtió a la lucha contra sus efectos en un frente cada vez más relevante, dado que permitía sumar a sectores ideológicamente plurales, e incorporar a colectivos (como los intelectuales o las mujeres) a los que cabía suponer mayor protección contra la violencia policial. Ya con motivo de los sucesos de 1956, el PCE alentó acciones solidarias diversas, y en noviembre un destacado grupo de intelectuales, encabezados por Ramón Menéndez Pidal, reclamaban la libertad de los universitarios detenidos en Madrid o Barcelona y la eliminación de las sanciones. El PCE calificó el documento de «verdadero plebiscito de los intelectuales contra el régimen»[60].

En 1957, las recogidas de firmas en favor de los presos en Asturias o las octavillas por la libertad de los detenidos en Cataluña mostraban las

posibilidades de este tipo de movilizaciones. Junto con el envío de cartas a distintos organismos o las gestiones de colegios de abogados, permitían la participación de «gentes de la más variada condición social, creencias religiosas y convicciones políticas». A lo largo de 1958, continuaron las acciones solidarias con los presos, arreciando en los meses finales del año y a comienzos de 1959. La correspondencia de Carrillo pone de relieve el complejo trabajo organizativo del partido que había detrás de estas actividades[61].

Más o menos coordinadas, las acciones por la amnistía se proyectaron, a lo largo de 1959, tanto en el interior de España como en el extranjero. En abril, coincidiendo con el vigésimo aniversario del final de la guerra, la nueva carta colectiva de más de un centenar de intelectuales abogaba por restañar las heridas del conflicto, a la par que un manifiesto de artistas plásticos planteaba la cuestión de las libertades en términos más explícitos[62]. Casi simultáneamente, entraba en escena otro colectivo, el de las mujeres, sobre todo madres o esposas de presos, que en número de más de un centenar entregaban, en el mes de marzo, un emotivo escrito al ministro de Justicia sobre la situación de los presos. Asimismo, grupos de mujeres catalanas se entrevistaron con el arzobispo y, ante la inacción de este, se encerraron en el templo de la Sagrada Familia. Toda esta actividad se combinaba con la reanimación del frente solidario exterior. Los comunistas españoles en Europa y América Latina se pusieron en marcha, con apoyo de sus correligionarios en cada país, para lograr adhesiones y resoluciones varias. El 22 de noviembre, en la parisiense Sala Pleyel, se cerraba la campaña en Francia con un acto al que, según Mundo Obrero, asistieron más de 3.000 personas[63].

EL VI CONGRESO Y LA CONFIRMACIÓN DE LA LÍNEA POLÍTICA

En las Navidades de 1959, se celebraba en Praga el VI Congreso. Como muestra de los cambios vividos desde 1954, había esta vez 60 delegados del interior y sólo 24 de la emigración, además de los miembros del Comité Central y los invitados, ascendiendo el número de asistentes a un total de 128. El congreso marcaba una trayectoria de continuidad, pero también aportaba cambios, empezando por la dirección. La Secretaría General se encomendaba a Carrillo, pasando Dolores a encarnar la nueva figura de presidenta. El Buró modernizaba

su denominación, convirtiéndose en Comité Ejecutivo, con trece miembros, revitalizándose el papel del Secretariado, compuesto por los integrantes del Ejecutivo Santiago Carrillo, Fernando Claudín, Ignacio Gallego y Antonio Mije, más Eduardo García. También se produjeron algunas incorporaciones y ceses en el Comité Central y se refrendaron los nombramientos realizados en 1956[64].

El balance de los cambios habidos desde el V Congreso lo presentaba Carrillo, fungiendo ya como secretario general[65]. El texto transmitía una imagen triunfalista de la evolución política y del partido. Este último –se decía– había restablecido la dirección colectiva y reforzado su democracia interna «hasta donde es compatible en las condiciones limitativas de la clandestinidad». Desde el V Congreso, la movilización social había aumentado extraordinariamente. Esta valoración positiva incluía la Jornada del 18 de junio de 1959: «Aun no habiendo adquirido la huelga el alcance que preveíamos, el Partido se ha fortalecido, su autoridad ante las masas es mayor, su organización se extiende con un ritmo más rápido».

En cuanto al programa, presentado por Claudín, retomaba la tesis de la revolución democrática pendiente, fracasada en 1931 por la conjunción de las fuerzas obstruccionistas, la debilidad de los gobiernos republicanos pequeñoburgueses y el oportunismo del PSOE, colocándose a remolque de la burguesía liberal. La futura revolución democrática pasaría por dos fases sucesivas: una antifeudal y antimonopolista, que implantaría la democracia, y una segunda etapa socialista. Sin renunciar formalmente al concepto de «dictadura del proletariado», se afirmaba que el futuro Estado socialista impondría una dictadura contra quienes conspiraran para restablecer el capitalismo, pero mantendría «democracia y libertad efectiva para todo el pueblo». Las circunstancias de otros países socialistas habían marcado sus procesos con rasgos que no tenían por qué repetirse en España, donde la democracia socialista podría asentarse «en un sistema parlamentario con pluralidad de partidos políticos, representantes de las diversas clases y capas interesadas en la realización del socialismo»[66].

Las cuestiones de organización eran abordadas dentro del espíritu del anunciado viraje. Con él, se esbozaba el horizonte próximo de un partido de decenas de miles de militantes, articulado sobre una red de comités y con un modelo de funcionamiento basado no en contactos esporádicos, sino en una organicidad que permitiera el debate y la elaboración política colectiva[67].

El último punto tratado era el informe de Dolores sobre el 40.o aniversario del partido, que repasaba la historia del comunismo español articulándola sobre unos ejes tópicos tendentes a perdurar: el surgimiento del PCE como una necesidad histórica, su sectarismo e inmadurez hasta ya entrada la República, sus esfuerzos posteriores para encauzar la revolución democrática bajo el Frente Popular y la guerra, y su tenaz resistencia a la dictadura. El congreso aprobaba el trabajo de la comisión, presidida por Dolores, para redactar una Historia del partido, recomendándole «terminarla en el plazo más breve a fin de que pueda ser publicada en la fecha más próxima al 40 aniversario». Finalmente, la Historia del PCE (versión abreviada) saldría a la luz con la requerida urgencia, culminando esbozos previos de una «memoria oficial» muy necesaria como elemento de cohesión en tiempos de mudanza. En ese sentido, la obra combinaba afán pedagógico y voluntad legitimadora, pero su contenido, apresurado, pobre y sectario, dejó mal sabor de boca a sus propios redactores[68].

Los dos años posteriores vinieron a poner a prueba el proverbial optimismo de las resoluciones adoptadas. La agudización momentánea de la Guerra Fría cuestionaba la convicción de que el clima internacional facilitaba transiciones pacíficas al socialismo. La represión problematizaba el objetivo de un partido de masas. No progresaban sustancialmente ni la movilización obrera ni el trabajo entre estudiantes e intelectuales. Todas estas dificultades llegaron a propiciar actitudes de cierto repliegue izquierdista, que sin embargo nunca llegaron a cuestionar la línea emprendida.

En el ámbito de las relaciones con la URSS, pocas veces se mostró el PCE más inequívocamente fiel a las orientaciones soviéticas, en un momento en el que afloraban fisuras en el movimiento comunista internacional. En agosto de 1960, visitaba el Kremlin una delegación del PCE encabezada por Carrillo y Dolores. Allí, según Semprún, el responsable de cuestiones ideológicas del PCUS «nos leyó la cartilla en un tono radical y perentorio», defendiendo que el PCE debía estar preparado para la vuelta eventual a la lucha armada. Mundo Obrero se hacía eco de esta entrevista, pero presentándola como un intercambio de opiniones «en un ambiente de amistad y camaradería», rechazando que las relaciones fraternales implicaran sumisión a Moscú[69].

El alineamiento con la URSS era paralelo al creciente recelo hacia las posiciones chinas. Reservadamente, los dirigentes españoles no se recataban en criticar a los chinos por su dogmatismo, su «engreimiento de gran potencia» o su «desviación izquierdista». Una carta del Comité Central español a su homólogo chino, en

septiembre de 1960, hacía explícita la discrepancia. Previamente, los siete españoles que trabajaban en las emisiones en castellano de Radio Pekín denunciaban presiones y amenazas de sus anfitriones. El PCE no desempeñó un papel importante en la conferencia de partidos comunistas celebrada en Moscú en noviembre de 1960, pero Dolores protagonizó la primera intervención hostil hacia los albaneses. Sin embargo, el balance que el PCE hizo público omitía cualquier alusión a estos conflictos. En relación con España, se aseguraba que los documentos aprobados «confirman claramente las posiciones ideológicas y políticas de nuestro Partido, las resoluciones de su VI Congreso»[70].

A lo largo de 1961, la identificación con la URSS se mantuvo inquebrantable, alcanzando el paroxismo con el XXII Congreso del PCUS (octubre de 1961). El nuevo programa del partido soviético provocaba en Carrillo una explosión de entusiasmo; Dolores lo calificaba como «el programa que estremece al mundo». El informe del secretario general criticaba las posiciones albanesas y aludía cautamente a las «reservas» de los chinos. Aunque el movimiento comunista ya no tenía un partido dirigente, al PCUS le correspondía cierto papel de vanguardia, por su experiencia y responsabilidades[71].

En todo caso, las fidelidades internacionales del partido no alteraban la continuidad de la línea política. Tampoco lo consiguió la represión que, desde el punto de vista del andamiaje legal, se endurecía con el decreto de 21 de septiembre de 1960, tipificando como «rebelión militar» la difusión de noticias «falsas o tendenciosas» que generaran problemas de orden público o desprestigiaran al Estado y sus instituciones, así como las reuniones y manifestaciones con los mismos fines. En cuanto a la acción judicial, el número de civiles condenados en consejos de guerra en 1960-1961, 660 en total, fue bastante inferior a los 1.246 del bienio anterior. Otros indicadores hacen pensar en una readaptación de los mecanismos represivos, combinándolos con otras medidas (acoso policial, sanciones económicas, represalias laborales, etc.). Las cifras de población reclusa por motivos políticos crecieron desde 1.308 en 1959 hasta 1.566 en 1960, reduciéndose de nuevo a 1.286 al año siguiente[72].

Dado que la conflictividad se mantuvo baja, la mayor parte de detenidos y procesados lo fueron por formar parte de grupos clandestinos, especialmente el PCE, que sufrió duros embates policiales. El primero fue, en los meses iniciales de 1960, la redada contra los asistentes al VI Congreso, que, con sus ramificaciones, afectó a centenares de militantes. Luego, 16 de ellos fueron juzgados y condenados a penas de entre 4 y 20 años. En ese mismo año, hubo

importantes caídas en Cataluña, Andalucía y Asturias. En Barcelona, la visita de Franco convirtió a la ciudad en un «verdadero cuartel», y entre los numerosos arrestos destacó el de Carlos Rebellón, máximo responsable del PSUC en el interior; un año largo después sería detenido su sustituto en Barcelona, Vicente Cazcarra. En Andalucía, se sucedieron las operaciones policiales, y en Asturias cayeron la dirección provincial y un centenar de militantes como consecuencia del congreso. En 1961, Andalucía registró nuevos golpes. En Asturias, en noviembre, tras la paciente reconstrucción de los meses anteriores, la dirección volvió a ser descabezada[73].

El VI Congreso reforzó la lucha antirrepresiva. Especialmente, grupos de mujeres participaban en las tareas solidarias; además de escribir a destacados dignatarios eclesiásticos y al propio papa Juan XXIII, llegaron a presentar a la secretaría del Caudillo una petición de amnistía con 20.000 firmas de apoyo. Desgraciadamente, la campaña concluyó, a comienzos de 1961, con numerosas detenciones en Andalucía. En el ámbito internacional, en febrero de 1960 tuvo lugar en Sao Paulo (Brasil) una Conferencia Suramericana en solidaridad con los presos de España y Portugal. En 1961, la campaña se avivó con la celebración de nada menos que tres conferencias: Montevideo en enero, París en marzo y Ginebra en octubre. La de Montevideo fue muy numerosa, pero tuvo mayor repercusión la de París, que contó con el aval de prestigiosos intelectuales y personalidades, y que estimuló adhesiones dentro de España. Pese a su pluralidad, el impulso organizativo correspondía a los comunistas; lo cual provocaba el repudio de los socialistas en el exilio, que llegaron a defender la curiosa propuesta de rechazar cualquier amnistía otorgada por «quien oprime al pueblo español»[74].

En cuanto a la línea política, se mantuvieron los principales ejes propositivos del VI Congreso. Sin embargo, en 1961 se incorporaban algunos matices aclaratorios. Carrillo defendía la vía «sin guerra civil ni insurrección armada», pero la hacía depender de la posibilidad de unir en torno a la clase obrera a la gran mayoría del pueblo. No cabía renunciar a la violencia «si la ceguera de las clases dominantes hace inevitable el recurso a ella». Igualmente, no debía entenderse la vía pacífica como un camino totalmente exento de violencia, pues una revolución social exige enormes energías y combatividad[75].

El trasfondo de estas matizaciones radicaba en algunos signos inquietantes, como la carta de representantes de grupos opositores al presidente Kennedy pidiendo apoyo a la democracia en España, con promesas de amistad que

alentaban ilusiones y ponían en riesgo la independencia nacional. Meses más tarde, el PCE alertaba de la actitud de los dirigentes socialistas en el exilio, proclives a aceptar el restablecimiento de la monarquía desde arriba, haciendo de su partido «una fuerza de colaboración con la oligarquía monopolista terrateniente». Poco después, se rechazaba un plan atribuido a Gil Robles para una transición con Don Juan como Jefe del Estado, previo consentimiento del Caudillo y compromisos de respeto a las bases americanas o la integración en Europa. En definitiva, «dos oposiciones» se estaban perfilando. La primera quería una salida pacífica, con transformaciones democráticas, reforma agraria, limitación del poder de los monopolios, etc. La segunda pretendía un franquismo sin Franco, convenciendo a este para que traspasara el poder y evitara así la intervención del pueblo[76].

Pero cuando las alarmas se disparaban era ante la Unión de Fuerzas Democráticas, creada en 1961 por socialistas, nacionalistas vascos, republicanos y democristianos de izquierdas. Una declaración del PCE lamentaba la exclusión de los comunistas, «la fuerza más activa e importante de la democracia española», pero se mostraba dispuesta a acuerdos parciales, «con vistas a hacer triunfar los puntos positivos de su programa, que constituyen también el nuestro en lo inmediato». La UFD venía a expresar las vacilaciones de la burguesía no monopolista y sus grupos políticos, que aspiraban a una democracia limitada con una clase obrera dócil; por ello, podía convertirse en el «ala izquierda» de la maniobra neofranquista[77].

Los recelos volvían a aflorar en el Pleno del Comité Central del verano de 1961, que, por cierto, abordó la creación de la Unión de Juventudes Comunistas. En él volvía a matizarse el sentido de la «vía pacífica», que «no excluye que en el curso de la Huelga nacional se produzcan choques entre las masas populares y los posibles defensores recalcitrantes del régimen y que nosotros preparemos al Partido para que sea capaz de encabezar en cada caso necesario la acción combativa de las masas». En definitiva, si la deseable salida pacífica resultara impracticable, se recordaba que nadie como el PCE poseía experiencia para adaptarse a otras formas de lucha. Que esto no significaba una apuesta real por el cambio de táctica viene a avalarlo el episodio que relata Claudín, sucedido a comienzo de 1962. Por entonces, Líster suscitó la discusión sobre la eventualidad de la lucha armada y habló de preparar el «levantamiento nacional»; Carrillo –añade– se dio cuenta del deslizamiento y tuvo que utilizar toda su habilidad para contrarrestarlo[78].

En la práctica, estas advertencias no modificaban las tácticas reales. En el movimiento obrero, el horizonte era el marcado en el VI Congreso: aprovechar la estructura del Vertical para, tras el fin de la dictadura, transformarlo en sindicato unitario, democrático, independiente, construido desde las empresas y capaz de luchar por las mejoras inmediatas de los trabajadores, la democracia y el socialismo. En el movimiento estudiantil, los años 1960-1961 son un preludio de la ofensiva contra el SEU y por el sindicalismo democrático. El PCE impulsó la constitución de una activa plataforma unitaria: la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), creada en Madrid a finales de 1961, en una reunión entre Jaime Ballesteros (PCE) y Luis Gómez Llorente (Juventudes Socialistas), integrándose luego el FLP y grupos católicos[79].

El PCE mantuvo también su anterior presencia en el sector intelectual. En Madrid, este grupo incluía a novelistas, poetas, pintores, gentes de cine, etc., muchos de los cuales se reunían en la tertulia del Café Pelayo, donde se fraguaron proyectos culturales diversos. El colectivo catalán se agrupaba en torno a Manuel Sacristán, con Francesc Vicens, Josep Fontana y otros, capaces de poner en pie proyectos como los Quaderns de Cultura Catalana (1959) y Horitzons (1960)[80].

«ASTURIAS SÍ, FRANCO NO»

A comienzos de 1962, las expectativas de un salto en la movilización social podían parecer mero reflejo del sempiterno subjetivismo del partido. En marzo, visitaba España Rossana Rossanda, enviada por el PCI para recabar apoyos a la Conferencia de solidaridad con España que tendría lugar en Roma en el mes de abril. Rossana presentó un informe describiendo a un PCE aún desorientado tras el fracaso de la huelga de 1959: «Lo que en 1962 vivía Madrid no era tanto la liquidación del sueño del movimiento obrero cuanto una brusca resituación del mismo sobre una realidad distinta […] como el Partido con mayúsculas la imaginaba». Por cierto, la conferencia de Roma contó con un amplio y diverso apoyo de sectores antifascistas, y también con la aquiescencia de fuerzas políticas españolas más allá del ámbito del PCE[81].

El estallido de las huelgas de Asturias pudo parecer a muchos, como a la propia

Rossana, una tempestad en un cielo sereno, aunque quien conociera la realidad obrera pudiera detectar signos de descontento previos. El largo conflicto, que en la minería asturiana se prolongó desde la primera semana de abril a finales de mayo, se extendió en la región a la totalidad del sector y a otras ramas industriales, hasta afectar a unos 60.000 trabajadores; se propagó luego al resto del país, quintuplicando la cifra asturiana de huelguistas y generando apoyos de intelectuales, sectores de la Iglesia o estudiantes entusiastas que popularizaron lemas como «Asturias sí, Franco no», o que entonaban a modo de homenaje el «Asturias, patria querida». Era una realidad sin precedentes desde la implantación de la dictadura. Para afrontarla, el gobierno declaró el estado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya, pero luego decidió negociar con la representación de los trabajadores y realizó múltiples concesiones. Durante el conflicto, se desbordaron los cauces del Vertical y proliferaron las comisiones. El rebrote de las huelgas mineras en agosto-septiembre tendría, en cambio, menos éxito, y encontraría al régimen en una actitud más dura, cuya máxima expresión fue la deportación fuera de Asturias de 126 trabajadores, casi todos mineros, considerados instigadores[82].

¿Qué papel cumplió el PCE en el desarrollo del conflicto? Parece evidente que fue el malestar social lo que determinó su desencadenamiento sin consignas previas, pero luego los activistas clandestinos tomaron la dirección y fue su propaganda la que alentó la difusión a otros lugares. En particular, se ha señalado la importancia que tuvo la información de la Pirenaica, gracias a sus «corresponsales» en la zona. En lo que atañe a los comunistas, la acción autónoma de los militantes asturianos predominó hasta finales de abril, en que la dirección del partido emitió un comunicado de apoyo y la Pirenaica intensificó su esfuerzo. También fueron comunistas los que soportaron el peso de la represión. Entre los varios centenares de arrestados, los identificados como pertenecientes al PCE o de «personalidad comunista» eran 96, frente a 5 socialistas y 6 del FLP. De los 126 deportados, casi todos mineros, 48 eran calificados de «muy peligrosos» (comunistas), 29 eran considerados «próximos a los comunistas» y 49 nombres integraban la categoría de «rebeldes laborales». No obstante, el PCE conservó gran parte de su estructura y además creció posteriormente con nuevas incorporaciones[83].

El PCE llamó a apoyar un movimiento que «no es exclusivamente comunista», sino «nacional, democrático». En favor de este argumento, invocaba la «resonante declaración» de un numeroso grupo de «intelectuales» de ideologías variadas. Los comunistas apelaban a la unión a los integrantes de la UFD,

reclamando su ampliación a otras fuerzas, «tales que los partidos catalanes, la Democracia Cristiana Social e, incluso, la Unión Española». También se hacía eco la prensa del PCE de comunicados de sectores católicos, del llamamiento unitario de organizaciones juveniles y del pronunciamiento común de diversas fuerzas políticas catalanas[84].

Es evidente que muchos de estos pronunciamientos unitarios no eran ajenos al trabajo organizativo de los comunistas. El escrito, una vez más encabezado por Menéndez Pidal, había sido preparado en reuniones de militantes comunistas. De mujeres del entorno del PCE partió también la idea de una manifestación silenciosa, que congregó a unas 400 personas, el día 15 de mayo, en la madrileña Puerta del Sol. Este conato, rápidamente controlado, provocó la detención y la sanción económica a casi un centenar de ellas, e incluso un breve paso por la cárcel de quienes se negaron a abonar la multa[85].

La resonancia de este último episodio estimuló el interés del PCE por constituir un grupo femenino específico. A ello contribuía, asimismo, la relevante función que las «mujeres de presos» y las esposas de los mineros estaban cumpliendo en tareas solidarias y de apoyo. La nueva organización debía contar con la labor de dos «mujeres de presos» (Carmen Rodríguez y Dulcinea Bellido, esposas respectivamente de Simón Sánchez Montero y Luis Lucio Lobato) y con otras de círculos intelectuales, como las que organizaron la manifestación del 15 de mayo (Gabriela Sánchez Ferlosio, Ana Guardione, Eva Forest). En el mismo mes de mayo, se convocó una primera reunión en casa de Ana Guardione (esposa de Chicho Sánchez Ferlosio), con asistencia, además, de los clandestinos Julián Grimau y Romero Marín. El intento no cuajó, manifestando, al parecer, alguna de las presentes su oposición al modelo que proponía el partido[86].

Un ámbito en el que los avances fueron especialmente limitados fue, desde luego, el de la conexión con otras fuerzas opositoras. El 30 de junio se creó en Barcelona un Comité de Coordinación entre el PSUC, el Movimiento Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana y otros. El PCE quiso repetir la experiencia en Madrid y envió desde Cataluña como negociador a Manuel Sacristán, que terminó chocando con un Tierno Galván que le ofrecía, en tono condescendiente, mediar para que los comunistas fueran admitidos como observadores, siempre que «ofrezcan garantías de respetar los principios democráticos». Ante semejantes actitudes, el fracaso estaba cantado[87].

La oposición no comunista tenía, ciertamente, sus propias vías de acuerdo,

evitando la incómoda presencia del PCE. Así se evidenció el 5 de junio, cuando 118 representantes de todo el espectro opositor del interior y el exilio, excluyendo a los comunistas, se reunían en Múnich bajo el amparo del Movimiento Europeo. Las conclusiones finales planteaban un programa de cinco puntos para la restauración de las libertades como base de la adhesión de España al Mercado Común. El encuentro fue saludado cordialmente por el PCE, pese a su exclusión del mismo. Una rápida declaración del Comité Ejecutivo, aun remachando «su oposición radical a la entrada de España en el Mercado Común europeo, que pondría a la economía española bajo la férula de los grandes monopolios extranjeros», admitía, con los reunidos, que el régimen de Franco carecía de legitimidad para dar semejante paso. Carrillo, recordando que la integración sólo podría decidirla democráticamente el pueblo español, aprobaba el contenido de los cinco puntos, a la vez que recalcaba nuevamente la urgencia de un frente nacional antifranquista[88].

Como si quisiera corroborar que algo se estaba moviendo, Franco decidía días después renovar su gabinete, con la entrada entre otros de Manuel Fraga, encargado de transmitir una apariencia de liberalización. Una vez más, la respuesta del PCE reproducía viejos clichés: la remodelación estrechaba la base del régimen, y el nuevo gobierno no era sino la dictadura de «una camarilla militar y de la voraz, anónima e irresponsable secta opusdeísta», un jalón más en la rápida descomposición del franquismo. Consecuentemente, se llamaba a rechazar cualquier ilusión liberalizadora y unir a todas las fuerzas antifranquistas «con la clase obrera a la cabeza»[89].

Para el PCE, las huelgas disipaban cualquier duda sobre el valor de la movilización social. Eran «la protesta de toda la nación, unida, reconciliada, contra el régimen que la arruina y hunde». La clase obrera constituía «la garantía más sólida de un desarrollo pacífico democrático de España». Pero había que poner la organización a la altura de los retos, desarrollando su estructura, desplegando la Unión de Juventudes Comunistas, consolidando la Oposición sindical y haciendo crecer el movimiento democrático de mujeres, «que con tanta iniciativa ha actuado en el curso de las huelgas de abril y mayo». En aras de este fortalecimiento partidario, se lanzaba, en octubre, la campaña de reclutamiento «Promoción Asturias»[90].

Entretanto, el PCE intentaba introducir un cierto orden en el galimatías de sus propuestas contra la dictadura: la Huelga General Pacífica se deslizaba, sin cambio de siglas, hacia la Huelga General Política, a la que sucedería la Huelga

Nacional. Huelga política era aquella en que los trabajadores se proponían objetivos políticos, fueran o no acompañados de los económicos. Los paros económicos preparaban la conciencia de los trabajadores para la HGP cuando hubiera una coyuntura propicia, que «no puede tardar en presentarse». Pero la HGP no era la huelga nacional, que precisaba de la participación de otras clases, si bien la primera podría transformarse en la segunda «en el curso mismo de su desarrollo». La preparación de la HGP implicaba crear comisiones de fábrica, empresa o taller por doquier, y la organización «por arriba» de una red de comités de huelga en toda España. Era necesario también convencer al Ejército, las fuerzas de seguridad y las capas burguesas de que la huelga sólo se dirigía contra la dictadura[91].

Junto con estos análisis, hay una lectura interna que ilustra el fortísimo componente subjetivista de la visión que el secretario general tenía de los acontecimientos. A finales de septiembre, en una reunión con representantes de diversos «partidos hermanos», Carrillo presentaba un informe sobre las huelgas en el que se afirmaba que en ellas «comenzó a tomar cuerpo y figura el frente nacional llamado a derribar a la dictadura». La causa de la unidad había dado en pocos meses «pasos de siete leguas», con avances particulares en Cataluña, el sector universitario, el terreno juvenil y con los «socialistas del interior». Pero lo más significativo era que en el país «está creándose una situación revolucionaria» y, en los próximos meses, podía producirse «un verdadero levantamiento nacional antifranquista». España era –y Carrillo lo subrayaba tipográficamente– «el eslabón más débil» de la política imperialista en Europa. Existían grandes posibilidades de que el derrocamiento de Franco condujera a una república democrática social y políticamente avanzada, sostenida por obreros, campesinos, intelectuales progresistas y juventud[92].

En todo caso, uno de los efectos de los acontecimientos asturianos fue reforzar la política sindical del partido. Para el PCE, Asturias se convirtió –como señala Treglia– en «un punto de referencia, símbolo de vanguardia obrera»; los nuevos conflictos de 1963 fortalecerían esa percepción. Las huelgas de 1962 dejaron incluso como legado algunas comisiones estables, destacando la Comisión provincial de Vizcaya. Lucha Obrera resaltaba el carácter plural y unitario de las luchas y la necesidad de «darle forma orgánica a ese inmenso movimiento de oposición sindical», a través de las comisiones, que debían mantenerse y reforzarse; los progresos en ese terreno habían sido «incontestables», y los golpes dados al Vertical «demoledores»[93].

Frente a los avances en el frente obrero, el trabajo entre los campesinos, más allá de invocaciones periódicas sobre su necesidad, apenas parecía progresar, dando incluso lugar a polémicas internas en la dirección sobre la consigna «la tierra para quien la trabaja», que significaba –a juicio de Claudín– introducir un elemento anticapitalista inconveniente para la propuesta de alianzas del PCE. En cambio, la maduración del movimiento estudiantil era más evidente. La FUDE iba extendiéndose por diferentes distritos, con fuerte influencia comunista. En el curso 1961-1962, hubo algunas movilizaciones específicas, pero destacaron especialmente las acciones de solidaridad con los obreros en huelga. En octubre, Semprún aseguraba que las organizaciones comunistas de estudiantes habían multiplicado sus efectivos por tres y hasta por cinco «en las últimas semanas del pasado curso». Se hacía necesario coordinar el frente obrero y el estudiantil para «golpear conjuntamente a la dictadura». Había que ligar reivindicaciones profesionales con objetivos políticos, pero no incurrir en errores de «politización en frío», que aislaban a la vanguardia, y apoyar a entidades unitarias como la FUDE[94].

EL AÑO EN QUE MATARON A JULIÁN GRIMAU

La persecución política se mantuvo relativamente activa a lo largo de 1962, si bien, con respecto al año anterior, se redujeron tanto el número de condenados civiles en consejos de guerra como el de presos políticos (1.236 frente a 1.286). Tampoco fueron, tras la conferencia de Roma, especialmente intensas las campañas en el exterior. Pero la percepción cambia en parte si se incluyen las medidas punitivas en relación con las huelgas. En todo caso, el año se cerraba prácticamente con dos noticias relacionadas con la represión. La primera era la detención de Julián Grimau, el 7 de noviembre. Grimau fue sometido a brutales torturas, incluyendo un oscuro episodio de defenestración en la Dirección General de Seguridad que le dejó graves secuelas físicas. El PCE comenzó a movilizar todos sus recursos para recabar la solidaridad dentro y fuera de España[95].

La segunda novedad era la presentación en Madrid, en el mes de diciembre, de un Informe de la Comisión Internacional de Juristas que censuraba el uso de tribunales militares para delitos civiles o las limitaciones de las libertades

políticas. La reacción de la dictadura, afectada en su imagen internacional, fue inmediata y furibunda, prohibiendo su difusión en el país y alentando a los diplomáticos españoles a acudir en defensa del régimen. Pasado más de un año, vendría la réplica «oficiosa», un contrainforme anónimo, elaborado por los servicios de propaganda del ministro Fraga[96].

Pese al revés de la caída de Grimau, el PCE volvía a iniciar con su proverbial triunfalismo un año que podría ser el de «la eliminación de Franco del poder». España, estaba llegando a «un verdadero atranco» y «un ambiente tenso, cargado de materia explosiva» se respiraba en el país. Afortunadamente, el partido empezaba a mostrarse a la altura: la Promoción Asturias atraía a miles de militantes jóvenes; y, donde no alcanzaba el brazo de la organización, llegaban los mensajes de la Pirenaica, cuyo papel Carrillo comparaba con Iskra, la mítica publicación del joven Lenin[97].

Sin embargo, la dura respuesta del régimen no daba mucho pábulo a la esperanza. Sólo entre el 20 de febrero y el 15 de abril fueron juzgados en consejos de guerra 115 civiles. A finales de marzo, el proceso contra dirigentes catalanes como Pere Ardiaca y Antoni Gutiérrez se saldaba con penas de hasta 25 años. Entretanto, se iba preparando el juicio contra Grimau y la campaña de intoxicación para demonizar su figura, aprovechando su condición de funcionario policial bajo la República. Finalmente, en un consejo de guerra sumarísimo plagado de irregularidades (incluyendo un ponente sin título y la falta de pruebas incriminatorias), Grimau era condenado a muerte por supuestos crímenes cometidos durante la guerra y, pese a peticiones de clemencia de personalidades españolas y extranjeras, ejecutado en la madrugada del 20 de abril[98].

La respuesta al crimen fue, en el interior del país, temerosa e impotente, pero fuera de nuestras fronteras desbordó lo previsible. Por una vez no parecía del todo exagerada la afirmación de Mundo Obrero de que «un inmenso clamor de consternación y de cólera se extendió por el mundo». Fraga recuerda que su despacho fue inundado de telegramas, y que la campaña internacional tuvo «una fuerza enorme» que «nos hizo perder bastante del terreno que habíamos ganado, en ciertos círculos, a partir de julio del 62». El 4 y 5 de mayo se reunía en París la Conferencia Extraordinaria de Europa Occidental para España, con asistencia de personalidades de la política y la cultura de quince países. La conferencia recordó los orígenes del régimen español, ligado a los de Hitler y Mussolini, y rechazó su intento de integrarse en las instituciones europeas[99].

Pese a la reacción de la dictadura cerrando filas y denunciando las «campañas antiespañolas», los hechos hicieron mella en el régimen. En el resto del año, y tras un segundo episodio punitivo con la ejecución de los anarquistas Granados y Delgado, los datos cuantitativos de la represión no alcanzaron los niveles de años anteriores: el indulto de junio por el ascenso al pontificado de Pablo VI, los 312 civiles condenados en consejos de guerra o los 757 presos políticos contabilizados reflejan una cierta contención que, entre otros factores, habría que atribuir a estas circunstancias. Pero el principal resultado fue, a partir de diciembre, la sustitución de los tribunales militares por el recién creado Tribunal de Orden público (TOP); las repercusiones del caso Grimau y las denuncias de la Comisión de Juristas fueron determinantes. Subsistió una jurisdicción especial, pero al menos civil, que reducía las penas y permitía mayor capacidad de defensa. No es extraño que el cambio fuera visto por el PCE como «el resultado de la lucha intensa sostenida en España y en el mundo contra la legislación fascista represiva de la dictadura»[100].

Pese a ello, sería erróneo pensar que el dispositivo policial se relajaba. La huelga minera del verano de 1963 fue respondida con una violencia inusitada, incluyendo malos tratos que generaron una sonada protesta de 102 intelectuales, replicada airadamente por parte de Fraga. El escrito había sido de nuevo preparado en la sombra por militantes comunistas. Pero un nuevo texto de contrarréplica al ministro de Información, esta vez con 188 firmas, tenía ya orígenes más espontáneos; según un informe interno del PCE, «por primera vez probablemente en estos veintitantos años un documento de este tipo no ha sido redactado por nosotros»[101].

La huelga de Asturias era el signo más esperanzador del año, aunque no alcanzó ni la trascendencia ni la proyección de la del año anterior. Pero lo importante era la continuidad del nuevo ciclo. La clase obrera asturiana, además, daba ejemplo de perseverancia consiguiendo, tras meses de tenaz resistencia, la vuelta de los deportados[102].

Si la política sindical empezaba a dar sus frutos, los principales problemas internos del PCE en 1963 afectaron a los intelectuales. En el caso del Comité de Madrid, sus integrantes demandaban mayor participación en el debate político y teórico. El colectivo carecía de homogeneidad ideológica, pues había miembros acordes con la línea del partido, otros «revisionistas» y un grupo crítico con la Reconciliación Nacional que empezaba a prestar oído a las tesis chinas. Poco después de la muerte de Grimau, algunos de ellos fueron citados a París, donde

se llegó al acuerdo de crear una comisión paritaria de representantes de la dirección del partido y del grupo madrileño. Entretanto, en Barcelona preocupaban los problemas teóricos de adaptación del marxismo-leninismo a los nuevos tiempos, pero también la sensación de estancamiento y la insatisfacción de los intelectuales con las tareas que se les atribuían. Como signo de su impaciencia, resultaba llamativa la manifestación de repulsa que convocaron por la ejecución de Grimau, saldada con una escasa respuesta y una veintena de detenciones[103].

Precisamente para encauzar esta inquietud, se convocó ese verano un seminario en la ciudad francesa de Arrás, al que fueron invitados un centenar de intelectuales, profesionales liberales y estudiantes del interior. Durante las sesiones, Carrillo arremetió contra las ponencias de Semprún (Filosofía) y Francesc Vicens (Estética), porque atacaban en exceso el dogmatismo, olvidando el «revisionismo». En un gesto sin precedentes, Claudín replicó públicamente al secretario general, escenificando diferencias que no tardarían en estallar. En el coloquio emergió, asimismo, la tendencia prochina, que censuraba la PRN y el tratamiento dado al tema de Stalin. Defendía estas tesis Lorenzo Peña, junto a un pequeño grupo de estudiantes, que se sumarían a otros colectivos de la emigración en Europa y a algún veterano, publicarían un Mundo Obrero Revolucionario y crearían (en 1964) el Partido Comunista de España (m-l). La escisión, finalmente, arrastró a un sector muy reducido de la militancia[104].

El conflicto con los intelectuales tuvo aún algunas derivaciones más en el otoño, volviendo a discutirse el tema en el Comité Ejecutivo. También se relacionó con la salida de la revista teórica Realidad, financiada por el PCI, en cuyo primer número Claudín abordaba en tono elogioso las nuevas corrientes pictóricas, mientras Semprún se aproximaba a las consecuencias de la desestalinización y los cambios tras el XX Congreso, con posiciones próximas a las de los italianos[105].

En la política general, la ejecución de Grimau no modificó las líneas previamente trazadas. El pleno del Comité Central celebrado en el otoño las reafirmaba y, aunque se ha dicho que en esta reunión Carrillo nadó entre dos aguas, lo cierto es que su informe, en algunos aspectos, cobraba acentos insólitos, sobre todo cuando, tras descalificar nuevamente las tesis chinas, se mostraba inusualmente crítico con el «socialismo real». La dictadura del proletariado con partido único –aseguraba– le había sido impuesta a Rusia, contra los deseos de Lenin de buscar apoyos más amplios. Por otra parte, las

contradicciones en la edificación del socialismo no debían silenciarse «como el pequeño burgués avergonzado oculta una enfermedad secreta». El movimiento comunista no podía volver atrás «en la condena de las arbitrariedades realizadas en el periodo de la dirección de Stalin», ni «en la eliminación de los métodos que las hicieron posibles», y más cuando en Europa occidental maduraban las condiciones para la renovación de la democracia, con amplias alianzas antimonopolistas[106].

EL GRAN DEBATE EN LA DIRECCIÓN

A comienzos de 1964 se desencadenó una crisis en la dirección que ha sido a menudo magnificada, pero que tuvo evidente importancia, dado que los temas planteados representaban un desafío a la línea política adoptada por el partido. La polémica enfrentó al grueso de la dirección con Jorge Semprún y Fernando Claudín. Aunque las discrepancias no carecían de precedentes, el conflicto estalló en París a finales de enero, dentro del Comité Ejecutivo. La discusión comenzó en tono constructivo e integrador, hasta que una intervención agresiva de Eduardo García cambió la situación. A partir de ese momento, se cruzaron reproches a propósito del coloquio de Arrás o de los artículos aparecidos en el número 1 de Realidad. Finalmente, se llegó al acuerdo de mantener una controversia más amplia, en la que también estuvieran presentes los miembros del órgano residentes en los países del Este, incluida Pasionaria[107].

El gran debate tendría lugar en Praga, entre el 27 de marzo y el 2 de abril. En él, Claudín, apoyado por Semprún, defendió la idea de que lo que iba a prevalecer en España tras la caída del franquismo no sería la «vía democrática», sino la «salida oligárquica», con cambios políticos, pero con el mantenimiento del poder económico de la oligarquía, y que el partido debía adaptarse a esa situación. También cuestionó el subjetivismo de los análisis. Las respuestas de los restantes miembros del Ejecutivo redundaron en defender las tesis ya aprobadas, criticaron que los disidentes sobrevaloraran la fuerza de la oligarquía y subestimaran al movimiento popular, expresaron las consecuencias desmoralizadoras de sus planteamientos o simplemente los descalificaron como revisionistas o socialdemócratas. Dolores acusó a Claudín de haber perdido la voluntad revolucionaria y Carrillo de defender una visión libresca, al margen de

la realidad, y de supeditar, con sus tesis, al partido al dominio de la oligarquía. Por último, se pidió a los discrepantes que rectificaran y, ante su negativa, se acordó suspenderlos provisionalmente del Comité Ejecutivo, hasta que el Comité Central tomara una decisión definitiva[108].

Se ha argumentado que las posturas de los dos bandos no eran irreconciliables, y que hubiera podido buscarse una clausura no violenta del debate. Es verdad que la tesis de Claudín y Semprún suponía, en principio, renunciar a toda la panoplia teórica y a las consignas en las que se envolvía la política del PCE: revolución democrática, huelga general, huelga nacional, etc. Pero también lo es que cada uno de estos conceptos permitía modulaciones. A modo de ejemplo, por entonces Carrillo, en su artículo «¿Liberalización o democracia?», admitía la existencia de cierto crecimiento económico, así como la posibilidad de llegar a acuerdos con grupos «ligados a la oligarquía», si estos contribuían a abrir caminos a la democracia; asimismo, recordaba que la victoria de la revolución democrática no estaba garantizada, o admitía que la huelga nacional no resultaba de fácil realización[109].

En todo caso, no parece que hubiera ni voluntad de aceptar una humillante «autocrítica» por parte de Claudín y Semprún, ni de su integración indolora por parte de la mayoría. Comenzó entonces una batalla desigual, en la que los disidentes intentaron hacerse oír por las bases y la dirección iba legitimando los diferentes pasos hacia su expulsión. El 19 de abril, Carrillo rompía el fuego en un discurso ante una asamblea de militantes en la periferia de París. Sin nombrar a los discrepantes, aun reconociendo que podía ser prematuro pronosticar en qué momentos y fases se produciría el paso a la democracia, el secretario general afirmaba que sería el resultado de las movilizaciones y luchas populares, y no una evolución gradual guiada por la oligarquía. Pero, sobre todo, alertaba frente a los que sobrevaloraban el neocapitalismo o pretendían arrastrar al partido hacia «la vía muerta de la liberalización», pretendiendo que «nuestro Partido se adapte a un desarrollo capitalista, revise su política revolucionaria de clase, abandone el objetivo de la revolución democrática y se ponga tranquilamente a esperar la hora, en un futuro lejano, en que en la sociedad española hayan madurado las condiciones óptimas para la eclosión del socialismo». En junio, una larga declaración del Comité Ejecutivo reiteraba las acusaciones de oportunismo. Pasionaria aprovechaba su discurso tras recibir el Premio Lenin de la Paz para rechazar tanto el izquierdismo, que aislaba al partido, como el «oportunismo vergonzante de quienes proponen engancharnos al furgón de cola de la oligarquía». En Realidad, Juan Gómez arremetía contra Juan Goytisolo por un

artículo en L’Express, el 2 de abril, en el que defendía posiciones parecidas a las de Claudín, reprochándole subirse a la ola de la liberalización, que –añadía– «no es nuestro tren»[110].

Los efectos de la liberalización eran, en todo caso, ambivalentes. Donde algunos veían desarrollo económico o integración de los sectores populares, otros percibían aumento de la contestación social. La dirección incidía en esta segunda dimensión para subrayar el punto débil de los «oportunistas». La llamada liberalización no era más que la descomposición del franquismo; ahora, con el movimiento obrero, el campesino, el de intelectuales y estudiantes, el de la pequeña y mediana burguesía contra los monopolios y «el movimiento nacional catalán, vasco y gallego», llegaba el momento de «fundir todas estas fuerzas en el curso de la acción en un torrente único irresistible»[111].

En términos prácticos, la dirección se planteó un control de daños allí donde Claudín o Semprún disfrutaban de apoyos: entre los intelectuales de Madrid o Barcelona, o en sus conexiones con Italia. En Madrid, fueron, en efecto, algunos intelectuales o dirigentes universitarios (Javier Pradera, Ignacio Romero de Solís…) los que prestaron audiencia a sus planteamientos. En Cataluña, hubo asimismo algunos intelectuales, como Jordi Solé Tura o Francesc Vicens, que apoyaron tanto las tesis de Claudín como su derecho a defenderlas. El PSUC, sin embargo, se encargó pronto de depurar a los disidentes. Vicens planteó ante el Ejecutivo catalán sus desacuerdos con el método seguido por la dirección y, al negarse a rectificar, fue expulsado por actividad fraccional. Solé Tura mantuvo contactos con Claudín en París. Luego protestó por lo que consideraba una caza de brujas y una traición a los principios del XX y el XXII congresos soviéticos, como si «la experiencia de lo pasado no sirviese de nada». Finalmente, su rechazo a retractarse y su decisión de regresar a España sin permiso de la dirección lo alejaron del partido[112].

La cirugía se aplicó también en Madrid, aunque alguno de los simpatizantes de Claudín y Semprún, como Javier Pradera, no les secundaran de momento en su enfrentamiento[113]. Quedaba por suturar la «conexión italiana». El tema había surgido ya en los debates de enero-febrero y volvió a suscitarse en la reunión de Praga, entre otros por Dolores, que recomendó a Federico no dejarse influenciar por las posiciones italianas. Luego, Semprún se entrevistó con dirigentes del PCI y en julio preparó un informe para Togliatti. No cabe duda de que algunas tesis de los disidentes mostraban cierta proximidad a las del PCI, pero desde este partido en modo alguno se alentó la escisión, dando a Carrillo plenas garantías

de no injerencia[114].

A partir de septiembre, la situación fue decantándose. La consulta a los miembros del Comité Central se saldó, como era previsible, con una práctica unanimidad de apoyos a la dirección. Claudín dio nueva forma a sus posiciones, que finalmente editaría, mientras el aparato ejercía diferentes formas de presión, concluyendo con la separación del Comité Central y, meses después, la expulsión del partido. Nuestra Bandera publicó un extracto de las tesis de los discrepantes, con selección y anotaciones críticas de la dirección en mayor tamaño tipográfico, a modo de concesión que cerraba el conflicto[115].

Finalmente, la divergencia apenas generó daños en la base, salvo entre los estudiantes de Madrid. Según Morán, la afectación no superó los dos centenares de militantes, de los que el 95 por 100 eran universitarios madrileños. El mayor temor estaba puesto en los intelectuales, y por eso Carrillo publicó un acerado artículo de advertencia contra los exponentes de este sector que no eran capaces de aceptar la disciplina partidaria, se dejaban intimidar por el poder de la oligarquía, y propugnaban una reforma del partido, convirtiéndose en campeones de la «desestalinización». Las preocupaciones de Carrillo no resultaban infundadas, pero sí excesivas. El sector intelectual no sufrió grandes defecciones. Incluso algunos que discrepaban de los métodos utilizados asumieron los argumentos de la dirección. No caló la disidencia, desde luego, salvo los casos señalados, entre los catalanes, que apoyaron a la mayoría, aunque admitieran que las tesis de Claudín contenían elementos aprovechables[116]. Mención aparte merece Manuel Sacristán, que, sin jalear los métodos inquisitoriales, consideró que verdaderamente las tesis de Claudín-Semprún representaban una desviación derechista, intolerable porque dividía al partido, como le hizo saber a Solé Tura[117].

En cuanto al fondo del debate, parece evidente que las posiciones de Claudín y Semprún se basaban en un análisis más realista que el del resto de la dirección; o al menos que la «vía oligárquica», tal como la definía entonces el PCE, fue la que triunfó en 1975-1977, y entonces la dirección del PCE la asumió sin reconocer la derrota de sus posiciones anteriores. Se ha dicho que del PCE fue incorporando las críticas de los discrepantes, pero no parece nada claro que eso haya sido así, al menos en la parte teórica, hasta el momento mismo de la Transición. Es indudable que los métodos poco democráticos de la dirección exacerbaron las discrepancias y probablemente fortalecieron la resolución de Claudín y Semprún de llegar hasta el final. El miedo de Carrillo a hacer peligrar

la unidad de la organización, o incluso el temor a dejar un flanco abierto a las críticas de los pro-chinos con la derechización del partido, habrían hecho el resto[118].

Vista desde el presente, la polémica podría presentarse como un debate entre unos intelectuales lúcidos y realistas y una dirección partidaria dogmática, incapaz de comprender los cambios de la sociedad española. Pero, seguramente, esta es solo una parte de la verdad. La alta probabilidad de la «salida oligárquica» era indudable, pero no tanto su inexorabilidad. Quizás el principal argumento contra las tesis de Claudín-Semprún era su efecto desmovilizador. En opinión de Sánchez Montero, se podía acertar en el diagnóstico, pero equivocarse en el tratamiento. Sandoval asegura que las denuncias del subjetivismo y los análisis de la situación española resultaban plausibles, pero no su idea del apoliticismo de las masas trabajadoras. Además de los desgarros internos que supondría adoptar como punto de partida la inviabilidad de la «salida democrática», desligando la lucha política de las perspectivas de avance social, renunciar, por ejemplo, a la consigna de la huelga general desactivaba la movilización, pues «incluso para desarrollar las luchas parciales, para elevar su nivel político, es necesaria esa perspectiva». Del mismo modo que, como decía Weber, la lucha por lo imposible ayudaba a alcanzar lo posible, la weberiana «ética de la responsabilidad» (¿y si la aplicación práctica de un análisis más riguroso destruyera la organización?) podría haber contribuido a la actitud drástica que prevaleció. Al menos Carrillo lo ha planteado así en sus Memorias: «La verdad era que en el año 63 y 64 estaba todavía muy lejos el fin del franquismo y renunciar al objetivo de lograr la hegemonía de las fuerzas democráticas en el cambio significaba prácticamente renunciar a la lucha, desarmar al partido»[119].

ESPAÑA EN MARCHA

La eliminación de la disidencia derechista permitió a la dirección legitimar sus críticas a las tesis izquierdistas de los prochinos. En enero de 1965, cuando Carrillo cumplía cincuenta años, Mundo Obrero le rendía homenaje, en ejemplo postrero de las viejas prácticas, situándolo en una posición equidistante entre las «estrecheces sectarias y dogmáticas» y «las tendencias reformistas,

oportunistas». Y si Claudín y Semprún venían a mellar el filo revolucionario del partido, los chinos defendían –según Azcárate– un izquierdismo verbal de «raíces derechistas, pequeñoburguesas». Por el contrario, se mantenía el claro alineamiento con las posiciones de la URSS, que sin embargo sufría una momentánea conmoción con la destitución de Kruschev, en noviembre de 1964. Por primera vez, el PCE solicitó públicamente explicaciones por una decisión soviética, con muchas cautelas, pero deshaciéndose en elogios al dirigente destituido. Es cierto que, poco después, el PCE se daba por satisfecho con las aclaraciones y que Carrillo censuraba privadamente las posiciones más extremadas en este mismo tema de dirigentes italianos e incluso franceses. No obstante, la dinámica de diferenciación, exigida por las propias necesidades políticas del PCE y facilitada por el cambio en la dirección en el PCUS, puede percibirse al menos en el afán del PCE por ir diversificando sus relaciones internacionales, sin que ello implicara posiciones de ruptura[120].

Frente a la sordidez de las batallas internas y los equilibrios de la política internacional, la otra cara de la moneda era el salto producido en la movilización social. Cuando, en marzo de 1965, con los ecos de la querella interna ya apagados, el PCE formulaba su enésima propuesta unitaria, podía afirmar, no sin razones, que «un movimiento de oposición de una amplitud desconocida, se desarrolla actualmente en nuestro país»; las huelgas y manifesaciones protagonizadas por las comisiones, las asambleas libres de estudiantes, los apoyos de la Iglesia y de una parte importante de la opinión pública nacional justificaban el nuevo llamamiento[121].

Otros grupos comenzaban a emerger junto a los comunistas, primero en la protesta universitaria y luego en el movimiento obrero. Es el caso del FOC (Front Obrer de Catalunya) o el ESBA (Euskadiko Sozialisten Batasuna, Unión de los Socialistas de Euskadi), secciones catalana y vasca del FLP. O de los movimientos católicos, empezando por los tradicionales (HOAC, JOC) y siguiendo por las Vanguardias Obreras o la clandestina AST (Acción Sindical de los Trabajadores). Sin olvidar a los prochinos o a grupos nacionalistas. Esta compañía no siempre resultaba cómoda. En un coloquio celebrado en 1964 en Francia con cuadros comunistas del movimiento obrero, marcando perfiles propios, Carrillo elogiaba «la capacidad creadora de nuestro Partido, que tiene una actitud no petrificada, no dogmática», capaz de desarmar las críticas «de los rrevolucionarios (sic) con muchas erres» que los acusaban de colaboración de clases[122].

Los que mayor interés despertaban en el PCE eran los cristianos, teniendo en cuenta, además, la prometedora evolución de la Iglesia católica con el Concilio Vaticano II y su «apertura al mundo moderno». En estos años, las reflexiones sobre la relación católicos-comunistas comenzaron a ser habituales. El PCE, además, establecía contactos con sectores de la jerarquía católica, no tanto en España como en Italia, aprovechando las campañas de solidaridad con el preso comunista Justo López. En marzo de 1965, Carrillo se entrevistaba en Roma con el abad de Monserrat, obligado a huir del país. Los comunistas veían posibilidades de acción conjunta o de intercambio de ideas en temas de justicia social. El compromiso antifranquista y social de muchos cristianos no podía ser ignorado; según Pasionaria, la lucha obrera en España estaba encabezada «no por socialistas y anarquistas, como en el pasado, sino por los comunistas y por organizaciones católicas obreras unidos». Carrillo lo remachaba ante la televisión cubana: marxistas y católicos son «las dos grandes tendencias del país» que pueden llegar a un acuerdo sobre la democracia y «marchar juntos, el día de mañana, hacia un sistema socialista»[123].

Nuevos frentes se abrían a la acción política, y el PCE mostraba un dinamismo creciente para explorarlos. Estaba, por ejemplo, el trabajo entre la emigración económica, que podía apoyarse en asociaciones culturales como el Club Federico García Lorca de Bruselas. Incluso antes del VII Congreso, esta aproximación parecía rendir interesantes frutos[124].

El partido también intensificaba el trabajo entre los jóvenes y las mujeres. La Unión de Juventudes Comunistas, que celebraba su segundo pleno a mediados de 1964, aseguraba multiplicar su militancia. La organización femenina lograba por entonces cristalizar en una plataforma amplia: el Movimiento Democrático de Mujeres. El PCE daba el visto bueno al MDM en diciembre de 1964, en reunión a la que asistió por el partido Romero Marín, y en la que estaban presentes, entre otras, Vicenta Camacho, Rosa Roca y Dulcinea Bellido. Ciertamente, se partía de iniciativas previas de grupos de mujeres vinculadas al PCE, sobre todo en Madrid y en Barcelona, y que en algunos casos combinaban antifranquismo con un creciente interés por los problemas específicos de las mujeres. Esta inquietud más propiamente feminista, no sin tensiones por las distintas culturas y procedencias sociales de sus integrantes, estaría presente en un movimiento que, para el PCE, pretendía sobre todo crear un amplio frente de mujeres antifascistas y extender la influencia social del partido, con proyección hacia tareas de solidaridad y a la lucha por los problemas de los barrios o contra la carestía de la vida[125].

Otro de los campos prometedores que los comunistas se esforzaron por incorporar era el de la reivindicación de las «nacionalidades históricas». En los años que nos ocupan, ni Galicia ni Euskadi parecen haber dado grandes pasos adelante en ese aspecto, pese al interés de los comunistas[126]. En Cataluña, en cambio, se producía la conjunción de un PSUC revitalizado y un sentimiento de catalanidad que comenzaba a resurgir. El partido comunista catalán, tras años de reiteradas caídas, empezaba a estabilizarse y a crecer. En 1962, contaba ya con cerca de 1.200 militantes, y los resultados de la Promoción Asturias fueron también alentadores, antes de que llegara la gran eclosión, desde 1964-1965, del movimiento obrero y estudiantil. El partido inició tempranamente una reflexión marxista sobre la «cuestión nacional catalana», primero en los Quaderns de Cultura Catalana y luego en la revista Horitzons, pronto rebautizada como Nous Horitzons. En 1961, publicaba el opúsculo El problema nacional català, y por entonces la Pirenaica inauguraba emisiones en lengua catalana[127].

A comienzos de 1964, según López Raimundo, se asistía a «un impetuoso desarrollo de la lucha del pueblo de Cataluña por sus derechos nacionales y por las libertades democráticas», manifestado en un renacimiento cultural de claro sesgo antifranquista. El Ejecutivo del PSUC se enorgullecía de ser pionero y copartícipe en esa lucha, recalcando, en todo caso, que su visión se encuadraba en las concepciones marxista-leninistas e internacionalistas, considerando que los trabajadores españoles y catalanes «formen una sola i única clase». Esta apertura permitía, además, sintonizar con la «burguesía nacional», dentro de la política de alianzas antimonopolista que el PSUC compartía con su partido hermano. En abril de 1965, su Comité Executiu formulaba una propuesta de programa común antifranquista, en la que desempeñaba un importante papel el «reconexement de la personalitat nacional de Catalunya» (con la reconstrucción provisional de la Generalitat y el Estatut de 1932), dentro de la «unitat de tots els pobles d’Espanya». En agosto, el II Congreso del PSUC reafirmaba estas propuestas[128].

Si todos estos frentes de lucha eran, de momento, prometedores pero modestos, en cambio el movimiento estudiantil conocería, en los cursos 1963-1964 y 1964-1965, una extraordinaria aceleración. En octubre de 1963, se creaba en Barcelona una plataforma estable, la Associació Democràtica d’Estudiants de Catalunya, y dos meses más tarde, también en la ciudad catalana, con representación de distintos distritos (Madrid, Sevilla, Salamanca, Oviedo, Bilbao, Galicia, etc.), se constituía la CUDE (Confederación Universitaria Democrática Española), que convocaba la I Semana de Renovación Universitaria

en varias universidades del país. La prohibición de la misma dio lugar en Madrid a grandes manifestaciones estudiantiles, reprimidas con dureza, mientras se constituían «asambleas libres» masivas y proliferaban las iniciativas para la desvinculación formal del SEU en diversas facultades[129].

La movilización estudiantil se generalizó en el curso 1964-1965, que comenzó en Barcelona con elecciones al margen del SEU. En febrero de 1965, la universidad madrileña iniciaba una auténtica revuelta, tras la prohibición de un ciclo de conferencias y la declaración estudiantil de «asamblea libre». Siguieron marchas masivas, apoyadas por algunos profesores, y huelgas indefinidas tras conocerse las sanciones. Los acontecimientos tuvieron amplio eco en otros distritos. Uno de sus principales efectos represivos fue la expulsión definitiva de los profesores José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo, así como la de Manuel Sacristán en Barcelona. Pero, en otro orden de cosas, el régimen tuvo que recular: un decreto de abril ponía fin al SEU, sustituido por unas inoperantes APEs (Asociaciones Profesionales de Estudiantes) que apenas sobrevivieron dos años[130].

La actitud del PCE ante las movilizaciones estudiantiles se caracterizó por un claro entusiasmo. Los comunistas constataban que se asistía a un amplio movimiento de masas, crecientemente politizado. En cuanto a la participación de los militantes del partido, se resintió algo más en Madrid que en otros lugares, pues la potente organización madrileña, que en 1964 contaba con 125 adherentes, quedo prácticamente reducida a nada como consecuencia de la crisis en la dirección; claudinistas, prochinos y felipes disputaron algún tiempo ventajosamente el terreno a la organización del PCE, que, en todo caso, en febrero de 1965 se encontraba en pleno proceso de recomposición[131].

Sin embargo, las mayores expectativas se cifraban en el ámbito obrero, con la difusión y estabilización de las comisiones más allá del marco de la empresa. Entre 1964 y 1966 se asistía, asimismo, al nacimiento de un auténtico movimiento obrero de masas. Su punta de lanza eran los metalúrgicos de Madrid, que en septiembre de 1964 constituían, en sede sindical, la Comisión de Enlaces y Jurados del Metal, que luego pasó a denominarse Comisión Obrera del Metal. Pluralismo, elección asamblearia y aprovechamiento de los cauces legales fueron algunos de los signos distintivos de un movimiento que encajaba como un guante en una clase obrera nueva en pujante crecimiento. El proceso fue acompañado de una fuerte movilización. Las jornadas del 16 de diciembre de 1964, o las del 26 de enero y el 7 de abril, con miles de obreros manifestándose

en las calles, constituían, sin duda, una realidad novedosa[132].

El proceso se extendió, de manera desigual, a otros lugares. La Comisión Obrera Central de Barcelona se constituyó el 20 de noviembre de 1964. En Vizcaya, siguió funcionando la Comisión Provincial. En Asturias, la Comisión Provincial de Mineros se demoraría hasta 1966, pero antes se formaron comisiones de pensionistas, silicóticos y parados, y la movilización mantuvo un perfil alto, como muestran la nueva huelga de 1964 o el episodio del «asalto» a la comisaría de Mieres en marzo de 1965[133]. En estas condiciones, las Comisiones empiezan a ser una marca reconocible y a contar con medios de expresión propios (generalmente suministrados por el PCE), planteando un serio desafío a un régimen incapaz, de momento, de integrarlas o neutralizarlas[134].

Aunque el movimiento era plural, la presencia comunista fue determinante. El PCE no sólo llevaba años teorizando sobre el papel de las Comisiones o el trabajo en el Vertical, sino que les proporcionó recursos, cobertura e incluso conexiones internacionales, poniendo en marcha para impulsarlas todo su potencial activista. En ellas, los militantes comunistas gozaban de una amplia autonomía funcional, aunque existieran conexiones con el Comité de Madrid (que durante cierto tiempo garantizó Víctor Díaz Cardiel) o llegaran a celebrarse reuniones clandestinas en Francia con cuadros obreros del partido para intercambiar experiencias. El movimiento, además, parecía avalar la tesis del PCE de la necesidad de operar de manera lo más abierta posible. Los activistas de Comisiones actuaban a la luz o dentro del Vertical, lo que, evidentemente, no los protegía del todo de la represión, pero sí obligaba al régimen a actuar de otras maneras. Mundo Obrero hacía notar, a comienzos de 1965, que algunos obreros procesados habían sido condenados a penas muy pequeñas y que ahora los activistas, «cuando son detenidos, encuentran una comprensión y una solidaridad muy amplias»[135].

Uno de los avances que las nuevas formas de protesta social habían ido consiguiendo era, pues, la apertura de espacios de acción semilegal. Pero no conviene exagerar en ese sentido, dado que la presión gubernamental y judicial se mantuvo firme, aunque comparativamente más atenuada. El TOP actuaba «sin interrupción», condenando a antifranquistas a «penas monstruosas», pero no podía negarse que se reducían las cifras de procesados y las cuantías de las condenas. La supresión del Tribunal Militar del «sanguinario Eymar» había sido «una gran victoria de la clase obrera y del pueblo, sostenida por la opinión internacional». Además, los jueces no eran impermeables a la presión

social[136].

Sin embargo, las detenciones seguían siendo frecuentes. En abril de 1964, eran arrestados José Sandoval, José Antonio Gil, Justo López, Daniel Lacalle y otros, juzgados en diciembre y condenados, en algún caso, a largas penas de cárcel[137]. En los meses siguientes, además de casos singulares, la acción policial afectó a grupos de estudiantes e intelectuales catalanes, o de obreros zaragozanos, asturianos o gallegos. En enero de 1965, se denunciaba la situación de centenares de detenidos el año anterior en Valencia, Alicante, Murcia y Albacete, objeto de torturas y malos tratos policiales. Entre ellos había trabajadores jóvenes y regresados de la emigración. Poco después, un amplio número de intelectuales y personalidades, junto con algunos obreros y estudiantes, hasta un total de 1.161, firmaban un manifiesto en defensa de las libertades de expresión, asociación y huelga, así como de la liberación de presos políticos, la readmisión de despedidos, la rehabilitación de estudiantes expedientados y «la cancelación de cualquier tipo de responsabilidad por hechos sucedidos durante nuestra guerra civil»[138].

La solidaridad internacional volvió a ponerse en marcha en 1965, de manera relativamente eficaz en el caso de Justo López de la Fuente, ya condenado en el juicio con Sandoval y sus compañeros y amenazado de consejo de guerra con petición de pena de muerte por acusaciones que recordaban al caso Grimau. Finalmente, esta peligrosa posibilidad fue conjurada. De manera más general y amplia, el 28 de marzo tenía lugar en Londres una Conferencia de Países de Europa Occidental contra la Represión en España, que hacía particular mención de las persecuciones contra obreros y estudiantes[139].

En el ámbito de la acción antirrepresiva en el interior, el PCE consiguió algunos avances significativos. Uno de ellos fue la consolidación del grupo de abogados que, desde finales de los años cincuenta, había ido articulándose y que ahora, con las nuevas condiciones del movimiento obrero y la creación del TOP, consiguieron espacios de intervención relevantes en la lucha antifranquista[140]. Pero la agitación general en este frente fue recayendo, en buena medida, en la propia acción de los penados. La lucha de estos por la libertad de conciencia (la negativa a participar en actos religiosos) y el reconocimiento de su condición de presos políticos ya se habían intensificado en 1963. El activismo de algunos grupos de nuevos presos o, en el caso de Burgos, de una personalidad tan peculiar como Ramón Ormazábal generó no pocas tensiones con los encarcelados más antiguos, reacios a exponer reducciones de condena o

decididos partidarios de mantener la actividad cultural y formativa que habían conseguido poner en marcha, en peligro por las sanciones de la dirección carcelaria. Ormazábal a la cabeza de la dirección del colectivo comunista de Burgos, aspiraba a convertir las cárceles en la punta de lanza de la lucha antifranquista. En estas protestas y reclamaciones, los penados contaban con la amplificación impagable de la Pirenaica que, de octubre de 1963 a julio de 1966, emitió el programa «Antena de Burgos». El momento culminante de esta ofensiva se corresponde con la segunda mitad de 1964 y comienzos de 1965. Tanto en Carabanchel, donde se alojaban los presos a la espera de juicio, como en Burgos, se desarrollaron acciones en defensa de la condición de preso político, la libertad de conciencia o la aplicación justa de la libertad condicional. Los plantes, gritos y otras acciones eran respondidos con sanciones y estancias en celdas de castigo[141].

Un problema político en cierto modo conectado con estos hechos surgió cuando Ormazábal, secundado por Pere Ardiaca y Miguel Núñez, en vísperas del VII Congreso, envió una larga carta a la dirección del partido defendiendo un cambio de política que combinaba la visión de un régimen al borde de la bancarrota con una insólita –por lo amplia– propuesta de alianza con la Iglesia católica. La respuesta de la dirección fue fulminante: tras el VII Congreso, los «tres de Burgos» eran severamente desautorizados, obligados a realizar su autocrítica y apartados del nuevo Comité Central[142].

EL CONGRESO CLANDESTINO

Entre los días 6 y 9 de agosto, cerca de París, se reunía el congreso más clandestino de la historia del PCE, hasta el punto de que, durante mucho tiempo, ni siquiera se admitió su existencia. Este secretismo pretendía evitar desastres policiales como los del anterior, pero no impidió una elevada asistencia: 125 delegados (invitados aparte), de los cuales 64 representaban a las organizaciones del interior (aunque no todos vivían permanente y legalmente en España), 32 a las del exterior, 20 eran miembros del Comité Central no incluidos en estas delegaciones y el resto figuraban como antiguos presos, representantes de la Juventud Comunista o instructores[143].

En el congreso participaron cuadros importantes del interior, y se habló del movimiento obrero, del catolicismo progresista y de otras muchas cuestiones. María Luisa Suárez Roldán, a quien pidieron que tratara del Colegio de Abogados y el TOP, recuerda, entre otros, a Manolo López, Dulcinea Bellido (del MDM) o Marcelino Camacho (que «tuvo un gran éxito y se hizo el dueño del congreso»). Manolo López evoca, a su vez, la solidez de Azcárate hablando de los intelectuales, la profundidad de Sacristán o la gracia de Anita Sirgo relatando las huelgas mineras y el papel en ellas de las mujeres[144].

En clave organizativa, Eduardo García realizó un chequeo al partido francamente optimista. Desde el VI Congreso -señalaba-, el PCE había progresado «en cantidad y en calidad», con 30 comités provinciales y otros muchos órganos de dirección en empresas, pueblos, barrios o localidades. A los «miles y miles» organizados en células y comités había que sumar varios millares más de militantes en grupos sin «relaciones articuladas» con la dirección, pero que aplicaban la orientación del partido, así como muchos no controlados directamente por la organización (en movimientos de masas o salidos de la cárcel). Con todo ello, con la parte más formal y la más «informal» -añadía-, «no estamos por el momento en condiciones de dar cifras exactas» de una militancia que agrupa ya muchas decenas de miles de comunistas en todo el país», y que configura un auténtico partido de masas[145]. García hablaba también del papel de la REI, el trabajo en las Comisiones o el activismo creciente de las mujeres.

En todo caso, la parte central del congreso la ocupó el informe de Carrillo, que, inaugurando una práctica que luego se generalizaría, se publicó luego con su nombre, sin especificar que se trataba de un documento congresual. Según Preston, Carrillo, «jactancioso y complaciente», arremetió contra «revisionistas» y «liquidacionistas», mientras el partido iba asumiendo, desde este mismo congreso, las tesis claudinistas. En opinión de Claudín, el secretario general mezclaba su tradicional voluntarismo con algunas observaciones realistas, reconociendo un cierto progreso económico y el conflicto entre liberalizadores y ultras dentro del régimen, y dando más entidad a la fase de transición entre el fin de la dictadura y la denominada democracia política y social[146].

Del tenor del informe, sin embargo, no parecen deducirse especiales novedades. Comenzaba reivindicando el subjetivismo («en cuanto al ritmo de los acontecimientos, no en cuanto a su fondo»), como propio de cualquier partido revolucionario. Más negativo -se aseguraba- era otro tipo de subjetivismo, el que disfrazado de «realismo» capitulaba ante la oligarquía y el esnobismo de la

«izquierda» burguesa y neocapitalista. Lo esencial era que la política del partido, aun con errores en los ritmos y plazos, se iba confirmando[147].

Luego, ubicándose en la confortable equidistancia retórica entre revisionistas e izquierdistas, volvía a las pinceladas de realismo. Así, admitía que, por la acción de las masas y por la presión de las necesidades económicas, frente a los inmovilistas o ultras, iban emergiendo grupos «liberalizadores» del régimen. Pero subrayaba el fracaso de la «liberalización» en general, porque, aun siendo una tentativa continuista, la apertura a la que obligaba podía dejar espacio al movimiento de masas. Consecuentemente, Franco y los ultras la bloqueaban. En todo caso, las últimas fases de una dictadura siempre eran imprevisibles, y «la cuestión no está en abrir una disputa sobre las formas que revestirá la liquidación del franquismo, ni mucho menos en supervalorar sus posibilidades y las de la oligarquía, sino en tener en cuenta lo que sucede en cada momento para impulsar, organizar y unir a las fuerzas y las masas democráticas, dándoles conciencia de su fuerza y de los objetivos democráticos correspondientes a esta etapa y elevándolas a la acción»[148].

Pero quizás lo más interesante era el apartado «Por una democracia política y social», en el que se retomaba y matizaba la idea de la «salida democrática». La crisis del régimen político supondría también «la bancarrota de la oligarquía dominante», pues «o la democracia política se asienta sobre un sistema de democracia económica, o la oligarquía financiera y terrateniente liquidará la democracia política una vez más». La española futura «será una democracia política y social o no será, no se mantendrá». Los que hablaban de una democracia «a la occidental», compatible con el poder monopolista, confundían España con otros países capitalistas; pero incluso en estos se produciría la contradicción entre democracia y poder de los monopolios. Carrillo no negaba la posibilidad de la vía monopolista, pero, si se imponía, resultaría más dolorosa para la mayoría, más lenta en eliminar el atraso y más proclive, tras un breve paréntesis, a una nueva dictadura reaccionaria. La democracia política y social tendría un parlamento multinacional y pluripartidista, y un basamento económico que «no puede ser más que un régimen de transición entre el capitalismo monopolista de Estado y el socialismo»[149].

Con respecto al papel del PCE, Carrillo piensa, de cara al futuro, en una posible Alianza o Frente Socialista con otras fuerzas, como garante de la transición al socialismo. En Occidente, había que tener en cuenta factores que no hubo en Rusia, China o Cuba, pero incluso aquí cada país debía transitar por su propia

vía. El secretario general evocaba finalmente el doble asalto, «izquierdista» y «liquidacionista», vivido por el partido. En su opinión, el más peligroso era el segundo, porque suponía su desaparición como vanguardia marxista-leninista, homogénea y disciplinada. Quienes defendían abandonar la consigna de la Huelga General «proponen a la vez, de hecho, el abandono de toda iniciativa para dar una salida popular, democrática, a la dictadura». El dilema era si debía impulsarse una política independiente del proletariado y las fuerzas democráticas, o si estas tenían que plegarse «a la política neocapitalista y liberalizante de la oligarquía». Afortunadamente, el triunfo sobre semejante desviación permitía trabajar sobre la primera perspectiva, que, por otra parte, bien podía concretarse en resultados en un plazo próximo. Como aseguraba Carrillo con su sempiterno optimismo, «¡Vamos hacia nuevas luchas y nuevos éxitos!»[150].

[1] «Un año de luchas y esperanzas», Mundo Obrero, 15 de enero de 1954. Gregorio Morán, Miseria, grandeza y agonía del PCE, 1939-1985, Madrid, Akal, 2017, reed., p. 395. Matilde Eiroa, Españoles tras el Telón de acero. El exilio republicano y comunista en la Europa socialista, Madrid, Marcial Pons, 2018, pp. 88 y otras. Fernando Hernández Sánchez, La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco (1945-1950), Barcelona, Pasado & Presente, 2018, pp. 445-446. Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdo y reflexiones del exilio, Barcelona, Gexel, 1997, pp. 158-159.

[2] Ricard Vinyes, «Sobre la destrucción y memoria de las presas en las afueras de la prisión», Historia del Presente 4 (2004), p. 20. F. Hernández, op. cit., pp. 399-424.

[3] «Primero de Mayo de 1954. Llamamiento del Partido Comunista de España a la clase obrera y a todas las fuerzas antifranquistas», Mundo Obrero, 30 de abril de 1954. Manifiesto a los intelectuales, en Documentos: carpeta 35, AHPCE. Felipe Nieto, La aventura comunista de Jorge Semprún. Exilio, clandestinidad y ruptura, Barcelona, Tusquets, 2014, pp. 200-201.

[4] Por razones de seguridad, las fechas que se hicieron públicas eran del 1 al 5 de noviembre. G. Morán, op. cit., pp. 405-435. F. Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 105-107. Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 2007, 2.a ed. revisada y

aumentada, pp. 473-474. Mariano Asenjo y Victoria Ramos, Malagón. Autobiografía de un falsificador, Barcelona, El Viejo Topo, 1999, pp. 201-209. F. Nieto, op. cit., pp. 215-224.

[5] Informe de Dolores (publicado luego como folleto con el título España y su destino), «Actas del V Congreso del PC de España», 1954, AHPCE, t. I, pp. 9-175; Estatutos en t. III, pp. 774-825. También «Problemas de organización y los Estatutos del Partido», Documentos: carp. 35, AHPCE.

[6] Documentos: cap. 35, AHPCE. También MO, n.o extraordinario de noviembre de 1954.

[7] «¡Viva el Primero de Mayo, jornada de unidad antifranquista!», y «En el aniversario del 18 de julio. Alocución de la camarada Dolores Ibárruri», Mundo Obrero, 1 de mayo y 31 de julio de 1955.

[8] «Informe sobre el desarrollo de la situación política de España después del V Congreso y del trabajo del partido», 1955, Dirigentes: cap. 3.1.3, AHPCE.

[9] Emanuele Treglia, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012, pp. 51-58. «Ante la perspectiva de un invierno de hambre y miseria, el Partido Comunista llama a los trabajadores a luchar por la elevación de los salarios», Documentos: carp. 36, AHPCE.

[10] G. Morán, op. cit., pp. 394-403. Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelona, Barral, 1976, p. 405. «Algunas cuestiones sobre la situación y el trabajo entre los estudiantes», Fuerzas de la Cultura: caja 123, carp. 1. AHPCE. F. Nieto, op. cit., pp. 237-246. «Con motivo de la muerte de Ortega y Gasset. Una gran manifestación estudiantil antifranquista en Madrid», Mundo Obrero, 15 de noviembre de 1955.

[11] Ramón Mendezona, La Pirenaica y otros episodios, Madrid, Libertarias / Prodhufi, 1995, p. 118. M. Asenjo y V. Ramos, op. cit., pp. 213-223. F. Erice, Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista (1956-1963), Gijón, Trea, 2017, p. 87. «Información sobre los viajes legales al país», julio de 1955, Activistas, caja 92, AHPCE.

[12] G. Morán, op. cit., pp. 428-433. Reunión del Buró Político del 29 de abril, continuada el 6 de mayo de 1955, Documentos: caja 36, AHPCE.

[13] Texto del Buró, «Declaración del Partido Comunista ante el ingreso de España en la ONU», Documentos: carp. 37, AHPCE. El de Carrillo, «Sobre la entrada de España en la ONU. La política de coexistencia es una ayuda a las fuerzas antifranquistas y de paz», Mundo Obrero, enero de 1956. Comparación de ambos, en Francisco Erice, «Los condicionamientos del giro táctico del PCE en 1956: el contexto de la Política de Reconciliación Nacional», Papeles de la FIM 24 (2006), 2.a época, pp. 137-139.

[14] «Editorial. Evolución de la situación política» y Santiago Carrillo, «La lucha del pueblo español contra el franquismo», Mundo Obrero, enero y febrero de 1956. «¡A los trabajadores! ¡A todos los españoles!», Documentos: carp. 37, AHPCE.

[15] F. Nieto, op. cit., pp. 259-287. José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Madrid, Siglo XXI de España, 2004, pp. 49-79. Elena Hernández Sandoica, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Marc Baldó Lacomba, Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007, pp. 99-136. Enrique Múgica, Itinerario hacia la libertad, Barcelona, Plaza & Janés, 1986, pp. 49-51. Texto del manifiesto, en semanario España, editado por el PCE en París, 16 de febrero de 1956.

[16] «Valientes manifestaciones estudiantiles en las calles de Madrid, a los gritos de ¡Abajo el SEU! ¡Abajo Falange! ¡Queremos sindicatos libres!», Mundo Obrero, febrero de 1956.

[17] G. Morán, op. cit., pp. 494-498. Francisco Bustelo, La izquierda imperfecta. Memorias de un político frustrado, Barcelona, Planeta, 1996, pp. 19-13, reproduce el texto y afirma que la redacción corrió a cargo de Semprún por el PCE y Javier Pradera por la ASU; pero Pradera era también militante del PCE.

[18] «Más de 100.000 obreros en huelga», o «La situación política a la luz de las huelgas de la primavera», Mundo Obrero, abril y mayo-junio de 1956. Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI de España, 1998, p. 40.

[19] Francisco Erice, «El Partido Comunista de España, el giro de 1956 y la lectura selectiva del XX Congreso», Nuestra Historia. Revista de Historia de la

FIM, 2 (2016), pp. 66-88. «Resolución del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de España sobre el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética», Mundo Obrero, mayo-junio de 1956.

[20] Sobre el sentido del prosovietismo en el comunismo español, pueden verse algunas reflexiones en Francisco Erice, «El "orgullo de ser comunista". Imagen, autopercepción, memoria e identidad colectiva de los comunistas españoles», en Manuel Bueno Lluch y Sergio Gálvez Biesca (eds.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009, pp. 146-151.

[21] F. Erice, «El Partido Comunista de España…», pp. 71-76. Manolo López, Mañana a las once en la Plaza de la Cebada, Albacete, Bomarzo, 2009, pp. 212-218. Carta de Santiago Carrillo a Dolores Ibárruri, 1 de julio de 1956, Dirigentes: caja 30, carp. 1, AHPCE. En abril de 1956, Mundo Obrero reproducía el artículo aparecido en Pravda «¿Por qué el culto a la personalidad es ajeno al espíritu del marxismo-leninismo?».

[22] G. Morán, op. cit., pp. 448-487. F. Claudín, op. cit., pp. 111-112.

[23] «Reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de España. I.- Sobre la situación política de España y la táctica del Partido», Documentos, AHPCE. Véanse pp. 1-30.

[24] «Editorial. Las fuerzas políticas del movimiento nacional de oposición tienen la palabra», Mundo Obrero, abril de 1956. Declaración, en Documentos: carp. 37, AHPCE.

[25] Carme Molinero, «La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en la Transición», Ayer 66 (2007), pp. 201-225.

[26] G. Morán, op. cit., pp. 502-530.

[27] «Actas del Pleno del Comité Central del PC de España celebrado del 25 de julio al 4 de agosto de 1956», Documentos: AHPCE, t. I, pp. 8-97. «Resolución del Pleno del Comité central sobre los cambios en la táctica…», Mundo Obrero, agosto-septiembre de 1956.

[28] Ocupa las pp. 387-461 del tomo II de las Actas, ya citadas.

[29] «Resolución del Pleno del Comité Central sobre la situación en la dirección del Partido y los problemas de reforzamiento del mismo», Mundo Obrero, agosto-septiembre de 1956.

[30] Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L’Avenç, 2010, pp. 15-24. Nacionalidades y Regiones – Cataluña: Caja 50, carp. 1/1, AHPCE. «Per la Reconciliació Nacional, per una Solidaritat Catalana», Documentos: carp. 37, AHPCE. José Moix, «El Primer Congreso del Partido Socialista Unificado de Cataluña», Mundo Obrero, noviembre-diciembre de 1956.

[31] Dolores Ibárruri, IV Sesión Plenaria del CC del Partido Comunista de España. 13, 14 y 15 de septiembre de 1958, s/l, s/ed., s/f (1958), pp. 1-5. Informe del CC presentado por Santiago Carrillo, 1959, en «VI Congreso del PC de España (Actas)», t. I, pp. 57-58, AHPCE.

[32] «Insistiendo», Mundo Obrero, 30 de abril de 1957.

[33] «Declaración del Partido Comunista de España», Buró Político del PC de España, 9 de febrero de 1957. Documentos: carp. 38, AHPCE. Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, III Pleno del CC del PC de España. Informe del Buró Político del Comité Central presentado por el Secretario General del Partido Comunista de España Dolores Ibárruri. Discurso de clausura pronunciado por Santiago Carrillo, S/l, Ediciones España Popular, s/f. (1957). «La conveniencia de una tregua política entre las fuerzas de oposición» y «El Comité Central del Partido Comunista de España ha celebrado su IV reunión plenaria», Mundo Obrero, 15 de febrero y 30 de septiembre de 1958. Santiago Carrillo, «Los comunistas y la monarquía», Mundo Obrero, 15 de noviembre de 1958.

[34] Véase Julio Antonio García Alcalá, Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria, Madrid, Centro de Estudios Políticos, 2001. El FLP, surgido en sectores cristianos y evolucionando hacia un marxismo revolucionario de derivaciones tercermundistas, nace «formalmente» en septiembre de 1958. «Grupos Demócratas Cristianos, Acción Democrática y el Frente de Liberación Popular han lanzado un manifiesto llamando a la Huelga Nacional», Mundo Obrero, 31 de mayo de 1959.

[35] Santiago Carrillo, «Algunas opiniones sobre la oposición liberal y nuestra actitud ante ella», Nuestra Bandera 17, septiembre de 1957, pp. 3-13. Santiago

Carrillo, «Ante el nuevo partido monárquico», Mundo Obrero, 15 de febrero de 1959. Santiago Carrillo, «El papel del proletariado y del Partido Comunista en la lucha por la democracia», Nuestra Bandera 24, agosto de 1959, pp. 11-20.

[36] Gregorio López Raimundo, «El boicot de Barcelona», y «El ejemplo de Barcelona», Mundo Obrero, febrero y enero de 1957. Luis Zaragoza, Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 165-167. «Algunas experiencias del boicot de Madrid», Mundo Obrero, marzo de 1957. Simón Sánchez Montero, Camino de libertad: memorias, Madrid, Temas de Hoy, 1997, pp. 232-233, que califica el resultado del boicot a los transportes de éxito rotundo, señala que el de la prensa y espectáculos pasó «sin pena ni gloria».

[37] Irene Díaz Martínez y Rubén Vega García, «El ciclo de las grandes huelgas mineras (1957-1964)», en R. Vega García (coord.), El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo, 1937-1977, Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico / KRK, 2013, pp. 263-270. E. Treglia, op. cit., pp. 73-75.

[38] «Resolución del Comité Central sobre la Jornada de Reconciliación Nacional», Mundo Obrero, n.o extra de septiembre de 1957. Declaración del Buró Político sobre los resultados de las elecciones sindicales, marzo de1958, Documentos: carp. 39, AHPCE. Los resultados fueron alentadores en Madrid o en la minería asturiana. Véase Marcelino Camacho, Confieso que he luchado. Memorias, Madrid, Temas de Hoy, 1990, p. 156. Víctor Manuel Bayón García, Crónica de una lucha. Mi actividad en el Partido Comunista de España, León, PCE de León, 2011, pp. 25-27.

[39] C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas, pp. 41 y 62-66. I. Díaz y R. Vega, art. cit., pp. 271-277. «Declaración del Partido Comunista de España sobre la Jornada de Reconciliación Nacional», Mundo Obrero, 15 al 31 de mayo de 1958.

[40] Dolores Ibárruri y otros, Historia del Partido Comunista de España (versión abreviada), La Habana, Editorial Política, 1964, reed., pp. 266-267.

[41] F. Nieto, op. cit., pp. 358-364. M. López, op. cit., pp. 390-403.

[42] «La Huelga Nacional Pacífica y el desarrollo del movimiento antifranquista de masas» y «Comunicado del Comité Central del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, 15 de julio y 31 de agosto de 1959. Lo de Asturias se

halla citado en E. Treglia, op. cit., p. 86.

[43] Francisco Erice, «Santiago Carrillo y el partido del antifranquismo (1955-1975)», Historia del Presente 24 (2014), pp. 45-46.

[44] Actitudes menos crédulas de jóvenes pueden verse en Jordi Solé Tura, Una historia optimista. Memorias, Madrid, Aguilar, 1999, p. 115. Entusiasmo de los presos de Burgos con los logros espaciales soviéticos, en Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol. Memorias de la prisión y la vida, Barcelona, Umbriel, 2007, p. 201.

[45] «Sobre los cambios en Polonia»; Dolores Ibárruri, «No podemos ser neutrales frente al fascismo»; «Declaración del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de España sobre la situación internacional». Todos ellos en Mundo Obrero, noviembre-diciembre de 1956. Santiago Carrillo, «Tras los últimos acontecimientos internacionales. Redoblar la lucha en el terreno ideológico», Mundo Obrero, enero de 1957.

[46] Santiago Carrillo, «Sobre una singularidad de la revolución china: la alianza de los capitalistas nacionales con el proletariado», Nuestra Bandera (mayo 1957), pp. 9-24. «Declaración del Buró Político del CC del Partido Comunista de España en relación con la resolución del CC del PCUS sobre la actividad antipartido del Grupo Malenkov, Kaganovicth y Molotov», Mundo Obrero, 15 de julio de 1957. «Sobre la Conferencia de los 65 partidos comunistas», Mundo Obrero, 15 de diciembre de 1957.

[47] Dolores Ibárruri, «Nuestro deber ante el aniversario de la Revolución Socialista», Mundo Obrero, 31 de octubre de 1957. Pleno del Comité Central del Partido Comunista de España celebrado del 1.o al 10 de agosto de 1958, Documentos, AHPCE; Informe de Dolores, pp. 59-61. «En el XX aniversario del fin de la Guerra Civil. El balance de veinte años de dictadura fascista, las tareas inmediatas de la oposición y el porvenir de la democracia española». CC del PC de España, 1 de abril de 1959, Documentos: carp. 40, AHPCE.

[48] Carta de Santiago Carrillo a Dolores Ibárruri, 4 de marzo de 1959, Dirigentes: caja 16, AHPCE. «Actas del VI Congreso», Documentos, AHPCE, intervención de Semprún, en pp. 58-69. F. Erice, Militancia clandestina y represión…, pp. 86-87.

[49] Sobre la memoria comunista, véase José Carlos Rueda Laffond, Memoria

roja. Una historia cultural de la memoria comunista en España, 1931-1977, Valencia, PUV, 2018. F. Erice, Militancia clandestina y represión…, pp. 88-92 y 106. «Flexibilidad en la organización», Mundo Obrero, 15 de octubre de 1958.

[50] Carta de S. Carrillo a D. Ibárruri, 4 de marzo de 1959, ya citada. Comité Central del PCE, En el XX Aniversario del fin de la Guerra Civil: el balance de veinte años de dictadura fascista. Las tareas inmediatas de la oposición y el porvenir de la democracia española, s/l, s/ed., 1959, p. 86.

[51] Balance general, en F. Erice, Militancia clandestina y represión…, pp. 82-110. El VI Congreso daba las cifras de 1.027 militantes en el PSUC y 1.102 en Madrid. En Asturias, la cifra era de unos 400, y las principales provincias andaluzas agrupaban unos 1.600 más.

[52] Ibid., pp. 206-215. José María Laso, De Bilbao a Oviedo pasando por el penal de Burgos, Oviedo, Pentalfa, 2002, pp. 213-263.

[53] Santiago Álvarez, «Información sobre mi viaje por América Latina», Emigración Política: caja 102/1.1, AHPCE. Datos sobre emigración a la URSS y regresos, en caja 99. Libro con datos de españoles en la URSS, en caja 103. Informe de Santiago Carrillo al C. C. del PCUS, febrero de 1965, Relaciones Internacionales: J. 189. Todo en AHPCE.

[54] Natacha Lillo, «El PCE en Francia. Relaciones con el PCF y evolución (1945-1975)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (eds.), Historia del PCE, t. I, pp. 83-99. Asenjo y V. Ramos, Malagón, alude a la importancia de la solidaridad del PCF, en pp. 213 ss. u otras. F. Erice, Militancia clandestina y represión…, pp. 92-99.

[55] «Nuestra misión», Lucha Obrera, n.o 1, enero de 1959. Francisco Erice, «La política sindical del PCE en los orígenes de las Comisiones Obreras: las confusiones en torno a la OSO», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE, t. II, pp. 107-119; cita de Carrillo en p. 113.

[56] Giaime Pala, Cultura clandestina, Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, Granada, Comares, 2016, pp. 23-24. J. Solé Tura, op. cit., pp. 84-86, 95-97, 101-110, 121-135, etc. F. Nieto, op. cit., pp. 328-330, 340-341 y 350-351. E. Hernández Sandoica y otros, op. cit., pp. 135-136 y 145. Federico Sánchez, «Ante el nuevo curso universitario», Mundo Obrero, 31 de octubre de 1955. M. López, op. cit., pp. 374 y 394-385.

[57] F. Nieto, op. cit., pp. 351-354. M. López, op. cit., pp. 374-375. E. Múgica, op. cit., p. 66. G. Pala, op. cit., pp. 21-41 y 44 y ss. J. Solé Tura, op. cit., p. 127.

[58] V. M. Bayón, op. cit., pp. 87-88. F. Erice, Militancia clandestina y represión…, pp. 60 y ss.

[59] Vicente Cazcarra, Era la hora tercia: testimonio de la resistencia antifranquista, Madrid, UnaLuna, 2000, pp. 52-53. F. Erice, Militancia clandestina y represión…, pp. 18, 67-76 y 191.

[60] Ibid., pp. 221-224. Texto del documento de noviembre en Santos Julià, Nosotros los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas (1896-2013), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014, pp. 381-383.

[61] «F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 224-226. Declaración del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, 31 de enero de 1958. M. López, op. cit., pp. 338-341. Carta de S. Carrillo a D. Ibárruri, 4 de marzo de 1959, ya citada.

[62] Manolo López (op. cit., pp. 386-389) relata cómo los comunistas redactaron el texto, al que Menéndez Pidal hizo ligeras enmiendas, y de qué modo se recogieron las firmas. Por el anecdotario que incluye, no parece que ofreciera dudas a nadie de que se trataba de una iniciativa comunista.

[63] F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 226-229. Irene Abad Buill, En las puertas de la prisión. De la solidaridad a la conciencia política de las mujeres de los presos del franquismo, Barcelona, Icaria, 2012, pp. 135-148. N. Lillo, art. cit., p. 90.

[64] Véase Mundo Obrero, n.o extraordinario, 15 de febrero de 1960.

[65] Informe en «Actas», t, I, pp. 6-102. Texto impreso, en Documentos, carp. 41, 1960, AHPCE.

[66] Programa impreso y presentación, en Documentos: carp. 41, 1960, AHPCE. Véase también Jesús Sánchez Rodríguez, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, FIM, 2004, pp. 65-71.

[67] Informe de Carrillo, pp. 90 ss. VI Congreso del Partido Comunista de España. Informes, Ediciones Boletín de Información, 1960, pp. 58-69.

[68] Actas del VI Congreso, t. II, pp. 472-521. «Resolución sobre el informe presentado por la camarada Dolores Ibárruri sobre el 40 aniversario de la fundación del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, número extraordinario, 15 de febrero de 1960. F. Erice, «El orgullo de ser comunista"…», pp. 163-170. J. C. Rueda, op. cit., pp. 415-427. Dolores Ibárruri, Memorias de Pasionaria (1939-1977). Me faltaba España, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 131-132. Irene Falcón, Asalto a los cielos. Mi vida junto a Pasionaria, Madrid, Temas de Hoy, 1996, pp. 345-346. José Sandoval, Una larga caminata. Memorias de un viejo comunista, Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños / FIM, 2006, pp. 118-119.

[69] Jorge Semprún, Federico Sánchez se despide de ustedes, Barcelona, Tusquets, ²2010, pp. 213-215. «El significado de una entrevista», Mundo Obrero, 1 de septiembre de 1960.

[70] Observaciones de S. (¿Santiago Carrillo?) y E. (¿Eduardo García?), 1960, en Relaciones Internacionales, J. 35-36, AHPCE; también J. 34. Sección Emigración Política: Caja 103/1.1. Sobre la intervención de Dolores, véase Enver Hoxha, Albania frente a los revisionistas jruschovistas (Escritos tomados del tomo XIX de las Obras), Tirana, Casa Editorial «8 Nëntori», 1977, en http://www.enverhoxha.ru, p. 413. Debo esta referencia e Eduardo Abad. También lo relata Ismail Kadaré, en su novela El gran invierno, Madrid, Vosa, 1991, pp. 212-213. «Una conferencia histórica», Mundo Obrero, 15 de diciembre de 1960. Santiago Carrillo, «La Conferencia de Moscú. Una gran contribución a la paz mundial», Mundo Obrero, 1 de enero de 1961. Santiago Carrillo, «Sobre la Conferencia de los partidos comunistas y obreros», Nuestra Bandera 29, enero de 1961, pp. 14-29.

[71] Santiago Carrillo, «¡Viva el comunismo!», Mundo Obrero, 15 de agosto de 1961. Dolores Ibárruri, «El programa que estremece al mundo», Mundo Obrero, 15 de octubre de 1961. Santiago Carrillo, «El Congreso de los constructores del comunismo», Mundo Obrero, 1 de diciembre de 1961. «Informe del camarada Santiago Carrillo sobre el XXII Congreso del PCUS», Mundo Obrero, 1 de enero de 1962.

[72] Juan José del Águila, El TOP: la represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001, pp. 388-393. «Declaración del Partido Comunista sobre el Decreto del 21 de septiembre», 24 de octubre de 1960, Documentos: carp. 41, AHPCE. F. Erice, Militancia clandestina y represión…, pp. 63, 67, 77-

79, 127, 173-174 y 191.

[73] Ibid., p. 176-178. Cristóbal Criado Moreno, El PCE que viví en Málaga (1920-1977): recuerdos de un veterano dirigente comunista, Málaga, s/ed., 2004, pp. 143-144. Teresa María Ortega López, Del silencio a la protesta: explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza. Granada (1936-1977), Granada, Universidad de Granada, 2003, p. 306. Ramón García Piñeiro, «El PCE en Asturias bajo el franquismo (1937-1977). Represión, clandestinidad y reconstrucción», en Francisco Erice (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, Trea, 1996, p. 162.

[74] F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 230-236.

[75] Pueden verse ejemplos en «El cuarenta aniversario de la fundación del Partido Comunista de España. Resolución del Comité Ejecutivo», Nuestra Bandera 21, abril de 1960. Santiago Carrillo, «Sobre la conferencia de los partidos comunistas y obreros», Nuestra Bandera 29, enero de 1961, pp. 27-28.

[76] «Triunfaremos con lucha, no con ilusiones», Mundo Obrero, 15 de febrero de 1961. Artículo de Carrillo en Nuestras Ideas, citado en F. Claudín, op. cit., pp. 147-148. «Los dirigentes socialistas emigrados, dispuestos a facilitar el restablecimiento de la monarquía», Mundo Obrero, 1 de mayo de 1961. «¿Franquismo sin Franco? ¡Tampoco!», Mundo Obrero, 15 de mayo de 1961. «El discurso de Franco y las dos oposiciones», Mundo Obrero, 1 de julio de 1961.

[77] «Declaración del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, 31 de julio de 1961. Santiago Carrillo, «Las fuerzas determinantes del desarrollo político español», Nuestra Bandera 31, julio de 1961.

[78] «La constitución de la Unión de Juventudes Comunistas», Mundo Obrero, 15 de octubre de 1961. G. Morán, op. cit., pp. 601-605. Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, Deberes del pueblo español en la presente situación internacional y nacional, Montevideo, España Democrática, 1961, pp. 65-69, 72-73 y 102-107. «Un toque de rebato», Mundo Obrero, 1 de noviembre de 1961. F. Claudín, op. cit., pp. 151-152.

[79] «Una necesidad imperiosa: organizar la oposición sindical», y «El futuro del movimiento sindical español», Mundo Obrero, 1 de junio y 15 de julio de 1961. E. Hernández Sandoica y otros, op. cit., pp. 197 ss. F. Nieto, op. cit., pp.

399-402. «La oposición universitaria: balance y perspectiva», Mundo Obrero, 1 de julio de 1861. Federico Sánchez, «La campaña democrática de los estudiantes», Mundo Obrero, 15 de abril de 1962.

[80] F. Nieto, op. cit., pp. pp. 385-391. G. Pala, Cultura clandestina, pp. 43-68.

[81] Rossana Rossanda, Un viaje inútil o de la política como educación sentimental, Barcelona, Laia, 1984, cita en p. 55. Marco del Búfalo, «Las relaciones entre el PCE y el PCI (1962-1981), en el contexto de la crisis del movimiento comunista internacional», tesis doctoral, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2017, pp. 16-24. F. Erice, Militancia clandestina y represión, p. 237. Crónica de la conferencia, Mundo Obrero, 1 de mayo de 1962.

[82] Las huelgas han sido estudiadas en detalle en los dos libros de Rubén Vega García (coord.), Hay una luz en Asturias. Las huelgas de 1962 en Asturias, Gijón, Trea / Fundación Muñiz Zapico, 2002, y El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 y su repercusión internacional, Gijón, Trea / Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002. Un resumen, referido sólo a Asturias, puede verse en I. Díaz y R. Vega, art. cit., pp. 281-290.

[83] R. Vega (coord.), op. cit., pp. 153-184 y 518-529. Francisco Erice, «Vigilar, prevenir y castigar: la represión contra el movimiento obrero, de los años cincuenta a la transición», en Rubén Vega García (coord.), El movimiento obrero en Asturias, pp. 199-202. Sobre el papel de Radio España Independiente, en José Gómez Alén, «La Pirenaica: la subversión de las ondas», véase Rubén Vega García (coord.), El camino que marcaba Asturias, pp. 93-139.

[84] «¡Viva la huelga de los mineros asturianos! Comunicado del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, 1 de mayo de 1962. «Es urgente que todas las fuerzas antifranquistas se pongan de acuerdo para presentar al país una alternativa democrática a la dictadura (Alocución de Santiago Carrillo por Radio España Independiente el 6 de mayo de 1962)», en Mundo Obrero, mayo de 1962. «Declaración del Comité Ejecutivo del PC de España», Mundo Obrero, mayo de 1962. Manifiesto de los intelectuales y otros posteriores, reproducidos en R. Vega (coord.), op. cit., pp. 520-523.

[85] F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 238-239.

[86] Claudia Cabrero Blanco, «Asturias, las mujeres y las huelgas», en José Babiano (ed.), Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo,

Madrid, Catarata, 2007, pp. 189-244. Ramón García Piñeiro, «Mujeres en huelga», en R. Vega García (coord.), op. cit., pp. 243-256. Irene Falcón, «Las huelgas y las mujeres», España Popular, 15 de julio de 1962. Dolores Ibárruri, «La participación de las mujeres españolas en las huelgas de Abril y Mayo», España Republicana, 15 de septiembre de 1962. Francisco Arriero Ranz, El Movimiento Democrático de Mujeres. De la lucha contra Franco al feminismo, Madrid, Catarata, 2016, pp. 28-29.

[87] G. Morán, op. cit., pp. 620-622. Giaime Pala, El PSUC, l'antifranquisme i la politica d'aliances a Catalunya (1956-1977), Barcelona, Base, 2011, pp. 27-28.

[88] F. Nieto, op. cit., pp. 407-411. «Declaración del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, junio de 1962. «La clase obrera ha abierto el camino hacia la solución del problema político español (Discurso pronunciado por el camarada Santiago Carrillo en una reunión de militantes del Partido)», Mundo Obrero, junio de 1962.

[89] «Declaración del Partido Comunista de España sobre el nuevo gobierno franquista», Mundo Obrero, 15 de julio de 1962.

[90] «Declaraciones del Comité Ejecutivo del PC de España», Mundo Obrero, mayo de 1962. «La clase obrera ha abierto el camino…», art. citado, Mundo Obrero, junio de 1962. «Llamamiento del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España ¡A los comunistas, a los trabajadores e intelectuales revolucionarios!», Mundo Obrero, 15 de octubre de 1962.

[91] «La Huelga Política» y «Más sobre la Huelga General Política», Mundo Obrero, 15 de septiembre y 15 de octubre de 1962.

[92] Puede verse el largo informe en Relaciones Internacionales: J. 88-92, AHPCE.

[93] E. Treglia, op. cit., pp. 124-126. Carme Molinero, «La referencia asturiana en la oposición al franquismo», en R. Vega (coord.), El camino que marcaba Asturias, pp. 61-80. Pedro Ibarra Güell y Chelo García Marroquín, «De la primavera de 1956 a Lejona 1978. Comisiones Obreras de Euskadi», en David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI de España, 1993, pp. 115-116. «Después de las grandes huelgas de abril y mayo. Una tarea urgente: organizar y fortalecer la oposición sindical», Lucha Obrera,

julio de 1962.

[94] E. Hernández Sandoica y otros, op. cit., pp. 198-199. F. Nieto, op. cit., pp. 400-401 y 421-422. Federico Sánchez, «Ante nuevas acciones universitarias», Mundo Obrero, 1 de octubre de 1962.

[95] F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 67, 129, 174-175, 191 y 236-241. «Llamamiento del Partido Comunista de España al pueblo español y la opinión pública internacional», o «¡La solidaridad nacional e internacional para conseguir la libertad de Julián Grimau!», Mundo Obrero, 1 y 15 de diciembre de 1962.

[96] F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 64-66. Comisión Internacional de Juristas, El Imperio de la Ley en España, Ginebra, 1962. La contrarréplica es España. Estado de Derecho. Réplica a un informe de la Comisión Internacional de Juristas, Madrid, s/ed., 1964. Fraga afirma que el Informe estaba «lleno de errores, de exageraciones y sobre todo de equívocos», lamentando que lo emitiera un organismo creado sobre todo para criticar a los países comunistas. Véase Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública. Barcelona, Planeta, 1980, pp. 56, 57 y 60.

[97] «1963, año crítico», Mundo Obrero, 2.a quincena de enero y 1.a de febrero de 1963. Santiago Carrillo, «Por un debate abierto y no excluyente», Mundo Obrero, 1.a quincena de enero de 1963. Eduardo García, «Algunas consideraciones sobre la promoción Asturias», Mundo Obrero, 2.a quincena de febrero de 1963. Carta de S. Carrillo a D. Ibárruri, 23 de marzo de 1963, ya citada.

[98] Entre las múltiples referencias sobre el tema, podemos citar el libro testimonial de Amandino Rodríguez Armada y José Antonio Novais, ¿Quién mató a Julián Grimau?, Madrid, Ediciones 99, 1976; o Pedro Carvajal, Julián Grimau: el último muerto de la guerra civil, Madrid, Aguilar, 2003.

[99] M. Fraga, op. cit., pp. 69 y 71. F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 241-246. Nuria Rodríguez Martínez, «La repercusión del caso Grimau en la prensa española e internacional», en Manuel Bueno lluch (coord..), II Congreso de Historia del PCE, Madrid, FIM, 2007. Sobre las reacciones, véase el folleto de denuncia Julián Grimau: el hombre, el crimen, la protesta, París, Éditions Sociales, 1963.

[100] F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 66, 67, 81-82, 186-188, 191 y 245-246. J. J. del Águila, op. cit., pp. 19-225.

[101] F. Erice, Militancia clandestina y represión, p. 246. «Información de Madrid», Represión, caja 39, carp. 8.6, AHPCE. Carta, con réplica y contrarréplica, y texto de los presos de Burgos, reproducidas en Realidad, 2, noviembre-diciembre de 1963, pp. 12-139.

[102] C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minoría subversivas, pp. 143-145. I. Díaz y R. Vega, «El ciclo de las grandes huelgas mineras», pp. 209-301. Irene Díaz Martínez, Vanguardia obrera e insurrección firmada. La huelga minera de 1963 y las contradicciones de la dictadura franquista, Gijón, Ateneo Obrero de Gijón, 2006.

[103] F. Nieto, op. cit., pp. 431-433. G. Pala, Cultura clandestina y represión, pp. 69-72. «Sobre los problemas de la organización de los intelectuales, especialmente los de Barcelona», julio de 1963, Fuerzas de la Cultura: carp. 19/2, AHPCE.

[104] Julio Pérez Serrano, «Orto y ocaso de la izquierda revolucionaria en España (1959-1994)», en R. Quirosa-Cheyrouze Muñoz (coord.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 255-256. F. Nieto, op. cit., pp. 434-437.

[105] Fernando Claudín, «La revolución pictórica de nuestro tiempo», y Federico Suárez, «Observaciones a una discusión», Realidad, 1, septiembre-octubre de 1963, pp. 21-49 y 5-20.

[106] Santiago Carrillo, «Ni guerra civil ni revancha: libertad», Nuestra Bandera 36 (enero 1963), pp. 13-22. «Pleno ampliado del Comité Central del Partido Comunista de España. La situación en el Movimiento Comunista. Informe presentado por el camarada Santiago Carrillo», noviembre de 1963, pp. 31-51, Documentos, AHPCE.

[107] F. Nieto, op. cit., pp.450-455. G. Morán, op. cit., pp. 665-670. Claudín, Santiago Carrillo, pp. 163-165, cree que Eduardo cometió una indiscreción revelando un plan urdido por el secretario general. Según Semprún (Autobiografía de Federico Sánchez, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 267-274), Eduardo carecía de peso para provocar por sí mismo el ataque. S. Carrillo,

Memorias, 2.a ed., pp. 520-521, lo niega y cree que Claudín y Semprún ya habían decidido irse, que Eduardo García lo sabía, pero «a diferencia de mí, deseaba que se marchasen» y realizó «una intervención provocativa que anuló las posibilidades de acercamiento».

[108] G. Morán, op. cit., pp. 671-683. F. Claudín, op. cit., pp. 165 y ss.

[109] Santiago Carrillo; «¿Liberalización o democracia?», Nuestra Bandera, 38, marzo de 1964, pp. 3-17.

[110] S. Carrillo (Memorias, p. 520) asegura que intentó la aproximación, lo cual no encaja con su dureza del momento, pero también Claudín (Santiago Carrillo, p. 175) reconoce que no estaban dispuestos a ceder. «El PC de España no se encerrará en la vía muerta de la "liberalización" (De un discurso de Santiago Carrillo)», España Popular, 15 de agosto de 1964. «El discurso de la camarada Dolores Ibárruri», Mundo Obrero, 1.a quincena de junio de 1964. Juan Gómez, «Editorial», Realidad, 3 de septiembre de 1964, pp. 4-32.

[111] «Un signo de la descomposición que corroe al régimen», Mundo Obrero, 1.a quincena de noviembre de 1964.

[112] G. Morán, pp. 683-684 y 691-692. G. Pala, Cultura clandestina y represión, pp. 73-87. J. Solé Tura, op. cit., pp. 203-209. Véanse cartas de Fabra (Solé Tura), 14 y 25 de septiembre de 1964, Divergencias, Cj. 111/3, AHPCE.

[113] Pradera consideraba que había algo de artificial en el mismo. Meses más tarde, cuando Carrillo lance su diatriba contra los intelectuales, fue abandonando discretamente la militancia. Santos Juliá, Camarada Javier Pradera, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012, pp. 135-146.

[114] M. del Búfalo, art. cit., pp. 63-70. Jorge Semprún, op. cit., pp. 274 y 288. S. Juliá, Camarada Javier Pradera, pp. 138-140.

[115] G. Morán, op. cit., pp. 699-701. Fernando Claudín, Documentos de una divergencia comunista, Barcelona, El Viejo Topo, 1978.

[116] Santiago Carrillo, «Respuesta a las preocupaciones de algunos intelectuales», Realidad (noviembre 1964), pp. 4-20. M. López, op. cit., pp. 563-575. G. Pala, Cultura clandestina y represión, pp. 82-83.

[117] S. Juliá, Camarada Javier Pradera, pp. 141-142. J. Solé Tura, Una historia optimista, p. 219. A Manolo López (op. cit., p. 575) le dijo algo parecido.

[118] J. Sánchez Rodríguez, Teoría y práctica democrática en el PCE, p. 88. Francisco Erice, «Política de alianzas y movilización de masas de los comunistas españoles (1954-1977)», en Josep Puigsech Farràs y Giaime Pala (eds.), Les mans del PSUC. Militància, Barcelona, Memorial Democràtic, 2017, pp. 127-128 y 134-142. Paul Preston, El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Madrid, Debate, 2013, p. 231. F. Claudín, op. cit., p. 175. Carme Molinero y Pere Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017, pp. 34-36.

[119] S. Sánchez Montero, op. cit., p. 267. J. Sandoval, op. cit., pp. 131-133. F. Claudín, Documentos de una divergencia comunista, pp. 308-310. S. Carrillo, Memorias, 2.a ed., p. 521. Francisco Erice, «Santiago Carrillo», pp. 49-50.

[120] «Al camarada Santiago Carrillo, secretario general del PC de España, en el 50 aniversario de su nacimiento», Mundo Obrero, 2.a quincena de enero de 1965. M. Azcárate, «Apuntes sobre la polémica con los comunistas chinos», Realidad 3 (septiembre 1964), pp. 44-69. «Sobre el reemplazamiento del camarada Jruschov» y «Algunas explicaciones necesarias», Mundo Obrero, 2.a quincena de octubre y 2.a quincena de noviembre de 1964. Carta de Santiago Carrillo a Dolores Ibárruri, octubre de 1964, Dirigentes: Caja 30, carp. 1, AHPCE.

[121] «Declaración del Partido Comunista de España sobre los acontecimientos de las últimas semanas», Mundo Obrero, 1.a quincena de marzo de 1965.

[122] J. A. García Alcalá, op. cit., pp. 147-229, passim. Javier Domínguez, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo, 1951-1975, Bilbao, Mensajero, 1985. «Coloquio. La clase obrera y la oposición sindical», 1964, Movimiento Obrero: cj. 91, carp. 1, AHPCE.

[123] M. del Búfalo, art. cit., pp. 84-86. «Diálogo y acción común», Mundo Obrero, 2.a quincena de noviembre de 1964. Dolores Ibárruri, «45 años del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, 2.a quincena de abril de 1965. «Interviú del camarada Santiago Carrillo en la T.V. cubana», Mundo Obrero, 2.a quincena de febrero de 1965.

[124] Puede verse una referencia al papel de estos clubes como modelo de

asociaciones culturales antifranquistas en Benigno Delmiro Coto, La rebelión de la cultura en Asturias. Las sociedades culturales frente al franquismo, Oviedo, KRK, 2019, pp. 78 ss. Un caso del trabajo del PCE con la emigración económica puede verse Carlos Sanz Díaz, «El PCE y la emigración. Organización y actividades entre los trabajadores españoles en Alemania en los años sesenta», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE, t. II, pp. 179-191. «Algunas reflexiones sobre el trabajo del partido con las masas de la emigración española» y «La Promoción Asturias en la emigración», Mundo Obrero, 1.a quincena de marzo y 2.a de abril de 1964.

[125] F. Arriero, op. cit., pp. 27-78, passim. Irene Abad Buill, «Reivindicaciones y movilizaciones femeninas desde el PCE durante el segundo franquismo», en Manuel Bueno Lluch y Sergio Gálvez Biesca (eds.), «Nosotros los comunistas», 2010, pp. 241-243.

[126] En el País Vasco, el PCE no consigue ser admitido por el PNV y ETA en la convocatoria del Aberri Eguna hasta 1966. Véase Diego Díaz Alonso, Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921-1982), Gijón, Trea, 2019, p. 228.

[127] Carme Cebrián, Estimat PSUC, Barcelona, Empúries, 1997, pp. 51- 54, 57 y 60-63. C. Molinero y P. Ysàs, Els anys, p. 32. D. Díaz, op. cit., pp. 204-206.

[128] Gregorio López Raimundo, «Al comenzar el año 1964. En Cataluña crece la lucha antifranquista», Mundo Obrero, 2.a quincena de febrero de 1964. «Declaración del Comité Executiu del PSUC», marzo de 1964, Nous Horitzons 4 (1964), pp. 47-48. «Declaració del Comité Executiu del Partit Socialista Unificat de Catalunya», abril de 1965, Nous Horitzons 5-6 (1965), pp. 61-64. D. Díaz, op. cit., pp. 210-211. C. Molinero y P. Ysàs, Les anys, pp. 43-47, Documentos del II Congreso, Nacionalidades: caja 50, carp. 1/2, AHPCE.

[129] Eduardo González Calleja, Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea 1865-2008, Madrid, Alianza, 2009, pp. 272-276.

[130] Ibid., pp. 276-285. E. Hernández Sandoica y otros, op. cit., pp. 213-216 y 230-240. Sobre la crisis final y disolución del SEU, véase Miguel A. Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI de

España, 1996, pp. 374-388.

[131] «El movimiento universitario», Mundo Obrero, 2.a quincena de febrero de 1964. C. Molinero y P. Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción, p. 51.

[132] José Babiano y J. Antonio de Mingo, «De la Comisión de Enlaces y Jurados del Metal a la Unión Sindical de Madrid: las Comisiones Obreras madrileñas durante el franquismo», en D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras, pp. 191-199. Juan Moreno, Comisiones Obreras en la Dictadura, Madrid, Fundación 1.o de Mayo, ^{2}2012, pp. 179-201. M. Camacho, Confieso…, cit., pp. 169-172. «La lucha de los metalúrgicos madrileños. Gran manifestación de masas en la Gran Vía»; «Las manifestaciones de obreros madrileños. Una jornada memorable»; y «La manifestación del día 7 en la capital», Mundo Obrero, 1.a quincena de enero, 1.a quincena de febrero y 1.a quincena de abril de 1965.

[133] Véase D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras, passim. Fernando Jáuregui y Pedro Vega, Crónica del antifranquismo, 1939-1985. Todos los que lucharon por devolver la democracia a España, Barcelona, Planeta, 2007, pp. 384-394. I. Díaz y R. Vega, «El ciclo de las grandes huelgas mineras», pp. pp. 301-307. J. Moreno, op. cit., pp. 162-178, 178-220. E. Treglia, op. cit., pp. 133-145.

[134] Rubén Vega García, «Las fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante el franquismo», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), «Nosotros los comunistas», pp. 345-346.

[135] F. Jáuregui y P. Vega, op. cit., pp. 384-385. J. Moreno, op. cit., pp. 251-260. E. Treglia, op. cit., pp. 145-146. M. Camacho, op. cit., pp. 181-183. Eduardo García, «Nuevos avances en la unidad, organización y combatividad del movimiento de masas contra la dictadura», Mundo Obrero, 1.a quincena de enero de 1965.

[136] «Veinticinco años de antijuridicidad de la represión política en España», Mundo Obrero, 2.a quincena de febrero de 1964. En 1964 el número de procesados por el TOP se elevó a 385, y en 1965 a 304. Véase J. J. del Águila, op. cit., pp. 248 y 269.

[137] «Las detenciones en Madrid», Mundo Obrero, 1.a quincena de mayo de 1964. N.o extraordinario dedicado al juicio, Mundo Obrero, diciembre de 1964.

J. Sandoval, op. cit., pp. 134-137 (sobre la caída) y 137-141 (sobre prisión provisional y condena). Sandoval fue condenado finalmente a 15 años y pasó 10 en prisión, hasta 1974.

[138] «Detenciones en Barcelona»; «Ante los juicios que prepara la dictadura, luchemos por la libertad de los presos políticos»; Marcos Ana, «La amenaza que pesa sobre Carlos Álvarez», Mundo Obrero, 2.a quincena de junio, 1.a de septiembre y 2.a de noviembre de 1964. «Solidaridad activa con los antifranquistas detenidos en Valencia, Alicante, Murcia y Albacete», Mundo Obrero, 2.a quincena de enero de 1965. «Importante documento de intelectuales», Mundo Obrero, 2.a quincena de marzo de 1965.

[139] «Una victoria de España. La vida de Justo López ha sido salvada», Mundo Obrero, 2.a quincena de febrero de 1965. M. del Búfalo, art. cit., pp. 83-84. R. Mendezona, op. cit., pp. 203-208. «Una gran manifestación de solidaridad», Mundo Obrero, 1.a quincena de abril de 1965.

[140] Claudia Cabrero, Irene Díaz, José G. Alen y Rubén Vega, Abogados contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 57-67, 187-201 y otras. María Luisa Suárez Roldán, Recuerdos, nostalgias y realidades. Sobre la defensa de las víctimas del franquismo, Albacete, Bomarzo, 2011, pp. 131-144.

[141] F. Erice, Militancia clandestina y represión, pp. 215-220. Norberto Ibáñez Ortega y José Antonio Pérez Pérez, Ramón Ormazábal. Biografía de un comunista vasco, Madrid, Latorre Literaria, 2005, pp. 264 y ss. L. Zaragoza, op. cit., pp. 199-214. R, Mendezona, op. cit., pp. 221-227. «Ante los juicios que prepara la dictadura, luchemos por la libertad de los presos políticos»; Marcos Ana, «Burgos en pie. La acción de los presos y sus familias»; «Llamamiento del Partido Comunista de España»; «Una victoria y nuevas represiones en la prisión de Burgos»; Gregorio López Raimundo, «Ayudemos a los secuestrados de Burgos», Mundo Obrero, 2.a quincena de septiembre, 2.a quincena de octubre, 2.a quincena de noviembre de 1964 y 1.a quincena de enero de 1965.

[142] N. Ibáñez y J. A. Pérez, op. cit., pp. 291-305. G. Morán, op. cit., pp. 716-731 y 742-743.

[143] Ibid., pp. 735-743 Relación de los asistentes, en el caso de los del interior con nombres no reales, en «Actas del VII Congreso», Documentos: AHPCE, pp.

III-VII.

[144] M. L. Suarez Roldán, op. cit., pp. 145-149. M. López, op. cit., p. 579

[145] Informe de Eduardo García en «Actas del VII Congreso», 1965, pp. 656-677, Documentos: AHPCE. En abril de 1964 Carrillo daba la cifra, a todas luces exagerada, de 35.000 a 40.000 miembros organizados, en sentido amplio. Citado en Guy Hermet, Los comunistas en España. Estudio de un movimiento político clandestino, París, Ruedo Ibérico, 1972, p. 101.

[146] Santiago Carrillo, Después de Franco, ¿qué? la democracia política y social que preconizamos los comunistas, París, Éditions Sociales, 1965. P. Preston, op. cit., pp. 246-248. F. Claudín, Santiago Carrillo, pp. 179-181.

[147] S. Carrillo, op. cit., pp. 15-27.

[148] Ibid., pp. 28-46.

[149] Ibid., pp. 89-122.

[150] Ibid., pp. 147-169.

IV

ANTIFRANQUISMO, DEMOCRACIA Y SOCIALISMO

(1965-1975)

– Carme Molinero y Pere Ysàs –

Han pasado casi quince años desde que en 2007 se publicaran las aportaciones realizadas en el I Congreso de Historia del PCE. Desde entonces, la historiografía sobre las organizaciones comunistas en España ha avanzado extraordinariamente, lo cual viene a superar la anomalía que representaba la escasez y límites de los estudios realizados sobre un movimiento central en la historia del siglo XX. La ponencia que presentamos en aquel I Congreso llevaba por título «El partido del antifranquismo»[1] y esa expresión se ha extendido en los últimos años porque sintetiza bien el logro más importante de los comunistas en la segunda mitad del siglo XX: convertirse en el referente de la oposición a la dictadura durante el ventennio que va de mitad de los cincuenta a mitad de los setenta.

Esas dos décadas forman una unidad. La aprobación de la Declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español», en 1956, había sustanciado una estrategia de oposición política de medio y largo plazo que se convirtió en la hoja de ruta de la política comunista para la desaparición de la dictadura[2]. Ahora bien, el tipo de actuación implícita en la formulación de la Declaración no pudo desplegarse inmediatamente pese a que la segunda mitad de los años cincuenta se caracterizó por un nuevo agravamiento de la situación económica y por tensiones políticas internas en el régimen que, sin embargo, la debilidad de las fuerzas opositoras no podía aprovechar. Fue a mediados de los sesenta cuando la suma de los cambios producidos en España y el desarrollo completo de la estrategia opositora del PCE permitieron a su militancia desempeñar un papel central en la dinámica sociopolítica de la época.

Efectivamente, para el régimen franquista, 1956 también había sido una fecha destacada. En ese año se produjo una gravísima crisis institucional en la que se combinaron tanto componentes económicos y sociales como políticos. El régimen encontró la salida en la apuesta decidida por la liberalización económica, que de ninguna manera, podría ir acompañada de una liberalización política. Ya en la década de los sesenta, la situación económica dejó de ser el problema permanente que había significado durante dos décadas, pues el intenso crecimiento caracterizó la nueva etapa. Sin embargo, entonces resurgieron los conflictos sociales y en el escenario aparecieron nuevos retos para la dictadura. Desde el inicio de la década de los sesenta, el personal político franquista era consciente de los problemas que estaban emergiendo como consecuencia de los propios cambios socioeconómicos y culturales, así como de los derivados de la insuficiente institucionalización del régimen, agravados por la avanzada edad de Franco; todo ello hacía perentorio tomar las medidas imprescindibles para asegurar la continuidad de la dictadura más allá de la vida del Caudillo. Dos grandes corrientes articulaban en aquel momento el personal político franquista. Las propuestas de los tecnócratas se centraban en la mejora de las condiciones de vida y en la extensión de la «sociedad de consumo» que, consideraban, aportarían paz, orden y estabilidad bajo la dirección de un gobierno fuerte. Para quienes se alineaban en torno de los falangistas en las filas del Movimiento, estos mismos objetivos debían ir de la mano del refuerzo de las instituciones por la vía de la ampliación de la participación política y el aumento de la representatividad, asegurando de esta manera la fortaleza del régimen, pero evitando, eso sí, su desnaturalización.

Pronto se hizo evidente el error de unos y otros. La mejora relativa de las condiciones de vida de una parte creciente de la población no comportó un aumento significativo del consentimiento político; al contrario, la conflictividad social, que durante su primer ventennio de vida el franquismo había erradicado de la sociedad española, aunque no plenamente, fue creciendo y diversificándose a resultas de un conjunto de factores diversos entre sí pero confluentes en sus consecuencias. Hay que destacar entre ellos el alejamiento de la Guerra Civil, el cambio generacional, el progresivo conocimiento de la Europa democrática próxima para sectores cada vez más amplios de la sociedad, la persistencia de viejos problemas sociales y la aparición de otros nuevos; unos y otros, a diferencia de las décadas anteriores, entonces empezaron a ser percibidos como inaceptables. Todo ello fue paralelo a la extensión de un activismo político antifranquista –en cuyo corazón estaban los comunistas– que consideró que la mejor forma de luchar contra la dictadura era la movilización social

reivindicativa.

Fue en este escenario abierto a mitad de la década cuando, tanto el PCE como el PSUC, celebraron sus congresos, VII y II respectivamente. En ambos congresos destaca la renovación generacional que se produjo en los respectivos comités centrales, en los que se integraron militantes del interior vinculados a los movimientos sociales. Y es que para captar el nuevo escenario que se abrió en España resultó de gran importancia la llegada a la edad adulta –y a la asunción de responsabilidades– de cohortes generacionales que no habían vivido la guerra o lo habían hecho siendo muy jóvenes; en cualquier caso, su vida no se había visto influida decisivamente por la Guerra Civil. Al Comité Central del PCE se incorporaron figuras de gran relevancia posterior, como Marcelino Camacho, Horacio Fernández Inguanzo o Cipriano García; también otros cuadros dedicados a la organización interna, como Jaime Ballesteros o Luis Lucio Lobato, además de Manuel Azcárate, que ya se había integrado en él en 1962; también se incorporaron intelectuales como Manuel Sacristán o Armando López Salinas. En 1964 Santiago Carrillo cifró el número de militantes del PCE entre los 35.000 y los 40.000, teniendo en cuenta tanto los organizados en el exilio como en el interior; la cifra es poco verosímil y posiblemente el objetivo del secretario general era acompasar la vitalidad de la organización con la magnitud de su militancia[3].

El informe que Santiago Carrillo presentó en el VII Congreso, en agosto de 1965, llevaba por título «¿Qué queremos los comunistas para España?» y se publicó bajo el título «Después de Franco, ¿qué?», la pregunta que condensaba el horizonte que el partido consideraba inmediato y ante el que, por tanto, deberían situarse sus políticas. En su informe, Santiago Carrillo, más allá del lenguaje catastrofista utilizado cuando se refería a la situación de la dictadura, distinguía dos planos en la hoja de ruta de la actuación de los comunistas: los objetivos a corto plazo, sintetizados en la expresión «la lucha por las libertades, por una democracia política y social», por un lado, y lo que aparecía como la meta final socialista: «la conquista del poder por las masas laboriosas a fin de realizar el socialismo»[4]. Con escasa distancia temporal, se celebró el II Congreso del PSUC; el informe presentado por Gregorio López Raimundo tenía como título «Catalunya i la futura democràcia política i social dels pobles d’Espanya». Tanto en uno como en el otro, se dedicó una atención preferente al activismo social, de manera que en aquel momento ya estaba claramente asentada la estrategia de lucha contra la dictadura franquista centrada en la movilización social, una movilización que, para conseguir sus objetivos, debía

ser lo más amplia posible. Por otro lado, la capacidad de movilización social sería la base sobre la que los comunistas deberían lograr la fuerza suficiente para impulsar la unidad antifranquista, tan difícil de alcanzar, dada la poca relevancia de otras fuerzas políticas que, además, estaban marcadas por un notable anticomunismo en un escenario internacional de Guerra Fría. En cualquier caso, en la estrategia comunista, acabar con la dictadura e instaurar una democracia aparecía como el objetivo inmediato, que exigía una amplia unidad antifranquista que solo se conseguiría –argumentaban– si la movilización social era suficientemente importante para decantar a los sectores sociales y políticos que, aspirando a un horizonte democrático, no tenían la fuerza –ni en muchas ocasiones la voluntad– de enfrentarse a la dictadura.

EL IMPULSO A LAS COMISIONES OBRERAS

El desarrollo de CCOO acaparó buena parte de la atención de ambos congresos, con el objetivo de que su fortalecimiento y ensanchamiento se convirtiera en el norte que guiase las acciones de los comunistas en el activismo obrero. Desde 1962, el nuevo movimiento obrero había conseguido combinar en un solo proceso el activismo legal y el ilegal[5], pero todavía las CCOO estaban en fase de maduración; al mismo tiempo, desde la dirección del partido se insistía en la necesidad de asegurar su autonomía. En ese sentido, en el informe al II Congreso del PSUC, Gregorio López Raimundo afirmó que los comunistas debían entender las Comisiones Obreras como «un movimiento unitario de todos los trabajadores, con igualdad de derechos para todos sus miembros, que adopta por sí mismo las decisiones que cree convenientes, que eligen democráticamente como dirigentes los obreros más firmes, abnegados y combativos, haciendo abstracción de su tendencia política»[6]. Así se puede afirmar que, a partir de las experiencias de los años cincuenta y, sobre todo, de los primeros sesenta, los comunistas definieron una estrategia coherente que contribuyó a asentar una de las innovaciones más importantes de CCOO: su no adscripción política y su poca definición ideológica –más allá del anticapitalismo genérico–, así como su voluntad unitaria respecto al conjunto de la clase obrera, que permitía que se acercasen a ellas trabajadores de muy distinta procedencia. En palabras de Fernando Soto, los dos pilares fundamentales en los que se apoyó el naciente movimiento de comisiones obreras fueron las asambleas participativas y las

reivindicaciones sentidas[7].

La militancia comunista tuvo que desarrollar un nuevo modelo de activismo más abierto en movimientos sociales, algo que no siempre resultó fácil, particularmente para los más veteranos. Sin embargo, ese mismo modelo facilitaba la renovación generacional. Las dudas que pudieran plantearse entre una militancia disciplinada fueron efímeras, dados los resultados alcanzados en un escenario de gran dinamismo: «Encontramos allí [CCOO] una gran satisfacción porque era fructífero, porque el Partido prosperaba, las reuniones eran cada vez más grandes, había más gente, era gratificante»[8]. Nuevamente, en expresión del dirigente andaluz: [lográbamos ser] «mejores comunistas en tanto en cuanto, con más independencia y finura, insuflábamos ideas y organización propia al renaciente movimiento sindical»[9].

Con la convocatoria de elecciones sindicales en 1966, el movimiento de CCOO alcanzó un notable protagonismo público incluso más allá de las fábricas. Fue aquella una excelente muestra de lo que en el ámbito de las ciencias sociales se ha categorizado bajo el concepto «oportunidad política», una coyuntura vinculada a las necesidades del poder político que los movimientos sociales pueden aprovechar para su desarrollo. En 1966 José Solís, secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, quiso convertir las preceptivas elecciones sindicales en el símbolo del «desarrollo político» impulsado por los falangistas, paralelo al «desarrollo económico» en manos tecnócratas. El objetivo falangista era, evidentemente reforzar su posición dentro del aparato del Estado, al tiempo que aumentar la legitimidad del régimen. Con el lema publicitario «votar al mejor» se pretendía convencer a los trabajadores del cambio en marcha, del que sería buena muestra la ausencia de restricciones para los candidatos no oficialistas; al mismo tiempo, con el objetivo de alcanzar una elevada participación, los discursos constantes en torno a las elecciones venían a afirmar que estaba en las manos de los trabajadores que se produjera una renovación profunda del sindicalismo vertical. La oportunidad que ofreció el giro falangista vino de la mano de la visibilidad y relevancia general que el Movimiento dio a las elecciones sindicales, pero lo decisivo para el éxito de CCOO fue la capacidad de sus activistas de aprovechar las nuevas condiciones para presentar candidatos en una proporción mucho más elevada que en convocatorias anteriores.

Los comunistas promovieron la participación, presentando la utilización de los cargos sindicales no tan solo como un instrumento para la expansión del

movimiento obrero, sino, también, como una batalla a favor de un futuro sindicato de clase, independiente y democrático. Para conseguirlo, pusieron en tensión toda la organización que, por otro lado y progresivamente, se estaba reforzando. La participación en las elecciones fue masiva y excelentes los resultados de los candidatos de CCOO en las empresas de las zonas de mayor movilización. El éxito en las elecciones sindicales animó a los activistas, que, en los meses siguientes, multiplicaron las reuniones abiertas en iglesias o en el campo. Por otro lado, en un año de tanto dinamismo movilizador como 1966, los militantes comunistas propugnaron, y en parte consiguieron, la participación en las movilizaciones estrictamente políticas que las organizaciones clandestinas convocaban.

Ante esa realidad, la dictadura franquista no se quedó impasible. Además de constatar el fracaso de la apuesta de Solís, el Gobierno podía observar que el movimiento obrero se estaba convirtiendo en una pieza esencial del antifranquismo político. Pocas semanas después de las elecciones, los procedimientos represivos se pusieron en marcha y, en marzo de 1967, el Tribunal Supremo declaró ilegales a las alegales Comisiones Obreras, siguiendo el camino expeditivo de vincularlas al PCE. No obstante, a aquellas alturas y a pesar de los costes represivos, el modelo ya estaba suficientemente asentado. Así se reconocía en un informe oficial previo a la ilegalización; en él se decía que las Comisiones Obreras se habían consolidado «en bastantes centros de trabajo, pero especialmente en la calle, con el conocimiento de su real existencia»[10]. Sin embargo, la viabilidad de la política comunista en los años siguientes no solo tuvo que superar los obstáculos derivados de las políticas franquistas, sino también de la contestación procedente de la izquierda radical, que se plasmó en el rechazo a la actuación lo más abierta posible que planteaba el PCE.

La ilegalización redujo la disponibilidad para la movilización de los sectores menos politizados, de manera que evitar que la ofensiva represiva contra CCOO acabara con el movimiento se convirtió en uno de los objetivos de la dirección comunista. Los militantes comunistas debían impulsar el crecimiento de CCOO, cómo lo hicieran dependería de las condiciones de tiempo y lugar[11]; la autonomía en ese sentido era muy amplia. Fue la temprana definición de una estrategia para su consolidación y la consistencia de su aparato clandestino[12] lo que había ayudado a que, de forma diversa según las zonas y los tiempos, el PCE constituyera la fuerza hegemónica en el seno de las CCOO. Ello no evitó, sin embargo, que durante un par de años los militantes comunistas tuvieran que combatir intensamente en defensa de sus presupuestos estratégicos: el

movimiento obrero tenía objetivos reivindicativos propios, que debían orientarse a satisfacer las necesidades de los trabajadores y, al mismo tiempo, tenía que convertirse en una pieza central de la lucha contra la dictadura, paso previo al socialismo al que aspiraban los comunistas. El movimiento obrero era, así, una fuerza que debía estar presente en la sociedad, capaz de establecer alianzas con otros grupos también partícipes de la voluntad de acabar con el franquismo.

La síntesis de la reunión de las CCOO de Cataluña, celebrada pocos meses después de la Sentencia del Tribunal Supremo, es una buena muestra del carácter sociopolítico que estaba acompañando a su desarrollo. El componente político se reflejaba tanto en lo que afectaba a la acción inmediata como a la autoorganización necesaria para que la clase obrera dejase de ser tratada como clase subalterna. En este sentido el documento afirmaba que era «de importancia vital para la clase obrera el derecho a ser reconocida como la primera fuerza y la más importante en el conjunto de fuerzas que aportan su esfuerzo para crear las mejores condiciones económicas de un país, siendo a la vez las que reciben el más reducido beneficio del progreso general del mismo». Para conseguir este reconocimiento era imprescindible que la clase obrera fuese consciente de que tenía derecho a reclamarlo; la clase obrera debía conseguir que las otras clases sociales la respetasen, lo que exigiría una larga etapa de aprendizaje y experiencia, durante la cual «se van adquiriendo derechos que otras clases ostentan». En definitiva, para «determinar las condiciones sociales y económicas en las que debe desenvolverse su vida laboral […] es preciso que los propios obreros organicen y desarrollen su propio movimiento, nombrando para ello a los que desde dentro de su propia clase están en condiciones de idoneidad y capacidad para impulsarlo». CCOO se presentaba, así, como «la organización del movimiento obrero para proteger y defender sus derechos de clase ante los medios capitalistas de explotación», una organización que tenía que ser capaz de acabar con la OSE y convertirse en el instrumento sindical de los trabajadores. Aunque los redactores del documento afirmaban ser conscientes de que no podrían conseguir estos objetivos de un día para otro, el documento trasluce euforia, ya que «son muy pocas las provincias en que no se han constituido estas Comisiones». Eran tan optimistas que consideraban que estaba al alcance de la mano crear «sindicatos democráticos y libres, con elecciones generales para todos los cargos representativos y directivos»[13]. La experiencia estudiantil estaba muy presente. Por todo ello, el movimiento no podía ser clandestino, pues no podría desplegar todo su potencial.

No obstante, otras organizaciones, que se pueden englobar bajo el epígrafe de

izquierda radical, defendían estrategias diferentes[14]. Tal es el caso del Frente de Liberación Popular. Las organizaciones del FLP rechazaban las políticas de colaboración amplia antifranquista, al tiempo que defendían el trabajo estrictamente clandestino con el argumento de proteger a la militancia de la represión. La agudización de esta ofreció una oportunidad a sus argumentos. Ciertamente, la intensificación de la represión de los años 1967-1969 hizo muy difícil la actuación de la militancia obrera. Para el PCE, sin embargo, volver a las catacumbas no estaba entre las opciones del movimiento obrero, «porque lo que no se ve no existe»[15]. Actuando a la luz del día –argumentaba Santiago Carrillo– era como CCOO ganaba la confianza de los trabajadores y «el respeto y la simpatía de otros sectores sociales»[16].

Movimiento de masas y clandestino era una contradicción en los términos, de manera que el combate contra la clandestinización fue total. En julio de 1968 se celebró en Madrid la 3.a Reunión General de CCOO y en ella el modelo impulsado por el PCE se consolidó definitivamente. Su originalidad se encontraba en la combinación de tres planos distintos y en ser capaz de moverse de uno a otro de forma dinámica: la relación con los trabajadores en la empresa, la actuación legal mediante los cargos de enlaces sindicales y jurados, y las comisiones clandestinas de empresa, de zona, etc. En este modelo, la empresa era el eje de la organización y en ella la asamblea representaba un espacio y un tiempo esencial. Esta práctica militante se convirtió en un punto de referencia europea en los años siguientes.

Francisco Fernández Buey escribió que, si bien la reflexión teórica sobre el nexo entre democracia y socialismo antes de 1968 fue escasa, en cambio, en el activismo cotidiano en el seno de los movimientos sociales, la práctica de métodos democráticos impulsada por los comunistas fue destacada. De la misma manera, a lo largo de la década que va de mitad de los sesenta a la de los años setenta, las decisiones impuestas en el seno del partido fueron pocas en relación al conjunto de las que los militantes debían tomar para su actividad[17]. En este sentido, para los militantes comunistas las asambleas se convirtieron en instrumentos para estimular la participación y mecanismos de información, en definitiva de organización, porque informando sobre las huelgas que se desarrollaban en otras empresas o localidades se estaba transmitiendo a los trabajadores que las huelgas eran posibles y que con ellas se obtenían mejores salarios y condiciones de trabajo. La asamblea era fundamental para que los trabajadores se sintieran abrigados, era un mecanismo de autoafirmación en el conflicto, de conquista del derecho de expresión y de autoorganización.

Con ello, como se propugnó en la 3.a Reunión General, se reafirmó la voluntad de impulsar la lucha en las empresas, hasta convertirlas en «fortalezas del movimiento obrero», rompiendo continuamente el corsé de la legislación represiva, creado justamente con el objetivo de que el movimiento obrero «no salga de su impotencia»[18].

AUGE Y CRISIS DE LOS SINDICATOS DEMOCRÁTICOS DE ESTUDIANTES

Si el salto cualitativo en el ámbito obrero fue notable, no menor fue el que se produjo en la universidad. Hasta 1968, la hegemonía comunista en el activismo universitario dio coherencia al movimiento estudiantil, que, en aquellos años, se centró en la autoorganización democrática al margen del SEU. La experiencia de CCOO estuvo presente y, por otro lado, las organizaciones universitarias comunistas gozaron, en general, de bastante autonomía y eso les permitió actuar de manera eficaz a modo de bisagra, facilitando la relación entre el partido y el movimiento estudiantil[19]. De dicha autonomía fue una buena prueba el hecho de que, inicialmente, la dirección comunista fue reticente a la creación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes, porque consideraba que un precipitado salto adelante podía suponer la pérdida de influencia entre los sectores movilizables[20]. El éxito en Barcelona en 1966 y a continuación en otros distritos universitarios supuso una disrupción extraordinariamente positiva. En este caso la organización autónoma podía ser denominada sindicato, pues, en la Universidad, el término era rupturista, tanto con el franquismo como con organizaciones estudiantiles anteriores. Para Francisco Fernández Buey «la razón principal para utilizar el término “sindicato” [..] era la oposición y el contraste con el “sindicato” realmente existente, el del régimen franquista: frente a este sindicato, de origen fascista, antidemocrático, queríamos una organización libre y democrática, propia de los estudiantes. [..] frente a SEU, SDE. Para un estudiante de entonces, y creo que esto se puede decir lo mismo para Barcelona que para Madrid, el peso de la diferencia recaía en la “D”, no en la “S”. Pudo haber en las cabezas de los estudiantes [..] una razón adicional: tampoco se quería volver al pasado»[21].

Cronológicamente, el primer impulso se produjo en Madrid. La organización

universitaria del PCE se había visto significativamente afectada por las escisiones prochinas y la derivada de las expulsiones de Claudín y Semprún[22], de manera que, aunque con Jaime Ballesteros como responsable se inició rápidamente la rearticulación de la militancia, las células del PCE estaban en plena recomposición cuando se produjeron los acontecimientos de febrero de 1965 y no pudieron jugar un papel destacado en su evolución. En ese mes, los estudiantes constituyeron la IV Asamblea Libre, un tipo de plataforma que, en los cursos anteriores y en las universidades más activas, se había convertido en uno de los elementos más dinámicos del proceso de autoorganización. La Asamblea aprobó una declaración de rechazo a la política represiva gubernamental; como se había convertido en habitual, las autoridades prohibieron los diversos actos que se iban organizando y, finalmente, el día 24, una asamblea de más de 5.000 estudiantes, a la que asistieron por primera vez los catedráticos José Luis Aranguren, Santiago Montero Díaz y Agustín García Calvo, decidieron llevar al Rectorado los acuerdos adoptados[23].

La represión posterior consiguió paralizar la movilización estudiantil de manera que en Madrid, donde las dudas de la dirección antes señaladas tuvieron peso, no se dieron las condiciones para plantear la lucha a partir de un marco paralegal, algo que sí sucedió en Barcelona, donde la permanente política represiva actuó en sentido contrario, dado que no se produjeron dudas en la organización y esta era consistente. Hasta el momento, en la capital catalana, el movimiento estudiantil había sido amplio y unitario, pero con menos carga política que en Madrid. Sin embargo, a partir del curso 1965-1966, la unidad y amplitud del movimiento estudiantil, forjadas en los cursos anteriores, permitieron que, en ese marco, la política represiva gubernamental favoreciera la politización de la mayoría estudiantil y el éxito del Sindicato Democrático[24]. Jordi Sancho también ha afirmado recientemente que el 66 barcelonés forma parte del fenómeno de los «sesentayochos», del mismo modo que las ocupaciones de Pisa de 1967 o los acontecimientos de Berlín, en tanto en cuanto abrió un ciclo de movilización universitaria que, partiendo de la universidad, tomó el espacio público de forma continuada, asamblearia, política y de masas[25]. Y en ese proceso los militantes comunistas desempeñaron un papel fundamental, poniendo en cuestión nuevamente la distinción entre «viejas» y «nuevas» izquierdas.

Efectivamente, la organización universitaria del PSUC dio el impulso definitivo a la convocatoria de primeras elecciones libres a partir de los delegados de curso elegidos por los estudiantes en 1965 en el marco del SEU. Aunque Manuel

Sacristán había sido expulsado de la universidad, continuaba siendo el responsable de la organización universitaria comunista. En poco tiempo, las cualidades del grupo de militantes estudiantiles de aquel momento, además de mostrar unas notorias aptitudes organizativas, permitieron desarrollar un activismo con gran capacidad de atracción para una parte muy significativa de los estudiantes, lo que se vio reflejado en que los delegados elegidos que conformaban la Junta de Distrito fueran todos militantes comunistas excepto uno.

El proceso preparatorio que llevó a la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona –SDEUB– se convirtió en un momento de politización y cohesión estudiantil notable, ya que en él participaron centenares de estudiantes que discutieron los documentos presentados; en las grandes asambleas participaron aproximadamente el 50 por 100 de los estudiantes matriculados. Posteriormente se celebró una asamblea fundacional en la que participaron la gran mayoría de los representantes estudiantiles recientemente elegidos, que puso las bases de una organización propia de los estudiantes y una idea de universidad alternativa[26]. Los militantes comunistas redactaron una Declaración de Principios con un contenido asumible para la mayoría de los estudiantes universitarios; por último, promovieron un Manifiesto –que redactó Sacristán– a favor de una universidad democrática, que desarrollaba la declaración de principios, y discutieron unos Estatutos para garantizar el funcionamiento democrático de la organización[27]. En esos documentos se reflejaba la cultura política de los militantes comunistas, en la que cada vez con mayor fuerza el socialismo se asociaba a la libertad[28].

Fue el respeto escrupuloso de las decisiones colectivas lo que llevó a una experiencia democrática considerada por muchos de los participantes como única[29]. También lo valoraron así los propios impulsores. Para Francisco Fernández Buey –que tantos testimonios militantes legó–, aquel proceso fue posible en primer lugar por la voluntad democrática de la mayoría de los estudiantes; en segundo lugar lo hizo posible la práctica realmente democrática de estudiantes y delegados; y, al mismo tiempo, el espíritu de sacrificio de una minoría de estudiantes y profesores universitarios comunistas[30]. En cualquier caso, aquella experiencia se convirtió en un antídoto poderoso contra las campañas anticomunistas del régimen y de algunos núcleos de la propia oposición antifranquista.

El éxito alcanzado por el SDEUB fue un as en la mano del PCE para continuar

insistiendo en la necesidad de organizar a los estudiantes[31]. En Bilbao siguieron los pasos de Barcelona, pero fue en Valencia donde los militantes comunistas alcanzaron un éxito notable. La organización comunista había quedado desarticulada en la primavera de 1964, pero experimentó una revitalización notable con la llegada poco después de un nuevo dirigente, Antonio Palomares, quien dedicó a la organización universitaria especial atención, tanto para aislarla del riesgo de nuevas detenciones en el sector obrero, como por la importancia relativa que la militancia universitaria había alcanzado. Las CCOO no se constituyeron formalmente en Valencia hasta finales de 1966 y los militantes universitarios se acostumbraron a actuar autónomamente[32], como había ocurrido en el caso de Barcelona.

Por otra parte, la voluntad de articulación del conjunto del movimiento universitario llevó a que ya a principios de 1967 se celebrara, también en Valencia, la I Reunión Coordinadora de representantes estudiantiles del conjunto de universidades españolas, tanto de delegados de sindicatos democráticos, como de participantes en las oficialistas Asociaciones Profesionales de Estudiantes –creadas en 1965 en sustitución del SEU–, e incluso de estudiantes de universidades en las que ni se habían formado SD ni participado en las elecciones de la APE. Los representantes reunidos aprobaron una declaración que llamaba a la autoorganización y expresaba la voluntad de coordinación de cara a la celebración de un Congreso de Estudiantes de España[33], propuestas que coincidían con las publicadas en Nuestra Bandera, lo que es buena medida del peso de la militancia comunista entre los delegados[34]. El trabajo en las universidades continuó y en el curso 1967-1968 se crearon sindicatos democráticos de estudiantes en la mayoría de las universidades, después de que, en octubre de 1967, se reunieran en Madrid delegados de las universidades de Barcelona, Madrid, Oviedo, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Bilbao y Málaga[35].

Sin embargo, la fórmula de los SDE mostró pronto sus limitaciones, particularmente en Barcelona y fundamentalmente por causas que, en la práctica, se convirtieron en complementarias: la represión gubernamental y la radicalización estudiantil, aunque también los propios límites del modelo de actuación abierta en el marco universitario influyeron en su agotamiento.

En relación a la represión, esta había sido inmediata en 1966, pues era consustancial a la dictadura. Al éxito de la Caputxinada el Gobierno respondió con la expulsión de la universidad de quienes consideraba sus líderes. Ello

implicó desplazamientos a otros distritos y el exilio fue el destino de aquellos a quienes se les prohibió estudiar en cualquier universidad del país durante tres años. Por otra parte, 69 profesores fueron expulsados de la universidad por dos años. A intelectuales y profesores se les impusieron multas elevadísimas que fueron sufragadas con la recaudación de una gran exposición organizada en París.

Así, el Gobierno respondió con radical virulencia al intento del PCE de mantener el activismo, ya desde el inicio del curso 1966-1967 en Barcelona y en el siguiente en Madrid. De hecho, desde 1965 distintos organismos oficiales estaban dedicando atención creciente a la contestación estudiantil y en 1968 acabar con la rebelión universitaria incluso se convirtió en objetivo de análisis en el Consejo de Ministros. La situación existente en las universidades de Madrid y Barcelona era imputada a la subversión, «a una clara y decidida acción política encaminada a perturbar el orden académico con fines de trascendencia política»[36], algo intolerable, pues podría extenderse a otros sectores. El Consejo de Ministros del 26 de marzo adoptó distintas medidas para asegurar el mantenimiento del orden, entre las que se encontraba la actuación policial dentro de los recintos universitarios y la designación de un juez especial para los conflictos universitarios con competencias en todo el territorio español[37].

Los comunistas, sin embargo, habían convivido siempre con la represión y esta por sí sola no había hecho fracasar sus modelos de activismo. Mayor influencia tuvo la radicalización que experimentaron tanto sectores significativos de la propia militancia como una parte de los jóvenes que se incorporaban a la universidad en aquel momento. Como se ha dicho en relación a CCOO, el partido debió combatir las posiciones favorables a abandonar la acción abierta; en este caso, la dirección del PCE no tuvo que esforzarse excesivamente en convencer a sus militantes, mayoritariamente defensores de esta política. Pero en la universidad la situación era distinta y el continuado relevo estudiantil favorecía el cambio del clima militante. En ese marco, para salir de lo que una parte de la militancia estudiantil consideraba un callejón sin salida del activismo universitario, estos sectores proponían establecer mecanismos de unidad con el movimiento obrero para desarrollar un único frente contra la dictadura y actuar decididamente. Esta posición no encontró eco; contrariamente, Simón Sánchez Montero y Marcelino Camacho eran partidarios de «un crecimiento sostenido de la lucha “sin pegar tirones”»[38]. Ese debate tuvo mayor incidencia en el PSUC y estuvo vinculado a la escisión del grupo Unidad. Los escindidos, la mayoría estudiantes, que no habían conseguido su principal objetivo –arrastrar a los

cuadros obreros en CCOO–, crearon el Partido Comunista de España (internacional) en diciembre de 1967[39]. Por su parte, el conflicto chino-soviético en el escenario internacional también ofreció claves para la división, pero era subsidiario a los factores de orígenes internos.

En el fondo, lo que se manifestó entonces fueron los distintos ritmos de dos movimientos que estaban alcanzando éxitos notables, pero que tenían necesidades distintas. El movimiento obrero estaba avanzando significativamente en su autoorganización, al tiempo que abría las brechas que le permitirían convertirse en el motor de la movilización social. Este proceso, sin embargo, a finales de los años sesenta no había alcanzado la madurez que tendría en los setenta. De manera que los estudiantes movilizados, que también otorgaban al movimiento obrero una posición de liderazgo en la movilización social, no encontraron el horizonte que necesitaban para mantener la misma estrategia de actuación. Alcanzados los máximos objetivos dentro del marco universitario, y topando de frente con la dictadura, el movimiento estudiantil no podía obtener victorias parciales que transmitieran a los universitarios la utilidad de tal planteamiento[40]. Si a ello se suman los cambios que se estaban produciendo en el escenario internacional, es posible explicar el bloqueo que experimentó el movimiento universitario.

En ese marco, la represión fue capaz de desarbolar el movimiento estudiantil a partir de 1968. En la VI Asamblea de los SDE, celebrada en Sevilla a finales de febrero de 1968, los estudiantes comunistas dejaron de defender la idea de la convocatoria de un Congreso Universitario Democrático, que venía a ser el reconocimiento de la imposibilidad de mantener una actividad regular paralela a la legalidad establecida por la dictadura. A finales de la década de los sesenta el movimiento estudiantil dejó de tener la relevancia política que tuvo entre 1965 y 1968, el periodo más productivo del movimiento universitario en España[41].

UNA BASE SOCIAL AMPLIA Y DIVERSA

El aumento y diversificación de las actitudes contestatarias a lo largo de 1966 exacerbó el optimismo característico de la dirección comunista y, aunque la reacción represiva del Gobierno no se hizo esperar, ello no impidió que el

Comité Ejecutivo del PCE aprobara un documento que, a medio plazo, resultó importante y en el que justamente se instaba a los militantes a evitar el repliegue, manteniendo la actuación abierta como instrumento de ampliación de la contestación[42]. Los costes represivos nunca fueron una variable que considerar si las expectativas de éxito eran altas, particularmente para la dirección comunista, aunque también para su base militante. Así, a pesar de que cuando el documento vio la luz, en abril de 1967, la represión estaba diezmando la militancia, para los militantes resultaba convincente el argumento de que la actuación abierta era imprescindible para ampliar la movilización social y que, al mismo tiempo, esta podía limitar la represión, ya que los riesgos podían ser menores «si sabemos utilizar a fondo toda clase de medios y posibilidades legales, de modo que las autoridades se encuentren constantemente ante la disyuntiva de negar la legalidad franquista o ceder ante las demandas populares»[43].

En ese mismo año de 1967 también vio la luz otro texto con el que se pretendía ampliar la base social del partido, y así lograr integrar a todos los sectores más activos contrarios a la dictadura; se trataba del libro Un futuro para España[44], donde aparecía por primera vez un enunciado de gran difusión posterior: «la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura» como síntesis del motor de cambio social que debía conducir al socialismo. La formulación bebía de la elaboración teórica que se desarrollaba en otras organizaciones comunistas, particularmente en el PCI. Carrillo conocía la literatura que se estaba produciendo e intentaba introducirla en sus propuestas políticas. En 1967 escribió que la «alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura [refleja] las fuerzas más dinámicas y progresistas del desarrollo social. Esta alianza tiene aún que desarrollarse y estructurarse más ampliamente, pero se presenta ya como una realidad naciente de gran porvenir»[45]. Su concepción era, no obstante, estrictamente política, sin poner de relieve las consecuencias potenciales de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura en la propia concepción del partido.

Para la dirección del PCE la expresión «fuerzas del trabajo y de la cultura» era especialmente adecuada para acomodar la presencia creciente de profesionales en el partido, una de las consecuencias del liderazgo comunista en el movimiento universitario. Los cambios asociados al crecimiento económico y los procesos de urbanización y salarización facilitaron la extensión del proceso formativo de franjas crecientes de jóvenes y, en este contexto, del volumen de profesionales. La organización comunista atrajo a una parte significativa de aquellos profesionales con sensibilidad social y política que estuvieron

dispuestos a movilizarse contra el franquismo. Ello le permitió crear estructuras sectoriales de abogados, arquitectos, médicos, cineastas, etc., abocadas directamente a articular corrientes «democráticas» en los colectivos a los que pertenecían. Situados en los años sesenta, dos colectivos profesionales adquirieron especial relevancia: periodistas y, sobre todo, abogados, teniendo en cuenta la tupida red represiva creada por la dictadura. En un número creciente, muchos abogados contribuyeron a la movilización cediendo espacios a los activistas, particularmente de CCOO y, especialmente, asesorando legalmente tanto en los procedimientos laborales como en defensa de los encausados ante los tribunales[46]. Igualmente, fueron muchos los abogados que defendieron a detenidos políticos tanto ante el Tribunal de Orden Público como ante los tribunales militares[47].

En términos relativos, no menor importancia tuvo el activismo desplegado en las zonas rurales. En el VI y VII Congreso se fue perfilando un discurso de política agraria que intentaba aglutinar los intereses de jornaleros y pequeños y medianos campesinos[48]. Para ello se intentaron crear comisiones agrícolas y campesinas allí donde las condiciones lo permitieran. La I Reunión Regional de las Comisiones Agrícolas e Industriales de Andalucía tuvo lugar en septiembre de 1968 y en ella se estableció como objetivo prioritario «estudiar y discutir las condiciones objetivas de la situación en el campo y la posibilidad de una mayor movilización del amplio sector que representan los obreros agrícolas y los campesinos pobres, en la defensa de sus intereses y por tanto en su contribución a una democratización política del país que haga posibles las profundas reformas económicas que se necesitan»[49]. Pronto se pudo observar que la fórmula respondía a los planteamientos voluntaristas dibujados por los cuadros en el exilio, condicionados por el referente leninista de alianza obrero-campesina y por el imaginario republicano sintetizado en el lema «la tierra para quien la trabaja». El campo andaluz experimentó en los años sesenta cambios muy notables vinculados a la mecanización y la emigración, de manera que ya a inicios de los setenta entre los dirigentes comunistas se abrió la opción de formar las Comisiones Obreras del Campo, un proceso pilotado exclusivamente desde el interior[50].

De la misma manera, el desarrollo del movimiento campesino en Cataluña estuvo ligado a la expansión territorial de los comunistas. A lo largo de los años sesenta, la dirección del PSUC dedicó particular atención a la reorganización del partido en las comarcas de mayor concentración agraria de Lleida y Tarragona, así como a los contactos con individuos de otras filiaciones activistas[51]. Las

elecciones a las Hermandades Sindicales de 1966 se convirtieron en una coyuntura clave para el desarrollo de las Comissions Pageses que, formalmente, se crearon en 1968, pero que ya habían adquirido presencia social con anterioridad[52].

La estructura de la propiedad de la tierra, el nivel de mecanización o la participación en los mercados integrados, etc. influía decisivamente en las posibilidades organizativas. Globalmente, entre 1966 y 1970, la utilización de los cargos electivos de las organizaciones agrarias oficiales y el resurgir de la conflictividad campesina dio pie a la formación de organizaciones en distintas partes de España: en 1967 se constituyó la Asamblea de Campesinos de Las Palmas, que conectó con las reivindicaciones de la Coordinadora de la Aparcería canaria, en la que participaron los comunistas canarios. En Galicia en 1969 ya estaban formadas unas Comisiones Campesiñas en las que los comunistas tenían igualmente presencia. Contrariamente, en Asturias o en Murcia y Aragón la presencia de los católicos progresistas era más destacada. El proceso de coordinación avanzó significativamente con la celebración de la Primera Asamblea General de las Comisiones Obreras Agrícolas y Campesinas, a las que asistieron delegados procedentes de buena parte de España, que establecieron una estrategia común, aunque también se manifestaron claras diferencias de objetivos[53].

EL PACTO PARA LA LIBERTAD

En las páginas anteriores se ha prestado atención a uno de los dos pilares de la política comunista de la década comprendida entre 1965 y 1975: el estímulo de la movilización reivindicativa y la autoorganización social. El otro pilar de la acción política tenía que ver con las políticas de unidad antifranquista, ya que la voluntad de acabar con la dictadura se convirtió en la práctica en la prioridad y objetivo inmediato del PCE. En realidad, se podría decir que el protagonismo que alcanzó el partido en la oposición antifranquista se debió a su presencia e impulso decidido en todos los movimientos susceptibles de plantear reivindicaciones de carácter social y político; en segundo lugar, a su propuesta de reconciliación nacional, que, aunque no tuvo interlocutores políticos relevantes, era atractiva para quienes estaban dispuestos a luchar para acabar con

el franquismo; y, en tercer lugar, a la propia debilidad de otras fuerzas políticas, que llevó hasta el PCE a personas que difícilmente se identificaban con los referentes comunistas tradicionales, pero que veían dentro de esa organización a buena parte de los activistas comprometidos en la lucha contra la situación existente[54].

Efectivamente, en los años sesenta el PCE había situado en el centro de su programa político no solo acabar con la dictadura, sino también el «forjar una democracia para todos los españoles que, independientemente del pasado, acepten construir en común, dentro de la diversidad y del juego de las diferentes opciones políticos-sociales, la España del mañana»[55]. En este sentido los dirigentes comunistas dedicaron particular atención a las políticas de unidad.

En junio de 1966, al cumplirse el décimo aniversario de la Declaración de Reconciliación Nacional, el PCE reivindicó su contenido, poniendo de relieve que la diversa movilización que estaba teniendo lugar venía a fundamentar las propuestas comunistas. Así,

nuestra política de RN tendía precisamente a lograr esa finalidad: aislar a los «ultras» de la dictadura y la reacción y facilitar la evolución de la inmensa mayoría de los españoles hacia posiciones democráticas activas. Sólo por ese camino era y es posible, en las condiciones históricas concretas de los últimos años –y del momento presente–, que España se desembarace de la dictadura, que la democracia se instaure, y se abra vía al progreso de nuestro país[56].

Para acabar con una dictadura bien asentada en los aparatos del Estado era imprescindible ir más allá de las vanguardias, alcanzando la mayoría social. Y para ello era «indispensable una amplia y potente lucha de masas».

Los pequeños grupos que constituían el espectro antifranquista eran muy reticentes a colaborar con los comunistas, muy condicionados por el clima de la Guerra Fría. Los comunistas centraron su atención en el activismo del apostolado católico, observable desde finales de los años cuarenta, pero que en la década de los sesenta se reforzó extraordinariamente por la renovación impulsada por la Santa Sede y plasmada en el Concilio Vaticano II. La colaboración con los activistas católicos se había producido de forma espontánea

durante los años cincuenta y, en la práctica, la Declaración de Reconciliación Nacional tuvo en ellos uno de los destinatarios fundamentales. La disponibilidad para dejar atrás la fractura de la Guerra Civil y dirigir la mirada al futuro, al mismo tiempo que inaugurar una nueva etapa en la que las grandes proclamas políticas irían acompañadas de actuaciones de «baja intensidad», era ampliamente compartida por diversos segmentos de los nuevos sujetos políticos. Políticamente, por otro lado, el Concilio Vaticano tuvo consecuencias muy importantes para favorecer la colaboración entre comunistas y católicos. Hay que destacar que ayudó a deslegitimar el régimen desde dentro, impidiendo que este pudiera continuar presentándose como una forma de gobierno conforme a la doctrina de la Iglesia; esto atacaba la línea de flotación del «régimen de la victoria» y facilitó la evolución de muchos creyentes, dificultó el apoyo masivo de los obispos a la dictadura y dio apoyo a los militantes de los movimientos apostólicos, que pudieron afirmar tranquilamente que «los herejes son ellos»[57].

Por otro lado, la misma política represiva, incrementada desde 1967, deslegitimó el régimen ante sectores significativos de la sociedad, más cuando el mundo occidental se veía sacudido por la contestación vinculada a los fenómenos políticos, sociales y culturales del largo 1968. En agosto de aquel año, y como resultado de la profunda preocupación de los dirigentes franquistas por la «subversión» social y política, el Gobierno aprobó un decreto-ley sobre delitos de «bandidaje y terrorismo», que ponía nuevamente en vigor artículos derogados previamente relativos a la figura de la «rebelión militar». Específicamente para contrarrestar la movilización universitaria, se creó el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno –SECED–, que amplió sus funciones en los años siguientes. Es decir, ante la constatación de que se estaban tejiendo complicidades entre núcleos de militantes antifranquistas y sectores sociales que hasta aquel momento se habían mantenido pasivos y, por otro lado, que esas mismas empatías dificultaban sostener la iniciativa política gubernamental, el Gobierno decidió utilizar el instrumento que consideraba más eficaz: la represión[58].

El 24 de enero de 1969 el Gobierno declaró el estado de excepción en toda España durante tres meses, dejando en suspenso varios artículos del Fuero de los Españoles, por dos motivos fundamentales. A corto plazo, los dirigentes franquistas querían evitar una intensificación de las protestas que habían caracterizado 1968, y que habían tenido un impacto notable en la opinión pública. Era probable que así sucediera, a tenor de los incidentes del 17 de enero

de 1969 en el Rectorado de la Universidad de Barcelona, donde un grupo de estudiantes tiró un busto de Franco a la calle desde el despacho del rector; por otro lado, en Madrid murió el estudiante Enrique Ruano a manos de la policía, después de ser detenido en una manifestación. El Gobierno aprovechaba la visibilidad de la contestación universitaria para presentar la suspensión de diversos artículos del Fuero de los Españoles como un intento de frenar las «acciones minoritarias [que] sistemáticamente dirigidas a turbar la paz de España y su orden público, han venido produciéndose en los últimos meses, [y que están] claramente en relación con una estrategia internacional, que ha llegado a numerosos países»[59]. Ahora bien, este propósito inmediato del estado de excepción era paralelo a un objetivo más amplio a medio plazo: intentar frenar la acción opositora al régimen y enviar una señal a los sectores disidentes sobre las consecuencias que podría tener pasar a posiciones activas.

La amenaza represiva fue efectiva y muchos opositores huyeron de sus hogares. La organización más afectada fue la comunista y, particularmente, el PSUC. Más de setenta militantes fueron detenidos y otros cincuenta tuvieron que abandonar trabajo y domicilio, pero los principales cuadros de la organización evitaron ser capturados, de manera que, pasado el primer impacto, toda la militancia se dispuso a demostrar que las afirmaciones gubernamentales, según las cuales la organización del PSUC había sido desmantelada, no respondían a la realidad[60]. El PCE no se equivocaba cuando afirmó que el estado de excepción había debilitado más al régimen que a la oposición[61] por lo que, en poco tiempo, la movilización social alcanzó nueva intensidad.

Pocos meses después, el PCE dio un paso más en su propuesta unitaria propugnando un Pacto para la Libertad en el que convergieran todas las fuerzas contrarias a la dictadura[62]. En julio de 1969, el franquismo presentó el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey como el cierre de la institucionalización del régimen, pero pronto se hizo evidente que este estaba agotado. La defensa del Pacto para la Libertad fue uno de los ejes fundamentales del programa comunista en 1970. Ya en el mes de enero, el Comité Ejecutivo, dirigiéndose en la práctica a su base militante, vinculó su propuesta a la reafirmación del protagonismo de las masas populares, de manera que «los comunistas decimos a todas las fuerzas revolucionarias que, a través de la vía democrática, pueden ser creadas las condiciones reales para una alternativa que asegure, con la libertad, el socialismo». Pero, a la vez, se llamaba al realismo al afirmar que la desaparición de la dictadura no sería posible sin una alianza de fuerzas políticas capaz de realizar un programa

mínimo basado en las libertades políticas, democráticas y democrático-nacionales[63].

La centralidad de la política unitaria para la estrategia política comunista se puso nuevamente de relieve cuando se convocó el Comité Central ampliado en el verano de 1970. A aquellas alturas, para los comunistas la democracia era un concepto clave, aunque algunos sectores del partido pudieran recelar de la centralidad de la cuestión. Apenas habían pasado dos años desde que la invasión de Checoslovaquia provocó el primer encontronazo importante entre la dirección del PCE y la del PCUS, lo que se había puesto de manifiesto en la Conferencia de Partidos Comunistas, celebrada en Moscú en el verano de 1969. Para las jóvenes generaciones de finales de los sesenta, la libertad era un concepto fundamental. Por otro lado, Santiago Carrillo insistió en el argumento de la debilidad relativa de la oposición política y, lo que era más importante desde la perspectiva del PCE, la de la clase obrera por ellos representada: «¿Hay alguien que sostenga en serio que hoy, en España, la clase obrera está en condiciones –organizativas, políticas, de conciencia, de fuerza– para lanzarse frontalmente a la conquista del poder?»[64]. Asegurar que la clase obrera tuviera capacidad de incidencia en el sistema democrático propugnado se presentaba como lo fundamental; las formulaciones de «pureza ideológica» –se venía a decir– podían quedar en las manos de quienes no tendrían capacidad de incidencia social y política.

Para la dirección comunista, el «postfranquismo» era inminente y ante el nuevo escenario era imprescindible aspirar a dar un salto cualitativo en la actividad pública de los militantes. Dos directrices debían orientar la nueva etapa: «salir a la superficie» y generar «espacios de libertad» para demostrar a amplios sectores sociales «que es posible vivir de otra forma», desempeñando «un papel social y político activo que el franquismo les niega»[65]. Salir a la superficie no estaba en contradicción con la organización clandestina a la que forzaba la dictadura; suponía incrementar la actuación abierta en los espacios de libertad que se conseguían consolidar en la práctica.

La estrategia de espacios de libertad estimuló la implicación de los militantes en todos los frentes. Al mismo tiempo, la imbricación en el tejido social incidió en las características, prácticas y cultura política de la militancia comunista joven. Como antes, dada la voluntad de ensanchamiento del activismo político, la lucha forzosamente clandestina se combinaría con una autonomía relativa amplia de los militantes en los movimientos sociales, lo que comportaba una escasa

presencia de los rasgos ideológicos en el activismo cotidiano[66]. Esta política se convirtió en un factor de atracción militante. La lucha política ligada a la movilización social exigía que las células comunistas en cada espacio de actuación intentasen conocer los problemas existentes; por otro lado, la voluntad de ensanchar la presencia social del partido estimulaba a sus militantes a buscar alternativas, tanto para resolver problemas cotidianos, lo que generaba apoyos entre los sectores populares, como impulsando propuestas de democratización social, que ampliaban el contacto con algunas franjas de las clases medias. Efectivamente, el crecimiento de los movimientos sociales permitió que la represión ya no hiciera retroceder la movilización, de manera que esta se transformaba en causa de debilidad de la dictadura; consiguió que desde 1970 el franquismo estuviera ya permanentemente a la defensiva.

EL DESPLIEGUE DE LA MOVILIZACIÓN

El conocido como «proceso de Burgos» dio lugar a una importante movilización antifranquista, tanto en España como en muchos países europeos, que logró desbaratar los objetivos de la dictadura. Como expresaba Simón Sánchez Montero en carta a la dirección del partido en París, informando de una entrevista con José María de Areilza: «El consejo de guerra había sido un gran error del Gobierno, pues había querido demostrar al mundo que aquí se aplicaba la justicia con todas las garantías y lo que ha conseguido es mostrar plenamente su verdadero carácter. Ha sido el proceso del régimen»[67]. En efecto, los dirigentes franquistas, que acuñaron la expresión «crisis de diciembre» cuando empezaron a analizar lo sucedido, describieron alarmados los días vividos: «Éramos una nación aislada, un Régimen menospreciado, un Estado con sus representaciones y Oficinas asaltadas o amenazadas, un país vilipendiado por los órganos de difusión internacionales»; incluso «los gobiernos mismos se permitieron públicamente, y por sus órganos autorizados, toda clase de intervenciones, injerencias e impertinencias en nuestros asuntos». En el interior de España, «la situación no era menos grave», con «la indisciplina, el desorden, las amenazas y coacciones, el motín»[68].

En uno de los informes sometido a debate en el pleno extraordinario del Consejo Nacional del Movimiento celebrado en febrero de 1971 para analizar la situación

política, se sostenía que la crisis de diciembre era consecuencia de lo ocurrido en los años anteriores, en los que Comisiones Obreras había conseguido movilizar a sectores numerosos de trabajadores en las grandes empresas, en demanda de la libertad sindical y del derecho de huelga, en tanto que en las universidades se habían desarrollado «las tendencias más radicales en el orden político». Por otra parte, el cuestionamiento y la crítica al régimen se habían extendido en colegios profesionales y sectores culturales y religiosos, así como la presencia de los «separatismos» catalán y vasco. Según dicho informe, la acción de la oposición y, en particular del PCE, había sido el motor de toda la agitación. En definitiva, fue fruto de un plan «que confecciona el Partido Comunista» y que incluye «una acción subversiva internacional» que, con la complicidad de sectores «pseudocristianos», logró resucitar «todas las pasiones que nuestro Régimen ha sufrido desde su creación»[69].

Más allá de las tesis conspirativas franquistas, ciertamente la movilización antifranquista de diciembre de 1970 no puede explicarse sin el ascenso de la conflictividad social en los años anteriores, a pesar del reiterado recurso de la dictadura a la declaración del «estado de excepción», expresión, por otra parte, del fracaso de la «paz» franquista, identificada con la ausencia de conflictos sociales y con un estricto orden público.

El Comité Ejecutivo del PCE manifestó que el proceso de Burgos había sido «incontestablemente la batalla y la victoria política más importante, hasta hoy, contra el régimen franquista […] La conciencia mundial, vibrando al unísono con España, ha evidenciado el aislamiento internacional del régimen fascista de Franco»[70]. Una valoración, especialmente en su segunda parte, excesivamente optimista, como, por otro lado, era habitual en la dirección comunista. En cualquier caso, desde el cambio de década, y a pesar de algunos momentos de reflujo, la conflictividad social creció y se diversificó, contribuyendo decisivamente a la crisis de la dictadura. El PCE redobló sus esfuerzos para extender la movilización, articulada en torno a reivindicaciones sociales, vinculándolas lo más posible a las democráticas, uno de los pilares fundamentales de su programa de acción a partir de la convicción de que era la forma más eficaz de lucha contra la dictadura. Por ello, el crecimiento de las CCOO y la movilización obrera y campesina continuarían siendo las tareas fundamentales de muy buena parte de la militancia comunista. Con unas Comisiones más numerosas y fuertes y con una mayor movilización social se lograba, al mismo tiempo, el crecimiento del partido, su mejor implantación, y se fortalecía su capacidad de actuación. Aunque, obviamente, más acción

clandestina e ilegal comportaba mayor exposición a la represión de la dictadura.

La conflictividad obrera creció, con fluctuaciones, a lo largo de la primera mitad de los años setenta. Sus escenarios principales fueron las zonas mineras e industriales, extendiéndose desde las de larga trayectoria reivindicativa a las nuevas que aparecieron al calor del intenso proceso de industrialización. Al mismo tiempo, crecieron las acciones de los obreros agrícolas contra el paro, especialmente en las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz. En 1971, si bien según los datos de la Organización Sindical Española el número de conflictos laborales y el de trabajadores que participaron en ellos fue inferior al del año precedente, el número de horas no trabajadas fue superior, lo que apunta a una radicalización de los conflictos, entre ellos el de la factoría SEAT en Barcelona, la mayor del país, que comportó una violenta intervención de la policía armada para desalojar de la empresa a los trabajadores en huelga y que se saldó con un trabajador muerto y numerosos heridos por armas de fuego. Por otra parte, en Asturias tuvo lugar la huelga minera más importante desde 1962, prolongada durante más de dos meses. En Madrid, el conflicto más importante se desarrolló en el sector de la construcción, también con una víctima mortal, un militante de CCOO y del PCE tiroteado por la guardia civil cuando, junto a otros obreros, repartía propaganda de la convocatoria de huelga. No serían las únicas víctimas de los disparos de las fuerzas de orden público.

Meses después, en marzo de 1972, una manifestación de huelguistas de la Empresa Nacional Bazán, en El Ferrol, fue duramente reprimida por la policía y la utilización nuevamente de armas de fuego causó víctimas mortales, dos trabajadores miembros de CCOO y militantes del PCE. En los tres años siguientes, la tendencia a la extensión de la conflictividad obrera se consolidó, con un pico de conflictos en 1974 coincidiendo con la renovación de numerosos convenios colectivos. Y continuó el goteo de víctimas de la violencia policial contra trabajadores en huelga, como en la Central Térmica del Besós, donde otro obrero de la construcción, miembro de CCOO, moría por disparos policiales en 1973. La creciente conflictividad comportó un incremento de la represión, lo que, a su vez, dio lugar a protestas, a acciones solidarias y, en definitiva, a una mayor denuncia de la dictadura; todo lo cual acabó erosionándola profundamente, deslegitimándola ante sectores de la sociedad cada vez más extensos y dañando su imagen internacional cuando más intentaba mejorarla.

Para los gobernantes franquistas, CCOO y el PCE eran los principales responsables del ataque de la «subversión» que estaba sufriendo el régimen. En

el informe del gobernador civil de Oviedo relativo a 1971, se afirmaba sin ambages que las CCOO, controladas y dirigidas por el PCE, constituían «el mayor engranaje de la subversión»[71]. Igualmente, en un informe del Ministerio de la Gobernación de noviembre del mismo año, se afirmaba que en todos los conflictos obreros de la última década habían «estado presentes miembros de Comisiones Obreras» y que, pese a reconocer la pluralidad del movimiento, «puede afirmarse sin temor a equivocación, que de una forma o de otra forma el Partido Comunista controla la mayor parte de las Comisiones Obreras existentes en España». El documento describía con notable acierto las líneas básicas de actuación de las comisiones mayoritarias «de tendencia comunista», como la utilización de todos los cauces legales, la intervención en los convenios colectivos, el boicot a la nueva Ley Sindical o la «movilización proamnistía». El informe advertía de que, si no se actuaba con mayor eficacia, CCOO y el PCE podían en el futuro «llevar al país al caos»[72]. En una intervención ante el Consejo Nacional del Movimiento el 7 de marzo de 1972, el vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, reconoció que el régimen tenía graves problemas porque «estamos en guerra, y si queremos superar esta situación habremos de actuar con moral de guerra», lo que justificaba la dureza de la política de orden público aplicada en un marco de firmeza «sin caer en la trampa de preocuparnos por parecernos a los que se mantienen en sistemas liberales, para que no nos critiquen»[73].

Apenas tres meses después, la policía franquista logró un notable éxito con la detención en Pozuelo de Alarcón de la mayor parte de la Coordinadora General de CCOO. Los detenidos, casi todos miembros a la vez del PCE, fueron procesados por el Tribunal de Orden Público en el proceso 1001/1972 y condenados, en diciembre de 1973, a elevadas penas de prisión[74]. A Marcelino Camacho, el más veterano de los detenidos, que había salido en libertad pocos meses antes, y a Eduardo Saborido les impusieron 20 años de cárcel, y entre 19 y 12 años a los demás. La detención, el juicio y la condena de los dirigentes de CCOO dio lugar a una intensa campaña de solidaridad con «los diez de Carabanchel», y de denuncia internacional de la falta de libertades fundamentales en España. El PCE utilizó todos sus recursos para convertir el juicio a las CCOO en un juicio a la dictadura.

Pero, como hemos visto ya, la represión no logró detener el crecimiento de la movilización obrera antifranquista, por más que inflingiera notables daños personales y que consiguiera mantener el temor paralizante en sectores importantes de la sociedad. En la primavera de 1975, en las preceptivas

elecciones a enlaces sindicales y vocales de los jurados de empresa, los candidatos vinculados a las CCOO, agrupados en las Candidaturas Unitarias y Democráticas, lograron un inapelable triunfo en grandes y medianas empresas de las principales áreas industriales del país. En algunos lugares y sectores productivos, y pese a las maniobras de los dirigentes de la OSE para evitarlo, fueron igualmente elegidos miembros de Comisiones en las Uniones de Técnicos y Trabajadores de los sindicatos verticales y, más limitadamente, de los Consejos locales y provinciales de Trabajadores. La sostenida política comunista de utilización de los cargos electivos de la OSE para la organización y la movilización de los trabajadores obtuvo su éxito más notable, pese a las actitudes contrarias, tanto de algunos grupos de la extrema izquierda, como de las, por otra parte apenas presentes, UGT y CNT.

Pero, si bien la movilización obrera fue la punta de lanza del antifranquismo, el incremento de la conflictividad fue general en la primera mitad de los años setenta, en los que, además, se aceleró su diversificación. El PCE desarrolló una intensa actividad en las universidades y entre los sectores profesionales e intelectuales. En los centros de enseñanza superior, la radicalización de los años finales de la década de los sesenta, con la formación de nuevos grupos políticos, dificultó la acción del partido, especialmente en el movimiento estudiantil. Además, la experiencia de los sindicatos democráticos de estudiantes y su destrucción comportó dudas y divergencias en torno a las formas de actuación más adecuadas. En cualquier caso, las universidades se convirtieron en escenarios de conflictividad permanente.

En los recintos universitarios, el cuestionamiento de la dictadura podía manifestarse más abiertamente hasta hacer realidad el objetivo de crear «zonas de libertad», es decir, espacios en los que se transgredía de manera continuada la legalidad franquista mediante el ejercicio de libertades fundamentales negadas por la dictadura, en particular la libertad de expresión, entre otras formas mediante carteles murales; la de reunión, con la celebración de asambleas para debatir y decidir sobre cuestiones académicas y políticas; y la de manifestación, en los recintos académicos y fuera de ellos. Las universidades se convirtieron en cajas de resonancia de las movilizaciones obreras y de la denuncia de la represión. Al mismo tiempo, las principales iniciativas gubernamentales en el ámbito educativo, como la Ley General de Educación aprobada en 1970, o los cambios en los planes de estudio en 1974 (Plan Suárez), dieron lugar a amplias movilizaciones de rechazo. En capitales de provincia con universidades, pero con escasa presencia de empresas industriales, el movimiento estudiantil

constituyó la principal expresión del antifranquismo. En marzo de 1972, ante el Consejo Nacional del Movimiento, Carrero Blanco afirmó que para restablecer la normalidad en los centros de enseñanza superior era «absolutamente indispensable que salgan de la universidad los profesores y los alumnos que llevan a cabo en ella la subversión»[75]. Una medida tan extrema era simplemente imposible de ejecutar hasta sus últimas consecuencias, pero la represión se agudizó mediante la presencia continuada de la policía en los recintos universitarios y el cierre temporal de los centros para desactivar las protestas o poner fin a la constante transgresión de la legalidad. Pero, en realidad, muchos dirigentes franquistas daban ya la universidad por definitivamente «perdida» para el régimen, adoptando casi exclusivamente una política de orden público, modulada en función del momento y del lugar. Un informe del Ministerio de Educación de 1974 señalaba que, si bien solamente un 10 por 100 de los estudiantes eran activos y pretendían «el desmontaje del sistema vigente», el otro 90 por 100 seguía a la minoría activista, entre otras cosas porque la ideología marxista era «la única que ofrece un instrumento de eficaz crítica y contestación de la sociedad capitalista y burguesa»[76].

En los primeros años setenta empezó a configurarse un movimiento vecinal que constituiría con rapidez un nuevo desafío al orden franquista, en el que se volcarían los militantes comunistas, conforme a la política del partido de estimular la movilización en todos los ámbitos posibles. El activismo comunista fue igualmente muy notable en sectores profesionales, especialmente entre los más jóvenes, socializados en el antifranquismo durante su paso por la universidad, y en el mundo cultural.

Lógicamente, el VIII Congreso del PCE, celebrado en julio de 1972 en las afueras de París, dedicó una particular atención a la creciente movilización antifranquista. Con la retórica característica y abundantes citas de Lenin, en el informe del Comité Central presentado por Santiago Carrillo se destacaba una particular atención a las CCOO, auténtica «joya de la corona» del activismo comunista, y se afirmaba que el crecimiento de la movilización mostraba lo adecuado de la política propugnada por el partido. Por una parte, «la utilización de las posibilidades legales y su combinación con las formas de lucha extralegales ha aislado a la línea política de los funcionarios verticalistas de las masas obreras, ha dado un golpe a los Sindicatos Verticales del que estos no han podido reponerse». Por otra, «el entrelazamiento de las luchas económicas y políticas es una de las claves para movilizar a las amplias masas de la clase obrera contra la dictadura»; además, «luchar por mejores condiciones de vida de

las masas laboriosas» era «un deber cotidiano del movimiento obrero, y por tanto, de los comunistas», y menospreciarlo era propio de «doctrinarios pequeñoburgueses, pero no de revolucionarios proletarios»[77]. Retórica aparte, el crecimiento de la movilización obrera y de las CCOO radicaba, efectivamente, en ambas opciones.

La extensión de las CCOO, que había sido una tarea fundamental de los militantes comunistas, comportaba que «hoy CCOO pueden llegar, si se lo proponen, adonde no llega el Partido; pueden organizarse incluso allí donde el Partido no tiene aún organización propia», porque eran ya «un movimiento mucho más amplio que el Partido, con una personalidad específica y una autonomía efectiva». El «despegue de CCOO es ya un hecho. ¡Que vuelen con sus propias alas!».

Muchos militantes de CCOO y a la vez del PCE interpretaron estas palabras como el reconocimiento de la potencialidad del movimiento, pero, a la vez, como una expresión de la tensión que generaba su autonomía. Por otra parte, la condición sociopolítica de Comisiones, y años después del sindicato, en la que la significación de tal definición no siempre era clara, comportó algunas tensiones en distintos momentos entre la dirección comunista y militantes del partido en CCOO, y a veces también entre militantes del partido en CCOO. En el informe al VIII Congreso se manifestaba el carácter problemático de la cuestión. Así, se afirmaba que, sin inhibirse, las CCOO «no necesitan y no deben situarse en la primera línea de la lucha política. Ese era el papel de los partidos y no el suyo», algo que sin duda era ampliamente compartido. La actividad principal de CCOO debía «desenvolverse en el campo social, esa es su primera línea»[78]. Ahora bien, no siempre estaba claro cómo se conjugaba la condición sociopolítica del movimiento y ese deslinde entre la primera línea política y la social, más en un movimiento como CCOO, donde la emulsión entre lo económico y lo político se había convertido en un signo de identidad.

El informe al Congreso destacaba con satisfacción la extensión de la conflictividad sociopolítica en otros ámbitos, empezando por la universidad, afirmando que «junto a la clase obrera […] el sector nacional más combativo y más decididamente enfrentado a la dictadura hoy son los estudiantes», hasta el punto de que «la Universidad está en guerra contra la dictadura»[79]. A las experiencias en el movimiento estudiantil atribuía el informe el incremento de la desafección en sectores profesionales, especialmente entre los más jóvenes. Además, los estudiantes habían conseguido «abrir brechas en el pensamiento

político conservador de las capas sociales» de las que procedían; así, las clases medias «han conocido la brutalidad policial en sus propias familias; se han percatado de lo que significa la ausencia de garantías, de libertades; han empezado a ver con ojo más crítico la sociedad española». No se olvidaba el informe de «nuevas formas del movimiento popular de masas, que tiene su asiento en las barriadas y que se originan en necesidades vitales de la población», constituyendo «una de las formas más interesantes de defensa de los intereses populares», que, además, permitía «hacer participar en la vida política a decenas de miles de personas […] que no pueden ser movilizadas en las empresas por no participar directamente en la producción»[80]. Todo lo anterior permitía que fuera avanzando una «verdadera alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura», pieza central en la estrategia del PCE a largo plazo para avanzar hacia el socialismo.

En el escenario sin duda excesivamente optimista descrito por Carrillo, se trataba de «dar a esos movimientos mucha más amplitud y combatividad, para que sean capaces de imponer una auténtica alternativa democrática» en la perspectiva de la huelga nacional. La huelga nacional no era un objetivo fácil, era «tan difícil como liquidar la dictadura e instaurar la democracia», como «hacer una revolución política», pero considerar imposible llevar a cabo la huelga nacional era aceptar «la imposibilidad de instaurar la democracia», resignarse «aun sin saberlo, a la persistencia, bajo una u otra forma, de la dictadura». Pero la huelga nacional exigía «una seria preparación de masas, una articulación de la oposición, una alternativa de Poder»[81], que exigía alcanzar la unidad de las fuerzas democráticas.

LA UNIDAD ANTIFRANQUISTA

Como se ha dicho, junto a la movilización social, la unidad de la oposición era el otro pilar de la política del PCE. Para acabar con la dictadura era imprescindible una masiva movilización popular, pero, al mismo tiempo, un acuerdo de todas las fuerzas democráticas. En los años anteriores se daba la paradoja de que el PCE no tenía interlocutores políticos por el anticomunismo de Guerra Fría, pero era la fuerza con mayor capacidad de acción, en tanto que los grupos de distintas ideologías podían ponerse de acuerdo para crear alianzas, consejos, etc., pero su

presencia social era muy limitada, en algunos ámbitos insignificante. Desde el inicio de la década de los setenta, el PCE redobló sus esfuerzos para lograr un acuerdo del antifranquismo sobre la base de un programa mínimo que pudiera ser ampliamente compartido. El papel de las CCOO y el crecimiento de la conflictividad sociopolítica favorecieron los objetivos del partido. Además, en CCOO y en otros movimientos se daba la colaboración entre militantes del partido y de otros grupos políticos y colectivos de diverso carácter, lo que acabó facilitando la relación entre organizaciones y el avance hacia la unidad de la oposición a la dictadura.

En este sentido, la experiencia de la oposición catalana fue especialmente útil[82]. En 1971, la creación de la Assamblea de Catalunya fue un éxito para el PSUC, fruto de un largo, laborioso y paciente trabajo. Dos años antes, se había formado la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, integrada por el PSUC, socialistas –del MSC–, democratacristianos –de UDC– y nacionalistas –ERC y FNC– y, posteriormente, en el marco de la movilización contra el juicio de Burgos, la Asamblea de Intelectuales. Los cuatro puntos programáticos de la Assamblea de Catalunya, que agrupó a la mayoría de partidos políticos, movimientos sociales y a numerosos grupos cívicos, sintetizados en el eslogan «libertad, amnistía, estatuto de autonomía», lograron un creciente apoyo popular, lo que reforzó la unidad de la oposición y amplió el espacio del antifranquismo y su capacidad de actuación. El PCE valoró la formación de la Assamblea de Catalunya, cuyo cuarto punto era «la coordinación de todos los pueblos peninsulares en la lucha por la democracia», como un gran paso en el camino de la unidad antifranquista. El informe del Comité Central al VIII Congreso destacaba que «Cataluña está hoy en cabeza del movimiento para afirmar una alternativa democrática a la dictadura», reconocía la importancia de la cuestión nacional y, a la vez, que las fuerzas políticas catalanas integraban su resolución en una «solución de conjunto para el Estado español, privando a la dictadura del argumento del separatismo»[83].

La experiencia unitaria en Cataluña dio impulso a los esfuerzos del PCE en toda España para lograr la colaboración de la oposición y la articulación de una alternativa democrática, aunque pronto resultó evidente que la situación catalana, con un amplio antifranquismo social y cultural, y una particular fortaleza del PSUC, era notablemente distinta a la del resto de España. En todo caso, en diversos lugares se formaron Mesas, Coordinadoras y Comisiones locales democráticas venciendo notables obstáculos, que se revelaron casi insuperables en otros, como en el País Vasco, y especialmente en Madrid. En la

capital de España, representantes del partido mantenían contactos con miembros de otros grupos y con personalidades disidentes, pero la mayoría rechazaba formar parte de una agrupación de fuerzas con la presencia del PCE. Además, la dirección comunista buscaba interlocutores en una más ansiada que real «derecha democrática», apenas existente políticamente y nada propensa a relacionarse con el PCE. Por ello, incluso donde se iniciaron experiencias unitarias, el partido consideró necesario evitar un excesivo protagonismo que pudiera restar apoyos a sus iniciativas y propuestas políticas[84].

A principios de 1974, el programa de «apertura» política presentado al inicio de la actuación del Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro no dejaba de ser una expresión clara de la crisis de la dictadura. Las reacciones de los sectores más inmovilistas ante el peligro de «desnaturalización» del régimen, las divergencias internas en el propio Gobierno y en otras instituciones, el gran impacto de la «revolución de los claveles» en Portugal, la elevada conflictividad social, y además la tromboflebitis sufrida por Franco, que le obligó a ceder temporalmente los poderes de jefe del Estado al príncipe Juan Carlos, incrementaron la imagen de crisis del régimen y estimularon las expectativas de la oposición. En este contexto fue anunciada la formación de la Junta Democrática de España.

En efecto, el 29 de julio de 1974 la Junta se presentó simultáneamente en Madrid y en París; en la capital francesa por Santiago Carrillo y el monárquico Rafael Calvo Serer. Se incorporaron a la Junta, junto al PCE y a CCOO, el PSP dirigido por Enrique Tierno Galván, el Partido del Trabajo de España, la Alianza Socialista de Andalucía, el Partido Carlista, de Carlos Hugo de Borbón-Parma, y el Partido Socialista de Aragón. Y junto a los grupos políticos y a CCOO, colectivos profesionales, como Justicia Democrática, e independientes de dispares ideologías, como Calvo Serer, Antonio García Trevijano, o José Vidal Beneyto. Sin duda la Junta reunió a buena parte del antifranquismo más activo, pero quedaron fuera grupos políticos que, si bien eran muy débiles orgánicamente y tenían una escasa presencia en los movimientos sociales, podían representar a sectores extensos de la sociedad en condiciones de libertad, empezando por el PSOE, los grupos demócrata-cristianos y el PNV. Pese a ello, la creación de la Junta Democrática logró un notable impacto, interior e internacionalmente y, además, empujó a quienes quedaron fuera a una mayor actividad. Casi un año después formarían la Plataforma de Convergencia Democrática.

El manifiesto fundacional de la Junta formulaba un programa de doce puntos que expresaba fielmente la posición del PCE para lograr el final de la dictadura: propugnaba la formación de un gobierno provisional para restablecer «todas las libertades, los derechos y los deberes democráticos», la promulgación de una «amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales», así como la legalización de todos los partidos políticos «sin exclusiones». Se especificaba el reconocimiento de la libertad sindical, de la libertad de prensa, y de los derechos de reunión, manifestación y de huelga, y «la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical». También se propugnaba la «independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial», la neutralidad política de las fuerzas armadas, la separación de la Iglesia y el Estado, el «reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego, y de las comunidades regionales, que lo decidan democráticamente», la celebración de una consulta popular «para elegir la forma definitiva de Estado», y la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Por último, con el mismo voluntarismo que el partido, el documento se dirigía a los militares, apelando al patriotismo, y a la jerarquía católica y al espíritu conciliar, para facilitar el cambio democrático, y llamaba «al pueblo español» a formar Juntas Democráticas regionales, provinciales y locales, y a estar atento a «la convocatoria de acción democrática nacional que lanzará la Junta Democrática de España en el momento político oportuno, convencida, como está, de que al pueblo español la libertad no le será regalada y tendrá que ser por él conquistada»[85].

La extensión de la Junta Democrática por toda España fue tarea prioritaria de los militantes comunistas en los meses siguientes, considerando que se trataba de un paso fundamental en la lucha por la democracia. La formación de Juntas Democráticas dinamizó el activismo opositor en todos los ámbitos; además, la Junta realizó una notable actividad internacional, con más de cincuenta presentaciones, entrevistas y reuniones con representantes de instituciones y organizaciones políticas y sociales en Europa y en América[86]. Sin embargo, la creación de la Junta, anunciada por sorpresa, sin apenas información previa a las organizaciones del PCE y sin tener en cuenta los avances unitarios realizados en Mesas Democráticas, como en Asturias y Baleares, causó también algunas tensiones en el partido. La aceleración de la dinámica política comportó que Santiago Carrillo acentuara la toma rápida de decisiones sin apenas debate, lo que generó tensiones y malestar que cobrarían mayor intensidad en el futuro

inmediato.

El 1 de abril de 1975, coincidiendo con la conmemoración franquista del «Día de la Victoria», la Junta Democrática presentó el Manifiesto de la Reconciliación, que, por una parte, llamaba a la incorporación a las filas antifranquistas de los partidarios de la democracia hasta entonces inhibidos de las cuestiones públicas «por la inercia defensiva frente a un régimen represivo, por el efecto adormecedor de la demagogia oficial, que proclama la evolución del sistema hacia la democracia, y por la ausencia de incitaciones originales y eficaces por parte de la oposición»; por otra, explicaba la significación de la «ruptura democrática» propugnada: no se trataba de una revolución violenta, sino del desmantelamiento pacífico de la legalidad y de las instituciones franquistas y la creación de un nuevo ordenamiento democrático[87].

El informe de Santiago Carrillo a la Segunda Conferencia del PCE, celebrada en septiembre de 1975, destacaba la existencia de Juntas Democráticas por todo el país y consideraba «una tarea capital nuestra, junto con todas las fuerzas convergentes y sin ningún afán de exclusividad, la extensión y ampliación de las Juntas Democráticas y la elevación de su capacidad para movilizar en acciones sucesivas, hasta llegar a la gran acción democrática nacional, a los más amplios sectores sociales». El PCE se había unido a otros grupos y personas para «acabar con la dictadura y crear un marco constitucional democrático, tras lo que el compromiso adquirido quedará cumplido y cada cual en libertad para orientarse según su particular significación»[88].

Pocos meses antes de la celebración de la Segunda Conferencia se había formado la Plataforma de Convergencia Democrática, integrada por el PSOE y la UGT, Izquierda Democrática –el grupo democratacristiano encabezado por Joaquín Ruiz-Giménez–, Unión Social Demócrata Española, dirigida por Dionisio Ridruejo, el Consejo Consultivo Vasco, ORT, MCE, el Partido Carlista –tras abandonar la Junta Democrática– y diversos grupos regionales. En su informe a la Conferencia, Carrillo criticó la actitud de dichos grupos por su negativa a formar parte de la Junta y sus reiteradas negativas anteriores «a la formación de una alternativa democrática común». Remarcaba que el programa de la plataforma «no difiere en mucho del de la Junta Democrática», aunque, si bien era claro sobre qué debería hacerse después de la desaparición de la dictadura, era «deliberadamente ambiguo sobre los medios para ponerle fin», es decir, sobre la acción política que desarrollar para lograr acabar con el régimen. A pesar de ello, la Junta Democrática se esforzaría «para llegar a la creación de

un único organismo en el que se integren y fundan los ya existentes»[89].

Cuando se celebró la Conferencia comunista, el naufragio del «aperturismo» gubernamental era inapelable. Además, la confluencia de una elevada conflictividad social, de la mayor capacidad de acción de la oposición y de los atentados de ETA y del FRAP dieron lugar a un extraordinario endurecimiento de la represión. El 27 de agosto, el Gobierno aprobó un decreto-ley presentado como instrumento necesario para combatir al terrorismo, pero que en realidad iba dirigido al conjunto de la oposición y especialmente contra la más activa. Así, se incluían en el decreto-ley las organizaciones declaradas ilegales en normas de 1936 y 1939, ya que sus ideologías propugnaban «la violencia y el terrorismo como instrumentos de acción política», incluyendo a partidos como el PSOE, Izquierda Republicana, el PNV, ERC, UDC (Unió Democràtica de Catalunya), además, obviamente, del PCE y del PSUC. Quedaban, por tanto, catalogados como terroristas desde comunistas, libertarios y socialistas a nacionalistas subestatales y democratacristianos, que llevaban a cabo todos ellos una acción pacífica de oposición a la dictadura[90]. Entre las medidas aprobadas destaca el endurecimiento de las penas y la aplicación por los tribunales de las penas establecidas en el Código Penal en su grado máximo, la restricción en la actuación de los abogados defensores y la imposición de un «estado de excepción» que permitiría desde prolongar el tiempo de detención previo a la presentación a la autoridad judicial y los registros domiciliarios sin mandamiento judicial, hasta las sanciones a medios de comunicación que criticaran el decreto-ley o que defendieran ideologías y acciones proscritas.

Detenciones, procesamientos y condenas se sucedieron en las semanas siguientes. El 27 de septiembre fueron fusilados tres militantes del FRAP y dos de ETA, desoyendo todas las peticiones de clemencia, incluidas las del papa Pablo VI, y desencadenando una ola de protestas que incluyó la llamada a consultas de los embajadores de 15 países, entre ellos los de Francia, Italia, República Federal Alemana, Gran Bretaña, y Canadá. El franquismo tuvo que llamar a la movilización de los «adictos» al régimen para mostrar, como en diciembre de 1946, el rechazo a las condenas y el apoyo popular al dictador y al régimen. El 1 de octubre, conmemoración del Día del Caudillo, Franco hizo su última aparición pública y se dirigió a la multitud concentrada en la Plaza de Oriente. Pocos días después en el Consejo Nacional del Movimiento se producía un inequívoco «cierre de filas» de toda la clase política franquista. Quienes defienden un relato de la Transición que prescinde de la crisis de la dictadura y del papel de los diversos actores políticos y sociales ignoran deliberadamente el

escenario del verano-otoño de 1975.

Ante tales acontecimientos, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática acordaron un comunicado conjunto que denunciaba la «ilusión aperturista» y reafirmaba el objetivo compartido de lograr «una verdadera ruptura con el Régimen y con su continuidad sucesoria» para conseguir el establecimiento de una democracia plena[91]. Por otra parte, ambas entidades se comprometían a trabajar para lograr la unidad de toda la oposición democrática, lo que se materializaría en marzo de 1976 con la formación de Coordinación Democrática. Para Santiago Carrillo el documento tenía una «importancia histórica» y fortalecía la alternativa democrática[92].

DEMOCRACIA Y SOCIALISMO

En la Segunda Conferencia del PCE, en septiembre de 1975, se aprobó el Manifiesto Programa del partido. Era la culminación de un proceso largo de elaboración del proyecto del PCE para alcanzar la democracia y para transitar hacia un modelo de socialismo distinto del soviético, a través de un camino propio, de una vía nacional y democrática al socialismo. El VIII Congreso había aprobado que el socialismo que el PCE propugnaba sería «una ampliación radical de la democracia y de los derechos del hombre», no «su disminución y menos […] su supresión»; sería un socialismo «pluripartidista, con libertades políticas, con libertad de creación, con una confrontación ideológica abierta»[93]. Las formulaciones más novedosas eran acompañadas de las más tradicionales: «El socialismo significa la posesión del Poder por los trabajadores y la socialización de los medios de producción y de cambio; la supresión de la clase explotadora y, por consecuencia, la desaparición de clases explotadas». Al socialismo no podía llegarse sin revolución, y la revolución era «un acto de violencia, independientemente del grado y de las formas que esta tome», porque «sin la imposición y la coerción es imposible desposeer a las clases dominantes y socializar la propiedad de los medios fundamentales de producción y de cambio. Ninguna clase dominante abandona sus posiciones sin resistencia». El PCE continuaba defendiendo la «dictadura del proletariado», pero por coherencia con su defensa de la democracia y también por el creciente desprestigio del «socialismo real», afirmaba que, en tal formulación, «la noción

de dictadura […] no puede identificarse con la noción vulgar de dictadura, considerada como el poder totalitario de una minoría imponiendo por la fuerza del aparato del Estado su arbitrariedad a la mayoría de la población». Además, las formas de socialismo «no son modelos que tengan que repetirse necesariamente en países más desarrollados y en las condiciones históricas modernas, cuando el socialismo es ya una gran fuerza mundial –gracias al octubre ruso y a otras revoluciones– y en su rica experiencia existen enseñanzas positivas y negativas de que aprender»[94].

Entre 1972 y 1975 avanzaron notablemente las formulaciones del PCE respecto a la vía al socialismo y al socialismo futuro. Ello se vio favorecido por la intensificación de los contactos y de la colaboración con el PCI, y en menor medida con el PCF, así como por el escenario europeo post 68, con partidos socialistas, en particular el francés, críticos con la socialdemocracia y abiertos a la colaboración con los comunistas. En estos años, se desarrolló lo que, posteriormente, sería denominado «eurocomunismo». La coincidencia de posiciones entre PCE-PCI tuvo una destacada plasmación en la «Declaración de Livorno» suscrita por ambos partidos en julio de 1975. La declaración sostenía que «el socialismo puede afirmarse solamente, en nuestros países, a través del desarrollo y de la plena actividad democrática», explicitando los fundamentos esenciales de un sistema democrático: «La afirmación de las libertades personales y colectivas y de su garantía, la no oficialización de una ideología de Estado, de su articulación democrática, de la pluralidad de partidos en una dialéctica libre, de la autonomía del sindicato, de las libertades religiosas, de la libertad de expresión, de la cultura, del arte y de las ciencias»[95]. Por tanto, ni partido único, ni ideología oficial de Estado, ni ausencia de libertades políticas. Meses después, el PCE y el PCF firmaron una declaración con un contenido similar. Ratificando tales posiciones, el Manifiesto Programa reafirmaba que «las libertades democráticas y el respeto a la voluntad popular, expresada a través del sufragio universal, son consustanciales con el avance del socialismo y con la naturaleza de este»[96]. También reiteraba la voluntad de colaboración con socialistas y socialdemócratas y con el catolicismo progresista.

La dureza de la situación política española en el verano de 1975 contrastaba con las realidades y las expectativas de la izquierda en Europa y con acontecimientos de gran impacto, como la derrota de los EEUU en Vietnam o la nueva ola descolonizadora tras la revolución de los claveles portuguesa. Todo ello reforzó el optimismo histórico característico de la dirección del PCE, bien reflejado en el Manifiesto Programa, aunque también el fracaso de la experiencia chilena –

analizado especialmente por el PCI– tuvo una notable influencia en las posiciones de los comunistas españoles, especialmente en la convicción de que el avance hacia el socialismo solamente podría llevarse a cabo con el apoyo activo de amplias mayorías sociales.

Y, junto al optimismo de las expectativas de transformaciones, el catastrofismo en relación al futuro del capitalismo, aunque con apreciaciones notablemente ajustadas y hasta anticipatorias respecto, por ejemplo, a «la explotación rapaz que los monopolios llevan a cabo de los recursos naturales, patrimonio colectivo de las generaciones presentes y futuras», que «está poniendo en peligro hasta las bases mismas de la vida», conduciendo a «una contaminación creciente de la atmósfera, de los ríos y de los mares, al deterioro global del medio humano». Contaminación y degradación del medio ambiente «en las grandes ciudades que adquieren proporciones desmesuradas como consecuencia del desarrollo anárquico del capitalismo», y donde aparece una «nueva miseria urbana» de los trabajadores, «que además de ser explotados como productores, son oprimidos con altos precios y pésimas condiciones de vivienda…», en tanto las «zonas más pobres se despueblan y se empobrecen aún más». Todo ello revelaba que se estaba entrando «en una fase decisiva de la batalla mundial por el socialismo: la fase de la lucha concreta por la transformación socialista en los países capitalistas desarrollados»[97].

El Manifiesto Programa aprobado contenía la crítica más severa realizada hasta entonces respecto al «socialismo real», si bien señalando que sus errores tenían su origen, «en buena medida», en «su atrasado punto de partida y en la tremenda presión del imperialismo de los países capitalistas más poderosos, así como en la persistencia, la inercia, de ideas y tradiciones de sociedades anteriores». Pero, además, en determinados casos de construcción del socialismo se produjeron «deformaciones» tales como «la tendencia a la fusión de partido y Estado, al autoritarismo, al burocratismo y a la solución de los problemas por arriba, reduciendo la democracia». Por todo ello, si bien el papel de los Estados socialistas había sido y seguía siendo decisivo para «el advenimiento futuro de una nueva civilización mundial de contenido socialista», tales revoluciones no podían ser tomadas «como modelo universal». Se añadía, además, que «ninguno de los maestros del marxismo ha teorizado la idea del partido único, ni siquiera la idea de un Partido Comunista privilegiado por ley ante los otros partidos», y tampoco la «consagración del marxismo como filosofía oficial del Estado, ni la sujeción de la cultura y el arte a cánones administrativos, ni el monopolio de la información por el Estado. Ni la existencia de un solo modelo de

socialismo»[98]. Por todo lo anterior, el PCE proponía una «vía española al socialismo» y, a la vez, un modelo de socialismo que sería diferente al conocido hasta entonces.

Al mismo tiempo, el PCE consideraba que se debían establecer «nuevas formas de internacionalismo proletario», porque ya no podían ser las mismas que en tiempos de la Internacional Comunista, de hecho un partido internacional, y no podían estar determinadas por «las necesidades de la defensa de un país socialista, como sucedía cuando la Unión Soviética era el único que existía con ese régimen social», estando ya los regímenes socialistas extendidos por todo el mundo. Por ello propugnaba nuevas formas de internacionalismo basadas en la igualdad y el respeto a la diversidad de posiciones y de modelos de socialismo[99].

De hecho, el PCE había iniciado ya la afirmación de su independencia respecto al PCUS en 1968, con motivo de la intervención en Checoslovaquia del Pacto de Varsovia para poner fin a la «primavera de Praga». La dirección comunista, aunque una minoría de dirigentes discrepó, decidió tomar una posición clara de rechazo, tanto por la violación de la soberanía de un Estado socialista como por la destrucción de la experiencia de socialismo de «rostro humano»[100], vista con simpatía por el PCE por la proximidad a muchos de sus planteamientos[101]. La militancia del partido, aunque no sin tensiones iniciales, apoyó la decisión de «desaprobar» la invasión, aunque para muchos militantes, especialmente los más veteranos, fue una decisión muy dolorosa. Para la dirección del PCUS, la posición del PCE era intolerable, y lo hizo notar mediante una doble actuación. Por una parte, apoyando a los disidentes que, encabezados por Eduardo García y Agustín Gómez, acabarían expulsados del partido y encabezando un grupúsculo, el PCE-VIII Congreso, y posteriormente a Enrique Líster, que con otros militantes «prosoviéticos» formarían el PCOE. Por otra parte, ejerciendo una continuada presión sobre la dirección encabezada por Carrillo, combinada con propuestas de reconciliación. En la Conferencia de Partidos Comunistas celebrada en junio de 1969 en Moscú, el PCE reafirmó su posición pese a las presiones soviéticas, lo que implicaba la manifestación abierta de importantes divergencias con el PCUS y los partidos que seguían fielmente sus posiciones, y, en cambio, la mayor aproximación entre los partidos italiano y español. Aunque con estilos distintos, Santiago Carrillo y Enrico Berlinguer defendieron una nueva relación en el seno del movimiento comunista internacional.

A partir de este momento nada sería igual en la relación entre el PCE y el PCUS. La dirección soviética miraría con creciente hostilidad las actitudes y posiciones de la dirección del PCE, en especial las expresadas por Santiago Carrillo y Manuel Azcárate, el responsable de las relaciones internacionales del partido. De cara a la política española, la imagen de independencia del PCE servía tanto de desmentido de la habitual propaganda anticomunista del franquismo, presentando a los comunistas como agentes de Moscú, como de atractivo para quienes se acercaban al PCE como principal instrumento de lucha contra la dictadura, pero que eran críticos con el régimen soviético, especialmente en sectores intelectuales y profesionales. La reflexión de Manuel Sacristán sobre los acontecimientos de Checoslovaquia es particularmente significativa; en carta a Xavier Folch sostenía que era «lo más grave ocurrido en muchos años, tanto por su significado hacia el futuro por cuanto lo que tiene respecto de cosas pasadas»; en suma, «me parece final de acto, si no ya final de tragedia»[102]. Aunque tal conclusión podía ser compartida por una parte de la dirección del PCE, llegar a sus últimas consecuencias era imposible cuando en una parte notable de la militancia la identificación de la URSS con la revolución y los vínculos sentimentales con la «patria del socialismo» seguían muy vivos.

En todo caso, la militancia comunista compartía muy mayoritariamente el proyecto plasmado en el Manifiesto Programa, que profundizaba en la formulación de la vía al socialismo propugnada, lo que se denominó «eurocomunismo», y que implicaba, como sintetizó Antonio Elorza, una vía democrática al socialismo que fundiera la voluntad de transformación heredada de la Revolución de Octubre y el respeto a las libertades propio de la socialdemocracia, ello en un contexto marcado por la confianza aún no quebrada en el mantenimiento del crecimiento económico[103]. Como había expresado el propio Berlinguer, se trataba de una opción distinta, pero no antagónica a la socialdemócrata[104].

Si el socialismo propugnado debía tener unas características distintas al de matriz soviética, con el pleno respeto a las libertades, el camino al socialismo debía realizarse a través de la democracia. El tiempo de las revoluciones hechas por pequeñas minorías había pasado ya; «hoy la revolución sólo puede triunfar con el apoyo y la participación de las grandes masas populares»[105]. Por otra parte, el Manifiesto Programa incluía modificaciones de formulaciones anteriores, incluidas las del VIII Congreso. Así, se afirmaba que no se podía descartar «que la vía democrática al socialismo pueda conocer momentos de violencia», pero solo «en defensa del derecho de la mayoría, en defensa del

sistema plural de libres contrastes, del derecho del pueblo de extender la democracia política al terreno social, del derecho a edificar libremente una sociedad sin explotadores ni explotados». También el concepto «dictadura del proletariado» era matizado nuevamente; así, a la significación dada de «la más amplia y completa democracia para el pueblo» se añadía que, para que sea así «es fundamental edificar el sistema socialista sobre bases y en formas […] que conquisten el más amplio asentamiento social y se basen en la participación y responsabilización directa en ellas de la mayor parte del pueblo»[106].

El Manifiesto Programa exponía las bases de la vía al socialismo propugnada, cuando la crisis económica había entrado en escena en 1973 con fuerza –aunque no era todavía previsible ni su intensidad, ni su duración y consecuencias–, lo que demostraba «la caducidad del capitalismo, su incapacidad para dar respuesta a las necesidades del desarrollo económico, para utilizar racionalmente las nuevas fuerzas productivas de que dispone la humanidad». Si, por una parte, «el socialismo solo podrá triunfar y consolidarse en esta zona de Europa a través del desarrollo pleno de la democracia», por otra, en los países capitalistas desarrollados se daban las condiciones necesarias para el socialismo: «En el terreno económico, los países capitalistas desarrollados están maduros para pasar al socialismo», lo que además comportaría «formas de socialismo más desarrolladas» que ayudarían a todo el socialismo a elevarse a un nivel más alto, más evolucionado»[107].

También se detallaron los objetivos de la democracia política y social propugnada por el partido cuando se lograran las libertades. Por una parte, algunos coincidían con las características de las democracias europeas con un robusto «Estado del bienestar», aunque no se utilizaba en ningún momento esa expresión. Por otra, se preconizaban una serie de medidas que debían comportar cambios profundos en la estructura socioeconómica del país, en algunos puntos concordantes con las de la «democracia avanzada» propuesta por el PCF o incluso por el Programa Común de la izquierda francesa. Entre ellas, la nacionalización de la banca, las compañías de seguros y las «grandes empresas monopolistas», la «transformación democrática de la agricultura» mediante la supresión de la propiedad latifundista y «la entrega de las tierras a quienes las trabajan para explotarlas individual y colectivamente conforme a la voluntad libremente expresada por ellos mismos»; así como la eliminación de la separación entre la propiedad de la tierra y el cultivo de la misma, suprimiendo el arrendamiento, la aparcería y el colonato y fomentando el cooperativismo. La democracia política y social implicaría la planificación democrática, combinando

«la centralización indispensable para la realización de los objetivos globales del desarrollo económico, con una amplia regionalización económica». Todo lo anterior comportaría que el desarrollo económico descansaría en el sector público de la economía, con intervención de los trabajadores mediante «comisiones elegidas democráticamente por sus trabajadores», que también existirían en las empresas privadas[108].

La democracia política y social tenía el objetivo fundamental de mejorar «las condiciones de vida de los trabajadores», así como acabar con todas las formas de discriminación, en particular de las «que es víctima la mujer en nuestra sociedad». La democracia política y social sería alcanzable mediante una alianza de clases de carácter antimonopolista articulada en torno a la clase obrera, incluyendo a «capas medias y sectores burgueses», pero con «la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura» como motor.

El Manifiesto Programa ratificó también el giro efectuado por el PCE en relación a la Comunidad Económica Europea en el VIII Congreso. Se mantenía el rechazo a la «Europa de los monopolios», a la que se contraponía la «Europa de los pueblos», pero se optaba por su transformación democrática, desde dentro, para lograr «una Europa que dé una aportación propia original a la causa de la paz; que supere la división del continente en bloques militares y suprima las bases y la existencia de tropas extranjeras»; una Europa «capaz de desarrollar relaciones de cooperación, en un plano de igualdad, tanto con la URSS como con Estados Unidos y dar un apoyo efectivo a la lucha de los pueblos del Tercer Mundo»[109].

HACIA EL PARTIDO DE MASAS

La Segunda Conferencia dedicó también una notable atención al partido. Durante la primera mitad de los años setenta, el PCE continuó creciendo de forma muy notable. La presencia de militantes comunistas en todos los movimientos sociales y en todos los ámbitos susceptibles de llevar a cabo una acción antifranquista generó un circuito virtuoso que alimentó el incremento de la militancia en el partido, un crecimiento que comportó, además, un continuado rejuvenecimiento. Trabajadores jóvenes, estudiantes, profesionales e

intelectuales alimentaron el partido, en el que empezaron a convivir militantes con orígenes sociales, formación, ocupaciones y costumbres de notable diversidad. En la reunión del Comité Central ampliado, celebrada en septiembre de 1970, se habían incorporado al máximo órgano de dirección casi una treintena de militantes del interior, todos relativamente jóvenes; algunos también se incorporaron al Comité Ejecutivo. Los cambios que estaba experimentando la militancia llevaron a Santiago Carrillo a aludir en dicha reunión a la necesidad de armonizar a la militancia más veterana y la más joven, sobre todo por las diferencias de mentalidad entre ambas. Para los «veteranos», según el secretario general, los referentes políticos y simbólicos eran la revolución de octubre y la guerra del 36, en tanto que para los jóvenes lo era la lucha antifranquista[110].

Quizás porque el VIII Congreso profundizó en la renovación y el rejuvenecimiento de la dirección comunista, en los debates apareció la cuestión de la democracia interna, nuevamente presente en la reunión del Comité Ejecutivo en febrero de 1973 y en el Manifiesto Programa de 1975. En este se afirmaba que en las condiciones en que había actuado y actuaba el partido se daba «una marcada acentuación del centralismo y una reducción obligada de la democracia», una «subordinación severa de los organismos inferiores a los superiores» y un «predominio de los métodos de cooptación sobre los de elección». Todo ello era indispensable para asegurar la organización y la actuación del partido en las condiciones de clandestinidad y de severa represión. Además, era necesaria la vigilancia ante el peligro de «penetración del enemigo», que intentaba «introducir sus agentes en nuestras filas» o «reclutar a militantes débiles y vacilantes». También era necesaria una decidida acción contra toda actividad fraccional. Gracias a todo ello, el PCE había sido durante la guerra civil «la organización política más eficaz», y contra la dictadura la primera fuerza de la oposición. En un futuro, que se veía cada día más cercano, habría que abrir «una profunda discusión en nuestras filas sobre el funcionamiento y las características del partido proletario de nuevo tipo en las condiciones de la legalidad democrática». Entonces, un congreso con un amplio debate previo y la elección democrática de los delegados debería «decidir sobre los métodos y las formas organizativas que corresponden al partido de masas que ya estamos forjando…»[111].

Ningún militante cuestionaba las restricciones a la democracia interna impuestas por la clandestinidad, pero el estilo de dirección de Santiago Carrillo había causado en distintos momentos malestar en diversos sectores del partido, algo que se incrementaría y se manifestaría abiertamente en los años siguientes. Al

margen del estilo personal, el procedimiento de los órganos de dirección comunistas tenía un notable potencial conflictivo si aparecían discrepancias. Las reuniones empezaban con la presentación de un informe por el secretario general, que era seguido de las intervenciones de los miembros del Comité Central, o del Ejecutivo. Cuando estas finalizaban, el secretario general hacía un resumen en el que incorporaba las aportaciones de los intervinientes, pero que, en la práctica, le otorgaba la última palabra y le permitía prescindir de las opiniones discrepantes con su posición. Expresar desacuerdos después del resumen podía generar una situación de tensión y podía llevar al conflicto. El mismo mecanismo operaba en los órganos inferiores.

Por otra parte, en el Manifiesto Programa se destacaba la lucha del partido contra el sectarismo y el dogmatismo, lo que había facilitado la incorporación de militantes de procedencias y de experiencias diversas, incluyendo a cristianos que compartían el objetivo del socialismo. La entrada en el partido de exmilitantes de ETA o la incorporación colectiva de los miembros del grupo Bandera Roja se presentaban como buenos ejemplos de la apertura del partido, y también de su creciente atractivo. Con todo, aún era necesario superar definitivamente «los restos de rigideces y dogmatismos que nos vienen del pasado de nuestro movimiento»; había que superar «los tiempos en que el comunismo era una especie de Iglesia con sus “dioses” y sus “dogmas”, una especie de “secta” cerrada, depositaria de “verdades estáticas e indiscutibles”»[112].

Merece una particular atención el ingreso de Bandera Roja y la militancia de cristianos en el partido. Después de un proceso de reflexión sobre la situación política y las perspectivas en el futuro inmediato, BR llegó a la conclusión de que «el PCE-PSUC es hoy la organización más representativa del MOP [Movimiento Obrero y Popular], la que desempeña el papel más general en el movimiento democrático, la que puede tener una presencia más eficaz en la escena política». En consecuencia, no era posible «desarrollar una política obrera democrática y distinta a la del PCE-PSUC», por lo que la mejor opción era la integración[113]. La decisión de BR comportó la incorporación al PCE, y especialmente al PSUC –dado el mayor peso de la organización en Cataluña–, de un número importante de activistas y de cuadros, con una notable presencia en determinados ámbitos, como la enseñanza y el movimiento vecinal. Además, se incorporaban al partido «cristianos» que habían formado el colectivo «cristianos por el socialismo».

A principios de 1975, el Comité Ejecutivo había aprobado la declaración «Militancia de los cristianos en el Partido», en la que afirmaba «el encuentro entre fuerzas que tienen su raíz en el primer movimiento igualitario […] y el socialismo científico moderno», lo que constituía un hecho de «importancia histórica, que viene a reforzar el frente de la lucha de clases y a abrir perspectivas más claras de victoria de los oprimidos»[114]. En la Segunda Conferencia, Alfonso Carlos Comín sintetizaba los orígenes de dicha convergencia, cuando comunistas y cristianos se habían encontrado «en huelgas, en manifestaciones, en las cárceles, en las diversas instancias de lucha»; en ese marco muchos cristianos habían optado claramente por el socialismo y por militar en el partido. Este, por su parte, estaba claramente comprometido en la superación de dogmatismos y sectarismos y en la construcción de un gran partido de masas, lo que permitiría la «movilización de energías que históricamente han estado marginadas en la construcción del socialismo[115].

El PCE se definió también en la Segunda Conferencia como un partido feminista, el «Partido de la Liberación de la Mujer». El establecimiento de una democracia en España exigiría, como una cuestión esencial, la supresión de todas las disposiciones legales que discriminaban a las mujeres. Pero exigía mucho más en múltiples direcciones; empezando por la educación, donde debía ponerse fin a un modelo que reproducía como «normal» la «superioridad del hombre» y que creaba un «sentido común» al respecto, compartido incluso por muchas mujeres. En una futura democracia, el PCE defendería cambios profundos para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres, si bien solo con el socialismo se destruirían «muchas de las estructuras que determinan la discriminación de la mujer», aunque se apuntaba también que «la experiencia demuestra que no existe un automatismo entre las conquistas de la libertad y del socialismo y la plena liberación de la mujer»[116]. Además, no faltaba la autocrítica: «Somos conscientes de que, en nuestras propias filas, la discriminación de la mujer es una realidad; y de que aún muchos comunistas tienen ideas reaccionarias sobre el problema femenino», por lo que era necesaria una «verdadera revolución de las mentalidades». Pero también acciones concretas inmediatas, como una política de cuadros dirigida a promover en las estructuras del partido a mujeres. El documento aprobado por la Segunda Conferencia propuso también la celebración de una conferencia «que trate específicamente y con profundidad toda la amplia problemática que plantea el movimiento de liberación de la mujer»[117].

La cuestión era suficientemente compleja y conflictiva. En el PCE se abría paso

la voluntad de dejar de abordar la cuestión de la «liberación de la mujer» como «un tema marginal, más o menos curioso, muy específico, pero que no está en el centro de la problemática social y política»; si bien, en la práctica, solo eran casi exclusivamente las militantes activas en el Movimiento Democrático de Mujeres las que proponían convertir la liberación de la mujer en «un problema del movimiento de masas y a convertirse realmente en un movimiento de masas»[118].

EL PCE Y LOS OTROS COMUNISTAS

En la primera mitad de la década de los años setenta, el PCE vio crecer un conjunto de grupos que se definían como comunistas[119], que rechazaban frontalmente su política y que dedicaban una parte no menospreciable de su actividad a denunciar el «revisionismo», o incluso la «traición», de lo que muchos denominaban el «carrillismo». Algunos de estos grupos tenían su origen en el propio PCE o en el PSUC; otros en el Frente de Liberación Popular (FLP), en sectores católicos radicalizados y también en ETA. Del PCE procedía el PCE(m-l), la escisión «prochina» de 1964, que en 1973 crearía el FRAP y llevaría a cabo algunas acciones violentas. También procedían del PCE / PSUC Bandera Roja (BR) y el PCE(i), rebautizado en 1974 como Partido del Trabajo de España (PTE). Buena parte de BR volvió al PSUC y al PCE en 1974, en tanto que otros militantes continuaron en la Organización Comunista de España-Bandera Roja (OCE-BR). La Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) procedía de sectores católicos radicalizados –las Vanguardias Obreras Juveniles y la posterior Acción Sindical de los Trabajadores (AST)[120]–. De ETA procedía el Movimiento Comunista de España (MCE); y de la explosión del FLP el grupo Comunismo, que daría lugar a los grupos de adscripción trotskista, la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la Liga Comunista (LC); la primera, confluyendo con un grupo procedente de ETA, formaría la LCR-ETA (VI)[121]. Añadiendo a los anteriores los grupos con una militancia muy reducida, la frondosidad de la extrema izquierda resultaba extraordinaria.

La mayoría de dichos grupos remarcaban el carácter de clase de la dictadura franquista, rechazaban la «democracia burguesa», propugnaban la lucha antiimperialista y situaban en primer plano el objetivo de la revolución

socialista, necesariamente violenta para destruir el poder de la burguesía. Si el franquismo era la dictadura de la burguesía, el socialismo debía ser el objetivo inmediato, para lo que cada grupo aspiraba a construir el «auténtico» partido comunista que conduciría a la toma del poder por los trabajadores. Sin embargo, los partidos que tuvieron un mayor crecimiento e implantación fueron ajustando sus posiciones a la realidad política española, flexibilizando su esquematismo y dogmatismo, lo que comportó que fueran incorporando planteamientos gradualistas, estableciendo la democracia como primer objetivo por alcanzar.

El PTE se convirtió en el grupo más importante y con una implantación territorial más homogénea en este espacio político y fue desarrollando con el PCE una relación de competencia y colaboración al mismo tiempo[122]. El PTE adoptó, con formulaciones más radicales, lo fundamental de la política del PCE en el seno de las CCOO, así como de su política unitaria, lo que le llevó a formar parte de la Junta Democrática. Los demás grupos tuvieron una implantación territorial muy desigual y, de manera general, una parte de ellos una mayor presencia en el País Vasco y Navarra, especialmente el MCE, la ORT y la LCR-ETA(VI).

Si bien en muchos lugares la presencia de la extrema izquierda fue muy escasa, en determinados ámbitos, empresas y territorios los militantes del PCE tuvieron que batallar con los activistas de estos grupos, habitualmente posicionados en contra de las opciones y propuestas del partido, aunque también en muchas ocasiones el limitado margen para la acción, determinado por las condiciones existentes, comportaba que se actuara de forma muy similar. Más allá del debate de naturaleza doctrinal, las diferencias concretas más importantes se manifestaron en torno a la participación en las elecciones sindicales, rechazada por una parte de los grupos izquierdistas, en particular los trotskistas, aunque no por otros, así como en la política de alianzas «interclasista» del PCE y su propuesta de «pacto para la libertad». Pero hay que señalar también que no fue infrecuente que algunos de los grupos izquierdistas pasaran de oponerse frontalmente a posiciones del PCE a asumirlas, siempre con acentos más o menos críticos. Así, tanto respecto a las elecciones sindicales como en los organismos unitarios hay ejemplos significativos de cambios de posición. Caso singular es el de Bandera Roja, que en poco tiempo pasó de una radical crítica al PCE/PSUC en el documento «Contra el revisionismo», al ingreso colectivo en el partido[123].

Más allá de la relación, y de las discusiones de los militantes del partido con

militantes de la extrema izquierda en espacios compartidos, el PCE combinó dos actitudes. Por una parte, simplemente ignorar a tales grupos. En la prensa clandestina y en los panfletos propagandísticos del PCE, las alusiones a estos grupos políticos eran muy escasas, como si no existieran. Solo en determinadas situaciones se respondían sus constantes críticas, algunas muy furibundas. Por otra, en los documentos de los órganos de dirección de carácter analítico sí que aparecían referencias, habitualmente señalando sus posiciones como expresión de un izquierdismo sinónimo de la «enfermedad infantil del comunismo», incluso a veces con un cierto tono paternalista.

Así, en el Informe presentado por Santiago Carrillo al VIII Congreso, se dedicaba una cierta atención a las críticas desde la extrema izquierda. Dichas críticas, afirmó Carrillo, «acusan a nuestro Partido de «abandonar» la lucha por el socialismo, de reemplazar este objetivo por el de la democracia burguesa, de ponerse así «a la cola de la burguesía», incapaces de «distinguir las diferencias de una táctica revolucionaria de clase, en las condiciones de una dictadura fascista y en las de una democracia burguesa». Los grupos izquierdistas, añadió, «como todos los novicios en la lucha revolucionaria, experimentan ante todo la necesidad de diferenciarse, de distinguirse de los demás grupos de oposición, de afirmar radicalmente su personalidad socialista». No era la situación del PCE. «Nuestra personalidad de Partido revolucionario la hemos afirmado en cincuenta y dos años de lucha por el Comunismo, en muchos combates con las armas en la mano y en la clandestinidad». Por otra parte, «errores "izquierdistas" ya los cometimos nosotros en un tiempo, cuando las masas se alzaban por la República y nos quedamos solos preconizando los Sóviets; es decir, cuando aún no sabíamos ligar la lucha por el Socialismo con la lucha popular por la democracia». Aludiendo al rechazo a la propuesta de «pacto para la libertad», se reafirmaba que, «por mucho que gesticulen y nos insulten ciertos "izquierdistas", por grande que sea su consumo de la frase revolucionaria, y aunque no pongamos en duda su buena fe subjetiva, tenemos que decirles que se encuentran aún en la fase del revolucionarismo pequeñoburgués que Lenin y los auténticos revolucionarios marxistas han fustigado siempre»[124].

En el Informe a la Segunda Conferencia del PCE, la ORT y el MCE eran objeto de particular crítica, al señalar la contradicción que suponía integrarse en la Plataforma de Convergencia Democrática, junto al PSOE y a grupos muy moderados y sin actividad efectiva, habiendo rechazado integrarse en la Junta Democrática, que agrupaba al antifranquismo más activo, lo que sí hizo el PTE. Por otra parte, se repetía la crítica general al izquierdismo, a la reducción del

marxismo y el leninismo «a una serie de fórmulas y esquemas simples, sin tener en cuenta si casan o no con la realidad concreta de la fase en que estamos», señalando que su «obsesión es aparentar como sea que están a nuestra izquierda». Insistiendo en el tono paternalista, se afirmaba que se les debía explicar que «el marxismo exige el análisis concreto de la realidad concreta» y no se debía «renunciar a convencerles»[125]. Meses antes, con motivo del ingreso en el partido de los militantes de Bandera Roja, Carrillo sostuvo que «en este momento en que la crisis del izquierdismo es evidente, como lo es también el éxito de la política de Partido, debemos aprovechar todas las posibilidades para integrar aquellos elementos que en un momento dado, bajo la influencia de la división en el movimiento comunista internacional, del fenómeno del mayo francés e, incluso, de las debilidades en algunos lugares de nuestro trabajo, tomaron actitudes izquierdistas»[126].

* * *

En 1975, el PCE tenía un proyecto político claro a corto, medio y largo plazo: la conquista de las libertades y el establecimiento de una democracia, la democracia política y social y el socialismo. Tenía una organización potente, con una militancia heterogénea presente en todos los espacios y movimientos sociales, en particular en las CCOO, en los movimientos vecinales y en sectores profesionales e intelectuales. Se acercaba, sin embargo, la hora de la verdad sobre el modo en que se produciría el final de la dictadura, cuál sería la configuración del nuevo régimen y qué papel desempeñaría en él la organización política que había sido hasta entonces simplemente «el Partido».

[1] Carme Molinero y Pere Ysàs, «El partido del antifranquismo (1956-1977)», en Manuel Bueno, José Hinojosa, Carmen García (coords.), Primer Congreso de Historia del PCE (1920-1977), vol. II, Oviedo, FIM, 2004, pp. 13-32.

[2] Francisco Erice, «Los condicionamientos del “giro táctico” en 1956: el contexto de la política de Reconciliación Nacional», Papeles de la FIM, 2.a época, 24 (2006).

[3] David Ginard, «Sobre héroes, mártires, tumbas y herejes. Culturas militantes de los comunistas españoles (1939-1962)», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), II Congreso de Historia del PCE, Madrid, FIM, 2009, p. 54. Los datos proceden de Guy Hermet, Los comunistas en España. Estudio de un movimiento político clandestino, París, Ruedo Ibérico, 1972, pp. 100-102.

[4] Informe publicado en Santiago Carrillo, Después de Franco, ¿qué?: la democracia política y social que preconizamos los comunistas, París, Éditions Sociales, 1965, p. 147.

[5] Una síntesis de todo el proceso puede verse en Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa, 1999, pp. 172-175.

[6] Gregorio López Raimundo, Catalunya i la futura democràcia política i social dels pobles d’Espanya (Informe para el II Congreso del PSUC), s/l, Treball, 1965, p. 27.

[7] Fernando Soto, Por el sendero de la izquierda, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996, p. 35.

[8] Entrevista a Ángel Abad, 1998, p. 33. Fondo Biografías Obreras, AHCONC.

[9] Fernando Soto, op. cit., p. 68.

[10] «Comisiones Obreras y Partido Comunista. Informe», febrero de 1967, c. 18820. Presidencia, Secretaría General del Movimiento, AGA. La cursiva es nuestra.

[11] Biografía 24, Entrevista a Juan Moreno, Madrid, septiembre-octubre de 2003. Fundación 1 de Mayo: Biografías obreras y militancia sindical en CCOO, AHT.

[12] Antes de las elecciones sindicales de 1966 las nacientes CCOO dispusieron de infraestructuras básicas para la publicación de una prensa propia con la ayuda del aparato clandestino del PCE. Véase Carlos Gordon, «Prensa clandestina y movimiento obrero en el Franquismo», en José Babiano (coord.), Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clandestina y del exilio, Madrid, Fundación 1.o de Mayo, 2005, p. 271. Los despachos de abogados laboralistas adquirieron particular importancia. Ya en 1965 se creó el primer despacho laboralista en

Madrid; véase M.a Luisa Suárez, «Cruz, 16, primer despacho laboralista», Mundo Obrero, 18 de octubre de 1985. Reproducido en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Primer Congreso, vol. II, p. 645.

[13] «Acta de la reunión de las CCOO de Cataluña», 27 de agosto de 1967, c. 85, Fondo Movimiento Obrero, CONC, AHPCE.

[14] Véase Xavier Domènech, Clase Obrera, antifranquismo y cambio político, Madrid, Catarata, 2008, pp. 276-289.

[15] Emanuele Treglia, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012.

[16] Santiago Carrillo, Algunas experiencias de la jornada del 27 de octubre, s/l, PCE, 1967.

[17] Francisco Fernández Buey, «¿Qué democracia queríamos los comunistas? Recuerdos y reflexiones», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, FIM / Atrapasueños, 2009, p. 400.

[18] Luis Álvarez (Nicolás Sartorius), «Movimiento y organización», Nuestra Bandera 83 (1976), p. 47.

[19] Sergio Rodríguez Tejada, «Partido comunista y movimiento estudiantil durante el franquismo», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Madrid, FIM, 2009, p. 287.

[20] José Luis Martín Ramos, «Del blau al roig: el camí de la revolta», L’Avenç 170 (1993), p. 32.

[21] Francisco Fernández Buey, «Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966)», Hispania Nova 6 (2006), p. 837.

[22] Los militantes de la organización universitaria habían pasado de 117 a 3. Jesús Sánchez, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, FIM, 2009, p. 81.

[23] José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Madrid, Siglo XXI de

España, 2004, pp. 143-157.

[24] Véase, en el volumen II de esta misma obra, Jordi Sancho, «Los estudiantes comunistas y la movilización universitaria durante el franquismo».

[25] Jordi Sancho, «"Nuestro 68 fue el 66". El movimiento estudiantil antifranquista en el marco global de los sesentayochos (Barcelona, 1965-1969)», Historia del Presente 34 (2019), p. 173.

[26] Joan Crexell, La Caputxinada, Barcelona, Edicions 62, 1987, pp. 113-117.

[27] Documentos reproducidos en Josep Maria Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, vol. I, Barcelona, Curial, 1978, pp. 215-229.

[28] F. Fernández Buey, «Memoria personal», p. 840.

[29] Una explicación expresiva de la experiencia que supuso para los estudiantes puede verse en Montserrat Roig, «La capuchinada», Triunfo, 686, 20 de marzo de 1976.

[30] Francisco Fernández Buey, «Memoria personal», pp. 840-841.

[31] «Las elecciones en la Universidad», Mundo Obrero, 18, agosto de 1966.

[32] Sergio Rodríguez Tejada, Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia, vol. II (1965-1975), Valencia, PUV, 2009, pp. 45-47.

[33] J. M. Colomer, Els estudiants de Barcelona, p. 272.

[34] «Carta del Comité Ejecutivo del PCE a las organizaciones comunistas de Estudiantes», Nuestra Bandera 54, abril de 1967.

[35] J. M. Colomer, Els estudiants de Barcelona, p. 294.

[36] «Informe sobre la situación de la Universidad», 26 de febrero de 1968, caja 9.922. Presidencia, Consejo Nacional del Movimiento: Archivo General de la Administración (AGA).

[37] Las posiciones gubernamentales ante la rebelión estudiantil pueden verse en

Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen por su supervivencia (1960-1975), Barcelona, Crítica, 2004, pp. 9-29.

[38] Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España (1939-1985), Barcelona, Planeta, 1986, p. 427.

[39] José Luis Martín Ramos, «Los orígenes de una nueva formación», en José Luis Martín Ramos (coord.), Pan, Trabajo y Libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, Barcelona, El Viejo Topo, 2011, pp. 32-71.

[40] Jordi Solé Tura, Una historia optimista. Memorias, Barcelona, Edicions 62, 1999, pp. 237-242.

[41] Francisco Fernández Buey, «La insólita, aunque breve, experiencia de un sindicato democrático bajo el fascismo (1965-1968)», Materiales 2 (1977), p. 72.

[42] «Por un partido comunista de masas», Nuestra Bandera 54 (1967).

[43] Ibid.

[44] Partido Comunista de España, Un futuro para España: la democracia económica y política, París, Colección Ebro, 1967.

[45] Santiago Carrillo, Nuevos enfoques a problemas de hoy, París, Éditions Sociales, 1967, pp. 91-92. Una nueva edición ampliada se halla en Santiago Carrillo, Después de Franco, ¿qué?: nuevos enfoques a problemas de hoy, más problemas actuales del socialismo, México, Fondo de Cultura Popular, 1969.

[46] José Gómez Alén y Rubén Vega (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, Madrid, Ediciones GPS, 2010, 2 vols. Claudia Cabrero y otros, Abogados contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, 1939-1977, Barcelona, Crítica, 2013.

[47] Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001.

[48] M.a Candelaria Fuentes y Francisco Cobo, La tierra para quien la trabaja. Los comunistas, la sociedad rural andaluza y la conquista de la democracia (1956-1983), Granada, Eug, 2016.

[49] Marcial Sánchez Mosquera, «La incorporación del campo al nuevo movimiento obrero andaluz (1963-1972)», en Manuel Bueno (coord.), II Congreso de Historia del PCE: de la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social. Comunicaciones, Madrid, FIM, 2007, p. 9.

[50] Ibid., pp. 11-15.

[51] Cristian Ferrer, «El PSUC y el trabajo en el campo. El movimiento campesino entre el franquismo y la transición», en David Lanero, El disputado voto de los labriegos. Cambio, conflicto y continuidad política en la España rural (1968-1986), Granada, Comares, 2018.

[52] Cristian Ferrer, «La fase expansiva del antifranquismo, 1962-1976. Presencia, espacios y redes del PSUC en comarcas», Nuestra Historia. Revista de la Historia de la FIM 3 (2017), pp. 22-23.

[53] Antonio M.a Bernal, «Sindicalismo jornalero y campesino en España (1939-2000)», en Ángel Luis López Villaverde y Manuel Ortiz Heras, Entre surcos y arados, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2001, pp. 36-37.

[54] Carme Molinero y Pere Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017.

[55] Santiago Carrillo, Después de Franco, ¿qué?, p. 11.

[56] Comité Ejecutivo del PCE, Declaración del Partido Comunista de España ante el XXX aniversario del comienzo de la guerra civil, junio 1966, Documentos: caja 47, AHPCE.

[57] Javier Domínguez, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975), Bilbao, Mensajero, 1985, p. 91.

[58] Carme Molinero y Pere Ysàs, La anatomía del franquismo De la supervivencia a la agonía (1945-1977), Barcelona, Crítica, 2008, pp. 121-125.

[59] Decreto-ley 1/1969 de 24 de enero.

[60] «Situación del antifranquismo en Barcelona», febrero 1969, y Carta de Saltor, marzo 1969. Nacionalidades-Cataluña, Jacq: 1893 y 1899, AHPCE.

[61] Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, «La implantación del estado de excepción subraya la extrema debilidad del régimen», Mundo Obrero, 5 de febrero de 1969.

[62] Comité Ejecutivo del PCE, «Un pacto para la libertad que ponga en manos del pueblo el poder de decisión», Mundo Obrero, 2 de septiembre de 1969.

[63] Previamente, en la misma declaración, se afirmaba que «en una futura plataforma de toda la oposición democrática habrá de reconocerse la realidad de Cataluña, Euskadi y Galicia, sus derechos y sus libertades nacionales».

[64] El informe está recogido en Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, París, Éditions Sociales, 1971, p. 27.

[65] Santiago Carrillo, «Salir a la superficie», Nuestra Bandera 65 (1970).

[66] Marcelino Camacho insistió en la distancia entre las formulaciones políticas y la práctica militante. Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1990.

[67] «Carta de Víctor», 12 de diciembre de 1970. Activistas: caja 92, AHPCE.

[68] «Libro de sesiones del Consejo Nacional del Movimiento». Intervención de Pedro Nieto Antúnez, febrero de 1971, Presidencia, CNM: libro 941, AGA. Amigo personal de Franco, Nieto Antúnez fue ministro de Marina desde 1962 hasta 1969.

[69] «Esquema sobre libertad y seguridad en la Comunidad Nacional ante la situación política actual», febrero de 1971, Presidencia, CNM: libro 941, AGA.

[70] «Después de Burgos». Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, Mundo Obrero, 19 de febrero de 1971.

[71] «Memoria del Gobierno Civil de Oviedo», 1971, Gobernación: c. 507, AGA.

[72] «Comisiones Obreras», noviembre de 1971.

[73] Luis Carrero Blanco, Discursos y escritos 1943/1973, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974, pp. 254-268.

[74] José Babiano (coord.), Proceso 1001 contra Comisiones Obreras. ¿Quién juzgó a quién? Madrid, Fundación 1.o de Mayo, 2013.

[75] L. Carrero Blanco, op. cit., p. 264.

[76] «Informe sobre la participación universitaria», 1974, Presidencia, SGM: c. 18.791, AGA.

[77] Santiago Carrillo, Hacia la libertad. Informe del Comité Central presentado al Octavo Congreso del PC de España. Editado por el Comité Ejecutivo del PSUC, pp. 72-76.

[78] Ibid., pp. 91-94.

[79] Ibid., p. 65.

[80] Ibid., pp. 67-69.

[81] Ibid., pp. 51-54.

[82] Giaime Pala, El PSUC. L'antifranquisme i la política d'aliances a Catalunya (1956-1977), Barcelona, Base, 2011.

[83] Ibid., pp. 37-38.

[84] «Informe de Viñals», s/f., Documentos: caja 54, AHPCE.

[85] «Manifiesto de la Junta Democrática de España». Julio de 1975. Documentos: caja 56, AHPCE.

[86] José Vidal-Beneyto, Memoria democrática, Madrid, Foca, 2007, p.113.

[87] «Manifiesto de la Reconciliación de la Junta Democrática de España», abril de 1975, reproducido en Nous Horitzons, 30, 1975.

[88] Segunda Conferencia del Partido Comunista de España, Manifiesto Programa del PCE, Editado por el Comité Ejecutivo del PSUC, 1975, p. 38.

[89] Ibid., p. 42.

[90] Decreto-ley 10/1975 de 27 de agosto de medidas contra el terrorismo.

[91] «Cap a una àmplia coalició democrática», Treball, 30 de septiembre de 1975.

[92] Santiago Carrillo, «Las tareas del movimiento obrero para que el franquismo desaparezca también», Nuestra Bandera, 82, noviembre de 1975.

[93] Santiago Carrillo, Hacia la libertad, pp. 102-103.

[94] Ibid., p. 97.

[95] «La Declaración conjunta», Mundo Obrero, 3.a semana de julio de 1975.

[96] Segunda Conferencia del PCE, Manifiesto Programa, p. 139.

[97] Ibid., pp. 93-94.

[98] Ibid., pp. 96-97.

[99] Ibid., pp. 100-102.

[100] «Declaración del Comité Ejecutivo del PCE», 28 de agosto de 1968, Documentos: caja 49, AHPCE.

[101] Véase, por ejemplo, Santiago Álvarez, «La renovación en Checoslovaquia», Mundo Obrero, 17 de mayo de 1968.

[102] Salvador López Arnal, «Del mayo parisino al agosto praguense. Manuel Sacristán y el PSUC-PCE. Apuntes para una aproximación», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE. I Congreso 1920-1977, Madrid, FIM, p. 751.

[103] Antonio Elorza, «Comunismo y nacionalismo en la Transición (PCE y partidos comunistas de nacionalidad)», en Rafael Quirosa-Cheyrouze (ed.), Los partidos en la transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, p. 40.

[104] Silvio Pons, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, 2006, pp. 30-41.

[105] Segunda Conferencia del PCE, Manifiesto Programa, p. 142.

[106] Ibid., p. 127.

[107] Ibid., pp. 92, 103, 94, y 99.

[108] Ibid., pp. 122-123.

[109] Ibid., p. 103.

[110] Santiago Carrillo, «Libertad y socialismo. Informe al Comité Central ampliado, septiembre de 1970», Documentos 2: AHPCE, caja 51.

[111] Segunda Conferencia del PCE, Manifiesto Programa, pp. 140-141.

[112] Ibid., p. 141.

[113] «Documento de Bandera Roja sobre el PSUC», s/f., Fondo PSUC: c. 214 I. Arxiu Nacional de Catalunya (ANC),

[114] «Declaración del Comité Ejecutivo. Militancia de los cristianos en el Partido», Mundo Obrero, 6 de marzo de 1975.

[115] Carlos Riba, «Militancia de cristianos en el Partido», Segunda Conferencia del PCE, Manifiesto Programa, pp. 62-63.

[116] Segunda Conferencia del PCE, Manifiesto Programa, «Por la liberación de la mujer», pp. 153-154.

[117] Ibid., pp. 155-156.

[118] MDM, Reunión del Comité Ejecutivo del PCE con camaradas del Movimiento Democrático de Mujeres, s/f, 1974, carp. 2, caja 117, p. 23, AHPCE.

[119] Ricard Martínez i Muntada, «La izquierda revolucionaria en tiempos de cambio político», en Carme Molinero y Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas en tiempos de transición, Valencia, PUV, 2016.

[120] Emanuele Treglia, «Izquierda comunista y cambio político: el caso de la ORT», Ayer 92 (2013).

[121] Martí Caussa y Ricard Martínez i Muntada. Historia de la Liga Comunista Revolucionaria (1970-1991), Madrid, Viento del Sur, 2014.

[122] José Luis Martín Ramos (coord.), Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, Barcelona, El Viejo Topo, 2011.

[123] Jordi Borja, Bandera Roja. 1968-1974. Del maig del 68 a l'inici de la transició, Barcelona, Edicions 62, 2018.

[124] Santiago Carrillo, Hacia la libertad, pp. 41-43.

[125] Segunda Conferencia del PCE, Manifiesto Programa, «Por la liberación de la mujer», pp. 40-41 y 32.

[126] «Carta de Santiago Carrillo», 30 de octubre de 1974, Activistas: caja 93, carp. 49/23, AHPCE.

V

EL PCE EN (LA) TRANSICIÓN

(1975-1982)

– Juan Andrade –

EL PARTIDO DEL ANTIFRANQUISMO: BAGAJE Y PROYECCIÓN

En la tradición católica los días de duelo proyectan una imagen falseada de las actitudes hacia el difunto. Los allegados expresan su desconsuelo ante propios y extraños; una parte de la comunidad cumple sin más con la liturgia del pésame; y los agraviados guardan ese día un incómodo silencio. Cuando el difunto es un tirano que ha sido derrocado, ni las costumbres o preceptos impiden la celebración pública. El acontecimiento se despersonaliza, se vive como liberación colectiva y una entusiasta perspectiva de cambio arroja ese cuerpo al pasado. Pero si el dictador muere sin ser depuesto, las sensaciones se amalgaman y se expresan condicionadas por la vigencia de sus herederos.

El día que murió Franco coexistieron ambas reacciones. Las costumbres funcionaron como mecanismo de seguridad: del duelo en la plaza al alivio íntimo en el hogar. Por otro lado, una sensación de liberación y entusiasmo ante el cambio bullía en encuentros discretos de amigos y compañeros. Allí donde el entusiasmo era masivo, también se asomó a la calle. La sensación era de contención, pero de una contención premonitoria de su desquite. Con sus flujos y reflujos, por las calles venía circulando ese ímpetu de cambio. Esta vez el repliegue anticipaba una oleada mayor.

Aquellas oleadas –con su descontrol y autonomía naturales– las integraban, impulsaban o navegaban, en un número muy elevado, mujeres y hombres del Partido Comunista de España, militantes y compañeros de viaje. Su presencia

era tal que en los ambientes del antifranquismo e incluso desde instancias del régimen a aquel partido se le nombraba como «El Partido». La sinécdoque señalaba, como todas las sinécdoques, una desproporción, injusta para quienes combatieron la dictadura desde otras filas; pero también una ascendencia del PCE sobre el conjunto del antifranquismo que podríamos caracterizar con una palabra hoy de uso ligero, pero de significado hondo: hegemonía. El PCE no solo era el partido más numeroso, mejor organizado y más activo de cuantos lucharon contra el franquismo. Sus militantes y cuadros formaban parte integral de movimientos y expresiones de oposición a la dictadura, ejerciendo en muchos momentos su «dirección cultural y moral».

Como se ha visto en los capítulos anteriores, el PCE fue construyendo esa hegemonía progresivamente. Con limitaciones teóricas y prácticas, adaptó su estrategia a las transformaciones económicas, sociales y culturales que tuvieron lugar en la España de los sesenta, leídas como condiciones de posibilidad para generar una oposición amplia al régimen. Aprovechó como Caballo de Troya algunos de los resquicios institucionales de la dictadura para horadarla por dentro. Con la política de Reconciliación Nacional delimitó, aunque fuera con trazo grueso, una nueva línea divisoria, que teóricamente enfrentaba al régimen con una amplia mayoría social, donde se incluía a quienes, habiendo estado de algún modo comprometidos con el franquismo, ahora disentían o eran perjudicados por él. Su influencia radicó en su capacidad para vincular reivindicaciones de sectores y movimientos específicos a un programa general de democratización completa del país en una dirección socialista.

El PCE desempeñó un papel central en el impulso de las Comisiones Obreras, un movimiento amplio, combativo y flexible en el mundo del trabajo, que, al tiempo que carcomía por dentro al Sindicato Vertical, ocupando sus puestos de enlaces y jurados, promovía la participación asamblearia de los trabajadores. Las demandas inmediatas se politizaban enseguida, al no encontrar un cauce legal en la dictadura y por efecto de ideales democráticos y socialistas promovidos por los cuadros más activos. Se exigían derechos sindicales y de participación en la gestión de las empresas, y, por tanto, el fin de la dictadura que los impedía. Entre la fábrica y el barrio se trazó un corredor por el que circulaban idearios, personas y asistencia mutua. El movimiento vecinal cuajó en las barriadas más populosas y desasistidas del país, especialmente en aquellas crecidas con la migración y el desarrollismo. Las luchas para dotar a los barrios de servicios de limpieza, medios de transporte, parques y centros educativos y de salud implicaban la lucha por la democratización de los ayuntamientos, responsables directos de la

segregación social en el espacio urbano. Para promover aquellas reivindicaciones, pero también para cubrir el vacío institucional y dotar de vida a los barrios, los militantes comunistas participaron en la creación de una red de asociaciones de vecinos, de centros sociales y eventos culturales. En varios de aquellos barrios, dotados de una renovada identidad de clase, levantaría el partido sus bastiones electorales en la Transición.

El PCE fue determinante en la formación de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes en los sesenta, construidos en este caso al margen del SEU. Aunque desbordadas en algunos lugares por la ola de radicalización ideológica y la proliferación de formaciones de la izquierda radical a principios de los setenta, las organizaciones del PCE mantuvieron una presencia importante en centros de secundaria y universidades, y sus cuadros siguieron destacando en asambleas, asociaciones e iniciativas concretas, como las protestas contra la Ley General de Educación de 1970, o el movimiento de Profesores No Numerarios[1].

Al PCE se incorporaron multitud de profesionales, técnicos, intelectuales y artistas. Se sintieron estimulados por factores contextuales de los que se dará cuenta más adelante. Pero también por una nueva visión del partido acerca de cómo debía conformarse el bloque histórico por el socialismo, formulada, con ciertas lagunas teóricas, en la propuesta de la «Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura»[2]. De forma transversal a todos estos movimientos, el partido desplegó su ascendencia sobre los sectores progresistas del catolicismo que disentían con la dictadura y ponían el acento en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. A esa confluencia, no exenta de contradicciones, contribuyeron las tendencias socializantes desatadas por el Concilio Vaticano Segundo, más tarde renovadas con los aires de la teología de la liberación[3].

La implicación del PCE en estos movimientos sociales procuró su crecimiento afiliativo, así como cambios profundos en su composición, cada vez más rica y heterogénea, pero también conflictiva. A lo largo de la década de los sesenta y setenta los cuadros y militantes comunistas siguieron militando clandestinamente en el partido, pero se convirtieron en referentes visibles y reconocidos de la protesta social y la lucha democrática. Con este bagaje encaraba el PCE un proceso de transición en España que parecía augurarle un importante papel.

El proyecto de cambio esbozado por el PCE a lo largo de los sesenta surgió de enconados debates, revisiones pocas veces reconocidas, rutinas recurrentes e innovaciones estratégicas poco usuales en el Movimiento Comunista. Pese a

matizaciones y ajustes, dos premisas, que más tarde se evidenciaron erróneas, inspiraron su esquema para el cambio. Una, que «la burguesía monopolista española», pilar social del régimen, no estaba capacitada para apostar por una salida democrática a la crisis del franquismo. Otra, que sería posible constituir un bloque social amplio y heterogéneo, que, incluyendo a buena parte de los representantes políticos de la burguesía, pudiera enfrentarse a la dictadura. El proyecto a largo plazo consistía en encauzar el cambio de régimen en la perspectiva del socialismo a través de una fase interpuesta, «la democracia político social», que vinculara en esa dirección, por medio de una renovada política de alianzas, a la inmensa mayoría de la población. Pero antes de llegar a ese horizonte había que tumbar la dictadura. El instrumento para ello seguía siendo la huelga nacional. No se trataba ya del viejo acto puntual y resolutivo que en los cincuenta había fracasado en sus aspiraciones máximas, sino más bien de un proceso de movilización pacífico, amplio, sostenido y ascendente que a la muerte del dictador paralizaría el país y colapsaría al Estado, forzando así la caída de sus herederos, debilitando con ello las posiciones de las clases dominantes y abriendo un proceso constituyente dirigido por un gobierno provisional amplio y plural[4].

Como aquel horizonte no terminaba de perfilarse, el PCE lanzó una nueva propuesta al resto de las fuerzas de la oposición con el llamado «Pacto para la Libertad». Esbozada en los años anteriores, fue precisada y ratificada oficialmente en el VIII Congreso en julio de 1972. El partido constataba que la burguesía monopolista había cobrado conciencia de los riesgos que corría al vincular sus intereses a los de una dictadura tambaleante y que sus posiciones de poder podrían asegurarse si ella misma tutelase un proceso de cambio aparentemente democrático. Con ello neutralizaría la posibilidad de que los cambios institucionales pudieran desatar las transformaciones sociales por las que abogaba un movimiento obrero en auge. Para anticiparse a tales iniciativas el PCE lanzó una propuesta unitaria de transición al resto de los partidos antifranquistas, basada en la formación de un gobierno provisional amplio y plural, en la amnistía para los presos políticos, en el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, y en unas elecciones libres que incluyeran el pronunciamiento sobre la forma de Estado y la apertura de un proceso constituyente[5]. Se trataba de una oferta de mínimos para la ruptura democrática que excluía cualquier reivindicación social que sirviese de motivo para el desacuerdo. Movilización social y agrupación de toda la oposición para la ruptura democrática seguían constituyendo el eje central de la política del PCE en sus documentos, y todavía en su práctica.

La mejor concreción de esta política fue la creación en el verano de 1974 de la Junta Democrática de España. Este organismo lo formaban el propio PCE, el Partido Socialista Popular, el Partido del Trabajo, el Partido Carlista, CCOO y diversas organizaciones políticas de ámbito regional; pero integraba, además, a representantes de asociaciones de vecinos y de colegios profesionales y a personas independientes con proyección pública. La Junta tenía un doble objetivo. Por una parte, debía ser un instrumento unitario de oposición a la dictadura en todos los ámbitos de la sociedad civil. El propósito consistía en crear juntas democráticas por todo el territorio, que unificasen los criterios y coordinasen las acciones diarias de oposición a la dictadura. Por otra parte, la Junta Democrática debía ser un ensayo del futuro gobierno provisional encargado de tomar las riendas del cambio tras el derribo de la dictadura. Su composición ideológicamente plural y el añadido de personalidades sin adscripción partidaria respondían a la propuesta comunista de conformar un gobierno transitorio, amplio y plural, en el que todas las tendencias políticas desvinculadas del régimen se pudieran sentir representadas y en el que ninguna de ellas pudiera recelar del protagonismo de cualquier otra[6]. La política de convergencia auspiciada por el PCE pretendía aglutinar a fuerzas diversas para enfrentarlas al régimen, pero bebía también del temor a quedar aislados en un posible acuerdo postfranquista entre algunos partidos de la oposición y los sectores aperturistas que empezaban a descollar entre las elites de la dictadura.

DE LA NECESIDAD VIRTUD. RUPTURA DEMOCRÁTICA, REFORMA PACTADA Y LEGALIZACIÓN CONDICIONADA

A la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, se activó automáticamente la Ley de Sucesión. Dos días después Juan Carlos de Borbón juraba ante las Cortes como nuevo rey de España. El propósito del Rey era asegurar la restauración monárquica por encima del sistema político en el que pudiera integrarse. El dilema que enfrentaba podía resumirse del siguiente modo. Si se comprometía con una dictadura agónica, podía quedar sepultado bajo sus escombros en el probable caso de que esta se derrumbase en su vana pretensión de permanecer incólume. Si cedía del todo al impulso democratizador, podía sufrir un golpe de Estado del búnker o ser desbordado por una oposición teóricamente republicana. Ante las dudas, el entramado de poderes nucleados en

torno al rey trató de probar suerte con el proyecto de pseudorreformas dirigidas desde arriba por el gobierno heredado de Franco, que encabezaba Arias Navarro, y al que Fraga, si es que vale el oxímoron, había incorporado su particular visión autoritaria de la democracia. Mientras, aquel entramado fue tomando las riendas del aparato del Estado bajo la batuta de Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino.

Aquel proyecto pseudocontinuista no convencía a los sectores más evolucionistas del régimen, que lo consideraban insuficiente, ni tampoco al búnker, que lo veía excesivo. Lo tumbó la movilización social alentada por la oposición, entendida como un complejo social y cultural diverso y activo, sobre el que el PCE tenía gran predicamento. Espoleada por los efectos de la crisis económica, una oleada de huelgas anegó el llamado «aperturismo», pese a los altísimos niveles de represión acometidos desde el Estado o desplegados con su aquiescencia.

Aunque Arias y Fraga no lograsen romper definitivamente a los partidos de la oposición con su «ley de asociaciones», pensada para excluir del futuro régimen a los partidos más beligerantes, la división era un hecho. En junio de 1975 el PSOE había impulsado con otros partidos la creación de la Plataforma de Convergencia Democrática. Para justificar la iniciativa adujeron el afán de control de los comunistas sobre la Junta, así como la supuesta falta de consistencia democrática del partido de Carrillo. El verdadero temor consistía en participar de un proyecto unitario que reivindicaba la formación de un gobierno provisional donde el PCE pudiera cobrar un protagonismo institucional que ya tenían en la lucha social y cultural contra la dictadura. No obstante, excluir al PCE tendría un coste demasiado elevado para el resto de los partidos de la oposición, pues debilitaría su imagen democrática y les privaría, en el caso de que se abriera una negociación con el gobierno, de la capacidad de presión social que en gran medida capitalizaban los comunistas. El PCE, por su parte, necesitaba de la concurrencia del resto de fuerzas para sumar activos sociales a su pretensión de colapsar el régimen, y temía quedar marginado en un posible proceso de legalización de los partidos en el caso de que no se produjera semejante colapso. No sin contradicciones, unos y otros sentían la necesidad de llegar a alguna forma de unidad.

El arreglo entre estas pulsiones contradictorias se produjo en marzo de 1976 con la fusión de la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática en un nuevo organismo: Coordinación Democrática, popularmente

conocido como Platajunta. La unificación supuso una rebaja de las exigencias iniciales de la Junta. Las reivindicaciones se centraron en el restablecimiento de las libertades y la apertura de un proceso constituyente con elecciones libres. La apuesta por la formación de un gobierno de concentración quedó desdibujada, cediendo espacio a la idea de una negociación con el gobierno si este demostraba una voluntad democratizadora suficiente[7]. El paso de la Junta Democrática a la Platajunta entrañó el paso de un organismo unitario orientado a derribar el régimen y embrionario del futuro gobierno de transición a un organismo de negociación con la elite postfranquista que se disolvería apenas se restaurasen las libertades. El PCE había logrado su propósito de agrupar a la oposición y formar parte del agrupamiento, aunque en la unidad se había abierto una posibilidad hasta entonces rechazada: la negociación del cambio con el gobierno heredero de Franco[8].

Pese a su compromiso con la Platajunta, el PCE sostuvo mal que bien su proyecto de ruptura, confiando en que el desarrollo de la movilización social inclinase de ese lado al conjunto de la oposición. En qué momento el PCE se plegó a la negociación de la reforma es algo difícil de determinar en ese tiempo tan confuso que va de la primavera de 1976 a diciembre del mismo año, cuando la adaptación del partido a veces iba a remolque y a veces por delante de unos acontecimientos vertiginosos[9].

La destitución de Arias Navarro y la designación de Adolfo Suárez como presidente del nuevo gobierno en julio de 1976 cogió con el paso cambiado a los comunistas. Que Suárez fuera secretario general del movimiento y no hubiera hecho declaraciones a favor de la democracia parecía satisfacer a los burócratas e involucionistas del régimen. A la postre su designación ha sido interpretada como una estrategia del rey y de Torcuato para agilizar las reformas democráticas de la mano de una figura de perfil inicialmente bajo que no pudiera ser vetada por el búnker[10]. Sea como fuere, el nuevo gobierno se comprometió públicamente a iniciar una profunda reforma institucional, que debía concluir con la celebración antes de un año de unas elecciones basadas en la libre concurrencia de partidos políticos[11]. La estrategia de Suárez tuvo cuatro momentos: revalidar el respaldo de los poderes fácticos del país y de las principales cancillerías exteriores; convencer a los sectores más inmovilistas del régimen, con promesas de continuidad y pagos rayanos en la corrupción, de que apoyasen la ley para la Reforma; someterla luego a refrendo popular desde el Estado franquista; y, desde esa posición de fuerza, negociar directamente con la oposición su ritmo y alcance reales.

El PCE y otras fuerzas trataron de bloquear la estrategia del gobierno durante estos meses en que la impugnación social al franquismo estaba en su momento álgido. Las movilizaciones, en aumento desde principios de los setenta, alcanzaron su cénit con las manifestaciones proamnistía ese año de 1976[12]. Había llegado el momento de comprobar si por la vía de la movilización social directa se podía bloquear al Estado, aunque fuera para negociar luego desde esa demostración de fuerza con sus precarios representantes. La anhelada Huelga Nacional propugnada por el PCE estaba desarrollándose en términos graduales, pero necesitaba intensificarse hasta alcanzar un estadio decisivo. Este podía ser el de la huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales para el 12 de noviembre. El PCE, con los sindicatos y otras fuerzas sociales, hizo una apuesta fortísima por la convocatoria. La huelga tuvo un seguimiento espectacular, pero el gobierno desplegó sin miramientos todo el aparato administrativo, comunicativo y represivo estatal y paraestatal, logrando reestablecer el orden al día siguiente y evitando la prolongación sine die del paro[13].

Si venía arrastrando dudas, tras la huelga del 12 de noviembre la dirección del PCE concluyó que las movilizaciones ya no serían un instrumento de oposición para derribar al gobierno, sino una herramienta de presión en las transacciones con él. Así parece ser que lo acordaron en la reunión clandestina del Comité Ejecutivo celebrada en un antiguo Molino de Guadalajara el 23 de noviembre de 1976[14]. El éxito simbólico del gobierno en el Referéndum de la Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre les reforzó en aquella idea. En aquel referéndum sin garantías la abstención propugnada, entre otros, por los comunistas había logrado un escaso 30 por 100. Ahora el principal objetivo era participar de los acuerdos que se tomasen e impedir quedar marginados del proceso de legalización de los partidos que estaba a punto de iniciarse.

Lo que se puso de manifiesto entonces fue que la oposición había tenido la fuerza suficiente para impedir el continuismo, pero que adolecía de la capacidad necesaria para imponer la ruptura. Para la dirección del PCE la única salida al franquismo pasaba por respaldar el proceso reformista de Suárez, forzando sus límites hasta que desembocara en unas Cortes Constituyentes. Es decir, perseguir los objetivos rupturistas deseados por la oposición forzando los procedimientos reformistas gestionados por el gobierno, como si lo segundo no comprometiera lo primero y como si con ello no cambiara la posición del partido, que de ser el eje del antifranquismo pasó a luchar por su propia legalización en condiciones muy adversas. Año y medio después el PCE justificaba del siguiente modo esta

decisión:

Mantener las anteriores posiciones rupturistas en la nueva coyuntura hubiese significado aislar al PCE y a las otras fuerzas de vanguardia, debilitarlas, dejar el campo libre a la reforma. En cambio, con una política más flexible se podía lograr que amplias capas hasta entonces pasivas, indecisas, basculasen hacia la democracia. El PCE se orientó a ampliar al máximo los organismos unitarios de la oposición (lo que se plasmó, principalmente en la comisión de los 10), a imponer una negociación gobierno-oposición que permitiese, con el apoyo sobre todo de la lucha de masas, desbordar el carácter de la reforma; imponer la legalidad del PCE y de todos los partidos; elecciones con un nivel de democracia aceptable; y que las nuevas cortes fuesen constituyentes. Es decir, convertir lo que empezó siendo reforma en un cambio democrático de verdad, a través de una serie de objetivos escalonados para abrir la vía a la democracia[15].

Tras el referéndum, Suárez empezó a negociar con la oposición. La presión de los partidos democráticos forzó al jefe del Gobierno a ampliar la amnistía, rectificar la ley electoral pensada para el triunfo de las derechas, disolver el Movimiento y el Sindicato Vertical y legalizar a la mayoría de los partidos políticos, a excepción, por el momento, del PCE y otros partidos republicanos y de la izquierda revolucionaria. La oposición, por su parte, aceptó la monarquía, renunció definitivamente a la idea del gobierno provisional, descartó la petición de responsabilidades por los crímenes de la dictadura; pospuso las reivindicaciones nacionalistas; y aceptó las correcciones a la proporcionalidad del futuro sistema electoral. En el proceso de negociación Suárez supo aprovechar los desacuerdos de la oposición, aglutinada en la comisión de los nueve, alternando el diálogo público con su conjunto y la discreta negociación con sus partes. Se valió del trato desigual dispensado a unas opciones frente a otras. Mientras el PSOE celebraba, sin estar todavía legalizado, en pleno centro de Madrid su XXVII Congreso los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1976, buena parte de la dirección comunista del interior estaba todavía en las cárceles.

El PCE decidió desbordar la marginación a la que trataba de ser reducido por medio de la llamada política de «salida a la superficie». Aprobada en el famoso pleno del Comité Central de Roma de julio del 76[16], consistía en «forzar en la

práctica el ejercicio de derechos no reconocidos por el Régimen»[17]. En aquella reunión el comité en pleno se presentó en sociedad ante los medios internacionales, como luego hicieron tantos cuadros del partido por todas las ciudades de España en actos públicos ante medios nacionales y locales. En las calles los militantes repartían ya Mundo Obrero a cara descubierta, y los símbolos del partido, en grafitis y carteles, poblaron las paredes. Esta política llevó a Santiago Carrillo a cruzar los Pirineos, demostrando en sus propias carnes que el PCE era una fuerza incontrolable por el gobierno y que hasta su secretario general podía burlar a la policía en la misma capital del país. Sus apariciones por Madrid no respondían, obviamente, a la impotencia del gobierno, sino a su indecisión acerca de qué hacer con él, y, por tanto, con su partido, en el momento que decidieran detenerlo. Su arresto el 22 de diciembre obligaba a abordar el crucial tema de la legalización del PCE.

El principal peligro para el PCE no radicaba en la posibilidad de que el gobierno decidiese mantenerlo en la clandestinidad de manera indefinida, sino en la alta probabilidad de que decidiera legalizarlo después de las primeras legislativas. No presentarse a estas elecciones o presentarse en candidaturas encubiertas dejaría su espacio electoral a merced del PSOE, con la dificultad que luego supondría recuperarlo[18]. Por eso el partido desplegó una intensa campaña prolegalización sobre tres ejes. Primero, vinculando la legitimidad del gobierno, de las elecciones y de los partidos que se presentasen a la legalización de todas las fuerzas políticas. Segundo, apelando a la normalidad que se daba en otros países democráticos, como Francia e Italia, donde los partidos comunistas tenían una importante presencia institucional. Finalmente, expresando su voluntad de contribuir a la estabilización del proceso dirigido por el gobierno, para atemperar así el ánimo de los más reacios. La demostración de semejante voluntad quedó patente en su sosegada e impresionante respuesta a la matanza de sus abogados laboralistas de Atocha, perpetrada por la extrema derecha el 24 de enero de 1977.

El compromiso entre el PCE y el gobierno se fue perfilando en aquellas semanas, hasta sellarse, si de poner una fecha se trata, en la reunión que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo mantuvieron en casa de José Mario Armero el 27 de febrero de 1977. Si nos atenemos a las memorias o a declaraciones posteriores de ambos, podemos colegir que el acuerdo no sólo giró en torno a la aceptación por parte del PCE de la monarquía, la unidad de España y sus símbolos a cambio de su legalización inmediata. Debió incluir también un compromiso por parte de Carrillo consistente en contener o dosificar la potencia movilizadora de su

partido para favorecer el modelo de cambio reformista. Así lo dio a entender el secretario general del PCE en sus primeras memorias publicadas a principios de los noventa:

Suárez reconocía, sin ambages, nuestro papel en el antifranquismo y evidentemente no tomaba demasiado en serio el de otros sectores de la oposición. En definitiva, se dio cuenta de que nuestra legalización significaba también que nosotros nos comprometíamos con el éxito de la Transición y esta podía ser una aportación importante, dada la influencia y la disciplina del partido. Tuve la impresión de que captaba esta noción que trataba de trasmitirle con mis argumentos[19].

La legalización del PCE fue un acontecimiento fascinante desde el punto de vista politológico, en el cual cada uno de los agentes de la negociación trasfirió al otro aquello de lo que carecía. El gobierno concedió al PCE la legalidad procedente del Estado franquista y el PCE, en tanto que principal partido del antifranquismo, transfería al gobierno la legitimidad procedente de la lucha por la democracia[20]. Aquella legitimidad era tanto mayor para el gobierno en la medida que su autoridad era reconocida por su adversario teóricamente más distante y realmente más potente. El PCE, sin embargo, salía ideológicamente desnaturalizado, al renunciar de hecho a su republicanismo, y políticamente maniatado, al asumir el compromiso tácito de no aprovechar al máximo su principal activo, la capacidad de movilización de su base social.

Hasta hacerse efectiva, la legalización del PCE tuvo que salvar serios escollos. Cuando el 9 de abril la decisión del gobierno se hizo pública, las declaraciones del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, hicieron temer un golpe involucionista. Las narrativas posteriores han descargado sobre la cúpula militar la oposición intimidatoria a la legalización del PCE, pero esta contó también con las declaraciones hostiles de numerosos políticos, periodistas e intelectuales luego reconocidos en la democracia postfranquista, desde Alfonso Osorio a Manuel Fraga, pasando por el periodista monárquico Torcuato Luca de Tena o el historiador Carlos Seco Serrano[21].

Para contener la hostilidad y disciplinar a sus bases Santiago Carrillo convocó el

14 de abril, efeméride de la proclamación de la II República, el pleno ampliado del Comité Central del PCE, el primero en España desde la Guerra Civil. Allí se produjo oficialmente el reconocimiento de la monarquía, la unidad indisoluble de la nación española y la bandera procedente de la dictadura. Quienes acudieron no sabían que en esa reunión fueran a plantearse cuestiones de tal envergadura. Mucho menos que Santiago Carrillo ya hubiera cerrado el compromiso con el gobierno. Allí, en tono grave, Santiago Carrillo planteó:

Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy antes de la guerra. En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va a la democracia o se entra en una involución gravísima que afectaría no sólo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a los reformistas e institucionalistas[22].

A continuación, leyó la resolución que traía preparada y que inmediatamente después se hizo pública en una rueda de prensa en la que el Comité aparecía posando con una enorme bandera rojigualda al fondo, que los disciplinados funcionarios de Carrillo tenían preparada. Estas fueron exactamente sus palabras ante la prensa:

Si en el proceso de paso de la dictadura a la democracia la monarquía continúa obrando de una manera decidida para establecer en nuestro país la democracia, estimamos que en unas próximas Cortes nuestro partido y las fuerzas democráticas podrían considerar la monarquía como un régimen constitucional y democrático […][23].

La resolución se había aprobado sin ningún voto en contra. Solo hubo 11 abstenciones, básicamente de vascos y catalanes. En sus memorias el secretario general justificó la decisión en los siguientes términos. Según Carrillo, el debate sobre la forma de Estado habría dividido a la oposición en un momento en el que la unidad era necesaria para negociar con el gobierno. La reivindicación de la República podría incentivar un golpe de Estado en los involucionistas, so

pretexto de socorrer al monarca. El referéndum habría revitalizado en la sociedad española la división de los años treinta, en contra de lo establecido en la política de reconciliación nacional. Además, decía Carrillo, el resultado habría sido desfavorable a la república[24].

El brusco giro se vio agravado por una práctica que se volvería recurrente en la dirección comunista durante la Transición, y que, con el tiempo, tendría consecuencias peores sobre la moral de la militancia que las derivadas de las decisiones adoptadas: la de hacer en muchos casos de la necesidad virtud. Como se verá, en vez de caracterizar la monarquía como una institución que el partido había aceptado forzosamente a cambio de la legalización, buena parte de la dirección pasó a respaldarla positivamente, argumentando que la reducción de sus competencias y su compromiso con la democracia la hacían compatible con el desarrollo de políticas socialistas. La legalización del PCE entrañó una importante coacción ideológica que difuminó su republicanismo, entendido no sólo como apuesta por una forma de Estado, sino como toda una cultura cívica ligada a esa concepción del Estado y a un legado histórico abandonado en el exilio. El empecinamiento por racionalizar políticamente la aceptación de la monarquía difuminó más esa cultura y ese legado.

INFLUYENTES Y AUTOLIMITADOS. ELECCIONES, PACTOS DE LA MONCLOA Y CONSTITUCIÓN

Descartada la ruptura democrática y pasado el celoso filtro de la legalización, el PCE esperaba al menos rentabilizar en las elecciones del 15 de junio su hegemonía sobre el antifranquismo. Aunque los datos que manejaba la dirección no apuntaban en esa dirección, pervivía la ilusión de un escenario a la italiana, con un fuerte partido democristiano en el gobierno y los comunistas como opción mayoritaria de la izquierda, por delante del partido socialista. Se albergaba la esperanza de cubrir parte del espacio histórico del PSOE, toda vez que este había desempeñado un papel marginal en el antifranquismo. Como es sabido, los resultados desmintieron estos pronósticos. Unión de Centro Democrático (UCD) obtuvo el 34,6 por 100 de los votos; el PSOE el 29,3 por 100; el PCE-PSUC un modesto 9,4 por 100; y Alianza Popular (AP) un más escueto 8,8 por 100.

La distribución territorial del voto comunista resultó muy desigual, y esa desigualdad se vio amplificada en el parlamento por los efectos de la ley electoral y el uso de la provincia como circunscripción electoral, que minimizaron sensiblemente la representación del voto comunista[25]. El caso de los comunistas españoles no era exclusivo en este sentido. Aunque algo mejor distribuidos por todo el territorio nacional, el voto de otros partidos comunistas europeos se concentraba en los cinturones obreros de las grandes ciudades, así como en regiones donde el movimiento obrero gozaba de tradición, la Resistencia en la Segunda Guerra Mundial había sido particularmente fuerte, se había desarrollado una política de atracción de comunidades migrantes en la postguerra o destacó la presencia de líderes carismáticos. Así, el PCF concentró y multiplicó el voto, además de en las grandes ciudades industriales, en toda la Isla de Francia, el PCI en la región de Emilia Romaña o el Partido Comunista Portugués (PCP) en el Alentejo.

En el caso español la distribución del voto también estuvo relacionada con otra variable, la procelosa cuestión nacional, que con la Transición se agitó intensamente, sobre todo en País Vasco y Cataluña. Precisamente en Cataluña, concretamente en la provincia de Barcelona, fue donde los comunistas obtuvieron mejores resultados, porque allí se articularon mejor todas esas variables, incluida la del discurso nacional. En Cataluña se había formado un bloque social amplio de oposición a la dictadura atravesado por aspiraciones e identidades democráticas, socialistas, catalanistas y españolas. El PSUC contribuyó de manera fundamental a construirlo y cohesionarlo a través de la articulación de tales aspiraciones e identidades. Ocupó un espacio tan extenso e integrador en el antifranquismo que apenas dejaba espacio para quienes solo contemplaran uno de estos cuatro vectores. La influencia no se debió solo a su programa y discurso: construir una España democrática, socialmente avanzada y federal, que reconociera de manera general el derecho a la autodeterminación de Cataluña y en concreto su estatuto de autonomía. Eso también lo defendían otras fuerzas de la oposición. La ascendencia se debió a una práctica política constante y relativamente innovadora, a cierta capacidad de dirección y a la implicación autónoma de sus militantes y compañeros de viaje. Y esta práctica cuajó en la construcción de una suerte de contrasociedad, integrada por Comisiones Obreras, asociaciones de vecinos, sindicatos de estudiantes, cineclubs, campamentos juveniles, revistas o periódicos. En el marco de esa contrasociedad la gente podía identificarse con el discurso y el programa nacional del PSUC, porque participaba de su elaboración e informaban sus luchas y solidaridades cotidianas. Pero, además, esa contrasociedad funcionaba en cierto sentido como

una anticipación a pequeña escala del país que querían construir y, sobre todo, como un espacio para la integración, no exento de tensiones, en la sociedad catalana de trabajadores procedentes de la migración. El partido y su contrasociedad sumaban identidades al servicio de una idealidad compartida: la de acabar con una dictadura que cercenaba derechos universales y reemplazarla por una Cataluña autónoma y con personalidad propia dentro de una España democrática, federal y socialmente avanzada[26].

Los días 26 y 27 de junio se convocó un Comité Central para valorar los resultados. Entre las razones aducidas se citaba la tardía legalización del partido; la intimidación que sobre potenciales votantes habrían ejercido los aparatos burocráticos y represivos todavía vivos de la dictadura; o la elevada mayoría de edad necesaria para votar, 21 años, lo cual le habría privado de una parte de su joven base electoral. Los argumentos presuponían lo que, sin embargo, la dirección venía soslayando: que una convocatoria electoral gestionada férreamente desde el poder no podía sino beneficiar a este a costa de sus mayores adversarios. No obstante, la explicación última recayó en una idea que se volvería recurrente, hasta condicionar la línea política del partido y la imagen que se empeñó en proyectar, en buena medida porque aquella política se redujo a la proyección de esa imagen. Para la dirección del PCE los malos resultados del partido se debieron sobre todo a la dura propaganda anticomunista sobrealimentada durante 40 años de socialización franquista, reactualizada por la mayoría de los partidos rivales y los medios de comunicación. Unos y otros venían trasladando a la opinión pública la imagen de un PCE guerracivilista y arcaizante que, ciertamente, poco tenía que ver con las posiciones que venía defendiendo durante décadas. Para la dirección del PCE habría una base electoral que se sentía identificada con las propuestas reales del partido, pero que, sensible a aquellos estigmas, se habría decantado a última hora por los socialistas[27]. Para más inri, señalaba el secretario general, la actitud irresponsable de muchos militantes había reforzado estos estereotipos:

A los que se preguntan si nuestra pretendida moderación no nos ha hecho perder votos, nosotros les aconsejaríamos estudiar las tendencias generales de la elección. La gran mayoría del país ha votado precisamente la moderación […] Este voto de moderación ha afectado también a nuestros resultados. Para la mayoría de la opinión pública somos, todavía, una opción extrema. La caricatura del «lobo con la piel de cordero» aún consigue efectos. Si el partido, en su

campaña, se hubiera escorado a posiciones izquierdistas, nuestra votación hubiera sido más reducida […] En estas elecciones ha habido todavía algún camarada que paralelamente a la explicación de nuestro programa ha tenido expresiones como la de que «tenemos una cuerda guardada» […] En un momento de conflicto en su empresa o centro de trabajo esas expresiones pueden obtener aplausos. Pero a la hora de optar, cuando se reflexiona sobre el porvenir, incluso muchos de los que han aplaudido coyunturalmente se interrogan: «Pero si se tiene una cuerda guardada, ¿cómo puedo creer que va a respetar el pluralismo, la libertad, la democracia, que no va a repetir modelos de socialismo que no me satisfacen?»[28].

La línea argumental de Carrillo tenía varias fallas. Confundía las supuestas tendencias mayoritarias de la sociedad española con las de los potenciales apoyos del partido y abordaba el problema de la imagen del partido en su sola dimensión mediática. Al hacerlo se negaba a reconocer que esta se veía lastrada por la presencia de los viejos dirigentes de la Guerra Civil al frente de un partido pretendidamente renovado y moderno. No en vano, al frente de varias candidaturas provinciales la dirección impuso unilateralmente a viejos dirigentes que poco tenían que ver con las circunscripciones, generando una tensión añadida con los militantes de aquellas zonas. En Córdoba, por ejemplo, la candidatura la encabezó Ignacio Gallego; en Málaga, Tomás García García; en Asturias, Dolores Ibárruri; y en Madrid, justificado porque se trataba del secretario general, Santiago Carrillo. Tras las elecciones Carrillo cortó de raíz la polémica argumentando que la imagen del partido dependía mucho más del contenido de su discurso político e ideológico que de quien lo enunciase:

Después de estas elecciones sigue especulándose contra el Partido con la imagen supuestamente negativa que pueden darle lo que los críticos llaman dirigentes históricos. Hay que afirmar que algunos dirigentes «históricos» han hecho por dar a la nueva imagen del Partido muchísimo más de lo que podrían haber hecho, con la mejor voluntad, otros más jóvenes. La imagen de un partido revolucionario moderno la da fundamentalmente su política, su teoría, su acción y su propia composición. El Partido renueva normalmente sus cuadros; pero nadie nos impondrá los dirigentes desde fuera[29].

En definitiva, el PCE planteó que sus discretos resultados electorales se debían en buena medida al peso de una imagen pública que no respondía a su verdadera identidad. Obsesionado con tal desajuste, se empeñó en corregirlo por medio de una política gestual que afectaría de pleno a su orientación ideológica y a su práctica comunicativa, a las cuales subordinaría, a su vez, la gestión del partido de puertas adentro y la línea política de puertas afuera.

Después de las elecciones legislativas del 77 el PCE aprobó su nueva línea política, la Política de Concentración Democrática. La aritmética parlamentaria, el riesgo de un golpe involucionista, el reto de elaborar una nueva constitución y de contener los efectos de la crisis económica exigían, en opinión del PCE, una acción concertada que solo podía venir de la mano de un gobierno de concentración en el que estuvieran representados todos los partidos políticos con voluntad democrática, una reactualización de la vieja idea del gobierno provisional[30]. Con esta propuesta el PCE pretendía ejercer una influencia superior a la derivada de sus resultados electorales, bloquear la tendencia al bipartidismo entre la UCD y el PSOE y encontrar una plataforma desde la que demostrar a potenciales votantes retraídos su sentido de la responsabilidad y su utilidad institucional.

La propuesta de gobierno de concentración del PCE no tuvo ningún respaldo. Los poderes comprometidos con el gobierno no hubieran consentido la convergencia con los comunistas, cuando además Suárez podía gobernar en solitario. Por su parte, el PSOE había optado por «la vía nórdica» de acceso al poder; es decir, solo y sin apoyos por la izquierda, como en Francia, ni acuerdos con la derecha como en Italia. No obstante, el PCE encontró un sucedáneo a su política de concentración en el clima de consenso que presidió esta etapa central de la Transición. Si los retos y dificultades que señalaba Carrillo no resultaron suficientes para la formación de un gobierno de concentración, sí demandaron el desarrollo de una política amplia de concertación entre la mayoría de las fuerzas parlamentarias, que requería, en particular, de los comunistas. Afrontar la crisis económica demandaba alguna forma de cooperación del movimiento obrero, sobre el que el PCE ejercía, a través de CCOO, una gran influencia. No en vano CCOO, a cuyo frente se situaba el dirigente y diputado comunista Marcelino Camacho, había sido la opción más votada en las elecciones sindicales de ese año, con un 34 por 100 de los votos. El PCE firmó, con el resto de fuerzas parlamentarias, los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977. Suponía su

compromiso con la congelación de los salarios, la reducción del gasto público, la limitación del crédito y el incremento de la presión fiscal, también sobre las rentas bajas. A cambio lograba que se introdujeran criterios progresivos en la futura reforma fiscal, la modernización y el fortalecimiento del sistema de seguridad social, el trazado de cauces para la participación de los sindicatos en las empresas y la ampliación de derechos y libertades civiles[31].

A medio plazo el respaldo a los pactos pasó factura al PCE, pues los acuerdos nunca condujeron a la formación de un organismo que velara por su cumplimiento, ni se cumplieron sus cláusulas más progresistas, pese a lo cual el partido no dejó de respaldarlos. Con ello daba pábulo a las críticas que, procedentes de su izquierda, le acusaban de practicar una política de contención de la respuesta social. Y también sumía en el desconcierto a una parte importante de su base social, que estaba sufriendo en el día a día los estragos de la crisis económica y de los ajustes prescritos en los pactos[32].

Para justificar los Pactos de la Moncloa el PCE recurrió de nuevo a una racionalización ideológica inverosímil. El PCE pudo respaldar los pactos para recobrar protagonismo público, romper la tendencia al bipartidismo entre UCD y PSOE, proyectar una imagen de moderación atractiva para votantes temerosos o porque pensara que, participando de su gestión, podría evitar su aplicación más severa y lograr contrapartidas en derechos políticos y sindicales. Lo que resultaba difícil de creer es que los Pactos de la Moncloa fueran un eslabón en la secuencia estratégica del eurocomunismo que permitiría enlazar con una forma de «democracia política y social», como así fueron presentados en el IX Congreso de 1978:

En resumen, sólo el cumplimiento estricto de los acuerdos de la Moncloa en los términos ya explicados puede constituir una base sólida en la que se apoyen proyectos económica y políticamente más ambiciosos para la futura transformación del Estado, porque sólo de una superación de la crisis actual dentro de las coordenadas de los acuerdos cabe esperar un saneamiento real, aunque modesto, imprescindible, de nuestra economía y la creación de los elementos de democratización de los aparatos económicos y burocráticos del Estado, indispensable para toda transformación hacia la democracia político y social[33].

Las declaraciones de algunos dirigentes redundaron en ese sentido. Manuel Azcárate planteó que los pactos tenían una dimensión «estratégica, en la medida que, a pesar de sacrificios para los trabajadores, tienen contrapartidas políticas y socioeconómicas estructurales»[34]. Santiago Carrillo los consideraba «punto de partida para, avanzando en esa dirección, crear el advenimiento de una democracia político-económica»[35]. Muchos años después el historiador Josep Fontana, entonces militante del PSUC, recordaba con estupor aquellas justificaciones:

Yo recuerdo haber asistido en Barcelona a un discurso en que Carrillo vino a decirnos que los pactos, recién firmados entonces, implicaban grandes conquistas para la clase obrera –a cambio, claro está, de aceptar la limitación salarial– y que abrían la perspectiva de un futuro de transformación hacia la mítica «democracia económica y social». Pero ¿cómo podía ser así, si se les había olvidado preocuparse del cumplimiento de las contrapartidas, hasta el punto que hubo posteriormente manifestaciones obreras pidiendo el cumplimiento íntegro de los pactos?[36].

El PCE buscó otro sucedáneo a la política de concentración en la elaboración consensuada de la Carta Magna. El representante del partido en la ponencia, Jordi Solé Tura, presionó para que la nueva constitución incluyera todas las cláusulas progresistas posibles, siempre que estas no comprometieran el consenso final[37]. Pero llevó su compromiso con la monarquía a extremos demasiado incómodos para muchos de sus militantes al pronunciarse a favor de la institución cuando el PSOE emitió su poco creíble voto republicano en el hemiciclo, un brindis al sol luego sofocado con el respaldo íntegro a la Constitución.

De nuevo las razones aducidas por el PCE para apoyar la Constitución se movieron entre el realismo inmediato y una prospectiva inverosímil. Por una parte, defendió que el nuevo texto consagraba un sistema democrático homologable a los de su entorno, pues incluía, pese a su sesgo conservador, artículos claramente sociales y progresistas, lo cual era cierto. Por otra, Carrillo

defendió públicamente que se trataba de una constitución «con la cual sería posible realizar transformaciones socialistas en nuestro país»[38], una justificación demasiado forzada que remitía a un horizonte, cuando menos, improbable.

Aquellas decisiones no ayudaron a competir con los partidos ideológicamente contiguos, ni siquiera con los situados a la derecha. El PSOE, que también suscribió los Pactos de la Moncloa, mantuvo un postura más crítica y distante. Para una amplia base de centro-izquierda el PSOE era un partido lo suficientemente moderado, de manera que podía permitirse mantener posiciones beligerantes con que disputarle al PCE parte de su base. Al PCE se le daba por hecho su actitud radical, de modo que los gestos por evidenciar lo contrario merecían, para el sentir común medio, poca credibilidad. El recuerdo históricamente construido de la Guerra Civil por el franquismo, y ahora gestionado interesadamente por unos y otros, condicionó la Transición y propició este juego de disfraces. El miedo inducido por la derecha a que el cambio democrático pudiera desembocar en una nueva contienda penalizaba actuaciones asociadas capciosamente a las de los años treinta o defendidas por los supervivientes políticos de la Guerra[39]. El PCE portaba en este sentido una memoria más incómoda de la Guerra Civil que el PSOE: había sostenido hasta el último momento el esfuerzo bélico, había sido la fuerza más denostada durante la dictadura por su papel en la guerra y, a diferencia del PSOE, estaba dirigida por figuras que habían desempeñado un papel relevante en la contienda. Todo el mundo entendía que un partido de izquierda como el PSOE, encabezado por un joven Felipe González, mantuviera, sobre todo si de un brindis al sol se trataba, una tímida reivindicación republicana en 1978. Pero si Carrillo hacía lo mismo sus adversarios enseguida sacarían a relucir, con toda la carga denigratoria de años de propaganda franquista, su imagen de comisario de Orden Público cuando los fusilamientos de Paracuellos en el 36. Esa presión, ambiental y autoimpuesta, amén de una visión resignificada de la Política de Reconciliación Nacional, llevó también al PCE a respaldar la Ley de Amnistía de 1977. En definitiva, la continuidad al frente de la dirección de quienes lucharon en la guerra era una hipoteca que el PCE intentó contrarrestar con golpes de efectos moderados, y que le limitaba a la hora de sostener una política de izquierdas atrevida y al mismo tiempo moderna.

El núcleo dirigente del PCE resultó disfuncional en muchos sentidos para desarrollar la línea política que pretendía, pero también para dirigir el partido de puertas adentro, porque, en última instancia, era muy poco representativo del

mismo. A medida que el órgano de dirección era más reducido en número y mayor poder tenía en el día a día del partido, menor correspondencia guardaba con el partido en su conjunto. Como veremos, el PCE de la Transición era un partido extraordinariamente diverso y bastante joven en promedio. El Comité Central elegido en el IX Congreso de 1978 era en cierta medida representativo de ambas cosas, pero el Comité Ejecutivo ya lo era en mucha menor medida. Estaba más masculinizado y envejecido y en él estaban sobrerrepresentados los militantes de mayor cualificación profesional y los funcionarios tradicionales del partido[40]. Si en el partido, por ejemplo, había aproximadamente un 11 por 100 de mujeres, en este Comité ejecutivo formado por 45 personas solo había 3, es decir, un 6,6 por 100. Eran Dolores Ibárruri, Leonor Bornao y Pilar Brabo.

Los desequilibrios resultaban profundos cuando se accedía al núcleo dirigente, la Comisión Permanente. La integraban 17 personas: Santiago Álvarez, Manuel Azcárate, Jaime Ballesteros, Pilar Brabo, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, Antonio Gutiérrez Díaz, Dolores Ibárruri, Roberto Lertxundi, Luis Lucio Lobato, Federico Melchor, Francisco Romero Marín, Nicolás Sartorius, Simón Sánchez Montero, Fernando Soto y Ramón Tamames[41]. En aquella comisión la media de edad era de 55 años, cuando la media de edad de los delegados del IX Congreso era de 35, por tanto, 20 años más. De los 17 miembros de la Comisión Permanente, nueve tenían más de 60 años; la presidenta del partido, Dolores Ibárruri, tenía en ese momento 82; y el secretario general, Santiago Carrillo, 63. El eje de la Comisión lo formaban antiguos camaradas formados en la Juventud Socialista Unificada durante la Guerra Civil, dirigidos por Santiago Carrillo. Por la JSU habían pasado –y en la mayor parte de los casos se habían conocido– Manuel Azcárate, Santiago Álvarez, el propio Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, Luis Lucio Lobato, Federico Melchor, Francisco Romero Marín o Simón Sánchez Montero. Cuatro miembros de aquella Comisión, la presidenta Dolores Ibárruri, el secretario general Santiago Carrillo, Manuel Azcárate, Ignacio Gallego y Federico Melchor habían pasado prácticamente toda la dictadura en el exilio.

A la Comisión Permanente, formalmente constituida, se sumaba el poder de facto que ejercía en el día a día el llamado «aparato». Estaba integrado por trabajadores en nómina del partido a tiempo completo, procedentes muchos de la JSU, bregados en la guerra, en el exilio y, en bastantes casos, en las estancias clandestinas en el interior y en las cárceles de la dictadura. El aparato se articulaba en distintas comisiones (de cuentas, de propaganda, de formación o de organización) e incluía a varios funcionarios que no tenían un cometido

formalizado, pero que intervenían de manera determinante en los asuntos internos, a veces con tanto celo como ineficacia. Por encima de todas las comisiones estaba la Comisión de Organización, dirigida con mano de hierro por Francisco Romero Marín (El Tanque)[42].

EL EUROCOMUNISMO, UN FENÓMENO IDEOLÓGICO DE TRANSICIÓN

La ideología es uno de los conceptos más polisémicos de las ciencias sociales[43]. Su multitud de significados podría agruparse en tres estratos semánticos. Las ideologías son, por una parte, visiones más o menos articuladas del mundo, que prefiguran u orientan una acción, cuando no son, al defenderse públicamente, una acción política en sí misma. Incluyen, en este caso, teorías políticas más o menos elaboradas, así como preceptos éticos: marcos normativos en los cuales se inspiran o con los cuales se articulan de algún modo. La ideología expresa que inspiró al PCE, o en la que el PCE dijo inspirarse en la Transición, fue el eurocomunismo. Pese a sus lagunas teóricas y la ambigüedad de algunos de sus valores, el eurocomunismo constituyó, en palabras de un crítico tan lúcido como Manuel Sacristán, la propuesta más elaborada de los partidos comunistas occidentales a la hora de analizar la compleja realidad de la década de los setenta[44]. En el caso concreto de España nunca hasta entonces se escribió tanto desde perspectivas politológicas, filosóficas, sociológicas, económicas o jurídicas como cuando se escribió en nombre del eurocomunismo o alentado por él.

El eurocomunismo, como fenómeno explícito –así denominado primero por los periodistas y enseguida por sus partidarios–, se desarrolló en la década de los setenta, especialmente en España, Francia e Italia, aunque también tuvo sus ecos en países tan distintos como México y Japón[45].

El eurocomunismo fue el intento de diseñar una estrategia nacional, democrática e institucional al socialismo para los países del capitalismo avanzado. En tanto que nacional, reivindicaba la adecuación de toda estrategia de transformación a la idiosincrasia, a la evolución histórica y a las coyunturas de cada país, lejos de la aplicación de modelos abstractos o importados. Si se denominó eurocomunismo, no fue porque aspirase al desarrollo de una estrategia conjunta

en un marco trasnacional en vías de integración, como podía ser el de la Europa occidental; sino porque sus valedores, principalmente europeos, reclamaron una vía específica al socialismo para cada uno de sus países, comprometiéndose al intercambio de experiencias análogas. Así lo hicieron, por ejemplo, en la Cumbre Eurocomunista celebrada en Madrid en marzo de 1977, en la que Santiago Carrillo estuvo acompañado de Georges Marchais, secretario general del Partido Comunista Francés, y de Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano[46].

En tanto que estrategia democrática, el eurocomunismo recuperaba la idea del socialismo como intensificación y expansión de la democracia a todos los ámbitos de la vida, bebía de la crítica a su negación práctica en el socialismo real y expresaba la posibilidad de poder construir una nueva forma de socialismo sin necesidad de limitarla siquiera circunstancialmente. En tanto que institucional, el eurocomunismo huía de la defensa de la democracia en abstracto. La identificaba con la arquitectura concreta del Estado de derecho, basada en el reconocimiento y la garantía de derechos y libertadas individuales, el pluralismo político y la celebración periódica de elecciones. Suponía una reconexión con las tradiciones republicanas en las que se forjó el socialismo; la identificación con los Estados sociales de derecho construidos en la postguerra; y el compromiso de transitar al socialismo a través de los cauces permitidos por estas instituciones, que deberían respetarse en una futura sociedad socialista[47].

Esta estrategia entraba en tensión con el lugar que en el imaginario comunista había ocupado la Unión Soviética, y en colisión con la tutela que, en un sentido distinto al de la propaganda anticomunista de la Guerra Fría, seguía ejerciendo sobre los partidos comunistas. En primer lugar, era una estrategia muy distinta a la seguida en su día por los países del socialismo real, cosa que a la URSS no le importaba demasiado. En segundo lugar, era una estrategia que de algún modo debía poner distancias con los países del socialismo real, por necesidad de autonomía y por el descrédito de este modelo entre buena parte de la clase obrera occidental. Distanciarse de la URSS era obligado para no hipotecar el proyecto del partido a los intereses de Estado soviéticos, que apoyaban o frenaban procesos de trasformación según afectaran a su estrategia geopolítica de la Guerra Fría. Y distanciarse de la URRSS era urgente para reforzar su credibilidad democrática, no ante los poderes fácticos o adversarios, sino ante la mayoría de las clases populares, que habían interiorizado como propios los valores democráticos[48].

El eurocomunismo trató con poca fortuna de abordar la difícil dimensión prospectiva y propositiva de toda estrategia revolucionaria: el gran debate acerca de los tiempos de la acción política. Lo hizo sin sustraerse del todo a la disyuntiva reforma / revolución, para entonces inservible; más bien buscando una abstracta solución de compromiso rayana en la cuadratura del círculo, y ahondando, además, en la propuesta «etapista» que había caracterizado a los partidos comunistas que nunca lograron tomar el poder. El eurocomunismo defendía la posibilidad de desplegar una estrategia gradual al socialismo a través de fases sucesivas, en cada una de las cuales se irían creando las condiciones necesarias para enlazar de manera pacífica e irreversible con la siguiente. Entre la democracia realmente existente en Europa y el socialismo democrático que se pretendía construir habría una gran etapa bisagra, en España llamada «democracia política y social», donde al cuerpo del capitalismo se le iría inoculando el virus del socialismo hasta que mutase en un organismo nuevo[49]. El problema de España es que arrastraba cierto retraso en la secuencia trifásica, y antes de llegar a esa etapa de la democracia político social debía terminar de salir de una dictadura y recorrer simultánea y aceleradamente las décadas de constitucionalismo social de postguerra.

La posibilidad de desarrollar esta estrategia pacífica se cifraba en las expectativas puestas en un Estado más voluminoso y perfeccionado, ya con una considerable capacidad de intervención económica. Si bien este Estado seguía funcionando en algunos de sus niveles como instrumento de las clases dominantes, resultaba susceptible de instrumentalización en sentido inverso, tras décadas de perfeccionamiento democrático y ocupación progresiva por trabajadores públicos de extracción social popular. La posibilidad del socialismo se cifraba igualmente en el desarrollo de unas fuerzas productivas cada vez más potentes, tecnificadas y concentradas en el régimen de propiedad. Su complejidad y optimización parecían demandar un nuevo marco de relaciones de producción socializadas y coordinadas por trabajadores cada vez más cualificados y experimentados en tareas de gestión. Los debates acerca del sujeto del cambio remitían a la formación de un bloque social amplio unificado por una experiencia común de masificación formal en el trabajo y por la conciencia creciente de su potencial autonomía, resultante de su experiencia sindical y el disfrute de derechos civiles. En torno a este bloque se podrían aglutinar todos los sectores sociales agredidos por el capitalismo, algo que en el caso de España se concretó en la ya citada Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura[50].

El instrumento político para llevar a cabo esta empresa transformadora debería

ser «una formación de nuevo tipo» amplia y plural, en la que el Partido Comunista renunciaría a desempeñar el papel de partido vanguardia en la acepción clásica del término[51], pero donde ejercería su hegemonía en los términos de dirección moral y cultural que esbozara Gramsci, una de las figuras en las que se inspiraban (o que instrumentalizaban) los teóricos eurocomunistas.

Como se ha señalado, las ideologías contienen presupuestos teóricos y normativos; pero las ideologías incluyen también tradiciones culturales conformadas por liturgias consagradas y revisadas, por formas corporativas de argumentación, por gestos y tonos, o por referencias a un pasado lleno de acontecimientos fundacionales, gestas honrosas, figuras emblemáticas o contrafiguras denostadas. Estas experiencias configuran múltiples narrativas e identificaciones, expresadas en todo tipo de momentos y soportes: un mitin, una reunión, una bandera, un folleto, una canción, una pintada, una consigna en una manifestación, un ademán recurrente en un conflicto laboral o una conversación de bar con un camarada. Desde estas tradiciones móviles los militantes suelen dar sentido a su compromiso y, cuando este compromiso es intenso y prolongado, a algo que pudiéramos llamar su identidad política, incluso su identidad a secas. En la Transición el PCE realizó una contundente revisión de su tradición, que afectó a esos imaginarios e identificaciones. El caso más elocuente fue el abandono del leninismo en su IX Congreso de abril de1978. Lo que se produjo entonces fue el abandono de un icono fundamental de la tradición del partido y su sacrificio público ante el solemne altar de los medios de comunicación de masas. Resultó traumático, impactante o curioso, según qué casos, para sus militantes.

Además, el debate sobre leninismo no trató realmente del valor histórico de la figura de Lenin, o sobre la actualidad u obsolescencia de sus propuestas, o sobre el sentido de su legado y su instrumentalización posterior, por más que los intelectuales orgánicos del PCE se vieran urgidos a abordar en unos meses tan complejos asuntos. Sería ingenuo pensar que, cuando en 1978 los intelectuales comunistas estaban hablando de Lenin, estaban hablando realmente del dirigente bolchevique que ideó el asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado en 1917. El debate sobre el leninismo funcionó como un catalizador de debates latentes en el comunismo de los setenta.

La propuesta de eliminar el leninismo de la definición del partido la hizo Santiago Carrillo sin previo aviso durante su viaje a EEUU en la segunda mitad de noviembre de 1977. Allí planteó ante la prensa que había «ciertos postulados

leninistas que consideramos superados. Nuestra definición más exacta sería la de “partido marxista”: precisamente el de Lenin»[52]. Las formas y el lugar elegidos para anunciarlo ponen de manifiesto que la decisión fue concebida como un golpe de efecto mediático con el que proyectar una imagen más funcional para las batallas inmediatas de la Transición. La mirada sobre el pasado estuvo más que troquelada por las urgencias del presente. A la altura de 1978 se produjo una tensión fuerte dentro del PCE entre transición y tradición, entre la transición política a la monarquía parlamentaria por la que se estaba apostando y una tradición ideológica que se expresaba en códigos e iconos ancestrales, a su vez representativos de aspiraciones ahora imposibles o incómodas. La contradicción se resolvió a costa de esas formas de tradición.

Esta instrumentalización del debate del leninismo nos remite a otro significado del término «ideología», útil para entender al PCE a la Transición: aquel que en la tradición impulsada por Marx la caracterizaba como una forma de falsa conciencia. Depurándola de su resabio cientificista, podríamos hablar más bien de los usos opacos de los que son objetos las ideologías. Estos usos son habituales en los partidos de la izquierda, que pocas veces encarnan el modelo de relaciones armónicas y transparentes que pretenden construir a nivel social. Atravesados por relaciones de poder, les habita el mismo mundo que combaten. Nuestra tesis es que el contexto histórico de fondo, la dinámica de la Transición y la cultura política de los dirigentes del PCE fueron un incentivo para el despliegue de esos usos opacos de la ideología. Si tuviéramos que clasificar estos usos opacos de la ideología en el PCE de la Transición podríamos hablar de la ideología como mecanismo evasivo ante frustraciones múltiples; de la ideología como distracción frente a debates comprometedores; de la ideología como instrumento de competencia con partidos rivales; de la ideología como elemento identitario sin apenas repercusión en la práctica política; de la ideología como «comunicación sistemáticamente deformada» en el marco de las relaciones internas de poder; de la ideología como racionalización a posteriori; o de la ideología como sublimación de pulsiones que no se podían satisfacer[53].

Por ejemplo, el debate sobre el leninismo en la primavera de 1978 sirvió a la dirección para eclipsar los debates de mayor enjundia que el PCE debía haber abordado sobre decisiones vitales tomadas en los meses previos, sobre los pobres resultados electorales y sobre la conveniencia de renovar el equipo dirigente. Al mismo tiempo del debate del leninismo sirvió para dividir a quienes pudieron conformar un grupo crítico al respecto de todos esos temas. Sobre la ideología como instrumento de racionalización a posteriori de decisiones que respondían a

motivos menos presentables o poco épicos, hemos visto los casos de los Pactos de La Moncloa y la Constitución, presentados como pasos necesarios en la ambiciosa estrategia eurocomunista. La racionalización fue un recurso habitual en un partido que se sintió impelido a justificar los comedidos pactos de la Transición con el beligerante lenguaje del antifranquismo.

El curso que tomó la Transición impidió que los militantes comunistas dieran cauce a su natural pulsión transformadora, muy estimulada por un contexto previo de movilizaciones en el que tantas cosas parecían posibles. Ante ese bloqueo el PCE tuvo que reprimir esa pulsión transformadora, o bien sublimarla en una construcción ideológica que proyectara para un futuro incierto su satisfacción, y justificara, mientras tanto, las renuncias inmediatas. El eurocomunismo desempeñó esa función sublimadora. Pero las sublimaciones pueden tiranizar en exceso si exigen renuncias prolongadas que afectan a la propia identidad de los sujetos. Cuando esto sucede el organismo en cuestión enferma de neurosis. El eurocomunismo terminó funcionando como una sublimación a la deriva que exigía a la militancia del PCE renuncias que, si bien pudieron aceptarse una a una en su momento, se volvieron lacerantes cuando se comprobó que, en su conjunto, no conducían a objetivos ulteriores. A principios de los ochenta una «neurosis colectiva» se apoderó del PCE, desatando una crisis interna que lo hizo saltar por los aires.

Finalmente, aquellos debates ideológicos del PCE de la Transición se desarrollaron como lo que Jürgen Habermas llamaría «una comunicación sistemáticamente deformada»[54]. Es decir, como debates que no se dirimieron en función del mejor argumento, sino de la posición de poder de cada una de las partes. No solo el sentido último del voto, sino la configuración de las posturas y las formas de exponerlas estuvieron modeladas y limitadas por la presión de los intelectuales orgánicos de la dirección y por la capacidad que esta tenía para sancionar abierta o sutilmente a los discrepantes.

UN DESPERDICIO Y UN IMPOSIBLE: INTROYECCIÓN INTELECTUAL Y PROYECCIÓN MEDIÁTICA

Desde mediados de los sesenta el PCE se fue convirtiendo en el partido más

influyente de la intelectualidad democrática, tanto si entendemos la noción de intelectual en un sentido estrecho (la del pensador humanista que desde su posición de prestigio en una rama del saber o las artes se pronuncia políticamente sobre el acontecer general), como en un sentido más laxo (la de la multitud de docentes, técnicos y profesionales cualificados dispuestos a intervenir por lo menos en su ámbito sectorial desde una perspectiva política más amplia). A la ascendencia del PCE sobre unos y otros ayudaron varios factores. El perfil sociológico y cultural de los intelectuales venía cambiando. Salidos de universidades masificadas y volcados al trabajo asalariado, la conciencia de su nueva condición social les hacía más proclives a la causa de los trabajadores. Por otra parte, el marxismo, en sus múltiples acepciones y corrientes, ocupaba un lugar importante en las tendencias científicas y culturales de la época, sobre todo a raíz de la revitalización que, frente a las visiones esclerotizadas, venía experimentando en campos tales como la historiografía, la economía, la antropología, la teoría de la estética y la cultura[55]. Al atractivo que pudiera ejercer el marxismo se sumaba un atractivo mayor: el de la lucha contra la dictadura. El PCE era el partido más disponible para muchos intelectuales que querían rebelarse contra la tiranía franquista y su pobreza cultural. Finalmente, la incorporación de intelectuales al PCE no hubiera cobrado tal entidad si no se hubieran trazado los cauces para ello. El PCE diseñó una estructura sectorial muy operativa que agrupaba a los militantes por su perfil profesional y en sus lugares de trabajo. Así, cuando el PCE fue legalizado contaba en Madrid con una organización de abogados integrada por 153 personas. Poco antes había organizado un encuentro de economistas en la capital al que asistieron 130 profesionales[56].

Sin embargo, el PCE no supo aprovechar ese capital. En el caso de los intelectuales se puso de manifiesto una de las contradicciones que atenazó al PCE durante la Transición en otras esferas: su incapacidad para enriquecerse de puertas adentro con los avances realizados de puertas afuera. El PCE fue durante un tiempo el partido más influyente entre la intelectualidad democrática, pero no supo nutrirse de sus aportaciones ni incorporarlas a la elaboración de la línea política del partido. Los de mayor compromiso orgánico fueron utilizados para todo tipo de tareas burocráticas y de representación. Los más vistosos y menos constantes para rellenar listas electorales y firmar manifiestos. A pesar de la importancia que se le atribuyó en los documentos oficiales, el partido no promovió lo suficiente el trabajo teórico, ni este se tomó como referencia para diseñar la línea política. La dura trayectoria de guerra y clandestinidad del PCE, el ritmo frenético de la Transición y la propia mentalidad de su núcleo dirigente

–que se creía autosuficiente desde el punto de vista teórico, pese a sus ostensibles lagunas– fueron factores que impidieron que en el PCE pudiera arraigar una cultura de integración provechosa de los intelectuales[57].

A medida que la Transición avanzaba la militancia de intelectuales en el PCE fue declinando. A principios de los ochenta la crisis era un hecho que podía apreciarse en el repliegue de muchos de ellos a sus carreras profesionales o en el acercamiento de muchos otros al PSOE. A esta crisis de los intelectuales en el PCE contribuyeron varios factores. Con el tránsito a los ochenta se abrieron paso nuevas tendencias culturales de cariz postmoderno, que cuestionaban la noción misma de compromiso intelectual por peligroso, inútil o antiestético. Por otra parte, con el reemplazo de la dictadura muchos intelectuales dieron por conquistados sus objetivos, poniendo fin a su compromiso. Por el contrario, aquellos intelectuales que habían luchado por objetivos más ambiciosos terminaron sucumbiendo al desencanto. Algunos intelectuales se fueron al PSOE porque desde las escasas posiciones institucionales y culturales alcanzadas por el PCE no podían poner sus capacidades técnicas al servicio del proyecto de mejora social y democrática del país por el que honestamente lucharon. Otros porque en un PCE a la baja no podrían ascender a las posiciones de poder, confort, remuneración y prestigio que les iba a proporcionar el PSOE. A la crisis de la militancia intelectual del PCE afectó el desmantelamiento, a instancias de la dirección, de la mayor parte de la organización sectorial, donde profesionales e intelectuales habían intervenido con relativa autonomía. La organización sectorial se acabó disolviendo en una estructura territorial más fácil de controlar por la dirección y funcional para el nuevo cometido principal del partido: preparar elecciones en circunscripciones provinciales o locales[58].

Con la ampliación de las libertades y el fin de la censura expresa, se produjo una suerte de virtualización de la política, por la cual esta se desplazó en cierta forma del conflicto social al debate mediático. Aquel cambio en el ecosistema comunicativo perjudicó a un partido como el PCE, que había arraigado su influencia en la conflictividad social y el trabajo cultural a nivel capilar, que sufrió en democracia la hostilidad de los principales medios de comunicación y que no fue capaz de potenciar otros propios o cercanos. Triunfo, una publicación antaño prestigiosa y relativamente afín, venía declinado desde mediados de los setenta. La Calle, un periódico más cercano de reciente creación, no llegó a abrirse hueco entre la multitud de diarios, antiguos y nuevos, bien financiados. El proyecto de convertir Mundo Obrero, el periódico del partido, en un diario de consumo público, como eran L’Humanité en Francia o L’Unità en Italia, resultó

económicamente ruinoso[59].

La nueva esfera mediática condicionó la política del PCE y limitó sus posibilidades. El consenso que sellaron los partidos en la etapa central de la Transición tuvo un vehemente correlato mediático. Con la Transición se pasó de la censura de lo que no debía expresarse al acuerdo tácito acerca de lo que debía decirse, pero el valor que se concedía a lo dicho variaba también según quién lo verbalizase. La mesura y el afán colaborativo del PCE fueron tan incentivados desde los cenáculos mediáticos como al final cuestionados por insuficientes o poco creíbles. La actitud hacia el PCE de los principales periódicos se movió entre el tosco anticomunismo de diarios como ABC y la hostilidad más sofisticada de El País. Para el primero el PCE seguía siendo el viejo lobo totalitario disfrazado ahora de cordero eurocomunista. Para el segundo el partido era un residuo del pasado que no respondía a las modernas tendencias de las sociedades europeas y cuyos tics autoritarios en su funcionamiento interno le invalidaban como portador de un proyecto de democratización de la sociedad[60]. En cierta cultura mediática progresista de la Transición se penalizó tanto al franquismo como al antifranquismo, hasta el punto de presentar a este como un residuo de aquel. El partido que había cumplido una loable función de desgaste de la dictadura representaba por eso mismo un anacronismo. En cualquier caso, llama la atención que el PCE se obstinase en escenificar mediáticamente unos cambios que le tensionaban internamente e hipotecaban parte de su autonomía, cuando estos cambios eran, con independencia de su autenticidad o falta de ella, desacreditados por los medios.

¿QUIÉNES ERAN? NOTAS Y ENFOQUES PARA UNA CARACTERIZACIÓN DE LA MILITANCIA COMUNISTA EN LA TRANSICIÓN

Hace tiempo que buena parte de la historiografía sobre el PCE superó la crónica tradicionalmente elitista de los partidos políticos, incorporando a los cuadros y militantes de base como protagonistas de su historia. Los capítulos de estos dos volúmenes dan cuenta de ello; por eso nos remitimos a los específicos sobre la Transición para caracterizar mejor a aquellos hombres y mujeres.

No obstante, el trazado de los rasgos de la militancia comunista en la Transición es una tarea difícil, que requerirá todavía de mucha investigación. La primera cuestión por determinar sería la de su peso numérico, algo complicado por la difusa frontera entre afiliados formales y «compañeros de viaje», así como por los posibles desajustes entre las cifras oficiales de filiación del partido, probablemente al alza, y las reales, que habría que determinar investigando cada territorio. Con motivo del IX Congreso, celebrado en abril de 1978, el PCE daba la cifra de 201.740 afiliados. Al determinar su procedencia quedaba patente su desigual arraigo territorial. El PSUC era la organización más numerosa, con unos 40.000 afiliados; le seguían Andalucía, con 39.373; Madrid, con 31.895; País Valencià, con 22.060; y Asturias, que contaba oficialmente con 10.940, un número particularmente elevado con respecto a la población de la región[61].

La principal dificultad para caracterizar a la militancia comunista deriva de su extraordinaria diversidad. Es un reto clásico de las ciencias sociales segregar los rasgos comunes de un colectivo de aquellos que pudieran ser específicos de sus componentes; y una tentación poner el énfasis en lo diferente cuando se pretende asir la complejidad. El reto se ha venido afrontando con mejor o peor fortuna: de la abstracción simplificadora a la individualización insignificante, pasando por el prurito taxonómico, los saldos entre diferencias y semejanzas o la construcción de tipos ideales. A la caracterización concreta de las militancias han aportado su enfoque particular la historia, la politología, la sociología, la antropología o los estudios culturales. Identidad, imagen, cultura y memoria han sido conceptos frecuentes –tan operativos en unos casos como correosos en otros– para responder, en última instancia, a la pregunta acerca de quiénes eran exactamente aquellos hombres y mujeres[62].

Para tratar de responder a esta gran pregunta es necesario formularse otras menores, que admiten una respuesta más o menos exacta, como en qué trabajaban, si habían estudiado, dónde vivían, qué edad tenían cuando empezaron a militar o si estaban casados, eran solteros o tenían hijos. Otras requieren de una narración sostenida: en qué conflictos participaron, qué repertorios de acción pusieron en marcha o cómo era su cotidianidad militante, su sociabilidad, sus relaciones interpersonales o su sexualidad. Hay otras preguntas más escurridizas, como qué pensaban, qué sentían o qué soñaban. Y otras más mundanas y no por ello menos significativas, que alumbran respuestas a las anteriores: qué leían, qué música escuchaban, cómo vestían, cómo se divertían o cómo se expresaban. Para responder a estas preguntas deberíamos formulárselas directamente a ellos. Eso, por fortuna, se puede hacer todavía en

muchos casos a través de la historia oral, considerando la falla y la tensión, tan estimulantes, entre el tiempo vivido y el momento de la evocación. También se puede hacer buscando las fuentes de la época que dejaron registro de su militancia y su vida: grabaciones, fotografías o cartas personales.

La diversidad de la militancia comunista española era tremenda, derivada de profundas diferencias de género y generacionales, de sus lugares de procedencia y residencia, de sus dedicaciones profesionales, de sus niveles formativos, de sus organizaciones de encuadramiento y de la multiplicidad de experiencias asociadas a cada uno de esos parámetros. Si pusiéramos el foco, por ejemplo, en el PSUC en 1978, nos encontraríamos con viejos combatientes de la Guerra Civil que habían sufrido represión en forma de tortura, cárcel, pérdida de empleo y estigma social; con militantes que combatieron también en la guerra, pero partieron al exilio y acababan de volver; con aquellos que ingresaron en los cincuenta y militaron celosamente en las sombras de la clandestinidad; o con militantes más jóvenes, que se incorporaron en el tardofranquismo o en plena Transición, participando en los movimientos sociales que inundaron el espacio público. Si nos fijamos en el PSUC de 1978, nos encontramos con militantes oriundos de Cataluña, catalanohablantes o no, y con una cantidad enorme de militantes procedentes, a través de las sucesivas oleadas migratorias de los sesenta y setenta, de los pueblos de Extremadura, Andalucía, Murcia o las dos Castillas. La mayoría eran hijos de los derrotados y represaliados de la Guerra Civil, pero entre las filas del PSUC había muchos descendientes de quienes combatieron en el ejército de Franco, incluso vástagos de prominentes familias del régimen.

La mayoría de la militancia pertenecía a las clases populares. En el área metropolitana de Barcelona destacaba el proletariado urbano de la industria, la construcción y el transporte, pero también había trabajadores del pequeño comercio y el sector servicios. En el PSUC eran numerosos los técnicos y profesionales: médicos, abogados, ingenieros, administrativos, gestores, docentes, periodistas, etc. Contaba con cientos de estudiantes de universidad y secundaria, y también, como se ha dicho, con figuras destacadas del mundo de la ciencia, el pensamiento, la cultura y las artes. Las dedicaciones profesionales revelaban en buena medida la formación reglada que habían recibido, pero a esta había que sumar la formación proporcionada por la militancia, o la adquirida de forma autodidacta en el marco de una cultura política donde el saber era un valor. Y, por supuesto, aquel partido estaba tensionado por una militancia mayoritariamente masculina, que reproducía viejos y nuevos esquemas hetero-

patriarcales, y por el empuje de una militancia femenina en aumento, cada vez más explícitamente feminista en sus planteamientos y actitudes[63].

Si ampliamos la escala de observación al conjunto de España, vemos cómo se reproducía buena parte de esta diversidad, a la cual habría que sumar rasgos territoriales específicos, derivados de condiciones sociohistóricas y tradiciones militantes específicas. Se podrían poner dos ejemplos: la tradición de luchas en torno a la propiedad de la tierra (aparceros y jornaleros) de Extremadura y Andalucía; o la tradición sindical de los obreros mineros de Asturias. Consideradas todas estas variables por separado, habría que contemplar sus múltiples combinaciones, así como trazar, lejos de cualquier linealidad, las relaciones entre, por una parte, condición social, dedicación profesional, nivel de estudios, género y generación, y, por otra, orientación ideológica, imaginarios y culturas militantes. Mi estudio sobre las actitudes de la militancia ante el eurocomunismo y el debate sobre leninismo en el PCE de 1978 creo que puso de manifiesto tres cosas: que no se podía establecer una correlación directa entre, por ejemplo, condición sociolaboral y posición política; que desde distintas condiciones se defendieron las mismas posiciones; y que, sin embargo, esas mismas posiciones se defendieron de una manera diferente que podía explicarse, a su vez, a partir de esas experiencias y condiciones sociales específicas.

Los datos proporcionados por el partido en el IX Congreso nos ofrecen una información solo aproximada de los militantes del partido, por su parquedad, y porque no deja de ser una información oficial procedente de un estudio sin pretensiones académicas. Según estos datos, el 60,63 por 100 de los militantes del PCE eran «obreros industriales», mientras que el 11,67 por 100 lo formaban «obreros agrícolas». Alrededor del 10 por 100 del partido lo formaban «técnicos, profesionales y estudiantes», sectores que el partido solía encuadrar en la confusa categoría de «fuerzas de la cultura», que otras veces restringía a intelectuales de alta cualificación académica o proyección pública. Otras categorías incluían a los «agricultores y ganaderos» (5,92 por 100) o a los «empresarios, comerciantes y autónomos» (2,95 por 100). Bajo la categoría de «varios» se incluía a un nada desdeñable 9,56 por 100[64].

El PCE de la Transición estaba muy masculinizado, a pesar de que el porcentaje de mujeres superase probablemente al de la mayoría de los partidos del arco parlamentario y de que su implicación en la base fuera intensa. Los datos aportados hablan de un 11,15 por 100 de mujeres frente a un 88,85 por 100 de hombres. En cuanto a la edad de los militantes, el 72,11 por 100 tenía menos de

50 años. Un 25,62 por 100 estaba entre los 26 y los 35, un 24,41 por 100 entre los 36 y los 50 y un 21,33 por 100 tenía menos de 25 años. La media de edad de los delegados que acudieron al IX congreso era de 35 años[65]. Si consideramos estos datos estaríamos hablando de una militancia multigeneracional y relativamente joven. Otros datos aportados nos hablan del momento de ingreso en el partido de los delegados al congreso, que pudieran no ser del todo representativos del conjunto del partido. Ponen de manifiesto que la mayor afluencia se produjo al calor del incremento de las movilizaciones sociales contra la dictadura, cuya fecha de arranque podríamos situar simbólicamente en 1962. El porcentaje más elevado de delegados, un 37,83 por 100, se había incorporado entre 1971 y 1976; entre 1961 y 1970 lo había hecho el 32,04 por 100. Entre 1951 y 1960 se había incorporado el 9,3 por 100; un 9,06 por 100 de los delegados se habían afiliado antes de 1939, durante la República y la Guerra Civil; en solo el último año se había afiliado el 7,3 por 100; y el menor porcentaje, un 4,28, correspondía, lógicamente, a los terribles años de la postguerra, 1940-1951[66].

Por tanto, el partido había cambiado su fisionomía en la Transición, con la entrada masiva de nuevas generaciones que, en un sentido muy laxo, pudiéramos llamar «sesentaiochistas», pues incluirían también a quienes ingresaron con posterioridad a esa fecha, pero influidos por tendencias posteriores asociadas simbólicamente a su impacto. Una imagen binaria –que alumbra una verdad y ensombrece otras– es la que enfrenta a estas generaciones de militantes «sesentaiochistas» con los partidos comunistas clásicos. Es cierto que la llamada nueva izquierda, los movimientos autónomos o asamblearios o las organizaciones de la izquierda revolucionaria de este periodo se tallaron, en toda Europa, en oposición a la ortodoxia, la acomodación o el conservadurismo de los partidos comunistas procedentes de la Komintern; pero no lo es menos que esos imaginarios, tendencias y jóvenes militantes entraron en estos mismos partidos comunistas, renovándolos, aumentando su influencia social y también, como es el caso del PCE, tensionándolos internamente.

La tensión se percibe al recordar la media de edad del núcleo dirigente del PCE en la Transición y el momento de ingreso en el partido de la mayoría de sus miembros. La edad media de la Comisión Permanente, formada por las 17 personas antes mencionadas, era aproximadamente de 55 años, por tanto 20 años más que la media de edad de los delegados. De estos 17 miembros, 10 habían ingresado en el PCE o la JSU antes de 1939[67].

Este contraste pone de manifiesto la existencia de culturas políticas y militantes susceptibles de delimitación, aunque sea en términos típico-ideales. Estas resultaron más nítidas en los momentos de conflicto. Pero los tipos-ideales no son estereotipos. Ni siquiera en términos típico-ideales los conflictos del PCE, menos aún su diversidad, pueden reducirse a dos grupos, como a veces se ha planteado. De un lado, una generación curtida en la experiencia de la guerra o la lucha clandestina, de perfil obrerista y educada en el culto a la URSS y en la obediencia a los dirigentes. De otro, una generación joven, cualificada y formada en las asambleas de los movimientos sociales. Esta imagen binaria alumbra parte de una verdad, pero a medida que proseguimos en ella los estereotipos se vuelven más rudos. Así, se ha hablado de manera exagerada de una vieja militancia abnegada, conservadora en lo moral y autoritaria en las formas que estaría enfrentada a una nueva generación creativa, hedonista y libertaria. En el PCE de la Transición existió una importante tensión generacional, pero esta no es comprehensiva de toda su viveza y conflictos, pues obvia, además de las importantes diferencias entre las distintas cohortes que formaban esas generaciones, actitudes que no dependían de la edad.

Las generaciones que pudiéramos llamar «sesentaiochistas», dominantes numéricamente en el PCE, surgieron de un fuerte crecimiento demográfico. Hijos del baby boom –más tardío y contenido en España–, adquirieron una conciencia tácita de su fortaleza inspirada en la experiencia cotidiana de saberse muchos y desbordar espacios. También en España, como en Países Bajos, Gran Bretaña, Italia y Alemania occidental, la población universitaria se multiplicó por dos durante la década de los sesenta[68]. Jóvenes y numerosos, pero bloqueados por las generaciones precedentes, su compromiso político tuvo mucho de revuelta antipatriarcal y antigerontocrática. En el caso de España la revuelta tenía un sentido añadido, pues se producía contra un régimen ultraautoritario forjado en una guerra lejana y encabezado por un dictador octogenario. No es de extrañar que en la Transición jóvenes militantes se resistieran al poder, muchas veces autoritario, de una dirección cuyo núcleo lo componía la vieja guardia procedente de la JSU. Pero esta realidad encubre otra, la del aprendizaje que estas nuevas generaciones recibieron de las anteriores, revelando una cadena de eslabones entre luchas del pasado y el presente, que ni la feroz represión logró romper del todo. Jóvenes sindicalistas de CCOO fueron estimulados en las fábricas por trabajadores mayores, que les transfirieron el legado de su militancia anterior en la CNT o la UGT[69].

De mediados de los sesenta a mediados de los setenta se produjo en toda Europa

un incremento de la conflictividad laboral[70]. Respondía al profundo malestar de una nueva generación de trabajadores por las limitaciones del pacto social de postguerra y por su cumplimiento a mayor beneficio de los de arriba. En España, donde no había tenido lugar semejante pacto por la naturaleza antisocial de la dictadura, el malestar obrero juvenil se vio incrementado en el contexto de un modelo desarrollista de crecimiento económico donde las desigualdades eran mayores, el acceso al consumo más lento y no se edificó, en sentido estricto, ningún Estado del bienestar[71].

La creciente automatización, burocratización y reglamentación de la producción generó una sensación de alienación y extrañamiento vital en las nuevas generaciones. Se veía multiplicada por la fragmentariedad, el aislamiento y la rígida asignación de roles en las sociedades desarrolladas. En aquellas generaciones empezó a pesar el ansia de libertad y disfrute que dejaban a su paso unas experiencias de ocio y consumo esporádicas y fungidas, tras las cuales los jóvenes obreros eran devueltos a su mundo gris y rutinario. Para quienes las vivían de manera continuada, por su mejor posición social, podían resultar insulsas, adocenadas e hipócritas. Como prolongación o alternativa, aquellas generaciones desarrollaron formas autónomas de sociabilidad y producción cultural que trasgredían convencionalismos morales y estéticos. La politización radical de aquellos anhelos alumbró nuevos proyectos orientados a construir relaciones sociales igualitarias y una forma de vida nueva, más libre, auténtica y especial, centrada, al mismo tiempo, en el autodesarrollo personal y la integración comunitaria. El objetivo era no solo transformar la sociedad, sino cambiar la vida[72].

En España la sensación de opresión y rigidez vital era mayor por la supervivencia de una dictadura que contagiaba su autoritarismo a todas las esferas de la vida social, y cuyos procedimientos de vigilancia, control y castigo eran más duros y autoevidentes. Las nuevas formas de ocio y consumo abiertas por el desarrollismo, en cierta medida homologables a Europa, generaban en algunos jóvenes una insatisfacción particular, en la medida que se habían hibridado con los viejos valores opresivos del nacionalcatolicismo. El desarrollismo sirvió para que el régimen levantara nuevos consensos, pero espoleó también malestares propios de la época, alumbrando necesidades y aspiraciones que él mismo negaba. Acabar con la dictadura resultaba obligado para construirse una vida nueva.

Estas generaciones militantes europeas buscaron referentes políticos nuevos,

diferentes en muchos casos a los del antifascismo, procedentes de las luchas antiimperialistas del llamado Tercer Mundo. Pese a la censura, también a España llegaron en tiempo real tanto los ecos de las protestas en Europa como las rebeliones de aquellos lugares remotos. Lo hicieron a través de una información oficial que decodificar; a través de prensa, editoriales o cineclubes clandestinos o semitolerados; o a través de la experiencia de la migración. La revolución cubana, la independencia de Argelia, la ofensiva del Tet en Vietnam, el Mayo francés, la Primavera de Praga, las revueltas en Italia, el Chile de Allende o la Revolución de los Claveles en la vecina Portugal fueron acontecimientos que poblaron el imaginario de los jóvenes comunistas españoles. Se trató de acontecimientos que renovaron la confianza en la acción política subjetiva, pues venían a quebrantar el estatismo de los equilibrios de la Guerra Fría, también suscritos por la URSS. Al vigor de esta nueva generación ayudó la distancia con la terrible experiencia de la represión masiva en la Guerra Civil y la postguerra, que había exterminado, expulsado o atenazado a buena parte de los antiguos militantes de la izquierda. El régimen de Franco no dejó de reprimir y matar, pero a un nivel mucho menor por la conciencia del trabajo macabro bien realizado tiempo atrás, la presión internacional, los nuevos consensos adoptados y el desborde de la oposición.

Aquellas generaciones de la Transición militaron en nuevos espacios: asambleas universitarias, de fábrica, de barrio. Allí debatían de forma constante, caótica y apasionada, para consensuar o votar acciones o para elegir portavoces susceptibles de ser revocados. También lo hacían en las células y organizaciones sectoriales del partido, donde diseñaban su intervención en aquellos espacios más amplios. Estas generaciones de militantes desplegaron en su lucha contra la dictadura formas de participación democráticas más avanzadas que las que se terminaron institucionalizando en 1978. También más avanzadas que las que pronto se aprobaron en los estatutos del partido, fueron impuestas informalmente por la dirección o desarrollaron ellos mismos.

Pero ni aquellas generaciones de militantes comunistas tenían aspiraciones e idearios idénticos, ni estos resultaron inmunes al paso del tiempo. Por más que un espíritu de cambio les atravesara, las aspiraciones de los militantes de la Transición apuntaban a destinos diferentes. El mínimo común denominador consistía en construir una democracia por lo menos homologable a las del entorno. Algunos, sobre todo compañeros de viaje, apenas miraban más allá. Otros volvían la vista hacia la construcción de un potente Estado del bienestar, la conquista de la denominada «democracia político social» o la trasformación

socialista plena. En toda Europa aquellas generaciones mutaron, evolucionaron o fueron desvelando motivaciones latentes y deseos soterrados a su compromiso político. En la España de la Transición los cambios se percibieron más acusados. En muchos casos, el complicado horizonte de la transformación social fue cediendo a las posibilidades personales de ascenso social. El deseo de no ser mandado se fue transformando (o revelando) en el deseo de mandar. El propósito igualitario de acabar con las elites de la dictadura –corruptas, autoritarias y mediocres– mutó en el objetivo de ocupar su lugar.

Aquellas generaciones de militantes comunistas metabolizaron de manera distinta su experiencia política, la intensidad de su militancia o la frustración de sus expectativas en la Transición. Unos permanecieron en el partido, reafirmando tenazmente sus aspiraciones, devenidas en algunos casos en pura retórica, orientadas en otros a su actualización en la futura Izquierda Unida. Algunos comunistas buscaron en los ochenta espacios más amables para la militancia en los llamados «nuevos movimientos sociales». Muchos rebajaron sus expectativas a la democratización y modernización básicas del país, tratando de llevarla a cabo como cargos electos o de libre designación en instituciones, fundaciones o empresas públicas, bien fuera en los que procuraba el PCE / IU, bien fuera, sobre todo, en los que les iría ofertando el PSOE. Como tan bien ha contado Rafael Chirbes, militantes comunistas aprovecharon el capital simbólico y las redes trabajadas en el antifranquismo y la Transición para ascender en el mundo de la cultura, la academia o los negocios[73]. Otros rompieron con todo aquello para construirse otra vida o para reponerse amargamente del coste que la militancia supuso en términos de desavenencias personales, frustración o represalias por parte de los viejos y nuevos poderes.

Si hacemos una foto fija de aquel año central de la Transición podemos esbozar ciertos perfiles ideológicos de la militancia, atravesados por importantes denominadores comunes. Si analizamos los materiales de la formación que recibieron del partido comprobamos que esa formación estaba concebida, sobre todo, para promover la acción de los militantes de acuerdo con la línea política oficial. Los contenidos doctrinarios eran secundarios y estaban bastante esclerotizados con respecto a las tendencias que una parte de la militancia había aprendido en las universidades, en otros lugares de cultura o de manera autodidacta[74]. El análisis de las cartas que los militantes del PCE escribieron con motivo del IX Congreso muestra cómo vivían con verdadera pasión las polémicas ideológicas y la forma propia con que daban sentido a su compromiso en el plano cultural y simbólico. El contenido de las cartas prueba que el

leninismo –que la dirección había propuesto abandonar– era importante para algunos militantes cuya identidad estaba arraigada en acontecimientos fundacionales como la revolución rusa y en figuras emblemáticas como la de Lenin, o para quienes renunciar a esas banderas suponía traicionar las luchas y sacrificios de quienes las habían enarbolado en el pasado[75]. Otros simplemente defendieron el leninismo como símbolo de la combatividad del partido ente la sempiterna tentación socialdemócrata o frente a la política de pactos de la Transición. Unos más denunciaron el debate como una cortina de humo o un acto efectista. La mayoría, sin embargo, lo desestimó, compartiendo o aceptando pasiva y desinteresadamente los argumentos de la dirección: que las tesis concretas del leninismo habían caducado[76]. Lo que las cartas ponen de manifiesto, pese a las acusaciones constantes de los enemigos del partido, es que los valores democráticos, incluso en su más restringida acepción liberal, estaban muy asimilados por la mayoría de la militancia. La vieja visión instrumental de la democracia liberal había sido reemplazada, pese a algunas resistencias, por una concepción más compleja, que aspiraba a la democratización de todos los aspectos de la vida social, pero que entendía que para ello era necesaria la arquitectura jurídica e institucional de los sistemas parlamentarios realmente existentes. Desde estos parámetros se perfilaron las distintas actitudes de los comunistas españoles ante la Unión Soviética, denigrada y tergiversada por sus adversarios. Para una escueta minoría los sistemas del Este eran dictaduras que había que condenar. Para una minoría algo más abultada la URSS seguía siendo la patria del socialismo. Para la mayoría de la militancia, generalmente cauta a la hora de pronunciarse al respecto, se trataba, sin embargo, de sistemas poco o nada democráticos, modelados por las circunstancias históricas y muy distintos al modelo de socialismo democrático que deseaban para España[77].

Sin menoscabo de las diferencias señaladas, el imaginario medio de los comunistas españoles estaba constituido por un conjunto de valores bien enraizados, a partir de los cuales se deducían nociones relativas a modelos preferibles de gobierno, planificación económica, organización social y relaciones interpersonales. Este imaginario se articulaba en torno a un sentido fuerte de la justicia social, una apuesta por las formas cooperativas de trabajo, una defensa reiterada de lo público y el compromiso con un proyecto de democracia avanzada que no solo habían levantado en abstracto, sino que venían desarrollando en las asambleas, asociaciones y, a veces, en el propio partido.

FIN DE TRAYECTO: CONTRIBUCIONES TERRITORIALES, CRISIS E IMPLOSIÓN

Aprobada la Constitución, el PCE encaró en mejores condiciones las elecciones generales de marzo de 1979. Los resultados se incrementaron en un ligero 1,4 por 100. El PSOE –que concurrió a estas elecciones después de absorber al Partido Socialista Popular de Tierno Galván– no alcanzó la suma obtenida por cada uno de ellos cuando en las anteriores elecciones se presentaron por separado. Pareciera que el PCE empezaba a sustraer apoyos al PSOE gracias a la política implementada aquellos meses y que eso animaba a ahondar en ella[78]. Las elecciones municipales, celebradas al mes siguiente, reforzaron esta idea. El PCE cosechó sus mejores resultados electorales en la Transición, con un 13,06 por 100 de los votos, y uno de los mejores resultados de su historia[79].

Hasta abril de 1979 los ayuntamientos siguieron gobernados por las mismas autoridades de la dictadura, limitando el ejercicio de las libertades y ejerciendo una fuerte intimidación sobre las bases de la izquierda. Hasta abril de 1979 la Transición estuvo muy coartada a nivel local. La campaña de las municipales fue un revulsivo para la militancia comunista, pues le devolvió parte de la autonomía que había visto limitada en las convocatorias nacionales y en las grandes decisiones adoptadas aquellos años. Ahora sí, pudieron diseñar con más libertad y criterio sus propias listas y programas. Por eso el PCE pudo rentabilizar mejor su papel en el antifranquismo y su inserción en la vida social. La campaña permitió retomar la relación directa con la gente, y las candidaturas fueron encabezadas por referentes vecinales, sindicales o culturales del partido en los municipios. El PCE obtuvo un total de 4.604 concejales. El acuerdo general alcanzado con el PSOE, en virtud del cual cada uno de estos partidos se comprometía a respaldar al otro si este había obtenido más votos, tiñó de rojo buena parte del mapa municipal de España. En solitario o gracias a este acuerdo, el PCE se hizo con 326 alcaldías en todo el país, algunas de ellas de especial relevancia por su peso demográfico, administrativo o simbólico[80]. En el caso de Cataluña se lograron las alcaldías de municipios obreros populosos del área metropolitana de Barcelona, como Badalona, Cornellá, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet (con Lluis Hernández, el Cura rojo, al frente del consistorio) o el Prat de Llobregat. En Madrid se lograron las alcaldías de municipios importantes del corredor obrero del Henares, como Alcalá de Henares, Coslada, Mejorada del Campo y San Fernando de Henares; municipios del Sur, como Ciempozuelos

y Pinto; o lugares de fuerte carga simbólica, como Paracuellos (a cuyos terribles sucesos de 1936 tanto aludía la derecha para denigrar al PCE). En Andalucía, donde el partido demostró un fuerte arraigo local, obteniendo el 17,8 por 100 de los votos totales, ganó destacadas alcaldías, como las de Algeciras, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas o Sanlúcar de Barrameda. En la provincia de Córdoba, a la multitud de municipios de la Vega del Guadiana se sumó la capital. Al frente del ayuntamiento de la ciudad de Córdoba se situó Julio Anguita, una figura que pronto empezó a ganar prestigio, y que al cabo de los años se convertiría en secretario general del partido[81].

El PCE abordó la campaña electoral con el eslogan «quita un cacique, pon un alcalde», premonitorio de su importante contribución a la vida municipal democrática. El voto comunista empezó a materializarse en la ejecución de políticas que, además de normalizar su imagen, vinieron a democratizar las instituciones más próximas a los ciudadanos y a mejorar las condiciones de la vida de la gente a través de la remodelación de planes urbanos, la creación de espacios públicos, la dotación de infraestructuras para los barrios populares y las competencias sobre algunas políticas sociales arrancadas a los poderes centrales.

El PCE se implicó en el desarrollo del proceso autonómico prefigurado por la Constitución, pues lo abordó como una oportunidad para aproximar el poder a los ciudadanos y corregir desigualdades y agravios históricos. Aunque con el tiempo aquel proceso dio más rédito a formaciones regionalistas o nacionalistas que lo abordaron desde la fuerza del particularismo y a unas elites locales reintegradas en los grandes partidos, los comunistas dejaron su impronta en Estatutos de Autonomía y contribuyeron a la renovación de las identidades territoriales. Su implicación, por ejemplo, en el proceso autonómico de Cataluña fue importante, dada la fuerza del PSUC, demediada en este caso por la operación Tarradellas[82]. En Andalucía los comunistas desempeñaron un papel importante en las movilizaciones que lograron la incorporación de la región a la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución, concebido inicialmente para las llamadas «nacionalidades históricas».

Pero el papel de los comunistas también fue importante en regiones tradicionalmente marginadas en la crónica general de la Transición. En Extremadura, por ejemplo, presionaron para que la región pudiera acogerse a la vía rápida tipificada en el artículo 151 de la Constitución[83], pese a aceptar al final, en pos de la unidad con el conjunto de partidos, la vía lenta del artículo 143. Los comunistas extremeños impulsaron –en sus propias palabras– un

«regionalismo progresista o de clase» que explicaba el subdesarrollo de Extremadura por su posición subalterna en el esquema de la división nacional del trabajo. Así se entendía el saqueo de sus materias primas y recursos energéticos; la concentración de la propiedad de la tierra; la ausencia de inversiones productivas; y su condición de fuente de mano de obra barata para zonas en desarrollo o de coto privado de ocio para las elites de la capital. El proceso autonómico se encaró como una oportunidad para aproximar el poder a los sectores populares atenazados por la estrecha alianza entre el centralismo madrileño y el caciquismo autóctono[84]. Este espíritu se concretó en la elaboración de un «Plan de Urgencia para la Región» que llevaron hasta el Congreso de los Diputados en 1980, donde fue rechazado con los votos en contra de UCD. El debate sirvió, sin embargo, para que el gobierno incrementara ese año las inversiones y el crédito destinado a Extremadura[85]. Se trata de un ejemplo más de los términos en los que se produjo la contribución de los comunistas en la Transición: sus aspiraciones máximas no solían realizarse, pero cuando presionaron en esa dirección arrancaron cesiones importantes.

Sin embargo, a escala nacional el PCE quedó con el paso cambiado tras las elecciones de 1979, porque el clima de consenso que había servido de sucedáneo a su política de concentración democrática se fue disipando. La Constitución que debía consagrar legalmente el nuevo sistema político ya se había aprobado y la crisis económica estaba encauzada a través de las medidas de ajuste acordadas en los Pactos de la Moncloa. Por otra parte, cuando se hizo evidente la debilidad del gobierno y los conflictos hasta entonces latentes en la UCD, el PSOE puso fin a la concertación para ejercer sin ambages su papel de partido de oposición y alternativa de gobierno. Con ese propósito presentó una moción de censura el 28 de mayo de 1980. Pese a ello, se impuso el peso de la inercia. El PCE siguió reclamando un consenso que a nadie interesaba y practicando una política de moderación que ya apenas encontraba auditorio que la aplaudiera. Por ello la dirección del PCE se mostró contraria a la idea de una huelga general, que CCOO venía barajando para hacer frente al paro, a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y al nuevo Estatuto de los Trabajadores que iba a aprobarse. El partido no ponía impedimentos a la conflictividad laboral, altísima por la incidencia de los despidos, siempre y cuando se redujera a las empresas; pero una huelga general adquiriría una dimensión política que sacaba al partido de aquellos consensos que ya casi nadie observaba[86].

Durante la Transición la implicación del partido en movimientos sociales y luchas concretas, su anclaje social, diseñó una trayectoria variable y

territorialmente desigual. En los años siguientes a la muerte del dictador –pongamos 1976 y 1977– el fenómeno se amplió, como resultado de la experiencia acumulada, de las expectativas abiertas y de las posibilidades brindadas por la conquista, renqueante, de derechos. En los años centrales –pongamos de manera aproximada 1978 y 1979– se amplió en lugares donde el partido tenía menos desarrollo, pero, allí donde era más fuerte, la influencia empezó a declinar. En estos momentos, en el último tramo del proceso, la derivación de energías a las tareas institucionales y a las crisis internas provocó que la influencia se disipase, a excepción de la ascendencia que el partido siguió manteniendo sobre CCOO.

En este contexto de debilitamiento orgánico y de tensiones que empezaban a aflorar, Santiago Carrillo seguía insistiendo en la necesidad de uniformizar ideológicamente y de centralizar orgánicamente el partido. En el pleno del Comité Central celebrado en Córdoba a mediados de mayo de 1979 volvió a repetirlo: «El fortalecimiento del Partido pasa por lo que hemos llamado su homogeneización». Al reconocer que la «unidad de acción sobre una línea política común» ya existía, reclamó «todo eso y más»[87]. Para el secretario general la pluralidad de perspectivas ideológicas seguía siendo una amenaza a la cohesión interna del PCE, pero ahora, además, estaba derivando en el cuestionamiento de su autoridad. Su pretensión homogeneizadora vino a exacerbar los conflictos latentes y a desatar las fuerzas centrífugas que ya existían en el PCE. En los poco más de dos años que van de finales de 1979 a las elecciones generales de octubre de 1982 el PCE sufrió una crisis interna de perfiles múltiples y dimensiones extraordinarias que explican en buena medida su autoliquidación política en la Transición. La crisis representó un ejercicio público de suicidio colectivo en la incipiente democracia del que fuera el partido hegemónico del antifranquismo. La crisis del PCE se manifestó principalmente en tres conflictos sucesivos, pero que terminaron solapándose y contagiando a todo el partido: el conflicto de los comunistas catalanes en el V Congreso del PSUC, la escisión en las filas del Partido Comunista de Euskadi y el movimiento de contestación interna desatado en todo el Estado por los llamados euro-renovadores.

La crisis del PSUC asestó un duro golpe al PCE. Era el referente territorial más importante del partido. Que fuera allí donde las bases rechazaran el eurocomunismo supuso un torpedo en la línea de flotación de la política del partido en la Transición y un cuestionamiento explícito a la autoridad de la dirección que la había implementado.

En vísperas del V Congreso del PSUC, que se iba a celebrar a principios de enero de 1981, se fueron configurando tres corrientes a su vez heterogéneas: la tendencia eurocomunista, la llamada indistintamente prosoviética o «afgana» y la denominada «leninista». La primera la encabezaban Antonio Gutiérrez y Gregorio López Raimundo. Incluía desde partidarios de profundizar más en el eurocomunismo, como los denominados «banderas blancas»[88], a otros que asumieron el fenómeno a remolque de la dirección. La llamada corriente prosoviética estaba formada por sectores anclados en los valores tradicionales del comunismo soliviantados por las críticas recientes a la intervención de la URSS en Afganistán; pero también la integraban otros sectores que expresaban por medio de adhesiones simbólicas a la URSS su malestar por la política de cesiones que el partido había justificado en nombre del eurocomunismo[89]. El tercer grupo en discordia era el de los leninistas, llamados así porque en la Conferencia preparatoria del IX Congreso del PCE encabezaron la defensa del leninismo. Criticaban desde la izquierda la política seguida en la Transición, el autoritarismo de la dirección y la falta de rigor de la propuesta eurocomunista oficial. Lo hacían desde planteamientos demasiado ambiguos como para constituir en torno a ellos una alternativa sólida[90]. Ni en el caso del PSUC ni tampoco en el del conjunto del PCE puede establecerse una relación nítida y mecánica entre extracción social y adscripción ideológica, aunque el porcentaje de proletariado urbano era superior en el caso de los llamados prosoviéticos.

La crisis se produjo en un contexto de tensiones previas entre las direcciones del PCE y el PSUC, teóricamente afines. Antoni Gutiérrez, secretario general del PSUC, presentó un esbozo de las tesis del V Congreso donde dejaba entrever algunas críticas a la política de la Transición y reclamaba más autonomía para el PSUC[91]. Carrillo le dejó a la intemperie cuando fue embestido por los sectores prosoviéticos, que controlaban el aparato de organización del PSUC y organizaron el congreso, por más que con esta venganza se pegara un tiro en su propio pie[92].

En el congreso se aprobaron una serie de enmiendas de cariz arcaizante y prosoviético, que se superpusieron a la orientación general eurocomunista propuesta por la dirección. Las resoluciones aprobadas criticaban sin mucho énfasis la invasión de Afganistán por la URSS, pero volvían a repetir aquello de que «la confrontación entre los países socialistas y el imperialismo [era] una de las principales manifestaciones de la lucha de clases a nivel internacional». El momento explosivo vino cuando, gracias a los votos de prosoviéticos y leninistas, que por separado no superaban en delegados a los eurocomunistas, el

congreso desestimó el término «eurocomunismo», reemplazándolo por la noción de «revolución de la mayoría». La nueva redacción reclamaba «la lucha por el socialismo en la democracia», pero evitando que eso pudiera «interpretarse como una política de concesiones ni de pérdida de la identidad de clase […]»[93].

Las consecuencias de aquella votación fueron inmediatas. Antoni Gutiérrez y Gregorio López Raimundo dimitieron de sus cargos. El vacío de poder fue ocupado por un extraño pacto, en virtud del cual el prosoviético Pere Ardiaca se hacía con la presidencia del partido y el leninista Francisco Frutos con la secretaría general. El pacto se rompió enseguida, y los leninistas terminaron inclinándose de nuevo hacia los eurocomunistas. Se inició entonces un viaje imposible de vuelta a un pasado extinto, que concluyó en el VI Congreso del PSUC, en marzo de 1982. En él se reafirmó el eurocomunismo y Antoni Gutiérrez y López Raimundo volvieron a ocupar sus cargos. Un par de meses después los prosoviéticos se escindieron en el Partido de los Comunistas de Cataluña (PCC), que contó con financiación soviética y que arrastró tras de sí a un número considerable de militantes de las barriadas obreras, a cuadros destacados de CCOO y a cargos municipales y del Parlamento de Cataluña.

La crisis del EPK tuvo repercusiones importantes en el conjunto del PCE, a pesar de la menor entidad de la formación vasca, que apenas había cosechado el 4,6 por 100 de los votos en las legislativas de 1979. La crisis trascendió a Euskadi porque terminó de desencadenar el debate sobre la federalidad en el partido, a la que Carrillo se oponía rotundamente; porque sugería la posibilidad de desarrollar una política de alianzas en la que algunas organizaciones territoriales del partido pudieran terminar diluyéndose en otras; y porque, como se verá, la crisis del EPK azuzó el conflicto ya estatal entre oficialistas y renovadores.

La crisis en el EPK bebió de un conflicto apenas disimulado entre dos sectores del partido que, sin menoscabo de su heterogeneidad, presentaban perfiles más o menos definidos y enfrentados. De un lado, el sector encabezado por Ramón Ormázabal respondía a un perfil más «obrerista», «resistencialista» y «españolista». Estaba integrado en buena medida por obreros industriales de la margen izquierda del Nervión y cuadros curtidos en la lucha clandestina, identificados con la idea de España que el PCE había enarbolado en la Guerra Civil y el exilio. Por otra parte, el sector encabezado por Roberto Lertxundi, procedente de ETA VI Asamblea, tenía influencia entre los profesionales del

partido, quería profundizar en las tesis eurocomunistas y sintonizaba con cierto nacionalismo vasco, abogando por una reformulación del PCE en clave federal o incluso confederal. A comienzos de la Transición Santiago Carrillo decidió promocionar al sector más dinámico de Lertxundi, que dirigió el partido de 1977 a 1982[94]. El problema surgió cuando en el IV Congreso del EPK, celebrado a finales de enero de 1980, Lertxundi propuso la apertura de un proceso de convergencia con Euskadico Ezquerra (EE) de cara a crear una formación de nuevo tipo. Carrillo –del todo hostil a esta iniciativa, que escapaba a su control y podría tener efectos disgregadores a nivel nacional– expulsó al sector de Lertxundi cuando en octubre de 1981 consumó la fusión con EE.

En el conjunto del PCE el llamado sector euro-renovador se fue formando a finales de 1979. No representaba ninguna novedad desde el punto de vista táctico, estratégico e ideológico. Respaldaba el eurocomunismo y la línea política desarrollada en la Transición. En todo caso, criticaba que la dirección no profundizara en la cultura eurocomunista o que la línea política se hubiera impuesto a veces de manera autoritaria o improvisada[95]. Los euro-renovadores no criticaban el contenido de la política del partido, sino los procedimientos de la dirección. Exigían más democracia, y lo hicieron reclamando tres cuestiones: el fin del centralismo democrático, la federalización del partido y el funcionamiento libre de las corrientes internas de opinión, reivindicaciones suscritas también por otros sectores menos estructurados. Llegaron a la conclusión de que la renovación del partido pasaba por sustituir a su núcleo dirigente, empezando, aunque tardaran en decirlo expresamente, por el mismo secretario general. Así lo plantearon en el «Documento de los 250», firmado por dirigentes destacados como Pilar Brabo y Manuel Azcárate:

Para resolver el desajuste entre el funcionamiento del partido y sus presupuestos políticos, el PCE tiene que asumir con audacia el reto de su propia renovación. Esta es la tarea prioritaria desde la óptica eurocomunista. La renovación exige, en primer lugar, una reforma profunda de los Estatutos que fomente la libertad de discusión y la formación de corrientes de opinión, que asegure el carácter democrático de la toma de decisiones y que prime el funcionamiento colectivo sobre el individual y la responsabilidad de los órganos frente a la concentración de poderes […] Pero no basta con los cambios de los Estatutos. Es necesario modificar la manera de dirigir el partido y de hacer política eurocomunista en la sociedad española y, por lo tanto, la renovación significa el cambio del equipo

dirigente del partido[96].

El conflicto estalló en el X Congreso del PCE celebrado a finales de julio de 1981, que marcó el fin de ciclo. De la unanimidad en torno a las propuestas de la dirección y de la cohesión relativa entre los delegados se pasó al cuestionamiento de Santiago Carrillo y a un clima de enfrentamientos múltiples entre sectores que se configuraban y desconfiguraban en el curso mismo de la disputa. Haciendo de nuevo una abstracción forzada, muy del gusto de la prensa, podía hablarse de tres sectores: los euro-renovadores, que lograron arrancar algunas victorias en las votaciones, gracias a la concurrencia de delegados que no se adscribían orgánicamente a la corriente y venían abogando motu proprio por la regeneración y democratización del partido; el sector oficialista, mayoritario, que, bajo mando de Carrillo, incluía desde a eurocomunistas convencidos a sectores ideológicamente ortodoxos sujetos a un fuerte sentido de la disciplina interna; y los llamados prosoviéticos, un epígrafe bajo el cual se incluía a quienes reclamaban la vuelta a unas esencias que nunca fueron tales, salvo en un imaginario muy cultivado tiempo atrás por la misma dirección, así como a quienes expresaban a través de alguna alusión muy colateral al mundo del socialismo real un malestar más sentido por la desnaturalización y, a su entender, domesticación del partido.

Durante el congreso se produjeron alianzas tan volátiles como contradictorias. Carrillo logró revalidar su propuesta eurocomunista y la política seguida en la Transición con el respaldo matizado de los euro-renovadores. Sin embargo, tumbó la mayoría de las propuestas de renovación interna y minimizó el peso de los renovadores en los órganos de dirección, gracias a la aprobación de un procedimiento de elección hecho a la medida de sus intereses[97]. La única novedad organizativa del X Congreso fue la aprobación de tres vicesecretarías, ocupadas por Jaime Ballesteros, Nicolás Sartorius y Enrique Curial. Concebidas teóricamente para desarrollar una dirección más colegiada y satisfacer las demandas renovadoras, en la práctica tuvieron una función más bien decorativa[98].

El X Congreso se cerró en falso. Ni los renovadores dejaron de cuestionar públicamente la autoridad de Carrillo, ni Carrillo les perdonó que se atrevieran a hacerlo. Los concejales renovadores del Ayuntamiento de Madrid que apoyaron públicamente a Lertxundi corrieron su misma suerte. Eduardo Mangada, Luis

Larroque, Cristina Almeida, José Luis Martín Palacín e Isabel Vilallonga fueron forzados a dejar su acta de concejales y expulsados del partido. Manuel Azcárate, Pilar Brabo, Carlos Alonso Zaldívar, Julio Segura, Pilar Arroyo y Jaime Sartorius, que también acudieron a un acto de apoyo a Lertxundi, fueron destituidos del Comité Central. El impacto fue tremendo. Se trataba de algunos de los dirigentes de mayor proyección pública, que más habían contribuido a la formulación del eurocomunismo y a la peculiar imagen de renovación en la que se venía afanando Carrillo[99].

La vorágine de conflictos múltiples y entrelazados devoró por dentro al partido y lo desacreditó públicamente. Durante dos años el PCE practicó un verdadero exhibicionismo autodestructivo. El 23-F anuló a la UCD y revalorizó al PSOE como única fuerza con capacidad para consolidar la democracia en España. El tirón electoral que ejerció el PSOE resultó irresistible para muchos votantes de la izquierda, sobre todo si la alternativa que se ofrecía era la de un partido comunista enredado en una virulenta guerra cainita. En este contexto, el PCE intentó un giro repentino: trató de recuperar a última hora la clásica propuesta de unidad de la izquierda entre socialistas y comunistas para subirse al remolque del empuje electoral del PSOE[100]. El partido de González hizo oídos sordos a esta propuesta. Si en los años de vigor del PCE había descartado cualquier alianza con los comunistas que sobrepasara el ámbito municipal, menos iba a hacerlo cuando se encontraban en pleno declive.

El resultado de esta convulsa trayectoria y del papel desempeñado por el resto de agentes en liza fue calamitoso. En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 el PCE descendió al 4 por 100, perdiendo más de un millón de votos. Al desastre electoral se sumaba una hecatombe mayor: la desmotivación o huida de su numerosa, entregada y en su día cohesionada base militante; la pérdida de arraigo social y hegemonía sobre los otrora sectores más dinámicos del antifranquismo; y la dilapidación de un capital simbólico levantado con ilusión y grandes sacrificios personales. Apenas le quedaba algo más que su influencia sobre las todavía importantes Comisiones Obreras.

El 5 de noviembre de ese año de 1982 Santiago Carrillo fue forzado a dimitir por el Comité Ejecutivo, dejando como sucesor a Gerardo Iglesias, responsable de los comunistas asturianos y hasta entonces uno de sus fieles[101]. Pero ni Carrillo se resignó a dejar las riendas del partido, ni Gerardo a que su predecesor lo maniatara. En abril de 1985 Santiago Carrillo, quien fuera durante más de veinte años todopoderoso secretario general del PCE, era, en la práctica,

expulsado del partido junto a una parte de sus incondicionales. Después de fracasar en su intento de crear una nueva formación eurocomunista, el Partido de los Trabajadores de España – Unidad Comunista, la mayoría de sus miembros terminaron integrándose en el PSOE por recomendación del propio Carrillo, como lo hicieron motu proprio otros militantes, cuadros y dirigentes del PCE. En el otro extremo, el sector prosoviético, encabezado ahora por el veterano dirigente Ignacio Gallego, se escindió en el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Quienes se quedaron empezaron a sentar las bases para la reconstrucción del proyecto y el inicio de una nueva etapa, que, al calor de otro ciclo de luchas, tendría como eje central el impulso a un proceso de convergencia con los nuevos movimientos sociales, los restos de la izquierda extraparlamentaria y los sectores desencantados del PSOE, que se decantaría en Izquierda Unida.

LOS FACTORES DEL COLAPSO Y LAS ENCRUCIJADAS DEL COMUNISMO ESPAÑOL EN UNA PERSPECTIVA INTEGRAL Y GLOBAL

El principal partido del antifranquismo se rompió por dentro al final de la Transición y dilapidó el prestigio que había ejercido entre algunos de los sectores políticamente más activos de la sociedad española. Para dar cuenta de esta implosión se han improvisado dos tipos de explicaciones demasiado básicas, al menos en su pretendida suficiencia. Hay una explicación que pudiéramos llamar «endogámica», según la cual la incapacidad a la hora de gestionar sus tensiones internas provocó la consunción de un partido, el PCE, que, no obstante, había desarrollado durante la Transición una línea política en última instancia justa, tanto en el sentido normativo de la expresión como en su sentido analítico, el referido a su ajustamiento a las circunstancias del proceso. Si acaso, el matiz crítico que se hace a esta línea política reside no ya en su contenido, sino en la forma (variable, insuficiente o torpe) en que pudo ser desplegada por la dirección comunista.

Hay otra explicación que pudiéramos llamar «sobrecontextualista», según la cual la crisis del PCE se debió a su incapacidad a la hora de adaptarse al nuevo ecosistema político de la democracia. Esta explicación tiene, a su vez, dos versiones. Una pone el acento en la idea de un partido que, si bien resultó útil

para luchar contra la dictadura, por su plasticidad y arrojo frente a situaciones de persecución y censura, no lo era, por su naturaleza e imagen, para participar en la gestión de la nueva democracia. Más allá del caso de España, desde esta perspectiva se viene a plantear que las nuevas sociedades modernas de los setenta y ochenta, caracterizadas por la reducción de las desigualdades, el acceso masivo al consumo, la expansión de valores postmaterialistas, el temor o la pereza frente a las tentativas utópicas y la hostilidad hacia el socialismo real portaban un rechazo natural e inevitable, sobre todo de cariz electoral, hacia el proyecto trasformador comunista y hacia los partidos comunistas mismos. La otra versión pone más el acento en la falta de atrevimiento del PCE a la hora de adaptarse a semejante ecosistema por medio de una fuerte renovación, entendida, para la mayoría de quienes así lo plantean, como una reconversión acelerada a los patrones de la socialdemocracia. A veces ambas explicaciones se han conectado, si acaso para subrayar que la presión externa resultante de esta incapacidad adaptativa intensificó las tensiones internas, hasta el punto de provocar, en el caso del PCE, un desgaste más rápido al sufrido por los partidos comunistas de su entorno.

Por más que ambas explicaciones alumbren cierta verdad, no terminan de funcionar. Se inspiran en enfoques ya de suyo básicos, como las ideas de la disfunción orgánica de los partidos o la inadaptabilidad al medio. En un caso proyectan una visión demasiado endogámica. En el otro sucumben a un determinismo contextual, donde ese contexto económico, social y cultural en profunda transformación se describe, sin embargo, de forma parcial y estática. En general estas explicaciones apenas consideran la diversidad de trayectorias de los partidos comunistas del entorno al que vagamente hacen referencia. Ambas niegan que hubiera margen para otra política que la conducente a la hecatombe del partido; pero proponen como alternativa, si acaso, una mayor profundización en la misma. En el fondo de estas explicaciones late una misma idea: la del inevitable desplome o reducción a la insignificancia de un partido comunista que –sin menoscabo de su necesaria renovación, adaptación o reinvención– pretendiera seguir siendo un partido comunista.

Para acercarse a la crisis del PCE hay que articular la multitud de factores de distinta naturaleza y entidad que han ido saliendo, y compararlo con lo sucedido en otros países. Hubo factores que remitían a la línea seguida por el partido en la Transición, tanto en su dimensión política (la que tenía que ver con su práctica y las decisiones que adoptó), como en su dimensión ideológica (la que tuvo que ver con la justificación, racionalización o sublimación en el ámbito simbólico y

cultural de esas prácticas y decisiones). Hubo otros factores de cariz interno, relativos al modelo organizativo, la democracia en el partido y la diversidad de sus culturas y perfiles militantes. Y, sin duda, hubo factores relativos al complejo contexto de mediados de los sesenta a principios de los ochenta, en profunda transformación. En el caso de España este contexto estaba atravesado por tres vectores: el del peso sociológico de cuarenta años de dictadura, el de la acelerada construcción de un nuevo régimen político en el país y el de la profunda transformación económica, social y cultural que se estaba operando en todo el mundo por efecto de una crisis estructural que sacudió los cimientos del modelo de crecimiento y desarrollo de postguerra.

A lo largo de la Transición el PCE desplegó una línea política variable, en última instancia moderada y en muchos momentos efectista. Oscilación táctica y falta de profundidad estratégica podrían ser dos rasgos característicos de esta política, si lo expresáramos en la consabida jerga comunista. El primer viraje del partido se produjo con la desestimación del proyecto de ruptura democrática en torno al cual había organizado la práctica política y el ideario inmediato de su militancia. El giro podía justificarse como una decisión más o menos coherente con la situación a la que se había llegado tras una dura pugna con la dictadura. Probablemente las fuerzas no dieran para tumbar al gobierno, y, tal vez, por medio de una actitud más flexible, reorientada a presionar y negociar con el gobierno la ampliación e intensificación de la reforma, se podría llegar más lejos que si, por el contrario, se mantenían de manera obstinada las antiguas posiciones.

Lo que resultaba difícil de justificar, como trató de hacer la dirección del PCE, es que esta fuera la única política posible, que por medio de la negociación de la reforma se pudiera llegar a los objetivos rupturistas deseados y que el propio partido tendría el mismo margen de maniobra y prestigio con independencia de cómo accediera al futuro sistema que iba a negociarse. Resultaba difícil creer que el arranque del proceso –con el aparato de poder y de comunicación de la dictadura en pie y en manos de las oligarquías– no iba a condicionar todo su desarrollo. Tampoco que el PCE tendría que pagar un alto peaje por su legalización, pese a ganársela a pulso, y que este peaje afectaría a su identidad, idealidad, proyección y práctica política a corto y medio plazo.

En cualquier caso, la cesión también podría justificarse como el coste que pagar para no quedar marginados, asumible a la espera de un rearme posterior. Lo que resultaba inverosímil es que bajo esa forma de Estado monárquica pudieran

desplegarse, como así se dijo desde la dirección del partido, transformaciones socialistas en España. Al impacto que los virajes y las decisiones tendrían sobre la militancia se sumarían los efectos que acarrearía su justificación inverosímil. Quedaba patente un rasgo central de la política del PCE en la Transición: consistía en hacer de la necesidad virtud. Que un repliegue pudiera ser la mejor decisión en medio de una batalla podía ser algo justificable; pero que se presentara como una suerte de ofensiva del revés tendría a la postre mayores efectos desmoralizadores para la tropa.

La negociación de la reforma y la aceptación de la monarquía podían justificarse apelando a la correlación de fuerzas o como costes asumibles para evitar males mayores. El respaldo a la Constitución y a los Pactos de la Moncloa, sin embargo, respondió a la línea política que el partido trazó en positivo a partir de una lectura muy básica de los resultados electores y de un cálculo errático acerca de las posibilidades del momento. Dos motivaciones le llevaron a ello: influir en un sentido progresista en las decisiones que se acordasen por encima de la representación obtenida en las elecciones y proyectar una imagen más atemperada y útil, que despejara los prejuicios inculcados hacia el PCE por sus adversarios. Los réditos fueron bajos. En el caso de los Pactos de la Moncloa el partido no logró garantizar el complimiento de los aspectos más progresistas que se supone iban a compensar los ajustes salariales. De nuevo fue en el plano ideológico en el que la dirección generó más desconcierto, al plantear que los pactos constituían un paso importante en el avance hacia la democracia política y social. Otro repliegue evidente volvía a presentarse como el impulso necesario para preparar una ofensiva que nunca llegaría a producirse.

En el plano ideológico el PCE se erigió en valedor del eurocomunismo, junto con el Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Francés. La propuesta eurocomunista portaba algunos de los análisis más ajustados del mundo comunista occidental, pero arrastraba también algunas perezas intelectuales, cierto acomodo conservador a los marcos cada vez menos estables de la Europa de postguerra, la frustración de no saber cómo acometer en la práctica un proceso de transformación radical de la sociedad y el intento de sublimar esa frustración en un esquema ideal y etapista de aplicación remota. En el caso del PCE la propuesta eurocomunista se utilizó con frecuencia para justificar los virajes del partido y con un afán propagandístico orientado a sacudirse estigmas muy asentados. Desde esta concepción efectista Santiago Carrillo lanzó su propuesta de abandono del leninismo en 1978. El debate ideológico venía a eclipsar el debate realmente importante que el partido tenía pendiente acerca de

su estrategia en la Transición y de su forma de funcionamiento interno; tensionaba y dividía a la militancia en torno a este asunto tan genérico; y provocaba, al mismo tiempo, que muchos militantes utilizaran estos debates ideológicos como un catalizador de debates práctico-políticos: como una forma oblicua de expresarse sobre lo que tenían delante.

El cualquier caso, el problema se agudizó tras las elecciones generales de 1979, cuando se extinguió el clima de consenso en el que el PCE había cifrado la posibilidad de desarrollar su política de concentración democrática. Con la Constitución y los Pactos de La Moncloa aprobados no se requería demasiado de la concurrencia de los comunistas. El gobierno se desgastaba en su empeño de gobernar en solitario. Y el PSOE estaba ya decidido a ejercer sin ambages su papel de partido de la oposición y alternativa de gobierno sin necesidad de alianzas ni por la derecha ni por la izquierda. En este contexto el PCE se quedó solo, reclamando un consenso que ya nadie entendía necesario, tampoco aquella parte de las bases del partido que estaban sufriendo sus cláusulas antisociales. Arrancados los ochenta, el partido quiso salir de su estancamiento político y de su crisis interna con un giro repentino, subiéndose desesperadamente al remolque del ascenso electoral del PSOE. Su llamamiento repentino a la vieja consigna de la unidad de la izquierda fue ninguneado por el partido de González y antiguos votantes, que vieron en el apoyo directo al PSOE una forma más rápida de optimizar su voto.

Por otra parte, una línea política tan orientada a proyectar una imagen renovada del partido tenía poco recorrido en un proceso de transición política en el que el peso de la lucha social iba cediendo a la influencia del debate mediático. Los cimientos sociales del partido se iban horadando al tiempo que sufría la hostilidad de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Esta imagen política estaba lastrada por la presencia al frente del partido de los viejos dirigentes que la promovían. Pareciera que pretendían homologarse al imaginario de unos adversarios para quienes la renovación nunca resultaría suficiente. Las políticas de mera imagen apenas seducían a los distantes y tensionaban a muchos de los más próximos.

En definitiva, la línea política no había servido para seducir a esos sectores moderados que el partido consideraba votantes en potencia, había incomodado (por sus contenidos o variabilidad) a buena parte de las bases del partido y su aplicación efectista había detraído esfuerzos que podrían haberse destinado a consolidar el arraigo social que el partido sí había logrado a través de su relación

directa con la gente, al calor de luchas concretas y en torno a una idealidad que se iba disipando: la de la construcción de una democracia amplia y con fuertes contenidos sociales.

La crisis interna del PCE se alimentó de las frustraciones que acumuló la militancia, metabolizadas de forma distinta en función de sus múltiples perfiles. No sólo es que su proyecto de ruptura democrática se viera al final truncado, sino que en el proceso de negociación de la reforma democrática el partido perdió la posición central que había ocupado en el antifranquismo. La mayor de las frustraciones vino, sin embargo, con los resultados electorales la noche del 15 de junio de 1977. Se sintió que no recompensaban las cesiones que el partido había realizado en la Transición para contribuir al avance del proceso; que no rendían justicia a décadas de dura lucha contra la dictadura; y que recompensaban injustamente a opciones que habían desempeñado un papel muy discreto. Se constató que desde las escasas posiciones institucionales alcanzadas sería difícil implementar las transformaciones sociales y democráticas que daban sentido a una militancia intensa, o que no sería posible ocupar las posiciones de influencia, poder y reconocimiento que algunos pudieran ambicionar. Por más que los conflictos que desagarraron al PCE tuvieran una motivación política e ideológica, o se expresaran en estos términos, se alimentaban en buena medida de esta insatisfacción.

Sin duda los parcos resultados electorales no se debieron solo a la línea política del partido durante la Transición, entendiendo por línea política las decisiones adoptadas, la forma de justificarlas y la manera de trasladarlas públicamente. Enfrente estaban los límites impuestos por el modelo de cambio que el partido se había sentido obligado a respaldar, como el trato desigual que recibió de los poderes supervivientes de la dictadura y los entramados mediáticos de sus oligarquías. De fondo, razones histórico-culturales de cariz estructural, como un sentido común epocal cada vez más renuente a experiencias fuertes de cambio o el peso de una fuerte cultura anticomunista, alimentada por décadas de socialización bajo el franquismo y cebada por los discursos de Guerra Fría de otros partidos del antifranquismo. Pero aquellos resultados se vieron agravados por una línea política que se había concebido para hacer frente, de manera un tanto ingenua, a esas limitaciones de peso, que prometía más de lo que daba y que justificaba cesiones que apenas tenían recompensa.

Otro bloque de factores que provocaron la crisis del PCE fue de índole orgánica. Remitían al modelo de partido, a su estructura organizativa, a la democracia

interna, a las características de su núcleo dirigente y a su diversidad interna. La vuelta de los principales dirigentes del exilio –la vieja guardia de la JSU nucleada en torno a Santiago Carrillo– generó tensiones con la militancia del interior. Coparon puestos de salida de varias candidaturas a las elecciones parlamentarias e impusieron formas de control muy disciplinarias sobre las organizaciones regionales que empezaban a redefinirse. De manera paradójica muchos militantes vieron limitada la autonomía y capacidad de iniciativa que ejercieron en la lucha antifranquista a medida que se fueron imponiendo en la legalidad los nuevos esquemas organizativos y los viejos hábitos dirigentes. El nuevo modelo de partido apostó por una rápida territorialización, en perjuicio de la estructura sectorial que tan útil había sido. Los técnicos e intelectuales fueron los más perjudicados, pues los obreros siguieron manteniendo una forma de militancia sectorial, formalizada o no, en CCOO. Al ser encuadrados en agrupaciones territoriales genéricas –poco estimulantes para el desarrollo de sus habilidades y poco útiles para abordar sus problemáticas–, muchos técnicos y profesionales se fueron distanciando del partido o coparon los puestos de dirección en organizaciones locales y regionales, mostrando en muchos casos una actitud de incomprensión o soberbia hacia los caracteres de la militancia obrera. El reflujo en general del trabajo en los movimientos sociales empujó a muchos militantes de un tipo u otro a una vida endogámica de partido más propensa a los conflictos internos. Las energías que dejaban de invertirse en la actividad exterior solían dedicarse a la conspiración interna.

La democracia interna en el PCE no era menor que la de otros partidos del arco parlamentario, pero resultaba insuficiente para unos militantes más acostumbrados a debatir en asambleas de fábrica y facultad. Frente al dirigismo y consignismo, se reclamaron mayores cauces de participación. Frente al centralismo, se pidió una estructura federal coherente con el sistema de las autonomías que el partido estaba respaldando para el país. Y frente a los intentos de uniformización política e ideológica, la posibilidad de formar corrientes reconocidas de opinión que expresaran la pluralidad del partido. Aunque los llamados euro-renovadores las presentaran en manifiestos y actos públicos, estas reivindicaciones fueron compartidas por militantes de perfiles muy distintos.

La crisis interna que desgarró al PCE tuvo también un fuerte sesgo ideológico. El PCE era un partido extraordinariamente diverso por diferencias de género, generacionales, formativas, socioprofesionales y militantes. La dirección pensaba que la heterogénea composición del partido era un lastre para el ejercicio de su autoridad y el desarrollo unitario de una política tan ajustada y

variable como la de la Transición. Si esta pluralidad no había sido motivo de conflictos internos significativos hasta entonces fue, entre otras razones, porque la intensidad y la urgencia de la lucha contra la dictadura operó como un poderoso elemento cohesivo. La dirección trató de homogeneizar a una militancia tan diversa en torno a una propuesta, la eurocomunista, de contenidos ideológico-identitarios muy explícitos, que además se modificaban banalmente en función de tácticas coyunturales. Vino a apagar el fuego de la diversidad con la gasolina del eurocomunismo. La propuesta eurocomunista de la dirección no satisfizo a nadie. Para los denominados prosoviéticos suponía una renuncia a señas de identidad muy arraigadas, así como una regresión a posiciones socialdemócratas. La misma dirección que les había educado en el culto a la URSS como «patria del socialismo» atacaba ahora ese universo de referencia. Para los llamados leninistas portaba –sin menoscabo de sus análisis acertados y su voluntad de renovación– demasiadas dosis de inconsistencia y afán propagandístico. Para los euro-renovadores, el eurocomunismo de la dirección necesitaba de mayor profundización en su compromiso con la democracia pluralista, de una crítica más vehemente a la URSS y de un modelo acorde de partido que fuera realmente democrático.

Pero la crítica al eurocomunismo trascendió la dimensión simbólica, identitaria y estratégica. Para muchos militantes el eurocomunismo se había convertido en el paradigma ideológico inspirador y legitimador de las decisiones y actitudes que habían conducido a la situación de debilidad orgánica y de pérdida de influencia social del partido. Aquellas decisiones no estaban sirviendo, además, para contener los estragos de la profunda crisis económica que sufrían en sus carnes unos militantes en su mayoría obreros, ya fuera por la pérdida de poder adquisitivo o por la amenaza del paro. La sensación de inseguridad –no solo laboral sino vital– incrementó el malestar de una parte importante de la militancia fundamentalmente obrera, radicalizando posiciones políticas e ideológicas. Así lo lamentaba López Raimundo:

[…] lo que sucede en realidad es que la política eurocomunista se ha convertido en algún momento en chivo expiatorio de una parte de los militantes comunistas de base para expresar su disgusto, su insatisfacción, por las dificultades que encuentran en este periodo. Es un hecho que en la medida que pasa el tiempo no sólo no hay una mejora, sino que empeoran las condiciones de vida de los trabajadores, siempre bajo la amenaza, bajo el avance del paro […] Ni el partido,

ni los socialistas, ni UGT, ni CCOO tenemos la llave para salir de esa situación angustiosa. Y entonces algunos comunistas reaccionan contra las insuficiencias del partido, de su dirección, insuficiencias que otros, intencionadamente, achacan a nuestra estrategia eurocomunista[102].

Era una forma de verlo, pero para muchos militantes el eurocomunismo no era el simple «chivo expiatorio» de la crisis, sino un cooperador necesario para desarrollar una política de impotencia, pasividad o connivencia con la salida antisocial que se estaba dando a la crisis misma, porque la dirección no había dejado de respaldar esa política en nombre del eurocomunismo.

En cualquier caso, aquella crisis económica no fue coyuntural. Somatizaba el empuje de una nueva corriente de fondo que, en todo el mundo, y en España de manera simultánea a la Transición, iría gestando cambios estructurales en las formas de organización de la economía y de la sociedad, así como una mutación en los valores e imaginarios de la gente común. La Transición coincidió con el momento embrionario de un proceso de recomposición mundial del capitalismo que, arrancando de mediados de los setenta, llegaría hasta los noventa, tras una dura disputa en la década central de los ochenta. En la Transición se produjo un profundo desajuste entre la práctica política inercial de la izquierda y un cambio contextual de alcance mundial que el ritmo vertiginoso del proceso nacional no dejaba ver con nitidez. En España las esperanzas en el proceso democratizador eran tremendas, pues permitiría recuperar ese tiempo perdido en el que la izquierda europea había afianzado su influencia entre la clase obrera y los sectores intermedios, había impulsado un potente Estado del bienestar y había explorado la posibilidad de impulsar, desde esa potente plataforma, proyectos sociales más ambiciosos. Pero en España esa perspectiva se desplomó con la crisis económica, justo en el momento en el que se estaba construyendo el nuevo sistema político. Si la primera sacudida de la crisis se produjo en 1973, año del atentado a Carrero Blanco, la segunda fue en 1979, apenas unos meses después de aprobarse la Constitución y los Pactos de la Moncloa.

El PCE, como la mayoría de los partidos comunistas occidentales, no percibió ni la envergadura de esta crisis ni la potencia del programa que se estaba fraguando para procurarle una salida a beneficio de las elites sociales y los grandes centros de poder mundial. Por un lado, algunos teóricos leyeron la crisis como un momento de oportunidad del socialismo ante el enésimo colapso del capitalismo.

Traducido al nuevo dialecto eurocomunista, se volvió a plantear la vieja idea de que las crisis eran el producto de la colisión de unas fuerzas productivas en crecimiento y renovación con unas relaciones sociales de producción obsoletas que las constreñían. En consecuencia, una acción política afinada podría contribuir a despejar los obstáculos representados por las segundas y reorientar en un sentido emancipador el empuje de las primeras[103]. Pero en la práctica los partidos comunistas obraron al margen de aquellas abstracciones. Lo hicieron desde el supuesto de que la crisis podría abordarse desde los parámetros de ese marco económico tradicional fordista y keynesiano que hacía aguas. Si la relación de fuerzas no permitía imponer medidas keynesianas de activación de la demanda y progresividad fiscal, al menos las políticas de austeridad financiera y contención salarial, atenuadas y supervisadas por el partido a través de su participación en el consenso, permitirían recuperar la senda del crecimiento económico tradicional, para desde ahí retomar las políticas redistributivas primero y las políticas de transformación social poco después. Eso es lo que el PCE hizo de manera más gruesa con los Pactos de la Moncloa y el PCI de forma más sofisticada y elaborada con su propuesta de «austeridad» y «compromiso histórico».

Pero la crisis y la salida que se estaba esbozando eran de tal envergadura que no permitirían la vuelta a un punto de partida al que el PCE, por otra parte, nunca había llegado. Sacudieron los cimientos sobre los que descansaba la consistencia de los partidos socialistas y, especialmente, comunistas. Aquella crisis y esa salida –que en perspectiva histórica cabe llamar, grosso modo, neoliberal– modificarían el peso de los sectores productivos y las formas de organización del trabajo, introduciendo cambios consecuentes en la composición sociológica y estimulando cambios en los patrones culturales de las clases trabajadoras. Los procesos productivos experimentaron una nueva tecnificación con la introducción de la electrónica y la robótica. Se reorganizaron las formas y ritmos de trabajo en términos más fragmentarios y disciplinarios. Se impulsó la deslocalización o la reubicación de empresas en el extranjero, la búsqueda de los costes más bajos de producción que brindaban los lugares de destino, con el deseo de que en los lugares de origen se aceptara una rebaja en salarios o impuestos que evitase la fuga. Aquellos cambios, en un contexto de paro creciente, ayudaron a una progresiva temporalización y flexibilización del mercado laboral. La caída de beneficios en los sectores productivos desplazó la inversión a la economía financiera y a nuevas ramas del sector servicios. Los cambios en la composición sociológica se manifestaron por lo pronto en una mayor fragmentación de la clase obrera, en el aumento de la exclusión social y

en la proliferación de nuevas franjas populares, cuya cualificación y acceso a los sectores emergentes de la economía les proyectaba hacia una identidad social más individualista, mesocrática, aspiracional y temerosa ante el posible retroceso. Las dinámicas de integración a través del consumo, la cultura de masas y la producción seriada de subjetividades recibieron una vuelta de tuerca con el extraordinario desarrollo de la esfera mediática y la industria del ocio. Para las formas más creativas, autónomas, nihilistas o desesperadas de diversión y sociabilidad se estaban ensayando nuevos dispositivos disciplinarios en el marco de la nueva ola cultural conservadora. Los estados anímicos y los imaginarios colectivos se volvieron más ajenos, perezosos o temerosos hacia las propuestas de transformación social radical. El descrédito que el socialismo real se había ganado a pulso, propaganda occidental mediante, fue dirigido por los discursos del final de la Guerra Fría para proclamar el peligro o la condena al fracaso de cualquier tentativa utópica[104].

Todos estos cambios económicos y sociales, así como la ofensiva cultural e ideológica que empezaba a descollar, cogieron a los partidos comunistas occidentales con el paso cambiado. Al PCE lo cogió además bregando en un acelerado proceso de transición a la democracia, embarrando en una línea política inmediatista y subiendo la temperatura de la olla a presión que era de puertas adentro.

Tres vías, grosso modo, vislumbraron los partidos comunistas occidentales en esta encrucijada de finales de los setenta y principios de los ochenta, sin menoscabo del puro apego a las viejas inercias, que tanto pesaron.

Una consistió en la reafirmación identitaria de los viejos programas y valores, que desde hacía tiempo no conducían a ninguna parte, pero que mantenían cohesionado a un partido-comunidad agarrado, realmente, a certezas prácticas todavía útiles. Este pudo ser el caso del Partido Comunista Portugués. El PCP reafirmó entonces una identidad clásica, y en cierto sentido, ortodoxa, aunque muy tamizada por su fuerte sentido nacional. No obstante, la cohesión y la influencia del partido descansó sobre todo en los réditos de la memoria de su destacado papel en la Revolución de los claveles, a cuyo desmontaje se había resistido; en su influencia sobre el sindicato unitario más importante de Portugal, la CGTP; y en la gestión de una importante red de ayuntamientos y distritos en el cinturón urbano de Lisboa, así como de ayuntamientos y cooperativas agrarias en el Alentejo. Desde esta apuesta, logró moverse a lo largo de los ochenta entre el 12 y el 18 por 100 de los votos en las elecciones a la Asamblea Nacional y

rondar el 20 por 100 en las municipales. Cuando el socialismo real se desplomó a principios de los noventa en plena ofensiva neoliberal, el partido se reafirmó en los viejos ideales y se agarró a esas mismas certezas. Su porcentaje electoral bajó bastantes puntos, pero luego se mantuvo más o menos estable.

Otra vía consistió en promover una renovación cultural e ideológica acorde con el acervo propio, reforzando, al mismo tiempo, los principales anclajes sociales. Este fue el caso del PCI, que al tiempo que impulsó el eurocomunismo, como intensificación y no ruptura de una larga y rica tradición cultural e intelectual, siguió alimentando su «memoria gloriosa» de la resistencia al fascismo, su influencia en el sindicato más importante de Italia (la CGIL), su multitud de gobiernos regionales, locales y de distrito en grandes ciudades y en regiones enteras y su comunidad de periódicos, editoriales o grupos deportivos. Por eso el partido se siguió moviendo durante la década de los ochenta entre el 25 y el 30 por 100 de los votos, algo por debajo de la década anterior. No obstante, el partido siempre tuvo la tentación de ocupar en Italia el lugar que la socialdemocracia ocupaba en otros países europeos, debido a la debilidad de los socialistas italianos y a que en la práctica ya lo venía desempeñando con la gestión de gobiernos locales y municipales. Lo intentó a nivel nacional con la idea del compromiso histórico que Enrico Berlinguer lanzó a la democracia cristiana, pero ni la radicalidad obrera de la época ni los férreos resortes de la Guerra Fría se lo permitieron. Cuando cayó la URSS una parte del partido pensó que la reconversión socialdemócrata permitiría dar el gran salto adelante. Así, entre 1989 y 1991 el PCI se disolvió en el Partido Democrático de la Izquierda, incorporándose poco después a la internacional socialista. No logró llegar al gobierno hasta 1998, a través de enredados pactos con otras fuerzas, por poco tiempo y para desintegrarse progresivamente a partir de entonces.

Otra vía fue la seguida por el PCF y el PCE, distintas, no obstante, en muchos aspectos. Entre las similitudes se contaban innovaciones ideológicas que guardaban poca coherencia con sus respectivas tradiciones culturales e intelectuales (ortodoxa y algo refinada en el caso del PCF, ortodoxa y más pobre en el caso del PCE); reproducción de viejas culturas políticas y prácticas organizativas; y, finalmente, descuido de su amplia red de influencia sindical, cultural y asociativa. Pero en el caso del PCE se sumaba el hecho de que apenas había dispuesto de tiempo en libertad para consolidar el anclaje social labrado más inestablemente en el antifranquismo, la devaluación de la memoria de su lucha contra la dictadura, el tremendo desgaste sufrido en la política de la Transición y el exhibicionismo autodestructivo que practicó en el último tramo

del proceso. Unas cosas y otras explican, en parte, que el PCF bajara del 18-20 por 100 de los votos que venía cosechando en los setenta, al 10 por 100 que obtendría en los ochenta; y que el PCE pasara del 10,7 por 100 de 1979 a poco más del 4 por 100 en 1982 y 1986[105].

Aquella encrucijada del movimiento comunista de finales de los setenta y principios de los ochenta requería de otra política y de profundos cambios. En el caso de España, Santiago Carrillo tenía buena parte de razón cuando afirmaba que no había alternativa a la política que él defendía en la Transición, si la política se reducía a la gestión institucional o de asunción en la oposición de la lógica del gestor. La lógica de intervención a toda costa en el gobierno dejaba márgenes de maniobra muy estrechos, y apenas trazaba un recorrido amplio, ya fuera buscándola en solitario (algo poco probable de lograr), ya fuera en coalición con los socialistas (como intentaban hacer los comunistas franceses), ya fuera por medio de un «compromiso histórico» o una reconversión socialdemócrata (como harían los italianos) o ya fuera de forma indirecta (como había intentado hacer el PCE participando en el consenso). O no se llegaba al gobierno, o no se llegaba muy lejos, o al llegar o al intentarlo se había desgastado uno por el camino. Por su parte, las vías ideales de transición etapista al socialismo no servían sino para deducir y justificar pasos previos muy comedidos que no lograban enlazar con ninguno posterior.

¿Qué alternativa tenían entonces los partidos comunistas de la segunda mitad de los setenta? Ninguna susceptible de ser precisada a priori de forma teórica, menos en una tradición surgida frente a la especulación detallista utópica. Pero sí la de salirse de caminos bloqueados, inercias maquilladas y autoengaños. La única salida consistía en dejar de ser un partido comunista o explorar nuevos caminos. Militantes, activistas y pensadores señalaron herramientas para desbrozarlos. Consistían en estudiar rigurosamente los cambios sociales y culturales tan profundos que se estaban sucediendo. En no engañarse acerca de las dificultades ni en entregarse tampoco ante su constatación. La reafirmación de aspiraciones y principios debía servir para regular la práctica cotidiana, y no para deducir idealmente y retrospectivamente etapas que nunca se iban a enlazar. Era el momento de conectar el hilo rojo de la tradición comunista con los movimientos ecologistas, pacifistas y feministas que empezaban a despuntar. De renovarse orgánicamente de forma integral, por medio de la depuración de resabios autoritarios y burocráticos y procurando fórmulas nuevas que dieran cabida a alianzas extensas. Se trataba de trazar una acción política modulable que, sin renunciar al propósito del acceso al poder, desarrollara también, en esos

tiempos donde se percibía tan lejano, contrapoderes y formas alternativas de vida cotidiana a pequeña escala, como anticipación del orden nuevo que se pretendía construir. Para todo eso había que recuperar el pulso ético y la militancia ejemplar como formas efectivas de suscitar, de nuevo, autoridad y adhesión[106].

Algo de esto trató de hacerse, no sin profundas limitaciones, con Izquierda Unida desde mediados de los ochenta, sobre todo cuando trató de esbozarse como nuevo movimiento político-social. Pero eso se verá en los capítulos siguientes.

[1] Sobre el movimiento obrero véase David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993, y Emanuele Treglia, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012. Sobre el movimiento estudiantil véase Elena Hernández Sandoica, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Marc Baldó, Estudiantes contra Franco (1939-1975), Madrid, La Esfera, 2007; o Alberto Carrillo-Linares, «Presentación. La oposición política al franquismo en la Universidad», CIAN. Revista de Historia de las Universidades 23.1 (2020), pp. 11-20. Sobre el movimiento vecinal véase Iván Bordetas, «Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad. Auto-organización y movilización vecinal durante el tardofranquismo y el proceso de cambio político», tesis doctoral, Barcelona, 2012 [https://hdl.handle.net/10803/96186], y Pamela Radcliff, La construcción de la ciudadanía democrática en España, Valencia, PUV, 2019.

[2] Armando López Salinas, La alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, Zaragoza, Forma, 1977.

[3] Sobre la influencia del PCE en los profesionales e intelectuales véase el apartado 5, «Sobre la convergencia con cristianos», en David F. Álvarez Espinosa, Cristianos y marxistas contra Franco, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004.

[4] Un estudio amplio al respecto se halla en Jesús Sánchez Rodríguez, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, FIM, 2004.

[5] Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, París, Éditions Sociales, 1971, pp. 20-34, y Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, Hacia la Libertad. Octavo

Congreso del Partido Comunista de España, París, Éditions Sociales, 1972, pp. 36-40.

[6] La concepción de la Junta puede verse en «Informe central a la II Conferencia Nacional del PCE», en Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, La propuesta comunista, Barcelona, Laia, 1977, pp. 57-59.

[7] Una documentación amplia sobre la negociación puede consultarse en UGT, Informes, Secretaría General, Comisión Ejecutiva Confederal, Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero (AHFFLC).

[8] Una narración de este giro puede leerse en Josep Fontana, «Los comunistas ante la transición», Mientras Tanto 104-105 (2007), pp. 26-28.

[9] Para Gregorio Morán, «el secretario general del PCE comprendió, ya antes del verano del 76, que la partida estaba perdida y que todo quedaba en su habilidad para transformar esa derrota estratégica en un triunfo personal», Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986, p. 519.

[10] Julio Aróstegui, La Transición (1975-1982), Madrid, Acento, 2000, pp. 36 y 37.

[11] Adolfo Suárez, Un nuevo horizonte para España. Discursos del presidente del gobierno, Madrid, Colección Informe, 1978, pp. 17-31.

[12] Desde mediados de 1975 a finales de 1976 el Ministerio de la Gobernación registró la elevadísima cantidad de 37.990 huelgas. Dato tomado de José Babiano y Javier Tébar, «El sindicalismo de clase de la transición a la democracia. Una perspectiva histórica de los cambios en el movimiento sindical en España», Gaceta Sindical 30 (2018), p. 169. Sobre movilizaciones proamnistía véase Paloma Aguilar, «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la Transición a la democracia», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, pp. 327-357.

[13] Sobre el sentido de la huelga véase Álvaro Soto, «Comisiones Obreras en la Transición y consolidación democrática. De la asamblea de Barcelona a la Huelga General del 14 D (1976-1988)», en D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones, pp. 466-467.

[14] La información sobre esta reunión está en Documentos: carpeta 37, AHPCE. No se encuentran las actas del Comité, solo la declaración que se aprobó de cara al público, donde la posibilidad de negociar meramente se sugiere.

[15] «Tesis 1: Características del actual proceso de cambio», en Noveno Congreso del PCE. Actas, debates, resoluciones, Bucarest, PCE, 1978, p. 339.

[16] «Informe de Santiago Carrillo al pleno del CC de Roma, 1976. De la clandestinidad a la legalidad», en D. Ibárruri y S. Carrillo, op. cit., pp. 239-241.

[17] Rubén Vega, «El PCE asturiano en el Tardofranquismo y la Transición», en F. Erice (coord.), Los comunistas en Asturias, 1920-1982, Gijón, Trea, 1996, pp. 184-185.

[18] Sobre las opciones que el PCE tenía ante sí hay dos trabajos basados en la teoría de juegos que llegan a conclusiones distintas: Josep María Colomer, La Transición a la democracia: el modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998, cap. 5, y Antoni Domènech, «El juego de la Transición democrática», Arbor 503-504 (1987), pp. 207-229.

[19] Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, p.714.

[20] Este intercambio entre legalidad y legitimidad, tanto más intenso en el caso de las negociaciones entre Suárez y Carrillo, atraviesa en general las transacciones entre oposición y gobierno. Véase Julio Pérez Serrano, «Experiencia histórica y construcción social de la memoria: la transición española a la democracia», Pasado y Memoria, Revista de Historia Contemporánea 3 (2004), pp. 39-42.

[21] Carme Molinero y Pere Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017, pp. 206-207.

[22] Mundo Obrero, semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1977.

[23] Ibid.

[24] S. Carrillo, Memorias, pp. 659-676.

[25] El PCE obtuvo 21 diputados en total. De las 52 circunscripciones electorales (las provincias más las dos ciudades autónomas), solo obtuvo representación en 10 de ellas: Alicante (Pilar Brabo), Barcelona (Gregorio López Raimundo, Antoni Gutiérrez Díaz, Cipriano García, Jordi Solé Tura, Juan Ramos, Josep M. Riera y Maria Dolors Calvet), Cádiz (Rafael Alberti), Córdoba (Ignacio Gallego), Madrid (Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Simón Sánchez Montero y Ramón Tamames), Málaga (Tomás García), Oviedo (Dolores Ibárruri), Sevilla (Manuel Benítez Rufo y Fernando Soto), Tarragona (Josep Solé Barberá) y Valencia (Emèrit Bono).

[26] Véase Diego Díaz Alonso, Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921-1982), Gijón, Trea, 2019, pp. 202-210.

[27] Las conclusiones del CC del 26 y 27 de junio pueden verse en Mundo Obrero, 29 de junio de 1977, o en Santiago Carrillo, «Democratización real de la sociedad y sus instituciones. Informe al pleno ampliado del Comité Central del PCE (junio de 1977)», en S. Carrillo, Escritos sobre eurocomunismo, Zaragoza, Forma, 1977, Tomo II, pp. 55-82.

[28] S. Carrillo, «Informe al pleno ampliado del CC del PCE (junio de 1977)», p. 68.

[29] S. Carrillo, «Informe al pleno ampliado del CC del PCE (junio 1977)», p. 69.

[30] Santiago Carrillo, «Un gobierno de concentración democrática nacional. Intervención en el Congreso (27 de julio de1977)», y «Urge un gobierno de concentración democrática nacional. Intervención en el Congreso (14 de septiembre de 1977)», ambos en S. Carrillo, Escritos sobre Eurocomunismo, pp. 85-95 y 99-109.

[31] José María Marín, «Condicionantes económicos y sociales de la Transición», en C. Molinero (ed.), La Transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006, pp. 94-108. Un estudio monográfico se halla en Joan Trullén, Fundamentos económicos de la Transición política española: la política económica de los acuerdos de la Moncloa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

[32] Consuelo Laiz, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la Transición española, Madrid, Catarata, 1995, pp. 268-276.

[33] Noveno Congreso del PCE, pp. 359-361.

[34] «Entrevista con Manuel Azcárate», Saida 1978, pp. 22-23.

[35] Cita tomada de J. Sánchez Rodríguez, op. cit., p. 289.

[36] J. Fontana, «Los comunistas ante la transición», p. 30.

[37] Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, Zaragoza, Forma, 1978, pp. 67-71.

[38] Las razones recogidas las expuso el propio Santiago Carrillo en su intervención en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1978: «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 1978, n.o. 130, pp. 5194 y 5196», en [www.congreso.es]

[39] Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza, 1996, pp. 229-235.

[40] El Comité Ejecutivo elegido en 1978 lo formaban Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo, Carlos Alonso Zaldívar, Santiago Álvarez, Julián Ariza, Manuel Azcárate, Jaime Ballesteros, José Benítez, Manuel Benítez, Leonor Bornao, Pilar Brabo, Marcelino Camacho, Vicente Carranza, Alfonso Carlos Comín, Víctor Díaz Cardiel, Horacio Fernández Inguanzo, Ignacio Gallego, Tomás García, Cipriano García, José García Meseguer, José María González Jerez, Ángel Guerreiro, Antonio Gutiérrez Díaz, Gerardo Iglesias, Roberto Lertxundi, Luis Lucio Lobato, Gregorio López Raimundo, Armando López Salinas, Antonio Martín Lillo, José Carlos Mauricio, Ramón Mendezona, Federico Melchor, Ramón Ormazábal, Antonio Palomares, Rafael Pillado, Francisco Romero Marín, Eduardo Saborido, Simón Sánchez Montero, José Sandoval, Nicolás Sartorius, Jordi Solé Tura, Fernando Soto, Ramón Tamames, Eugenio Triana y Tomás Tuero. Tomado de Noveno congreso del PCE, p. 476.

[41] Ibid., p. 477.

[42] Sobre algunos miembros del aparato del PCE véase Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 15-22.

[43] Una panorámica se halla en Terry Eagleton, Ideología, una introducción, Barcelona, Paidós, 2005.

[44] Manuel Sacristán, «A propósito del Eurocomunismo», en M. Sacristán, Intervenciones Políticas. Panfletos y Materiales III, Barcelona, Icaria, 1985, pp. 196-197.

[45] Distintas interpretaciones sobre los orígenes del eurocomunismo se encuentran en Pilar Brabo, «Los orígenes del eurocomunismo», en Varios Autores, Sesenta años en la historia del PCE, Madrid, FIM, 1980. Javier Pérez Royo, «La génesis histórica del eurocomunismo», en Varios Autores, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1981, cap. 1. Visiones amplias desde un punto de vista historiográfico en el expediente Emanuele Treglia (coord.) «Eurocomunismo», Historia del Presente 18 (2011) o el trabajo de Andrea Donofrio, Érase una vez el eurocomunismo. Las razones de un fracaso, Madrid, Tecnos, 2018.

[46] «Comunicado conjunto de la Cumbre Eurocomunista de Madrid», en Varios Autores, El PC Español, Italiano y Francés cara al poder, Madrid, Cambio 16, 1977.

[47] Ibid.

[48] Véanse las reflexiones del responsable de relaciones internacionales del partido Manuel Azcárate, «Sobre la política internacional del Partido Comunista Español», en El PC español, italiano y francés, pp. 193-206.

[49] «Tesis 6: La democracia político y social, etapa hacia el socialismo y el comunismo», en Noveno Congreso del PCE, pp. 362-370.

[50] Sobre las posibilidades del socialismo, véase Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado, Barcelona, Crítica, 1977, cap. 2. Distintas interpretaciones sobre las alianzas sociales se encuentran en Armando López Salinas, La alianza, y Nicolás Sartorius, «Los sujetos de la revolución y la política de alianzas. Reflexión acerca de la formación del bloque sociopolítico de progreso», en Varios Autores, Vías democráticas al socialismo.

[51] Manifiesto Programa (Segunda Conferencia Nacional del PCE, 1975), en D. Ibárruri y S. Carrillo, op. cit., pp. 216-219.

[52] ABC (Madrid), 27 de noviembre de 1977, p. 7.

[53] Estos planteamientos están desarrollados en Juan Andrade, El PCE y el

PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI de España, 2015, pp. 53-60.

[54] J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 152-156.

[55] Entre las figuras de mayor proyección estaban los heterodoxos del Este, G. Lukács, L. Kolakowski, K. Kosik o E. Bloch; los múltiples filósofos de la Escuela de Frankfurt, de Th. W. Adorno a H. Marcuse, pasando por W. Benjamin; pensadores franceses como C. Castoriadis y C. Lefort, o el grupo de lectura de El capital nucleado en torno a L. Althusser; una pléyade de pensadores italianos que actualizaban el rico legado de A. Gramsci, cuyas Cuadernos de la cárcel se venían reeditando y traduciendo de forma temática o cronológica; o, en Gran Bretaña, el grupo de historiadores afiliados inicialmente al PCGB, como E. P. Thompson y E. Hobsbawm, o figuras de la Fundación de Estudios Culturales, como Richard Hoggart, Raymond Williams y Stuart Hall. Véase un buen análisis de este ambiente en Geoff Eley, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa. 1850-2000, Barcelona, Crítica, 2002, p. 395.

[56] C. Molinero y P. Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción, p. 99.

[57] Algunas de estas críticas, explicitadas en las reuniones anteriormente citadas, fueron muy tempranas. Véase E. Quirós [Jaime Ballesteros], «Nuevas características y tareas en el frente teórico y cultural. Informe al VIII Congreso. 1972», VIII Congreso, Órganos de dirección, AHPCE. Una visión historiográfica en perspectiva se halla en Giaime Pala, Cultura clandestina: Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, Granada, Comares, 2016.

[58] Algunos de estos factores salieron a colación en dos actos organizados por intelectuales del PCE. En uno, organizado por la Fundación de Investigaciones Marxistas, intervinieron Nicolás Sartorius, Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Jiménez o Joan Ribó, publicado en Varios Autores, Los intelectuales y la sociedad actual, Madrid, FIM, 1981. El otro fue la «Primera Asamblea de Intelectuales, Profesionales y Artistas del PCE. Documentos», enero de 1981. Fuerzas de la Cultura (Intelectuales, Profesionales y Artistas): carp. 1,9, caja 126, AHPCE. Desde una perspectiva historiográfica reciente, el cambio de rol del intelectual progresista en la Transición está analizado en Javier Muñoz Soro, «La transición de los intelectuales antifranquistas (1975-1982)», Ayer 81 (2011), pp. 25-55.

[59] P. Vega y P. Erroteta, Los herejes del PCE, pp. 279-291.

[60] El análisis al respecto de cada periódico está desarrollado en Juan Andrade, El PCE y el PSOE, cap. V.

[61] Noveno Congreso del PCE, pp. 470 y 471.

[62] Tres trabajos particularmente interesantes que manejan y dialogan con estas categorías, refiriéndolas al caso del PCE, son de Xavier Domènech, «Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición»; Francisco Erice, «El "orgullo de ser comunistas". Imagen, autopercepción, memoria e identidad colectiva de los comunistas españoles», ambos en M. Bueno y S. Gálvez, Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Sevilla, FIM / Atrapasueños, 2009; y Rubén Vega, «Vísperas de libertad, gérmenes de discordia. La militancia comunista en Asturias en el umbral de la democracia», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coord.), Historia del PCE: I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007, t. II, pp. 277-287. De ellos se han tomado algunas de las ideas que se exponen a continuación.

[63] Un estudio amplio pueden verse en Giaime Pala, «El PSUC hacia adentro. La estructura del partido, los militantes y el significado de la política (1970-1981)», en G. Pala (coord.), El PSU, de Catalunya, 70 anys de lluita pel socialisme materials per a la història, Barcelona, ACIM, 2008, pp. 183-206.

[64] Noveno Congreso del PCE, pp. 471 y 472.

[65] Ibid.

[66] Ibid.

[67] La media de edad y procedencia son de elaboración propia.

[68] G. Eley, Un mundo que ganar, p. 352.

[69] Xavier Domènech, Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo, Barcelona, Icaria, 2011, cap. I.

[70] Una panorámica puede verse en Donald Sassoon, Cien años de socialismo, Barcelona, Edhasa, 2001, cap. 13.

[71] El incremento de la conflictividad laboral se inscribe en este ciclo europeo, pero con dichas peculiaridades derivadas de la vigencia de la dictadura que llevaron al pico de 1976, cuando se perdieron en el país 50 millones de horas de trabajo en paros y huelgas y algo más de un 13 por 100 de la población activa, 1,8 millones de trabajadores, participaron en los conflictos. Véase José Babiano y Javier Tébar, «La parábola del sindicato en España. Los movimientos sindicales en la transición "larga" a través del caso de CCOO (1975-1986)», en D. González Madrid, M. Ortiz y J. S. Pérez Garzón, La historia, lost in translation?, Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Cuenca, UCLM, 2017, p. 1480.

[72] Un buen análisis de este ambiente se encuentra en G. Eley, Un mundo que ganar, cit., cap. 21.

[73] Es un tema recurrente en la narrativa de Chirbes. Ahonda particularmente en Rafael Chirbes, Los viejos amigos, Barcelona, Anagrama, 2003.

[74] Esta prioridad formativa puede verse, por ejemplo, en PSUC, «Temari de curs de formació política» y «Test d'orientació per a la formació política dels militants del PSUC», Base ideològica i formació política, Formació, Fons PSUC, ANC. La orientación de la formación más teórica puede verse en «Fundamentos filosóficos del marxismo. El materialismo dialéctico», s/f [mediados de los setenta], también en Base ideològica i formació política, Formació, Fons PSUC, ANC.

[75] Véanse, por ejemplo, los testimonios de C. Torres Blázquez, «Carta a MO. Tribuna IX Congreso», Madrid, febrero-abril de 1978, IX Congreso, Órganos de dirección, AHPCE, y D. Iglesias Camblor, «Sobre la tesis XV», Mundo Obrero, 9 al 15 de marzo de 1978.

[76] Sirvan de ejemplo los testimonios de J. García Mayo, «La vía democrática», Mundo Obrero, 2 al 9 de marzo de 1978, y D. Iglesias Camblor, «Sobre la tesis XV», Mundo Obrero, 9 al 15 de marzo de 1978.

[77] La reivindicación de la democracia en tal sentido se halla en J. M. Pajares, «Leninismo y eurocomunismo», Mundo Obrero, 6 al 12 de abril de 1978, o C. Forasteros, «Eurocomunismo sí, leninismo también», Mundo Obrero, 16 al 22 de marzo de 1978. La resistencia a esta noción la manifestó, por ejemplo, J. Millán Navarrete, «No renunciar a los principios», Mundo Obrero, 2 al 9 de marzo de

1978. Posiciones prosoviéticas se pusieron de manifiesto en cartas como la de J. Galván, «Carta a M.O. Tribuna IX Congreso», Madrid, febrero-abril de 1978, IX Congreso, Órganos de dirección, AHPCE. La actitud de distanciamiento no beligerante se puso de manifiesto expresamente en testimonios como el de G. Espejel, «Países socialistas y ejército», Mundo Obrero, 6 al 12 de abril de 1978.

[78] La valoración oficial está en Mundo Obrero, 3 de marzo de 1979, p. 3, y en el editorial de Mundo Obrero, 4 de marzo de 1979.

[79] El porcentaje fue igualado en las municipales de 1991 y ligeramente superado en las europeas de 1994, cuando se presentó dentro de Izquierda Unida

[80] C. Molinero y P. Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción, pp. 263-264.

[81] Sobre su papel en la Transición y la alcaldía de Córdoba, véase Julio Anguita y Juan Andrade, Atraco a la memoria. Un recorrido histórico por la vida de Julio Anguita, Madrid, Akal, 2015, cap. 2 y 3.

[82] Pere Ysàs, «Democracia y autonomía en la Transición española», Ayer 15 (1994), pp. 97-98.

[83] «Ponencia N.o 3 de la IV Conferencia Provincial: La Cuestión Regional», Badajoz, junio de 1979, Caja 1979-1983, IV, V y VI Conferencia Provincial del PCE en Badajoz, AHPCEx.

[84] «La autonomía de Extremadura. Tesis aprobada en la Primera Conferencia regional. Partido Comunista de Extremadura-PCE», Mérida, diciembre de 1979, Caja 1979-1981: I y II Conferencia Regional del PCE en Extremadura, AHPCEx.

[85] «Informe del Comité Regional para la II Conferencia Regional del PCEx», Don Benito, julio de 1981, Caja 1979-1981: I y II Conferencia Regional del PCEx. AHPCEx.

[86] Camacho cuenta en sus memorias que Carrillo se opuso expresamente a la propuesta de huelga general cuando se la trasladó en nombre de CCOO. Véase Marcelino Camacho, Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990, pp. 424-430. El debate sobre la huelga general llegó al Comité Central celebrado en noviembre de 1979, donde Carrillo afirmó que el partido no debería promover movilizaciones de tal envergadura «[…] que nos aíslen y

puedan incluso desestabilizar el proceso democrático […]». Mundo Obrero, 15 al 21 de noviembre de 1979, pp. 5 y 6.

[87] Mundo Obrero semanal, del 24 al 30 de mayo de 1979, p. 3.

[88] Bandera Blanca fue el nombre que se dio a quienes procedían de la organización izquierdista Bandera Roja y que evolucionaron hasta convertirse en los máximos valedores del eurocomunismo en Cataluña. Entre sus miembros estaban Joan Busquets, Jordi Solé Tura o Jordi Borja.

[89] Entre sus dirigentes figuraban Pere Ardiaca, Joan Ramos, Josep Serradell, Joan Tafalla o Leopoldo Spuny.

[90] Entre estos figuraban, por ejemplo, Francisco Frutos, Andreu Claret, Xavier Folch o Manuel Vázquez Montalbán.

[91] PSUC, Projecte de Tesis. 5è Congrés, Barcelona, PSUC, 1980, pp. 9-11.

[92] G. Morán, op. cit., pp. 594-595.

[93] Citas tomadas de Gregorio López Raimundo y Antoni Gutiérrez Díaz, El PSUC y el eurocomunismo, Grijalbo, Barcelona, 1981, pp. 91-92.

[94] Una panorámica puede leerse en Alain-Marc Mendaza Vilà, «Hacia una historia del PCE-EPK (1920-1977)», y en José Ángel Etxaniz Ortúñez, «La revitalización del Partido Comunista de Euskadi (1970-1975). El ingreso de militantes de ETA VI Asamblea (Minos)», ambos en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE, vol. 2, pp. 413-426 y 313-334 respectivamente.

[95] «Documento de los 250», Madrid, Mayo de 1981, recopilado en Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes, p. 312.

[96] «Documento de los 250», p. 313.

[97] Las tesis del congreso se hallan en PCE, Proyecto de Tesis y Estatutos. X Congreso del PCE, Madrid, PCE, 1981, folleto.

[98] Sobre la elección de candidaturas véase Manuel Azcárate, Crisis del eurocomunismo, Barcelona, Argos Vergara, 1982, pp. 230-240.

[99] Las medidas disciplinarias contra estos militantes fueron muy difundidas por la prensa, en especial por parte de El País, muy identificado con los renovadores. Un detallado relato se encuenta en ibid., cap. V.

[100] Este viraje se sustanció inicialmente en el eslogan «Juntos Podemos», con el que el PCE se presentó a las elecciones andaluzas de 1982.

[101] Una trascripción de las intervenciones de aquel Comité Ejecutivo y un análisis propio al respecto puede verse en G. Morán, op. cit., pp. 607-619.

[102] G. López Raimundo y A. Gutiérrez Díaz, El PSUC y el eurocomunismo, p. 53.

[103] A principios de los ochenta el filósofo comunista polaco Adam Schaff, uno de los más heterodoxos y sofisticados del país, que había sintonizado con el espíritu eurocomunista, planteaba al interpretar la crisis lo siguiente: «En los próximos años se ha de llegar inevitablemente a transformaciones de carácter socialistas en los países capitalistas altamente industrializados», Adam Schaff, El comunismo en la encrucijada, Barcelona, Crítica, 1983, p. 17.

[104] Para hacerse una panorámica general de los orígenes de estos cambios sigue siendo especialmente esclarecedor el trabajo de David Harvey Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007.

[105] Para el caso portugués, véase José Neves, Comunismo e Nacionalismo em Portugal. Política, Cultura e História no Século XX, Lisboa, Tinta da china, 2008; para el caso italiano véase Aldo Agosti, Storia del Partito Comunista Italiano, Roma, Laterza, 1999; para el caso francés, Roger Martelli, L´empreinte communiste: le PCF et la société française, París, Éditions Sociales, 2010.

[106] Algunas de estas ideas fueron esbozadas a principios de los ochenta por el filósofo comunista español Manuel Sacristán, Seis conferencias sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Barcelona, Viejo Topo, 2005.

VI

CONVERGENCIA, COLAPSO SOVIÉTICO Y SORPASSO QUIMÉRICO. LOS COMUNISTAS DURANTE LA ÉPOCA SOCIALISTA

(1983-1996)[1]

– Emanuele Treglia –

A principios de 1988, en el XII Congreso del PCE, Gerardo Iglesias describía de la siguiente manera la situación en la que se encontraba el partido unos años antes, cuando él, tras la dimisión de Santiago Carrillo, había sido nombrado nuevo secretario general:

En octubre de 1982 el PCE se encuentra ante una perversión de su proyecto democrático de transformación social. […] Concurrían en el Partido todos los agravantes para su desaparición: […] ausencia de política acorde con la realidad […] aislamiento social en España y en la arena internacional; una gran desorganización y desmovilización del Partido; nuestra credibilidad en el periodo de la dictadura era sustituida por una imagen obsoleta y de profunda división[2].

Efectivamente, en noviembre de 1982 Iglesias tomó las riendas de un sujeto político en agonía, que había sufrido un duro colapso y que tenía que ser reconstruido desde las cenizas.

En los años siguientes, bajo el liderazgo del propio Iglesias y, desde 1988, de Julio Anguita, el PCE llevó a cabo unas notables transformaciones de su modelo organizativo y su línea política que le permitieron experimentar, hasta 1996, un gradual proceso de recuperación. Un proceso de recuperación que tuvo, entre sus

factores clave, la creación de Izquierda Unida (IU), y que se desarrolló a lo largo de la llamada «época socialista», es decir, durante los casi catorce años en los cuales España estuvo gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) liderado por Felipe González (1982-1996). Un proceso de recuperación que, además, se produjo en un escenario internacional que resultaba adverso para los comunistas, puesto que estaba sacudido por las profundas convulsiones producidas por la crisis y desaparición del bloque soviético.

En dicho contexto, el PCE tuvo que abordar dilemas fundamentales. ¿Qué actitud adoptar hacia los Gobiernos de Felipe González? ¿Era más oportuno buscar alguna forma de diálogo con el PSOE o practicar una línea de oposición frontal? ¿De qué funciones y estructuras había que dotar a IU? ¿El ocaso del llamado socialismo real conllevaba también el fracaso del conjunto de los ideales y praxis comunistas? ¿Los partidos comunistas debían disolverse porque habían sido derrotados por la historia o, al contrario, tenían todavía una «razón de ser»? En las próximas páginas se analizarán precisamente las respuestas que, entre 1983 y 1996, el PCE proporcionó a estas y otras cuestiones cruciales.

LA PERSISTENCIA DEL EUROCOMUNISMO Y EL NACIMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA

A raíz del descalabro electoral sufrido por el PCE en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, Santiago Carrillo dimitió del cargo de secretario general. El 6 y 7 de noviembre se reunió el Comité Central (CC) del partido para nombrar su sucesor. Algunos de los asistentes, como por ejemplo Antonio Gutiérrez, propusieron en este sentido a Nicolás Sartorius. Sin embargo, esta opción acabó siendo descartada. Según la mayoría de los miembros del CC, en efecto, Sartorius defendía unas posturas que se parecían excesivamente a las de los renovadores que habían salido o habían sido expulsados del partido a lo largo del último año: su nombramiento, por lo tanto, lejos de favorecer la recuperación comunista, habría ahondado las divisiones internas y agravado ulteriormente la crisis del PCE. Como alternativa fue propuesta la candidatura del entonces secretario general del PC de Asturias: Gerardo Iglesias. Este, cercano a Carrillo, como líder de los comunistas asturianos había demostrado ser capaz de conciliar distintas sensibilidades. Efectivamente, su gestión había permitido al PC de

Asturias remontar la llamada «crisis de Perlora» –causada en 1978 por el duro enfrentamiento entre diversos sectores del partido–, alcanzando una discreta presencia institucional en la región y convirtiéndose en una isla de estabilidad dentro de un comunismo español lacerado por ásperas polémicas y luchas intestinas[3]. Así, el minero de Mieres, por sus habilidades como «integrador», apareció como el candidato adecuado para abrir una nueva etapa[4].

Elegido como nuevo secretario general del PCE por el 75 por 100 de los miembros del CC presentes en la reunión de noviembre, Iglesias afirmó inmediatamente su voluntad de «defender el eurocomunismo», ensanchándolo y profundizándolo. Para él, las ideas clave que habían caracterizado la evolución del partido desde finales de los sesenta seguían siendo fundamentalmente válidas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Consideraba que la crisis experimentada por el PCE a lo largo de la Transición no había sido provocada por las teorías eurocomunistas en cuanto tales, sino por su insuficiente desarrollo y su errónea aplicación. Consecuentemente, rechazaba rotundamente la perspectiva, trazada por algunos sectores del partido, de propiciar el retorno a una línea política que resultara más acorde con la ortodoxia marxista-leninista. En este sentido, a raíz de su elección dijo: «Ya sé que hay quienes preferirían que volviéramos al pasado, pero yo sé que así sólo conseguiríamos llevar al PCE a las catacumbas»[5]. Asimismo, en marzo de 1983 Iglesias declaró que apostaba por «la firme reafirmación del eurocomunismo», añadiendo: «No haremos ninguna concesión al vanguardismo ni al radicalismo»[6]. En consonancia con esta lógica, el nuevo secretario general fue subrayando repetidamente la necesidad de construir un modelo de partido «laico», o sea, libre de dogmatismos e ideologías sacralizadas, abierto a la pluralidad de opiniones y animado por un fecundo debate democrático en su seno[7].

Precisamente el convencimiento de la vigencia de la fórmula eurocomunista fue un factor determinante a la hora de definir la postura que adoptar ante la que, desde finales de 1982, se configuró para el PCE como una cuestión crucial: es decir, qué tipo de relaciones entretejer con un PSOE que había ganado rotundamente la pugna por la hegemonía en la izquierda y que ostentaba la mayoría absoluta de escaños. A este propósito, hay que tener en cuenta que la estrategia eurocomunista desde principios de los setenta veía en la estrecha colaboración entre socialistas y comunistas una condición necesaria para la construcción de un sistema de democracia sociopolítica avanzada, tanto en España como a escala europea[8]. Conforme a este enfoque, hacia el primer

Gobierno liderado por Felipe González el PCE decidió practicar una línea de apoyo crítico, evitando una actitud de acoso intransigente y de descalificación global. Esta postura se debió también al hecho de que los comunistas eran conscientes de su propia debilidad y de que la alternativa de poder al PSOE era representada por la derecha. Refiriéndose a estos asuntos, en una reunión del CC celebrada los días 17 y 18 de mayo de 1983 Iglesias afirmó:

[Debemos] saber ser modestos y realistas. Hemos llevado un leñazo impresionante el 28 de octubre. […] No tenemos que perder de vista una cosa. Con una parte sustancial de esos diez millones de votos que tiene el Partido Socialista ahora es con los que hay que hacer los cambios. […] Si nosotros fuéramos a una actitud de confrontación abierta, […] si nosotros salimos por ahí diciendo que el PSOE no es un partido de izquierda, lo más sano del Partido Socialista, que tiene una parte muy importante de sus bases que son de izquierda de verdad, […] pues es que nos mandan al carajo. […] Ese camino nos conduce al aislamiento y al testimonialismo[9].

El PCE, en sustancia, aspiraba a condicionar en sentido progresista las políticas del Ejecutivo, actuando en dos direcciones: por un lado, respaldando al PSOE en su labor de ampliación de las libertades y de democratización del aparato del Estado; por el otro, denunciando de forma «permanente y machacona» aquellas medidas de los socialistas que, a su manera de ver, constituían una concesión a los poderes fácticos y lesionaban «los intereses populares»[10]. A través de esta línea de apoyo crítico, Iglesias esperaba que se pudiese llegar a corto-medio plazo a la formación de un Gobierno de coalición con el PSOE.

Pronto se hizo evidente que estos planteamientos del secretario general no eran compartidos por sectores significativos del PCE. En la citada reunión de mayo de 1983, por ejemplo, varios miembros del CC propusieron llevar a cabo una oposición frontal contra el Ejecutivo, puesto que, a su entender, el partido de González estaba experimentando una clara «deriva derechista»[11]. Dos meses más tarde, el entonces alcalde de Córdoba, Julio Anguita, se expresaba en términos contundentes a este respecto:

Lo último que puede perder […] un partido político es su convencimiento, sus principios. […] El PSOE es un partido sin alma, es un partido sin ideas, es una amalgama de intereses inconfesables, […] de intereses equivocados, […] de intereses puramente del poder por el poder. […] Son culpables porque han perdido hace tiempo la utopía, y al perder el horizonte de utopía y, por tanto, las líneas maestras de transformar cada día, es el PSOE que vemos hoy. Un partido que no tiene más esencia que la apariencia[12].

De todas formas, a pesar de estas opiniones discrepantes, de momento la postura promovida por Iglesias prevaleció y, en los años siguientes, la actividad de oposición desarrollada por el PCE se dirigió solamente contra algunos aspectos concretos de la labor del Gobierno.

Hasta 1986, la cuestión principal que llevó a los comunistas a enfrentarse al Ejecutivo socialista fue el repentino viraje atlantista dado por el partido de González. Efectivamente, el PSOE, una vez alcanzado el poder, no solo fue postergando sine die la convocatoria del referéndum para la salida de España de la OTAN que había prometido en la campaña electoral de 1982, sino que acabó adoptando una posición favorable a la permanencia del país en dicha organización[13]. Ya al final de la Transición el PCE, invocando una política exterior de neutralidad y no alineación, había protestado en el Parlamento y en las calles contra el ingreso de España en la Alianza Atlántica decretado por el último gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD). A principios de 1983, Iglesias consideró que el cambio de postura del PSOE sobre la cuestión de la OTAN abría una estructura de oportunidades que podía favorecer significativamente la recuperación de los comunistas, permitiéndoles adquirir un renovado protagonismo social y político, estrechar nuevas colaboraciones y ampliar su espacio a la izquierda del partido de gobierno. Consecuentemente, el PCE hizo de la batalla contra la permanencia en la Alianza Atlántica un eje prioritario de su trabajo[14].

Los comunistas querían aprovechar los difusos sentimientos neutralistas y anti-OTAN presentes en la ciudadanía. De hecho, en una encuesta llevada a cabo en noviembre de 1983 en nueve democracias industriales, España apareció como el país menos proclive a considerar que la cooperación entre Europa y Estados Unidos fuera el mejor medio para garantizar la seguridad internacional (punto de vista sostenido solo por el 11 por 100 de los entrevistados), lo que evidenciaba

un significativo recelo hacia Washington. En este sentido influían las dinámicas de la Guerra Fría que, en la primera mitad de los ochenta, estuvieron caracterizadas por un recrudecimiento de la confrontación entre los Estados Unidos y la URSS. Una de las principales manifestaciones del agravamiento de las tensiones entre las dos superpotencias fue la crisis de los euromisiles, que convirtió al Viejo Continente en el teatro de un posible conflicto nuclear. Ante esta perspectiva catastrófica, floreció a escala global un movimiento pacifista masivo y transversal: las «palomas» se levantaron contra los «halcones», buscando formas de «distensión desde abajo». La campaña contra la permanencia de España en la Alianza Atlántica, por lo tanto, se enmarcó en la más amplia lucha por la paz y el desarme que se estaba librando contemporáneamente a nivel internacional, lo que favoreció su expansión y contribuyó a dotarla de extensos apoyos por parte de la opinión pública[15].

En este contexto, el PCE fue incrementando notablemente su presencia y actividad en el seno del movimiento anti-OTAN que había ido surgiendo en los últimos años de la Transición y que estaba experimentando ahora su auge. Se trataba de un movimiento marcadamente plural, que contaba con el respaldo y la participación de un amplio abanico de sectores sociales y políticos: cristianos, feministas, objetores de conciencia, asociaciones de vecinos, partidos de la izquierda radical, como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Movimiento Comunista, socialistas disconformes con la línea del PSOE, etc. El PCE, al invertir en este terreno significativos recursos orgánicos y económicos, se configuró como uno de los principales impulsores y financiadores de las multitudinarias movilizaciones que, desde la primavera de 1983, tuvieron lugar repetidamente a lo largo y ancho de la geografía española, reclamando la celebración inmediata del referéndum para salir de la OTAN, el desmantelamiento de las bases norteamericanas presentes en el país, una Europa sin misiles y la disolución de los bloques. El 12 de junio, por ejemplo, 100.000 personas bajaron a las calles en Madrid con estas consignas. El 23 de octubre, en toda Europa occidental fueron convocadas iniciativas por la paz y el desarme: en España aquel día se celebraron un centenar de actos, en los que participaron unos 300.000 ciudadanos. Asimismo, en 1984 se desarrolló la campaña «Primavera por la Paz», que culminó el 3 de junio con una enorme manifestación en Madrid a la que acudieron 500.000 personas. Precisamente gracias al relevante papel desempeñado en estas movilizaciones, el PCE fue recobrando cierta visibilidad e impacto sociopolítico, lo que le permitió empezar a recuperarse del naufragio experimentado al final de la Transición[16].

Hay que destacar que, en un escenario internacional marcado por la reagudización de las fricciones entre Washington y Moscú, Iglesias defendió la necesidad de que el PCE siguiera manteniendo, como iba haciendo desde principios de los setenta, una postura de clara oposición a la lógica de los bloques y de nítida independencia respecto al Kremlin. Se trataba de un planteamiento coherente con la línea propia del eurocomunismo. Así, en una reunión del CC celebrada en junio de 1983, Juan Francisco Pla hizo hincapié en que «el carácter de ambos bloques» era «contrario a las posibilidades no solo de paz, sino de evolución y de transformación social»[17]; y Antoni Gutiérrez Díaz añadió: «Estamos en favor de una vía bien definida, que representa la elaboración de una alternativa propia desde Europa, que no cae en la dinámica […] que hoy tienen el bloque occidental y el bloque oriental, ni el uno ni el otro, una tercera vía europea»[18].

Conforme a este enfoque, el PCE atacaba duramente la política de la Administración Reagan, que definía como «belicista e imperialista» y como «el factor determinante del incremento de la tensión internacional» en el último periodo, no sólo por la cuestión de los euromisiles, sino también por hechos como sus intervenciones en Centroamérica[19]. Sin embargo, constataciones de este tipo no debían llevar, según Iglesias, a un renovado acercamiento del partido a la URSS. Efectivamente, el líder del PCE sostenía que no era posible cerrar los ojos ante las sistemáticas violaciones de las libertades y de los derechos humanos que tenían lugar en el bloque soviético, ni ignorar el hecho de que también el Kremlin presentaba una actitud agresiva hacia el exterior, como quedaba demostrada, por ejemplo, por la invasión y la prolongada ocupación de Afganistán. Además, la toma de distancia frente a la URSS y la no alineación eran vistas como condiciones indispensables para que las actividades desarrolladas por el PCE en el marco de la campaña anti-OTAN no perdieran credibilidad ante la opinión pública y pudieran atraer amplios apoyos:

Lo que estamos haciendo […] por la salida de España de la OTAN –afirmó Iglesias en junio de 1983– exige más claridad que nunca […] en el sentido de que no estamos con ninguno de los bloques y sí por el desmantelamiento de ambos, y cualquier concepto que confunda al respecto, matices que confundan, yo creo que es un flaco servicio a la lucha por la paz[20].

El hecho de que bajo el liderazgo de Iglesias el PCE persistiera en una actitud profundamente crítica hacia la URSS provocó significativas divergencias en las filas comunistas, dando lugar a una nueva escisión prosoviética. Esta fue impulsada por Ignacio Gallego, un veterano miembro del Comité Ejecutivo y del CC del PCE que llevaba casi una década trabajando como agente doble al sueldo de Moscú[21]. Gallego salió del partido a finales de 1983 y, en la carta con la que anunció su abandono, escribió: «Me separo de quienes han renunciado al internacionalismo proletario y a considerarse parte del Movimiento Comunista Internacional»[22]. Gallego promovió la creación de un partido que, si bien inicialmente fue llamado simplemente Partido Comunista (PC), seguidamente pasó a denominarse Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Esta nueva organización, que celebró su congreso fundacional ya en enero de 1984, reivindicaba la vigencia de la dictadura del proletariado, era antieuropeísta y adoptaba una «posición inequívoca de apoyo al campo socialista»: efectivamente, consideraba que el socialismo real, a pesar de «sus errores y limitaciones», encarnaba «el mayor nivel de progreso alcanzado por la humanidad»[23].

En el PCPE confluyeron los varios sectores prosoviéticos que en los años anteriores, en polémica con el eurocomunismo, se habían ido separando del PCE: fueron los casos, por ejemplo, del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) liderado por Pere Ardiaca, que se convirtió en la rama catalana del nuevo partido, y de personalidades como Francisco García Salve. A lo largo de 1984 y 1985, salieron del PCE para seguir a Gallego algunos miles de militantes y unos dirigentes de primer plano, como Jaime Ballesteros y Armando López Salinas[24]. El PCPE, que llegó a contar con cerca de 10.000 miembros, fue reconocido y financiado por la URSS y los países del bloque soviético[25]. A raíz de estos hechos, el PCE protestó duramente ante el PCUS: este, por su parte, defendió su derecho a mantener relaciones con dos partidos comunistas de un mismo país, sobre todo cuando uno de los dos, es decir, el de Gallego, se apoyaba «firmemente en posiciones de clase» y se sostenía «sobre los principios del marxismo-leninismo» y «del internacionalismo proletario»[26]. De todas formas, como se verá en el próximo apartado, la fractura entre el PCE y el PCPE tuvo muy corta duración, empezando a ser saneada ya desde 1986.

Mientras tanto, en diciembre de 1983 se celebró el XI Congreso del PCE, en el cual se confirmó el liderazgo de Iglesias, quien fue reelegido secretario general con 69 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones. Los votos contrarios procedieron, por un lado, de algunos dirigentes que en los meses siguientes

fueron ingresando en el PCPE y, por el otro, de un sector encabezado por Santiago Carrillo que, como se verá en las próximas páginas, iba manifestando una disconformidad creciente con la línea de Iglesias[27]. Unos meses más tarde, en mayo de 1984, el partido lanzó un llamamiento «para promover un proyecto de renovación social desde posiciones de izquierda». La tarea que indicaban los comunistas consistía en «recoger el impulso social al cambio» que latía en diversos sectores de la ciudadanía y «dirigirlo hacia la creación de una convergencia de fuerzas» que pudiera «traducirlo en un programa de acción transformadora»[28]. Esta convergencia, según el PCE, no habría debido limitarse al marco estrictamente político, sino contar con la participación de los viejos y nuevos movimientos sociales, asumiendo y canalizando institucionalmente sus demandas.

La idea de una formación sociopolítica que agrupara a las izquierdas no era nueva. El PCE la había defendido ya a lo largo de los setenta, en el marco de la estrategia eurocomunista, pero con una diferencia significativa. Efectivamente, entonces creía que el nuevo sujeto se tenía que construir sobre todo a través de la colaboración con el PSOE. Ahora, en cambio, lo concebía como un medio para captar a todos aquellos votantes socialistas que se sentían decepcionados por el partido de González, por sus supuestas traiciones de las promesas electorales: los comunistas señalaban como ejemplos en este sentido no solo la cuestión atlántica, sino también la política económica y laboral emprendida por el gobierno, que presentaba un carácter marcadamente liberal y que estaba suscitando un creciente descontento en la clase trabajadora[29]. El PCE se daba cuenta de que, dada su debilidad, sus posibilidades para aprovechar en solitario las oportunidades que parecían abrirse a la izquierda del PSOE eran limitadas: buscaba, por lo tanto, fortalecerse mediante una alianza con otras fuerzas progresistas, convencido de que una coalición con una imagen plural habría tenido más atractivo electoral.

En cualquier caso, hay que precisar que el proyecto de convergencia no estaba dirigido a la creación de un bloque que se opusiera frontalmente al PSOE. En efecto, Iglesias reputaba que una línea de este tipo, vista la disparidad de fuerzas, habría equivalido a atacar «con palos frente a cañones». Además, no juzgaba oportuno abandonar la consigna estratégica de la alianza entre comunistas y socialistas. Así, manteniendo la perspectiva que había promovido desde el principio de su liderazgo, el secretario del PCE consideraba que la nueva formación habría debido trabajar para romper la lógica bipartidista y llegar a medio plazo a la concreción de un gobierno conjunto con el PSOE, presionando

para que este orientara su rumbo decididamente hacia la izquierda[30].

Las movilizaciones eran consideradas como el caldo de cultivo de la convergencia. De hecho, fue en el marco de la campaña anti-OTAN donde el proyecto lanzado por el PCE encontró su primera, embrionaria materialización. A finales de julio de 1984, en efecto, por iniciativa de los comunistas surgió la Mesa por el Referéndum, cuyo objetivo central consistía en presionar al gobierno para que convocara inmediatamente una consulta popular vinculante sobre la permanencia o la salida de España de la Alianza Atlántica. En el nuevo organismo, el PCE actuaba al lado de personalidades como Ramón Tamames y de organizaciones políticas como el Partido de Acción Socialista (PASOC), Euskadiko Ezkerra y Esquerra Republicana de Catalunya. Cabe señalar que el partido liderado por Iglesias, a la hora de promover la formación de la Mesa, evitó entablar contactos con los sectores radicales del movimiento por la paz –representados, por ejemplo, por la LCR y el Movimiento Comunista–, los cuales concebían la batalla anti-OTAN como parte de una lucha revolucionaria más amplia, dirigida contra la institución militar en cuanto tal y, en general, contra el sistema capitalista y patriarcal. La dirección comunista consideraba que una alianza con grupos de este tipo habría desvirtuado el proyecto de convergencia y le habría restado apoyos. Los radicales, por su parte, criticaron ásperamente la aparición de la Mesa, juzgándola como una maniobra instrumental del PCE para aprovecharse de la popularidad de la campaña anti-OTAN y rentabilizarla electoralmente en beneficio propio. De todas formas, estas polémicas no impidieron que las distintas almas del movimiento contra la Alianza Atlántica participaran conjuntamente en iniciativas unitarias: fue el caso, por ejemplo, de la movilización general que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1984, cuando, con ocasión del debate anual sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados, más de medio millón de ciudadanos bajaron a las calles en toda España para demostrar que el PSOE estaba buscando en el Parlamento un consenso a favor de la OTAN que no existía en la sociedad[31].

Mientras el proyecto de convergencia daba sus primeros pasos, el PCE tuvo que hacer frente a una ulterior escisión, encabezada nada menos que por Santiago Carrillo. Desde la primavera de 1983, el ex secretario general fue renegando de buena parte de la evolución eurocomunista que él mismo había impulsado. Efectivamente, proponía un renovado acercamiento a los países del socialismo real, el desarrollo de una política de claro enfrentamiento con el PSOE y la vuelta a una línea anclada en «referencias de clase»[32]. Criticaba el modelo de partido «laico» promovido por Iglesias no solo por ser «un partido sin doctrina,

sin filosofía» y «sin teoría», sino también por haber renunciado en substancia al centralismo democrático, al optar por una mayor flexibilidad interna: a su entender, estos elementos representaban una victoria tardía de las tesis sostenidas por los eurocomunistas renovadores durante la Transición[33]. Además, el autor de Eurocomunismo y Estado se mostró en profundo desacuerdo con la puesta en marcha de la convergencia. Carrillo afirmaba que la nueva formación sociopolítica tenía sentido hacerla con el PSOE en los setenta, mientras que, a la altura de 1984-1985, no había actores relevantes con los que valiera la pena aliarse. El exsecretario general consideraba que Iglesias, un «blandengue y socialdemócrata»[34], había impulsado una línea liquidacionista, porque la confluencia habría llevado a la desideologización e incluso a la desaparición del PCE.

En realidad, más allá de los aspectos ideológicos y estratégicos, la divergencia parecía basarse en una cuestión puramente de poder. Efectivamente, Carrillo, cuando tras su dimisión promocionó el ascenso a la Secretaría General de Iglesias –hasta entonces su protegido–, esperaba tener la posibilidad de ejercer de líder en la sombra. Sin embargo, desde el principio el minero de Mieres demostró voluntad de actuar con absoluta independencia. De hecho, el mismo día de la elección de Iglesias, Enrique Curiel había advertido de que este no iba a ser «ningún hombre de paja»[35]. Así, Carrillo fue «poseído por una furia nihilista»: «[Parece] casi como si estuviera intentando –observaba un informe elaborado por la CIA en 1985– que el PCE se derrumbara sobre las cabezas de sus herederos ingratos»[36].

Al no conseguir recuperar el liderazgo del PCE, en la primavera de 1985 Carrillo salió de sus filas y fundó el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-UC). La escisión promovida por el ex secretario general tuvo en realidad una relevancia numérica más reducida que la de Gallego, obteniendo adhesiones significativas solamente en Madrid, Andalucía y Valencia. El PTE-UC, después de no obtener ningún escaño en las elecciones generales de 1986 y 1989, acabó, paradójicamente, integrándose en el PSOE en 1991[37].

A pesar de que su elección como secretario general había sido debida también a sus supuestas habilidades de «integrador», Iglesias no había sido capaz de evitar dos cismas. De todas formas, el ulterior desarrollo de la campaña anti-OTAN y de la convergencia permitió al PCE taponar los efectos negativos de esas rupturas. Las movilizaciones contra la Alianza Atlántica alcanzaron nuevamente el cénit en la primavera de 1985, con ocasión de la visita de Reagan a España: el

5 de mayo, medio millón de ciudadanos en Madrid y 250.000 en Barcelona bajaron a las calles para declarar al presidente norteamericano, demonizado en cuanto símbolo de guerra y opresión, como «persona no grata». Después del verano la batalla contra la permanencia en la Alianza Atlántica entró en su fase final. Los comunistas indicaban que no se podía hacer «una campaña anti-PSOE»[38]. De esta forma se mantenían coherentes con su idea de no atacar frontalmente a los socialistas, evitando descalificaciones de carácter general: al mismo tiempo, querían evitar alimentar la pretensión de González de presentar el referéndum como un plebiscito sobre el conjunto de la política del Gobierno.

A finales de 1985, el PSOE anunció oficialmente su propósito de celebrar la anhelada consulta popular el 12 de marzo. A principios de 1986 la Mesa por el Referéndum se convirtió en la Plataforma Cívica por la Salida de España de la OTAN, que, nacida en Madrid y articulada en plataformas locales, ante la consulta se ponía como objetivo explícito la victoria del NO a la permanencia. Al nuevo organismo se incorporaron casi todas las fuerzas que habían compuesto la Mesa y otras como el oscuro Partido Humanista. La Plataforma puso en marcha un intenso calendario de iniciativas, consiguiendo una notable visibilidad mediática: efectivamente, a lo largo de febrero promovió grandes manifestaciones, organizó debates y lanzó un documento suscrito por intelectuales y artistas. La campaña anti-OTAN se cerró el 9 de marzo, cuando los diversos actores del movimiento por la paz organizaron un último acto unitario en el madrileño Parque del Oeste.

Sin embargo, el referéndum fue ganado por los partidarios de la permanencia en la OTAN (52,5 por 100 de los votos). El PCE y los otros grupos que habían luchado por la salida atribuyeron la responsabilidad de la derrota esencialmente a los «medios de presión, chantaje e intimidación» que supuestamente había utilizado el PSOE, destacando sobre todo la «manipulación partidista» por parte del Gobierno de la televisión pública y de los otros medios de comunicación[39]. Pese a la derrota, el PCE consideraba que se había creado una situación «inmejorable para conseguir la articulación de las distintas fuerzas a la izquierda del PSOE»[40]. En este sentido incitaba a seguir el ejemplo de Convocatoria por Andalucía, impulsada desde finales de 1984 por Julio Anguita. Así, colaborando estrechamente con el PASOC y la Federación Progresista recién fundada por Tamames, con vista a las elecciones generales previstas para el 22 de junio promovió la conversión de la Plataforma Cívica en la coalición Izquierda Unida. Esta, que aspiraba a recoger una porción sustancial de los casi siete millones de votos que en el referéndum se habían expresado por el NO, surgió el 27 de abril.

Entre sus miembros estaban también Izquierda Republicana, el Partido Carlista, el Partido Humanista y varias personalidades independientes, como Cristina Almeida. Paradójicamente, por razones que se verán en las próximas páginas, participaba también el PCPE. Gerardo Iglesias fue nombrado coordinador general de la coalición. A este propósito, hay que destacar que el PCE era sin duda el integrante de IU dotado de mayor peso político: una característica que se mantuvo constante en los años sucesivos y que permitió a los comunistas ejercer de facto el papel dirigente y hegemónico en la nueva formación.

Izquierda Unida, a pesar de que se presentara como heredera de la larga batalla contra la Alianza Atlántica, como ya había pasado a la Mesa por el Referéndum fue desautorizada por buena parte de las organizaciones y grupos que habían constituido el tejido de base del movimiento anti-OTAN. Estos rechazaron la perspectiva institucional de IU, reputando que, para promover un verdadero cambio social y político, hacía falta apostar claramente por la dimensión asamblearia e implementar los métodos de desobediencia civil. Evidenciaban también que el nuevo sujeto impulsado por los comunistas, contrariamente a la imagen que querían transmitir, representaba un proyecto nada innovador, porque se había limitado a agrupar partidos y personalidades de la vieja izquierda[41]. IU se quedó, por lo tanto, como una coalición meramente política, fracasando la esperanza del PCE de atraer hacia la convergencia también a los movimientos sociales.

En el programa electoral de IU se reivindicaba una política exterior de paz y neutralidad, que contribuyese a la «formación de una Europa de los pueblos» capaz de salvaguardar su «independencia» y de trabajar «por la disolución de los bloques militares». Asimismo, se invocaba un «nuevo modelo productivo de economía mixta», en el que primasen «los intereses colectivos» sobre los privados, y cuyos motores fuesen «un sector público eficaz y democrático», las pymes y «un sector social de cooperativas y otras formas colectivas de producción». No faltaban elementos ecologistas, al mismo tiempo que se hacía hincapié en la necesidad de ampliar las libertades, «estimulando la participación política» y «el control vecinal y ciudadano de los representantes del pueblo», para así superar definitivamente «la cultura del autoritarismo» y «la siniestra idea de la razón de Estado»[42].

En las elecciones generales del 22 de junio Izquierda Unida consiguió 7 diputados (5 del PCE y Partido Socialista Unificado de Cataluña –PSUC–, 1 del PCPE y 1 de la Federación Progresista) y casi un millón de votos, sin ser capaz

de atraer a una parte más sustancial de los siete millones de ciudadanos que habían votado por el «NO» en el referéndum sobre la OTAN. Buena parte del electorado que se había pronunciado contra la permanencia de España en la Alianza Atlántica en las generales dio su apoyo al PSOE, que revalidó su mayoría absoluta. Hay que tener en cuenta el hecho de que IU había nacido de una derrota: el resultado del referéndum había causado un «segundo desencanto» en las izquierdas, limitando así los apoyos que tal vez la nueva formación habría podido conseguir en el caso de una victoria de la causa anti-OTAN en marzo. De todas formas, el balance para el PCE no era negativo. El partido, gracias al papel destacado que había desempeñado en la batalla por el referéndum y a la plasmación de la convergencia, había contenido los perjuicios derivados de las importantes escisiones que había sufrido y podía observar un ligero incremento electoral respecto a 1982. Había vuelto también a tener cierta presencia en las dinámicas de las movilizaciones sociales, después de haberla perdido durante los años del consenso. Más en general, los comunistas habían cerrado definitivamente su transición e inaugurado un nuevo ciclo de su historia, poniendo en marcha una redefinición de sus modalidades organizativas y de su espacio político. En la década siguiente, como se verá a continuación, IU se consolidó y experimentó un constante crecimiento electoral, triplicando, en 1996, el resultado de 1986.

PERESTROIKA EN LA URSS, CAMBIO DE RUMBO EN EL PCE

En marzo de 1985 Mijaíl Gorbachov fue nombrado secretario general del PCUS. Su llegada al liderazgo de la URSS suscitó un enorme entusiasmo en el PCE, como recuerda Carlos Carnero, miembro de la Comisión Internacional del partido en la segunda mitad de los ochenta:

Fue una noticia esperanzadora […]. Con sus primeros pasos Gorbachov ya indicaba un deseo de humanizar el socialismo. […] Era una esperanza espectacular. […] Lo seguíamos todos los días, a través de la prensa inglesa, de la prensa francesa, de los compañeros que hablaban ruso y traducían lo que se publicaba en Pravda, en Izvestia… Íbamos allí, teníamos reuniones… El

ambiente empezaba a ser distinto[43].

Como ilustran eficazmente estas palabras, el PCE miró con grandes expectativas al ambicioso programa de reformas impulsado por el nuevo líder del Kremlin. Efectivamente, Gorbachov, a través de la elaboración y puesta en práctica del llamado «nuevo pensamiento», marcó rápidamente una significativa discontinuidad con las políticas adoptadas hasta entonces por la URSS en el plano nacional e internacional. La perestroika, con su apuesta por la construcción de un modelo de socialismo liberado de las deformaciones estalinistas, apareció al PCE como una esperanza, como un proyecto potencialmente capaz no solo de revitalizar el sistema soviético, sino también de proporcionar una renovada legitimidad a los ideales y sujetos políticos que tenían su origen en la Revolución de Octubre[44].

La dirección del partido español, por lo menos hasta 1989, se mostró en plena sintonía con la labor de Gorbachov. Acogió muy favorablemente las reformas democratizadoras tendientes a la progresiva implantación en la URSS de libertades políticas, socioculturales y económicas. En este sentido, aplaudió la relajación de la censura y la liberación de disidentes como el Premio Nobel por la Paz Andrei Sakharov. Asimismo, consideró que las tesis aprobadas en la XIX Conferencia del PCUS –que ampliaban los cauces de participación popular y empezaban a disolver la fusión Partido-Estado– tenían una «indudable trascendencia» porque profundizaban «el sistema político del socialismo en la dirección de un mayor pluralismo», poniendo las bases de «un Estado socialista de derecho»[45]. Además, el PCE elogió la política exterior de la perestroika por haber inaugurado «una nueva fase en las relaciones internacionales, donde el diálogo, la distensión y la solución negociada de los conflictos» se estaban convirtiendo en «la tónica dominante»[46]. Gorbachov, quien desde su llegada al poder no solo había impulsado negociaciones con EEUU dirigidas a la disminución de los arsenales nucleares, sino que había adoptado también medidas de desarme unilateral, según la dirección comunista española tenía el enorme mérito de haber sustituido «el equilibrio del terror [por] el equilibrio de la confianza», demostrando una clara voluntad de «acabar con la desunión y el enfrentamiento entre el Este y el Oeste»[47].

En este contexto, el PCE abandonó la postura de equidistancia entre las dos superpotencias que había mantenido hasta 1985: ahora reivindicaba la

superioridad de la lógica de la paz soviética, confirmada por hechos como la retirada de Afganistán, frente a una política exterior estadounidense que, como demostraban, por ejemplo, las injerencias de Washington en Latinoamérica, persistía en una línea belicista e imperialista. En la misma óptica, el PCE respaldó con entusiasmo el concepto gorbachoviano de «hogar común europeo», y celebró como un «hito histórico» el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Europea (CE) y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en 1988: consideraba que el acercamiento en curso entre los países de Europa occidental y oriental habría podido desembocar a medio plazo en la creación de un nuevo sistema de seguridad continental desvinculado de EEUU[48].

Animado por las esperanzas suscitadas por la perestroika, y tras constatar que los principales planteamientos eurocomunistas que desde finales de los sesenta le habían causado repetidas fricciones con el movimiento comunista internacional eran ahora avalados por el nuevo rumbo soviético, en la segunda mitad de los ochenta el PCE se acercó nuevamente al PCUS. Tras unos contactos mantenidos en 1985 y 1986, la efectiva normalización de las relaciones entre los dos partidos se produjo en febrero de 1987, cuando, en Moscú, una delegación española se entrevistó con una soviética encabezada por Vadim Zagladin –el máximo responsable del Departamento Internacional del Kremlin–. Los dos partidos ponían así fin a casi veinte años de polémicas y enfrentamientos: «El PCUS y el PCE –afirmaba el comunicado conjunto difundido a raíz del encuentro– hacen constar con satisfacción que actualmente se han superado en sus relaciones ciertos residuos del pasado»[49]. Según documentación soviética proporcionada a la Fiscalía española, precisamente desde 1987 el partido español volvió a recibir alguna ayuda económica por parte de la URSS[50].

Con el beneplácito del Kremlin, el PCE fue normalizando sus relaciones también con resto del movimiento comunista internacional. Hasta 1989 tuvo frecuentes contactos con partidos comunistas (PPCC) de Europa occidental y oriental y realizó numerosos viajes a la URSS y a otros países del bloque soviético[51]. No obstante, este renovado internacionalismo resultaba efímero y poco fecundo. Más allá de declaraciones de amistad y fórmulas rituales, no conseguía dar lugar a sinergias significativas que se tradujeran en proyectos políticos viables. Esto se debía a que el movimiento comunista en realidad no estaba experimentando su revitalización, sino más bien su canto del cisne, encontrándose en un estado de descomposición ya irreversible. El propio Gorbachov había empezado a considerar estériles las relaciones con los PPCC y prefería orientarse hacia los partidos socialistas y socialdemócratas.

La falta de cohesión de los PPCC a la hora de abordar políticas concretas fue evidente en el marco comunitario. El PCE, como es notorio, desde 1972 había mantenido una actitud esencialmente favorable hacia el proceso de integración europea. De hecho, en 1985 había votado unánimemente a favor del ingreso de España en la CE y ratificado el Acta Única. Aunque criticaba la primacía de los intereses económicos que caracterizaba las dinámicas comunitarias, considerando necesaria en este sentido la implementación de medidas de cohesión económica y social, lo hacía en nombre de un europeísmo de signo federalista y progresista. Invocaba, por ejemplo, la transferencia de mayores competencias a las instancias de la Comunidad por parte de los Estados miembros y, al mismo tiempo, reclamaba la democratización de las estructuras europeas, atribuyendo poderes legislativos al Parlamento de Estrasburgo e incrementando los mecanismos de participación popular. El PCE, en otras palabras, pedía «más Europa», y veía en el concepto gorbachoviano de «hogar común» un factor que podía alentar transformaciones progresistas a escala continental[52].

Esta visión era compartida por el Partido Comunista Italiano (PCI), que no por casualidad había sido el interlocutor privilegiado del PCE en el ámbito internacional en los últimos veinte años. En cambio, los dos otros principales PPCC de Europa occidental, es decir, el francés (PCF) y el portugués (PCP), presentaban una postura que resultaba incompatible con la española. Eran profundamente críticos con la integración europea, que juzgaban como un proyecto al servicio del capitalismo transnacional. Consecuentemente, se oponían a la perspectiva federalista y a cualquier medida que pudiera conllevar una ulterior pérdida de soberanía nacional, incluida la ampliación de las facultades del PE. La división entre italianos y españoles, por un lado, y franceses y portugueses, por el otro, se consumó a raíz de las elecciones europeas celebradas en junio de 1989: IU y PCI, en efecto, decidieron abandonar el grupo parlamentario europeo de Comunistas y Afines –al que se habían adherido hasta entonces– para impulsar la creación de uno nuevo, que se hiciera portador de su proyecto de europeísmo progresista. Nació así el grupo de la Izquierda Unitaria Europea (IUE), al que se sumaron el Partido Socialista Popular de Dinamarca y la coalición griega Synapsismós[53].

De todas formas, en el verano de 1989 en las propias filas de los comunistas españoles se estaba gestando una intensa disputa entre concepciones antitéticas de la cuestión europea. Se trataba de un conflicto todavía latente, pero que habría estallado en los meses y años siguientes, como parte de un enfrentamiento más

general acerca de la línea del PCE e IU: un enfrentamiento entre sectores portadores de distintas sensibilidades ideológicas que había empezado a incubarse tras la elección, en el XII Congreso del partido –febrero de 1988–, de Julio Anguita como nuevo secretario general. En este sentido, resulta indicativo que, mientras Francisco Palero y Nicolás Sartorius negociaban con el PCI la formación de IUE, el llamado «califa rojo» consideraba que los italianos, con su proyecto europeísta, «vendían humo»[54]. Todavía en 1989, Anguita sostenía la necesidad de la «planificación económica en Europa» para hacer frente a la «hegemonía del gran capital», y decía compartir «con los camaradas portugueses y franceses la idea de que» había «que hacer un frente nacional para defender los intereses de la clase trabajadora nacional»[55].

El relevo de Iglesias al frente del PCE se debió a que, en 1986-1987, el partido había entrado en un impasse. A este propósito hay que tener en cuenta que Izquierda Unida, tras su surgimiento, no había sido desarrollada ulteriormente, quedando estancada. Efectivamente, no había sido dotada de una línea política y estratégica de amplio alcance, ni de un modelo organizativo definido. El resultado conseguido por la coalición en las elecciones europeas de 1987 (5,3 por 100 de los votos y 3 eurodiputados) sonó como una alarma: el crecimiento, comparado con las generales del año anterior, había sido mínimo, y muy por debajo de las expectativas. Asimismo, el PCE seguía careciendo de una visión clara acerca de la actitud que adoptar ante el PSOE, que oscilaba entre la crítica de su supuesta derechización y la búsqueda de colaboración, sin que fuera concretado cuál de estos dos aspectos convenía privilegiar. Esta ambigüedad de fondo se puede notar, por ejemplo, en las siguientes palabras pronunciadas por Iglesias ante el CC en 1987:

No nos confrontamos con el PSOE, sino con la política derechizante del Gobierno. […] Pero nosotros no sólo no somos antisocialistas. Nosotros tenemos una aspiración estratégica de trasformar este país, lo que queremos hacer con distintas fuerzas y una de ellas, muy importante, es el PSOE[56].

Ante esta situación, en las filas comunistas surgieron voces que reclamaban un liderazgo más fuerte, capaz de impulsar un proyecto más nítido y contundente, tanto para el partido como para IU. Así, en el XII Congreso del PCE fue elegido

como nuevo secretario general, por unanimidad, Julio Anguita. Este apareció como el líder adecuado por varias razones: había sido el único alcalde comunista en gobernar una capital de provincia, Córdoba, durante dos legislaturas; había sido también el impulsor de la exitosa convergencia Convocatoria por Andalucía, que en las elecciones andaluzas de 1986 había obtenido el 17,9 por 100 de votos; además, tenía una personalidad carismática y gozaba de una buena imagen ante la opinión pública[57].

Anguita alentó inmediatamente un tajante viraje a la izquierda. Desde sus primeras declaraciones como secretario general, destacó que el PCE tenía que desatar una «lucha ideológica sin tregua ni cuartel», anclada en «la negación de lo existente»[58], es decir, en el drástico rechazo de un sistema capitalista que merecía perecer «por inhumano»[59]. Frente a una política reformista que los medios de comunicación describían como «más sensata y más responsable», reivindicó una «política radicalmente transformadora»[60]. Asimismo, invocó la recuperación de la perspectiva utópica, que él concebía como la tensión ideal necesaria para transformar en profundidad el modelo sociopolítico vigente: la describía como un elemento esencial de la mentalidad de los comunistas, siendo el aliento que daba «sentido a su acción política»[61].

En este marco, Anguita puso en marcha una línea de claro enfrentamiento con el PSOE, marcando un cambio sustancial respecto a la etapa anterior. Afirmó la necesidad de que PCE e IU, abandonando la tendencia a confinarse en un papel permanentemente minoritario, empezaran a disputar la hegemonía a los socialistas y a presentarse explícitamente como alternativa de gobierno. La aspiración a convertirse en mayoría conllevaba la adopción de una óptica voluntarista coherente con los elogios de la utopía. A los factores de orden puramente ideológico se juntaban razones de oportunidad política: el líder comunista asumía el supuesto de que, al competir en buena medida para el mismo espacio electoral, el crecimiento de Izquierda Unida tenía que realizarse sobre todo a expensas del partido de González. Así, Anguita elaboró un discurso según el cual el PSOE, al supeditar sus políticas a los intereses de las clases dominantes y de los poderes fácticos nacionales y extranjeros, estaba renegando de facto su naturaleza de izquierda: «En la medida en que los valores, los programas y las prácticas políticas de la derecha están defendidos en el palenque por otro combatiente que no es formalmente la derecha –declaró en 1989–, no tenemos más remedio que entrar en confrontación con él»[62].

Los ataques de los comunistas al PSOE se centraron especialmente en el terreno

económico. Ya en los años anteriores el PCE, directamente y a través de Comisiones Obreras (CCOO), había denunciado algunos aspectos de la política económica impulsada por los Ejecutivos de González. Había respaldado, por ejemplo, el ciclo de movilizaciones contra la precarización del empleo y los recortes de las pensiones que había culminado, en junio de 1985, con una huelga general convocada por CCOO y sindicatos minoritarios. Asimismo, en 1986 había manifestado su oposición a los Presupuestos Generales del Estado porque preveían, entre otras cosas, la «congelación de los gastos sociales», «una política fiscal regresiva» y el «desmantelamiento incontrolado y antidemocrático del sector público»[63]. No obstante, el PCE había siempre acompañado esas protestas con una mano tendida al PSOE, subrayando que estaba «abierta y claramente por la negociación de los grandes problemas» económicos, para que se abriera «paso una salida de progreso a la crisis»[64]. Bajo el liderazgo de Anguita, en cambio, el PCE optó por una línea en la que las descalificaciones prevalecían netamente sobre la búsqueda de diálogo y, consecuentemente, incrementó considerablemente la intensidad de sus críticas a la política económica y social del PSOE. Efectivamente, la definía como «una política liberal-conservadora, paralela a la de los Gobiernos más conservadores de Europa»[65], y la presentaba de la siguiente manera: «Una política que ha destinado el incremento de la riqueza nacional a mejorar los beneficios de la banca, de los grandes empresarios encabezados por la CEOE y del capital especulativo extranjero, pero no a reducir el paro, elevar sustancialmente los salarios, las pensiones, los servicios públicos»[66].

El secretario general del PCE acusaba a la cúpula socialista de estar estructurando un modelo socioeconómico basado en una ampliación de las desigualdades y en un «estado de desequilibrios, en la especulación que genera inflación». Anguita se oponía con fuerza a la modernidad promovida por el discurso y las políticas del PSOE, que se caracterizaba por la definitiva asimilación de las dinámicas propias del neoliberalismo y de las sociedades de consumo avanzadas. La describía en los siguientes términos: «La economía sumergida, las horas extra, trabajar mucho con tal de disfrutar luego del vídeo y del cubata. […] Ese es el modelo de sociedad hibernada con las aspirinas que le suministran los programas que entontecen al respetable. Eso es la modernidad». Anguita creía que las transformaciones auspiciadas por el Programa 2.000 e impulsadas por el gobierno socialista estaban provocando una crisis de valores, acentuando la alienación y las tendencias individualistas e insolidarias. Como antídoto, el líder comunista invocaba una acción política inspirada en criterios «humanísticos» y «éticos»[67]. En este contexto, PCE e IU dieron su pleno

apoyo a la huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada no solo por CCOO, sino también por UGT, lo que evidenciaba una seria fractura en la familia socialista. La movilización fue un éxito, representando la protesta más masiva que había tenido lugar hasta entonces en democracia: el 90 por 100 de la población activa se adhirió a la huelga y más de un millón de personas participaron en manifestaciones callejeras. El PCE consideró con entusiasmo que el 14-D había ampliado significativamente sus perspectivas, puesto que había demostrado la crisis del discurso de la modernización socialista y había roto el bloque social que apoyaba al PSOE[68].

Con el viraje a la izquierda impulsado por Anguita, el PCE se iba desvinculando de la orientación eurocomunista que había sido mantenida por Gerardo Iglesias. El hecho de que Francisco Frutos, quien había sido el líder del sector leninista en Catalunya en 1980-1981, se fuera convirtiendo en el «número dos» dentro de la dirección, era ilustrativo del nuevo rumbo del partido. Un nuevo rumbo que fue alimentado por la (re)absorción, en el llamado Congreso de Unidad celebrado en enero de 1989, de la casi totalidad del PCPE. Ya en 1986, gracias al renovado acercamiento al PCUS en el marco de la perestroika, el PCE había reintegrado en sus filas a la mayoría del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) –escisión prosoviética promovida a principios de los setenta por Enrique Líster–. Aquel mismo año, PCE y PCPE habían puesto en marcha conversaciones encaminadas a la búsqueda de la unificación, lo que explica el ingreso del partido de Ignacio Gallego en IU. Esta superación de la división de los comunistas españoles había sido alentada por el PCUS y otros PPCC del bloque soviético[69]. Así, paradójicamente, la renovación en la URSS favoreció la entrada en el PCE de cerca de 8.000 militantes portadores de un marxismo-leninismo ortodoxo, varios de los cuales acabarían ocupando puestos directivos de notable importancia, fortaleciendo el viraje a la izquierda promovido por Anguita[70]. Significativamente, el documento congresual de 1989 subrayaba con énfasis la necesidad de una política marcadamente de clase y contenía críticas ásperas a la línea eurocomunista, juzgada como errónea y oportunista[71]. Estos tipos de planteamientos contribuyeron a que el proceso de unificación, por su impacto ideológico y orgánico, provocara un serio malestar en una parte de la dirección del PCE. Simón Sánchez Montero, por ejemplo, escribió en sus memorias que, «con el retorno» del PCPE, «volvió» al partido «la política estalinista»[72].

Un mes después del Congreso de Unidad, Izquierda Unida celebró finalmente su I Asamblea General –febrero de 1989–. Hay que señalar que, entre 1986 y 1988,

el Partido Humanista, el Partido Carlista y la Federación Progresista habían salido de Izquierda Unida. Esta, por lo tanto, en 1989 estaba integrada por solo tres partidos de nivel estatal: PCE, PASOC e Izquierda Republicana. En su I Asamblea, IU se definió como un movimiento político y social y se configuró como una federación integrada por partidos y personalidades. Dejó definitivamente de ser un cartel electoral coyuntural y empezó a dotarse de una estructura organizativa estable, compuesta por órganos ordenados jerárquicamente que iban desde la Asamblea Federal, el equivalente del Congreso, a la Presidencia. Al mismo tiempo, los partidos miembros le fueron traspasando algunas funciones clave, como, por ejemplo, la competencia exclusiva en lo que concernía a la representación institucional.

En los órganos elegidos en la I Asamblea, los comunistas contaban con una presencia mayoritaria. Esto reflejaba y consolidaba el papel dirigente ejercido por el PCE en el funcionamiento y en el proceso de toma de decisiones de IU. Un papel dirigente debido al hecho de que el partido liderado por Anguita poseía una fuerza organizativa y un peso político netamente superiores a los demás componentes de la federación. A este propósito, hay que considerar, por ejemplo, que IU en sus primeros años no contaba con infraestructuras propias: desarrolló entonces su vida orgánica y su actividad política esencialmente a través de los cauces organizativos del PCE, que era el único de sus miembros en disponer de los recursos materiales y humanos necesarios para posibilitar la continuidad de su trabajo y su presencia en todo el territorio español. En este marco, la línea política de la federación era dibujada básicamente por el PCE: la dirección comunista establecía las posturas que adoptar sobre los distintos temas y luego trasladaba sus decisiones, bajo forma de propuestas, a los órganos de IU para que fueran aprobadas formalmente. El papel dirigente del PCE se veía confirmado y reforzado por la práctica habitual según la cual su secretario general acababa ocupando también el cargo de coordinador general de IU, lo que ponía al partido y a la federación bajo el mismo liderazgo unipersonal. No fue casual, por lo tanto, que en su I Asamblea Izquierda Unida no solo designara a Anguita como coordinador, sino que adoptara también sus consignas, definiéndose como una «triple alternativa»: alternativa de Gobierno, alternativa al modelo de Estado y alternativa al modelo de sociedad. De la misma manera, un año más tarde llegó a asumir oficialmente la dimensión utópica[73].

Así, resulta evidente que la configuración y las dinámicas de IU proporcionaban al PCE notables ventajas: los comunistas no solo no tenían que renunciar a su línea política, sino que ampliaban sus apoyos y extendían su área de influencia.

Además, la imagen plural constituía un recurso electoral nada despreciable. También los partidos minoritarios, a pesar de su condición subalterna, extraían de su participación en IU importantes beneficios: en efecto, gracias a la coalición gozaban de sobrerrepresentación, es decir, tenían acceso a cargos públicos que no habrían podido conquistar actuando en solitario[74].

A lo largo de 1989, PCE e IU incrementaron los ataques al PSOE. Cabalgando la ola del 14-D, esperaban atraer a aquellos votantes socialistas que, desde posiciones de izquierdas, se mostraban descontentos con la labor del Gobierno. De hecho, en vista de las elecciones generales convocadas para el 29 de octubre, los comunistas indicaban que el mensaje clave de la campaña tenía que ser el siguiente: «El empuje del "cambio" prometido [por el PSOE] en 1982 está acabado. La política económica y social, la política exterior de creciente compromiso en la OTAN y su correspondiente militarización […] han cerrado el cartapacio progresista votado masivamente en 1982»[75]. El 29 de octubre, IU registró un crecimiento notable, obteniendo 1.858.588 votos (9,07 por 100), el doble que en 1986. De los 17 escaños parlamentarios conquistados por la federación, 16 fueron ocupados por los comunistas (13 por el PCE y 3 por el PSUC) y uno por el PASOC. Mundo Obrero celebró los resultados como el «amanecer de una nueva etapa» y, refiriéndose al hecho de que el PSOE se había quedado a un escaño de la mayoría absoluta, afirmó: «Se acabaron la arrogancia, la prepotencia, la falta de escrúpulos a la hora de gobernar»[76].

Los comunistas habían conseguido remontar el colapso electoral de 1982. La política de confrontación con el PSOE impulsada por Anguita resultaba rentable, dado que se beneficiaba del desgaste que empezaba a afectar al partido de gobierno después de dos legislaturas en el poder. No obstante, la distancia entre el PSOE e IU seguía siendo abismal: quedaba en evidencia, por lo tanto, el elevado voluntarismo que caracterizaba la consigna de la alternativa. Este voluntarismo funcionaba claramente como recurso movilizador en el marco de la línea política desarrollada por Anguita: una línea que, apartada la moderación que había sido propia del eurocomunismo, con tonos mesiánicos enfatizaba los rasgos antagonistas de la identidad del PCE y, por extenso, de IU.

De todas formas, el viraje a la izquierda producía reticencias en las filas comunistas. Un primer síntoma en este sentido fue representado, a finales de 1988, por la decisión de Enrique Curiel de abandonar el PCE. Curiel describió así el motivo de su salida de la formación en la que militaba desde 1969: «No es otro que mi convicción de que, tras la celebración del XII Congreso, se viene

produciendo un alejamiento progresivo del Partido de la orientación eurocomunista, a cuya defensa he dedicado mis mejores esfuerzos»[77]. Curiel consideraba que el PCE estaba experimentando un proceso de dogmatización y una involución ideológica, habiendo emprendido un viaje «hacia el fundamentalismo»[78]. Además, el ex vicesecretario del PCE rechazaba la línea de confrontación frontal con el PSOE, invocando la construcción de una casa común de las izquierdas.

El caso de Curiel anticipó debates que se presentarían con más fuerza a raíz del derrumbe del bloque soviético que ya se iba vislumbrando en el horizonte. A este propósito, en mayo de 1989, Anatoly Chernyaev –asesor de política exterior de Gorbachov– escribía en su diario:

El socialismo está desapareciendo en Europa del Este. […] Lo más importante es la disolución de los mitos y de las innaturales formas de vida de nuestra sociedad: la imagen del socialismo se está desintegrando; […] la federación, el imperio, se está derrumbando[79].

Desde el verano, los cambios en el bloque soviético se fueron sucediendo a un ritmo frenético. En agosto, Polonia fue el primer país donde se formó un gobierno liderado por un no comunista. Otros Estados, como Hungría, iban encaminados en la misma dirección. En una rápida espiral de acontecimientos, los regímenes comunistas en Europa central y oriental fueron desapareciendo uno tras otro[80]. De hecho, solo unos pocos días después del crecimiento conseguido por IU en las elecciones de octubre de 1989, un acontecimiento trascendental marcó un punto de no retorno en este proceso de disolución del llamado socialismo real. Efectivamente, el 9 de noviembre, el Muro de Berlín cayó. La inexorable crisis que estaba experimentando el ancestral referente soviético obligó entonces a los partidos comunistas de todo el mundo a hacer las cuentas con su propia identidad forjada al calor de la Revolución de Octubre, poniéndoles ante disyuntivas de vital importancia. ¿Debían disolverse porque habían sido derrotados por la historia o, al contrario, tenían todavía una «razón de ser»?

EL COMUNISMO: ¿UNA APUESTA NECESARIA?

El 12 de noviembre de 1989, tres días después de la caída del Muro de Berlín, fallecía en Madrid la «madre de todos los camaradas»: Dolores Ibárruri. La coincidencia temporal de los dos acontecimientos simbolizaba el final de una época. En su discurso en el entierro de Pasionaria, Anguita afirmó: «El PCE, tu PCE, se ratifica y apuesta por todo lo que ha dado sentido a tu vida de luchadora. Seremos la fuerza política comunista que estos momentos demandan. […] El socialismo, Dolores, por necesario, sigue siendo nuestro horizonte»[81]. Anguita dejaba clara así su voluntad de garantizar la continuidad del partido y de su identidad comunista. Desde que había sido elegido secretario general se había pronunciado repetidamente en este sentido, rechazando rotundamente la idea de que el colapso de la experiencia soviética obligara el PCE a una refundación ideológica y organizativa. Consideraba que seguía habiendo «una apuesta comunista por el mundo, independientemente del muro de Berlín o de otros muros»[82].

En las filas del PCE, esta lectura no era compartida por algunos dirigentes como Juan Berga –responsable del área de Política Institucional–, que el 6 de noviembre había afirmado ante el Secretariado del partido: «Se ha roto todo lo que quedaba de tradición de la Tercera Internacional. […] Debemos asumir la cuestión con absoluta valentía. […] Estamos encaminados (yo no sé si esto es muy fuerte, si se puede decir o no) a una nueva formación política»[83]. También en una reunión del CC celebrada en diciembre, la primera en tener lugar tras los acontecimientos de Berlín, varios participantes observaron que el fracaso histórico del socialismo real conllevaba una deslegitimación inapelable del conjunto de la cultura política comunista[84].

Los defensores de esta visión fueron conformando el sector llamado «renovador», que en los años siguientes se fue contraponiendo al sector oficial –denominado también «duro», especialmente por los medios de comunicación– agrupado alrededor de Anguita. Los renovadores, partiendo de la idea de que la identidad comunista había perdido toda vigencia, empezaban a alentar la perspectiva de disolver el PCE en Izquierda Unida, poniendo consecuentemente en marcha la conversión de la federación en un partido político de nuevo cuño. Sin embargo, las voces de este tipo eran todavía pocas y aisladas.

De hecho, en la misma reunión de diciembre, el CC aprobó casi por unanimidad un informe que sostenía que «el comunismo como fuerza liberadora» no había muerto, sino que seguía teniendo «plena validez»: lo que estaba muriendo en Europa central y oriental, según dicho documento, era algo que «nunca debía haber nacido», es decir, «la interpretación burocrática de las ideas y la usurpación del nombre comunismo»[85]. En abril de 1990, la Conferencia nacional del PCE se expresó en términos análogos, afirmando que la caída del Muro de Berlín había desintegrado la que había sido una concepción errónea «del comunismo como una doctrina totalizadora o totalizante, fundamentada en la falta de libertad y en la ausencia de controles democráticos», que había utilizado métodos feroces y había conducido «a la mentira, al doctrinarismo y al sectarismo»[86]. Coherentemente con este enfoque, las causas de las deformaciones que habían caracterizado el socialismo real no eran atribuidas a la ideología de fondo, sino esencialmente a factores específicos propios del proceso revolucionario soviético: el autoritarismo de Stalin, la realidad atrasada de Rusia, el cerco internacional que sufrió la URSS, etcétera[87].

El PCE subrayaba que en su evolución se había diferenciado claramente, a nivel teórico y práctico, de aquel moribundo modelo de «falso» comunismo. Reivindicaba en este sentido sus enfrentamientos con Moscú y su compromiso democrático en la lucha antifranquista y la Transición. Consecuentemente, no estaba dispuesto a «tirar por la borda» su patrimonio humano, ético y moral a raíz de la crisis de un sistema del cual se había desvinculado[88]. En otras palabras, la tesis era que los acontecimientos del Este no afectaban al PCE, valedor de «otro» comunismo. Según Anguita, su partido, por su propia historia, no debía tener «ningún complejo» de inferioridad o culpabilidad:

Tengamos claro de una vez –afirmó el secretario general en 1990– que el PCE no le tiene que pedir disculpas a nadie, que nuestro PCE puede enseñar democracia y métodos democráticos a todas las demás formaciones políticas. […] Que «socialismo en democracia», que «lucha por las libertades», que «mantenimiento de las libertades» son patrimonio del PCE, la fuerza que más ha luchado por ellas[89].

Para fortalecer la idea de su total alteridad respecto a la experiencia soviética, el

PCE realizó una operación de (des)memoria selectiva, elaborando un relato oficial que pretendía borrar de su historia aquellos elementos que constituían una carga incómoda. Un documento difundido en 1990, con ocasión del setenta aniversario de la fundación del partido, explicitaba esta lógica:

Ninguna estrategia política se constituye sin un ejercicio de reconciliación entre la memoria y el olvido. Olvido de aquella parte de nuestro acervo histórico y político que no contribuye al presente, y memoria de aquellos rasgos del movimiento precedente en los que podemos encontrar instrumentos útiles de nuestra identidad individual y colectiva[90].

No era casual que el mismo documento, al repasar setenta años de historia del PCE, ni siquiera mencionara las palabras «URSS», «soviético», «Stalin», «Lenin» o «leninismo». Había que relegar en el olvido el hecho de que el partido durante décadas había abrazado los principios estalinistas y, hasta 1968, había mostrado una fidelidad incondicional hacia Moscú. Esta labor de depuración de la memoria no se limitó a omitir facetas oscuras del pasado, sino que llevó a cabo falsificaciones históricas. En diversas ocasiones, por ejemplo, la dirección del PCE sostuvo que los comunistas españoles habían empezado a distanciarse significativamente del Kremlin ya a mitad de los años treinta, cuando Pasionaria había adoptado la política de los Frentes Populares en «confrontación con José Stalin», supuestamente contrario[91]. El partido, en suma, reinventaba su propia tradición para justificar su perpetuación.

Si, como sostenía el PCE, el ideal comunista seguía estando vivo y siendo válido, hacía falta definir en qué consistía. Anguita, en una conferencia pronunciada en febrero de 1990, lo describió como una pulsión libertadora que, enlazando con los valores sociales y humanistas de la Revolución francesa, tenía como horizonte la democracia llevada hasta sus últimas consecuencias: «El comunismo –dijo– es la apuesta por una sociedad de plena emancipación humana. […] Es la plenitud del reino de la libertad. El comunismo […] supone la culminación y la superación de todos los derechos humanos». Este planteamiento se insertaba claramente en la dimensión utópica invocada por el secretario general[92]. Así, el comunismo se configuraba como un mito movilizador, un impulso épico y milenarista basado en el rechazo de la realidad

existente y en la voluntad de cambiarla. En este marco discursivo, el PCE encontraba su «razón de ser» en el aserto de que seguía siendo necesario postular una alternativa profunda al sistema capitalista: un sistema que provocaba una «castración intelectual y moral»[93].

Anguita, por lo tanto, refutaba las tesis según las cuales el naufragio del socialismo real ratificaba la victoria del modelo occidental. Consideraba que formulaciones de este tipo, como las de Fukuyama acerca del fin de la historia, eran parte de una batalla ideológica sin cuartel librada por las fuerzas conservadoras que, aprovechando el colapso de la URSS, intentaban liquidar definitivamente todo ideal emancipador. En este contexto, el renunciar a la identidad comunista habría significado rendirse ante los enemigos, avalando el nuevo orden sociopolítico hegemónico. En cambio, la dirección del PCE afirmaba que el Muro de Berlín había caído «a los dos lados», poniendo al descubierto las miserias y contradicciones no solo del sistema soviético, sino también del capitalista. En esta óptica, en un documento aprobado en la ya citada Conferencia nacional, los comunistas admitían «la capacidad de adaptación del capitalismo y su superioridad frente al socialismo estatalizado, burocrático y antidemocrático, para organizar las fuerzas productivas». Pero, junto a este reconocimiento, ponían «en el fiel de la balanza los muertos, heridos y marginados» producidos «en el mundo entero» por unas políticas y unos valores basados «en el beneficio privado», que mantenían «viejas lacras» y hacían «florecer nuevas injusticias y miserias»[94]. A partir de una visión profundamente negativa del modelo liberal occidental, la dirección del PCE reafirmó el anticapitalismo como seña de identidad fundamental del partido, avivando unos tonos y esquemas interpretativos, sólidamente anclados en el concepto de lucha de clases, que habían sido moderados considerablemente durante la etapa eurocomunista[95].

Mientras tanto, el PSOE proclamaba que la contienda histórica por la hegemonía en el campo de la izquierda se había resuelto definitivamente a favor de la socialdemocracia e indicaba como perspectiva de futuro la «casa común»: una expresión que significaba la disolución del PCE y la confluencia de los comunistas en el partido liderado por Felipe González. Ludolfo Paramio, por ejemplo, a raíz de la caída del Muro de Berlín, escribió: «La tradición comunista ha quedado desfondada con el derrumbamiento del modelo soviético de sociedad. […] Los náufragos de la tradición comunista deberían reflexionar. […] Ya no hay terceras vías […]: o neoconservadurismo o socialismo democrático»[96]. Estas ideas quedaban rechazadas por el PCE, según el cual los

partidos socialistas y socialdemócratas, lejos de poder presumir de una trayectoria exitosa, se habían configurado como cómplices del capitalismo y el imperialismo. Habían asumido el llamado «discurso de la modernización», que les había llevado a la «desideologización», al «abandono del postulado de la lucha de clases» y a la adopción de los valores propios del liberalismo[97]. Según este enfoque, coherente con la línea de enfrentamiento frontal con el PSOE impulsada por Anguita, el futuro de la izquierda no podía vislumbrarse desde aquella «fagocitación socialdemócrata» que suponía la «casa común». Al contrario: el comunismo era necesario precisamente porque representaba la última barrera ideológica y ética que había quedado en defensa de los valores de la izquierda contra la deriva derechista de la socialdemocracia[98].

En suma, a través de una rotunda deslegitimación de sus rivales, la identidad comunista negaba su propia derrota, se fundamentaba en una lógica de contraposición y reafirmaba su vigencia en una perspectiva milenarista. Basándose en estos planteamientos, el sector oficial agrupado alrededor de Anguita consideraba que el PCE no podía ni debía disolverse en Izquierda Unida, porque su existencia era la garantía de que la federación mantuviera viva la apuesta por un cambio radical de la realidad existente. Si hubiera desaparecido el papel dirigente ejercido por el PCE en su seno, IU se habría progresivamente asimilado –según el exdirigente del PCPE Manuel Monereo– a «los partidos de corte socialdemocrático»[99]. En otras palabras, dentro de la federación el PCE se autoatribuía una imprescindible función de «intelectual colectivo» que, desde su teoría marxista y sus posiciones de clase, dotaba la línea de IU de contenido anticapitalista e impulso revolucionario[100].

Al mismo tiempo, precisamente la innovación que había representado la fundación de IU era utilizada para justificar la continuidad de la identidad comunista. Efectivamente, el sector oficial argumentaba que, si bien era cierto que los acontecimientos del Este obligaban al resto de los PPCC a una reformulación de su marco teórico y organizativo, el PCE ya había llevado a cabo esta tarea en 1986, adelantándose a los tiempos con la promoción de IU. En este sentido, en una reunión del CC del partido celebrada el 30 y 31 de octubre de 1990, Anguita declaró: «No vamos a pasar el Rubicón, camaradas, es que ya lo hemos pasado. Lo hemos pasado a través de cada acción concreta en el desarrollo y la creación de Izquierda Unida»[101].

Estas palabras del secretario general iban dirigidas contra una propuesta que había sido presentada en aquella reunión por el Comité Provincial de Sevilla:

una propuesta que solicitaba la disolución progresiva del PCE como partido en IU. Sus promotores habían sido el histórico líder de CCOO Eduardo Saborido –secretario del comité sevillano– y Javier Aristu –su predecesor en el cargo–. Era la primera vez que, desde un órgano del partido, se planteaba oficialmente la cuestión de la disolución. Hasta entonces, las voces renovadoras en el PCE habían seguido siendo pocas y aisladas. Entre las posturas disconformes con la línea oficial que se habían manifestado a lo largo de 1990, cabe mencionar un artículo publicado en Mundo PCE –el boletín del partido– por Juan Berga. Según el autor, ante el colapso de la experiencia soviética los comunistas tenían dos alternativas: «recuperar la moral de la Historia o recuperar la moral del partido». Berga lamentaba que en el PCE estuviera prevaleciendo la segunda opción y, en polémica con el papel atribuido al partido por el sector «duro», afirmaba: «No concibo el PCE como una organización resistencial, reserva de anticapitalismo, o como suministrador de ideología a la nueva alianza»[102]. Los renovadores sevillanos adoptaban argumentos análogos: estimaban que la caída del Muro de Berlín había clausurado el ciclo histórico de los partidos comunistas y criticaban la intención de Anguita de mantener a IU como un «artefacto político», con un «PCE detrás» como «inspirador y cerebro». Además, aunque no eran favorables a la perspectiva de la «casa común», sostenían la necesidad de adoptar una postura flexible hacia el PSOE, evitando una línea de oposición frontal que veían como una «estrategia vana» y «condenada al fracaso»[103]. Saborido y Aristu recibieron el respaldo de algunos destacados dirigentes como Nicolás Sartorius –entonces portavoz parlamentario de IU–. No obstante, el CC rechazó por amplia mayoría su propuesta, que Anguita calificó como «fuga hacia adelante»[104].

A raíz de esta controversia, una periodista preguntó a Saborido si se sentía más afín al líder del PCI, Achille Occhetto, o a Anguita. Él contestó: «Estoy más cerca de los italianos y de Gorbachov»[105]. Esta respuesta resulta emblemática. Desde finales de 1989, en efecto, Occhetto había impulsado un proceso de abandono de la identidad comunista que, en febrero de 1991, dio lugar a la desaparición del PCI y a la fundación del Partido Democrático de la Izquierda: una fuerza política progresista que asumió los principios del reformismo democrático y, en 1992, entró en la Internacional Socialista (IS)[106]. Así, aunque en las últimas décadas habían mostrado profundas sintonías y seguían compartiendo grupo en el Parlamento Europeo, el PCI y el PCE iban proporcionando respuestas diametralmente opuestas a las cuestiones planteadas por el colapso del sistema soviético. Si la mutación del comunismo italiano constituía una fuente de inspiración para los renovadores del país ibérico, por Anguita era juzgada como una «canallada llevada a cabo por un grupo de

frívolos» que «dilapidaron» y «tiraron a la basura» el «legado histórico de un gran partido»[107]. El sector «duro» del PCE consideraba que Occhetto, en el medio de la batalla ideológica en curso, había cedido ante la presión de la campaña conservadora, optando por la vía del liquidacionismo e ignorando el drama personal que suponía para los militantes la renuncia a la identidad comunista[108]. Asimismo, el acercamiento del PCI al PSOE y a la socialdemocracia europea provocaba gran malestar en las filas del PCE: en marzo de 1990, por ejemplo, Anguita reprobó la participación de Occhetto en el acto de presentación de El Socialismo del Futuro, una revista promovida por los socialistas españoles en colaboración con la IS[109].

Quien sí mantenía óptimas relaciones con el dirigente italiano, en cambio, era Rafael Ribó, secretario general del PSUC y presidente del equivalente catalán de IU, es decir, Iniciativa per Catalunya (IC) –que concurría conjuntamente con IU en las elecciones españolas y europeas–. Desde 1990, los tradicionales lazos «fraternales» entre las organizaciones catalanas y sus referentes estatales empezaron a deteriorarse irremediablemente. Efectivamente, en enero de aquel año el PSUC decidió proceder a su propia «hibernación». Aunque formalmente seguía existiendo –se disolvió definitivamente en 1997–, reducía drásticamente su vida orgánica y su actividad política específica. Traspasaba funciones y soberanía a IC, que en su Asamblea Nacional celebrada en abril se configuró consecuentemente como una nueva formación política, dejando atrás su naturaleza de coalición y adquiriendo el carácter de un partido propiamente dicho[110]. La identidad comunista quedaba abandonada de facto, diluyéndose en el marco de una IC que se presentaba como una fuerza de izquierdas moderna y plural, desvinculada de adscripciones ideológicas rígidas. El camino emprendido por el PSUC era el mismo que auspiciaban los renovadores del PCE. De hecho, Ribó miró con favor a la iniciativa de Saborido y Aristu. Reputaba que Anguita, en cambio, se había «quedado parado en la historia»[111]. Entre los factores que influyeron en la evolución divergente de PSUC y PCE a raíz de la caída del socialismo real cabe mencionar el distinto peso de los sectores ortodoxos en los dos partidos. Efectivamente –como hemos advertido en el apartado anterior–, en 1989 la casi totalidad del PCPE se había incorporado al PCE. Al contrario, solo el 20 por 100 de la militancia del prosoviético Partit dels Comunistes de Calalunya, que había nacido de una escisión del PSUC en 1981, volvió a integrarse en el partido liderado por Ribó.

Las discrepancias entre PCE y PSUC no concernían solo a la dimensión organizativa, sino también a cuestiones tácticas y estratégicas. A nivel estatal,

por ejemplo, si bien se mostraba crítico con la labor del gobierno, Ribó exhortaba a Anguita a buscar puntos de encuentro con el PSOE, favoreciendo el entendimiento en lugar de la confrontación constante. Asimismo, el líder catalán era partidario de que IU –a través de la cual IC realizaba su política internacional– pusiera en marcha un proceso de acercamiento a la IS, para no quedarse aislada en el escenario europeo[112]. No fue casual, por lo tanto, que Occhetto considerase a Ribó, y no a Anguita, su interlocutor privilegiado en España. El dirigente italiano y el catalán tuvieron varias entrevistas en Roma, Bolonia y Barcelona, en las que constataron la coincidencia de sus planteamientos[113].

Las discusiones entre el sector oficial y el renovador sobre la continuidad del PCE o la disolución en IU se avivaron en el verano de 1991. Dos factores influyeron decisivamente en este sentido: la apertura de los debates preparatorios del XIII Congreso del partido, que se iba a celebrar en diciembre, y el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en la URSS en agosto. En la reunión del CC celebrada a finales de julio, fueron presentados los borradores de los documentos congresuales. Estos reflejaban las posturas del sector oficial que hemos analizado anteriormente. Además de contener duras críticas al proceso de expansión capitalista y a la política del PSOE, ratificaban el mantenimiento de la identidad comunista y el papel del PCE como intelectual colectivo dentro de IU. Al mismo tiempo, contenían algunas innovaciones significativas: el partido asumía un carácter federal, quedaba abolido el principio del centralismo democrático y el concepto de «disciplina» interna era sustituido por el de «cohesión». La dirección intentaba conjugar así la continuidad con una cierta dosis de innovación, dejando atrás algunos vestigios del modelo de partido leninista[114].

Contraponiéndose a las tesis oficiales, los renovadores Francisco Palero –responsable de Política Internacional– y Juan Berga presentaron dos amplias enmiendas que pedían una reformulación radical de los documentos congresuales. Palero, partiendo de la constatación de que el hundimiento del socialismo real y la «puesta al descubierto de su realidad» habían «arrastrado hacia el descrédito casi total a las organizaciones políticas denominadas comunistas», afirmaba a propósito del PCE: «Obviar esta realidad pensando que por nuestra tradición no nos afecta es caer en el más estéril de los engaños». Palero, por lo tanto, sostenía la necesidad de que el XIII Congreso impulsara la configuración de «nuevas formas de organización política» que superasen «definitivamente las experiencias identificadas popularmente con sistemas no

democráticos»[115]. Berga, en su texto, esgrimía argumentos análogos. Consideraba que la transformación de IU en una fuerza política plenamente soberana constituía la evolución lógica del proceso de convergencia empezado años antes y permitía dar continuidad a los ideales emancipadores del PCE, pero liberándoles de las sombras del pasado[116].

El 27 de julio, el CC rechazó las enmiendas de los renovadores y aprobó los documentos congresuales propuestos por el sector oficial con 33 votos favorables, 13 contrarios y 4 abstenciones. Poco menos de un mes más tarde, entre el 19 y 21 de agosto, los sectores ortodoxos del PCUS y la KGB promovieron en la URSS un intento de golpe de Estado que perseguía frenar el avance del proceso de reformas. El propio Gorbachov fue secuestrado. La tentativa fracasó gracias a las multitudinarias manifestaciones populares y a la actuación de Boris Yeltsin, entonces presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. A raíz de estos acontecimientos, el PCUS, el padre de todos los partidos comunistas, fue ilegalizado y disuelto. La URSS se encaminaba inexorablemente hacia su desaparición, que se haría oficial el 26 de diciembre[117].

El PCE expresó su «inequívoca condena del golpe de Estado», a diferencia de otros partidos comunistas como el PCP, que lo apoyaron[118]. Pero, al mismo tiempo, Anguita lamentaba que la URSS se estuviera integrando plenamente en el sistema capitalista y criticaba la figura de Yeltsin, que, según él, representaba «el autoritarismo de derechas, el nacionalismo, el populismo, la exacerbación delirante de la palabra mercado». El líder comunista español sostenía que en la que había sido la «patria del socialismo» estaba teniendo lugar un proceso de reacción conservadora que estaba borrando las conquistas de la Revolución de Octubre: «Estamos en 1917 –declaró–, pero al revés, y hay que preguntarse si Gorbachov está haciendo […] el papel de Kerensky»[119]. En la misma óptica, los exponentes del sector «duro» del PCE mostraron su desacuerdo con la ilegalización del PCUS: Francisco Frutos –responsable del área de Partido y mano derecha de Anguita–, por ejemplo, la definió como una «tontería absoluta», que resultaba perniciosa «para los intereses de los trabajadores» de la URSS y de todo el mundo[120].

En este momento varios dirigentes comunistas españoles expresaron juicios profundamente negativos acerca de la experiencia de la perestroika, considerando que había acabado con el sistema soviético bajo el pretexto de revitalizarlo y democratizarlo. Leopoldo Espuny, por ejemplo, escribió en

Nuestra Bandera: «Este tardío intento de renovación socialista carecía de fundamentos teóricos serios, se limitó a cantar las excelencias del mercado. […] Terminó convirtiéndose en un regreso al capitalismo». El autor afirmaba también que los supuestos «demócratas» que habían ilegalizado al PCUS, «desde Gorbachov a Yeltsin», pertenecían «a la estirpe de los políticos oportunistas»[121]. En las páginas de la misma revista, José María Laso mostró una cierta comprensión por el golpe de agosto: sostuvo que la iniciativa de los ortodoxos del PCUS, aunque no podía ser justificada por sus métodos violentos, había sido en todo caso un intento de poner remedio a los fallos de Gorbachov, quien «no planificó adecuadamente» el desarrollo de la perestroika y actuó «contradictoriamente», con «tacticismo» y sin una «visión estratégica del proceso»[122]. Así, los análisis del PCE acababan alineándose con los de aquellos partidos comunistas que, como el PCF, desde el principio habían manifestado una creciente hostilidad hacia Gorbachov y sus proyectos de reformas[123].

Además, el sector oficial del PCE estimaba que «el final del bipolarismo y la disolución del Pacto de Varsovia» no habían «dado lugar a un nuevo orden internacional aceptable, sino más bien a la reafirmación de un nuevo hegemonismo norteamericano» que no encontraba ya ningún contrapoder, como había quedado patente con la intervención de EEUU en Irak. La ratificación de la definitiva supremacía estadounidense, según esta lectura, no solo tenía consecuencias a nivel militar y geopolítico, sino que conllevaba también una exacerbación sin precedentes del «proceso de mercantilización universal» y del «fetichismo de la mercancía inherentes al capitalismo», lo que apuntaba «hacia la barbarie»[124]. En este sentido, en la fiesta anual del PCE, celebrada en septiembre de 1991, Anguita declaró que el horizonte del comunismo seguía siendo irrenunciable en cuanto única alternativa frente al «cataclismo»[125]. El sector oficial del partido reafirmaba así la vigencia de la identidad comunista concebida como resistencia al nuevo orden mundial. Consecuentemente, acentuaba su carácter antiimperialista y recuperaba una lectura de las relaciones internacionales basada en esquemas de clase.

Mientras tanto, el golpe de agosto había multiplicado y avivado las voces de los renovadores. Estos defendían la labor de Gorbachov, consideraban acertada la ilegalización del PCUS y estimaban que, tras la desaparición del padre de todos los partidos comunistas, obstinarse en preservar el PCE equivalía –en palabras de Saborido– a una «especie de fundamentalismo cateto»[126]. Palero, aunque admitía que «del mundo hegemonizado por dos superpotencias» se había pasado

«a la preminencia de EEUU», subrayaba que la constatación de este hecho no debía conducir a una «añoranza del mundo anterior». Afirmaba que la lucha por la emancipación no podía ser llevada a cabo a través de recetas ya caducas y fórmulas identificadas con el anterior orden «bipolar, bloquista y dictatorial»: hacía falta apostar por la configuración de una nueva izquierda transformadora y por la «plena unidad política, económica y social» de la Comunidad Europea, la cual podía «jugar un papel determinante» en la democratización de las relaciones internacionales[127]. En el medio del debate precongresual, el mismo Palero redactó también diversos escritos en colaboración con Juan José Azcona –secretario del PC de Madrid– y Juan Berga. Los tres, entre otras cosas, se oponían a la pretensión del sector oficial de mantener el PCE como un intelectual colectivo hegemónico que ejercía «el control de IU, considerando al resto de sus componentes como menores de edad política»[128].

Asimismo, los renovadores hacían hincapié en los valores del reformismo, estimando que las estrategias palingenésicas habían sido derrotadas por la historia y que las sociedades modernas ya no se articulaban alrededor de «centralidades ideológicas»[129]. Miguel Morán y Joan Puiguert –miembros de la Comisión Internacional–, por ejemplo, escribieron:

No es posible ignorar que en las sociedades desarrolladas el camino de las reformas y de las libertades políticas ha tenido mejores resultados y mayor aceptación entre las poblaciones […] que las estrategias y tácticas revolucionarias de ideología comunista dominadas por determinismos y verdades absolutas.

Los dos autores añadían que el PCE no podía desvincularse, «por su naturaleza genética», del derrumbe del partido que le había creado: «¿Resulta creíble pretender que la rama nada tiene que ver con el árbol muerto?»[130]. En la misma óptica, el eurodiputado Fernando Pérez Royo auspiciaba la configuración de IU como un partido plenamente soberano, «dotado de un programa democrático y reformista», que desarrollase «una estrategia de colaboración y convergencia con los partidos integrados en la Internacional Socialista»[131]. Planteamientos análogos eran defendidos por Nicolás Sartorius y Antonio Gutiérrez, miembro del CC y secretario general de CCOO. Dentro de IU, estas

posturas encontraban el apoyo de las personalidades independientes y del PASOC: es decir, la mayoría de los miembros no comunistas de la alianza se posicionaban a favor de su transformación en un partido de nuevo cuño, enmarcado en el campo del socialismo democrático[132]. En el otoño de 1991, varias organizaciones regionales del PCE –por ejemplo, las de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria– se declararon favorables a las tesis renovadoras. Mientras tanto, el sector «duro» manifestaba una notable animadversión contra Palero y los otros «liquidacionistas»: les acusaba de deslealtad y de haber caído víctimas, como Occhetto, de las campañas propagandísticas de la derecha[133]. La decisión de Esquerra Unida del País Valenciano de constituirse en partido político agudizó las polémicas, llevando a Anguita a dimitir temporalmente del cargo de coordinador general de IU.

Así, un PCE profundamente dividido por los debates acerca de su «razón de ser» celebró su XIII Congreso entre el 19 y el 22 de diciembre de 1991, es decir, unos pocos días antes de la disolución de la URSS (26 de diciembre). En aquella ocasión se confirmó el liderazgo de Anguita, quien vio sus planteamientos respaldados por el 75 por 100 de los votos. Merece la pena mencionar que en los nuevos estatutos el partido indicaba como su objetivo el «socialismo», no ya el «socialismo democrático», porque –como explicaba Monereo– las fuerzas que «históricamente se reclaman del socialismo democrático no solo han sido incapaces de construir el socialismo, sino que, al contrario, hoy son fuerzas que mayoritariamente se sitúan en el campo de legitimación del capitalismo»[134].

El congreso cerraba los debates acerca de la eventual disolución del PCE, ratificando su continuidad: una opción que encontraba el favor de la mayoría de la militancia y evitaba –como notaba El País– «esas histerias tradicionales que suelen acompañar al cuestionamiento de la propia identidad por parte de un grupo político», especialmente en el caso de «un colectivo con tanta memoria en las venas» y «con tanta carga emocional»[135]. Sin embargo, no se podía ignorar el hecho de que una porción significativa del PCE cultivaba una perspectiva diametralmente opuesta a la oficial, rechazando el viraje a la izquierda impulsado por Anguita. Efectivamente, la candidatura alternativa encabezada por Palero había obtenido en el congreso el 25 por 100 de los apoyos. A partir de finales de 1991, los renovadores empezaron a salir del partido. Si bien algunos abandonaron la política, muchos de ellos fueron conformando, dentro de IU, la corriente Nueva Izquierda (NI). Esta, surgida a principios de 1992 bajo el liderazgo de Nicolás Sartorius y Diego López Garrido, contó con la adhesión de buena parte de los miembros independientes

de IU, como, por ejemplo, Cristina Almeida[136]. El conflicto entre las distintas concepciones ideológicas y estratégicas se desplazó, así, del partido a la federación.

CONTRA LA «DERECHA REALMENTE EXISTENTE»

Pese a la definitiva pérdida del ancestral referente soviético, la línea de Anguita no solo preservaba la identidad comunista, sino que reforzaba los rasgos «de clase» de la política del PCE, proporcionando renovado énfasis a concepciones anticapitalistas y antiimperialistas. Se adoptaba una lógica inversa respecto a la que había sido propia del eurocomunismo. A este propósito, hay que considerar que la fórmula eurocomunista había tomado forma en un escenario nacional e internacional que parecía propiciar profundas transformaciones de signo progresista: la operación de reelaboración y secularización de la cultura política del PCE había sido concebida entonces como algo funcional a la integración del partido en las estructuras de oportunidades creadas por la détente y el final del franquismo. Anguita, en cambio, se movía en un contexto duramente adverso y, bajo una especie de síndrome de asedio, optó por un «cierre de filas». Al mismo tiempo que invocaba la tensión utópica como un impulso movilizador y un antídoto para no ceder al desánimo, reafirmaba la vigencia de un ideal comunista que fundamentaba su «razón de ser» en el rechazo de la realidad existente: es decir, en una «ética de la resistencia» que se traducía en una lógica de contraposición al nuevo orden mundial surgido en la postguerra fría, caracterizado por el afianzamiento de la hegemonía estadounidense y por la extensión de las teorías y prácticas neoliberales[137]. En este sentido, en el XIV Congreso del PCE celebrado en diciembre de 1995, Anguita declaró que los «conceptos derecha e izquierda» se definían esencialmente en base a la disyuntiva «neoliberalismo sí, neoliberalismo no», añadiendo:

El neoliberalismo triunfante en la esfera de lo hegemónico […] ha fracasado rotundamente como proyecto de humanidad o de sociedad justa. Ha ido profundizando en las lacras que vienen del capitalismo en su fase anterior. […] Neoliberalismo y derechos humanos son habla y credo, incompatibles, se

autoexcluyen. […] Hay algo más, neoliberalismo y democracia son antinómicos. […] La política es aceptada por los valores del mercado, […] qué respaldo se va a tener en este mercado. […] Por ese camino […] se niega el valor de la democracia[138].

En la misma óptica, el PCE pasó a abordar la realidad internacional a través de un prisma interpretativo que presentaba un nuevo carácter bipolar, considerando que, «tras el final de la confrontación Este-Oeste», las «relaciones de dominación» que se daban a nivel mundial se asentaban en la dicotomía «Centro contra Periferia» o «Norte contra Sur»:

El modo de vida del Centro –afirmaba el Manifiesto aprobado en el XIV Congreso– […] [se basa] en el expolio económico y en la depredación ecológica de la Periferia. […] El Centro […] tiende además a producir un uniformismo cultural e ideológico, anulando la capacidad de desarrollo cultural autónomo de los países de la Periferia e imponiendo la universalización de un Pensamiento Único. […] Para superar las injusticias existentes en el mundo actual, […] hay que superar los límites del capitalismo que se ha alzado con la hegemonía política desde […] el Norte del mundo[139].

En este marco, no fue casual que el PCE, en nombre de la común oposición a EEUU y al neoliberalismo, valorase de manera sustancialmente positiva a los Estados comunistas que habían sobrevivido al colapso soviético, como China o Cuba: se les presentaba como «una esperanza» en un mundo en que «el capitalismo parece ocuparlo y dominarlo todo y en el que abundan las resignaciones y deserciones, las pérdidas de perspectiva revolucionaria»[140].

La utilización, desde principios de los noventa, de un enfoque que leía las relaciones internacionales a través de los esquemas de la lucha de clases y según la lógica confrontacional «Centro-Periferia» influyó decisivamente en la postura adoptada por el PCE hacia Europa. El partido, en efecto, empezó a manifestar duras críticas y un creciente escepticismo hacia el proyecto de construcción europea, estimando que este –según escribía Monereo en 1991– se estaba «desarrollando en lo fundamental según la lógica mercantil desplegada por los

grandes poderes oligopolistas»[141]. En la misma línea, Anguita expresaba abierta hostilidad hacia el predominio ejercido en Europa por «la gran Alemania» reunificada que, con sus «aspiraciones a un IV Reich», representaba la principal sede del imperialismo en el continente[142] y propiciaba «formas de integración financieras» que reforzaban «a los grandes grupos y empresas capitalistas»[143].

Conforme a esta visión, el PCE evaluó muy negativamente el Tratado fundacional de la Unión Europea (UE), que, firmado en Maastricht en febrero de 1992, debía ser ratificado por los Parlamentos nacionales. Las críticas fundamentales se referían al modelo económico desdibujado por el Tratado. El PCE defendía la necesidad de que la UE se configurase como un «espacio económico y social integrado», mediante la puesta en marcha de la planificación democrática y de una fuerte política de cohesión económica y social que incluyera una política fiscal común y la adopción de una Carta Social. El partido consideraba que, en cambio, en Maastricht se había ratificado un proceso de construcción europea dirigido y hegemonizado por «los intereses de las multinacionales y las fuerzas conservadoras del continente»[144]: la Carta Social era «la grande olvidada», las medidas de cohesión previstas por el homónimo fondo eran insuficientes y se había primado la velocidad económica sobre la política, optando por una política monetarista y la potenciación de los aspectos de libre cambio. Asimismo, el PCE sostenía que el Tratado había asumido plenamente la filosofía neoliberal, aceptando «la idea de que el sector público será eternamente más ineficiente que el privado […] y, por tanto, se debe reducir su peso en la economía […] así como su papel en la regulación del mercado»[145]. Más allá de las cuestiones económicas, los comunistas criticaban la persistencia del déficit democrático en la arquitectura institucional europea, así como el hecho de que la incipiente UE, a pesar del nacimiento de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), seguía siendo caracterizada por la falta de un proyecto independiente en el escenario internacional, lo que perpetuaba su subordinación a EEUU. Consecuentemente, el PCE optó por la no ratificación del Tratado e instó el Gobierno a la convocatoria de un referéndum sobre el mismo.

La postura de no ratificación, sin embargo, no era compartida ni por IC, ni por los exponentes de PASOC y NI. Estos, si por un lado reconocían la oportunidad de un referéndum y admitían que el Tratado presentaba insuficiencias, por el otro expresaban una valoración globalmente positiva, subrayando que contenía avances considerables. Alonso Puerta, por ejemplo, defendía que el Tratado de

Maastricht contenía «más Europa y más dimensión social que todos los tratados y actuaciones anteriores»[146], mientras que Sartorius y López Garrido escribieron en El País:

La Unión Europea es […] un proyecto objetivamente antihegemonista. […] El Tratado convierte a la Comunidad Económica Europea en una Unión político-económica, con un contenido que no debe despreciarse. En Maastricht hace su aparición la ciudadanía europea […]. La Unión Europea da un tímido paso, es cierto, hacia la cooperación en política exterior y de defensa, en asuntos de interior y justicia, pero, al menos, europeíza esas políticas. […] El Parlamento Europeo consigue la colegislación en materias como la libre circulación de trabajadores, el mercado interior, la educación, I + D, medio ambiente, infraestructura, sanidad, cultura, protección de consumidores, ciudadanía europea y acuerdos internacionales[147].

Consecuentemente, NI era partidaria de que IU aprobara Maastricht con un «sí crítico», considerando también que el propio Tratado preveía un proceso de revisión al cabo de cuatro años –el futuro Tratado de Ámsterdam–. Cabe señalar que también CCOO, en línea con la Confederación Europea de Sindicatos, se pronunció por un «sí crítico» a Maastricht con motivaciones análogas, a pesar de la opinión contraria del sector minoritario liderado por Agustín Moreno y Marcelino Camacho.

Las dos posiciones sobre el Tratado se enfrentaron por primera vez en la III Asamblea Federal de IU, celebrada en mayo de 1992. Anguita, quien dejó claro que no asumía «el sistema capitalista, ni siquiera con un sí crítico»[148], vio respaldada su postura por el 60,3 por 100 de los asistentes –los miembros del PCE e IR–, siendo elegido nuevamente coordinador federal de la coalición. En cambio, la candidatura de NI encabezada por Sartorius obtuvo el restante 39,6 por 100 de los votos. Los debates sobre la cuestión europea, en todo caso, no se cerraron en mayo, sino que siguieron desarrollándose durante y después del verano, con vistas a la celebración de la sesión del Congreso de los Diputados que, el 29 de octubre, tenía que ratificar el Tratado. En la reunión del Consejo Federal de IU celebrada el 27 de septiembre, se aprobó –con 99 votos contra 63– una resolución que confirmaba la postura de no ratificación de Maastricht, la

cual habría debido traducirse en la abstención del grupo parlamentario de IU-IC en la votación del 29 de octubre[149]. Sin embargo, esta decisión no fue acatada. En el Congreso de los Diputados, en efecto, 8 de los 17 representantes de IU-IC –los 3 miembros de la formación catalana y los 5 exponentes de NI– votaron finalmente «sí» a la ratificación. Se hizo así definitivamente evidente que en IU –como en el PCE en el periodo anterior– había dos proyectos políticos divergentes, basados en sensibilidades ideológicas contrapuestas –reformismo contra anticapitalismo–, cuya cohabitación resultaba problemática y conflictiva.

Con su rechazo del Tratado fundacional de la UE, el PCE se había movido claramente hacia una posición euroescéptica[150]. De todas formas, frente a las fórmulas de Maastricht, el partido seguía invocando «otra» Europa, concebida como un espacio de democracia política y económica avanzada. Esta perspectiva, unida a la aplicación del esquema bipolar Centro-Periferia o Norte-Sur, permite insertar los planteamientos de los comunistas españoles en el marco del incipiente «altereuropeísmo», que se caracterizaba –y se sigue caracterizando– por el establecimiento de un nexo explícito entre las críticas al modelo asumido por la UE y la oposición a la globalización neoliberal, configurándose como la vertiente europea del movimiento altermundista. Así, a raíz de las elecciones europeas de 1994, en el Parlamento de Estrasburgo el PCE impulsó la conversión de IUE en el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea, que, asentado precisamente sobre bases euroescépticas y altereuropeístas, contaba con la participación de IU, PCP, PCF, PC de Grecia y Refundación Comunista –el sector del PCI que no había aceptado la mutación promovida por Occhetto–[151]. Los restos del comunismo europeo sobrevividos al colapso soviético se agrupaban en una amalgama no exenta de contradicciones, intentando redefinir sus coordenadas internacionales en el escenario de la postguerra fría.

Mientras tanto, el PCE e IU iban redoblando considerablemente sus ataques al PSOE, llevando a cabo una deslegitimación rotunda del partido de gobierno. De hecho, en una conferencia tenida en el Club Siglo XXI en febrero de 1993, Anguita presentó públicamente por primera vez la conocida fórmula, basada en la metáfora de un río, de las «dos orillas». Según esta, Felipe González se situaba, junto a José María Aznar, en la orilla derecha, puesto que las líneas maestras de las políticas del PSOE y del Partido Popular (PP) eran sustancialmente equivalentes:

El Sr. Aznar –afirmó Anguita– habla de una privatización en profundidad. El Sr. González la lleva a cabo. El Sr. Aznar enraíza su discurso en una paladina profesión de fe en el liberalismo económico. El Sr. González viene aplicando el liberalismo económico desde 1982. […] No estamos ante dos proyectos distintos, sino ante dos actores que aspiran a representar el mismo proyecto y recibir el apoyo de los mismos sectores[152].

Conforme al discurso elaborado por Anguita, el PSOE de González representaba la «derecha realmente existente»:

Estamos ante una confusión ideológica terrible. […] Vamos a ver. El PP es la derecha; no sé si futuro gobierno. Pero el Felipe González es la derecha real y presente, y real gobierno. […] A mí no me sirve lo de que el PSOE es de izquierdas. La política de González es la derecha de hoy. González representa los intereses de las capas más retardatarias de la población[153].

Según este enfoque, el tendencial bipartidismo PSOE-PP representaba una renovada versión del turnismo de la época de Cánovas y Sagasta, siendo «algo querido por un sistema» de dominación que gracias a ello podía «gobernar con su mano derecha o con su mano izquierda […] dentro de un [mismo] orden»[154]. En este marco, se subrayaba que, al estar tanto el PSOE como el PP en la orilla derecha, la competición entre ellos podía producir solamente una «alternancia» en el poder: una alternancia que resultaba insustancial, puesto que de ninguna manera implicaba el proporcionar a la ciudadanía una «alternativa real» que permitiera salir de un camino que estaba conduciendo «a la pérdida de democracia». Como corolario, los comunistas consideraban que exclusivamente IU, en cuanto única fuerza en la «orilla izquierda», estaba legitimada y capacitada para materializar dicha alternativa y llevar a cabo una «regeneración» política y social[155].

Los comunistas seguían atacando ásperamente el hecho de que el PSOE había abrazado los postulados del neoliberalismo y asumido «la lógica de los poderes dominantes», desarrollando una «estrategia económica» que tenía como «instrumentos privilegiados» el «paro, la precarización del empleo, la

dualización del mercado laboral» y «el recorte de las prestaciones sociales». En un manifiesto difundido por IU en vísperas de las elecciones de 1993, las consecuencias de dichas políticas gubernamentales eran descritas de la siguiente manera: «La sociedad española se encuentra hoy poco vertebrada […]; con profundas desigualdades económicas y culturales; […] en el marco de una moral colectiva en la que predominan el individualismo y la competición»[156]. Insistiendo en esta línea, a finales del mismo año Anguita dirigió una carta a Felipe González, acusándole de formar parte de una «Santa Alianza» a escala europea que estaba imponiendo un orden conservador asentado en «la privatización de lo público, la destrucción del Estado de bienestar y el debilitamiento de los sindicatos»:

Usted –escribió el líder comunista– ha hecho de la economía sinónimo de PIB, especulación y pelotazo. […] Usted ha ido narcotizando y matando, lentamente, la ilusión de un pueblo que reiterada y repetidamente le ha apoyado elección tras elección. Usted ha transformado la espontaneidad y la viveza de la sociedad española en tierra quemada[157].

Más allá de las cuestiones relativas al ámbito de la política económica, los múltiples escándalos que fueron afectando al PSOE desde principios de los noventa brindaron al PCE un terreno propicio para profundizar en la deslegitimación del partido de gobierno. Efectivamente, dirigentes del PSOE y personalidades ligadas al sistema de poder socialista protagonizaron numerosos casos de corrupción, tráfico de influencias, uso de fondos reservados, etc. –los notos casos Filesa e Ibercorp, por ejemplo–. Asimismo, las crecientes revelaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que fueron saliendo a la luz apuntaban a que la guerra sucia contra ETA había sido promovida directamente desde el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de González[158]. Ante este escenario, los comunistas afirmaban que el PSOE, un partido que había fundamentado su poder en una red de corruptelas y que había demostrado no tener escrúpulos a la hora de practicar «terrorismo de Estado», no solo estaba deteriorando gravemente la «moralidad de la vida política»[159], sino que estaba poniendo en riesgo «los propios rasgos del sistema democrático y del Estado de Derecho»[160], encaminando la sociedad española «por la senda del autoritarismo»[161]. A este propósito, en el

Manifiesto aprobado en la IV Asamblea de IU (1994) se afirmaba:

El daño perpetrado durante la década felipista no ha sido sólo a los valores y tradiciones de la izquierda, sino a la propia democracia. […] Si tuviéramos que sintetizar al máximo […] los elementos que definen la política del felipismo podríamos decir que consistió en un pacto de un partido con nombre y tradición de izquierdas con los poderes que habían convivido con la dictadura para no tocar nada (Administración del Estado, bancos, clanes financieros, Iglesia, Ejército, etc.) a cambio de que le dejasen gobernar[162].

Para hacer frente a esta degradación, Anguita llamaba a la «rebeldía» contra el «felipismo». Una rebeldía que, en nombre de la realización de «la plena libertad y la plena democracia», se enfrentara a los «contravalores» del «individualismo» y de «la competitividad darwinista», oponiéndose a una modernidad que con sus dinámicas «alienantes» estaba transformando a la ciudadanía «en un zombi errático»[163]. Así, a través de la elaboración de un relato que deslegitimaba profundamente la política del PSOE, el líder del PCE pretendía justificar la necesidad del comunismo según una perspectiva salvífica. Al mismo tiempo, este enfoque aspiraba, evidentemente, a alimentar el crecimiento de IU atrayendo a una porción significativa de la militancia y electorado socialista. No por casualidad, Anguita subrayaba reiteradamente que en el PSOE, sobre todo en sus bases y capas medias, había «mucha gente honesta»[164].

La fórmula de las «dos orillas» fue puesta a prueba por primera vez en las elecciones generales celebradas el 6 de junio de 1993. Izquierda Unida registró entonces solo un ligero avance con respecto a 1989, obteniendo 2.253.722 votos (9,55 por 100) y 18 escaños. Por su parte, el PSOE, con 159 diputados, no alcanzó la mayoría absoluta, lo que significaba que necesitaba apoyos parlamentarios para conseguir la investidura de González. IU se declaró dispuesta a respaldar la toma de posesión del cuarto Gobierno socialista si el PSOE aceptaba un programa de izquierdas que incluyera, entre otras cosas, un cambio radical de la política económica y el abandono del proyecto de Maastricht[165]. Cabe mencionar que también a lo largo de los tres años siguientes Anguita insistió en que una colaboración de IU con el PSOE podía darse solo sobre la base de esas condiciones, a las cuales se fue añadiendo la de

la sustitución de González al frente del ejecutivo. En 1994, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados el líder comunista declaró:

Planteamos la dimisión [de González] como responsable de una situación socioeconómica y moral en la cual se inscribe y se potencia la corrupción. La cultura del pelotazo, la ganancia fácil […] son caldo de cultivo de la corrupción. […] Dimisión por desviación de los principios de izquierda. […] Dimisión por esa Ley de reforma del Mercado Laboral. […] Que salga de esa fuerza política [PSOE] un candidato o una candidata […] y que plantee un programa alternativo en un debate de investidura. […] Si ese candidato o candidata plantea […] una alternativa que signifique rectificación de la política económica, lucha contra la corrupción, […] mi fuerza política está dispuesta a quemarse en nombre de ese programa[166].

Los socialistas consideraban inasumibles estas condiciones. En todo caso, hay que subrayar que en 1993 habían descartado de facto la hipótesis de un pacto con IU ya antes de las elecciones. Asimismo, tanto entonces como en los meses y años posteriores, los dirigentes del PSOE mostraron a menudo su irritación por los «términos descalificadores» a los que recurría el líder comunista[167]. Si bien los exponentes de NI invocaban una mayor propensión al diálogo y colaboración, el desencuentro de las izquierdas persistió. Así, en 1993 González se aseguró la investidura llegando a acuerdos con las derechas nacionalistas, es decir, Convergència i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El año siguiente, Anguita dio un paso más en su línea de desafío a los socialistas. En junio de 1994, IU experimentó un crecimiento apreciable en las elecciones andaluzas (19,3 por 100) y europeas (13,4 por 100). Al calor del entusiasmo suscitado por estos resultados, y a pesar de que la distancia con el PSOE seguía siendo abismal[168], el «califa rojo» lanzó la conocida consigna del sorpasso. Esta se basaba en la idea de que IU, a medio plazo, pudiese adelantar electoralmente al partido de González, convirtiéndose en «el proyecto hegemónico de la izquierda española»[169]. Se trataba de un planteamiento que, de manera coherente con las invocaciones a la utopía, pretendía funcionar como mito movilizador. Así, Anguita invitaba a pensar en la política de alianzas de IU ya desde la óptica de una fuerza mayoritaria: «En las próximas elecciones –dijo

en el Comité Federal del PCE– esta fuerza política no puede tener el complejo de inferioridad. […] Podemos con un programa nuestro tender la mano. Pero tendemos la mano nosotros, desde nuestra mayoría, desde haber hecho el “sorpasso”. […] Y no […] como el “partenaire” pobre de la operación»[170].

Al considerar el partido de González como el principal «enemigo a batir», los comunistas limitaban los ataques a Aznar, adoptando una lógica según la cual «preocuparse por el PP favorece al PSOE»[171]. Además, IU y PP llegaron a ciertos acuerdos puntuales –en Andalucía, por ejemplo, en 1994 pactaron la Presidencia de la Cámara– y Anguita mantuvo algunas entrevistas con el líder de los populares. Hay que destacar también que los enfrentamientos de las izquierdas generaban cortocircuitos, permitiendo al PP llegar al poder en distintos puntos de la geografía española. En Asturias, por ejemplo, en 1995 el PP se hizo con el Gobierno de la Junta porque IU y PSOE, aunque la suma de sus diputados representara la mayoría absoluta en la Cámara, no fueron capaces de alcanzar un pacto que cerrara el paso a la derecha[172].

Estos elementos hicieron que la dirección socialista y los medios de comunicación empezasen a acusar a IU «de hacer una pinza con el PP» contra el PSOE[173]. Pero, ¿existió la pinza? Depende de cómo se interprete. Es evidente que, tanto IU como el PP, estaban desarrollando estrategias dirigidas a erosionar el partido de gobierno, lo que los llevaba a coincidir en determinadas actuaciones, críticas y actitudes. Sin embargo, esto no significa que la «pinza» consistiera en un pacto propiamente dicho, ni mucho menos que Anguita estuviera dispuesto a respaldar la llegada al poder de Aznar a costa de González. No se puede obviar el hecho de que ideológicamente las dos formaciones estaban en las antípodas. En este sentido, en el ya citado Manifiesto aprobado por IU en su IV Asamblea se declaraba:

Nosotros nos oponemos a los partidos de derecha y a las «políticas de derechas». […] No hay que banalizar los graves problemas que plantea el ascenso electoral del PP. […] La derecha española es una fuerza neoliberal, autoritaria y conservadora. No compartimos con el PP ningún objetivo o valor relevante en el terreno económico, político o moral. […] Cualquier acuerdo con ellos sólo puede tener un carácter parcial y concreto[174].

Es decir, Anguita, adoptando una posición de equidistancia respecto a PSOE y PP, no tenía intención de prestar apoyos ni a la derecha «realmente gobernante», ni a la «derecha en expectativa de gobernar»[175], como demostró su rechazo a la propuesta de una eventual moción de censura avanzada por Aznar en enero de 1995.

El líder comunista consideraba que el hablar de la «pinza» formaba parte de una más amplia campaña de desprestigio que, promovida por los medios de comunicación, el PSOE y la clase empresarial, tenía como objetivo el hundir al PCE e IU:

Quieren acabar con nosotros –dijo Anguita en 1995– porque molestamos. Somos la rebeldía, lo que aúna, el descontento, lo que estorba. Hay un fuego cruzado desde muchas partes, incluso desde gente que no debiera, para acabar con nuestra alternativa. […] Propugnamos la regeneración ética. Y molestamos. Somos la dignidad. Somos la pieza que no encaja en los planes del neoliberalismo. Y estorbamos. Quieren acabar con nosotros porque lo que quieren es la cultura de la resignación[176].

A través de la denuncia de confabulaciones y enemigos externos, este tipo de relato buscaba galvanizar la militancia, resaltando la trascendencia de la misión regeneradora a la que estaban llamados el PCE y sus aliados.

De todas formas, los ataques a la gestión de Anguita no procedían solo de fuera, sino también de las propias filas de Izquierda Unida. Según los exponentes de Nueva Izquierda, PASOC e IC, la persistencia del papel hegemónico ejercido por los comunistas dentro de IU impedía que esta experimentase un ulterior desarrollo organizativo y profundizase en la renovación de su identidad y cultura política, lo que la condenaba a seguir siendo percibida como una mera operación de mercadotecnia del PCE, carente de un perfil autónomo. Diego López Garrido hacía hincapié en la necesidad de elaborar «una propuesta socialista moderna» y claramente europeísta, que superase de una vez por todas «tesis trasnochadas» procedentes de la Revolución de Octubre. Consideraba, además, que la estrategia de Anguita era «aislacionista», porque, en lugar de buscar puntos de encuentro, cortaba los puentes con el PSOE e imposibilitaba la colaboración de las

izquierdas[177]. En la misma línea, Sartorius afirmaba que el «paleocomunismo» de Anguita, con su actitud de «descalificación radical» del PSOE, por un lado proporcionaba a los socialistas una justificación por sus pactos con CiU y PNV, y, por el otro, estaba haciendo ganar a IU «sólo el apoyo del izquierdismo marginal»[178]. Planteamientos análogos eran defendidos por Rafael Ribó, quien mientras tanto estaba llevando a término la definitiva disolución del PSUC en IC.

A pesar de estas voces críticas, Anguita confirmó su liderazgo en la IV Asamblea de IU (1994) y en el XIV Congreso del PCE (1995). Comentando este último evento, el entonces diputado del PSOE Jordi Solé Tura escribió:

El reciente congreso del PCE nos ha dado la imagen de un partido áspero que aspira a recoger todos los motivos de descontento actuales y futuros sin darles ninguna salida. […] Recuerda bastante la lógica de los años treinta. Es, en definitiva, la lógica de clase contra clase en la que no caben niveles intermedios: o se está con una clase o con otra. […] Con un PCE metido en esta lógica, es casi imposible llegar a ningún acuerdo. El resultado es, por consiguiente, el bloqueo de un gobierno de izquierda. Y este bloqueo sólo tiene dos salidas: el caos o el gobierno de la derecha. En ambos casos pierde la izquierda[179].

El sorpasso resultó siendo una quimera. En las elecciones generales celebradas en marzo de 1996, en efecto, IU mejoró solo ligeramente los resultados de 1993, obteniendo 2.639.774 votos (10,5 por 100) y 21 escaños. Se trataba de un tímido incremento que quedaba muy por debajo de las expectativas. La brecha con el PSOE, que consiguió el 37,6 por 100 de los sufragios y 141 diputados, seguía siendo abismal. De todas formas, las elecciones no dieron la victoria a los socialistas, sino al PP, que se afirmó como el partido de mayoría relativa (38,7 por 100 de los votos y 156 escaños). Así, tras laboriosas negociaciones que le aseguraron el respaldo de CiU, PNV y Coalición Canaria, en mayo Aznar llegó a la Moncloa. Mientras tanto, las izquierdas ni siquiera intentaron entablar conversaciones dirigidas a sumar sus fuerzas para tratar de formar un Gobierno progresista en el caso de que el PP no fuera capaz de encontrar los apoyos necesarios para la investidura[180]. Sus enfrentamientos, como había pronosticado Solé Tura, impedían cualquier acercamiento.

CONCLUSIONES

Con las elecciones de 1996 se cerró un ciclo de la historia del PCE. Un ciclo empezado casi catorce años antes, a lo largo del cual el partido había experimentado considerables transformaciones organizativas y políticas que le habían permitido recuperarse de la crisis en la que se encontraba al final de la Transición. Un ciclo, además, que se había desarrollado en medio de profundos cambios y convulsiones que habían sacudido el escenario nacional y, sobre todo, el internacional.

Durante ese periodo, las riendas del PCE habían estado en manos de dos secretarios generales: Gerardo Iglesias y Julio Anguita. El liderazgo del primero había estado caracterizado por la puesta en marcha de una política de convergencia que, en 1986, había llevado a la creación de IU, enmarcando el PCE en una fórmula organizativa novedosa: los comunistas podían, así, contar con nuevos aliados y actuar por medio de una fuerza de izquierdas moderna y plural. Al mismo tiempo, Iglesias había defendido el mantenimiento de la orientación eurocomunista, lo que había conllevado, entre otras cosas, la adopción de una postura de apoyo crítico u oposición moderada hacia los Gobiernos del PSOE. La llegada de Anguita había marcado un significativo cambio de rumbo. Efectivamente, el llamado «califa rojo» había impulsado un viraje a la izquierda que, alejándose del eurocomunismo, había avivado los rasgos «de clase» de la identidad y la política del PCE. A raíz del colapso soviético, Anguita había rechazado la perspectiva de disolver el partido en IU y había reafirmado la vigencia de un ideal comunista que se fundamentaba en una lógica de resistencia a la hegemonía neoliberal que caracterizaba el escenario de la postguerra fría. Conforme a este enfoque, se había opuesto al modelo de integración europea formulado en Maastricht y, en el ámbito nacional, había impulsado una línea de duro enfrentamiento con el PSOE, que había alcanzado su cénit con el discurso de las «dos orillas» y la aspiración al sorpasso.

Durante unos años, la estrategia de Anguita en cierta medida había resultado rentable. Efectivamente, IU había podido mejorar constantemente sus resultados gracias al creciente desgaste sufrido por el partido de gobierno, erigiéndose en receptor del descontento suscitado en algunos sectores del electorado progresista

por la gestión de González. Sin embargo, las generales de 1996 demostraron que el proyecto anguitiano se había estancado. Efectivamente, se hizo evidente que, a pesar de sus sombras, la política socialdemócrata del PSOE seguía siendo la opción privilegiada por una amplia mayoría de los votantes de izquierdas. IU, con su tímido avance, no había sido capaz de superar ni siquiera el techo electoral alcanzado por el PCE en solitario en 1979 (10,7 por 100 de los sufragios y 23 diputados).

En este contexto, las discrepancias existentes en el seno de IU se agudizaron. Así, el Partido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI) –evolución de la corriente NI– salió de la federación en 1997 y, el mismo año, se produjo la ruptura entre IU e IC. Paradójicamente, al final del ciclo aquí analizado, los comunistas se encontraban ante una situación marcada por polémicas y escisiones que recordaba la de principios de los ochenta. Los resultados electorales de IU fueron empeorando (5,7 por 100 en las europeas de 1999 y 5,4 por 100 en las generales del 2000) y Anguita decidió ceder su liderazgo, dimitiendo de la secretaría general del PCE en 1998 y del cargo de coordinador federal de IU en el 2000.

Finalmente, cabe señalar que la labor de Anguita sigue siendo objeto de valoraciones netamente contrapuestas. Javier Aristu, quien había sido un exponente de los «renovadores», en 2018 ha expresado, por ejemplo, el siguiente juicio:

[Con Anguita] el discurso reformador del eurocomunismo fue sustituido por otro nuevo pero a la vez muy antiguo […]. Las líneas estratégicas del PCE que se habían venido construyendo desde los años sesenta del siglo XX, y que se basaban en un europeísmo progresivo, una concepción del socialismo en democracia, […] son sustituidas por las viejas verdades del leninismo impostado, el papel de vanguardia del partido, la revolución como objetivo. […] Es la respuesta fundamentalista ante el desconcierto que la crisis económica, social y política de los años 80 y 90 lleva a las bases comunistas[181].

No faltan, por otro lado, opiniones apologéticas. Sirvan de ejemplo en este sentido los tweets de Pablo Iglesias y Alberto Garzón con ocasión del

fallecimiento de Anguita el 16 de mayo de 2020. El líder de Unidas Podemos posteó: «Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final, nos indicó el camino que algunos quisimos seguir»[182]. El actual coordinador de IU, por su parte, escribió: «Hemos perdido al más grande. […] Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo»[183].

[1] El presente capítulo se basa parcialmente en la reelaboración de algunos trabajos ya publicados por el autor: «La última batalla de la transición, la primera de la democracia. La oposición a la OTAN y las transformaciones del PCE (1981-1986)», Ayer 103 (2016), pp. 71-96; «Contra el nuevo orden mundial. El comunismo español ante la posguerra fría», Pasado y Memoria 19 (2019), pp. 127-155; «Surviving the Collapse. Spanish Communism and the Crisis of the Soviet System (1989-1991)», en José M. Faraldo (ed.), Collapsed Empires, Berlín, LIT Verlag, 2020, pp. 173-194.

[2] «Balance de gestión del Comité Central al XII Congreso», Mundo Obrero, 24 de febrero de 1988.

[3] Rubén Vega, «El PCE asturiano en el Tardofranquismo y la Transición», en Francisco Erice (coord.), Los comunistas en Asturias, Gijón, Trea, 1996, pp. 169-213.

[4] «Extractos de las intervenciones», Mundo Obrero, 18 de noviembre de 1982.

[5] «El nuevo secretario general del Partido Comunista de España tiene manos libres», El País, 8 de noviembre de 1982; «Entrevista a Gerardo Iglesias», Mundo Obrero, 25 de noviembre de 1982.

[6] «Informe de G. Iglesias al Comité Central», Mundo Obrero, 24 de marzo de 1983.

[7] Gerardo Iglesias, «Adecuar el partido a la estrategia», Nuestra Bandera 118-119 (1983).

[8] Emanuele Treglia, «El PCE y el movimiento comunista internacional (1969-1977)», Cuadernos de Historia Contemporánea 37 (2015), pp. 225-255.

[9] «Resumen de G. Iglesias», Mundo Obrero, 2 de junio de 1983.

[10] Simón Sánchez Montero, «La política del PCE ante el Gobierno socialista», 15 de junio de 1983, y «Documento político», diciembre de 1983, ambos en Documentos: XI Congreso, Archivo Histórico del PCE (AHPCE).

[11] «La perspectiva política», Mundo Obrero, 2 de junio de 1983.

[12] «Entrevista a Julio Anguita», Mundo Obrero, 21 de julio de 1983.

[13] Abdón Mateos, «Los socialistas españoles y la cuestión atlántica hasta el referéndum de 1986», Ayer 103 (2016), pp. 51-70.

[14] «Resumen de la reunión del CC de Gerardo Iglesias», Mundo Obrero, 2 de junio de 1983; «Declaración del CE del PCE», Mundo Obrero, 10 de febrero de 1983.

[15] «España aparece en la encuesta como el país más pacifista», El País, 29 de noviembre de 1983; Lawrence Wittner, Toward Nuclear Abolition, Stanford, Stanford University Press, 2003.

[16] «Reunión del Comité Central», Mundo Obrero, 3 de febrero de 1983; «Comité Central», Mundo Obrero, 1 de marzo de 1984; Pedro Oliver, «El movimiento pacifista en la transición democrática española», en Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz (ed.), La sociedad española en la Transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 271-286.

[17] Intervención de Juan F. Pla en «Comité Central (parte III)», Mundo Obrero, 28 de julio de 1983.

[18] «Intervención de Antoni Gutiérrez Díaz», Mundo Obrero, 21 de julio de 1983.

[19] «Documentos políticos aprobados por el XI Congreso», Mundo Obrero, 9 de febrero de 1984.

[20] «Resumen de G. Iglesias», Mundo Obrero, 14 de julio de 1983; Secretariado del PCE, «Ante la Conferencia de Estocolmo», 16 de enero de 1984, Archivo Santiago Álvarez (ASA): caja 27, Fundación 10 de Marzo (F10M).

[21] Christopher Andrew y Vasili Mitrokhin, The Sword and the Shield, Nueva York, Basic Books, 2001, p. 301.

[22] Carta de dimisión de Ignacio Gallego dirigida al Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España, Barcelona, Sociedad Limitada Impresiones del Vallès, 1983; «Declaración del CE. Defensa de la legalidad democrática del PCE (14-10-83)», Mundo Obrero, 27 de octubre de 1983.

[23] Tesis del Congreso de Unidad de los Comunistas, enero de 1984.

[24] «Carta de Jaime Ballesteros al CC», Mundo Obrero, 14 de noviembre de 1984; «Carta de A. López Salinas al CC», 2 de julio de 1985, ASA: caja 21, F10M.

[25] Según documentación soviética que en los noventa Rusia puso a disposición de la Fiscalía española, Gallego recibió de Moscú 210.000 dólares en 1984, y 100.000 en 1985. Véase Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión no permanente sobre la financiación de los partidos políticos, 29 de diciembre de 1994.

[26] «Carta del PCUS» y «Carta del PCE», Mundo Obrero, 9 de febrero de 1984; «Carta de Dolores Ibárruri a Yuri Andropov. 11-1-84» y «Declaración del Secretariado del PCE», Mundo Obrero, 26 de enero de 1984. CIA, «Spain: Communism in Crisis», agosto 1985, en www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300270002-6.pdf.

[27] «Acta oficial», 18 de diciembre de 1983, Documentos: XI Congreso, AHPCE.

[28] «La opción de la izquierda» e «Intervención de Gerardo Iglesias en el Comité Central», Mundo Obrero, 30 de mayo de 1984.

[29] Paul Kennedy, The Spanish Socialist Party and the Modernisation of Spain, Mánchester, Manchester University Press, 2013, pp. 54-88.

[30] «Una reunión sin crispaciones», Mundo Obrero, 10 de octubre de 1984; «Informe del Secretario General», Mundo Obrero. Extra Comité Central, marzo de 1985.

[31] Francisco Palero, «OTAN: mesas pro-referéndum», Mundo Obrero, 26 de septiembre de 1984; Pablo Socorro, «El papel de la izquierda revolucionaria en la vertebración del movimiento anti-OTAN en el Estado Español», Historia del Presente 29 (2016), pp. 137-150.

[32] «Carta colectiva encabezada por Santiago Carrillo», Mundo Obrero, 1 de mayo de 1985; «Carrillo: 'No comment' a su extraño discurso», El País, 21 de marzo de 1983.

[33] Intervención de S. Carrillo en «Comité Central», Mundo Obrero, 21 de julio de 1983.

[34] «Gerardo Iglesias: "Carrillo me propuso que el PCE tuviera una dirección bicéfala"», El País, 6 de julio de 1983.

[35] «El nuevo secretario general del Partido Comunista de España tiene manos libres», El País, 8 de noviembre de 1982.

[36] CIA, «Spain: Communism in Crisis».

[37] Sergio Gálvez, «La "construcción" de Santiago Carrillo (1983-2012)», Historia del Presente 24 (2014), pp. 77-92.

[38] «Reunión del CC del PSUC», 28 de septiembre de 1985, Fondo PSUC: sig. 230-3319, Arxiu Nacional de Catalunya.

[39] «Resolución del CE del PCE», Mundo Obrero, 26 de marzo de 1986; Consuelo del Val, Opinión pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la OTAN, Madrid, CIS, 1996.

[40] «Un programa común para la izquierda», Mundo Obrero, 26 de marzo de 1986; «Constituida la plataforma de la izquierda unida», Mundo Obrero, 7 de mayo de 1986.

[41] Véanse, por ejemplo, «22-J», En pie de paz 2 (1986), y «¿De la calle al Parlamento?», Servir al Pueblo, 23 de abril de 1986.

[42] «El compromiso de Izquierda Unida con la sociedad española», Mundo Obrero, 11 de junio de 1986.

[43] Entrevista del autor a Carlos Carnero, 22 de mayo de 2018.

[44] «Gorbachov. Un aire nuevo», Mundo Obrero, 27 de marzo de 1985; Simón Sánchez Montero, El futuro se llama libertad (perestroika y socialismo), Madrid, El País, 1988; «URSS. ¿Revolución en la revolución?», Nuestra Bandera 143 (1988); Archie Brown, The Gorbachev Factor, Nueva York, Oxford University Press, 1996.

[45] «Informe al CC», 2 de julio de 1988, Fondo PCE 1978-1991: caja 401-5, AHPCE.

[46] «Informe al CC», 26 de noviembre de 1988, ASA: caja 22, F10M.

[47] Comisión de Política Internacional, «La Perestroika», 5 de abril de 1989, ASA: caja 29, F10M; Kristina Spohr y David Reynolds (eds.), Transcending the Cold War, Oxford, Oxford University Press, 2016.

[48] Miguel Morán, «Un hito en la historia europea», Mundo Obrero, 23 de junio de 1988; Comisión del PCE para la CE, «Nuestra contribución a una Europa de progreso», 1987, Fondo PCE 1978-1991: caja 421-1, AHPCE; Marie-Pierre Rey, «Gorbachev's New Thinking and Europe, 1985–1989», en Frédéric Bozo y otros (eds.), Europe and the End of the Cold War, Londres-Nueva York, Routledge, 2008, pp. 23-35; Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez, La Unión Soviética ante el espejo de las Comunidades Europeas, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017.

[49] «Comunicado PCE-PCUS. 23-2-1987», Mundo Obrero, 5 de marzo de 1987.

[50] Congreso de los Diputados. Comisión no permanente sobre la financiación de los partidos políticos.

[51] «Balance de actividades internacionales», marzo-abril de 1988, Fondo PCE 1978-1991: caja 401-5, AHPCE.

[52] «Un proyecto de izquierda para una Europa de progreso», enero de 1989, Fondo PCE 1978-1991: caja 421-2, AHPCE; Salvador Forner y Heidy-Cristina Senante, «La política europea del PCE (1972-1999): del viraje europeísta al euroescepticismo», Historia y Política 41 (2019), pp. 335-366.

[53] «Elementos básicos para la intervención en la reunión de Bruselas», 10 de julio de 1989, «Reunión PCI-IU», 15 de julio de 1989, Fondo PCE 1978-1991: caja 407-15, AHPCE.

[54] Julio Anguita y Juan Andrade, Atraco a la memoria, Madrid, Akal, 2015, p. 177.

[55] Julio Anguita, «La solidaridad de la izquierda y la construcción europea», 1989, ASA: caja 27, F10M.

[56] «Informe al Comité Central», 20 de junio de 1987, ASA: caja 22, F10M.

[57] «Debate en el CC ampliado», Mundo Obrero, 20 de enero de 1988; J. Anguita y J. Andrade, op. cit.

[58] Julio Anguita, «Asumo plenamente la responsabilidad de dirigir el Partido», Mundo Obrero, 2 de marzo de 1988.

[59] Julio Anguita, «La apuesta», Nuestra Bandera 144 (1988).

[60] «Informe a la Comisión Política», 4 de noviembre de 1988, Fondo PCE 1978-1991: caja 407-9, AHPCE.

[61] Julio Anguita, «Izquierda Unida: la apuesta de los comunistas españoles», Nuestra Bandera 145 (1990).

[62] «IU lanza la alternativa», Mundo Obrero, 15 de febrero de 1989; «Entrevista a Julio Anguita», Mundo Obrero, 29 de junio de 1988.

[63] «Resolución sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1987», 27 de octubre de 1986, y «Resolución del CE sobre la situación económica y social y las movilizaciones sindicales», 2 de marzo de 1984, ASA: caja 21, F10M; Álvaro Soto, «El conflicto como respuesta social pero también política», en Álvaro Soto y Abdón Mateos (eds.), Historia de la época socialista, Madrid, Sílex, 2013, pp. 191-248.

[64] Gerardo Iglesias, «Carta abierta al presidente del Gobierno», Mundo Obrero, 29 de marzo de 1984.

[65] «Entrevista a Julio Anguita», Mundo Obrero, 21 de noviembre de 1990.

[66] «Resolución del CC sobre el 14-D», Mundo Obrero, 20 de diciembre de 1988.

[67] «Levántate y piensa», Mundo Obrero, 25 de octubre de 1989. Sobre el neorrevisionismo del PSOE en esta fase, véase Donald Sassoon, One Hundred Years of Socialism, Londres, I. B. Tauris, 2010, pp. 730-754.

[68] Sergio Gálvez, La gran huelga general. El sindicalismo contra la «modernización socialista», Madrid, Siglo XXI de España, 2017; «Informe al Comité Central», 15 de abril de 1989, ASA: caja 22, F10M.

[69] «Delegación a la RDA», 6 de junio de 1988, y «Entrevista con I. Gallego», 15 de septiembre de 1988, Fondo PCE 1978-1991: caja 389, AHPCE.

[70] El PCE incorporó 23 dirigentes del partido de Gallego en su Comité Central y 7 en su Comisión Política. Algunos de ellos obtuvieron cargos clave. Manuel Monereo y Ángel Pérez, por ejemplo, en 1990 fueron nombrados responsables, respectivamente, de Debate Teórico y de Organización dentro del Secretariado del PCE. De todas formas, el PCPE no dejó de existir, dado que una minoría -alrededor del 27 por 100 de su militancia- se opuso a la unificación. «Documento para la Comisión de Credenciales del Congreso de Unidad», Fondo PCE 1978-1991: caja 389, AHPCE.

[71] «Documento de unidad PCE-PCPE», enero 1989, Documentos PCE: Congresos, AHPCE.

[72] Simón Sánchez Montero, Camino de libertad: memorias, Madrid, Temas de Hoy, 1997, p. 411.

[73] «I.a Asamblea de Izquierda Unida», febrero de 1989, Documentos: Asambleas IU, AHPCE; «Marco teórico. II Asamblea Federal de IU», noviembre de 1990, ASA: caja 25, F10M.

[74] Luis Ramiro, Cambio y adaptación en la izquierda. La evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida (1986-2000), Madrid, CIS / Siglo XXI, 2004, pp. 66-83.

[75] «Informe al Comité Central», 14 de septiembre de 1989, ASA: caja 22, F10M.

[76] «Se acabó», Mundo Obrero, 1 de noviembre de 1989.

[77] «Carta de Enrique Curiel», Mundo Obrero, 23 de noviembre de 1988.

[78] «Curiel dice que el PCE está girando a la marginalidad», El País, 22 de noviembre de 1988; «Curiel afirma que el PCE lleva camino de una involución ideológica», El País, 1 de noviembre de 1988.

[79] The Diary of Anatoly S. Chernyaev. 1989, p. 20, https://nsarchive.gwu.edu.

[80] Vladimir Tismaneanu y Bogdan Iacob (eds.), The End and the Beginning. The Revolutions of 1989 and the Resurgence of History, Budapest, CEU Press, 2012.

[81] Julio Anguita, «Dolores», Mundo Obrero, 22 de noviembre de 1989.

[82] «Presentación del informe al CC», 30 de octubre de 1990, ASA: caja 22, F10M.

[83] «Transcripción mecanográfica de una parte de la intervención de Juan Berga en el Secretariado del PCE el 6.XI.89», Nuestra Bandera 151 (1991).

[84] «El Este, a debate», Mundo Obrero, 10 de enero de 1990.

[85] «Informe aprobado en el CC el día 21-XII-89», Mundo Obrero, 10 de enero de 1990.

[86] «El PCE ante las nuevas realidades», abril de 1990, ASA: caja 22, F10M.

[87] Simón Sánchez Montero, «Las causas de una crisis», ensayo en cinco partes publicado en Mundo PCE, 19 de noviembre de 1990; 9 de enero de 1991, 16 de enero de 1991, 23 de enero de 1991 y 6 de febrero de 1991.

[88] «70 Aniversario: historia y proyecto», Mundo Obrero, 18 de abril de 1990.

[89] «Entrevista a Julio Anguita», Mundo Obrero, 18 de agosto de 1990.

[90] «Setenta años del PCE. PCE, una función de porvenir», en PCE, El socialismo, una búsqueda permanente, 1991, p. 356.

[91] «Discurso de clausura de Julio Anguita», abril de 1990, ASA: caja 22,

F10M; «Pasionaria, una flor del siglo XX», Mundo Obrero, 22 de noviembre de 1989.

[92] Julio Anguita, «Izquierda Unida: la apuesta de los comunistas españoles».

[93] Manuel Ballestero y otros, «Ideas para un debate comunista», Nuestra Bandera, 150 (1991).

[94] «Desde el PCE: un debate para la izquierda», abril de 1990, ASA: caja 22, F10M.

[95] «Por el fortalecimiento del PCE. Por una Izquierda Unida plural», Mundo Obrero, 2 de octubre de 1991.

[96] Ludolfo Paramio, «Los principios del socialismo democrático», Leviatán 38 (1989).

[97] Juan Trías, «Modernización y restructuración capitalista», Nuestra Bandera, 145 (1990).

[98] «El futuro del socialismo», Mundo Obrero, 28 de marzo de 1990; «Intervención de Julio Anguita en el CC», Mundo PCE, 25 de julio de 1990.

[99] Manuel Monereo, «Construir una izquierda nueva. Renovar el PCE», Nuestra Bandera 145 (1990).

[100] «Informe al Comité Central», 20 de diciembre de 1989, ASA: caja 22, F10M.

[101] «Presentación del Informe al CC», 30 de octubre de 1990, cit.

[102] Juan Berga, «La moral de la Historia», Mundo PCE, 10 de julio de 1990.

[103] Entrevista del autor a Javier Aristu, 24 de junio de 2018; «El PCA de Sevilla da un paso adelante y aprueba una propuesta de autodisolución», ABC Sevilla, 31 de octubre de 1990.

[104] «Un Partido fuerte para Izquierda Unida», Mundo PCE, 14 de noviembre de 1990.

[105] Inmaculada Navarrete, «Entrevista a Eduardo Saborido», ABC Sevilla, 10 de noviembre de 1990.

[106] Andrea Possieri, Il peso della storia, Bolonia, Il Mulino, 2007.

[107] J. Anguita y J. Andrade, Atraco a la memoria, p. 165; Francisco Frutos, «No som unilaterals», Treball, 14 de abril de 1990.

[108] Manuel Monereo, «El último congreso del PCI y el primero del PDS», Mundo Obrero, 20 de febrero de 1991.

[109] Anabel Díez, «Malestar en el PCE por la presencia de Occhetto en un acto que convoca el PSOE», El País, 22 de marzo de 1990.

[110] Marc Rius Piniés, Iniciativa per Catalunya Verds (1987-2004), Barcelona, Fundació Nous Horitzons, 2005.

[111] «Entrevista a Rafael Ribó», La Vanguardia, 5 de noviembre de 1990.

[112] «El PSUC acusa al PCE de llevar una mala política de alianzas», La Vanguardia, 1 de noviembre de 1990; «El PSUC aprova un apropament a la IS», Treball, 15 de abril de 1990.

[113] «Entre Roma i Rimini», Treball, 28 de febrero de 1991; «Ribó s'ha entrevistat amb el secretari general del PCI», Treball, 31 de marzo de 1990.

[114] «Documentos Congresuales aprobados por el CC», 27 de julio de 1991, ASA: caja 20, F10M.

[115] Francisco Palero, «La nueva organización de la izquierda», 27 de julio de 1991, ASA: caja 20, F10M.

[116] Juan Berga, «Un paso de convergencia», 27 de julio de 1991, ASA: caja 20, F10M.

[117] Serhii Plokhy, The Last Empire, Nueva York, Basic Books, 2014.

[118] «Declaración de la Comisión Política del PCE», 5 de septiembre de 1991, ASA: caja 29, F10M; Martin Bull y Paul Heywood (eds.), West European Communist Parties after the Revolutions of 1989, Londres, Macmillan, 1994, pp.

90-118.

[119] «La palabra comunista sigue siendo irrenunciable, afirma Anguita», El País, 26 de agosto de 1991.

[120] «Silencio del Gobierno y los principales líderes políticos», El País, 25 de agosto de 1991.

[121] Leopoldo Espuny, «Dignidad en tiempos difíciles», Nuestra Bandera 151 (1991).

[122] José María Laso, «La crisis de la perestroika y sus consecuencias», Nuestra Bandera 150 (1991).

[123] Silvio Pons, «Western Communists, Mikhail Gorbachev and the 1989 Revolutions», Contemporary European History 18.3 (2009), pp. 349-362.

[124] «Manifiesto del PCE para la izquierda. Aprobado en el XIII Congreso», diciembre de 1991, Documentos: Congresos, AHPCE.

[125] «Discurso de Julio Anguita en la Fiesta del PCE», Mundo Obrero, 2 de octubre de 1991.

[126] «Los comunistas españoles, divididos sobre el futuro», La Vanguardia, 27 de agosto de 1991.

[127] Francisco Palero, «Hablando de futuro», Mundo Obrero, 1 de septiembre de 1991.

[128] Juan Azcona, Juan Berga y Francisco Palero, «El futuro se llama Izquierda Unida», El País, 3 de septiembre de 1991.

[129] Juan Berga, «Izquierda Unida como propuesta», Nuestra Bandera 151 (1991).

[130] Miguel Morán y Joan Puiguert, «Semblanza y final de una época dominada por la Revolución de Octubre», Mundo Obrero, 3 de noviembre de 1991.

[131] Fernando Pérez Royo, «Ante el XIII congreso del PCE, ¿continuidad o

refundación?», El País, 19 de diciembre de 1991.

[132] «Antonio Gutiérrez y Nicolás Sartorius, por la disolución del PCE», La Vanguardia, 31 de agosto de 1991; Francisco Bustelo, «Izquierda Unida en la encrucijada», El País, 28 de noviembre de 1991.

[133] Víctor Díaz-Cardiel, «Apuntes para el XIII Congreso», Nuestra Bandera 151 (1991).

[134] Manuel Monereo, «El verdadero debate de IU», Nuestra Bandera 152 (1992).

[135] «Memoria en las venas», El País, 23 de diciembre de 1991.

[136] Juan Paniagua y Luis Ramiro, Voz, conflicto y salida, Madrid, Editorial Complutense, 2003.

[137] Francisco Fernández Buey, «Un acto de valentía», Mundo Obrero, 5 de enero de 1992; Jacques Rupnik, «The world after 1989 and the exhaustion of three cycles», en J. Rupnik (ed.), 1989 as a Political World Event, Nueva York, Routledge, 2014, pp. 7-24.

[138] Julio Anguita, «Presentación del informe al XIV Congreso», 8-12-1995, Documentos: Congresos, AHPCE.

[139] «Manifiesto del PCE para la izquierda» (aprobado en el XIV Congreso), diciembre de 1995, Documentos: Congresos, AHPCE.

[140] José Cabo, «Desde China y Corea del Norte, una mirada al continente asiático», Nuestra Bandera 151 (1991).

[141] Manuel Monereo, «El conflicto del Golfo, el nuevo orden internacional y el papel de la izquierda europea», Nuestra Bandera 148 (1991).

[142] «Entrevista a Julio Anguita», Mundo Obrero, 1 de septiembre de 1991.

[143] «Informe al CC», 30 de octubre de 1990, ASA: caja 22, F10M.

[144] «Documento Político», mayo de 1992, Documentos: Asambleas IU, AHPCE; Julio Anguita, «Renegociar Maastricht», El País, 12 de junio de 1992.

[145] «Algunos elementos de la situación internacional», 1992, ASA: caja 27, F10M; S. Forner y H.-C. Senante, «La política europea del PCE».

[146] «Consejo Político Federal de IU», Mundo Obrero, 14 de octubre de 1992.

[147] Nicolás Sartorius y Diego López Garrido, «Unidad europea», El País, 22 de junio de 1992.

[148] «Sartorius consolida la corriente Nueva Izquierda», El País, 25 de mayo de 1992.

[149] «Resolución presentada por Julio Anguita» y «Resolución presentada por Francisco Palero», Mundo Obrero, 14 de octubre de 1992

[150] Se trataba de un euroescepticismo «soft». Con esta expresión, según la clásica definición de Taggart y Szczerbiak, se hace referencia a una actitud que refleja insatisfacción y desacuerdos, incluso profundos, con ciertas políticas de la UE o determinados aspectos de su trayectoria, pero sin rechazar por principio la integración europea. Paul Taggart y Aleks Szczerbiak (eds.), Opposing Europe?, Oxford, Oxford University Press, 2008.

[151] Birte Wassenberg y otros (eds.), Contre l'Europe?, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010; Richard Dunphy, Contesting Capitalism?, Manchester, Manchester University Press, 2004.

[152] «Conferencia de Anguita en el Club Siglo XXI», Mundo Obrero, 18 de febrero de 1993.

[153] «Entrevista a Anguita», Mundo Obrero 37, septiembre de 1994.

[154] Leopoldo Espuny, «FG + TV =2R», Mundo Obrero, 22 de junio de 1993.

[155] «Convocatoria por la regeneración», Mundo Obrero, 18 de febrero de 1993.

[156] «Manifiesto-Convocatoria de IU», Mundo Obrero, 18 de febrero de 1993.

[157] Julio Anguita, «La Santa Alianza», El País, 1 de diciembre de 1993.

[158] Alejandro Nieto, Corrupción en la España democrática, Barcelona, Ariel,

1997; Paddy Woodworth, Dirty War, Clean Hands, Cork, Cork University Press, 2001.

[159] «Privilegios», Mundo Obrero, 7 de mayo de 1991; «Anguita dice que González es el señor X», El País, 11 de enero de1995.

[160] «La crisis de un régimen», Mundo Obrero 41, enero de 1995.

[161] «Pérdida de democracia», Mundo Obrero, 2 de julio de 1991.

[162] «Manifiesto», diciembre de 1994, Documentos: Asambleas IU, AHPCE.

[163] «El PCE llama a la rebeldía», Mundo Obrero 26, octubre de 1993.

[164] «Entrevista a Anguita», El País, 24 de mayo de 1995.

[165] «Julio Anguita pide al PSOE un programa común de izquierdas», El País, 19 de junio de 1993.

[166] «Comparecencia del Gobierno en el Congreso. Intervención de J. Anguita», Mundo Obrero 34, junio de 1994; «Informe de Anguita», Mundo Obrero 35, julio-agosto de 1994; «La supervivencia de la izquierda depende de la colaboración entre PSOE e IU», El País, 10 de junio de 1993.

[167] «El PSOE cancela la cita con IU por una dura carta de Anguita», El País, 1 de diciembre de 1993; «Felipe González: "En ningún momento he creído posible un pacto con IU"», El País, 14 de mayo de 1993.

[168] El PSOE obtuvo el 39 por 100 en Andalucía, y el 30,8 por 100 en las europeas.

[169] «Resolución del CF del PCE», Mundo Obrero 35, julio-agosto de 1994.

[170] «Intervención de Anguita en el CF», Mundo Obrero 40, diciembre de 1994.

[171] «La asamblea de IU declara al PSOE enemigo a batir», El País, 11 de diciembre de 1994.

[172] El PP había obtenido 21 escaños, el PSOE 17 e IU 6.

[173] «González acusa a Anguita por recurrir al PP para hacer “una pinza” al PSOE», El País, 12 de julio de 1994.

[174] «Manifiesto», diciembre de 1994.

[175] «Entrevista a Anguita», El País, 11 de septiembre de 1994.

[176] «Anguita denuncia una confabulación económica, política e informativa para acabar con el PCE», El País, 11 de diciembre de 1995.

[177] Diego López Garrido, «Izquierda Unida ante el PSOE», «Anguita equipara al felipismo y al PP como adversarios de IU», El País, 15 de junio de 1995 y 25 de junio de 1995.

[178] «Los renovadores de IU refuerzan su sector», El País, 16 de enero de 1994; Nicolás Sartorius, Un nuevo proyecto político, Madrid, Aguilar, 1992.

[179] Jordi Solé Tura, «La izquierda que conviene a la derecha», El País, 27 de diciembre de 1995.

[180] Anguita rechazó rotundamente esta perspectiva: «Informe al Consejo Político Federal», Mundo Obrero 56, abril de 1996.

[181] Entrevista del autor a Javier Aristu, cit.

[182] https://twitter.com/PabloIglesias/status/1261599501875322880?s=20.

[183] https://twitter.com/agarzon/status/1261596033257279489.

VII

DESPUÉS DEL DILUVIO. LA ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL COMUNISMO ESPAÑOL DE 1996 A 2021

– Eduardo Sánchez Iglesias y Jaime Aja Valle –

Tras la crisis económica de 2008, el término comunismo ha recobrado vigencia. En la mayoría de las ocasiones forma parte de los discursos conservadores, donde el anticomunismo aparece como el resultado de una defunción o como un implícito ejercicio de triunfalismo, pero también como un signo de precaución y sospecha de renacimiento. En este contexto, asistimos también a debates cada vez más frecuentes que lo sitúan en una renovada perspectiva de sus logros históricos, así como de una nueva posibilidad de repensar la tarea política y la subjetividad comprometida desde el comunismo.

Resulta un reto conceptual cómo entender el comunismo tras la desaparición de una buena parte de los partidos políticos, experiencias estatales y corrientes culturales e ideológicas que se reclamaban de dicha tradición, existiendo una suerte de fractura con los modelos de subjetividad previos que permitían explicar qué era un proyecto comunista. Con el presente capítulo nos disponemos a estudiar la forma en la que se ha ido reelaborando una nueva identidad comunista, presentando el tema a través de una pregunta: ¿cómo ha afrontado el PCE la crisis del movimiento comunista internacional en el siglo XXI?

Nuestra investigación tiene como objetivo central analizar cuál ha sido la estrategia política del PCE durante el presente siglo, desde la que se han creado imaginarios políticos y estrategias de movilización dirigidas a presentarse como un partido político viable en términos políticos, sociales, organizativos y electorales.

Para el desarrollo de tal objetivo se combinan tres herramientas metodológicas, las cuales pasan por el uso del análisis de marcos discursivos, el análisis de datos electorales y el estudio de la evolución de los resultados electorales de IU y y el

análisis de su base electoral. Para ello, se analiza la base organizativa y social por medio del análisis de datos internos, de las encuestas realizadas en Congresos, de la encuesta a militantes de IU (sobre la submuestra de militantes del PCE) y de la submuestra de «comunistas» en los barómetros del CIS.

Con el estudio de los diferentes marcos ideológicos empleados, de las estrategias discursivas desplegadas y del estudio de su militancia y base electoral, presentamos diferentes hipótesis desde las que orientamos nuestra investigación, partiendo del modo en que el PCE ha desarrollado una estrategia con la que intenta afrontar sucesivas crisis y una situación de debilidad política y organizativa, por medio de una estrategia centrada en tres elementos: la reconstrucción organizativa, la creación de un bloque social alternativo y la redirección hacia la nueva clase trabajadora.

Durante el periodo analizado, el PCE considera que el logro de sus objetivos pasa por su reconstrucción organizativa, con la que recuperar una base militante y protagonismo político más allá de IU. Esta tarea de reconstrucción se vincula a la necesidad de poner en práctica una política de alianzas desde las que articular un bloque social con el que superar el espacio político y electoral alcanzado bajo IU. Objetivos que parten de la convicción de que solo son posibles si dicha labor de reconstrucción se sustenta en la interlocución con una nueva clase trabajadora, joven y definida por la precariedad laboral, a partir de la cual relanzar un nuevo proyecto comunista para la España de hoy.

Los resultados de la investigación se exponen en un epígrafe cuya estructura contiene cuatro apartados. En primer lugar, proponemos un marco teórico desde el que definir el comunismo como una corriente integrada dentro de la izquierda radical europea, en el que analizamos sus estrategias políticas, programas y alianzas sociales para elaborar una tipología de partidos de la izquierda radical y el lugar que en ellos ocupan los partidos comunistas contemporáneos y las diferentes evoluciones seguidas. En segundo lugar, hemos realizado un análisis de los marcos interpretativos del discurso político del PCE, para identificar las estrategias políticas y la identidad comunista propuesta durante el periodo analizado. Pasamos a un tercer apartado, donde estudiamos los resultados obtenidos en términos electorales, organizativos y sociales, para de esta manera analizar cuál sería la subcultura política comunista actual. Por último, un apartado dedicado a la exposición de las principales conclusiones alcanzadas.

LA IZQUIERDA RADICAL EN EUROPA OCCIDENTAL

Los años noventa supusieron un terremoto político y social para el conjunto de la izquierda y en especial para los partidos comunistas, como hemos visto en el capítulo anterior. Un diluvio, como lo definió Paramio[1], que provocó la mutación de una gran parte de los partidos comunistas y postcomunistas y un cambio profundo en la estrategia de las diversas familias de la izquierda.

Como podemos observar en la tabla 1, en torno a los años noventa se produce una verdadera implosión del campo comunista europeo, de tal manera que este campo queda muy limitado y situado en lo que académicamente se denomina como izquierda radical. En el cuadro observamos cómo los principales partidos comunistas o postcomunistas afrontan la crisis de los años noventa. Nos hemos limitado a aquellos que han tenido representación parlamentaria alguna vez entre 1996 y 2021, pues nuestro objetivo es señalar el punto de partida de los partidos comunistas y de la izquierda radical en el periodo de estudio. Como podemos observar, solo una parte de los partidos comunistas optan por la continuidad formal, aunque con importantes cambios estratégicos, como veremos a continuación. Los casos más importantes son los de Chequia (KSCM), Chipre (AKEL), Francia (PCF), Grecia (KKE) y Portugal (PCP).

Una gran parte de formaciones optan por la transformación o la mutación. De esta manera, numerosos partidos comunistas se transformaron en formaciones socialdemócratas, como en Italia, donde el PCI se transformó en PDS, y como en una gran parte de los países de Europa del Este. En 12 países europeos el antiguo partido comunista acaba siendo la principal referencia socialdemócrata. Además, otras formaciones optan por integrarse (Irlanda) o unirse (Islandia) a las formaciones socialdemócratas dominantes. Algunas toman el camino de la transformación, pero sin salir del campo de la izquierda radical. Constituyen importantes referentes de este campo, como los partidos de Alemania, Grecia y todos los países nórdicos. Otras formaciones se transformaron en formaciones ecologistas y se incorporaron al campo verde europeo, en procesos de cambio generalmente largos y convulsos.

Tabla 1. Evolución política de los principales partidos comunistas y

postcomunistas de Europa por país (partidos con presencia parlamentaria entre 1996 y 2020)[*]

▪

Evolución	País (denominación original → nueva denominación, año de
Izquierda radical	
Continuidad	Austria (KPÖ), Bélgica (PTB-PvdAa), Chequia (KSC → KS
Federación	Dinamarca (DKP → EL, 1989), España (PCE → IU, 1986/1
Transformación	Alemania (SED → PDS, 1989), Finlandia (SKDL → Vas, 1
Nueva creación	Belarus (KPB, 1996), Croacia (LF, 2014), Eslovenia (ZL/Le
Ecologismo	
Transformación	Dinamarca (SF, 1994/2014), España (PSUC → ICV; 1987/2
Socialdemócratas	
Transformación	Albania (PKSH → PS, 1991), Bosnia y Herzegovina (SK B
Integración	Irlanda (minoría WP → DL, 1992; DL → LP, 1999), Islandi
Ilegalizado	
Ilegalizado	Rumanía (PCR, 1989), Rusia (KPSS, 1991), Ucrania (KPU,

▪

Fuente: Elaboración propia. Para cada país se indica la denominación original y, si hubiese un cambio, la nueva denominación y el año en que se produjo. Si no se indica nada, se refiere a la posición mayoritaria. Solo se tienen en cuenta aquellas formaciones (sean las originales o sus continuadoras) que desde 1996 hasta la actualidad han tenido representación en sus parlamentos nacionales en alguna ocasión.

a En su origen se trataba de un partido maoísta.

[*] Veáse el anexo de siglas al final de este capítulo.

En general, mientras que los procesos de transformación en Europa Oriental son rápidos y radicales, en Europa Occidental generalmente van acompañados de profundos debates estratégicos, son más lentos, no son lineales y no están exentos de rupturas. En ocasiones, la transformación se inicia con la conformación por parte de los PC de coaliciones electorales, que se estabilizan, se constituyen en federaciones y, finalmente, en partidos. Puede que el proceso se detenga en la coalición electoral, como en Portugal o en Francia, o en la federación, como en España y Dinamarca. Pero, en otras ocasiones, esto finaliza con la salida de la nueva formación de la mayoría de los partidarios de mantener el partido comunista original, como ocurrió en Grecia, Finlandia, Irlanda o Países Bajos. En estos casos, salvo en Grecia, la formación comunista suele tener poco éxito en su competición con el nuevo partido. El caso de España es excepcional, en la medida en que se constituye una nueva formación estable, sin disolver el partido comunista original, lo que sitúa este caso en un punto intermedio entre la continuidad y la transformación, no exento de múltiples tensiones políticas y organizativas[2].

El cuadro se completa con nuevas formaciones de izquierda radical que se crean en este periodo y que logran representación parlamentaria de manera estable. Son casos variados, que van desde la recreación de formaciones comunistas a la

fundación de organizaciones rojiverdes. Algunas son minoritarias y efímeras y otras han logrado importantes éxitos electorales e incluso participar de los gobiernos estatales, como en Islandia, Italia o Moldavia. También, en este periodo otras formaciones fueron ilegalizadas, el último caso el de Ucrania.

Esta visión general nos sitúa en una etapa, distinta que la anterior, en que el movimiento comunista en Europa se reduce y se sitúa en un campo más amplio. En la bibliografía científica este campo se denomina la izquierda radical. No es un criterio solo cuantitativo, sino que cualitativamente las formaciones de izquierda radical comparten unas características comunes. Por esta razón, en este apartado de marco teórico y analítico nos centramos en los estudios sobre izquierda radical y no solo en los referidos a los partidos comunistas. Nos centraremos en las formaciones de Europa Occidental, por constituir un campo definido, como veremos en el apartado siguiente.

Base electoral, redefinición estratégica y organizativa, alianzas políticas, alianzas sociales y tipologías

Las formaciones de izquierda radical en Europa mantienen diferencias entre ellas en términos políticos, programáticos y electorales[3], como veremos más adelante. Pero constituyen un espacio común, con una identidad política definida[4], una base electoral similar[5] y problemas comunes, como veremos a continuación.

La izquierda radical comparte una identidad, una ideología y una estrategia a largo plazo común, que le diferencia del resto de las ocho familias ideológicas principales europeas[6]. Esta puede identificarse, someramente, por varios elementos como la crítica del sistema político y la apuesta por una reforma participativa de la democracia, por el compromiso con los derechos de los sectores excluidos o marginados, por una identidad anticapitalista y por un programa antineoliberal[7]. Aunque muchas de estas formaciones tienen un origen común en los partidos comunistas, y bastantes continúan declarándose comunistas, todas han pasado por un proceso de importante reformulación estratégica después de la crisis de los años noventa[8], si bien varían en la profundidad y dirección de esta revisión de su identidad ideológica[9].

Las formaciones de izquierda radical en Europa Occidental tienen un espacio electoral con características comunes, sociodemográficas, laborales y actitudinales. De esta manera, identificarse con la clase trabajadora, estar afiliado a un sindicato, no pertenecer a ninguna religión o tener una asistencia ocasional o rara a servicios religiosos, ser de izquierdas, estar insatisfecho con la democracia, tener una opinión negativa de la pertenencia a la UE de su país, tener estudios superiores o haber abandonado a edad muy temprana los estudios son factores que aumentan significativamente la probabilidad de votar por una de estas formaciones, como concluye Ramiro[10]. Los partidos de izquierda radical se sustentan en una coalición de electores provenientes de dos espacios electorales muy diferentes: los votantes poco cualificados, que eran la base tradicional de estas formaciones, y aquellos con un nivel educativo elevado, que es un sector por el que compiten con las formaciones verdes.

Por otro lado, al analizar las fluctuaciones del espacio electoral, se observan diferencias entre el votante del núcleo, más fiel, y el votante más amplio, fluctuante. Aunque el votante más fiel no es un individuo envejecido o rural, sí se puede afirmar que el votante volátil es más joven y más urbano que el del núcleo. Los trabajadores manuales en las industrias estatales también son parte del electorado flotante y ocasionalmente apoyan a los partidos de la izquierda radical[11]. Las fluctuaciones están definidas por cuestiones internas de los partidos y circunstancias nacionales, pero también se observa una tendencia al aumento de estos partidos cuando se producen crisis económicas que se traducen en un aumento del desempleo[12]. Las crisis no tienen un efecto por sí mismas, pero sí aumentan las opciones de la izquierda radical cuando se producen situaciones de aumento del paro, independientemente de que gobierne la izquierda o la derecha. La clave de esto puede estar, para Gómez y Ramiro, en la centralidad en los programas de estas formaciones de las temáticas socioeconómicas, como el desempleo y la redistribución. No obstante, aunque las crisis de empleo sirvan como movilizador electoral de este espacio, esta movilización no rompe las barreras ideológicas, es decir, no permite atraer a votantes alejados de su espacio ideológico[13].

Las formaciones de la izquierda radical europea enfrentan problemas y situaciones similares. Este es un punto en común muy importante. Respecto a la identidad y estrategia, existe cierta diversidad en este campo, pero, independientemente de que hablemos de un partido comunista más tradicional o de una formación de nueva izquierda, el hecho de ocupar un extremo del tablero político hace que una organización de izquierda radical se encuentre con riesgos

y oportunidades similares. Vamos a hacer un repaso somero de los riesgos y oportunidades que hemos diferenciado en dos bloques: los relacionados con las alianzas sociales, como la ampliación o reducción de la base social militante y la relación con los movimientos sociales y los sindicatos; y los relacionados con las alianzas políticas, como la competencia electoral con otras formaciones y la participación en tareas de gobierno.

Las organizaciones políticas de la izquierda radical en Europa afrontan el problema de la reducción paulatina de su base militante. Este es un problema que afecta en mayor o menor medida a todos los partidos políticos, que tienen dificultades para incorporar y para retener a afiliados[14]. Los partidos, en general, tienen un éxito relativo con los varones, de mediana edad y un nivel educativo elevado, pero tienen serias dificultades para afiliar o retener a otros grupos sociales, como mujeres o jóvenes[15]. Respecto a los partidos de la izquierda radical, algunos se encuentran con un problema de acusado envejecimiento, especialmente las formaciones comunistas o postcomunistas que tienen su origen en partidos comunistas de amplia afiliación[16]. No obstante, tal como alerta Scarrow, al tratar el tema de la reducción de la afiliación, existe un mito extendido que tiende a considerar que en el pasado los partidos políticos contaban con una amplia base militante, cuando esto solo se producía en determinadas situaciones[17].

La relación con los movimientos sociales es una cuestión central en la estrategia de la izquierda radical, para la elaboración política y la ampliación de la base afiliativa. Pero esta relación, aunque cercana, siempre es conflictiva. Para Corcuff y Mathieu, en la izquierda lo político y lo social aparecen como dos campos diferentes, con lógicas distintas, que mantienen relaciones que son cercanas y constantes, pero que también son fluctuantes y están marcadas por la desconfianza y la competencia[18]. La crisis de los años noventa significó una reformulación de la relación con los movimientos sociales. En un contexto de declive electoral y crisis interna, una parte importante de las formaciones de la izquierda radical buscaron mejorar su relación con los movimientos sociales, para lo que llevaron a cabo una serie de transformaciones políticas y organizativas, tal como describen Ramiro y Verge: se idearon formas de organización más participativas, hubo una reorientación ideológica hacia los temas más cercanos a los movimientos sociales y se buscaron alianzas sociales más flexibles y menos exclusivas[19]. Esta transformación no estuvo exenta de problemas, en la medida que estos cambios podían chocar con las formas organizativas y la identidad anteriores[20]. Por esto, dentro de este campo

observamos diferencias, con partidos que priorizan las relaciones más institucionales con los actores tradicionales, como los sindicatos, y otros que buscan relaciones más informales con nuevos actores[21].

Los resultados de la estrategia de acercamiento a los movimientos sociales, no obstante, dependen de factores ambientales en que los partidos tienen una limitada influencia, aunque esta tienda a exagerarse[22]. En el caso español, los resultados fueron modestos en términos de ampliar la base militante. Hay que tener en cuenta que los partidos progresistas y los movimientos sociales se mueven en dos espacios sociales distintos, reclutan a grupos con diferencias significativas de sexo, nivel educativo y actitudes políticas, lo que genera dificultades para dar un salto de un campo a otro[23].

Las relaciones con el movimiento sindical, como es evidente, tienen una importancia especial para los partidos comunistas. La crisis de los años noventa también provocó un fuerte cambio en este sentido. En esos años, por un lado, los sindicatos se alejan de una izquierda postcomunista en crisis y, por otro, el movimiento obrero se ve inmerso en su propia crisis; lo que lleva a la izquierda radical a buscar nuevos referentes sociales, como el movimiento antiglobalización[24]. Este debilitamiento del vínculo con los referentes sociales tradicionales pudo servir de incentivo para las transformaciones antes citadas descritas por Ramiro y Verge[25]. Desde la crisis de 2008 se observa una revitalización del movimiento sindical y un acercamiento a los partidos de la izquierda radical[26], con lo que la relación con los sindicatos ha recuperado una parte de su protagonismo anterior. No obstante, en este punto también observamos diferencias entre los distintos partidos de este campo, en la medida que algunos, como el PCF[27] y el PCP[28], han mantenido fuertes vínculos con las organizaciones sindicales principales de sus países.

Otro problema que afrontan los partidos de la izquierda radical es la competencia electoral con formaciones como la socialdemocracia, los verdes y, en los últimos tiempos, el populismo de izquierdas. Como hemos visto, la coalición social que sustenta a la izquierda radical tiene dos bases, que están en disputa: una con la socialdemocracia y otra con los verdes[29]. Esta doble competencia hace más difícil los movimientos políticos. Hemos visto que la izquierda radical tiene mejores perspectivas electorales cuando las temáticas socioeconómicas cobran relevancia, pero sin poder rebasar su espacio ideológico[30]. Por el contrario, la izquierda populista se dirige a grupos ideológicamente menos definidos, socialmente golpeados por la crisis y políticamente insatisfechos con las

organizaciones establecidas[31]. El éxito del populismo se basa en movilizar a los grupos sociales perdedores de la globalización[32]. En este sentido, son nuevas formaciones que pueden aprovechar en mejores condiciones la estructura de oportunidades políticas que ofreció la gran recesión de 2008[33], aunque tienen dificultades cuando se enfrentan al problema de la institucionalización de un partido carismático[34]. Además de aparecer como competidores, también pueden aparecer como adversarios que impugnan el papel de las organizaciones de izquierda radical. Es decir, en la medida en que las organizaciones populistas dirigen sus críticas al sistema político y económico en su conjunto, incluyen a las organizaciones del gobierno y de la oposición, también a la izquierda radical[35].

Otra problemática común al conjunto de la izquierda radical europea son las tensiones generadas por la participación en tareas de gobierno regionales y estatales. Estas experiencias son vividas por estos partidos como fundamentales para salir de la marginalidad política[36] y ganar legitimidad social[37]. Pero se encuentran con dificultades adicionales, además de las que sufren todas las organizaciones pequeñas al entrar en gobiernos y asumir una posición subsidiaria. Olsen, Hough y Koß[38] observan tres problemas principales tras analizar diversas experiencias europeas: en primer lugar, entrar en gobiernos nacionales choca con su identidad anticapitalista. En segundo lugar, suelen ser organizaciones faltas de experiencia, que comparten gobiernos con organizaciones más experimentadas. En tercer lugar, la entrada en el gobierno de la izquierda radical se observa, interna y externamente, como un fenómeno anormal, lo que aumenta las expectativas y la exposición ante la opinión pública. En el análisis de los casos de Alemania y España, países con dificultades históricas para la izquierda radical de cara a alcanzar acuerdos de gobierno no locales, Hough y Verge[39] concluyen que el éxito de la experiencia depende de la cercanía política, la confianza personal, la situación de crecimiento de los socialdemócratas y la unidad interna de los actores. Por el contrario, al margen de lo que se suele pensar, la existencia de competidores en la izquierda generalmente no influye en la evolución de los acuerdos[40].

Vemos que los partidos de la izquierda radical comparten elementos comunes, pero también mantienen algunas diferencias. Y también cómo dentro de este campo ideológico existen algunos patrones de comportamiento y rasgos más pronunciados, sobre los que se pueden construir tipologías. March[41] diferencia cuatro grupos en función de su identidad: el primer grupo lo constituyen los partidos comunistas, que a su vez pueden diferenciarse entre conservadores y

reformistas. Estos partidos mantienen la ideología comunista, incorporando elementos de la nueva izquierda. El segundo grupo lo constituyen los socialistas democráticos, que hacen una revisión crítica de la experiencia soviética. El tercer grupo lo forman los populistas socialistas, que se posicionan como una opción antisistema y antiélites. Por último, en cuarto lugar están los socialpopulistas, definidos por una posición más ambigua respecto al eje izquierda-derecha, con organizaciones más informales y con fuertes liderazgos.

Gómez, Morales y Ramiro[42] construyen una sofisticada clasificación en base a las propuestas políticas de los partidos (su oferta) y las posiciones y características de sus votantes (la demanda), que podemos observar en la tabla 2. La investigación subraya que los partidos de la izquierda radical comparten muchas similitudes, especialmente sus políticas económicas de izquierda, pero también tienen diferencias, sobre todo respecto a los temas característicos de la nueva izquierda: el ecologismo, el pacifismo y el liberalismo social. En base a estas diferencias, se puede clasificar a los partidos en nueva izquierda y tradicionales. Esta tipología es especialmente interesante para nuestro estudio, pues no parte de la identidad, sino del programa y de los votantes, y nos permite diferenciar a los partidos que mantiene la identidad comunista. De esta manera, se observa cómo partidos que mantienen un fuerte vínculo con el comunismo se encuentran consistentemente en el área de la nueva izquierda. Por el contrario, otras formaciones que han roto este vínculo se mantienen en el área de la izquierda radical tradicional.

No existen diferencias significativas entre los votantes de uno y otro grupo en cuanto a género, edad, clase social subjetiva, afiliación sindical o tamaño del municipio de residencia. Sin embargo, entre los votantes de las formaciones del grupo de la nueva izquierda hay una mayor proporción de personas con estudios superiores y no religiosas, además de que este grupo es más moderado ideológicamente, menos euroescéptico, pero más insatisfecho con el funcionamiento del sistema político[43].

Tabla 2. Clasificación de las formaciones de izquierda radical en base a sus propuestas políticas (1980-2015)[44]

País	Tradicional	Nueva izquierda
Austria	KPÖ	
Chipre	AKEL	
Dinamarca	EL y SF (hasta 1990)	SF (desde 1990)
Finlandia	SKDL	VAS
Francia	PCF	
Alemania		PDS/Die Linke
Grecia	KKE y Synapismos/Syriza	
Islandia	Ab (hasta 1991)	Ab (1991-1995)/V(
Irlanda	SP y WP	DL
Italia	DP, PRC (hasta 1994) y PdCI (hasta 2006)	PRC (desde 1994) y
Luxemburgo	Déi Lenke (hasta 1989)	Déi Lenke (desde 1
Países Bajos	SP	
Noruega		SV
Portugal	PCP y UDP	BE
España	PCE/IU (hasta 1989)	IU (desde 1989)
Suecia	V (hasta 1982)	V (desde 1982)

▪

Fuente: Gómez, Morales y Ramiro[45].

LA IDENTIDAD COMUNISTA EN EL DISCURSO POLÍTICODEL PCE (1996-2021)

El presente apartado realiza un repaso crítico de los discursos políticos del PCE elaborados durante el presente siglo, orientados a la reconstrucción de una identidad comunista viable y operativa, una vez desaparecida la URSS y fracasadas las experiencias socialistas en los países del Este europeo.

Se parte de una suerte de «fractura epistemológica» en la manera de analizar la identidad comunista en un contexto de caída del bloque soviético, desaparición de los partidos comunistas en el Este europeo y en buena parte de los países occidentales, fuertes cambios en la composición de la clase trabajadora, así como consolidación generalizada del proyecto neoliberal[46], analizando los discursos políticos elaborados por un partido político, como el PCE, cuya última comparecencia electoral con tales siglas se produjo en 1983[47].

Este estado de las cosas se mantiene inalterable hasta la crisis económica de 2008, tras la cual el término comunismo ha recobrado cierta vigencia[48], suscitando debates intelectuales sobre cómo repensar «la idea de comunismo»[49], contexto donde el PCE transita desde el poscomunismo de finales del siglo XX a un pretendido neocomunismo contemporáneo.

A la pregunta de ¿cómo ha afrontado el PCE la crisis del movimiento comunista internacional en el siglo XXI?, proponemos un análisis de los marcos interpretativos del discurso político del PCE en cuanto a estrategias políticas identitarias, entendiéndolas como procesos de identificación «abiertos, dinámicos y contingentes», que se producen políticamente mediante «la movilización, la regulación y el antagonismo» en un determinado contexto social y político. Todo ello da lugar a un principio identificador que sirva para la acción colectiva y para ampliar apoyos sociales, generando cierta «ambigüedad y polisemia» y permitiendo a la identidad comunista propuesta por el PCE su

articulación con otros elementos ideológicos como el antineoliberalismo, el feminismo, el ecologismo, el pacifismo o el soberanismo opuesto a la globalización[50].

En cuanto a la metodología empleada, la identidad comunista defendida por el PCE descansa en sucesivos discursos políticos de los que se derivan tareas políticas diferentes que dan lugar, a su vez, a tres tipos de marcos interpretativos: marcos de diagnóstico, marcos de propósito y marcos de motivación[51].

Los marcos de diagnóstico identifican determinadas realidades como problemáticas y aquejadas de una urgente solución, por ejemplo, el problema del paro, el problema territorial o la crisis económica. Pero no solo sirven para señalar el problema, sino que designan las causas objetivas del mismo y los responsables de las mismas. De esta forma, los marcos de diagnóstico cumplen una «función atributiva» de la realidad problemática a un culpable. Este marco interpretativo adquiere una importancia decisiva en la asignación del papel de antagonista, «proporcionando un arquetipo del otro como diferente, como enemigo»[52].

Los marcos de pronóstico señalan la alternativa, trazan un plan para la solución del problema, designando asimismo al portador del cambio, el protagonista de la lucha, que se aparece como el representante de la comunidad política, los portavoces legítimos del sujeto político.

Los marcos de acción, o motivación, aportan los incentivos para la movilización y pretenden crear un repertorio de movilización, como requisito para la solución al problema señalado, «frente al otro convertido en enemigo externo o interno»[53].

Aplicando el análisis de marcos, podemos distinguir tres estrategias diferenciadas en el discurso político propuesto por el PCE en el trayecto histórico que va desde 1996 hasta 2021: estrategia antiglobalizadora (1996-2007), estrategia rupturista (2008-2016) y estrategia de unidad popular (2017-2021).

Para la elaboración del texto se han analizado –como los más significativos– los materiales correspondientes a los documentos aprobados en el XV Congreso del PCE (1998), XVI Congreso (2002), XVII Congreso (2005), XVIII Congreso (2009), XIX Congreso (2013) y XX Congreso (I Fase, 2016, y II Fase, 2017), la

Conferencia de organización de 2004, las Conferencias políticas celebradas en 2008, 2009, 2012 y 2020, documentos como Hacia un Estado Federal (1996), Propuesta para una Alternativa social y anticapitalista a la crisis (2010), Análisis y tareas en el movimiento 15M (2011), Hacia la Jornada de Protesta Cívica (2011) y el documento político defendido en la IX Asamblea Federal de IU celebrada en 2008, denominado Por una Izquierda Unida anticapitalista, republicana, federal y alternativa[54] (conocido como documento de los cien), entre otros.

Componentes fundamentales del discurso político del PCE (1996-2021)

Como se viene planteando, el discurso vendría a ser «una manifestación concreta y particular de la ideología», siendo una manifestación de la misma expresada «a través del lenguaje natural», que remite a los conflictos en los que se gesta y modela, siendo la unidad básica del discurso político el concepto, donde el discurso político es «el resultado de la relación de varios conceptos»[55].

Así, antes de analizar los cambios en el discurso político del PCE a lo largo del trayecto analizado, resulta pertinente abordar a los componentes fundamentales del mismo, síntesis de elementos cuyo protagonismo cambia, pero que permanecen activos a lo largo del periodo examinado en torno a cuatro conceptos: el marxismo, el anticapitalismo, el republicanismo y el federalismo[56].

Como plantea Ricoeur[57], la ideología es «la forma en que se libran a nivel simbólico los conflictos», concepción que en el caso del periodo analizado permite entender cómo la concepción ideológica del PCE evoluciona del marxismo revolucionario vigente en 1996 hasta la recuperación del marxismo-leninismo como definición ideológica adoptada en el XX Congreso celebrado en 2017.

En la recuperación del leninismo confluyen una serie de aspectos que pueden resumirse en tres criterios explicativos. En primer lugar, durante el periodo analizado predominan dentro del PCE culturas militantes que se opusieron a la renuncia del leninismo en el IX Congreso de 1978, tanto por la militancia que provenía de otros partidos comunistas opuestos al eurocomunismo, como por

destacados dirigentes que defendieron las tesis «leninistas» dentro del PCE, como es el caso de Francisco Frutos, secretario general del PCE (1998-2009), encargado de defender la enmienda crítica a la renuncia del leninismo en el IX Congreso[58]. En segundo lugar, el PCE experimenta un paulatino cambio en la composición social y generacional de su militancia, en especial, entre sus cuadros medios provinciales y locales, que se nutren con una nueva generación de jóvenes militantes que no vivieron la Transición ni el colapso de la URSS, y que en muchos casos provenían de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), organización que se definió como marxista-leninista en su VI Congreso (1993). Por último, la crisis social y el fuerte ciclo de movilizaciones que vive el país en el periodo de 2010-2015 influye en una militancia que se encuentra, en términos generales, más próxima al imaginario del PCE de la Guerra Civil o con el defensor de las tesis rupturistas de los primeros años setenta, que a la línea más moderada defendida en la Transición.

La definición marxista del PCE se concibe desde una polisemia que le confiere la suficiente versatilidad al concepto, con el que se pretende dar cuenta de fenómenos complejos y cambiantes que afectaban a la sociedad y a los propios debates de la izquierda española y europea durante el periodo analizado.

Desde esta perspectiva, podemos apreciar cómo en ocasiones el marxismo es para el PCE una teoría política que viene a dar a sus posicionamientos ideológicos una consistencia intelectual, ofreciendo una capacidad de análisis «científico de la realidad social» o una aproximación rigurosa «de un mundo en transformación», cuya constante es la consideración de la clase social como unidad de análisis en documentos políticos orientados al estudio del contexto social. De este modo se adopta el marxismo como un marco teórico que ofrece a la militancia un método de análisis, un esquema explicativo del proceso de cambio de la sociedad española o del capitalismo contemporáneo desde las relaciones económicas, equiparando al marxismo con un método de análisis fundado en el materialismo histórico, diferenciado de «las concepciones marxistas ortodoxas»[59] que se dieron en los países del Este europeo y en la URSS, pretendiendo con ello dotarse de una mayor credibilidad política en momentos de profunda crisis de los partidos comunistas.

Por otro lado, podemos observar cómo el marxismo sirvió al PCE para dotarse de unos principios éticos, que en un inicio contribuyeron a tomar distancia con el colapso del socialismo real, presentando al marxismo como una teoría en clave humanista, a través de una explícita reivindicación del joven Marx, en obras

como los Manuscritos económicos y filosóficos (1844) o La ideología alemana (1845)[60]; asimismo, las referencias a Lenin desaparecen hasta el XIX Congreso (2013), con lo que se pretendía entablar una relación entre la tradición del movimiento obrero y posiciones más cercanas al republicanismo, la democracia radical e incluso el anarquismo[61] y el pensamiento libertario presente en los movimientos sociales surgidos de las movilizaciones antiglobalización.

Encontramos referencias al marxismo que lo relacionan con una tradición, con una determinada cultura política que confiere a la ideología marxista un elemento identitario, capaz de ofrecer al PCE una autorrepresentación como colectivo, donde el Partido Comunista forma parte del movimiento obrero y revolucionario, marcando en sus análisis conceptos como el de «clase trabajadora», «explotación», «plusvalía», «revolución» o «imperialismo»; pero también como expresión de los movimientos sociales, situando al marxismo como una de las corrientes críticas o de pensamiento radical contemporáneas, destacando conceptos de carácter interclasista como el de «republicanismo», «ciudadanía», «pueblo», «rebelión democrática», «desigualdad», o relaciones norte-sur, que conectan al marxismo con el ecologismo, feminismo o pacifismo. También se recupera a pensadores marxistas españoles que habían abandonado su militancia en el PCE, como Manuel Sacristán o Francisco Fernández Buey, que están en la base de la reformulación de la identidad comunista como roja-verde-violeta.

Pero el marxismo no es solo presentado como un método de explicación del proceso histórico desde el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que permite analizar los valores y las costumbres y su evolución en la sociedad desde un punto de vista dialéctico. Este entra dentro del ámbito de la contingencia, donde el marxismo, además de un método, también supone una ideología que inspira una acción colectiva que persigue una alteración de los valores y presenta una alternativa al sistema capitalista, haciendo del mismo un legitimador que justifica un imaginario anticapitalista, y situando al PCE en posiciones rupturistas, como un «acelerador de las contradicciones»[62] a través de la lucha de clases. Aquí el leninismo aparece como una justificación simbólica que dota de credibilidad al alejamiento de la política de pactos del PCE de la Transición hacia posiciones defensoras de la ruptura democrática con el Régimen del 78 en el momento más álgido de la crisis.

Pero la forma en la que se interpreta el marxismo se emplea también como

criterio que dota de sentido a un determinado modelo organizativo. Así, el marxismo revolucionario para el XIII Congreso (1991) tiene su correlato en una organización basada en federaciones con un importante grado de autonomía, donde el principio de disciplina y centralismo democrático es sustituido por el de cohesión, estando mediatizada la relación con la sociedad a través de su trabajo en los movimientos sociales, CCOO e IU. De este modo, se reservan para el PCE una serie de competencias acotadas, como la formación de sus militantes y el impulso del marxismo, la potenciación de los movimientos sociales y el movimiento obrero y el reforzamiento de IU. Modelo que fue progresivamente evolucionando en torno a la idea de la recuperación del PCE que se lanza en la Conferencia de organización de 2004 y el XVII Congreso de 2005 y que se profundizaron con la Conferencia política de 2008 y de organización de 2009, en las que se adopta progresivamente un modelo organizativo y estatutario que culmina en el XX Congreso (2017) con la sustitución del Comité Federal por el Comité Central, una mayor centralización en su funcionamiento, la recuperación del centralismo democrático y la «recuperación plena de todas las competencias». Transformación organizativa que encuentra su justificación en la recuperación del leninismo por parte del PCE, pero que también se encuentra relacionada con determinadas coyunturas políticas que llevan al PCE a la adopción de cambios en el marco de las pugnas durante el periodo de Gaspar Llamazares como coordinador de IU (2000-2008), donde las tesis comunistas quedaron en minoría; o en el contexto electoral de 2014-2016, en el que se produce una quiebra del bipartidismo, dejando de ser el PCE e IU la principal representación electoral de la izquierda radical en España.

Considerando las influencias manifestadas en sus documentos, en los análisis del PCE se aprecia la influencia de diferentes marxismos, predominando enfoques y autores en función de las diferentes estrategias desplegadas.

Podemos diferenciar al respecto cómo en la estrategia antiglobalizadora predominan influencias cercanas a los llamados marxismos de la globalización, con el uso de conceptos provenientes de la obra de David Harvey[63], como «nuevo imperialismo» o «acumulación por desposesión», esgrimidos en los análisis internacionales o sobre la crisis ecológica. Es notoria también la influencia que produjo el Informe Petras[64] en el caso del impacto de la precariedad laboral, pero también la influencia de Toni Negri y el posoperaísmo italiano muy presentes en el movimiento antiglobalización (globalización como Imperio, y movimientos de movimientos, como Multitud) o en la propia idea de poder constituyente y proceso constituyente. Lo anterior es muestra de la fuerte

influencia que entre los comunistas españoles tenían los análisis del Partido de la Refundación Comunista Italiano (PRC) y su secretario general del momento, Fausto Bertinotti, así como el concepto socialismo del siglo XXI, elaborado por el sociólogo alemán Heinz Dieterich, sobre todo bajo la popularización que hizo Hugo Chávez en el V Foro Social de 2005.

Con la irrupción de la crisis de 2008, y bajo la estrategia rupturista, el PCE centra sus esfuerzos en realizar un análisis marxista de la sociedad española y la crisis de la UE, acudiendo a la estructura teórica centro-periferia para referirse a la inserción exterior de la economía española, así como empleando conceptos como sistema mundo, de Immanuel Wallerstein, o dependencia, de la Escuela de la dependencia latinoamericana. Pero lo significativo fue la recuperación y actualización de planteamientos propios de la tradición teórica del PCE de los años setenta, como la idea de proletarización de los técnicos y profesionales urbanos, básica para entender la reformulación de la «alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura»[65], o la pauperización progresiva de la clase trabajadora, que sustenta su análisis del «nuevo asalariado urbano» y la precariedad laboral «como una realidad estructural»; así como la recuperación de la idea de huelga general presente en los análisis sobre la estrategia de «manifestaciones mantenidas en el tiempo» y la traducción del binomio «huelga general más jornada de protesta cívica», que recuerda a la conocida consigna de huelga nacional pacífica, destacando por encima de todas la recuperación de la propuesta de «ruptura democrática».

Por último, bajo la estrategia de unidad popular, el PCE usa las categorías gramscianas para debatir y entrar en relación (muchas veces conflictiva) con el populismo de izquierdas presente en los movimientos políticos surgidos desde el ciclo marcado por el 15M, donde el concepto bloque histórico legitima en términos marxistas la política de alianzas a partir de 2015 (conocida como política de confluencia), así como el de hegemonía lo hacía para justificar el empleo de un lenguaje político interclasista bajo la categoría de «pueblo», «gente»[66] o «perdedor de la crisis», que están en el propio fundamento de la política de alianzas propuestas bajo el rótulo de unidad popular. Es interesante señalar también la influencia que tiene la izquierda marxista latinoamericana, en especial para los análisis geopolíticos o el empleo de la dialéctica pueblo-oligarquía, así como la propia idea de unidad popular, bien entendida como poder popular en recuerdo de la experiencia chilena bajo el Gobierno de Salvador Allende que encontramos en los textos de la II Fase del XX Congreso (2017), o bajo la experiencia del Frente Amplio uruguayo defendida en la

Conferencia política de 2020. Para terminar, señalar la creciente importancia que el feminismo de raíz marxista va tomando en los análisis y escritos del PCE, destacando la influencia de las marxistas de la III Internacional, como Alejandra Kollontai y Clara Zetkin, hasta llegar a referentes contemporáneos como Angela Davis.

La tematización del anticapitalismo aparece relacionada con la forma en la que el PCE plantea su apuesta por el socialismo en momentos de fuerte crisis de los partidos comunistas y de progresivo auge de los movimientos de protesta contra la «globalización neoliberal»[67]. Las manifestaciones contra la Cumbre de la OMC de 1999 en Seattle y la convocatoria del primer Foro Social Mundial celebrado en la ciudad brasileña de Porto Alegre en 2001, en respuesta al Foro Económico de Davos, abre un ciclo de protestas globales que supone para el PCE «el nacimiento del movimiento antiglobalización, [el cual] encarna hoy el despertar de una conciencia ciudadana crítica contra el capitalismo»[68]; donde el problema queda formulado desde un punto de vista democrático[69]: «Al ser relegada la democracia por el mercado financiero», al que hay que oponerse por medio de «un amplio movimiento en contra […] al que enfrentarle una verdadera alternativa democrática que contenga un sesgo socialista[70]», alternativa que tiene en la escala global su dimensión espacial principal. Con la crisis de 2008 y la irrupción del conflicto social entre 2010-2015, se produce un giro en el discurso político del PCE formulando el problema en clave eminentemente socioeconómica bajo la «centralidad del mundo del trabajo»[71], donde el anticapitalismo se presenta, por un lado, como la necesidad de defender «nuestra identidad como fuerza anticapitalista»[72] en el contexto de los conflictos entre el PCE, y la dirección de IU bajo la coordinación de Gaspar Llamazares, definiendo el componente anticapitalista como «dar alternativas al neoliberalismo en el horizonte de la construcción del socialismo»[73]; y, por otro, como orientación estratégica a las medidas anticrisis contempladas en la Alternativa Social Democrática y Anticapitalista a la crisis (ASDA) presentada por el PCE en 2010[74], donde el anticapitalismo se emplea como marco discursivo que permite la presentación del «capitalismo como el culpable de la crisis en el Estado español»[75].

Si el anticapitalismo aparece como el concepto central empleado por el PCE para la defensa del socialismo, se aprecian dos cambios importantes respecto a su concepción histórica. Así, por un lado, el socialismo es el programa máximo de la organización, transitando desde una concepción próxima de su realización en los primeros años setenta, pasando a una concepción remota del mismo,

convirtiéndose en una referencia ideológica más cultural que práctica, y evolucionando hacia una concepción donde el socialismo se presenta como un pensamiento antineoliberal, o como una referencia en la que se integran los «nuevos problemas» relacionados con la crisis ecológica, el feminismo, el antiglobalismo o el liberalismo social[76]. El segundo cambio tiene que ver con el modelo de socialismo que se defiende, el cual parte en estos años de una condena explícita al «socialismo del Este»[77] y a la «degradación burocrática-estatalista de la URSS»[78], así como a la asunción del socialismo del siglo XXI como modelo[79], cuya «construcción pasará, entre otras cosas, por una renovada política de convergencia, de alianzas entre todos los sectores que entienden que la vía capitalista está agotada, desacreditada y es, de hecho, la causa de la mayor parte de las injusticias estructurales del Planeta»; de modo tal que «el avance del socialismo en Europa requiere de la búsqueda de caminos nuevos», situando a la izquierda de «América Latina y Asia» como los nuevos referentes internacionales del PCE[80].

Como consecuencia de lo anterior, el PCE centra sus esfuerzos teóricos en la defensa de una visión renovada del socialismo adecuada a «una nueva fase del capitalismo», donde las vías democráticas al socialismo –características de los años setenta– corresponderían a la «fase del capitalismo monopolista de Estado», mientras que sus esfuerzos actuales se orientarían «a redefinir nuestra estrategia de transformación de la sociedad española en el marco de la fase del capitalismo global»[81].

En relación a la estrategia hacia el socialismo defendida por el PCE durante el periodo analizado, es significativo que se presenta en términos agregativos, donde la transición al socialismo sería la consecuencia de un periodo de fuerte movilización social que culminaría en un triunfo electoral, desde el que impulsar un proceso acumulativo de reformas que remiten a la idea de revolución por fases (ASDA, proceso constituyente, III República), donde el socialismo sería la culminación futura de una serie de cambios, dándose la profundización democrática primero y el socialismo «después».

A diferencia de los cambios señalados, el concepto de comunismo que defiende el PCE se referencia durante todo el periodo analizado, como lo hicieran Marx y Engels en La ideología alemana (1845): «Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de las cosas actual», permitiendo al PCE presentar al comunismo contemporáneo como un continuador de una línea en el tiempo que se inicia con la Revolución francesa (1789)[82], las

revoluciones liberales de 1830 y 1848, la Comuna de París de 1871, la Revolución de octubre de 1917, la derrota del fascismo tras la Segunda Guerra Mundial y las luchas anticoloniales, hasta llegar a las reivindicaciones ecologistas, feministas y pacifistas[83], donde el comunismo se entiende como la generalización máxima de los derechos humanos.

Las referencias al PCE como un partido republicano son omnipresentes y estructurales en el discurso político comunista durante el periodo analizado. La apuesta por la república tiene en el discurso pronunciado por Julio Anguita durante el mitin de la Fiesta del PCE el 14 de septiembre de 1996 una fecha señalada, discurso donde el secretario general afirmó que, si bien el PCE «aparcó transitoriamente» la reivindicación de la república como forma de Estado, de si la «degradación democrática continúa», el Partido Comunista «se considerará libre de consensos […] y pondrá en primera línea contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política: Estado federal, derecho de autodeterminación y la República como forma de Estado», para afirmar: «El PCE es republicano»[84].

Al asumir los postulados republicanos como centrales en su ideología, los comunistas lo hacen desde una reivindicación que se articula en el marco de una regeneración de España como un nuevo «proyecto de país»[85]. Esto se evidencia en un discurso que pone el acento en el agotamiento del modelo de Estado surgido de la Transición (Régimen del 78) y la necesidad de una regeneración política, económica y cultural, ante una realidad donde los derechos recogidos en la Constitución, como «el derecho al trabajo, al pleno empleo, sanidad pública, derecho a la vivienda, pensiones adecuadas […] los principios de igualdad, solidaridad, justicia, han sido vulnerados, ignorados u olvidados»; siendo responsables de esa situación «poderes económicos, fuerzas políticas, grupos sociales y colectivos enquistados en los aparatos del Estado, con prácticas anticonstitucionales»[86] que impiden el desarrollo democrático del país. Las demandas democratizadoras y de recuperación de la soberanía pasan por la defensa de un nuevo tipo de Estado, expresión de un nuevo proyecto de país que hace de la reivindicación de una «III República»[87] un eje medular en la propuesta comunista.

Así, la reivindicación de la III República se plantea como la alternativa del PCE al Estado surgido del Régimen del 78[88], constituyendo la base del modelo de Estado defendido por los comunistas desde una introyección nosotros / ellos de dos ideas de país diferentes, la defendida por el bipartidismo y los poderes

económicos –donde la monarquía constituye su «piedra angular»[89]– o la III República, desde las que desplegar una «auténtica democracia»[90]. Solo desde la propuesta republicana podrá construirse un Estado «plurinacional y plurirregional»[91], donde puedan garantizarse «los mismos derechos económicos y sociales a la ciudadanía independientemente del territorio donde resida»; siendo la III República el marco desde el que avanzar hacia «la planificación de la economía en función de las necesidades sociales y ecológicamente sostenible, basada en un amplio sector económico público controlado democráticamente», que avance hacia «la democracia participativa y el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación»[92], evitando que «tanto las burguesías periféricas como la central hegemonicen los sentimientos nacionales en beneficio propio»[93], y superando «el déficit democrático de la Constitución del 78»[94].

Pero la alternativa republicana necesita de una legitimación histórica que se encuentra en la II República, cuya memoria es reivindicada a través de la invocación de hitos históricos como el 14 de Abril, la Revolución de Octubre de 1934, el triunfo del Frente Popular en 1936 y la creación de la JSU, reivindicando el papel heroico del PCE en la Guerra Civil, y siendo continua la reivindicación de los dirigentes comunistas históricos, como José Díaz y Pasionaria[95], con los cuales el PCE se presenta como el partido político que de manera más consecuente y eficaz defendió la II República, esfuerzo que tiene en la creación de la Secretaría de Memoria Histórica una herramienta central[96]. Así, la III República se presenta como la continuación histórica de los avances democráticos, económicos y sociales interrumpidos por el fascismo y la dictadura franquista, donde la historia del PCE legitima el carácter republicano del partido en la actualidad, alejado ya de cualquier referencia a los pactos derivados de la Transición.

Un último componente del discurso republicano se relaciona con la estrategia de transición hacia la República federal defendida, la cual asume diferentes vías. En un primer momento se relaciona con «una necesaria reforma de la Constitución hacia un modelo federal y solidario», que a través «de la voluntad popular expresada en referéndum»[97] elija entre monarquía o república y ponga las bases «para un pacto federal […] que culmine en una Constitución federal»[98], propuesta que ya en plena crisis económica se alcanzaría proponiendo «la convocatoria de referéndum en el que se decida la forma de Estado y que permita abrir el debate para crear una Asamblea Constituyente de la III República[99]»; ese «abrir el debate» culmina con la necesidad de apertura de un «proceso constituyente» que sea expresión «de la salida a la crisis por medio de

la lucha de clases», como vía para alcanzar la República federal solidaria propuesta por el PCE a la «crisis de régimen[100]»; señalando que «la cuestión republicana no es una reivindicación atemporal basada en lo preferible o no de la elección por sufragio del Jefe de Estado […] es una cuestión fundamental del Programa del Partido transversal a todas las reivindicaciones», vinculando la cuestión republicana a la recuperación de la «soberanía […] para avanzar hacia el socialismo»[101], sustituyendo la fórmula proceso constituyente por la propuesta de reforma constitucional, como vía para alcanzar la república.

La defensa del Estado federal adopta la fórmula de República Federal Solidaria en el Comité Federal ampliado celebrado el 21 de febrero de 1997, el cual pretende adaptar la propuesta federal del PCE al nuevo contexto marcado por el proceso de globalización económica, donde «las clases dominantes oscilan entre una centralización que niega la soberanía popular y los confederalismos asimétricos que incrementan los desequilibrios»[102]. Así, a lo largo del trayecto analizado, la propuesta de Estado federal pretende «superar la indefinición» en la adopción de un modelo de Estado en un contexto de crisis de la soberanía de los Estados nación por la globalización, del Estado autonómico frente a las reclamaciones nacionalistas o recentralizadoras y de la defensa de un modelo de construcción europea alternativo al Tratado de la UE[103], más conocido como Tratado de Maastricht (1993).

Esta concepción federalista del Estado responde también a la necesidad del PCE de afrontar una coyuntura política nacional marcada por las tensiones territoriales producidas en el marco de discusión del conocido como Plan Ibarretxe (2004)[104], la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y el Referéndum de Independencia de Cataluña (2017), debates que terminan generando fuertes tensiones dentro de IU con Ezker-Batua Berdeak (EBB), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), referentes de dicha organización en el País Vasco y Cataluña.

Con el Estado federal, el PCE toma posición frente a la creciente polarización social y al conflicto territorial surgido en el contexto de la crisis de 2008, intentando responder a las demandas sociales que el Partido Comunista consideraba centrales en aquel momento: la defensa de un Estado social avanzado, el reconocimiento del derecho de autodeterminación como solución democrática a la cuestión nacional y la adopción de la forma de Estado republicano[105].

Con el carácter polisémico de la fórmula, el PCE pretende compaginar la defensa de una posición unitaria del Estado con planteamientos más cercanos a la izquierda nacionalista, con la que el Partido Comunista e IU mantienen relaciones complejas pero estrechas, así como la flexibilidad de incluir en su discurso político nuevas demandas que surgen con fuerza en el contexto de las movilizaciones sociales de 2010-2014, como son los discursos soberanistas o de radicalidad democrática. Así, la propuesta de Estado federal también sería expresión de un discurso soberanista frente a las imposiciones de la UE, como la Reforma constitucional española de 2011, que modificó el artículo 135, pasando el PCE a adoptar un modelo de Estado republicano, soberano y federal[106]; o la adopción de la fórmula de república federal solidaria y participativa, como «fórmula que ensanche la democracia radical y la participación popular a través de la democracia participativa»[107].

Por último, los cambios en el discurso federal del PCE alcanzaron a la fórmula para lograr dichos cambios, que parte de una estrategia basada en la extensión del marco de la Constitución del 78 a través de su reforma[108], a la afirmación de «la actual Constitución Española ya no nos vale»[109], y a la reivindicación de la apertura de un proceso constituyente en el marco de una política rupturista.

Las estrategias discursivas del PCE (1996-2021)

Siguiendo con las concepciones de Göran Therborn, las ideologías vienen a funcionar como una poderosa «incitación a la acción», y que, en el caso de las ideologías de oposición, «su poder movilizador entraña procesos reflexivos que van de la prefiguración de objetivos al cálculo de posibilidades»[110]. Lo anterior nos permite entender cómo la construcción de una nueva identidad comunista por parte del PCE bebe de una serie de conceptos políticos sometidos a revisiones a lo largo del periodo analizado, cuyos factores de cambio responden a tres coordenadas: la primera está relacionada con la crisis económica mundial, a raíz de la cual España acabó siendo uno de los países más afectados como consecuencia del fin del «boom inmobiliario» y del crecimiento económico; la segunda con las grandes transformaciones que tuvieron lugar en la estructura de clases, que terminarían modificando el sustrato sociológico y cultural de la izquierda, incluido el PCE; y la tercera con el fin del bipartidismo

y la irrupción de nuevos partidos que desplazan a IU como la principal referencia electoral de la izquierda radical a nivel nacional.

Durante el periodo analizado, el PCE ha seguido tres estrategias discursivas diferentes: estrategia antiglobalizadora (1996-2007), estrategia rupturista (2008-2016) y estrategia de unidad popular (2017-2021).

a) La estrategia discursiva antiglobalizadora (1996-2007)

Durante dicho periodo se produce la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones celebradas el 3 de marzo de 1996, siendo elegido presidente José María Aznar y alcanzado IU su mejor resultado electoral en unas generales, lo que afianzó su posición como tercera fuerza política del país. Los conflictos internos dentro de IU se profundizaron con la creación por parte de la corriente crítica Nueva Izquierda, de un nuevo partido, el Partido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI), el cual abandonaría IU en 1997 acudiendo a las elecciones municipales y autonómicas de 1999 con el PSOE. Mientras, la federación gallega de IU abandonaba la organización al acudir con el PSOE en las elecciones de 1997, mientras en Cataluña, Iniciativa per Catalunya (IC) –referente catalán de IU– se desvinculaba de esta, creando el sector más cercano al PCE el PSUC ViU, formando EUiA como nuevo referente catalán de IU.

En diciembre de 1998 se celebra el XV Congreso del PCE, con el que Julio Anguita finaliza su etapa como secretario general, siendo elegido como su sustituto el dirigente catalán Francisco Frutos[111]. Los problemas de salud de Anguita le obligan a abandonar la primera línea, siendo elegido Frutos como candidato a la presidencia por parte de IU en las elecciones generales del año 2000.

Los acuerdos preelectorales alcanzados con el PSOE para desalojar al PP del Gobierno tuvieron unas consecuencias nefastas en términos electorales, obteniendo José María Aznar la mayoría absoluta, lo cual supuso para IU un rotundo fracaso electoral. Es en ese contexto en el que se produce el relevo de Julio Anguita al frente de IU en la VI Asamblea Federal (2000), eligiendo por escaso margen a Gaspar Llamazares como coordinador frente a Francisco Frutos, el candidato apoyado por el PCE, acudiendo sin embargo ambos dirigentes en la

misma lista para la reelección de Frutos como secretario general durante el XVI Congreso celebrado en marzo de 2002, evento en el que se produce el abandono del PCE de un sector crítico liderado por la diputada Ángeles Maestro.

Durante el periodo de Gaspar Llamazares como coordinador se produce un acercamiento al PSOE, sufriendo de nuevo una fuerte derrota electoral en 2004, en que se lograron tan solo cinco diputados en coalición con ICV, elecciones en las que es elegido presidente el candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados del 11 de marzo. En un contexto de fuertes discrepancias entre las direcciones de IU y el PCE, los comunistas emprenden la política que denominan como recuperación del PCE con la celebración de la Conferencia de organización en 2004 y la realización del XVII Congreso en 2005, reeligiendo a Frutos como secretario general, reforzando la dirección con Felipe Alcaraz como presidente ejecutivo y Julio Anguita como responsable de la elaboración del Manifiesto Programa.

IU obtendría sus peores resultados en las elecciones generales de 2008, con tan solo dos diputados en coalición con ICV, las cuales revalidan el triunfo de Rodríguez Zapatero. Tras dicho fracaso, Gaspar Llamazares anuncia su intención de abandonar la coordinación, convocándose en 2008 la IX Asamblea Federal.

El marco de diagnóstico nos presenta a la globalización capitalista como el problema principal, siendo la antiglobalización el motivo opositor central:

La globalización neoliberal es un proceso que imprime una nueva forma al imperialismo, se desarrolla dentro de un marco con dimensiones ideológicas […] en particular con graves retrocesos en los mecanismos de la democracia representativa de la estructura tradicional del Estado-nación y sustituyendo la concepción de ciudadano por la de consumidor, que tiene carácter transitorio y reversible, y que exige la confrontación social[112].

Globalización y antineoliberalismo funcionan como sinónimos donde «la globalización neoliberal económica capitalista se presenta como el nuevo totalitarismo mundial», siendo descrita como un programa político, económico, social y cultural injusto, en que «la globalización neoliberal económica se expresa como un salto cualitativo del capitalismo que […] favorece políticas de

maximización del beneficio y de mayor concentración de la riqueza»; doctrina que conduce a una reducción de la democracia, dado que «el capitalismo globalizado marca la pauta del desarrollo hacia un modelo de sociedad donde los intereses generales se ven sometidos al interés de la sociedad de mercado basada en la hegemonía de los poderes financieros y las transnacionales». Todo ello acompañado «de un paulatino empobrecimiento cultural» y la progresiva «implantación de sistemas represivos que se traducen en pobreza, hambruna y miseria en el mundo, éxodos y migraciones y situaciones desesperadas que fomentan la violencia»[113].

Los responsables de esas causas, los antagonistas, serían a nivel global el poder financiero internacional, cuyas políticas económicas se enmarcan en el FMI, el BM y la OMC; y estructuras internacionales como la UE o MERCOSUR, con una vertiente bélica protagonizada por la OTAN, lo que en términos geopolíticos es descrito como un «mundo unipolar liderado por los EEUU y que cuenta con la complicidad servil de la Unión Europea, la propia Rusia y los países del Este y Centro de Europa»[114]. A nivel nacional, como antagonista principal se señala al «sector financiero tradicional en España», reforzado por «el proceso de concentración bancaria y las privatizaciones» llevadas a cabo durante los gobiernos de José María Aznar (1996-2004), cuyas expresiones políticas señalan «a la tercera vía, así como las fuerzas políticas conservadoras», en referencia vaga a los sectores más liberales del PSOE, por un lado, y al PP, junto al nacionalismo conservador de CiU y PNV, por otro, partidos estos últimos que apoyaron al Gobierno de Aznar en su primera legislatura (1996-2000).

El marco antiglobalizador postula como problemas aspectos tanto a escala global como nacional, señalando cuatro consecuencias negativas principales. Se hace mención especial al belicismo y los riesgos que para la paz tiene la globalización neoliberal, a la cual se la caracteriza como «nuevo imperialismo»[115], que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 articula «un selectivo e hipócrita derecho de injerencia por motivos humanitarios» que supone una escala militarista, como los bombardeos a Serbia (1999), las guerras de Afganistán (2001) y la invasión de Iraq (2003); así como las amenazas imperialistas hacia América Latina por medio del Plan Colombia (1999)[116].

En términos sociales, se señala como primer problema la precariedad laboral y sus consecuencias para la sociedad española y, en particular, para la clase trabajadora. Así, el proceso de la globalización capitalista se sustenta en la «fragmentación del conocimiento, la fragmentación de la producción y la

privatización de los servicios públicos […] facilitado por el avance de las nuevas tecnologías y la revolución de las comunicaciones en manos del capital». Todo ello planteando «nuevos retos para el mundo del trabajo» que son descritos con toda crudeza:

El movimiento obrero está viviendo una profunda crisis de identidad, al igual que la izquierda en general, que vertiginosamente ha ido plasmándose con el paso de una sociedad material, basada en la producción pesada y la satisfacción de las necesidades primarias y el esfuerzo en el trabajo, a una sociedad más inmaterial sustentada en la revolución de las comunicaciones, en la fragmentación del conocimiento y en la translocalización fraccionada del proceso productivo, que está dando lugar a la desmaterialización, a pasos agigantados, del trabajo[117].

Estas transformaciones en las relaciones laborales suponen una amenaza para la sociedad, pero también para la base social tradicional del PCE, al entender que «para el movimiento obrero, la desintegración de las formas colectivas de organización de los trabajadores, la precariedad en el trabajo y la exclusión de amplísimos sectores de trabajadores conlleva serios problemas estratégicos para la izquierda», al derrumbarse «el pilar sobre el que identificaba su análisis social y, podríamos decir, su identidad: El trabajo», para lo cual la viabilidad futura del sindicalismo y de la propia izquierda anticapitalista dependerá de su capacidad de «reflexionar […] y buscar nuevos métodos de organización[118]», siendo para el PCE una preocupación constante cómo conectar su organización con esta nueva clase trabajadora marcada por la precariedad laboral.

La globalización capitalista estaría en la base del aumento de la desigualdad y el «rearme del patriarcado», siendo «empujadas las mujeres hacia el empobrecimiento» y a una profundización «de la violencia estructural dirigida contra las mujeres», donde el neoliberalismo niega «la contribución del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres», emplazando al PCE a la realización de un trabajo teórico dirigido a «redefinir conceptos como productividad, trabajo, empleo y valor»[119].

Por último, la globalización capitalista conduce a la «crisis ecológica que planea

en la humanidad […] cuyo ecosistema terrestre está amenazado por la sobreexplotación de recursos naturales […] y por la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres», planteando el reto de pensar una nueva forma de socialismo y afirmando que «tanto el capitalismo como el socialismo son ramas de un mismo árbol: la civilización moderna. De ella se derivan la técnica, el productivismo y el crecimiento desaforado»[120], referencias con las que el PCE orienta su interlocución política a través del ecologismo, el feminismo y las relaciones Norte-Sur.

El marco de pronóstico plantea, en consonancia con lo anterior, una alternativa articulada que integre las tradiciones del movimiento obrero con las aportaciones del ecologismo político y el feminismo junto a la emergencia de la lucha por la paz, denominada alternativa roja, verde y violeta[121].

Durante la estrategia antiglobalizadora, no aparecen reivindicaciones expresadas de forma programática basadas en la coyuntura social y política, las cuales se canalizan a través de IU, sino que se opta por planteamientos en los que el PCE ofrece un análisis de las causas profundas de los límites del capitalismo y de la necesidad de un socialismo que «tome el programa de fondo como referencia»[122]; así como ofrecer una alternativa a la crisis del movimiento obrero y de las propuestas clasistas centradas en el trabajo, con una aproximación al movimiento antiglobalización, el feminismo y el ecologismo.

Para ello el PCE opta por una propuesta que tiene en la escala global su marco espacial de referencia, llamando a «construir una alternativa desde la izquierda a la globalización»[123]; cuyo mayor grado de concreción se alcanza en las referencias al impulso de una izquierda europea[124], todo en un contexto marcado por la creación del Foro Social Europeo en Florencia en 2002, la implicación en las manifestaciones contra la invasión de Iraq y el apoyo prestado por el Gobierno de José María Aznar (2003), la creación del Partido de Izquierda Europea (PIE) en 2004 y la campaña en favor del NO en el referéndum sobre el Tratado que establece una Constitución para Europa celebrado en 2005: movilizaciones y campañas donde el PCE planteó un trabajo político cuyo eje era la oposición a la globalización y la guerra y la defensa de los derechos humanos.

En relación a lo dicho hasta ahora, la estrategia antiglobalizadora plantea un nosotros, definido por el movimiento antiglobalización presentado como el «nuevo sujeto político internacional»[125], cuya importancia era expuesta en

estos términos:

En este contexto, el movimiento de movimientos, el llamado movimiento antiglobalización o altermundista, adquiere una dimensión que va más allá de lo coyuntural y que define opciones de futuro «de los de abajo». En primer lugar significa la emergencia de un sujeto político, social y cultural que actúa globalmente y cuya composición es transnacional; en segundo lugar, el movimiento incorpora una crítica razonada al modelo neoliberal y a la guerra como uno de los fundamentos de estas políticas. En tercer lugar está haciendo posible una coordinación de las luchas, está creando redes de contrainformación y, lo que es más importante, empieza a construirse un programa alternativo. Se trata, en definitiva, de la gran novedad del presente y un instrumento político que puede convertirse en un referente antagónico a este nuevo orden internacional que están configurando las potencias imperialistas. Para la izquierda alternativa y, especialmente, para las fuerzas que luchamos por el socialismo este movimiento es un desafío y una oportunidad de grandes dimensiones[126].

En la definición de ese nosotros, los comunistas se orientan a «propiciar una sólida alianza entre el movimiento de los movimientos y el movimiento obrero», que debe ir consolidando «una alternativa al neoliberalismo y a la guerra»[127].

Finalmente, el marco de motivación ofrece un repertorio de acción dirigido a la consecución de la unidad de la izquierda, entendida como la síntesis entre «las viejas tradiciones de la izquierda con las aspiraciones emancipatorias relacionadas con los nuevos movimientos sociales, concretado actualmente en el movimiento de resistencia al proceso de globalización capitalista». Sobre esta base, se hace una apuesta por movilizaciones que combinen a nivel nacional e internacional «el recurso a la huelga de masas, a formas de desobediencia civil y en general a movilizaciones de carácter internacional»[128] que configuran los repertorios de acción prioritarios para el PCE; destacando las manifestaciones estudiantiles contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001, la huelga general de 2002 convocada por CCOO y UGT contra la reforma del subsidio de empleo (conocido como el decretazo), las manifestaciones del movimiento social Nunca Máis contrarias a la gestión del Gobierno por el desastre medioambiental provocado por el hundimiento del petrolero Prestige (2002) y, en particular, el

movimiento contrario a la Guerra de Iraq (2003).

Dado el fracaso de las elecciones generales del 2000 y de los acuerdos electorales alcanzados con el PSOE, el PCE prioriza la movilización social como estrategia de oposición al PP, desarrollando campañas propias desde las que participar en las movilizaciones con las que pretende poner en práctica la política de Recuperar el PCE, aprobada en la Conferencia de organización de 2004 y el XVII Congreso de 2005, en un contexto de creciente conflicto con la dirección de IU bajo la coordinación de Gaspar Llamazares.

Esta síntesis de la estrategia antiglobalizadora con la opositora al Gobierno del PP permite a los comunistas definir «los cuatro campos de acción» desde los que llevar a cabo la unidad de la izquierda: «El movimiento obrero; el mundo de la intelectualidad, la cultura y la creación; el mundo de la juventud (estudiante y potencialmente trabajadora); y el mundo de la mujer, en su doble vertiente: lucha por la igualdad real y aportación, desde los valores de la mujer, a la política[129]». Campos de acción para «desarrollar la convergencia de las fuerzas anticapitalistas y contrarias al neoliberalismo […] siendo IU el núcleo de la política de alianzas»[130].

b) La estrategia rupturista (2008-2016)

Con el marco rupturista el PCE adaptaba su discurso político a la crisis económica que vivió España a partir de 2008, crisis que terminó dando origen al conflicto social y la crisis política más importante que vivió el país desde la década de los setenta del siglo pasado.

La crisis internacional golpeó en especial a Europa meridional, a la que siguió una fuerte crisis en la UE y, en especial, en la zona euro, la cual, bajo la generalización de políticas de ajuste salarial y recortes del gasto público, afectó con especial intensidad a España, cuya economía dependiente del sector inmobiliario sufrió un hundimiento que puso fin al ciclo expansivo del periodo anterior. En términos políticos, la crisis supuso el fin del bipartidismo, la agudización de la crisis territorial y la irrupción de nuevas fuerzas políticas que modificaron profundamente a la izquierda radical, periodo en el que se produce un importante cambio dentro del Partido Comunista, bajo el protagonismo de

una nueva generación de militantes provenientes de la UJCE.

El vector antineoliberalismo / antiglobalización se reformula en clave marxista, reactivando en torno al despliegue de campañas contra la crisis la recuperación de su papel hegemónico dentro de IU bajo el llamamiento a la refundación de la izquierda y la recomposición de las relaciones con CCOO bajo la consigna de la huelga general. Así, el PCE convoca en junio de 2008 la Conferencia política que sentará las bases para el giro discursivo y el triunfo de las tesis comunistas en la IX Asamblea de IU celebrada ese año, siendo sustituido Gaspar Llamazares por el dirigente castellano manchego Cayo Lara, quien es apoyado por el PCE en torno al Documento de los cien.

Recuperada la hegemonía en IU y normalizadas las relaciones con CCOO con la llegada de Fernández Toxo a la Secretaría General del sindicato en el IX Congreso (2008), se celebra en noviembre de 2009 la Conferencia de organización y el XVIII Congreso del PCE, siendo elegido secretario general el dirigente andaluz José Luis Centella, tras el cual tiene lugar el acto por la Refundación de la izquierda (2009); la celebración de la I Asamblea de Refundación de IU en junio de 2010; la recuperación de la Fiesta del PCE en San Fernando de Henares (Madrid) en septiembre de ese año, con la presencia de los máximos líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO); y el apoyo a la huelga general contra la Reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero el 29 de septiembre de 2010. Las elecciones generales de 2011 dieron la mayoría absoluta al Partido Popular con Mariano Rajoy como presidente, y en ellas Izquierda Unida presentó una amplia alianza de fuerzas de izquierdas y ecologistas, obteniendo 11 diputados, nueve más que en las anteriores elecciones[131].

La crisis económica, el crecimiento del paro y los efectos de las políticas de ajuste despiertan un importante rechazo social, impulsando un proceso de movilizaciones sociales (2010-2015), generalizándose las plataformas de afectados de las hipotecas (PAH), así como iniciativas como Juventud sin Futuro (JSF) o Democracia Real Ya (DRY), que desembocan en las manifestaciones del 15 de mayo de 2011 que dieron lugar al conocido como Movimiento 15M. Este ciclo movilizador continúa en 2012 con la convocatoria de dos huelgas generales (29 de marzo y 14 de noviembre), las manifestaciones contrarias a la Ley del Aborto impulsada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón (PP) en 2014, las Marchas de la dignidad que concentraron en Madrid a un millón de personas el 22 de marzo de 2014, pasando por las manifestaciones en favor de la

república organizadas tras la abdicación de Juan Carlos I como rey de España en favor de Felipe VI, el 2 de junio de ese año. En consonancia con los acontecimientos, el PCE adapta su discurso político al marco rupturista con el llamamiento a impulsar un Proceso constituyente realizado durante el XVIII Congreso (2009), la aprobación de la Alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis (ASDA) en la Conferencia política de 2012 y las bases para la política de confluencia en el XIX Congreso (2013).

Las elecciones europeas celebradas el 25 de mayo de 2014[132] suponen un punto de inflexión con la irrupción de Podemos[133], el cual obtiene más de un millón de votos y cinco eurodiputados, que desembocarán en la pérdida del predominio de IU dentro de la izquierda radical, e inaugurarán un intenso debate dentro de la federación de izquierdas que elige a Alberto Garzón como coordinador general de IU en mayo de 2016. La crisis social deriva en una crisis política que pone fin al predominio institucional del PSOE y el PP en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, que dan el triunfo a Mariano Rajoy con una significativa pérdida de votos del PP y el PSOE, y en las que Podemos, en unión con diferentes confluencias territoriales, obtiene 69 diputados e IU acude como Izquierda Unida-Unidad Popular en Común (IU-UP), logrando dos diputados. Ambas organizaciones acuden unidas junto a otros colectivos municipalistas bajo las candidaturas de unidad popular (conocidas como CUP’s), consiguiendo un notable éxito en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, al alcanzar las alcaldías de Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, o Cádiz, entre otros importantes municipios en los que son elegidos decenas de concejales comunistas. Ante la imposibilidad de Mariano Rajoy de formar gobierno y el fracaso de la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, se convocan elecciones generales el 26 de junio de 2016, en las cuales el PP incrementa sus apoyos, pero sin obtener mayoría absoluta, y en las que Podemos e IU acuden por primera vez juntos bajo la candidatura de Unidos Podemos (UP), logrando 71 escaños, pero perdiendo un millón de votos respecto a los anteriores comicios.

El marco de diagnóstico postula un modelo explicativo esencialmente económico, señalando como problema principal de la sociedad española la crisis económica. El PCE presenta un detallado análisis marxista de la crisis, la cual tiene «dos particularidades» respecto a la crisis de otros países europeos, el «paro crónico y la dependencia exterior», las cuales resumen el «fracaso de la modernización capitalista española»[134].

Para el PCE la crisis adquiere un profundo significado político, un verdadero «fin de ciclo del capitalismo español resultante de la Transición. Fin de ciclo que supone un agotamiento del modelo de acumulación dominante en nuestro país y de la superestructura política e institucional heredada del postfranquismo»[135]. Este concepto de fin de ciclo sirve al PCE para señalar el modo en que las políticas de recortes sociales no son algo coyuntural, sino la forma con la que el «bloque de poder pretende […] una salida a los problemas de acumulación […] sobre bases jurídicas y políticas nuevas», diferentes a las «heredadas de la Transición»[136].

A la dimensión nacional del problema, se une la adopción de las políticas de ajuste impuestas por la UE, que suponen una fuerte crisis de Estado en España «que acelera la descomposición de la superestructura jurídico-política heredada de la Transición». Crisis que para el PCE adquiere cuatro dimensiones: «la crisis del Estado de las autonomías» frente a las demandas nacionalistas, por un lado, y recentralizadoras, por otro; «la crisis del Estado de derecho» y la adopción de una legislación represora con la que contener el conflicto social; «la crisis del Estado social» ante las políticas de recorte del gasto público; y la «crisis del modelo de integración europea» ante la crisis de la zona euro[137].

En la fase rupturista, la causa de la crisis es el Régimen del 78, definido como la forma que asume el capitalismo español tras la Transición, que se presenta «en lo económico [bajo] el predominio de un modelo de capitalismo inmobiliario y financiero», en lo «político marcado por un bipartidismo imperfecto complementado con los nacionalismos periféricos» […] en lo «territorial se impuso un modelo de descentralización imperfecta», […] en «lo social y laboral», por la precariedad laboral estructural, y «[…] la permanencia de fuertes vestigios del franquismo»[138].

Junto a la dimensión nacional, los comunistas acuden a explicaciones de escala internacional para analizar las causas de la crisis, acudiendo a la estructura teórica centro / periferia, que «tiene que ver con el lugar que España ocupa en la división del trabajo dentro del bloque capitalista de la UE», la cual se ha especializado «en actividades de bajo nivel tecnológico» donde «el capital de los países centrales y el capital hegemónico alemán logra el beneficio a través de la exportación al resto de la Unión favorecido por las limitaciones derivadas de la moneda única y las políticas del BCE». Así, «el capital español se especializa en la extracción de plusvalía absoluta, en la intermediación de los flujos financieros que provienen de las zonas centrales y en el saqueo de los salarios del futuro y

de los recursos naturales y públicos»[139].

En cuanto a los antagonistas, el PCE realiza una diagnosis acudiendo al concepto gramsciano de bloque de poder, el cual es definido bajo un modelo explicativo estructuralista:

Fracciones de capital que han generado una alianza de clase entre el sector financiero-prestación de servicios-construcción, al que hay que sumar el nuevo sector de distribución comercial, con empresas tan potentes como El Corte Inglés o Inditex, y el cada vez más importante sector alimentario. Todos ellos forman el núcleo central del capitalismo español que conforman el bloque de poder en España, que, en unión con el capital financiero internacional y las grandes Empresas Transnacionales del automóvil y de la química, componen la alianza de clase dominante en nuestro país[140].

Asimismo, el bipartidismo constituye la forma política en la que descansaría el Régimen del 78, siendo el proceso de integración europeo, y en particular la entrada en el euro, el marco en el que sustenta su hegemonía[141]. Así, la crisis del proyecto europeo y las especiales características que asume la crisis en España permiten afirmar al PCE que España vive en aquel momento una crisis de régimen[142], cuya alternativa pasa por la asunción de un escenario rupturista, el cual se expone de manera directa a la sociedad mediante un programa propio.

En cuanto a marco de pronóstico, si al inicio de la crisis, durante 2009 y 2010, el PCE aprobó sus primeras propuestas alternativas postulando en ella soluciones esencialmente económicas[143], a partir de 2012 las mismas se desarrollaron en términos políticos con la aprobación de la Alternativa Social, Democrática y Anticapitalista a la crisis (ASDA)[144], propuesta en la que el PCE ofrecía una política de amplio acuerdo a todos los sectores afectados por la crisis en clave rupturista, pasando el concepto crisis de entenderse fundamentalmente como crisis económica a analizarse como crisis de régimen. El PCE define su propuesta en los siguientes términos:

Es una Alternativa Social, porque el PCE considera que el objetivo prioritario para este periodo es poner la economía, todas las fuerzas productivas de España al servicio de los trabajadores y las trabajadoras. Esto significa, en un primer momento, centrarnos en la eliminación del paro […].

Es una Alternativa Democrática, debido a que la salida neoliberal a la crisis plantea un modelo oligárquico puro centrado en la imposición de planes de ajuste sin oposición alguna. Defensa, por tanto, de un modelo basado en la democracia participativa, que permita a los sectores populares ganar más poder y así derrotar a la oligarquía y su modelo político y económico.

Es una Alternativa Anticapitalista, porque la salida neoliberal a la crisis necesita de más ajustes, menos salarios, menos democracia y menos derechos sociales. El paro, la precariedad laboral, la falta de políticas sociales, los problemas medioambientales y el patriarcado son consustanciales al modelo capitalista español, que solo puede salir de su crisis restaurando su tasa de ganancia a costa de destruir derechos y libertades. La definitiva superación de este modelo requiere de un marco político de transformación en un sentido socialista[145].

En términos políticos, el PCE expone su alternativa remitiendo a una concepción de revolución por fases, donde las movilizaciones contra los efectos inmediatos de la crisis se relacionan con cambios en la estructura política y económica del país bajo una orientación socialista, alternativa que se desarrollaría a través de tres etapas relacionadas:

– A corto plazo, la acumulación progresiva de fuerzas a partir de las luchas contra los programas de ajuste y los recortes sociales, avanzando en la construcción de poder popular. Y por medio de una salida social a la crisis que resuelva las demandas más acuciantes de la clase trabajadora, en torno a un programa de emergencia y de mínimos. Un proceso de ruptura democrática que posibilite la consolidación de transformaciones políticas y económicas dirigidas a la construcción de una democracia radical.

– A medio plazo, consolidar un proceso de profundas transformaciones dirigidas a la construcción de una democracia económica, política y social, en torno a un proceso constituyente hacia la Tercera República, y por una salida social a la

crisis.

– Y a largo plazo la superación del Estado burgués, el logro del socialismo y el comunismo[146].

Con lo anterior, el PCE propone un escenario rupturista para la solución a la crisis de régimen, al considerar que existe una brecha insalvable «entre las reivindicaciones de más derechos sociales y políticos y la capacidad del régimen para ofrecerlo»[147].

La prognosis en el campo de los protagonistas viene definida tras un análisis marxista de las clases sociales dentro de la sociedad española, donde la clase trabajadora asume una centralidad, pero sumergida tras una pluralidad de realidades, dado que se encuentra «enormemente fragmentada» entre «diferencias de género» (las mujeres «predominan en las ramas más precarizadas»), «las diferencias de edad» (al existir dentro de la clase trabajadora «una ruptura generacional» entre sectores con ciertos derechos garantizados y grados de protección sindical que desaparecen entre los más jóvenes), «los inmigrantes y diferencias de nacionalidad» y las diferencias entre trabajadores por «diferentes niveles de formación»[148]. Esta heterogeneidad tiene importantes consecuencias políticas:

La existencia de diferentes tipos de propiedad y de un modelo económico basado en la fragmentación del proceso productivo conduce a una diversificación del conjunto salarial que da lugar a múltiples realidades en las que se desarrolla una conciencia y subjetividad plural, como consecuencia de las diversas formas en las que se expresa el conflicto social en cada una de las capas sociales […] Esta heterogeneidad explica la existencia de una gran diversidad ideológica dentro de las capas populares, lo que hace de la concepción de bloque el marco más adecuado para esta fase de la lucha de clases[149].

El PCE propone la «formación de un bloque social y político de carácter alternativo» definido «por la clase trabajadora y los demás sectores populares, capaces de desarrollar las transformaciones económicas y políticas necesarias

para el logro de una salida social a la crisis, con los que construir un nuevo proceso constituyente en nuestro país»[150]; base fundamental «en la que materializar una gran alianza antineoliberal que tiene como expresiones principales, junto al PCE, el movimiento obrero y sindical, los movimientos sociales y la izquierda transformadora»[151].

Por último, si el bloque social y alternativo «hace referencia a los sectores políticos, sociales y sindicales que protagonizan la lucha contra los recortes», el PCE señala en términos estratégicos «a las clases sociales principales llamadas a protagonizar un nuevo proceso constituyente […] fuerza motriz de la lucha antineoliberal formada entre la clase obrera tradicional, el nuevo asalariado urbano [constituido por la nueva clase trabajadora del sector servicios] y los/técnicos/as y profesionales asalariados/as», formulando así una compleja propuesta de política de alianzas cuyo detalle contrasta con la propuesta realizada en el escenario antiglobalizador.

El marco de motivación vendrá definido por la propuesta de refundación de la izquierda, con la que el PCE pretende adaptar su política de alianzas (política de convergencia) a la coyuntura de movilizaciones y crisis social que vivía el país, ante «la cuestión de transformar el malestar frente a los desastres del capitalismo en una alternativa creíble para amplios sectores sociales, que IU no ha podido expresar hasta ahora con la amplitud que se necesita»[152].

La propuesta de refundación de la izquierda se fue adaptando a una coyuntura de crisis sociales, movilizaciones y ciclos electorales, apreciando hasta tres fases diferentes en su desarrollo. Así, podemos distinguir una primera fase correspondiente al inicio de la crisis y del conflicto social, la cual se inicia con la Conferencia política de junio de 2008 y llega hasta la huelga general del 29 de septiembre de 2010, donde la política de refundación de la izquierda se entiende como la propuesta de refundación de Izquierda Unida, contexto en el que tiene lugar la I Asamblea de Refundación de IU, finalizada el 27 de junio de 2010 con una manifestación en Madrid a la que asistieron miles de personas. Una segunda fase corresponde al auge del ciclo de movilizaciones iniciado con el 15M en 2011 hasta la Marcha de la dignidad de marzo de 2014, en que, con la refundación de IU, el PCE pasa a defender propiamente una política para la refundación de la izquierda. Y, por último, una tercera fase corresponde al ciclo electoral de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 y las elecciones generales del 26 de junio de 2016, donde el PCE entiende la política de refundación de la izquierda como política de confluencia, y los comunistas se

relacionan de manera directa con las candidaturas de unidad popular municipalistas.

Con la refundación de la izquierda el PCE pretendía responder a un contexto de malestar social y movilizaciones que no encontraban un referente político, con la convicción de que el conflicto que vivía el país correspondía a «un agotamiento del modelo constitucional del 78», proponiendo una «política de ruptura democrática»[153] con el régimen del 78, formulada por primera vez en la Conferencia política celebrada en 2008. En desarrollo de lo expuesto, el escenario rupturista descansa en la construcción de un sujeto político definido como «pueblo de izquierdas»[154], capaz de superar el espacio social y electoral tradicional de IU sobre la base de cuatro puntos: lucha contra los recortes sociales, proceso constituyente, III República y socialismo del siglo XXI.

El repertorio de acción del PCE apuesta por una «dinámica de movilización permanente» que superase «el bloqueo que impone el bipartidismo» y las políticas de la UE, la cual descansa en la combinación de huelgas generales con jornadas de protesta cívica[155]. El PCE define su repertorio de acción bajo un objetivo «táctico […] que se dirige a frenar los programas de ajustes por medio de un gran ciclo de movilizaciones unitarias y de masas de carácter antineoliberal», con los que desarrollar «los mecanismos de derrota de los programas de ajuste se sitúan, por tanto, en el impulso a un ciclo de movilizaciones sostenidas en el tiempo que desemboquen en una huelga general»[156].

El movimiento del 15M centra la atención y los esfuerzos teóricos y organizativos del PCE, viendo en él un potencial para la política rupturista defendida, pero también constatando «ciertas reticencias por parte de sectores de la militancia [donde] se han producido algunas declaraciones de dirigentes contrarias a la línea aprobada en los órganos del partido»[157]. Para los comunistas «la crisis económica rompe con los elementos materiales y los consensos sociales que permitían la perpetuación del modelo heredado de la Transición, lo que irá desembocando en una crisis política y de legitimidades de la cual el 15-M es su máxima expresión en la actualidad»[158], al cual define de la siguiente forma:

Nos encontramos ante un fundamental proceso de movilización social que está

consiguiendo canalizar y visibilizar en la calle la acumulación de cansancio e indignación de los sectores sociales machacados por los procesos de ajuste estructural. Una movilización que debe ser considerada como un importante paso para el cambio social, tanto por su capacidad de despertar político colectivo como por sus dinámicas y propuestas mayoritariamente anticapitalistas y antioligárquicas. Un movimiento heterogéneo en términos ideológicos, pero que desde sus inicios ha identificado claramente al enemigo de las capas populares: la banca y la clase política a su servicio.

El 15M se ha constituido ya como un movimiento eminentemente político pero no institucional, que está provocando una politización horizontal de amplios sectores sociales, principalmente de trabajadoras y trabajadores, a la vez que incitando a la formación y a la búsqueda de conocimiento e información, tanto en redes como a través de iniciativas como talleres, debates, charlas y encuentros[159].

El repertorio de acción exige del PCE un «trabajo marcado por el objetivo de lograr una unidad de acción entre el sindicalismo de clase y los sectores sociales protagonistas del 15-M en contra de los programas de ajuste», logrando «la unidad entre las realidades representadas entre el 29-S[160] y el 15-M»[161]. Tareas en las que el PCE adapta su experiencia en el movimiento antiglobalización a las nuevas circunstancias, definiendo al 15M como un nuevo movimiento de movimientos contra la crisis, siendo el PCE el puente entre el sindicalismo e IU con los nuevos movimientos sociales que surgen durante la crisis[162].

c) La estrategia de unidad popular (2017-2021)

Con la Marcha de la dignidad de marzo de 2015 se pone fin al ciclo de movilizaciones iniciado cuatro años antes, dando lugar a un periodo de predominio institucional y reflujo de la izquierda radical, que mueven al PCE a convocar el XX Congreso bajo un formato inédito en dos fases, celebrándose la primera el 9 de abril de 2016 con la asunción de todas las competencias como partido, incluidas las electorales.

El PCE celebra el centenario de la Revolución de octubre con la II Fase del XX Congreso, el cual se desarrolló del 1 al 3 de diciembre de 2017 con la aprobación de la Propuesta para el desarrollo de la política de construcción de Unidad Popular, que termina con la elección del abogado madrileño Enrique Santiago como secretario general.

La adopción de la estrategia de unidad popular intenta responder a una coyuntura de desmovilización social y división de la izquierda nacida del movimiento 15M, que conduce al PCE a una mayor unidad de acción política e institucional con Podemos tras la reelección de Pablo Iglesias como secretario general durante su II Asamblea (2017). También se produce una unidad social con CCOO, que elegía al dirigente vizcaíno Unai Sordo en su XI Congreso (2017), periodo marcado por la irrupción del movimiento feminista, las movilizaciones masivas y el paro general de los 8 de marzo de 2018 y 2019.

Si bien la realidad económica tendía a la estabilización, la crisis política alcanzaba su auge con las causas judiciales abiertas al Partido Popular por la existencia de la red de financiamiento ilegal conocido como Caso Gürtel, hecho que condujo a una situación inédita, con el debate de dos mociones de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, la primera fallida, impulsada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, que presentaba como candidato a Pablo Iglesias (2017) y una segunda exitosa impulsada por el PSOE, siendo elegido presidente Pedro Sánchez el 2 de junio de 2018.

El proceso soberanista de Cataluña iniciado en 2012 (procès catalán) alcanzó su máxima expresión con la convocatoria del referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, que, siendo suspendido previamente por el Tribunal Constitucional, se desarrolló en un ambiente de tensión social y fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. Posteriormente, el 10 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña, suspendiendo sus efectos instantes después; independencia que fue nuevamente declarada el 27 de octubre por el Parlamento catalán después de una votación anónima, hechos que desembocaron en la suspensión de la autonomía de la Comunidad Autónoma tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española esa misma tarde. La suspensión se extendió hasta el 2 de junio de 2018 y el juicio a los líderes del proceso independentista catalán (conocido como juicio del procés), hasta 2019.

Durante 2019 se suceden las citas electorales, rechazando el Parlamento el

proyecto de ley de presupuestos y poniendo fin al primer gobierno de Pedro Sánchez, el cual convoca elecciones generales el 28 de abril que concluyen con el triunfo del PSOE, que tras la imposibilidad de formar gobierno decide una nueva convocatoria que tiene lugar el 10 de noviembre de 2019, donde el PSOE repite como partido más votado mientas Unidas Podemos[163] ve reducido su peso en el Congreso a 35 diputados. Entre ambas elecciones generales tienen lugar las elecciones municipales, autonómicas y municipales del 26 de mayo, a las cuales la izquierda heredera del 15M acude dividida y que suponen una importante derrota con la pérdida del Ayuntamiento de Madrid, La Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol entre otros municipios y una importante pérdida de alcaldías, concejales y diputados autonómicos. Es en este contexto cuando el PCE intenta adaptar su estrategia de unidad popular al nuevo contexto convocando la Conferencia Política, que con el nombre de Un Partido para la Unidad Popular: nuestras alianzas en la nueva fase política no se realizarán hasta octubre de 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Tras las elecciones generales de noviembre de 2019 el PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo para formar el primer gobierno de coalición[164] desde la recuperación de la democracia en 1978, gobierno en el que el PCE forma parte con dos ministros, siendo el primer gobierno desde la II República con presencia comunista, y convirtiendo a los comunistas españoles en el único Partido Comunista que forma parte de un gobierno de la UE.

El PCE elabora un marco de diagnóstico, en un contexto de reflujo de las movilizaciones y tras ver reducida IU su presencia parlamentaria a solo dos diputados en las elecciones generales celebradas en junio de 2016, el PCE apoya la alianza entre Podemos e IU, que acuden a las elecciones generales del 20 de abril de 2016 como Unidos Podemos, con el doble objetivo de superar al PSOE (sorpasso) y evitar el acceso a la presidencia del líder de la derecha Mariano Rajoy (PP), no logrando ninguno de ellos. Esta realidad conduce al Partido Comunista a la adopción de un nuevo marco discursivo en que la derrota de la derecha pasa a ser el objetivo, el cual se expresa bajo el escenario de la unidad popular.

El PCE constata como problema la desmovilización social y la recuperación de la iniciativa por parte del Régimen del 78, ya que «a pesar de este ciclo movilizador, el capital consigue responder a la crisis […] Realidad que en términos gramscianos recibe el nombre de revolución pasiva»[165]; crisis de

régimen que se dirime entre tres «proyectos de clase»: el continuista, el regeneracionista y el rupturista:

Un primer proyecto de carácter continuista, donde […] La prioridad política de dicho proyecto es constitucionalizar las políticas de ajustes y retrocesos democráticos, neutralizar la persecución de la corrupción, mantener el flujo informal de inversión hacia sus sectores, menos impuestos, y en especial, la adopción de una reforma electoral de carácter mayoritario.

Existe un segundo proyecto de carácter regeneracionista definido como la necesidad de asumir cambios superestructurales sin modificaciones en la estructura económica y laboral del país. Proyecto regeneracionista que necesita una especie de Segunda Transición para justificarse y que tiene fuertes bases de apoyo en sectores empresariales más transnacionalizados y en los sectores de la burguesía urbana más globalizados […]·El elemento central de dicho proyecto es la reforma constitucional.

Un tercer proyecto vendría definido por la defensa de la ruptura democrática bajo la forma de proceso constituyente. Su más genuina expresión política es IU-UP y algunos sectores de la izquierda nacionalista. Sus bases electorales han quedado reducidas. Sin embargo, su base social puede ser más amplia sobre todo en las zonas de las periferias urbanas más afectadas por la precariedad laboral […][166].

Para el PCE, el desprestigio acumulado por años de crisis hace inviable la salida continuista, donde la crisis de régimen se disputaría entre una salida regeneracionista en torno a la idea de una segunda Transición y la ruptura democrática en torno a un proceso constituyente, siendo el objetivo del PCE el apoyo a la salida rupturista[167].

Siguiendo con esta argumentación, la causa principal de la «recomposición restauradora» los comunistas la sitúan en tres elementos: la desmovilización social como consecuencia de la prioridad dada al trabajo institucional en detrimento de los movimientos sociales[168], la mejora económica y las «maniobras del régimen, de las que se señalan principalmente el apoyo a Ciudadanos como forma de canalizar el descontento político hacia un partido

“pro régimen” y la abdicación del rey en plena crisis de la Corona»[169], valorando el PCE que los objetivos marcados con la estrategia rupturista no alcanzaron los resultados previstos.

El cuerpo de antagonistas se define bajo parámetros anteriores, al señalar al «sector financiero y los sectores de la burguesía más transnacionalizada»[170] de la economía española como el sector de la burguesía más dinámico en la defensa de una salida restauradora, definiendo como pilares de la salida continuista al «empresariado tradicional español de sectores como el inmobiliario, el turístico o de restauración»[171].

Como marco de pronóstico, el PCE defiende ante la recomposición restauradora por medio de la defensa de la revolución democrática y social[172], que se define bajo la máxima «Frente a la restauración autoritaria borbónica, ruptura democrática republicana. Frente a la reforma del Régimen del 78, revolución democrática»[173].

Con la revolución democrática se pretende la construcción de un nuevo proyecto de país, el cual requiere de un escenario rupturista que el PCE defiende así:

Para poder construir un nuevo país tenemos que romper con estos dos corsés: la UE y el euro y el Régimen del 78, recuperar la soberanía y realizar la ruptura democrática con los marcos que impiden cualquier proceso de transformación social al servicio de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo. Frente a la restauración borbónica, ruptura democrática republicana. Frente a la regeneración, revolución democrática[174].

El PCE define la revolución democrática y social como un programa guiado por la idea de «soberanía, derechos y trabajo garantizado»[175], entendida como «la apertura de un periodo de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales», con la que formula su propuesta de proceso constituyente hacia la constitución de un Estado republicano en clave soberanista, definiendo «un Estado republicano, soberano y federal, apostando por una salida de la OTAN, la UE y el euro» y recuperando «la plena soberanía» bajo la defensa de una idea de patriotismo republicano[176]. Por último, se define una alternativa económica bajo el modelo de «economía mixta planificada», cuyos objetivos centrales serán

la reindustrialización del país, la construcción de un Estado social avanzado y el equilibrio territorial, apostando por un modelo autocentrado que supere la inserción periférica que España tiene dentro de la división del trabajo de la UE[177].

En el campo de los protagonistas se aprecia una diferencia en la estrategia discursiva del PCE en relación a cómo nombrar el sujeto de cambio. Así, en la I Fase del XX Congreso, celebrada en 2016, el Partido Comunista opta por su tradicional lenguaje marxista al referirse al sujeto del cambio en los siguientes términos: «La defensa de una política de ruptura como salida al proceso de reestructuración que está viviendo el capitalismo español hace de la contradicción capital / trabajo el eje del conflicto social. El sujeto político del cambio son los trabajadores y trabajadoras y sus aliados»[178]. Sin embargo, en la II Fase, celebrada en 2017, se dota al discurso de una función primaria en la asignación de demandas, que invita a sumarse a un proyecto que en ocasiones se define bajo premisas constructivistas, apelando a los «perdedores de la globalización», «la mayoría social afectada por la crisis» o al «pueblo», donde la propuesta del PCE ya no se dirige a la izquierda, sustituyendo el mandato del XVII Congreso (2005) de elaborar un Manifiesto del PCE para la izquierda a la fórmula aprobada en el XX Congreso (2017) para «la elaboración del Programa del PCE para España»[179]. Cambios que alcanzan a la caracterización del sujeto principal de la propuesta rupturista, que pasa de IU-UP de la I Fase del XX Congreso (2016), a Unidas Podemos en la Conferencia política de 2020.

El marco de motivación queda definido en la Propuesta para el desarrollo de la política de construcción de la Unidad Popular[180], con la que se pretende superar los errores institucionalistas cometidos, situar al PCE en el conflicto social «pasando de lo electoral a la lucha de clases», recuperando la noción de movilización social sostenida como el repertorio de acción prioritario para los comunistas[181].

Con la Unidad Popular, el PCE apela a una mayoría social afectada por la crisis y no solo a los sectores políticos identificados con la izquierda, a través de la noción de poder popular, el cual se despliega en tres niveles[182]. Un primer nivel, formado por una amplia alianza y la creación de espacios unitarios entre los sectores afectados por la crisis, cuyo objetivo es la derrota de las políticas de ajuste a través de la fórmula de la movilización social sostenida, donde el PCE presta especial relevancia a la lucha obrera y la lucha feminista. Un segundo nivel, constituido por un bloque social de carácter rupturista que tiene como

objetivo el impulso de un proceso constituyente para la construcción de un nuevo modelo de país. Para terminar, un tercer nivel, formado por la alianza electoral entre los partidos de izquierdas integrados en Unidas Podemos (IU, Podemos, Equo más confluencias territoriales), definido como «experiencias unitarias de carácter institucional»[183].

El repertorio de acción del PCE persigue la construcción de «espacios unitarios de poder popular» desde los que «ampliar el espacio rupturista en el Estado»[184], para lo cual defiende la necesidad «de recuperar todas sus competencias», con lo que se pretende culminar el proceso de reconstrucción organizativo iniciado con las Conferencias de organización de 2004 y 2009, así como participar directamente en la construcción de las candidaturas que confluyeron en Unidas Podemos e «intervenir en la construcción de espacios de unidad popular» directamente sin la intermediación de IU[185].

En relación a lo anterior, el desarrollo de la unidad popular exigía la redefinición de las relaciones entre el PCE e IU, al defender la «superación de IU»[186], aplicando lo ya debatido desde la Conferencia política de 2008, vinculando el insuficiente desarrollo de IU a la adopción de facto de un modelo de partido clásico, e instando a la militancia comunista a «ponerse al frente» de una recuperación del carácter originario de IU como movimiento político y social, con los que no se pretende «liquidar IU»[187], sino ampliar (superar) su base social y electoral hacia la formación de un «bloque social anticapitalista y rupturista» más amplio[188].

Para finalizar, tras los retrocesos electorales sufridos por Unidas Podemos en 2019, el PCE convoca la Conferencia política con el lema Un Partido para la unidad popular: nuestras alianzas en la nueva fase política, si bien se retrasó a un año después (octubre de 2020) como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En ella se pretendía adaptar su política a un nuevo escenario marcado por «el auge de la ultraderecha»[189], la relación respecto al Gobierno de coalición de la que forma parte y la definición de un marco de relaciones con Unidas Podemos. La política de unidad popular quedaría definida ahora como:

[…] el planteamiento de una política de alianzas que permita articular una amplia convergencia y la construcción de unidad popular no puede ser ajeno a la

existencia de un gobierno de coalición de UP con el PSOE, que condiciona en gran medida nuestra realidad interna y externa. Este gobierno no tiene ante sí una perspectiva fácil, tanto por la oposición, cuantitativamente importante, de las derechas y los límites que impone la UE, como por las reservas del PSOE a las políticas más avanzadas o por las propias diferencias que puedan surgir en el seno de UP. En estas circunstancias, se impone organizar el respaldo popular al Gobierno frente a una derecha que sería su única alternativa. Ahora bien, ese respaldo no puede contraerse a una simple justificación acrítica, sino que debe significar un impulso para lograr resultados, empezando por asegurar el cumplimiento efectivo y puntual del programa pactado, así como favorecer las orientaciones más progresistas en los temas que no han sido objeto de pacto programático. En definitiva, se trata de evitar que las contradicciones que surjan en la acción de Gobierno se resuelvan simplemente en el campo de las relaciones institucionales por falta de presión social[190].

El objetivo de la estrategia de la unidad popular se expresa ahora como el desarrollo del programa de Gobierno y su contenido antineoliberal en un contexto de fuerte crisis económica provocada por las medidas sanitarias para hacer frente a la COVID-19 y la defensa de la democracia frente al auge de la ultraderecha en España.

Este nuevo escenario provoca dos modificaciones en la estrategia de unidad popular desarrollada por el PCE.

Por un lado, Unidas Podemos pasa a definirse como «un espacio político unitario» (y no solo institucional), donde UP «sirva de mecanismo de coordinación que vaya más allá de las organizaciones presentes en Unidas Podemos», empezar por «priorizar que haya una coordinación interna en Unidas Podemos similar a la de una coalición […] compatible con la generación de un movimiento político y social»[191], y apostando por la continuidad de Unidas Podemos dotándola de marcos organizativos formales.

Por otro, la estrategia de unidad popular pasa a definirse en términos de izquierda, en los que la misma se entiende como «la reorganización de la izquierda de nuestro país», recuperando con ello un discurso de carácter eminentemente agregativo «en el que junto a la militancia de los partidos participen colectivos y personas ecologistas, sindicalistas, feministas, activistas

de los movimientos antiimperialistas, activistas antirracistas, por la solidaridad, por la defensa de los derechos sociales y ciudadanos, para que entre todas y todos se debata al mismo tiempo sobre la estrategia, la base política, el programa y la forma de organizarse y funcionar sobre la que articular un bloque social y político de carácter alternativo al sistema capitalista»; entendiendo aquí por unidad popular a la sociedad organizada y no tanto aquella formada por los afectados por la crisis.

Esta transición en la dotación de sentido para definir qué entiende el PCE por unidad popular nos plantea el interrogante de cómo evolucionarán las estrategias discursivas de los comunistas y si estamos ante el inicio de un nuevo escenario, en que la unidad popular aparezca bajo un nuevo escenario discursivo, el escenario democratizador, donde el PCE situaría a la ultraderecha y la estrategia antifascista, como el nuevo marco discursivo reconfigurador de la identidad comunista, en un contexto de crisis social en la España pospandemia.

BASE ELECTORAL, MILITANTE Y SOCIAL DEL COMUNISMO EN ESPAÑA

En este apartado vamos a analizar la base electoral, militante y social del PCE, para observar los posibles resultados de la estrategia que hemos analizado. Para el análisis electoral, estudiaremos los resultados de IU y de UP, referentes electorales del PCE. Veremos la evolución electoral en este largo periodo, apuntaremos las principales características de la base electoral de IU y analizaremos su base territorial, con relación a la base territorial del PCE. Para el análisis militante analizaremos los datos de la afiliación y complementaremos esta información con distintas fuentes primarias, tres encuestas a los delegados y las delegadas del XVII, XVIII y XIX Congreso del PCE puestas en marcha por el Observatorio Electoral de la FIM y una encuesta a los militantes de IU de 2018 coordinada por Luis Ramiro con la iniciativa de la secretaria de análisis electoral de IU. Los delegados, en palabras de Bordandini, son élites de nivel medio, por lo que no representan necesariamente a la base pero ofrecen una visión muy interesante del activo militante[192]. Para el análisis de la base social, estudiaremos a las personas que se identifican como comunistas en los estudios del CIS. Nos detendremos en analizar el estudio 3263, preelectoral de

las elecciones generales de noviembre de 2019, que tiene una muestra amplia y nos permite acceder a una submuestra de comunistas suficiente. De esta manera analizaremos lo que denominamos subcultura política comunista[193].

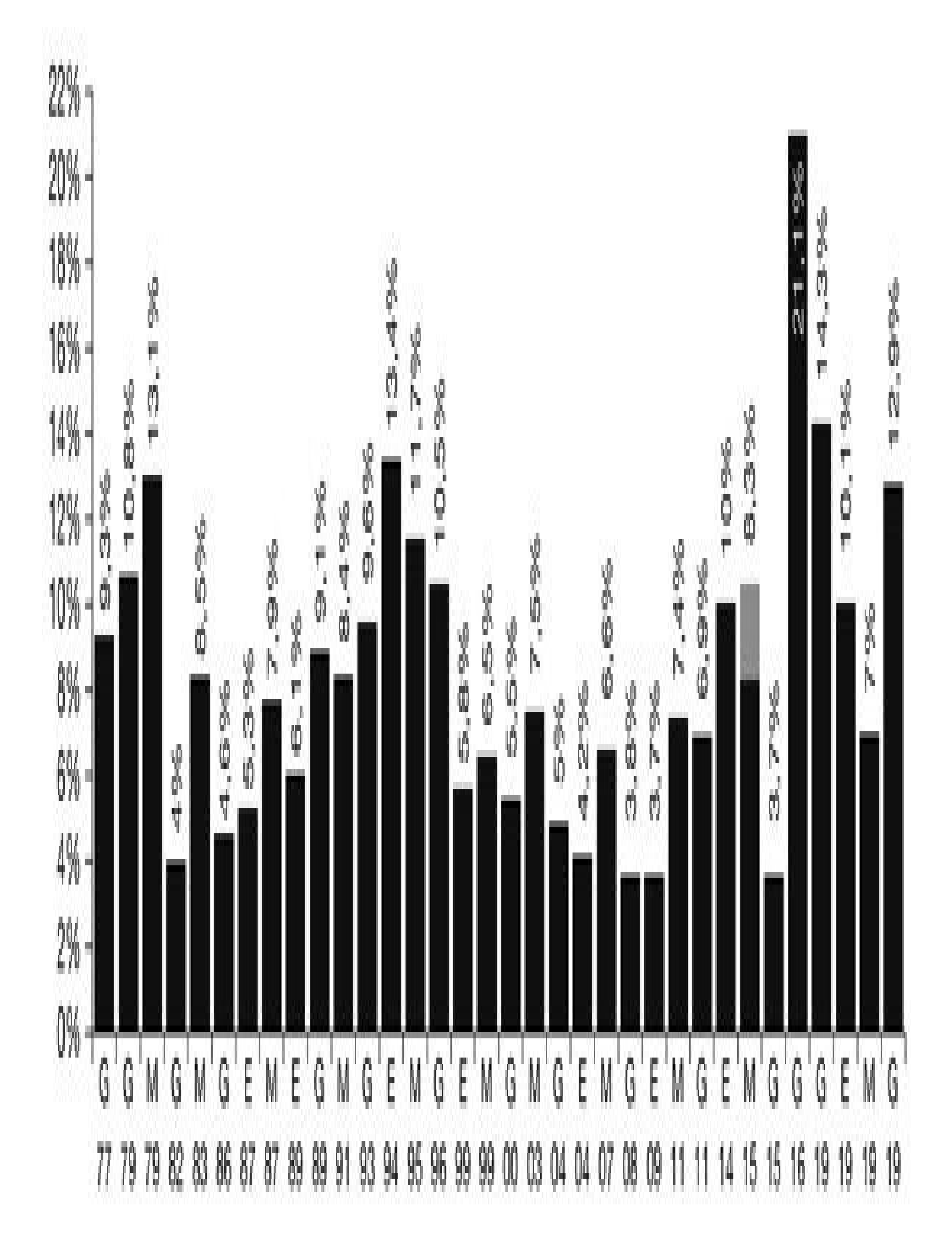
Análisis de la base electoral: los referentes electorales del PCE

En este apartado vamos a analizar la evolución de los referentes electorales del PCE: la federación IU hasta 2015 y la coalición UP, integrada por IU, desde esa fecha. Este análisis de 25 años de historia del PCE abarca 17 convocatorias electorales de ámbito estatal, que a su vez incluyen 8 elecciones generales, 5 elecciones europeas y 6 elecciones municipales. El periodo anterior concluye con las elecciones generales de 1996, en las cuales IU obtiene sus mejores resultados en este tipo de comicios y supera los obtenidos en 1979 por el PCE en solitario. Sin embargo, los resultados fueron acogidos con decepción en su momento, pues solo supusieron un aumento del 0,9 por 100 respecto a las elecciones generales de 1993, 2,9 por 100 menos que en las elecciones europeas de 1994. Desde estas elecciones, en que IU alcanzó su techo electoral, la evolución electoral podemos analizarla en cuatro etapas: crisis entre 1996 y 2000, declive entre 2000 y 2009, crecimiento entre 2009 y 2014 y, por último, una etapa marcada por la aparición de Podemos entre 2014 y 2021.

El primer periodo está marcado por una fuerte crisis electoral. Las causas son variadas, internas y externas, y exigirían un estudio pormenorizado. Externamente, la victoria del PP en las elecciones generales de 1996 obliga a repensar la estrategia de IU y del PCE, que en los años anteriores estaba marcada por la oposición al gobierno del PSOE. Además, las consecuencias de la crisis económica de los años 1992 y 1993 van dejándose atrás, en 1994 se inicia un periodo de creación de empleo que hace que el discurso socioeconómico alternativo y de impugnación tenga peor acogida social. Internamente, el enfrentamiento larvado que se inicia en el Congreso del PCE de 1991 estalla con la ruptura definitiva con la corriente Nueva Izquierda, constituido en partido como PDNI, que significa la salida de personalidades relevantes en la historia del PCE e IU. Como hemos visto, IU pierde federaciones como la de Galicia y Cantabria y rompe su acuerdo con Iniciativa per Catalunya. Estos y otros factores se interrelacionan y provocan un declive continuado de las expectativas

electorales de IU. Los resultados de las elecciones parciales autonómicas de Galicia en 1997 y Euskadi en 1998 son muy negativos. En 1999, en las elecciones municipales se baja al 6,5 por 100 y en las elecciones europeas al 5,8 por 100. En ese mismo año, Esquerra Unida i Alternativa, nuevo referente de IU en Catalunya, se queda sin representación en el parlamento autonómico. En las elecciones generales de 2000, Julio Anguita tiene que retirarse por problemas de salud cuando ya había sido designado candidato a la Presidencia del Gobierno y es sustituido por Francisco Frutos. Antes de las elecciones se firma un acuerdo de gobierno con el PSOE, lo que no frena el descenso: IU baja al 5,5 por 100. En total, IU había perdido casi la mitad de su electorado, con descensos, respecto a sus porcentajes de apoyo anteriores, del 57 por 100 en las elecciones europeas, del 44 por 100 en las elecciones municipales y del 48 por 100 en las elecciones generales. Se trata de un descenso solo comparable al de 1982. IU había mantenido un impulso electoral ascendente cuando el resto de partidos de la izquierda comunista y postcomunista declinaban, pero esa excepción se rompió en 1999.

Gráfico 1. Evolución electoral del PCE/IU/UP



22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
9,3%
10,8%
13,1%
4%
8,5%
4,6%
5,3%
7,9%
6,1%
9,1%
8,4%
9,6%
13,4%
11,7%
10,5%
5,8%
6,5%
5,5%
7,5%
5%
4,2%
6,6%
3,8%
3,7%
7,4%
6,9%
10%
8,3%
3,7%
21,1%
14,3%
10,1%
7%
12,9%
G G M G M G E M E G M G E M G E M G M G E M G E M G E M G G G E M G
77 79 79 82 83 86 87 87 89 89 91 93 94 95 96 99 99 00 03 04 04 07 08 09 11 11 14 15 15 16 19 19 19 19

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados electorales oficiales (www.infoelectoral.mir.es).

Los resultados incluyen las distintas coaliciones en que participa el PCE. En las elecciones generales y europeas representa, junto a otros actores de menor tamaño, al PCE-PSUC entre 1977 y 1979, IU-IC entre 1986 y 1996, IU-EUiA entre 1999 y 2000, IU-ICV entre 2004 y 2009, IU-ICV-Chunta en 2011, IU-ICV-Anova en 2014, IU-Chunta en 2015 y UP entre 2016 y 2019. En las elecciones municipales el panorama de coaliciones se complica, por lo que los resultados podrían variar respecto a otras fuentes. En las elecciones municipales, el 8,3% incluye las candidaturas apoyadas por IU y el 10,5% las apoyadas por el PCE, que en la Comunidad de Madrid no se correspondían.

El segundo periodo está marcado por un descenso leve pero continuado. Como hemos analizado en el apartado anterior, en el 2000 Gaspar Llamazares es elegido coordinador general de IU e intenta implementar diversos cambios estratégicos. Electoralmente estos no logran resultados y el descenso continúa, en un ambiente de crisis interna casi permanente. Antes de las elecciones municipales de 2003 se alcanzan diversos acuerdos electorales de ámbito autonómico, el principal de ellos entre ICV y EUiA. Esto permite lograr un 7,5 por 100 de los votos en las municipales, aunque la mejora es aparente, pues se debe a la suma del electorado que aportaba ICV, que había logrado en solitario en 1999 un 1,1 por 100 de los votos. El apoyo electoral de IU, en coalición con ICV y diversas fuerzas menores, continúa reduciéndose en las elecciones generales de 2004 (5,0 por 100)[194]. Estos comicios inician un periodo de fuerte polarización entre el PSOE, ahora en el Gobierno, y el PP, lo que complica la posición de IU, que se mantiene cercano a su principal competidor. Las fuerzas electorales se reducen paulatinamente y cada elección marca un récord negativo: un 4,2 por 100 en las europeas de 2004, 6,6 por 100 en las municipales de 2007, 3,8 por 100 en las generales de 2008 y 3,7 por 100 en las europeas de 2009, estas últimas elecciones ya con Cayo Lara como coordinador federal.

Entre 2009 y 2014 se produce un periodo de crecimiento importante. En las

municipales de 2011 se logra el 7,4 por 100, con un ligero aumento, en las generales de 2011 se alcanza el 6,9 por 100 y se puede formar grupo propio en el Congreso y en las europeas de 2014 se alcanza el 10 por 100 de los votos. Internamente, la nueva dirección liderada por Cayo Lara logra un periodo de cierta tranquilidad, a pesar de la división y tensión con la que se cerró la VIII Asamblea Federal. Se alcanzan acuerdos electorales con fuerzas autonómicas de izquierda, como la Chunta Aragonesista, ANOVA y otras de menor tamaño. Externamente, nos encontramos en un escenario más propicio para la nueva estrategia y el nuevo discurso que hemos explicado en el apartado anterior, con un deterioro de la imagen del PSOE y un ciclo de movilización social ante la crisis económica y política, con tres huelgas generales y la movilización del 15-M. IU revierte la decadencia iniciada en 1996, pero sin alcanzar los resultados del PCE en la Transición y de IU en el periodo 1989-1996. El techo se logra en las elecciones europeas de 2014, pero de nuevo el resultado aparece como decepcionante respecto a las expectativas creadas y además marca el surgimiento de Podemos, que disputa el espacio de IU.

El cuarto periodo está marcado por la aparición de Podemos y la constitución a partir de 2016 de la coalición Unidas Podemos, en la que se integra IU. En un principio, las relaciones entre IU y Podemos son de disputa a nivel estatal y de colaboración en territorios importantes, como Cataluña o Galicia. Como hemos referido en el marco teórico, Podemos surge como un actor mejor posicionado para representar el descontento social, al disputar el espacio de izquierda radical, pero también al tener cierto éxito en otros espacios; además, impugna el sistema de partidos, de gobierno y oposición, incluida IU, lo que enturbia las relaciones entre ambas formaciones[195]. IU encuentra serias dificultades para competir con Podemos y obtiene unos malos resultados en las elecciones autonómicas y generales de 2015. En estas últimas solo logra un 3,7 por 100 de los votos, aunque es cierto que no se presenta en Catalunya ni en Galicia; sin contar estos dos territorios, el resultado hubiese sido de un 4,7 por 100. En las elecciones municipales, por contra, el resultado de IU y las distintas coaliciones que conforma es positivo, con el 8,3 por 100 de los votos, que se traduce en algunas alcaldías medias, como Zamora o Ferrol. Si tomamos las candidaturas apoyadas por el PCE al margen de IU en la Comunidad de Madrid, el resultado es del 10,5 por 100[196]. Circunstancias de tipo local, la decisión de Podemos de no presentarse a las elecciones locales, la mayor implantación territorial de IU y la conformación de coaliciones locales son factores que explican este éxito relativo. En cualquier caso, las elecciones municipales de 2015 suponen un hito en que ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o A Coruña son gobernadas

por confluencias de izquierdas.

A partir de las elecciones generales de 2016 se conforman a nivel estatal coaliciones entre Podemos e IU, con formas diversas, aunque parece haberse consolidado la denominación Unidas Podemos. A nivel autonómico y municipal, el panorama es más diverso, con candidaturas unitarias y territorios donde compiten Podemos e IU. Los resultados de Unidas Podemos son desiguales. En las elecciones generales, se supera el máximo histórico de IU, con 21,1 por 100 en 2016, 14,3 por 100 en abril de 2019 y 12,9 por 100 en noviembre de 2019. Aunque ha habido un fuerte descenso electoral, los resultados superan el espacio de la izquierda radical en España y han permitido entrar por primera vez en el gobierno estatal. Sin embargo, a nivel autonómico y municipal los resultados del espacio de Unidas Podemos son mucho más pobres. De hecho, los resultados de IU en las elecciones municipales de 2019 son los peores en términos de concejales y no tiene presencia en ninguna de las tres principales ciudades de España[197]. Además, el espacio electoral de UP parece que tiene una fuerte dependencia del liderazgo estatal, como pudo comprobarse en los pobres resultados en las elecciones europeas, autonómicas y municipal. Como explica March, la izquierda populista tiene una fuerte dependencia de los liderazgos carismáticos y una dificultad para conformar una organización institucionalizada, problemas que se han proyectado a todo el espacio de UP[198].

Aunque el apoyo electoral de IU ha variado en gran medida, el perfil social y territorial de su votante es bastante estable. Los diferentes estudios coinciden en ofrecer las mismas claves sobre el voto de IU. El votante de IU está identificado con la izquierda, y existen dificultades para atraer a votantes más moderados, a diferencia de Podemos[199]. Mayoritariamente es no creyente o no practicante y tiene una presencia mayor entre los sindicalizados. Tiene más apoyos entre las personas con estudios superiores, varones y urbanos, con una edad menor que la media. También entre las personas laboralmente activas, especialmente asalariados, con un pico en los técnicos y profesionales. Su presencia es históricamente muy débil entre las personas más mayores, jubilados y pensionistas. Podemos observar diferencias entre el votante núcleo de IU, aquel que conserva en los momentos de descenso, y el votante amplio, que incorpora en los momentos de crecimiento, el cual es más joven, urbano y con nivel de estudios más alto[200].

Territorialmente, el voto de IU se distribuye siguiendo un cierto patrón. Si

analizamos el apoyo por provincias, en las elecciones generales, veremos que este es significativamente similar en todos los comicios celebrados, desde 1977 hasta 2015[201]. Los resultados de UP también tienen un patrón definido, con fuertes correlaciones entre los resultados provinciales en las elecciones de 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019; este patrón guarda similitudes pero es diferente al patrón de IU y, sobre todo, al patrón del PCE en la Transición[202]. La distribución electoral territorial de IU mantenía un fuerte vínculo con la distribución del PCE, lo que Ruiz-Huerta denomina «sustrato comunista»[203]. No obstante, el apoyo de IU ha tendido a hacerse más homogéneos con menos picos o «castillos altos», siguiendo la terminología de Linz[204]. Esto ha penalizado su representación en el Congreso. Por ejemplo, el PCE en 1982 e IU en 1986 obtuvieron más diputados que IU en 2004 y 2008, con similares resultados, gracias a que sus votos estaban concentrados en pocas provincias.

Hemos analizado la distribución por provincias y veamos ahora la distribución por municipios, para observar con mayor detalle estas ideas que hemos apuntado. La correlación entre el porcentaje de voto por municipio del PCE en las elecciones generales de 1979 es del 0,42 con relación al voto de IU y sus aliados en las generales de 2011 y del 0,32 con relación al voto a UP en noviembre de 2019. Son datos relevantes teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el cambio de los referentes electorales, los cambios organizativos y políticos, etc. Además, hay que tener en cuenta que, al tomar como referencia los municipios, las estadísticas son sensibles a cambios en municipios pequeños. Estos datos confirman lo que apuntábamos del sustrato comunista en la distribución territorial del voto de la izquierda radical en España, lo que no significa que se trate de un voto mayoritariamente comunista. Se trata de zonas proclives al voto a la izquierda radical, como antes lo eran al voto comunista.

En el análisis de los resultados por municipios también observamos que la distribución del voto de IU y de UP es más homogénea, con menos municipios por encima del 30 por 100 pero también con menos municipios sin ningún tipo de apoyo. Esta tendencia a la homogenización se traduce en una pérdida de los «castillos altos» que puede explicar en parte el deterioro continuado del poder municipal. De hecho, el PCE e IU han ido perdiendo alcaldías importantes desde 1979, hasta el punto de que actualmente no conservan ningún ayuntamiento con más de 100.000 habitantes y ninguna capital de provincia, salvo Zamora.

Análisis de la base militante del PCE

El análisis de la base militante nos permite estudiar los resultados de los cambios de estrategia política que el PCE ha adoptado para su reactivación organizativa. Una de las decisiones organizativas que se ha tomado ha sido la reestructuración de la gestión de la afiliación, poniendo en marcha un instrumento único para gestionar las altas, las bajas y las cuotas: el Departamento de Afiliación y Recaudación (DAR). Esta fuente permite analizar la afiliación, pero se ha producido una ruptura que impide comparar los datos actuales con los de anteriores procesos. Por otro lado, las fuentes de afiliación son incompletas y generalmente están poco actualizadas, por lo que vamos a completar los datos de afiliación con diversas encuestas que se han puesto en marcha estos años y en que hemos participado: tres encuestas realizadas a los delegados del XVII, XVIII y XIX Congreso y una encuesta realizada a la militancia de IU en 2018, de la que hemos extraído la submuestra de afiliados al PCE[205]. Las encuestas a delegados y a militantes no son representativas del conjunto de la afiliación, pero sí nos permiten acercarnos a los cuadros medios y a la militancia más activa.

Los datos de afiliación de 2017 muestran que el PCE tenía 7.881 personas al día de cuotas en ese momento[206]. Es un número bajo, respecto al periodo anterior. No tenemos datos comparables a este, dado que procede de un instrumento de control nuevo, pero podemos deducir que se ha producido un descenso continuado en todo el periodo hasta la última década, en que parece estabilizarse entre 6.000 y 8.000 afiliados. El afiliado del PCE es mayoritariamente masculino, aunque en los Congresos tiende a equilibrarse la presencia de ambos sexos. Respecto a la edad, la distribución de la afiliación es bastante equilibrada, teniendo en cuenta que por debajo de los treinta años los comunistas permanecen en la UJCE. Los delegados son generalmente bastante más jóvenes que el cuerpo de afiliación, especialmente en el XVII Congreso de 2005.

El análisis de la edad es una cuestión fundamental para analizar los resultados de la estrategia organizativa del PCE, pues permite evaluar su capacidad de renovación y supervivencia. Especialmente en un momento en que los partidos sufren un proceso de envejecimiento, que afecta especialmente a muchos partidos postcomunistas[207]. El PCE ha renovado y rejuvenecido a los cuadros intermedios, representados por los participantes en los Congresos, aunque las nuevas afiliaciones no le han permitido recuperar las cifras de militantes de

periodos anteriores. Podemos analizar esta renovación desde el análisis de las cohortes de edad. El XVII Congreso de 2005 señala una cierta polarización, entre un grupo de delegados más veteranos, nacidos antes de 1960, y otro grupo joven, nacido después de 1970. En medio hay una cohorte muy menguada. Esto podría deberse a cuestiones de edad, pero dado que en los datos posteriores parece confirmarse este bache, podemos deducir que es una cuestión generacional. Por los datos de las encuestas, sabemos que los afiliados en la década de los ochenta son menos que los afiliados en la década anterior y posterior. Se trata de una generación militante perdida, que podría haber creado un problema en la renovación de cuadros. Por los datos de los siguientes Congresos, este problema parece haberse compensado por la generación nacida en los años setenta y que se afilió en los años noventa.

La afiliación parece equilibrada en términos de nivel de estudios, con un 24,9 por 100 de personas con estudios universitarios y un 13,8 por 100 con estudios primarios. Este equilibrio de apoyos representa la coalición histórica que representaban los partidos de izquierda radical, de la que hemos hablado en el apartado de marco teórico[208]. En los cuadros medios observamos una presencia mayor de personas con estudios universitarios, lo que es coherente con el hecho de que la media de edad es menor. Respecto a la situación laboral, la mayoría de cuadros son activos, principalmente asalariados, con una presencia por encima de la población de temporales y parados, aunque se observa una presencia creciente de jubilados.

El militante comunista comparte esta afiliación con múltiples participaciones en organizaciones de todo tipo. Una mayoría de militantes del PCE están afiliados a CCOO, pero también una parte importante participa de asociaciones culturales, organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones de vecinos y vecinas y organizaciones de solidaridad.

La encuesta realizada a la afiliación de IU en 2018 nos ofrece una imagen actualizada y detallada de la actividad militante en IU, especialmente interesante para analizar la doble militancia. No obstante, al ser una encuesta autoadministrada, tenemos que tener en cuenta que los datos se refieren a las personas más activas y jóvenes, con mayor propensión a contestar la encuesta como una actividad militante. El militante del PCE es más activo que el no afiliado al PCE en todas las variables estudiadas, aunque este también tiene un alto grado de compromiso. Las actividades en las que se ha participado nos dicen mucho de la forma de militar. Las más frecuentes en los últimos cuatro años han

sido asistir a una manifestación, participar en las actividades de las campañas electorales (60,9 por 100 lo han hecho a menudo en los últimos cuatro años), asistir a un mitin (60,7 por 100), asistir a reuniones internas (60 por 100), o firmar un manifiesto (56 por 100). Los porcentajes no son excesivamente relevantes, porque, tal como hemos dicho, la muestra ya está condicionada por el compromiso militante, pero sí es interesante el tipo de actividad. Como se puede observar en las actividades más frecuentes, tiene mucho peso lo relacionado con las campañas electorales, un periodo de activación militante. Las actividades electorales y las más pasivas son en las que más gente participa.

Los militantes del PCE son frecuentemente candidatos en las municipales (60,8 por 100 al menos lo han hecho alguna vez), autonómicas (17,2 por 100), generales (15,1 por 100) y europeas (2 por 100). Estos porcentajes tan altos, incluso entendiendo que la muestra está marcada por el compromiso, pero teniendo en cuenta que es una muestra amplia, denotan la implicación que se exige a una militancia reducida para mantener una actividad electoral propia de un partido de ámbito estatal, que aspira a estar presente en todo el territorio.

Tal implicación es externa e interna. El 54 por 100 de la militancia del PCE ha desempeñado algún cargo de responsabilidad o similar en IU. Para el conjunto de la militancia de IU, este porcentaje es del 45,4 por 100, un porcentaje más reducido pero igualmente alto. Para tener una idea del tipo de compromiso, un tercio tiene actualmente alguna responsabilidad de nivel local. Además, el 41,6 por 100 de los militantes del PCE han tenido algún cargo en el PCE. Se comprueban las dificultades de la militancia de IU para mantener la actividad de la organización. Pero esto es especialmente llamativo en el caso de los militantes del PCE, que participan en más actividades y asumen más responsabilidades, además de asumir las responsabilidades de su propio partido. Se observa, asímismo que el militante del PCE es más activo en IU que en su partido, algo que ya se apuntaba en la encuesta realizada en 1991[209]. Esta doble carga de trabajo puede ser un freno importante para la afiliación, en la medida en que esta encuesta comprobamos que una de las cosas que echa para atrás a los simpatizantes a la hora de afiliarse es el excesivo compromiso que se les pide a los militantes[210].

Tabla 3. Perfil de delegados y militantes del PCE según diversas fuentes

▪

Fuente	Encuesta a delegados	Encuesta a
	2005	2009
Muestra / población	373	203
Sexo		
Femenino	32,4%	45,8%
Masculino	66,8%	53,7%
Otro		
Sin datos	0,8%	0,5%
	100,0%	100,0%
Edad		
Menos de 30	20,6%	13,9%
30-44	30,2%	35,1%
45-64	45,5%	43,1%
Más de 64	3,7%	7,9%
Sin datos		
	100,0%	100,0%
Nivel de estudios		
Primarios	23,1%	17,8%
Secundarios	15,9%	15,3%

Formación Profesional	14,9%	16,7%
Universitarios	45,9%	49,7%
Sin datos	0,3%	0,5%
	100,0%	100,0%
Situación laboral		
Trabaja	73,5%	65,0%
Parado	8,5%	15,8%
Jubilado	10,6%	11,8%
Estudiante	4,0%	3,4%
TDNR	1,1%	0,0%
Otra situación	0,5%	2,5%
Sin datos	1,1%	1,5%
Total	100,0%	100,0%
Situación profesional		
Empresario con asalariados	2,1%	1,5%
Autónomo	7,7%	9,1%
Asalariado fijo	47,2%	49,2%
Asalariado temporal	28,1%	28,9%
Otra situación	5,3%	5,6%
Sin datos	9,5%	8,4%
	100,0%	100,0%

Afiliación a organizaciones y asociaciones		
CCOO	65,3%	62,1%
Otro sindicato	4,0%	5,9%
Vecinos	27,9%	27,6%
AMPA	15,4%	19,7%
Cultural o deportiva	37,7%	35,0%
Jubilados	3,2%	3,0%
Ecologista	14,3%	11,8%
Mujeres	8,8%	13,3%
Religiosa	0,8%	2,5%
Pacifista	10,1%	6,4%
DDHH	24,1%	24,6%
Estudiantes	0,0%	6,9%
Solidaridad		
Consumidores		
LGTB		
Ayuda social		
Enfermedades		
Discapacitados		
Profesionales		

Empresariales		
Cooperativas de consumo		
Otras	29,2%	27,1%

▪

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de tres encuestas realizadas a los delegados en el XVII, XVIII y XIX Congresos del PCE, una encuesta realizada en 2018 a la militancia de IU, de la que se ha extraído la submuestra de afiliados al PCE, y los datos oficiales aportados por el PCE.

Análisis de la base ideológica: la subcultura comunista

En este apartado vamos a analizar a las personas que se autodefinen como comunistas en España, los componentes de la subcultura política comunista, en términos de Bordandini[211]. Comencemos explicando la procedencia de los datos que vamos a utilizar. Tomaremos como referencia los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizados desde 1977 hasta 2020. En este periodo, el CIS ha realizado 89 estudios en que se incluía una pregunta sobre la autoidentificación ideológica, aunque el formato ha variado en algunas ocasiones. Hasta 1982, las categorías de respuesta se vinculaban a los partidos políticos, por lo que la respuesta estaba relacionada con la simpatía o cercanía a las formaciones y no solo con la ideología. Por ejemplo, se diferenciaba la opción «comunista» de la opción «partidos a la izquierda del PCE». En 1984, las categorías de respuesta son diferentes, incluyendo, por ejemplo, centrista o fascista, como opciones de respuesta. Pero desde 2004 la pregunta se ha realizado de manera uniforme y con cierta regularidad. En 79 de los 81 estudios realizados desde 2004 se incluye la posibilidad de elegir dos ideologías, en primer y en segundo lugar. De todos los estudios nos vamos a centrar en el número 3263, realizado en octubre de 2019. El estudio 3263 se corresponde con la encuesta preelectoral de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, tiene una muestra de 17.650 personas entrevistadas. Es, por tanto, una encuesta reciente y representativa. Con los datos de este estudio podemos tener una idea más detallada del perfil de las personas que se identifican con el comunismo, aunque los datos, como insistiremos, deben ser tomados con prudencia, dado que la submuestra es de 419 personas.

Si analizamos la evolución del volumen de personas que se autodefinen como comunistas, lo primero que es de destacar es la estabilidad en valores bajos. En

los estudios realizados desde 2004 el mínimo se ha situado en 1,8 por 100 en octubre de 2008 y el máximo en 4 por 100, en julio de 2014, sumando la primera y la segunda opción. Los valores son bajos, al ser la etiqueta que menos adhesiones genera, pero destaca su estabilidad. De hecho, no hay una gran diferencia con los porcentajes que encontramos en los estudios de la Transición, que no eran mucho más altos, entre el 3,2 por 100 y el 4,4 por 100 (como primera opción), a pesar de existir un importante referente electoral claramente comunista, como era el PCE. Esta estabilidad se mantiene al margen de los resultados electorales del PCE y de sus referentes electorales. La evolución de este dato se mantiene dentro de los márgenes del error muestral. Sin embargo, si tomamos en consideración el conjunto de estudios realizados cada año podemos observar una tendencia creciente entre 2009 y 2013, estable entre 2013 y 2016 y ligeramente decreciente después. Los mejores datos coinciden con el periodo de mayor movilización social y electoral de la izquierda radical, pero sin observar grandes cambios. De esto podemos extraer una primera conclusión: la autoidentificación con el comunismo se mantiene estable, aunque es ligeramente favorecida por la movilización social y electoral de la izquierda.

Esta conclusión está relacionada con el hecho de que la ideología comunista representa solo una parte pequeña del votante de la izquierda radical. En las elecciones de noviembre de 2019, en base al estudio preelectoral del CIS, el 14 por 100 de los votantes de Unidas Podemos, el 6,1 por 100 de los votantes de los partidos de ámbito no estatal (PANE) de izquierda y centro-izquierda y el 7 por 100 de votantes de otras formaciones extraparlamentarias se identificaban en primera o segunda opción con el comunismo. Este dato tenemos que ubicarlo en relación con elecciones anteriores. El colectivo comunista tampoco era mayoritario entre los votantes de IU, aunque era más importante en los periodos de descenso[212]. Tampoco durante los años de la Transición la gran mayoría de los votantes del PCE se identificaban como comunistas[213]. Esto puede coincidir con una segunda conclusión: el voto comunista se sitúa en el núcleo duro del voto de la izquierda radical, dado que esta identificación es más fuerte entre su votante más fiel y sus afiliados, pero sin ser mayoritario entre el conjunto de sus votantes.

Veamos ahora el perfil sociodemográfico, laboral e ideológico de las personas que se identifican con el comunismo. Como podemos observar, la identificación con el comunismo es más fuerte entre los varones, las personas más jóvenes y las personas con estudios universitarios. Estas relaciones con el género, la edad y el nivel de estudios no son muy fuertes, pero sí son significativas. Por otro lado,

los comunistas suelen identificarse también con el feminismo (28,3 por 100), socialismo (26 por 100), ecologismo (20,1 por 100) o el progresismo (11,4 por 100).

Tabla 4. Porcentaje de personas que se autodefinen como comunistas* según sexo, edad, nivel de estudios, situación laboral, clase social subjetiva, religiosidad y voto

	% comunistas	(N)
Sexo		Situación laboral
Mujer	1,8%	9.058
Varón	3,0%	8.592
Edad		
18-34 años	2,8%	3.555
35-64 años	2,5%	9.501
65 y más años	1,8%	4.594
Nivel de estudios		Ocupación (sobre los que trabajan)
Primarios / Sin estudios	1,6%	3.919
Secundarios	2,4%	6.389
Formación Profesional	2,7%	3.316
Universidarios	2,8%	3.953
Otros / NC	2,7%	73

Clase social subjetiva		Ocup. elementales
Media-alta	2,1%	561
Media-media	1,7%	7.856
Media-baja	2,5%	3.405
Trabajadora	3,6%	4.210
Baja	3,3%	399
Otros	1,7%	1.219
Religiosidad		Cs
Católicos practicantes	,6%	4.404
Católicos no practicantes	1,4%	8.130
Otras religiones	1,6%	425
No creyente	6,0%	4.480
Otros	2,4%	211
Total	2,4%	17.650

▪

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Estudio 3263 del CIS.

* Como primera o segunda opción.

Hasta ahora nos hemos centrado en el perfil de los miembros de la subcultura política comunista en España, analizando la relación entre distintos factores sociodemográficos, laborales y actitudinales en la identificación con el comunismo. Pero muchos de estos factores superponen sus efectos, pues se relacionan entre sí. Para analizar el peso real de cada factor en la pertenencia a este grupo ideológico se realiza un análisis de dos variables. Pero para analizar los factores que tienen más peso en la identificación con el comunismo es necesario realizar análisis más sofisticados.

Si analizamos la relación entre variables categóricas, por medio de un análisis de correspondencias, observamos que la ideología comunista se sitúa en el extremo de dos ejes: el eje nuevo-viejo y el eje de clase. Las etiquetas con coordenadas más cercanas al comunismo son las de parados y trabajadores cualificados y semicualificados de la industria, lo que no significa que estos grupos sean los que tengan un mayor peso en el comunismo, sino que la combinación de respuestas es similar. Las ideologías con mayor asociación al comunismo son el ecologismo, por el lado del eje joven-viejo; y el socialismo, por el lado del eje de clase.

Si analizamos las características que aumentan la posibilidad de identificación con el comunismo, por medio del modelo de regresión logística, observamos que ser no creyente (ateo, agnóstico o simplemente no creyente), identificarse con la clase trabajadora y ser varón son los principales factores que inciden en la identificación con el comunismo. Incluso teniendo en cuenta la autoubicación ideológica con la izquierda, que es el factor con un peso mayor, estas variables continúan siendo significativas. Es decir, que dentro del campo de la izquierda la religiosidad, la clase y el sexo marcan el espacio del comunismo. Los factores sociodemográficos y sociolaborales tienen poco peso, lo cual es una conclusión importante en sí misma, pues podemos descartar que el nivel de estudios, la edad

o la situación laboral sean factores relevantes. No obstante, sería necesario replicar este análisis con una muestra aún mayor.

CONCLUSIONES

Consecuencia de la crisis provocada por la disolución de la URSS y la desaparición de gran parte de los estados socialistas en el mundo, el comunismo como corriente política debe entenderse, desde el punto de vista conceptual y metodológico, como una de las expresiones políticas que forman parte de la izquierda radical europea contemporánea.

Durante el periodo analizado el PCE se presenta bajo una identidad anticapitalista, defendiendo un programa antineoliberal, presentándose como el nexo de unión entre las tradiciones del movimiento obrero y los movimientos sociales y, de estos, con la izquierda política e institucional.

Apreciamos cómo el proyecto del Partido Comunista se presenta como alternativa a la globalización capitalista, defendiendo un programa centrado en la reivindicación de la paz, los derechos humanos, el Estado social y la democracia radical; proponiendo una identidad comunista polisémica, con la que entrar en relación con movimientos sociales y expresiones de rechazo a la crisis defendiendo la necesidad de un nuevo «renacer» del comunismo ante los límites de un capitalismo incapaz de atender las grandes demandas sociales o de ofrecer solución a los principales problemas, como son el paro estructural y la precariedad laboral generalizada, la crisis ecosocial o las demandas impulsadas desde el movimiento feminista de igualdad efectiva de las mujeres.

Del análisis de los diferentes discursos políticos realizados por el PCE durante el periodo estudiado, hemos constatado que los comunistas se presentan como un partido marxista, anticapitalista, republicano y federalista, que se dirige a una clase trabajadora plural y heterogénea, presentando una identidad comunista que se ha ido adaptando a cada coyuntura política mediante el despliegue de tres estrategias discursivas: la estrategia antiglobalizadora, la estrategia rupturista y la estrategia de unidad popular.

Constatamos que durante la estrategia antiglobalizadora (1996-2007) el PCE

afronta una reformulación estratégica profunda tras la crisis de los primeros años noventa, presentándose como un partido antineoliberal, centrando su trabajo político en la elaboración de un discurso crítico al capitalismo por medio de su relación con los movimientos antiglobalización. Durante esos años, el Partido Comunista centra sus campañas priorizando la escala internacional sobre la nacional, revisando sus alianzas sociales en favor de los movimientos sociales, sobre todo el movimiento antiglobalización, en detrimento de sus relaciones con CCOO, situando sus alianzas políticas a través de IU bajo la política de unidad de la izquierda.

Con la crisis de 2008, el PCE transita hacia una estrategia rupturista (2008-2016), donde realiza un detallado análisis marxista de las causas de la crisis, revisando su identidad política hacia una política centrada en la oposición a los recortes sociales y las políticas de ajuste, con la que nacionaliza su discurso y adopta una política basada en el conflicto capital-trabajo. De esta forma se relaciona con una sociedad en crisis por medio del empleo de un discurso socio económico primero (ASDA) y político rupturista después (proceso constituyente-ruptura con el Régimen del 78), en función del carácter adoptado por el conflicto social, priorizando primero las relaciones con CCOO y el movimiento sindical durante las tres huelgas generales (2010-2012), y otorgando protagonismo después a la participación dentro del movimiento del 15M durante el contexto de mayor expansión de las movilizaciones (2011-2014). En cuanto a las alianzas políticas, el PCE partió de la propuesta de refundación de la izquierda, con la que se pretendió relanzar IU como la expresión política del rechazo social a la crisis, pasando a una política de confluencia con el fin de relacionarse con la izquierda surgida del impulso del movimiento del 15M, como fueron las candidaturas de unidad popular municipalistas o la candidatura de IU-UP en Común. De este modo el PCE evoluciona desde su tradicional trabajo en IU, a la recuperación progresiva de su autonomía respecto de aquella (recuperación plena de sus competencias), centrando sus esfuerzos en no verse superado o excluido del auge de una izquierda nacida del 15M y que competía con IU.

Por último, el PCE plantea una estrategia de unidad popular (2017-2020), ante la constatación del reflujo de las movilizaciones sociales, la pérdida del predominio de IU dentro de la izquierda radical española y de cierta estabilización económica. En este punto los comunistas entienden que el país se enfrentaba a una disyuntiva entre la elección de una salida favorable a las fuerzas del régimen del 78 o una alternativa al mismo, alternativa que solo podía presentarse bajo

una política rupturista que el PCE denomina de revolución democrática. Así, los problemas derivados de la crisis no son coyunturales, sino estructurales y permanentes, frente a los cuales solo cabe una solución que rompa con las dos realidades que obstaculizan las demandas de la mayoría social, como son el régimen del 78 y la UE y el euro. El PCE defiende una estrategia discursiva que da prioridad a la coyuntura política, proponiendo una identidad en la que se presenta como un partido democratizador y defensor de la soberanía bajo una propuesta modernizadora ante un régimen agotado. Bajo la estrategia de la unidad popular, la política de ruptura democrática se inserta ahora dentro de un ciclo largo de cambios, que requiere de la reorganización de la respuesta a la crisis desde un plano social que se oponga a los recortes mediante la creación de un tejido social permanente (poder popular), un plano político a través de la articulación de un bloque social favorable a la ruptura democrática (movimiento político social) y un plano institucional que represente en términos electorales a dicho bloque (Unidas Podemos). Ante el auge de la ultraderecha, y en un contexto de crisis social derivada del coronavirus, el PCE defiende la entrada de UP en el gobierno para desarrollar una política de protección social (escudo social), alejada de las políticas de ajuste anteriores, entendiendo como necesaria la evolución de UP hacia un espacio político permanente que supere la fase de coalición electoral, y proponiéndose un posible tránsito hacia una nueva identidad comunista bajo una estrategia antifascista.

Los resultados de las diferentes estrategias discursivas empleadas se ponen en relación con las hipótesis presentadas al inicio del capítulo, constatando cómo el PCE ha desarrollado una estrategia relativamente coherente durante estas dos décadas y media, con la que ha intentado afrontar sucesivas crisis y una situación de debilidad política y organizativa con la que arrancó en los años noventa. En cada estrategia discursiva se aprecia una revisión de la identidad comunista que, sin cuestionar su carácter de partido marxista, anticapitalista y republicano, intenta adaptar el discurso político comunista hacia la consecución de tres objetivos: su reconstrucción organizativa, la creación de un bloque social amplio y electoralmente exitoso y la reorientación de su proyecto hacia una nueva base social, formada por una clase trabajadora marcada por la precariedad laboral.

Los resultados de cada una de las estrategias analizadas han permitido la supervivencia del PCE, aunque en una situación muy delicada, en términos electorales, políticos y sociales, siendo el balance en cada línea el siguiente.

Primero, se ha recuperado parcialmente la estructura organizativa y se ha

producido un importante relevo generacional en el Partido Comunista, pero sin detener la pérdida de militancia. Segundo, la estrategia de alianzas ha permitido, en el plano electoral, la supervivencia de la organización y, en el plano social, la participación en todos los ciclos de movilización con una estrategia coherente y la recuperación de la relación con CCOO y la participación con los movimientos sociales protagonistas en cada momento, como el antiglobalización, los movimientos contra los recortes o el 15M. Pero no se ha plasmado en la construcción del pretendido bloque social amplio, de un movimiento político y social que transcendiese lo electoral y que redujese el predominio de la política institucional, repitiendo las limitaciones de IU con, además, una pérdida de centralidad del PCE en su frente amplio de intervención política. Tercero, la búsqueda de una nueva base social se ha plasmado en una renovación de la base social e ideológica comunista, pero sin conseguir ampliarla, teniendo su base ideológica un carácter de subcultura política, muy limitada numéricamente, pero también muy diferenciada del resto de ideologías.

A lo largo de estas páginas hemos intentado analizar la evolución ideológica que experimenta el PCE en el presente siglo, siendo interesante la forma en que se relaciona con su tradición ideológica, apreciando el modo en que las estrategias seguidas suponen una matización, pero no una ruptura con el periodo anterior. A lo largo del trayecto analizado, los análisis sociológicos, reflexiones acerca del Estado o estudios económicos hablan de los problemas del país en términos de intereses sociales contrapuestos, haciendo del marxismo el método de análisis privilegiado, pero también una expresión procedente de una tradición política arraigada en la propia identidad del Partido Comunista, que ha hecho de la reafirmación del análisis de clase primero, y la recuperación del término «leninista» después, un ejercicio de reafirmación de identidad política y no tanto una estrategia de acción política concreta.

La utilización de la ideología como elemento identitario se constata particularmente durante la estrategia rupturista, con el empleo de un imaginario de reafirmación política a través del concepto de ruptura frente a reforma, donde la acción política del presente se ponía en relación con el pasado (el papel del PCE en la Transición), pero también durante la estrategia de unidad popular, en que las apelaciones a la construcción del poder popular se emplean también como un elemento simbólico, frente a la mayor implicación en responsabilidades institucionales de numerosos dirigentes comunistas.

Lo anterior son solo casos particulares que hablan de la rica tradición de

reformulaciones ideológicas existentes en el PCE, que explican el éxito en la adopción de cambios y adaptaciones del discurso político comunista a la coyuntura presente. Solo por mencionar algunos ejemplos, la integración de las referencias del ecologismo político a una nueva identidad comunista serían vistas como el desarrollo de la tradición marxista española expresada por Manuel Sacristán o Fernández Buey, o la apuesta por el movimiento antiglobalización o del 15M se relaciona con la experiencia en el impulso de las Comisiones Obreras durante el franquismo. Pero de todos los ejemplos de reformulaciones destacamos los conceptos adoptados a finales de los ochenta, como el de política de convergencia y movimiento político y social, conceptos políticos empleados para definir la política de alianzas del PCE, los cuales generan un imaginario político flexible, empleado como legitimador histórico, en que el PCE se presenta como el partido de la unidad de la izquierda (Frente Popular, CCOO, IU, Unidas Podemos); de puesta en práctica de fórmulas organizativas novedosas y más flexibles que la tradicional del partido político, pero que no cuestiona a su vez la continuidad del PCE; o como fórmulas que adaptan al Partido Comunista a cada ciclo político, habitándole a buscar alianzas políticas y electorales más amplias.

Finalmente, las diferentes estrategias seguidas por el PCE durante los años analizados no fueron la respuesta mecánica a cambios exógenos, sino que tuvieron mucho que ver con los cambios en su composición social y configuración sociológica, con las tensiones entre las diferentes culturas militantes existentes en su seno o pugnas internas y con las coyunturas de movilización social y políticas electorales que se sucedieron y de las que los comunistas no querían quedar aislados.

Pese a la pérdida de relevancia respecto a décadas anteriores, el PCE sigue influyendo en la política española, en particular dentro de la izquierda política, los movimientos sociales y CCOO, contribuyendo de manera influyente a la existencia de una izquierda anticapitalista en España, contribución que entraña al mismo tiempo su aún inacabada metamorfosis.

▪

PAÍSES: SIGLAS DE LOS PARTIDOS Y COALICIONES (TRADUCCIÓN AL CASTELLANO)

Albania: PKSH (Partido Comunista de Albania) y PS (Partido Socialista). Alemania: SED (Parrido Socialista Unificado de Alemania) y PDS (Parrido del Socialismo Democrático). Austria: KPÖ (Partido Comunista de Austria). Belarus: KPB (Partido Comunista de Belaus). Bélgica: PTB-PvdAa (Partido del Trabajo de Bélgica). Bosnia y Herzegovina: SK BiH (Liga de los Comunistas de Bosnia y Herzegovina) y SDP (Partido Sociademócrata de Bosnia y Herzegovina). Bulgaria: BKP (Partido Comunista Búlgaro) y BSP (Partido Socialista Búlgaro). Chequia: KSC (Partido Comunista de Checoslovaquia) y KSCM (Partido Comunista de Bohemia y Moravia). Chipre: AKEL (Partido Progresista del Pueblo Trabajador). Croacia: SKH (Liga de los Comunista de Croacia), SDP (Partido Sociademócrata de Croacia) y LF (Nueva Izquierda). Dinamarca: DKP (Partido Comunista de Dinamarca), SF (Partido Popular Socialista) y EL (Lista Unida – Los Roji-Verdes). Eslovaquia: KSC (Partido Comunista de Checoslovaquia) y KSS (Partido Comunista de Eslovaquia). Eslovenia: ZKS (Liga de los Comunistas de Eslovenia), SDP (Partido Democrático de las Reformas Eslovenas), ZL (Izquierda Unida) y Levica (La Izquierda). Finlandia: SKDL (Liga Democrática Popular de Finlandia) y Vas (Alianza de la Izquierda). Francia: PCF (Partido Comunista Francés). Grecia: KKE (Partido Comunista de Grecia), SYN (Coalición de los Movimientos de Izquierda y Ecológicos) y Syriza (Coalición de la Izquierda Radical). Hungría: MSZMP (Partido Socialista Obrero Húngaro) y MSZP (Partido Socialista Húngaro). Irlanda: CPI (Partido Comunista de Irlanda), WP (Partido de los Trabajadores de Irlanda), DL (Izquierda democrática) y LP (Partido Laborista). Islandia: Ab (Alianza Popular), S (Alianza Socialdemócrata) y VG (Movimiento de Izquierda-Verde). Italia: PCI (Partido Comunista Italiano), PDS (Partido Democrático de la Izquierda), PRC (Partido de la Refundación Comunista), MCU (Movimiento de los Comunistas Unitarios), DS (Demócratas de Izquierda), PdCI (Partido de los Comunistas Italianos), SEL (Izquierda Ecología Libertad) y SI (Izquierda italiana). Luxemburgo: KPL/PCL (Partido Comunista de Luxemburgo) y Déi Lénk (La Izquierda). Macedonia Norte: CKJ (Liga de los Comunistas de Macedonia), SDSM (Unión Socialdemócrata de Macedonia) y Levica (La Izquierda). Moldavia: PCRM (Partido Comunista de la República de Moldavia). Montenegro: SKCG (Liga de los Comunistas de Montenegro) y DPS (Partido Socialdemócrata de Montenegro). Noruega: NKP (Partido Comunista de Noruega), SV (Partido de Izquierda Socialista), AKP (Partido Comunista de los Trabajadores), RV (Alianza Electoral Roja) y R (Partido Rojo). Países Bajos: CPN (Partido Comunista de los Países Bajos), KPN/ML (Partido Comunista de

los Países Bajos/Marxista-Leninista), SP (Partido Socialista) y GL (Izquierda Verde). Polonia: PZPR (Partido Obrero Unificado Polaco) y SdPR (Partido Socialdemócrata de la República de Polonia). Portugal: PCP (Partido Comunista Portugués), UDP (Unión Democrática Popular) y BE (Bloque de Izquierdas). Rumanía: PCR (Partido Comunista Rumano). Rusia: KP RSFSR (Partido Comunista de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia), KPSS (Partido Comunista de la Unión Soviética) y KPRF (Partido Comunista de la Federación Rusa). San Marino: PCS (Partido Comunista Sanmarinense), PPDS (Partido Progresista Democrático Sanmarinense) y RCS (Refundación Comunista Sanmarinense). Serbia: SKJ (Liga de los Comunistas de Serbia) y SPS (Partido Socialista de Serbia). Suecia: VPK (Partido de la Izquierda – Comunistas) y V (Partido de la Izquierda). Suiza: PdA-PST-PdL-PSL (Partido Suizo del Trabajo). Ucrania: KPU (Partido Comunista de Ucrania).

▪

[1] Ludolfo Paramio, Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo, Madrid, Siglo XXI de España, 1998.

[2] Javier Navascués, «Dos Proyectos En IU. Política de Alianzas o Reconversión “Post-Comunista”», Papeles de La FIM 24 (2006); Luis Ramiro Fernández, Electoral Incentives and Organisational Limits. The Evolution of the Communist Party of Spain (PCE) and the United Left (IU), Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2002; Luis Ramiro-Fernández, «Electoral Competition, Organizational Constraints and Party Change: The Communist Party of Spain (PCE) and United Left (IU), 1986-2000», Journal of Communist Studies and Transition Politics 20.2 (2004), pp. 1-29; Luis Ramiro Fernández, Cambio y Adaptación En La Izquierda: La Evolución Del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida (1986-2000), Madrid, CIS, 2004.

[3] Luke March, Radical Left Parties in Europe, Abingdon, Routledge, 2011; Raúl Gómez, Laura Morales y Luis Ramiro, «Varieties of Radicalism: Examining the Diversity of Radical Left Parties and Voters in Western Europe», West European Politics 39.2 (2016), pp. 351-379; Jonathan Olsen, Dan Hough y Michael Koß, «Left Parties in National Governments», en Left Parties in National Governments, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 173-185.

[4] L. March, op. cit.

[5] Luis Ramiro, «Support for Radical Left Parties in Western Europe: Social Background, Ideology and Political Orientations», European Political Science Review 8.1 (2016), pp. 1-23.

[6] L. March, Radical Left.

[7] Ibid.

[8] Kate Hudson, The New European Left: A Socialism for the Twenty-First Century?, The New European Left: A Socialism for the Twenty-First Century?, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012; Giorgos Charalambous, «The Strongest Communists in Europe: Accounting for AKEL's Electoral Success», Journal of Communist Studies and Transition Politics 23.3 (2007), pp. 425-456.

[9] L. March, Radical Left.

[10] L. Ramiro, «Support for Radical Left Parties in Western Europe».

[11] L. Ramiro, «Support for Radical Left Parties in Western Europe».

[12] Raúl Gómez y Luis Ramiro, «Beyond the 2008 Great Recession: Economic Factors and Electoral Support for the Radical Left in Europe», Party Politics 25.3 (2019), pp. 358-368.

[13] Ibidem.

[14] Susan Scarrow, Beyond Party Members, Oxford, Oxford University Press, 2015.

[15] Luis Ramiro y Laura Morales, «Examining the "demand" Side of the Market for Political Activism: Party and Civil Society Grassroots Activists in Spain», Party Politics 20.4 (2014), pp. 506-520.

[16] Birgit Daiber, Cornelia Hildebrandt y Anna Striethorst, From Revolution to Coalition - Radical Left Parties in Europe, Manuskripte, Berlín, Rosa-Luxemburgo-Foundation, 2013.

[17] S. Scarrow, Beyond Party Members.

[18] Philippe Corcuff y Lilian Mathieu, «Partidos y movimientos sociales: de las

ilusiones de la “actualidad” a una puesta en perspectiva sociológica», Cultura y Representaciones Sociales 5.10 (2011), pp. 7-30.

[19] Luis Ramiro y Tània Verge, «Impulse and Decadence of Linkage Processes: Evidence from the Spanish Radical Left», South European Society and Politics 18.1 (2013), pp. 41-60.

[20] Paola Bordandini, «Renewal and Tradition: Comparing Italian Radical Left Parties through Their Middle-Level Elites», South European Society and Politics 18.1 (2013), pp. 61-79.

[21] Marco Lisi, «Rediscovering Civil Society? Renewal and Continuity in the Portuguese Radical Left», South European Society and Politics, 18.1 (2013), pp. 21-39.

[22] L. Ramiro y T. Verge, «Impulse and Decadence».

[23] L. Ramiro y L. Morales, «Examining the “demand” side of the Market…»

[24] L. March, op. cit.

[25] Dan Hough y Tània Verge, «A Sheep in Wolf’s Clothing or a Gift from Heaven? Left-Left Coalitions in Comparative Perspective», Regional and Federal Studies 19.1 (2009), pp. 37-55.

[26] L. March, op. cit.

[27] B. Daiber, C. Hildebrandt, y A. Striethorst, op. cit.

[28] M. Lisi, «Rediscovering».

[29] L. Ramiro, «Support for Radical Left Parties in Western Europe».

[30] R. Gomez y L. Ramiro, «Beyond the 2008».

[31] Luis Ramiro y Raúl Gómez, «Radical-Left Populism during the Great Recession: Podemos and Its Competition with the Established Radical Left», Political Studies 65.1_suppl (2017), pp. 108-126.

[32] José Fernández-Albertos, Los votantes de Podemos. Del partido de los

indignados al partido de los excluidos, Madrid, Catarata, 2015; David Hanley, «Left and Centre-Left in France - Endgame or Renewal?», Parliamentary Affairs, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 521-537.

[33] Luis Ramiro y Jaime Aja Valle, «The Left in the Storm: The Radical Left and the Elections in Spain», en United Europe, Divided Europe - Transform! Yearbook, Londres, The Merlin Press, 2015.

[34] D. Hanley, «Left and Centre-Left».

[35] L. Ramiro y R. Gómez, «Radical Left Populism».

[36] Jonathan Olsen, Dan Hough y Michael Koß, «From Pariahs to Players? Left Parties in National Governments», en Left Parties in National Governments, Londres, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 1-15.

[37] D. Hough y T. Verge, «A Sheep».

[38] J. Olsen, D. Hough y M. Koß, «From Pariahs».

[39] D. Hough y T, Verge, «A Sheep».

[40] Estas dificultades no son exclusivas de Europa y de partidos pequeños. En la India o Sudáfrica los partidos comunistas asumen riesgos similares, como la dificultad para conciliar la práctica gubernamental con la identidad, o las tensiones que se pueden generar con los movimientos sociales de referencia. Para más información, véase Luke Sinwell, «“Transformative Left-Wing Parties” and Grassroots Organizations: Unpacking the Politics of “Top-down” and “Bottom-up” Development», Geoforum 43.2 (2012), pp. 190-198; Hans Löfgren, «The Communist Party of India (Marxist) and the Left Government in West Bengal, 1977-2011: Strains of Governance and Socialist Imagination», Studies in Indian Politics 4.1 (2016), pp. 102-115.

[41] L. March, op. cit.

[42] Raúl Gómez, Laura Morales y Luis Ramiro, «Varieties of Radicalism: Examining the Diversity of Radical Left Parties and Voters in Western Europe», West European Politics 39.2 (2016), pp. 351-379.

[43] Gómez, Morales y Ramiro, «Varieties of Radicalism».

[44] Veáse el anexo de siglas al final de este capítulo.

[45] Ibid.

[46] A. Gómez, L. Quiñones y U. Winter (eds.), Cruzar la línea roja. Hacia una arqueología del imaginario comunista ibérico (1930-2017), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2017, p. 26.

[47] Se trata de las elecciones municipales celebradas el 8 de mayo de 1983, en las que el PCE obtuvo 1.513.023 votos (8,48 por 100). Ver Real Decreto 2322/1983, de 15 de junio.

[48] J. Andrade, «A propósito de la idea de comunismo: Una síntesis crítica de la New York Conference de 2011», Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM 1 (2016), pp. 162-173 [http://www.fim.org.es/media/2/2304.pdf].

[49] Al respecto véase Slavoj Žižek (ed.), La idea de comunismo. The New York Conference, Madrid, Akal, 2011; Alex Taek-Gwang Lee y Slavoj Žižek (eds.), La idea de comunismo. The Seul Conference, Madrid, Akal, 2013; Andrew Pendakis e Imre Szeman, «Introduction: Marxisms Lost and Found», en Andrew Pendakis, Jeff Diamanti, Nicholas Brown, Josh Robinson e Imre Szeman (eds.), Contemporary Marxist Theory. A Reader, Bloomsbury, Nueva York, 2014, pp. 1-17; El-Ojeili, Chamsy, Beyond Post-Socialism. Dialogues witch the Far-Left, Nueva York, Palgrave, 2015; Peter Sherman, Rethinking Soviet Communim, Nueva York, Palgrave, 2015.

[50] R. Maiz, «La guerra de las palabras: marcos interpretativos y estrategias identitarias en el discurso político del EZLN (1994-2007)», en S. Marti i Puig (ed.), Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus derecho y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI, Barcelona, Fundació CIDOB, 2007.

[51] Ibid., p. 400.

[52] Ibid., p. 401.

[53] Ibid.

[54] El nombre completo era «Por una Izquierda Unida anticapitalista, republicana, federal y alternativa, organizada como movimiento político y social.

República, Estado federal y socialismo del siglo XXI», conocido como de los cien, al ser firmado por cerca de un centenar de miembros del Consejo Político Federal de IU y que los comunistas asumieron como «documento de referencia», véase PCE, Conferencia Política del PCE. Fortalecer al PCE, construir la alternativa, 2008, p. 6.

[55] J. Andrade, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Siglo XXI España, Madrid, 2012, p. 49.

[56] El propio PCE se define como «Partido de clase, marxista, anticapitalista, republicano y federalista», véase E. Sánchez, Del XVIII Congreso a la Alternativa Social, Democrática y Anticapitalista a la crisis, Colección formación PCE, Cuaderno número 4, Comité Federal, Secretaria de Formación, 2013, p. 7-8.

[57] P. Ricoeur, Ideología y utopía, Barcelona, Gedisa, 2001, p. 51.

[58] J Andrade, El PCE y el PSOE, pp. 107-112.

[59] PCE, Documentos políticos XV Congreso, 1998, p. 8.

[60] PCE, Documentos políticos XVI Congreso, 2002, p. 18.

[61] Sobre las referencias al anarquismo véase PCE, XVII Congreso del PCE, Información del Comité Federal, número 42, 2005, p. 14.

[62] PCE, Documentos de la I Fase del XX Congreso, Información del Comité Federal del PCE, número 51, 2016, p. 20.

[63] D. Harvey, Nuevo Imperialismo, Madrid, Akal, 2004.

[64] J. Petras, Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles, 1996 [https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/informe-petras.pdf].

[65] Al respecto léase el apartado «9.5 La redefinición de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura», en PCE, Conferencia Política, 2012, cit., pp. 109-114.

[66] Un ejemplo fue el lema electoral «El poder de la gente» con el que IU

acudió a las elecciones europeas de 2014.

[67] PCE, Documentos políticos XVI Congreso, 1999, p. 14.

[68] Ibid., p. 5.

[69] Así, el PCE afirma: «La sociedad socialista para el PCE es una sociedad democrática […] Es una sociedad democrática porque quiere cohesionar a una mayoría social de progreso y debe actuar en coherencia perpetua con esa base», ibid., p. 20.

[70] Ibid., p. 14.

[71] IU, Por una IU anticapitalista, p. 8.

[72] Ibid., p. 7.

[73] PCE, Fortalecer el PCE, construir la alternativa, Conferencia Política, 2008, p. 3.

[74] PCE, Propuestas para una Alternativa social y anticapitalista a la crisis, Comité Ejecutivo, 19 de diciembre de 2010.

[75] PCE, Tesis políticas XIX Congreso del PCE. Tesis 3. La línea política del PCE, 2013, pp. 34-35.

[76] A. Gómez L. Quiñones y U. Winter (Eds.), Cruzar la línea roja. Hacia una arqueología del imaginario comunista ibérico (1930-2017), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2017, p. 15.

[77] PCE, Documento político XVI Congreso, p. 22.

[78] Véase PCE, Documentos políticos XVII Congreso, p. 2.

[79] Véase PCE, Documentos políticos XVIII Congreso, p. 50, e IU, Por una IU anticapitalista, p. 11.

[80] Véase PCE, Documentos políticos XVIII Congreso, pp. 50-51.

[81] E. Sánchez, Del XVIII Congreso a la Alternativa Social, Democrática y Anticapitalista a la crisis, pp. 7-8.

[82] A tal efecto es interesante leer «La conexión Robespierre-Marx» en PCE, Documentos políticos XVII Congreso, p. 13.

[83] PCE, Documento político del XX Congreso, 2017, pp. 1-4.

[84] J. Anguita, Mitin Fiesta del PCE, p. 3, Archivo UJCE.

[85] IU, Por una IU anticapitalista, p. 10.

[86] J. Anguita. Mitin Fiesta del PCE, p. 8.

[87] PCE, Documentos Políticos del XVIII Congreso, p. 45.

[88] PCE, Tesis políticas XIX Congreso del PCE, p. 95.

[89] PCE, Documentos Políticos del XV Congreso, p. 36.

[90] PCE, Documentos Políticos XVII Congreso, p. 44.

[91] PCE, Hacia un Estado Federal, p. 4.

[92] IU, Por una IU anticapitalista, p. 10.

[93] PCE, Tesis políticas del XIX Congreso del PCE, p. 97.

[94] PCE, Documentos Políticos del PCE del XVIII Congreso, p. 45.

[95] Un ejemplo lo podemos encontrar en PCE, Documentos Políticos del XVI Congreso, p. 19.

[96] PCE, Conferencia de Organización, 2004.

[97] PCE, Documentos políticos del XV Congreso, p. 12.

[98] PCE, Hacia un Estado Federal, p. 5.

[99] PCE, Documentos políticos del XVIII Congreso, 2009, p. 45.

[100] PCE, Tesis política del XIX Congreso: Tesis 7. Sobre el federalismo, nuestro modelo de Estado, 2013, pp. 94-103.

[101] PCE, Documentos XX Congreso, 2017, p. 20.

[102] PCE, Hacia un Estado Federal, Comité Federal ampliado, 21 febrero 1997, p. 3.

[103] PCE, Documentos políticos del XVIII Congreso, 2009, p. 43.

[104] Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, presentado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el 25 de octubre de 2003, aprobado por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004.

[105] Fórmula que se repite en lo sustancial en los documentos políticos aprobados en XV, XVI y XVII Congresos del PCE.

[106] PCE, Documentos políticos del XX Congreso, 2017, p. 16.

[107] PCE, Documentos políticos del XVIII Congreso, 2009, p. 46.

[108] PCE, Hacia un Estado Federal, Comité Federal ampliado, 21 de febrero 1997.

[109] PCE, Tesis políticas del XIX Congreso, 2013, p. 68.

[110] G. Therborn, Ideología del poder y el poder de la ideología, Madrid, Siglo XXI de España, 1987, pp. 93-94.

[111] Fue elegido secretario general del PSUC en el V Congreso celebrado en 1981.

[112] PCE, Documento político XV Congreso, 1998, p. 3.

[113] PCE, Documento político XVI Congreso, 2002, p. 1.

[114] Ibid.

[115] PCE, Documento político XV Congreso, p. 2.

[116] PCE, Documento político XVI Congreso, p. 1.

[117] Ibid., p. 32.

[118] Ibid., pp. 33-34.

[119] Ibid., pp. 42-43.

[120] Ibid., p. 42.

[121] Ibid., p. 36.

[122] Ibid., p. 12.

[123] En relación a los análisis y propuestas frente a la globalización, ibid., pp. 1-3, o PCE, XVII Congreso del PCE, Información del Comité Federal, número 2, 2005, pp. 17-20.

[124] Véase PCE, Documento político XVI Congreso, pp. 4-7, y PCE, XVII Congreso del PCE, Información del Comité Federal, número 42, 2005, pp. 21-24.

[125] PCE, Documento político XVI Congreso, p. 15.

[126] PCE, XVII Congreso del PCE, Información del Comité Federal, pp. 21-24.

[127] PCE, XVII Congreso del PCE, Información del Comité Federal, p. 20.

[128] Ibid., p. 20.

[129] PCE, Documento político XVI Congreso, p. 12.

[130] PCE, XVII Congreso del PCE, Información del Comité Federal, p. 45.

[131] Archivo de la Junta Electoral Central.

[132] Elecciones en las que IU obtuvo seis eurodiputados, cuatro más que en las anteriores elecciones.

[133] Partido presentado en Madrid el 11 de marzo de 2014.

[134] PCE, Documento político XVIII Congreso, Información del Comité Federal, número 48, 2009, p. 24.

[135] PCE, Conferencia Política, Secretaría de Comunicación, Comité Federal,

2012, p. 53.

[136] Ibid., p. 53.

[137] Ibid., pp. 55-56.

[138] Ibid., pp. 52-53.

[139] PCE, Documento político XVIII Congreso, p. 24.

[140] PCE, Conferencia Política, 2012, p. 33.

[141] PCE, Documento político XVIII Congreso, p. 25.

[142] PCE, Tesis políticas XIX Congreso, Secretaría de Comunicación, Comité Federal, 2013, p. 33.

[143] Véase «Medidas para hacer posible una salida democrática a la crisis», PCE, Documento político XVIII Congreso, pp. 14-18, y PCE, Propuestas para una Alternativa Social y Anticapitalista a la crisis, Comité Ejecutivo, 19 de diciembre de 2010.

[144] Para una primera formulación del ASDA véase PCE, Conferencia Política, 2012, pp. 62-68, y PCE, Tesis políticas XIX Congreso, 2013, pp. 33-40.

[145] Ibid., 2013, pp. 33-34.

[146] Ibid., p. 34.

[147] PCE, Conferencia Política, 2012, p. 63.

[148] Ibid., pp. 34-46.

[149] Ibid., p. 69.

[150] PCE, Tesis políticas XIX Congreso, 2013, p. 40.

[151] PCE, Conferencia Política, 2012, p. 69.

[152] PCE, Documento político del XVIII Congreso, p. 52.

[153] PCE, Conferencia política. Fortalecer el PCE. Construir la alternativa, 2008, p. 15.

[154] PCE, Documento político del XVIII Congreso, 2013, p. 54.

[155] PCE, Conferencia Política, 2012, p. 121, y PCE, Documento político del XVIII Congreso, p. 56.

[156] PCE, Hacia la Jornada de Protesta Cívica, Comisión Permanente, 28 de julio de 2011, p. 7.

[157] PCE, Informe de conclusiones sobre el encuentro de activistas sociales y sindicales del PCE-UJCE, Comisión coordinadora de la participación en el movimiento 15-M, Secretaría General del PCE, 10 de septiembre de 2011, pp. 3-4.

[158] PCE, Hacia la Jornada de Protesta Cívica, 2011, p. 4.

[159] PCE, Análisis y tareas en el movimiento 15M, Comisión coordinadora de la participación en el movimiento 15-M, Secretaría General del PCE, 17 de julio de 2011, p. 2.

[160] Se refiere a la huelga general convocada el 29 de septiembre de 2010.

[161] PCE, Hacia la Jornada de Protesta Cívica, 2011, pp. 8-9.

[162] PCE, Informe de conclusiones sobre el encuentro de activistas sociales y sindicales del PCE-UJCE, Comisión coordinadora de la participación en el movimiento 15-M, 2011, p. 7.

[163] Las direcciones políticas de IU y Podemos alcanzan un acuerdo para acudir de forma conjunta a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 bajo la candidatura de Unidas Podemos cambiar Europa, así como para las elecciones generales celebradas en abril y noviembre de 2019 bajo la coalición Unidas Podemos.

[164] El PCE participa en el Gobierno con dos ministros: Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta Tercera, y Alberto Garzón, ministro de Consumo.

[165] PCE, Documentos de la I Fase del XX Congreso, Información del Comité Federal del PCE, número 51, 2016, p. 4.

[166] Ibid., pp. 16-17.

[167] PCE, Documentos de la II Fase del XX Congreso, 2017, p. 18.

[168] PCE, Documentos de la I Fase del XX Congreso, 2016, p. 5.

[169] PCE, Documentos de la II Fase del XX Congreso, 2017, pp. 17-19.

[170] PCE, Documentos de la I Fase del XX Congreso, 2016, p. 4.

[171] Ibid., p. 16.

[172] Ibid., p. 26, y PCE, Documentos de la II Fase del XX Congreso, 2017, p. 18.

[173] Ibid., p. 56.

[174] PCE, Documentos de la I Fase del XX Congreso, 2016, cit., p. 26.

[175] Ibid., p. 27.

[176] PCE, Documentos de la II Fase del XX Congreso, 2017, pp. 18.19.

[177] Ibid., pp. 20-24.

[178] PCE, Documentos de la I Fase del XX Congreso, p. 19.

[179] PCE, Documentos de la II Fase del XX Congreso, p. 25.

[180] Ibid., pp. 53-60.

[181] Ibid., pp. 53-55.

[182] Ibid., pp. 54-56.

[183] Ibid., p. 57.

[184] Ibid., pp. 56 y 60.

[185] PCE, Documentos de la I Fase del XX Congreso, p. 41.

[186] PCE, Documentos de la II Fase del XX Congreso, p. 57.

[187] Ibid., p. 58.

[188] Ibid., p. 60.

[189] Concepto que aparece por primera vez en ibid., p. 6.

[190] PCE, Conferencia política del PCE. Un Partido para la unidad popular: nuestras alianzas en la nueva fase política, 2020, p. 6.

[191] Ibid., p. 6-9.

[192] P. Bordandini, «Renewal and Tradition».

[193] Ibid.

[194] Irene Palacios Brihuega, Jaime Aja Valle y Luis Ramiro Fernández, El Espacio Electoral de Izquierda Unida: Las Elecciones Generales de 2004, Argumentos de La FEC, Madrid, 2014.

[195] L. Ramiro y R. Gómez, «Radical-Left Populism».

[196] PCM, Resolución del Comité Central del 12 de Abril de 2015, 2015.

[197] Jaime Aja Valle, «Tras el cambio de ciclo electoral, llega la hora de la militancia: análisis de las elecciones de 2019», Nuestra Bandera 243 (2019), pp. 71-79.

[198] L. March, Radical Left Parties.

[199] L. Ramiro y J. Aja, «The Left in the Storm».

[200] I. Palacios Brihuega, J. Aja Valle y L. Ramiro Fernández, El espacio electoral; Juan Jesús González Rodríguez, «Las bases sociales de la política española», Revista Española de Sociología, 2004, pp. 119-142; Jaime Aja Valle, «El espacio electoral de la izquierda en España: las elecciones generales de 2000», Apuntes Electorales, 2003, 55-109; L. Ramiro, «Support for Radical Left Parties in Western Europe».

[201] De esta manera, el voto de IU en las elecciones de 2015 se correlaciona significativamente con el voto de PCE e IU en todas las elecciones anteriores, con valores superiores al 0,563, salvo en las atípicas elecciones de 2004.

[202] El voto provincial de UP en noviembre de 2019 no se correlaciona significativamente con el voto del PCE en 1977, 1979 y 1982, ni con el voto de IU de 1986 y 2015.

[203] Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, «El sustrato electoral comunista en España (1977-2012)», Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales 16.16 (2016), pp. 33-46.

[204] Juan Linz y otros, Atlas electoral del País Vasco y Navarra, Madrid, CIS, 1981.

[205] El estudio fue realizado por iniciativa de la secretaria de análisis electoral de IU y bajo la dirección de Luis Ramiro.

[206] Agradecemos a la secretaria de organización del PCE que nos ha permitido tener acceso a estos datos.

[207] Susan Scarrow, Beyond Party Members, Oxford, Oxford University Press, 2015; Birgit Daiber, Cornelia Hildebrandt y Anna Striethorst, From Revolution to Coalition - Radical Left Parties in Europe, Manuskripte, Berlin: Rosa-Luxemburgo-Foundation, 2013.

[208] Luis Ramiro, «Support for Radical Left Parties in Western Europe: Social Background, Ideology and Political Orientations», European Political Science Review 8.1 (2016), pp. 1-23.

[209] ICP / Research, Encuesta a la militancia del PCE (Madrid, 1991).

[210] R. Gómez y otros, «Joining the Party: Incentives and Motivations of Members and Registered Sympathizers in Contemporary Multi-Speed Membership Parties», Party Politics, 2019.

[211] P. Bordandini, op. cit.

[212] Aja Valle, «El espacio electoral de la izquierda en España: las elecciones generales de 2000», cit.

[213] Richard Gunther, «Los Partidos Comunistas de España», en Juan J. Linz y José R. Montero (eds.), Crisis y cambio. Electores y partidos en la España de los años ochenta, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 493-524.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AB	Alianza Popular (Islandia).
AGA	Archivo General de la Administración.
AGE	Agrupación de Guerrilleros Españoles.
AGLA	Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón.
AHCONC	Arxiu Històric de la CONC / Archivo Histórico de la CONC.
AHFFLC	Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballer
AHPCE	Archivo Histórico del PCE.
AHPCEx	Archivo Histórico del Partido Comunista de Extremadura.
AHT	Archivo Histórico del Trabajo (Fundación 1.o de Mayo).
AKEL	Partido Progresista del Pueblo Trabajador (Chipre).
AKP	Arbeidernes Kommunistparti / Partido Comunista de los Trab
AMA	Agrupación de Mujeres Antifascistas.
ANC	Arxiu Nacional de Catalunya / Archivo Nacional de Cataluña
AP	Alianza Popular.
APE / APEs	Asociaciones Profesionales de Estudiantes.
ASA	Archivo Santiago Álvarez.
ASDA	Alternativa Social Democrática y Anticapitalista a la crisis.
ASM	Agrupación Socialista Madrileña.
AST	Acción Sindical de los Trabajadores.
ASU	Asociación Socialista Universitaria.
BE	Bloco de Esquerda (Portugal).
BKP	Bulgarian Communist Party / Partido Comunista de Bulgaria
BM	Banco Mundial.
BOC	Bloc Obrer i Camperol / Bloque Obrero y Campesino.
BP	Buró Político.
BR	Bandera Roja.
BSP	Bulgarian Socialist Party / Partido Socialista Búlgaro.
CAME	Consejo de Ayuda Mutua Económica.

CC	Comité Central.
CC OO	Comisiones Obreras.
CDMH	Centro Documental de la Memoria Histórica.
CE	Comité Ejecutivo.
CE	Comunidad Europea.
CEDA	Confederación Española de Derechas Autónomas.
CEIC	Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista.
CEOE	Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
CF	Comité Federal.
CGIL	Confederazione Generale Italiana del Lavoro / Confederació
CGT	Confederación General del Trabajo (España).
CGT	Confédération Général du Travail / Confederación General d
CGTP	Central General de Trabajadores de Portugal.
CGTU	Confederación General del Trabajo Unitaria.
CIA	Agencia Central de Inteligencia.
CIDOB	Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona
CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas.
CiU	Convergència i Unió.
CKJ	Liga de los Comunistas de Macedonia
CNM	Consejo Nacional del Movimiento.
CNT	Confederación Nacional del Trabajo.
CONC	Comissió Obrera Nacional de Catalunya / Comisión Obrera
CPI	Communist Party of Ireland / Partido Comunista de Irlanda.
CPN	Communistische Partij van Nederland / Partido Comunista d
CUDE	Confederación Universitaria Democrática Española.
CUP's	Candidaturas de Unidad Popular.
DAR	Departamento de Afiliación y Recaudación.
DERD	Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos.
DKP	Danmarks Kommunistiske Parti / Partido Comunista de Dina
DL	Democratic Left / Izquierda Democrática (Irlanda).
DP	Democrazia Proletaria / Democracia Proletaria (Italia).
DPS	Montenegro Demokratska Partija Socijalista Crne Gore / Par
DRY	Democracia Real Ya.

DS	Democratici di Sinistra / Demócratas de Izquierdas (Italia).
DST	Direction de Surveillance du Territoire / Dirección de Vigilan
EBB	Ezker-Batua Berdeak / Izquierda Unida Verdes.
EE	Euskadiko Eskerra / Izquierda de Euskadi.
EEUU	Estados Unidos.
EL	Enhedslisten / Lista de la Unidad-Alianza Roji-Verde (Dinam
EP / EPR	Ejército Popular / Ejército Popular de la República.
EPK	Euskadiko Partidu Komunista / Partido Comunista de Euskad
ERC	Esquerra Republicana de Catalunya.
ESBA	Euskadiko Sozialisten Batasuna / Unión de los Socialistas de
ETA	Euskadi ta Askatasuna / País Vasco y Libertad.
EUiA	Esquerra Unida i Alternativa / Izquierda Unida y Alternativa.
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
F10M	Fundación 10 de Marzo.
FAI	Federación Anarquista Ibérica.
FFI	Forces Françaises de l'Intérieur / Fuerzas Francesas del Inter
FIJL	Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.
FIM	Fundación de Investigaciones Marxistas.
FLP	Frente de Liberación Popular.
FMI	Fondo Monetario Internacional.
FNC	Front Nacional de Catalunya / Frente Nacional de Cataluña.
FNJS	Federación Nacional de la Juventud Socialista.
FOC	Front Obrer de Catalunya / Frente Obrero de Cataluña.
FRAP	Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico.
FTP	Francs-tireurs et Partisans / Francotiradores y Partisanos.
FUDE	Federación Universitaria Democrática de España.
GAL	Grupos Antiterroristas de Liberación.
GL	GroenLinks / Izquierda Verde (Países Bajos).
HGP	Huelga General Política.
HNP	Huelga Nacional Política / Huelga Nacional Pacífica.
HOAC	Hermandad Obrera de Acción Católica.
IC	Internacional Comunista.
IC	Iniciativa por Cataluña / Iniciativa per Catalunya.

ICV-ICV Verds	Iniciativa per Catalunya Verds / Iniciativa por Cataluña Verde
IR	Izquierda Republicana.
IS	Internacional Socialista.
ISR	Internacional Sindical Roja.
IU	Izquierda Unida.
IU-UP	Izquierda Unida-Unidad Popular.
IUE	Izquierda Unitaria Europea.
JOC	Juventud(es) Obrera(s) Cristiana(s) / Juventud(es) Obrera(s) (
JSF	Juventud sin Futuro.
JSU	Juventud(es) Socialista(s) Unificada(s).
KGB	Comité para la Seguridad del Estado.
KKE	Kommunistikó Kómma Elládas / Partido Comunista de Greci
KP RSFSR/KPRF	Partido Comunista de la República Socialista Federativa Sov
KPB	Partido Comunista Bielorruso.
KPD	Kommunistische Partei Deutschlands / Partido Comunista Al
KPL / PCL	Kommunistesch Partei Lëtzebuerg / Parti Communiste Luxen
KPN / ML	Kommunistiese Partij Nederland / Marxisties-Leninisties / Pa
KPÖ	Kommunistische Partei Österreichs / Partido Comunista de A
KPRF	Partido Comunista de la Federación Rusa.
KPSS	Partido Comunista de la Unión Soviética.
KPU	Partido Comunista de Ucrania.
KSČ	Komunistická strana Československa / Partido Comunista de
KSČM	Komunistická Strana Čech a Moravy / Partido Comunista de
KSS	Komunistická Strana Slovenska / Partido Comunista de Eslov
LC	Liga Comunista.
LCR	Liga Comunista Revolucionaria.
LCR-ETA VI	Liga Comunista Revolucionaria-ETA (VI Asamblea).
LF	Nueva Izquierda (Croacia).
LOU	Ley Orgánica de Universidades.
LP	Labour Party / Partido Laborista (Irlanda).
MCE	Movimiento Comunista de España.
MCU	Movimento dei Comunisti Unitari / Movimiento de los Comu
MDM	Movimiento Democrático de Mujeres.

MERCOSUR	Mercado Común del Sur.
MO	Mundo Obrero.
MOI	Main d'Oeuvre Inmigrée / Mano de Obra Inmigrada.
MOP	Movimiento Obrero y Popular.
MSC	Moviment Socialista de Catalunya / Movimiento Socialista d
MSZMP	Magyar Szocialista Munkáspárt / Partido Socialista Obrero H
MSZP	Magyar Szocialista Párt / Partido Socialista Húngaro.
NI	Nueva Izquierda.
NKGB	Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado.
NKP	Partido Comunista de Noruega.
NKVD	Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos.
NSA	National Security Agence.
OCE-BR	Organización Comunista de España-Bandera Roja.
OMC	Organización Mundial del Comercio.
ONU	Organización de Naciones Unidas.
ORT	Organización Revolucionaria de Trabajadores.
OSE	Organización Sindical Española.
OSO	Oposición Sindical Obrera.
OTAN	Organización Tratado del Atlántico Norte.
PAH	Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
PANE	Partidos de Ámbito No Estatal.
PASOC	Partido de Acción Socialista.
PC	Partido(s) Comunista(s).
PC (b)	Partido Comunista (bolchevique).
PCA	Partido Comunista de Andalucía.
PCC	Partido de los Comunistas de Cataluña / Partit dels Comunist
PCCh	Partido Comunista Chino.
PCE	Partido Comunista de España.
PCE (i)	Partido Comunista de España (internacional).
PCE (m-l)	Partido Comunista de España (marxista-leninista).
PCEx	Partido Comunista de Extremadura.
PCF	Partido Comunista Francés.
PCGB	Partido Comunista de Gran Bretaña.

PCI	Partido Comunista Italiano.
PCOE	Partido Comunista Obrero Español.
PCP	Partido Comunista Portugués.
PCPE	Partido Comunista de los Pueblos de España.
PCR	Partidul Comunist Român / Partido Comunista Rumano.
PCR-b	Partido Comunista Ruso-bolchevique.
PCRM	Partidul Comuniştilor din Republica Moldova / Partido de los
PCS	Partito Comunista Sammarinese / Partid Comunista Sanmarin
PCUS	Partido Comunista de la Unión Soviética.
PdA-PST-PdL-PSL	Partido Suizo del Trabajo.
PdCI	Partito dei Comunisti Italiani / Partido de los Comunistas Ital
PDNI	Partido Democrático de la Nueva Izquierda.
PDS	Partito Democratico della Sinistra / Partido Democrático de l
PDS	Partei des Demokratischen Sozialismus / Partido del Socialis
PE	Parlamento Europeo.
PESC	Política Exterior y de Seguridad Común.
PIE	Partido de la Izquierda Europea.
PKSH	Partia Komuniste e Shqipërisë / Partido Comunista de Albani
PNV	Partido Nacionalista Vasco.
POUM	Partido Obrero de Unificación Marxista.
PP	Partido Popular.
PP CC	Partidos Comunistas.
PPDS	Partido Progresista Democrático Sanmarinense.
PRC	Partito della Rifondazione Comunista / Partido de Refundació
PRN	Política de Reconciliación Nacional.
PS	Partia Socialiste e Shqipërisë / Partido Socialista de Albania.
PSOE	Partido Socialista Obrero Español.
PSP	Partido Socialista Popular.
PSU / PSUC	Partido Socialista Unificado / Partido Socialista Unificado de
PSUC Viu	PSUC Vivo.
PTB-PvdA	Parti du Travail de Belgique - Partij van de Arbeid / Partido d
PTE	Partido del Trabajo de España.
PTE-UC	Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista.

PUP	Partido Único del Proletariado.
PZPR	Polska Zjednoczona Partia Robotnicza / Partido Obrero Unifi
R	Partido Rojo (Noruega).
RCS	Refundación Comunista Sanmarinense.
REI	Radio España Independiente.
RN	Reconciliación Nacional.
RV	Red Electoral Alliance / Alianza Electoral Roja (Noruega).
S	Samfylkingin / Alianza Socialdemócrata (Islandia).
SDE	Sindicato Democrático de Estudiantes.
SDEUB	Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de B
SDP	Stranka Demokratične Prenove / Partido Democrático de las
SDP	Socijaldemokratska Partija BiH / Partido Socialdemócrata de
SDP	Socijaldemokratska Partija Hrvatske / Partido Socialdemócra
SdPR	Partido Socialdemócrata de la República de Polonia.
SDSM	Unión Socialdemócrata de Macedonia.
SECED	Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gol
SED	Sozialistische Einheitspartei Deutschlands / Partido Socialista
SEL	Sinistra Ecologia Libertà / Izquierda Ecológica Libertad (Ital
SEU	Sindicato Español Universitario.
SF	Socialistisk Folkeparti / Partido Popular Socialista (Dinamarc
SFIO	Section Française de l'Internationale Ouvrière / Sección Fran
SGM	Secretaría General del Movimiento.
SI	Sinistra Italiana / Izquierda Italiana.
SIM	Servicio de Información Militar.
SKCG	Savez komunista Crne Gore / Liga de los Comunistas de Mo
SKDL	Liga Democrática del Pueblo Finlandés.
SKH	Liga de los Comunistas de Croacia.
SKJ	Savez Komunista Jugoslavije / Liga de los Comunistas de Yu
SLD	Sojusz Lewicy Demokratyczne /Alianza de la Izquierda Dem
SMV	Sindicato Minero de Vizcaya.
SOMA	Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias.
SP	Socialistische Parti / Partido Socialista (Países Bajos).
SP	Socialist Party / Partido Socialista (Irlanda).

SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Partido Socialden
SPÖ	Sozialdemokratische Partei Österreichs / Partido Socialista A
SPS	Socijalistička Partija Srbije / Partido Socialista de Serbia.
SRI	Socorro Rojo Internacional.
SYNAPISMÓS	Coalición de los Movimientos de Izquierda y Ecológicos (Gr
SYRIZA	Coalición de la Izquierda Radical (Grecia).
SU	Sindicato Único.
SV	Sosialistisk Venstreparti / Partido de la Izquierda Socialista (I
TNA	The National Archives.
TOP	Tribunal de Orden Público.
UCD	Unión de Centro Democrático.
UDC	Unió Democràtica de Catalunya / Unión Democrática de Cat
UDP	Unión Democrática Popular (Portugal).
UE	Unión Europea.
UFD	Unión de Fuerzas Democráticas.
UGT	Unión General de Trabajadores.
UJCE	Unión de Juventudes Comunistas de España.
UN / UNE	Unión Nacional / Unión Nacional Española.
UP	Unidas Podemos.
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
USPD	Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Part
V	Vänsterpartiet / Partido de la Izquierda (Suecia).
VAS	Alianza de la Izquierda (Finlandia).
VG	Vinstrihreyfingin – grænt framboð / Movimiento de Izquierda
VPK	Vänsterpartiet Kommunisterna / Partido de la Izquierda-Los
WP	Workers' Party / Partido de los Trabajadores (Irlanda).
ZKS	Zveza komunistov Slovenije / Liga de los Comunistas de Esl
ZL	Izquierda Unida (Eslovenia).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Abad Buill, Irene, «Reivindicaciones y movilizaciones femeninas desde el PCE durante el segundo franquismo», en Manuel Bueno Lluch y Sergio Gálvez Biesca (eds.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, FIM / Atrapasueños, 2010, pp. 231-252.

—, En las puertas de la prisión. De la solidaridad a la concienciación política de las mujeres de los presos del franquismo, Barcelona, Icaria, 2012.

Abad de Santillán, Diego, Por qué perdimos la guerra: una contribución a la historia de la tragedia española, Madrid, G. del Toro, 1975.

Agosti, Aldo, La Terza Internazionale. Storia documentaria, Roma, Editori Riuniti, 1974, vol. I.

—, Storia del Partito Comunista Italiano, Roma, Laterza, 1999.

Agudo, Sixto, En la resistencia francesa, Zaragoza, Anubar, 1985.

Águila, Juan José del, El TOP: la represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001.

Aguilar, Paloma, Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza, 1996.

—, «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la Transición a la democracia», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, pp. 327-357.

Aja Valle, Jaime, «El espacio electoral de la izquierda en España: las elecciones generales de 2000», Apuntes Electorales 14 (2003), pp. 55-109.

—, «Tras el cambio de ciclo electoral, llega la hora de la militancia: análisis de las elecciones de 2019», Nuestra Bandera 243 (2019), pp. 71-79.

Alpert, Michel, El Ejército Popular de la República (1936-1939), Barcelona, Crítica, 2007.

Álvarez, Santiago, Memorias, tomo III, A Coruña, Ediciós do Castro, 1989.

Álvarez Cobelas, José, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Madrid, Siglo XXI de España, 2004.

Álvarez Espinosa, David F., Cristianos y marxistas contra Franco, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004.

Ana, Marcos, Decidme cómo es un árbol. Memorias de la prisión y la vida, Barcelona, Umbriel, 2007.

Andrade, Juan, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI de España, 2015.

—, «A propósito de la idea de comunismo: Una síntesis crítica de la New York Conference de 2011», Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM 1 (2016), pp. 162-173.

Andrew, Christopher y Mitrokhin, Vasili, The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB, Nueva York, Basic Books, 2001.

Anguita, Julio y Andrade, Juan, Atraco a la memoria. Un recorrido histórico por la vida de Julio Anguita, Madrid, Akal, 2015.

Arenas Posadas, Carlos, «Auge y caída de un grupo revolucionario: los dirigentes sevillanos del PCE, 1919-1936», texto inédito, 1991.

Arnau, Roger, Marxisme català i qüestió nacional catalana. 1930-1936, vol. 2, París, Edicions Catalanes de París, 1974.

Aróstegui, Julio, La Transición (1975-1982), Madrid, Acento, 2000.

—, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013.

Arranz, Luis, «La ruptura del PSOE en la Restauración: el peso del Octubre ruso», Estudios de Historia Social 32-33 (1985), pp. 7-91.

—, «La ruptura del PSOE en la crisis de la Restauración: debate ideológico y político», en Santos Juliá (coord.), El socialismo en España: desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 161-189.

Arriero Ranz, Francisco, El Movimiento Democrático de Mujeres. De la lucha contra Franco al feminismo, Madrid, Catarata, 2016.

Asenjo, Mariano y Ramos, Victoria, Malagón. Autobiografía de un falsificador, Barcelona, El Viejo Topo, 1999.

Azcárate, Manuel, «Sobre la política internacional del Partido Comunista Español», en Varios Autores, El PC español, italiano y francés cara al poder, Madrid, Cambio 16, 1977, pp. 193-206.

—, Crisis del Eurocomunismo, Barcelona, Argos Vergara, 1982.

Aznar Soler, Manuel, República literaria y revolución, Sevilla, Renacimiento, 2010, 2 vols.

Babiano, José (coord.), Proceso 1001 contra Comisiones Obreras. ¿Quién juzgó a quién?, Madrid, Fundación 1.o de Mayo, 2013.

Babiano, José y Mingo, J. Antonio de, «De la Comisión de Enlaces y Jurados del Metal a la Unión Sindical de Madrid: las Comisiones Obreras madrileñas durante el franquismo», en David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI de España, 1993, pp. 181-214.

Babiano, José y Tébar, Javier, «La parábola del sindicato en España. Los movimientos sindicales en la transición "larga" a través del caso de CCOO (1975-1986)», en Damián Alberto González Madrid, Manuel Ortiz y Juan Sisinio Pérez Garzón (eds.), La historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2017, pp. 1471-1484.

—, «El sindicalismo de clase de la transición a la democracia. Una perspectiva histórica de los cambios en el movimiento sindical en España», Gaceta Sindical 30 (2018), pp. 161-182.

Bayón García, Víctor Manuel, Crónica de una lucha. Mi actividad en el Partido Comunista de España, León, PCE de León, 2011.

Bernal Rodríguez, Antonio-Miguel, «Sindicalismo jornalero y campesino en España (1939-2000)», en Ángel Luis López Villaverde y Manuel Ortiz Heras (coords.), Entre surcos y arados: el asociacionismo agrario en la España del siglo XX, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2001, pp. 17-46.

Bizcarrondo, Marta, Araquistain y la crisis socialista en la República. Leviatán (1934-1936), Madrid, Siglo XXI de España, 1974.

—, «La Segunda República. Ideologías socialistas», en Santos Julià Díaz (coord.), El socialismo en España: desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 255-274.

Bloch, Marc, La extraña derrota, Barcelona, Crítica, 2002.

Bocca, Giorgio, Palmiro Togliatti, Barcelona-Buenos Aires, Grijalbo, 1977.

Bolloten, Burnett, La Guerra Civil española: Revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza, 1997.

Bonamusa, Francesc, El Bloc Obrer i Camperol, Barcelona, Curial, 1974.

Bordandini, Paola, «Renewal and Tradition: Comparing Italian Radical Left Parties through Their Middle-Level Elites», South European Society and Politics 18 (2013), pp. 61-79.

Bordetas Jiménez, Iván, «Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad. Autoorganización y movilización vecinal durante el tardofranquismo y el proceso de cambio político», tesis doctoral, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012.

Borja, Jordi, Bandera Roja. 1968-1974. Del maig del 68 a l’inici de la transició, Barcelona, Edicions 62, 2018.

Brabo, Pilar, «Los orígenes del eurocomunismo», en Varios Autores, Sesenta años en la historia del PCE, Madrid, FIM, 1980.

Brecht, Bertolt, Escritos políticos, Caracas, Tiempo Nuevo, 1970.

Broué, Pierre, Histoire de l'Internationale Communiste, 1919-1943, París, Fayard, 1997.

Brown, Archie, The Gorbachev Factor, Nueva York, Oxford University Press, 1996.

Bueno, Manuel; Hinojosa, José y García, Carmen (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), 2 vols., Madrid, FIM, 2007.

Bull, Martin y Heywood, Paul (eds.), West European Communist Parties after the Revolutions of 1989, Londres, Macmillan, 1994.

Bullejos, José, La Comintern en España. Recuerdos de mi vida, México, Impresiones Modernas, 1972.

Bustelo, Francisco, La izquierda imperfecta. Memorias de un político frustrado, Barcelona, Planeta, 1996.

Cabrero, Claudia, «Asturias, las mujeres y las huelgas», en José Babiano (ed.), Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo, Madrid, Catarata, 2007, pp. 189-244.

Cabrero, Claudia; Díaz, Irene; Alen, José G. y Vega, Rubén, Abogados contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, Barcelona, Crítica, 2013.

Camacho, Marcelino, Confieso que he luchado. Memorias, Madrid, Temas de Hoy, 1990.

Carrero Blanco, Luis, Discursos y escritos 1943 / 1973, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974.

Carrillo, Santiago, Después de Franco, ¿qué? La democracia política y social que preconizamos los comunistas, París, Éditions Sociales, 1965.

—, Algunas experiencias de la jornada del 27 de octubre, S/l, PCE, 1967.

—, Nuevos enfoques a problemas de hoy, París, Éditions Sociales, 1967.

—, Después de Franco, ¿qué? Nuevos enfoques a problemas de hoy, más problemas actuales del socialismo, México, Fondo de Cultura Popular, 1969.

—, Libertad y socialismo, París, Éditions Sociales, 1971.

—, Eurocomunismo y Estado, Barcelona, Crítica, 1977.

—, Escritos sobre eurocomunismo, 2 vols., Zaragoza, Forma, 1977.

—, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993.

—, Memorias, Barcelona, Planeta, 2007, 2.a ed. revisada y aumentada.

Carrillo, Santiago e Ibárruri, Dolores, Hacia la Libertad. Octavo Congreso del Partido Comunista de España, París, Éditions Sociales, 1972 [también Ed. del PSUC].

Carrillo-Linares, Alberto, «Presentación. La oposición política al franquismo en la Universidad», CIAN. Revista de Historia de las Universidades 23/1 (2020), pp. 1-10.

Carvajal, Pedro, Julián Grimau: el último muerto de la guerra civil, Madrid, Aguilar, 2003.

Casanova, Julián, De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997.

Caussa, Martí y Martínez I Muntada, Ricard, Historia de la Liga Comunista Revolucionaria (1970-1991), Madrid, Viento del Sur, 2014.

Cava, Salvador F., «Una fecha decisiva para la Agrupación Guerrillera de Levante. Cerro Moreno, 7 de noviembre de 1949: asalto al campamento», Entremontes. Revista Digital de Estudios del Maquis 5.2. (2013) [http://www.elmanco.es/entremontes/5.2.html].

Cazcarra, Vicente, Era la hora tercia: testimonio de la resistencia antifranquista, Madrid, UnaLuna, 2000.

Cebrián, Carme, Estimat PSUC, Barcelona, Empúries, 1997.

Cervera Gil, Javier, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, Madrid, Alianza, 1998.

Charalambous, Giorgos, «The Strongest Communists in Europe: Accounting for AKEL's Electoral Success», Journal of Communist Studies and Transition Politics 23 (2007), pp. 425-456.

Chirbes, Rafael, Los viejos amigos, Barcelona, Anagrama, 2003.

Claudín, Fernando, Documentos de una divergencia comunista, Barcelona, El Viejo Topo, 1978.

—, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983.

Colomer, Josep Maria, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, vol. I, Barcelona, Curial, 1978.

—, La Transición a la democracia: el modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998.

Comín Colomer, Eduardo, Historia del Partido Comunista de España, 3 vols., Madrid, Editora Nacional, 1967.

—, El 5.o Regimiento de Milicias Populares, Madrid, Editorial San Martín, 1973.

Comisión Internacional de Juristas, El Imperio de la Ley en España, Ginebra, 1962.

Comité Central del PCE, En el XX Aniversario del fin de la Guerra Civil: el balance de veinte años de dictadura fascista. Las tareas inmediatas de la oposición y el porvenir de la democracia española, s/l, s/ed., 1959.

Corcuff, Philippe y Mathieu, Lilian, «Partidos y movimientos sociales: de las ilusiones de la "actualidad" a una puesta en perspectiva sociológica», Cultura y Representaciones Sociales 5 (2011), pp. 7-30.

Crexell, Joan, La Caputxinada, Barcelona, Edicions 62, 1987.

Criado Moreno, Cristóbal, El PCE que viví en Málaga (1920-1977): recuerdos de un veterano dirigente comunista, Málaga, s/ed., 2004.

Cruz, Rafael, El Partido Comunista de España en la II República, Madrid, Alianza, 1987.

Daiber, Birgit; Hildebrandt, Cornelia y Striethorst, Anna, From Revolution to Coalition - Radical Left Parties in Europe, Manuskripte, Berlín, Rosa-Luxemburgo-Foundation, 2013.

Del Bufalo, Marco, «Las relaciones entre el PCE y el PCI (1962-1981), en el contexto de la crisis del movimiento comunista internacional», tesis doctoral, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2017.

Delmiro Coto, Benigno, La rebelión de la cultura en Asturias. Las sociedades culturales frente al franquismo, Oviedo, KRK, 2019.

Díaz, José, Tres años de lucha, Bucarest, Colección Ebro, 1974.

Díaz Alonso, Diego, Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921-1982), Gijón, Trea, 2019.

Díaz Martínez, Irene, Vanguardia obrera e insurrección firmada. La huelga minera de 1963 y las contradicciones de la dictadura franquista, Gijón, Ateneo Obrero de Gijón, 2006.

Díaz Martínez, Irene y Vega García, Rubén, «El ciclo de las grandes huelgas mineras (1957-1964)», en Rubén Vega García (coord.), El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo, 1937-1977, Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico / KRK, 2013, pp. 261-307.

Díez Torre, Alejandro R., Trabajan para la eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra Civil en Aragón, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009.

Domènech, Antoni, «El juego de la Transición democrática», Arbor 503-504 (1987), pp. 207-229.

Domènech Sampere, Xavier, Clase obrera, antifranquismo y cambio político, Madrid, Catarata, 2008.

—, «Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición», en Manuel Bueno Lluch y Sergio Gálvez Biesca (eds.), «Nosotros

los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009, pp. 93-138.

—, Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo, Barcelona, Icaria, 2011.

Domínguez, Javier, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo, Bilbao, Mensajero, 1985.

Donofrio, Andrea, Érase una vez el eurocomunismo. Las razones de un fracaso, Madrid, Tecnos, 2018.

Dreyfus, Michel y otros (dirs.), Le siècle des communismes, París, Les Éditions de l'Atelier, 2000.

Dreyfus-Armand, Geneviève, El exilio de los republicanos españoles en Francia, Barcelona, Crítica, 2000.

Dunphy, Richard, Contesting Capitalism?, Mánchester, Manchester University Press, 2004.

Eagleton, Terry, Ideología, una introducción, Barcelona, Paidós, 2005.

Eiroa, Matilde, Españoles tras el Telón de acero. El exilio republicano y comunista en la Europa socialista, Madrid, Marcial Pons, 2018.

El-Ojeili, Chamsy, Beyond Post-Socialism. Dialogues witch the Far-Left, Nueva York, Palgrave, 2015.

Eley, Geoff, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Barcelona, Crítica, 2002.

Elorza, Antonio, «Comunismo y nacionalismo en la Transición (PCE y partidos comunistas de nacionalidad)», en Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz (ed.), Los partidos en la transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 235-248.

Elorza, Antonio y Bizcarrondo, Marta, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1931-1939, Barcelona, Planeta, 1999.

Erice, Francisco, «Los condicionamientos del giro táctico del PCE en 1956: el

contexto de la política de Reconciliación Nacional», en Papeles de la FIM 24 (2006), 2.a época, pp. 129-150.

—, «La política sindical del PCE en los orígenes de las Comisiones Obreras: las confusiones en torno a la OSO», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE: I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007, t. II, pp. 107-119.

—, «El "orgullo de ser comunista". Imagen, autopercepción, memoria e identidad colectiva de los comunistas españoles», en Manuel Bueno Lluch y Sergio Gálvez Biesca (eds.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009, pp. 139-183.

—, «Vigilar, prevenir y castigar: la represión contra el movimiento obrero, de los años cincuenta a la transición», en Rubén Vega García (coord.), El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo 1937-1977, Oviedo, KRK / Fundación Juan Muñiz Zapico, 2013, pp. 191-229.

—, «Santiago Carrillo y el partido del antifranquismo», en Historia del Presente 24 (2014), pp. 43-57.

—, «El Partido Comunista de España, el giro de 1956 y la lectura selectiva del XX Congreso», en Nuestra Historia. Revsita de Historia de la FIM 2 (2016), pp. 66-88.

—, Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista (1956-1963), Gijón, Trea, 2017.

—, «Política de alianzas y movilización de masas de los comunistas españoles (1954-1977)», en Josep Puigsech Farràs y Giaime Pala (eds.), Les mans del PSUC. Militància, Barcelona, Memorial Democràtic, 2017, pp. 123-142.

España. Estado de Derecho. Réplica a un informe de la Comisión Internacional de Juristas, Madrid, s/ed., 1964.

Estruch, Joan, El PCE en la clandestinidad (1939-1956), Madrid, Siglo XXI de España, 1982.

Etxaniz Ortúñez, José Ángel, «La revitalización del Partido Comunista de

Euskadi (1970-1975). El ingreso de militantes de ETA VI Asamblea (Minos)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE: I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007, t. II, pp. 313-333.

Falcón, Irene, Asalto a los cielos. Mi vida junto a Pasionaria, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

Fernández-Albertos, José, Los votantes de Podemos. Del partido de los indignados al partido de los excluidos, Madrid, Catarata, 2015.

Fernández Buey, Francisco, «La insólita, aunque breve, experiencia de un sindicato democrático bajo el fascismo (1965-1968)», Materiales 2 (1977), pp. 71-82.

—, «Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966)», Hispania Nova 6 (2006).

—, «¿Qué democracia queríamos los comunistas? Recuerdos y reflexiones», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (coords.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009, pp. 391-404.

Fernández Rodríguez, Carlos, Los otros camaradas: El PCE en los orígenes del franquismo (1939-1945) Zaragoza, Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 2020.

Ferrer, Cristian, «La fase expansiva del antifranquismo, 1962-1976. Presencia, espacios y redes del PSUC en comarcas», Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM 3 (2017), pp. 18-38.

—, «El PSUC y el trabajo en el campo. El movimiento campesino entre el franquismo y la transición», en David Lanero Táboas (coord.), El disputado voto de los labriegos. Cambio, conflicto y continuidad política en la España rural (1968-1986), Granada, Comares, 2018, pp. 111-134.

Fontana, Josep, «Los comunistas ante la transición», Mientras Tanto 104-105 (2007), pp. 23-37.

Forner, Salvador y Senante, Heidy-Cristina, «La política europea del PCE (1972-1999): del viraje europeísta al euroescepticismo», Historia y Política 41 (2019),

pp. 335-366.

Fraga Iribarne, Manuel, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980.

Fuentes, María Candelaria y Cobo, Francisco, La tierra para quien la trabaja. Los comunistas, la sociedad rural andaluza y la conquista de la democracia (1956-1983), Granada, Eug, 2016.

Fusi, Juan Pablo, Política obrera en el País Vasco, Madrid, Turner, 1975.

Gallego, Ignacio, Carta de dimisión de Ignacio Gallego dirigida al Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España, Barcelona, Sociedad Limitada Impresiones del Vallès, 1983.

Gálvez, Sergio, «La "construcción" de Santiago Carrillo (1983-2012)», Historia del Presente 24 (2014), pp. 77-92.

—, La gran huelga general, Madrid, Siglo XXI de España, 2017.

García Alcalá, Julio Antonio, Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria, Madrid, Centro de Estudios Políticos, 2001.

García Oliver, Juan, El eco de los pasos, Barcelona, Planeta, 2008.

García Piñeiro, Ramón, «El PCE en Asturias bajo el franquismo (1937-1977). Represión, clandestinidad y reconstrucción», en Francisco Erice (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, Trea, 1996, pp. 147-168.

—, «Mujeres en huelga», en Rubén Vega García (coord.), «Hay una luz en Asturias»: Las huelgas de 1962, Gijón, Trea / Fundación Muñiz Zapico, 2002, pp. 243-256.

Gibson, Ian, Paracuellos: cómo fue. La verdad objetiva sobre la matanza de presos en Madrid, Barcelona, Temas de Hoy, 2005.

Ginard I Féron, David, Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942), Palma-Madrid, Documenta Balear-Compañía Literaria, 2000.

—, «Sobre héroes, mártires, tumbas y herejes. Culturas militantes de los comunistas españoles (1939-1962)», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, FIM / Atrapasueños, 2009, pp. 43-91.

Gómez, Raúl; Morales, Laura y Ramiro, Luis, «Varieties of Radicalism: Examining the Diversity of Radical Left Parties and Voters in Western Europe», West European Politics 39 (2016), pp. 351-379.

Gómez, Raúl y Ramiro, Luis, «Beyond the 2008 Great Recession: Economic Factors and Electoral Support for the Radical Left in Europe», Party Politics 25 (2019), pp. 358-368.

Gómez, Raúl; Ramiro, Luis Ramiro; Morales, Laura y Aja, Jaime, «Joining the Party: Incentives and Motivations of Members and Registered Sympathizers in Contemporary Multi-Speed Membership Parties», Party Politics (2019) [https://doi.org/10.1177/1354068819891047].

Gómez Alén, José, «La Pirenaica: la subversión de las ondas», en Rubén Vega García (coord.), El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional, Gijón, Trea / Fundación Muñiz Zapico, 2002, pp. 93-139.

Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, Madrid, Ediciones GPS, 2010, 2 vols.

Gómez L.-Quiñones, Antonio, y Winter, Ulrich (eds.), Cruzar la línea roja. Hacia una arqueología del imaginario comunista ibérico (1930-2017), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2017.

González Calleja, Eduardo, Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea 1865-2008, Madrid, Alianza, 2009.

González Rodríguez, Juan Jesús, «Las bases sociales de la política española», Revista Española de Sociología 4 (2004), pp. 119-142.

Gordon, Carlos, «Prensa clandestina y movimiento obrero en el Franquismo», en José Babiano (coord.), Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clandestina y del exilio, Madrid, Fundación 1.o de Mayo, 2005, pp. 265-296.

Graham, Helen, La República española en guerra (1936-1939), Barcelona, Debate, 2006.

Granja, José Luis de la, El oasis vasco. El nacimiento de Euzkadi en la República y la guerra civil, Madrid, Tecnos, 2007.

Gunther, Richard, «Los Partidos Comunistas de España», en Juan J. Linz y José R. Montero (eds.), Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 493-524.

Hajek, Milos, Historia de la Internacional Comunista. La política de frente único, Barcelona, Crítica, 1984.

Hanley, David, «Left and Centre-Left in France - Endgame or Renewal?», Parliamentary Affairs, Oxford University Press 71-3 (2018), pp. 521-537.

Harvey, David, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007.

Heine, Harmut, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952, Barcelona, Crítica, 1983.

Hermet, Guy, Los comunistas en España. Estudio de un movimiento político clandestino, París, Ruedo Ibérico, 1972

Hernández Sánchez, Fernando, Comunistas sin partido. Jesús Hernández, ministro en la guerra civil, disidente en el exilio, Madrid, Raíces, 2007.

—, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010.

—, Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953), Barcelona, Pasado & Presente, 2015.

—, La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco (1945-1950), Barcelona, Pasado & Presente, 2018.

Hernández Sandoica, Elena; Ruiz Carnicer, Miguel Ángel y Baldó, Marc, Estudiantes contra Franco (1939-1975), Madrid, La Esfera, 2007.

Hough, Dan y Verge, Tània, «A Sheep in Wolf's Clothing or a Gift from

Heaven? Left-Left Coalitions in Comparative Perspective», Regional and Federal Studies 19 (2009), pp. 37-55.

Hoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas jruschovistas (escritos tomados del tomo XIX de las Obras), Tirana, Casa Editorial «8 Nëntori», 1977 [http://www.enverhoxha.ru].

Hudson, Kate, The New European Left: A Socialism for the Twenty-First Century?, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

Humbert-Droz, Jules, Archives de Jules Humbert-Droz, I. Origines et débuts des partis communistes, Dordrecht, Reidel Publishing Company, 1970.

—, Les partis communistes des pays latins et l'Internationale communiste dans les années 1917-1923, Dordrecht, Springer, 1983.

—, Archives de Jules Humbert-Droz, II. Les partis communistes et la Internationale, dans les années 1928-1932, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1988.

Ibáñez Ortega, Norberto y Pérez Pérez, José Antonio, Ramón Ormazábal. Biografía de un comunista vasco, Madrid, Latorre Literaria, 2005.

Ibarra Güell, Pedro y García Marroquín, Chelo, «De la primavera de 1956 a Lejona 1978. Comisiones Obreras de Euskadi», en David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI de España, 1993, pp. 111-140.

Ibárruri, Dolores, IV Sesión Plenaria del C.C. del Partido Comunista de España. 13, 14 y 15 de septiembre de 1958, s/l, s/ed., s/f.

—, Memorias de Pasionaria (1939-1977). Me faltaba España, Barcelona, Planeta, 1984.

Ibárruri, Dolores y Carrillo, Santiago, III Pleno del C. C. del P.C. de España. Informe del Buró Político del Comité Central presentado por el Secretario General del Partido Comunista de España Dolores Ibárruri. Discurso de clausura pronunciado por Santiago Carrillo, s/l, Ediciones España Popular, s/f. (1957).

—, Deberes del pueblo español en la presente situación internacional y nacional,

Montevideo, España Democrática, 1961.

—, La propuesta comunista, Barcelona, Laia, 1977.

Ibárruri, Dolores y otros, Historia del Partido Comunista de España (versión abreviada), La Habana, Editorial Política, 1964.

—, Guerra y revolución en España, 1936-39, Moscú, Progreso, 1966.

Jáuregui, Fernando y Vega, Pedro, Crónica del antifranquismo 1939-1985. Todos los que lucharon por devolver la democracia a España, Barcelona, Planeta, 2007.

Juliá, Santos, Orígenes del Frente Popular en España. 1934-1936, Madrid, Siglo XXI de España, 1979.

—, Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940, Madrid, Taurus, 2008.

—, Camarada Javier Pradera, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012.

—, Nosotros los abajo firmantes: una historia de España a través de manifiestos y protestas (1896-2013), Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 2014.

Julián Grimau: el hombre, el crimen, la protesta, París, Éditions Sociales, 1963.

Kadaré, Ismail, El gran invierno, Madrid, Vosa, 1991.

Kennedy, Paul, The Spanish Socialist Party and the Modernisation of Spain, Mánchester, Manchester University Press, 2013.

Kriegel, Annie, Los comunistas franceses, Madrid, Villalar, 1978.

—, Los grandes procesos en los sistemas comunistas: la pedagogía infernal, Madrid, Alianza, 1984.

Lacomba, Marc, Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007.

Laín Entralgo, Pedro, Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelona, Barral, 1976.

Laiz, Consuelo, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la Transición española, Madrid, Catarata, 1995.

Laso, José María, De Bilbao a Oviedo pasando por el penal de Burgos, Oviedo, Pentalfa, 2002.

Ledesma, José Luis, Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003.

Lillo, Natacha, «El PCE en Francia. Relaciones con el PCF y evolución (1945-1975)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (eds.), Historia del PCE: I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007, t. I, pp. 83-99.

Linz, Juan; Gómez Reino, Manuel; Vila, Darío y Orizo, Francisco A., Atlas electoral del País Vasco y Navarra, Madrid, CIS, 1981.

Lisi, Marco, «Rediscovering Civil Society? Renewal and Continuity in the Portuguese Radical Left», South European Society and Politics 18 (2013), pp. 21-39.

Löfgren, Hans, «The Communist Party of India (Marxist) and the Left Government in West Bengal, 1977-2011: Strains of Governance and Socialist Imagination», Studies in Indian Politics 4 (2016), pp. 102-115.

López, Manolo, Mañana a las once en la Plaza de la Cebada, Albacete, Bomarzo, 2009.

López Arnal, Salvador, «Del mayo parisino al agosto praguense. Manuel Sacristán y el PSUC-PCE. Apuntes para una aproximación», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE. I Congreso 1920-1977, Madrid, FIM, 2007, vol. II, pp. 737-748.

López Raimundo, Gregorio, Catalunya i la futura democracia política i social dels pobles d'Espanya (Informe al II Congreso del PSUC), s/l, Treball, 1965.

López Raimundo, Gregorio y Gutiérrez Díaz, Antoni, El PSUC y el eurocomunismo, Barcelona, Grijalbo, 1981.

López Salinas, Armando, La alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura,

Zaragoza, Forma, 1977.

Maiz, Ramón, «La guerra de las palabras: marcos interpretativos y estrategias identitarias en el discurso político del EZLN (1994-2007)», en Salvador Martí i Puig (ed.), Pueblos Indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI, Barcelona, Fundació CIDOB, 2007, pp. 393-434.

March, Luke, Radical Left Parties in Europe, Abingdon, Routledge, 2011.

Marín Arce, José María, «Condicionantes económicos y sociales de la Transición», en Carme Molinero (ed.), La Transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006, pp. 81-116.

Martelli, Roger, L’empreinte communiste: le PCF et la société française, París, Éditions Sociales, 2010.

Martín de la Guardia, Ricardo y Pérez Sánchez, Guillermo, La Unión Soviética ante el espejo de las Comunidades Europeas, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017.

Martín Gijón, Mario, La resistencia franco-española (1936-1950), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2014.

Martín Ramos, José Luis, «Del blau al roig: el camí de la revolta», L’Avenç 170 (1993).

—, Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931, Madrid, Siglo XXI de España, 2008.

—, «Los orígenes de una nueva formación», en José Luis Martín Ramos (coord.), Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, Barcelona, El Viejo Topo, 2011, pp. 32-71.

— (coord.), Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, Barcelona, El Viejo Topo, 2011.

—, El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado & Presente, 2015.

—, «El KPD en la política de la Internacional Comunista», Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM 8 (2019), pp. 47-66.

Martínez Amutio, Justo, Chantaje a un pueblo, Madrid, G. del Toro, 1974.

Martínez I Muntada, Ricard, «La izquierda revolucionaria en tiempos de cambio político», en Carme Molinero y Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas en tiempos de transición, Valencia, PUV, 2016, pp. 141-168.

Mateos, Abdón, «Los socialistas españoles y la cuestión atlántica hasta el referéndum de 1986», Ayer 103 (2016), pp. 51-70.

Meaker, Gerald H., La izquierda revolucionaria en España, 1914-1923, Barcelona, Ariel, 1978.

Mendaza Vilà, Alain-Marc, «Hacia una historia del PCE-EPK (1920-1977)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE: I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007, t. II, pp. 413-426.

Mendezona, Ramón, La Pirenaica y otros episodios, Madrid, Libertarias / Prodhufi, 1995.

Mera, Cipriano, Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, Madrid, CGT, 2006.

Molinero, Carme, «La referencia asturiana en la oposición al franquismo», en Rubén Vega García (coord.), El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional, Gijón, Trea / Fundación Muñiz Zapico, 2002, pp. 61-80.

—, «La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en la Transición», Ayer 66 (2007), pp. 201-225.

Molinero, Carme e Ysàs, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI de España, 1998.

—, «El partido del antifranquismo (1956-1977)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Primer Congreso de Historia del PCE (1920-1977), Oviedo, FIM, 2004, vol. II, pp. 13-32.

—, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía (1945-1977), Barcelona, Crítica, 2008.

—, Els anys del PSUC. El partit de l'antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L'Avenç, 2010.

—, De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017.

Morán, Gregorio, Miseria y grandeza del Partido Comunista 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986.

—, Miseria, grandeza y agonía del PCE, Madrid, Akal, 2017.

Moreno, Juan, Comisiones Obreras en la Dictadura, Madrid, Fundación 1.o de Mayo, 2012.

Múgica, Enrique, Itinerario hacia la libertad, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

Muñoz Soro, Javier, «La transición de los intelectuales antifranquistas (1975-1982)», Ayer 81 (2011), pp. 25-55.

Navascués, Javier, «Dos proyectos en IU. Política de alianzas o reconversión "post-comunista"», Papeles de la FIM 24, 2.a época (2006), pp. 315-331.

Neves, José, Comunismo e Nacionalismo em Portugal. Política, Cultura e História no Século XX, Lisboa, Tinta da China, 2008.

Nieto, Alejandro, Corrupción en la España democrática, Barcelona, Ariel, 1997.

Nieto, Felipe, La aventura comunista de Jorge Semprún. Exilio, clandestinidad y ruptura, Barcelona, Tusquets, 2014.

Noveno Congreso del PCE. Actas, debates, resoluciones, Bucarest, PCE, 1978.

Oliver, Pedro, «El movimiento pacifista en la transición democrática española», en Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz (ed.), La sociedad española en la Transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 271-286.

Olsen, Jonathan; Hough, Dan y Koß, Michael, «From Pariahs to Players? Left

Parties in National Governments», en Left Parties in National Governments, Londres, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 1-15.

—, «Left Parties in National Governments», en Left Parties in National Governments, Londres, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 173-185.

Ortega López, Teresa María, Del silencio a la protesta: explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza. Granada (1936-1977), Granada, Universidad de Granada, 2003.

Pagès I Blanch, Pelai, «El POUM durante la guerra civil, la obsesión del estalinismo», en Max Rieger, Espionaje en España, Sevilla, Editorial Renacimiento, 2007.

Pala, Giaime, «El PSUC hacia adentro. La estructura del partido, los militantes y el significado de la política (1970-1981)», en G. Pala (coord.), El PSU de Catalunya, 70 anys de lluita pel socialismo, materials per a la historia, Barcelona, ACIM, 2008, pp. 183-206.

—, El PSUC, l'antifranquisme i la politica d'aliances a Catalunya (1956-1977), Barcelona, Base, 2011.

—, Cultura clandestina. Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, Granada, Comares, 2016.

Palacios Brihuega, Irene; Aja Valle, Jaime y Ramiro Fernández, Luis, El Espacio electoral de Izquierda Unida: las elecciones generales de 2004, Madrid, Argumentos de La FEC, 2014.

Paniagua, Juan y Ramiro, Luis, Voz, conflicto y salida, Madrid, Editorial Complutense, 2003.

Paramio, Ludolfo, Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo, Madrid, Siglo XXI de España, 1998.

Parga, Carmen, Antes que sea tarde, Madrid, Compañía Literaria, 1997.

Partido Comunista de España, Un futuro para España: la democracia económica y política, París, Colección Ebro, 1967.

—, Proyecto de Tesis y Estatutos. X Congreso del PCE, Madrid, PCE, 1981.

Pendakis, Andrew y Szeman, Imre, «Introduction: Marxism Lost and Found», en Andrew Pendakis e Imre Szeman (eds.), Contemporany Marxist Theory. A Reader, Nueva York, Bloomsbury, 2014, pp. 1-17.

Pérez Royo, Javier, «La génesis histórica del eurocomunismo», en VVAA, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1981, pp. 1-19.

Pérez Serrano, Julio, «Experiencia histórica y construcción social de la memoria: la transición española a la democracia», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea 3 (2004), pp. 93-122.

—, «Orto y ocaso de la izquierda revolucionaria en España (1959-1994)», en Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz (coord.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 249-291.

Petras, James, Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles (1996) [https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/informe-petras.pdf].

Plokhy, Serhii, The Last Empire, Nueva York, Basic Books, 2014.

Pons, Silvio, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, 2006.

—, «Western Communists, Mikhail Gorbachev and the 1989 Revolutions», Contemporary European History 18/3 (2009), pp. 349-362.

Possieri, Andrea, Il peso della storia, Bolonia, Il Mulino, 2007.

Preston, Paul, El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Madrid, Debate, 2013.

Priestland, David, Bandera roja. Historia política y cultural del comunismo, Barcelona, Crítica, 2010.

Prieto, Indalecio, Entresijos de la guerra de España, Barcelona, Planeta, 1989.

—, Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional, Barcelona, Planeta, 1989.

Prost, Antoine, Doce lecciones sobre la historia, Madrid, Cátedra, 2001.

Psuc, Projecte de Tesis. 5.o Congrès, Barcelona, PSUC, 1980.

Radcliff, Pamela, La construcción de la ciudadanía democrática en España, Valencia, PUV, 2019.

Ragionieri, Ernesto, «Lenin y la Internacional Comunista», en Los Cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista. Primera parte, Córdoba (Argentina), Cuadernos de Pasado y Presente, 1973, pp. ix-xliv.

Ramiro, Luis, Electoral Incentives and Organisational Limits. The Evolution of the Communist Party of Spain (PCE) and the United Left (IU), Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2002.

—, «Electoral Competition, Organizational Constraints and Party Change: The Communist Party of Spain (PCE) and United Left (IU), 1986-2000», Journal of Communist Studies and Transition Politics 20 (2004), pp. 1-29.

—, Cambio y adaptación en la izquierda: la evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida (1986-2000), Madrid, CIS, 2004.

—, «Support for Radical Left Parties in Western Europe: Social Background, Ideology and Political Orientations», European Political Science Review 8 (2016), pp. 1-23.

Ramiro, Luis y Aja Valle, Jaime, «The Left in the Storm: The Radical Left and the Elections in Spain», en United Europe, Divided Europe - Transform! Yearbook, Londres, The Merlin Press, 2015 [https://www.transform-network.net/publications/yearbook/overview/article/yearbook-2015/the-left-in-the-storm-the-radical-left-and-the-elections-in-spain/].

Ramiro, Luis y Gómez, Raul, «Radical-Left Populism during the Great Recession: Podemos and Its Competition with the Established Radical Left», Political Studies 65 (2017), pp. 108-126.

Ramiro, Luis y Morales, Laura, «Examining the “demand” Side of the Market for Political Activism: Party and Civil Society Grassroots Activists in Spain», Party Politics 20 (2014), pp. 506-520.

Ramiro, Luis y Verge, Tània, «Impulse and Decadence of Linkage Processes: Evidence from the Spanish Radical Left», South European Society and Politics 18 (2013), pp. 41-60.

Reig Tapia, Alberto, Violencia y Terror. Estudios sobre la Guerra Civil española, Madrid, Akal, 1990.

Rey, Marie-Pierre, «Gorbachev's New Thinking and Europe, 1985-1989», en Frédéric Bozo y otros (eds.), Europe and the End of the Cold War, Londres-Nueva York, Routledge, 2008, pp. 23-35.

Ribelles de la Vega, Silvia, Luis Montero Sabugo, en los abismos de la historia. Vida y muerte de un comunista, Oviedo, Pentalfa, 2011.

Ricoeur, Paul, Ideología y utopía, Barcelona, Gedisa, 2001.

Rieger, Max, Espionaje en España, Sevilla, Renacimiento, 2007.

Rius Piniés, Marc, Iniciativa per Catalunya Verds (1987-2004), Barcelona, Fundació Nous Horitzons, 2005.

Robledo Hernández, Ricardo, Los ministros de Agricultura de la Segunda República (1931-1939) (Política y sociedad en la España del siglo XX), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

Rodríguez Armada, Amandino y Novais, José Antonio, ¿Quién mató a Julián Grimau?, Madrid, Ediciones 99, 1976.

Rodríguez Martínez, Nuria, «La repercusión del caso Grimau en la prensa española e internacional», en Manuel Bueno Lluch (coord.), II Congreso de Historia del PCE: de la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social. Comunicaciones, Madrid, FIM, 2007.

Rodríguez Tejada, Sergio, «Partido comunista y movimiento estudiantil durante el franquismo», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, FIM / Atrapasueños, 2009, pp. 285-307.

—, Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia, vol. II (1965-1975), Valencia, PUV, 2009.

Rojo, José Andrés, Vicente Rojo. Retrato de un general republicano, Barcelona, Crítica, 2006.

Rosal, Amaro del, Los Congresos obreros internacionales en el siglo XX, vol. 2, Barcelona, Grijalbo, 1975.

Rossanda, Rossana, Un viaje inútil, o de la política como educación sentimental, Barcelona, Laia, 1984.

—, La muchacha del siglo pasado, Madrid, Foca, 2008.

Rueda Laffond, José Carlos, Memoria roja. Una historia cultural de la memoria comunista en España, 1931-1977, Valencia, PUV, 2018.

Ruiz, David (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI de España, 1993.

Ruiz Ayúcar, Ángel, El Partido Comunista, 37 años de clandestinidad, Madrid, San Martín, 1976.

Ruiz Carnicer, Miguel Ángel, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI de España, 1996.

Ruiz-Huerta Carbonell, Alejandro, «El Sustrato Electoral Comunista en España (1977-2012)», Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales 16 (2016), pp. 33-46.

Rupnik, Jacques, «The world after 1989 and the exhaustion of three cycles», en Jacques Rupnik (ed.), 1989 as a Political World Event, Nueva York, Routledge, 2014, pp. 7-24.

Rybalkin, Yuri, Stalin y España: la ayuda militar soviética a la República, Madrid, Marcial Pons, 2007.

Sacristán, Manuel, Intervenciones Políticas. Panfletos y Materiales III, Barcelona, Icaria, 1985.

—, Seis conferencias sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Barcelona, Viejo Topo, 2005.

Sánchez, Eduardo, Del XVIII Congreso a la Alternativa Social, Democrática y Anticapitalista a la crisis, Colección formación PCE, Cuaderno número 4, Comité Federal, Secretaría de Formación, 2013.

Sánchez Cervelló, Josep (ed.), Maquis: el puño que golpeó al franquismo: la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, Barcelona, Flor del Viento, 2003.

Sánchez Montero, Simón, El futuro se llama libertad (perestroika y socialismo), Madrid, El País, 1988.

—, Camino de libertad: memorias, Madrid, Temas de Hoy, 1997.

Sánchez Mosquera, Marcial, «La incorporación del campo al nuevo movimiento obrero andaluz (1963-1972)», en Manuel Bueno Lluch (coord.), II Congreso de Historia del PCE: de la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social. Comunicaciones, Madrid, FIM, 2007.

Sánchez Recio, Glicerio, Justicia y guerra en España. Los tribunales populares (1936-1939), Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1991.

Sánchez Rodríguez, Jesús, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, FIM, 2004.

Sánchez Vázquez, Adolfo, Recuerdo y reflexiones del exilio, Barcelona, Gexel, 1997.

Sancho Galán, Jordi, «“Nuestro 68 fue el 66”. El movimiento estudiantil antifranquista en el marco global de los sesentayochos (Barcelona, 1965-1969)», Historia del Presente 34 (2019), pp. 161-182.

Sandoval, José, Una larga caminata. Memorias de un viejo comunista, Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños / FIM, 2006.

Santasusagna I Gorzan, Marc, Quan la CNT cridà independencia, Barcelona, Base, 2016.

Sanz Díaz, Carlos, «El PCE y la emigración. Organización y actividades entre los trabajadores españoles en Alemania en los años sesenta», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE. I Congreso 1920-1977, Madrid, FIM, 2007, t. II, pp. 179-191.

Sartorius, Nicolás, «Los sujetos de la revolución y la política de alianzas. Reflexión acerca de la formación del bloque sociopolítico de progreso», en Varios Autores, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1981, pp. 195-224.

—, Un nuevo proyecto político, Madrid, Aguilar, 1992.

Sartorius, Nicolás y Alfaya, Javier, La memoria insumisa sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa, 1999.

Sassoon, Donald, One Hundred Years of Socialism, Londres, I. B. Tauris, 2010 [ed. cast.: Cien años de socialismo, Barcelona, Edhasa, 2001].

Scarrow, Susan, Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization, Oxford, Oxford University Press, 2015.

Schaff, Adam, El comunismo en la encrucijada, Barcelona, Crítica, 1983.

Segunda Conferencia del Pce, Manifiesto Programa del Partido Comunista de España, Barcelona, PSUC, 1975.

Semprún, Jorge, Autobiografía de Federico Sánchez, Barcelona, Planeta, 1977.

—, Federico Sánchez se despide de ustedes, Barcelona, Tusquets, 2010.

Serrano, Carlos, L'Enjeu espagnol: PCF et guerre d'Espagne, París, Messidor-Éd. sociales, 1987.

Sherman, Peter, Rethinking Soviet Communism, Nueva York, Palgrave, 2015.

Sinwell, Luke, «Transformative Left-Wing Parties and Grassroots Organizations: Unpacking the Politics of "Top-down" and "Bottom-up" Development», Geoforum 43 (2012), pp. 190-198.

Socorro, Pablo, «El papel de la izquierda revolucionaria en la vertebración del movimiento anti-OTAN en el Estado Español», Historia del Presente 29 (2016), pp. 137-150.

Solé Tura, Jordi, Los comunistas y la Constitución, Zaragoza, Forma, 1978.

—, Una historia optimista. Memorias, Madrid, Aguilar, 1999.

—, Una història optimista. Memorias, Barcelona, Edicions 62, 1999.

Soto, Fernando, Por el sendero de la izquierda, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996.

Soto Carmona, Álvaro, «Comisiones Obreras en la Transición y consolidación democrática. De la asamblea de Barcelona a la Huelga General del 14 D (1976-1988)», en David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI de España, 1993, pp. 451-521.

—, «El conflicto como respuesta social pero también política», en Álvaro Soto y Abdón Mateos (eds.), Historia de la época socialista, Madrid, Sílex, 2013, pp. 191-248.

Souto Kustrin, Sandra, Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, Valencia, Universitat de València, 2013.

Spohr, Kristina y Reynolds, David (eds.), Transcending the Cold War, Oxford, Oxford University Press, 2016.

Starinov, Ilia G., Over the Abyss: My Life in Soviet Special Operations, Estados Unidos, Ivy Books, 1996.

Suárez, Adolfo, Un nuevo horizonte para España. Discursos del presidente del gobierno, Madrid, Colección Informe, 1978.

Suárez Roldán, María Luisa, «El Colegio de Abogados de Madrid. La oposición franquista. Los abogados del PCE. Años 1950-1977», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE. Primer Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2004, pp. 635-646.

—, Recuerdos, nostalgias y realidades. Sobre la defensa de las víctimas del franquismo, Albacete, Bomarzo, 2011.

Taek-Gwang Lee, Alex y Žižek, Slavoj (eds.), La idea de comunismo. The Seul Conference, Madrid, Akal, 2013.

Taggart, Paul y Szczerbiak, Aleks (eds.), Opposing Europe?, Oxford, Oxford University Press, 2008.

Taibo II, Paco Ignacio, Los bolsheviquis. Historia narrativa de los orígenes del comunismo en México 1919-1925, México, Joaquín Mortiz, 1986.

Therborn, Göran, Ideología del poder y el poder de la ideología, Madrid, Siglo XXI de España, 1987.

Tismaneanu, Vladimir y Iacob, Bogdan (eds.), The End and the Beginning. The Revolutions of 1989 and the Resurgence of History, Budapest, CEU Press, 2012.

Togliatti, Palmiro, «Las características de la revolución popular española», en Los comunistas y la revolución española, Barcelona, Bruguera, 1976, pp. 11-36.

—, Opere, 1935-1944, Roma, Editore Reuniti / Instituto Gramsci, 1979.

Treglia, Emanuele (coord.), «Expediente: Eurocomunismo», Historia del Presente 18 (2011), pp. 5-65.

—, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012.

—, «Izquierda comunista y cambio político: el caso de la ORT», Ayer 92 (2013), pp. 47-71.

—, «El PCE y el movimiento comunista internacional (1969-1977)», Cuadernos de Historia Contemporánea 37 (2015), pp. 225-255.

—, «La última batalla de la transición, la primera de la democracia. La oposición a la OTAN y las transformaciones del PCE (1981-1986)», Ayer 103 (2016), pp. 71-96.

—, «Contra el nuevo orden mundial. El comunismo español ante la posguerra fría», Pasado y Memoria 19 (2019), pp. 127-155.

—, «Surviving the Collapse. Spanish Communism and the Crisis of the Soviet System (1989-1991)», en José M. Faraldo (ed.), Collapsed Empires, Berlín, LIT Verlag, 2020, pp. 173-194.

Trullén I Thomàs, Joan, Fundamentos económicos de la Transición política española: la política económica de los acuerdos de la Moncloa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

Tusell, Javier, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, Taurus, 1971.

Ucelay Da Cal, Enrique y Esculies, Joan, Macià al país dels soviets, Barcelona, Edicions del 84, 2015.

Val, Consuelo del, Opinión pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la OTAN, Madrid, CIS, 1996.

Varios Autores, El PC Español, Italiano y Francés cara al poder, Madrid, Cambio 16, 1977.

Varios Autores, Los intelectuales y la sociedad actual, Madrid, FIM, 1981.

Vega, Pedro y Erroteta, Peru, Los herejes del PCE, Barcelona, Planeta, 1982.

Vega García, Rubén, «El PCE asturiano en el Tardofranquismo y la Transición», en Francisco Erice (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, Trea, 1996, pp. 169-215.

— (coord.), Hay una luz en Asturias. Las huelgas de 1962 en Asturias, Gijón, Trea / Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002.

— (coord.), El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 y su repercusión internacional, Gijón, Trea / Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002.

—, «Vísperas de libertad, gérmenes de discordia. La militancia comunista en Asturias en el umbral de la democracia», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE. I Congreso 1920-2977, Madrid, FIM, 2007, t. II, pp. 277-287.

—, «Las fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante el franquismo», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social, Madrid, FIM /Atrapasueños, 2010, pp. 309-363.

VI Congreso del Partido Comunista de España. Informes, s/l, Ediciones Boletín

de Información, 1960.

Vidal Beneyto, José, Memoria democrática, Madrid, Foca, 2007.

Vinyes, Ricard, «Sobre la destrucción y memoria de las presas en las afueras de la prisión», Historia del Presente 4 (2004), pp. 13-30.

Viñas, Ángel, El escudo de la República, Barcelona, Crítica, 2007.

Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome de la República, Barcelona, Crítica, 2009.

Wassenberg, Birte y otros (eds.), Contre l'Europe?, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010.

Wittner, Lawrence, Toward Nuclear Abolition, Stanford, Stanford University Press, 2003.

Woodworth, Paddy, Dirty War, Clean Hands. Eta, the Gal and Spanish Democracy, Cork, Cork University Press, 2001 [ed. cast.: Guerra sucia, manos limpias. ETA, el GAL y la democracia española, Barcelona, Crítica, 2002].

Ysàs, Pere, «Democracia y autonomía en la Transición española», Ayer 15 (1994), pp. 77-108.

—, Disidencia y subversión. La lucha del Régimen por su supervivencia (1960-1975), Barcelona, Crítica, 2004.

Zapatero, Virgilio, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Granada, Diputación de Granada, 1999.

Zaragoza, Luis, Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista, Madrid, Marcial Pons, 2008.

Žižek, Slavoj (ed.), La idea de comunismo. The New York Conference, Madrid, Akal, 2011.

Zugazagoitia, Julián, Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, Tusquets, 2001.

AUTORES DE LA OBRA

JAIME AJA VALLE (Santander, Cantabria, 1977) es profesor de Sociología en la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación principales están relacionadas con el estudio de la precariedad laboral, si bien también ha trabajado en otras temáticas relacionadas con la sociología del trabajo, la sociología de las organizaciones y la sociología política y electoral. Ha publicado en revistas como Party Politics, Cuadernos de Relaciones Laborales, Isegoría, Empiria e IJERI, entre otras. Es autor de diversos libros y ha colaborado en obras colectivas, la más reciente Vidas low cost. Ser joven entre dos crisis (2021).

JUAN ANDRADE es profesor en la Universidad de Extremadura (en excedencia) y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas, de Estados Unidos y de América Latina. Doctor en Historia contemporánea, sus investigaciones se han centrado en la revolución rusa, el exilio republicano, la España actual y, sobre todo, la transición española a la democracia. Es autor de El PCE y el PSOE en (la) transición (2012; segunda edición 2015). Junto a Julio Anguita escribió el libro Atraco a la memoria. Un recorrido histórico por la vida política de Julio Anguita (Akal, 2015). Con Fernando Hernández coordinó el volumen colectivo 1917. La Revolución rusa cien años después (Akal, 2017). Desde 2017 dirige la colección Reverso. Historia crítica en Ediciones Akal.

FRANCISCO ERICE es catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Oviedo. En los últimos años ha centrado sus investigaciones en los problemas de la memoria colectiva, la historia del comunismo o la historiografía. Entre sus publicaciones destacan Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. Usos y abusos de la memoria colectiva (2009), Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista, 1956-1963 (2017) y En defensa de la razón. Contribución a la crítica del posmodernismo (2020).

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, profesor contratado doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Historia contemporánea por la UNED. Es autor de Comunistas sin partido: Jesús Hernández, ministro en la guerra civil, disidente en el exilio (2007); Guerra o revolución: El Partido Comunista de España en la guerra civil (2011); Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (2015); La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco (2018); y, como coautor, de El desplome de la República (con Ángel Viñas, 2009) y de Camaradas de un comité menor. Una larga guerra civil, 1936-1947 (con Ángel Luis López Villaverde, 2020).

JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS (Barcelona, 1948) es catedrático emérito de Historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus principales publicaciones destacan Els origens del PSU de Catalunya. 1930-1936 (1977), Rojos contra Franco. Historia del PSUC,1939-1947 (2002), Historia de la Unión General de Trabajadores. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931 (2008), La rereguarda en guerra. Catalunya, 1936-1937 (2012); Territori capital. La guerra civil a Catalunya, 1937-1939 (2015), El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España (2016), Guerra y revolución en Cataluña, 1936-1939 (2018) y una Historia del PCE (2021).

CARME MOLINERO es catedrática de Historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se ha centrado en la historia social y política de la etapa franquista, de la transición y de la democracia. Es autora de La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista (2005) y, en colaboración con Pere Ysàs, de Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista (1998), De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982) (2017) y La Transición. Historia y relatos (2018).

EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS es profesor de Ciencias Políticas y

Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en la geografía política, geopolítica, geoeconomía y teorías del desarrollo, así como en aspectos teóricos relacionados con el materialismo geográfico, el enfoque de la dependencia y el análisis sistema-mundo. Ha sido secretario de formación-debate del Partido Comunista de España (2008-2017), siendo en la actualidad director de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) y miembro del Comité Central del PCE.

EMANUELE TREGLIA es profesor contratado doctor en la Universidad Francisco de Vitoria. Sus investigaciones se han centrado en la historia de las izquierdas españolas y europeas en la segunda mitad del siglo XX. Es autor de la monografía Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero (2012) y de numerosos artículos publicados en revistas como Ayer, Cuadernos de Historia Contemporánea y Pasado y Memoria. Además, ha coordinado varias obras colectivas, entre las cuales destaca Las convulsiones del 68. España y el sur de Europa (con A. Mateos, 2019).

PERE YSÀS es catedrático de Historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado en la historia social y política de la dictadura franquista y del proceso de transición a la democracia. Entre sus libros destacan Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 (2004) y, en colaboración con Carme Molinero, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme, 1956-1981 (2010), De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982) (2017) y La Transición. Historia y relatos (2018).